CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1996

DR. ARTURO HOYOS
PRESIDENTE

SALA PRIMERA (CIVIL)

LICDO. RAFAEL A. GONZÁLEZ
PRESIDENTE

LICDO. ELIGIO A. SALAS — LICDO. ROGELIO A. FÁBREGA ZARAK

LICDA. SONIA F. DE CASTROVERDE
SECRETARIA

SALA SEGUNDA (PENAL)

DRA. AURA EMERITA GUERRA DE VILLALAZ
PRESIDENTE

LICDO. JOSÉ MANUEL FAUNDEZ — DR. FABIÁN ECHEVERS

LICDO. MARIANO HERRERA
SECRETARIO

SALA TERCERA (CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO Y LABORAL)

DR. ARTURO HOYOS
PRESIDENTE

LICDA. MIRTZA A. FRANCESCHI DE AGUILERA — DR. EDGARDO MOLINO MOLA

LICDA. JANINA SMALL
SECRETARIA

SALA CUARTA (NEGOCIOS GENERALES)

DR. ARTURO HOYOS
PRESIDENTE

LICDO. JOSÉ MANUEL FAÚNDES — LICDO. RAFAEL A. GONZÁLEZ

DR. CARLOS H. CUESTAS G.
SECRETARIO GENERAL

PONENCIA

DEFENSA DE LA CONSTITUCIÓN Y TUTELA DE LOS DERECHOS HUMANOS (LA INSTITUCIÓN DEL DEFENSOR DEL PUEBLO ANTE LOS PROCESOS DE REFORMA DEL ESTADO EN AMÉRICA LATINA).

JORGE LUÍS MAIORANO
DEFENSOR DEL PUEBLO DE
LA NACIÓN ARGENTINA
Colloquio Internazionale
Democrazia e riforma dello stato
in America Latina
Roma, 14-17 de diciembre de 1966

1. El tema que hoy nos convoca no es sencillo ni su abordaje carente de matices. Es que se trata, simplemente, de reflexionar acerca de la Defensa de la Constitución sino de ella en relación con la tutela de los derechos humanos. Todo en el amplio y generoso marco de este Foro comprometido con la democracia y la reforma del Estado en América Latina.

No puedo entonces encarar el análisis de cada uno de esos tópicos de manera aislad sino, por el contrario, como integrantes de una problemática compleja y rica en matices. Así, me referiré sucesivamente a la Defensa de la Constitución en el marco de la democracia, con particular referencia a la reforma del Estado de América Latina y puntualizando cómo se tutelan los derechos humanos en Latinoamérica.

2. Quiero formular ante Ustedes, una obvia consideración preliminar ya que mis reflexiones en esta materia, obviamente, están marcadas por mis experiencias personales. Formación en Derecho, docencia en derecho público, administrativo en la especie; sucesivos cargos de alta responsabilidad política en el Gobierno de mi país y, desde hace poco màs de dos años, la titularidad, en su etapa fundacional, de una institución constitucional como es el Defensor del Pueblo de la Nación Argentina. Señalo estas referencias ya que, tal vez otras serían mis reflexiones si solamente las hablara desde mi experiencia dogmática, científica o académica; o si lo hiciera como representante de un órgano del gobierno de mi país; en cambio, ustedes escucharán las experiencias y reflexiones de quien, además de haber transitado con anterioridad aquellas etapas, hoy tiene la enorme responsabilidad de fundar una institución de control y tutela de los derechos humanos.

3. El tema de la defensa constitucional es no de los que han despertado mayor preocupación e inclusive, apasionamiento entre los constitucionalistas y cultivadores de la ciencia política, a partir de la primera posguerra. Como hitos de las diferentes posiciones que este tema generó entre los estudiosos, cabe recordad el clásico libro de Carl Schmitt, editado inicialmente en Alemania en 1931 bajo el título de "El protector de la Constitución" así como la réplica que mereció, de inmediato, de parte de Hans Kelsen, ilustre fundador de la escuela de Viena, con su obra "Quién debe ser el defensor de la Constitución?". Obviamente no me propongo en estas líneas repasar todas las instancias que se han sucedido en estos setenta y cinco años, pero sí destacar como idea básica que la defensa de la Constitución está integrada por todos aquellos instrumentos jurídicos que se han establecido tanto para conservar la normativa constitucional como para prevenir su violación, reprimir su desconocimiento y, lo que es más importante, lograr el desarrollo y la evolución de las propias disposiciones constitucionales en un doble sentido: desde el punto de vista de la Constitución formal lograr su paulatina adaptación a los cambios de la realidad político - social y desde el ángulo de la Constitución material, su transformación de acuerdo con las normas programáticas de la propia Carta Fundamental.

Por este motivo, me atrevo a sostener que una verdadera defensa constitucional es la que alcanza la aproximación entre dos sectores que, en ocasiones, pueden encontrarse muy distanciados: la Constitución formal, como norma positiva, y la Constitución material, en tanto norma sociológicamente vigente.

En este sentido, la defensa de la Constitución no debe considerarse sólo desde un punto de vista estático sino, fundamentalmente, como un proceso substancialmente dinámico, acorde con las profundas transformaciones que se han operado en el plano del Estado y de la sociedad de nuestros días.

4. A los efectos de la sistematización de un tema tan amplio, entiendo oportuna la división de dos categorías bien definidas: la primera se puede denominar a los efectos convencionales como "protección de la Constitución" y la restante comprende las "garantías constitucionales".

La primera especie está integrada por todos aquellos instrumentos políticos, económicos, sociales y de técnica jurídica que han sido canalizados a través de normas de carácter fundamental e incorporados a los documentos constitucionales con el propósito de limitar el poder y lograr que sus titulares se sometan a las normas establecidas en la propia Constitución.

Con estos instrumentos se pretende alcanzar la marcha armónica, equilibrada y normal de los poderes públicos y, en general, de todo órgano de autoridad. Entre ellos cito: 1) la división de poderes o, en realidad, división de funciones, convertida en dogma del constitucionalismo clásico del siglo XIX con el objetivo de evitar la concentración del poder mediante su limitación recíproca a través de los frenos y contrapesos; esta concepción, no obstante las profundas transformaciones de los regímenes políticos contemporáneos, todavía puede considerarse como substancialmente vigente; 2) la institucionalización de diversos factores sociales, tales como los grupos de interés, grupos de presión y los partidos políticos; cabe recordar en este sentido que fue la constitución mexicana de 1917 la que elevó a rango fundamental el reconocimiento de los derechos y de la personalidad de los sectores más débiles, es decir de los trabajadores y de los campesinos, a través de los sindicatos y de las comunidades agrarias; este proceso se generalizó luego de concluida la segunda gran guerra mundial cuando se reconoció en prácticamente todas las cartas fundamentales de los países occidentales, la existencia de diversos grupos sociales procurándose la conciliación de sus intereses divergentes mediante un conjunto de mecanismos con los cuales se pretende alcanzar una redistribución de bienes y servicios, conformando lo que se ha denominado Estado social de derecho o Estado benefactor, promotor, distribuidos o Welfare State; 3) la supremacía constitucional y un procedimiento agravado para su reforma de tal modo que se reconocía la existencia de algunos principios denominados "pétreos" ya que ellos se consideraban inmodificables so pena de alterar substancialmente la identidad de una Constitución.

Las garantías constitucionales, por su parte, están representadas por los instrumentos jurídicos, predominantemente de carácter procesal, que tienen por objeto lograr la efectividad de las normas fundamentales cuando existe incertidumbre, conflicto o violación de las referidas normas. El constitucionalismo americano de la última década es un vivo ejemplo de la riqueza de órganos y procedimientos creados a partir de la necesidad de fortalecer los valores supremos. Así, por ejemplo, se cuentan el amparo, el hábeas corpus, los recursos de inconstitucionalidad y órganos como los Tribunales Constitucionales, Auditorías y la versión latinoamericana del Ombusman, bajo el nombre de Procurador de los Derechos Humanos, Procurador para la Defensa de los Derechos humanos o el castizo Defensor del Pueblo.

5. Y como aquí aparece por primera vez en mi exposición la referencia a los Derechos Humanos, se imponen reflexiones preliminares que juzgo ineludibles.

Las Américas son tierras de múltiples facetas y contrastes. Han sido testigo de una prodigiosa mezcla y fusión de culturas. Hallamos en América considerable variedad de lenguas y credos religiosos. La variedad topográfica y climática del hemisferio aún nos asombra a quienes allí vivimos. Hay naciones ricas y naciones pobres, hay países de dimensiones continentales y hay países muy pequeños. También encontramos democracias jóvenes y democracias centenarias. En suma, encontramos un mosaico de diferencias y una historia de afinidades.

Cabría entonces preguntarse: además de la mera geografía, ¿cuál es la columna vertebral que sustenta la idea viviente de la identidad americana? ¿Cuán

es el espíritu que hermana al hemisferio? Si miramos la historia de los dos últimos siglos, si miramos el alma de las Naciones Americanas de hoy, hallaremos reiterado y multiplicado un sentimiento común: la convicción de que el ser humano tiene derechos inalienables que emanan de su propia naturaleza.

La realidad, sin embargo, casi de manera empedernida, se ha obstinado en negar plena vigencia sociológica a esos valores superiores. Durante muchos años fueron los gobiernos militares y la secuela de violaciones a los más elementales derechos humanos los que atentaron contra aquello. Pero como la vocación fue más fuerte que el poder de las armas llegó la época de la normalidad institucional en los países del área. Quedaron, no obstante, huellas muy profundas en las sociedades latinoamericanas. Así, por ejemplo, la persistencia de gobiernos autoritarios fue minando las bases democráticas de esas sociedades que sólo en los últimos años, y no obstante las graves dificultades que deben soportar, advierten que es a través de la democracia -como forma de gobierno y estilo de vida- donde se encuentran plenamente garantizadas la paz, la justicia y la libertad.

Es, entonces, al amparo de una cultura autoritaria en retirada y de la necesidad de superar las situaciones de marginación y emergencia que se viven en Latinoamérica, que los países de la región buscan afanosamente una nueva forma de expresión de los valores democráticos, entendidos como una forma de convivencia que garantice el desarrollo armónico de la comunidad.

Alcanzar ese propósito requiere profundizar la justicia social y promover un desarrollo integral, fundado en el respeto irrestricto de los derechos individuales, colectivos y sociales.

Todos los instrumentos de defensa constitucional, incluidos los órganos regionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el marco de la Convención Americana de Derechos Humanos, son, probablemente, la respuesta más contundente a las distintas formas de opresión, pública o privada, político o económica. Implica, como antes lo señalara, que deben existir normas, instituciones y procedimientos orientados a subrayar que la autoridad debe estar limitada por los preceptos constitucionales y que no puede actuar sin control. A mayor poder mayor control y mayor responsabilidad. Y es parte importante de la revolución constitucional y de los derechos humanos de nuestro tiempo, que cada vez involucra más instituciones y más personas. La defensa de la Constitución significa la defensa de los valores que desde sus inicios, inspiraron los movimientos constitucionalistas.

En los países de América Latina, la década de los años 80 fue la que marcó la transición de los regímenes autoritarios a los gobiernos constitucionales. Al mismo tiempo, se modernizó el entramado institucional; se produjeron importantes reformas constitucionales y se sancionaron trascendentes normas de garantías constitucionales.

Todo ello, no obstante, se desarrolló en un ámbito distinto al tradicional. Ya no era, ni es, la época del Estado providencialista, de bienestar sino, por el contrario, la etapa del Estado subsidiario, del Estado regulador. Es que había llegado un nuevo actor: la reforma del Estado como un proceso casi inevitable y de efectos prometidos como taumatúrgicos.

6. El tema de la Reforma del Estado, como proceso al cual no permaneció ajena América Latina, amerita una reflexión especial.

En Europa, los Estados Unidos de Norteamérica, la Argentina y en casi todos los rincones de nuestro ancho mundo, el Estado de Bienestar está soportando el ataque sistemático, práctico e ideológico de gobiernos y grupos de interés. Desde su nacimiento, el Welfare State tuvo como propósito crear redes de protección para evitar la conflictividad social. A partir de los años treinta, las funciones de bienestar se combinaron con las novedosas políticas estatales anticíclicas, luego llamadas keynesianas, destinadas a combatir el desempleo y recesión. Ambas instituciones contribuyeron a reducir el impacto de las crisis y a fomentar el consumo masivo en el que se basó el desarrollo de los mercados internos. En los

países occidentales jugaron también un papel de prevención política ante la influencia de los rivales del bloque soviético. En las décadas de posguerra, el sistema creció casi sin obstáculos porque los costos eran compensados con la expansión de las economías, el aumento de la productividad y el progreso de las ganancias empresariales.

El panorama comentó a cambiar con la crisis de los años sesenta, la reducción de las ganancias y el estancamiento de la productividad. Los cambios políticos y culturales de estas últimas décadas no hicieron más que acelerar el proceso de debilitamiento del Estado de Bienestar creando un ambiente propicio para su ajuste; la amenaza soviética se desvaneció en el aire y el clima cultural, que en años anteriores, había exaltado el distribucionismo, la solidaridad y la intervención estatal, viró impiadosamente hacia la idolatría del mercado, el individualismo y el darwinismo social. Ya a comienzos de la década pasada, los organismos internacionales anticipaban el nuevo papel del Estado en el proceso económico y social. En poco tiempo más, la crisis económica se transformó en crisis política, con el cuestionamiento del modelo burocrático; así, la desregulación, desmonopolización, privatización dejaron de ser banderas políticas inglesas o norteamericanas y pasaron a ser dogmas incuestionables.

Los países de América Latina, en mayor o menor medida y con mayor o menor rapidez, también redujeron la presencia del Estado en actividades de carácter comercial e industrial e iniciaron profundos procesos de reorganización del sistema económico y financiero. La estabilidad política que recobraron luego de muchos años de autoritarismo creó el clima necesario para acometer esas transformaciones impulsadas por factores internos y externos, tales como la tan mentada globalización.

En un escenario tan singular donde conviven la estabilidad política, la estabilidad económica, las reformas constitucionales y la búsqueda de formas novedosas de legitimación del poder estatal, cabe preguntarse ahora ¿cuál es la situación de los derechos humanos en América Latina? O bien: ¿están ellos reconocidos positivamente? ¿Tienen vigencia sociológica o sólo son catálogos de ilusiones?

7. En primer lugar, creo necesario efectuar algunas consideraciones de carácter general. Es connatural a cualquier teoría general de los derechos humanos hacer frente a interrogantes radicales o cuasiradicales del tipo de ¿qué son los derechos humanos?; ¿por qué han de ser asumidos por el Derecho?; o ¿cuáles son los derechos que han de ser reconocidos inexcusablemente como humanos? Sin embargo, el intento de encontrar la respuesta pertinente a cada una de estas preguntas, constituye una empresa que excede notablemente los límites de estas reflexiones.

La historia de la Humanidad es un continuo tejer y destejer de abusos cometidos por la autoridad y de luchas, a veces encarnizadas, por la libertad. Ella ha esculpido monumentos inmortales en defensa de la libertad y la justicia, tales como Hammurabi, la Carta de Neuchatel, la Carta Magna, el Bill of Rights, entre otros. La larga marcha de los pueblos hacia esas ansiadas metas, desde la Prehistoria hasta finales del siglo XX, corre paralela con la toma de conciencia de las sociedades y los individuos sobre sus derechos fundamentales. Ahí están para demostrarlo, por ejemplo, varios monumentos estelares de este alborear de la conciencia ciudadana mundial: la Declaración del pueblo de Virginia, en 1776; la Declaración Francesa de Derechos del Hombre y del Ciudadano, de 1789; la Declaración Universal de las Naciones Unidas, de 1948; los pactos de Derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, de 1966 y la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, del año 1969.

Sobre los derechos humanos se han escrito cientos de volúmenes y aún se escribirán muchos más, porque es uno de los temas más importantes para el hombre, es el que se refiere a su dignidad, y esa es una cuestión compleja que puede ser examinada desde múltiples perspectivas y por las más diversas disciplinas. Así, por ejemplo, desde la visión que los considera como factor social de integración, sostiene Smend que la función primordial de los derechos fundamentales del hombre no es solo afirmar su posición frente al Estado, sino lograr integrar al hombre

con el Estado y con la sociedad haciendo de ésta un verdadero tejido de solidaridad. Dicha integración se propone a través del ordenamiento jurídico de cada país, poniéndole limite y reglamentación a la actuación estatal, pues dicha intervención debe estar ámbito de la substancia que constituye cada derecho: el límite está determinado por lo limitado. En síntesis, en los derechos fundamentales vio Smend un medio de integración objetiva y el fundamento para la unidad política.

A los efectos del desarrollo del tema que estoy abordando adoptaré la clásica división tripartita de derechos individuales; derechos económicos, sociales y culturales y derechos de solidaridad.

Los derechos humanos tradicionales (derecho a la vida, a la libertad, a la dignidad) reconocen ciertas libertades fundamentales que tienen los individuos por su sola condición de tales. En estos casos no se trata del otorgamiento de algún derecho por parte del Estado ni de facultad alguna que necesite ser actuada por él. Su garantía radica en los límites impuesto al poder de las autoridades para infringirlos, invocando razones de interés público. Son los llamados derechos civiles y políticos; también individuales o fundamentales, propios de la primera etapa del largo y azaroso camino en busca de su reconocimiento. Esta primera generación halla, pues, su fundamento en las corrientes individualistas; tiene su marco político en el Estado Liberal formalista e inhibicionista y convive con las estructuras jurídicas del mismo (Parlamento homogéneo, sufragio restringido, negación del asociacionismo, etc.)

En una segunda fase surgen los llamados "derechos económicos, sociales y culturales" cuyo reconocimiento depende, en alguna medida, de ciertos tipos de acciones gubernamentales. Estos derechos sociales fundamentales brindan las bases para que los individuos puedan estar expuestos a la acción estatal sólo en la medida en que ello no afecte su desenvolvimiento como individuos y como miembros de la sociedad. Es el caso de los derechos al trabajo, a la seguridad social, a la vivienda digna, etc. A diferencia de los primeros derechos, los de la segunda generación obedecen a corrientes progresistas; tienen su marco político en un Estado que, aún siendo formalmente liberal todavía, se ha ido democratizando por la fuerza de las cosas y por el advenimiento de las masas a la vida política; por ejemplo, sus estructuras políticas han debido ir adecuándose; los Parlamentos dejan de ser homogéneos y la ideología liberal deja de monopolizarlos; se consolidan los partidos políticos, como principal instrumento de actuación política y el sufragio se universaliza progresivamente.

La aparición de los derechos sociales ha supuesto una notable variante en el contenido de los derechos fundamentales. Principios originariamente dirigidos a poner limites a la actuación del Estado, se han convertido en normas que exigen su gestión en el orden económico y social; garantías pensadas para la defensa de la individualidad son ahora reglas en las que el interés colectivo ocupa el primer lugar; enunciados muy precisos sobre facultades que se consideraban esenciales perennes han dejado paso a normas que defienden bienes múltiples y circunstanciales. Diversos textos constitucionales del primer tercio del siglo XX, luego de una prolongada y agitada gestión donde no faltaron profundas conmociones políticas y sociales, incorporaron en forma expresa y puntual estos derechos.

Finalmente, surgen los derechos de la tercera generación, o derechos de la solidaridad, es decir, aquellos que trascienden el egoísmo y exclusividad de los individuales, el interés sectorial de los sociales y que se fundamentan en su incidencia colectiva; por ejemplo, el derecho a un medio ambiente equilibrado, a la protección de los valores culturales o históricos de una comunidad. Aquí se supera aquella regla tradicional que rezaba "lo que es de todos no interesa a ninguno"; hoy, "lo que es de todos, interesa a cada uno", precisamente por ser de todos, no como entidad amorfa, sino como suma de individualidades. Es el último estadio en este proceso en el cual se ha transitado de lo individual a lo social, culminando en lo comunitario o, en otros términos, del egoísmo al sector y de éste, a la solidaridad.

8. Toda vez que ya expusiera mis ideas acerca de la defensa de la Constitución, de la reforma del Estado y de los derechos humanos, me encuentro

en condiciones de encarar en el tramo final de estas reflexiones, el estudio de la institución del Ombudsman latinoamericano y su función tutelar de los derechos fundamentales y de defensa del sistema democrático de los países del área.

En ocasión de publicar en Buenos Aires, en 1987 mi tesis doctoral titulada "El Ombudsman: Defensor del Pueblo y de las instituciones republicanas", sostuve que "el futuro no debe ser una prórroga de nuestro presente. Para que no lo sea debemos ponerle condiciones. Orientarlo hacia los rumbos que nos fijemos. Eso exige un esfuerzo de anticipación. Experiencias ajenas servirán de ayuda. Aquello que es futuro (eventual) para nosotros, es presente para otros. En eso, al fin de cuentas, consiste el subdesarrollo: en ir detrás, en ignorar lo que otros ya saben y uno sabrá después, en carecer de lo que otros tienen y uno podrá tener más tarde. Al indagar en otros presentes, hallaremos claves que nos faltan. Descifraremos los retos que esperan ...".

Agregaba, en aquella oportunidad, que "la cuestión de la implementación de esta figura no debe abordarse exclusivamente desde una perspectiva jurídica; por el contrario, junto a esta consideración, será conveniente no olvidar la importante función que este organismo podría cumplir en los planos político y social. Ello a tenor de las siguientes argumentaciones que constituyen en la práctica, obvios corolarios de su institucionalización: 1) el Ombudsman o Defensor del Pueblo aumentará el control sobre la Administración Pública en áreas que escapan, generalmente, a los órganos y procedimientos tradicionales; 2) como inmediata secuela de ello, aumentará la esfera de protección y tutela jurídica de los ciudadanos, propendiendo así a una más integral defensa de las libertades y derechos fundamentales, no sólo los de carácter cívico, sino también los de índole económica, social y cultural, así como los pertenecientes a la tercera generación, es decir, los de solidaridad social; 3) permitirá, asimismo, implementar un importante instrumento que estimulará la participación de los ciudadanos en la gestión de los asuntos públicos; 4) mediante su inserción en el seno del a Poder Legislativo -que actuará como su mandante e insoslayable respaldo a sus recomendaciones y sugerencias- contribuirá al indispensable proceso de fortalecimiento del Poder Legislativo- se logrará una mayor consolidación del sistema republicano, donde la democracia constituya no sólo un sistema político sino, primordialmente, un sistema de vida". Concluía aquellas reflexiones, que datan de 1986, destacando que "la institución que auspicio constituye una magistratura de sólida base moral y ética que goza de profundo prestigio y autoridad cívica en los países donde ha sido creada; que ejerce una influencia fundamentalmente docente sobre la Administración, no a través de la confrontación sino de la colaboración crítica, y que erige a la opinión pública en auténtica sombra ética del poder, a fin de que él se comporte bajo el imperio de la moral ...".

Cierto es que desconocía al momento de escribir esas ideas, que la Providencia me iba a deparar el alto honor de llevar esa prédica a diversos países del mundo para culminar luego con la responsabilidad de constituirme, por voluntad del Congreso Argentino, en el primer titular de la Institución en mi país. No fue un ligero snobismo innovador ni una decisión oportunista la que motivó, hace más de una década, mi compromiso con esta figura. Fue la admiración que me produjo una institución, formalmente nacida en Suecia hacia 1809, y que se ha expandido por todo el mundo en los últimos cuarenta y cinco años mostrándose como una figura respetada, conocida y reconocida por su doble misión de defensa de los derechos humanos, de los derechos colectivos y de control sobre el buen funcionamiento de la Administración.

Es que el Defensor del Pueblo, Ombudsman o denominación equivalente que recibe en los distintos países donde se ha institucionalizado, es uno de los fenómenos jurídico- políticos más notable de los últimos cincuenta años. Bajo la premisa fundamental de que la sociedad moderna tiene un sentimiento más exigente de la Justicia, ha predominado una idea básica: hoy, más que nunca, en la sociedad contemporánea, el ciudadano tiene que ser protegido con eficacia frente a la actuación irregular abusiva del poder. La máquina ideada y meticulosamente construida al servicio del ser humano para posibilitar su libertad y plena realización, puede convertirse, por la propia imperatividad de sus funciones y dinámica de su actividad, en instrumento de oprobio. De esta forma, el ciudadano se convierte en un moderno súbdito del Estado de Derecho.

9. La experiencia del Ombudsman en América Latina estuvo, desde sus inicios, íntimamente vinculada a su compromiso con la protección de los derechos fundamentales. Fue la necesidad de añadir una cuota mayor de seguridad a la creciente demanda de tutela integral de los derechos humanos lo que determinó acudir a una Institución prestigiosa y prestigiada en el resto del mundo, y sobre todo en Europa, aún cuando se le imprimieron modulaciones singulares.

En un comienzo, y este es el modelo clásico, el Ombudsman estuvo vinculado a las disfunciones administrativas, al tradicional concepto de "mala administración"; nada tenía que hacer con la protección o defensa de los derechos humanos. Fue la Constitución española de 1978 la que marcó un sendero diferente pero, paradójicamente, sin abandonar los mojones que señalaron el camino de la institución hasta ese entonces.

Y fue el modelo del Ombudsman español -con el esperanzador título de Defensor del Pueblo- el que adoptó, en líneas generales, el constituyente latinoamericano. A sabiendas digo "en líneas generales" porque hoy nuestras instituciones han desbordado aquellos objetivos originarios y se encuentran comprometidas en desafíos garantísticos que la comunidad mundial de Ombudsman ya no considera ajenos.

Ya es un lugar común entre los estudiosos de la figura en Latinoamérica que sus orígenes, en general, se vincularon con la necesidad de brindar protección adicional a los individuos cuyos derechos humanos a la vida, la libertad y la dignidad resultaban desconocidos por conflictos armados de diversa índole. Tal lo que aconteció en Guatemala y en El Salvador donde, incluso, la denominación que adoptó la figura puso en evidencia esa búsqueda de tutela adicional (Procurador de los Derechos Humanos y Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, respectivamente); en México, por su parte, con el nombre de Comisión Nacional de los Derechos Humanos se creó un organismo que ha desarrollado una importante labor en la sociedad azteca.

A medida que la pacificación fue llegando a los países de la región y en coincidencia con su normalización institucional, han surgido para los Defensores del Pueblo de Latinoamérica otras prioridades, tales como la defensa y protección de los derechos económicos, sociales y culturales y la defensa de los derechos de incidencia colectiva o intereses supraindividuales. Convengamos entonces que cuando América Latina no tenía paz ni estados de Derecho, la prioridad era la tutela y salvaguarda de los derechos individuales. Ahora, cuando el latinoamericano no se conforma solo con que sus derecho a la vida, a la libertad y a la dignidad sean reconocidos, sino que exige una mejor calidad de vida, el Defensor del Pueblo cumple un decisivo papel como intérprete y vocero de las insatisfacciones sociales que se generan al amparo de las desigualdades y en el marco de las políticas económicas neoliberales que se han generalizado en los países de América Latina.

Cabe destacar que incluso, últimamente, la UNESCO ha comprometido a los Ombudsman latinoamericanos en un programa de acción en favor de la cultura de paz. Así, reconoce que estas instituciones "son agentes multiplicadores de esa cultura de paz, permitiendo por su medio superar los actuales estados de inseguridad y violencia que obstaculizan la consolidación de la paz duradera y revaloriza su papel en América Latina en beneficio del respeto y desarrollo de la democracia, de la formación ciudadana y de la participación organizada de las poblaciones marginadas y discriminadas".

Para que mis afirmaciones en el sentido de que el Defensor del Pueblo de América Latina es un intérprete y vocero de las insatisfacciones sociales no sean tenidas como un ejercicio de voluntarismo, a continuación fundamentaré tal posición. Esas razones son las siguientes: 1) es definida la tendencia a la constitucionalización de la figura. La mayoría de los países latinoamericanos que la han incorporado, lo han hecho desde la posición de conformarlo como una Institución del Estado, no como un órgano del Gobierno; 2) la independencia funcional que le confieren las modernas Constituciones de esos países, impide, por lo menos desde el plano normativo, que nuestras instituciones se conviertan en apéndice de intereses partidarios o amortiguador de disputas políticas; 3) junto a la misión de defensa, protección y promoción de los derechos humanos

cumplen otra que constituye su complemento, cual es el control del ejercicio del poder en sus facetas públicas y privada; 4) por la necesidad de asegurar el ejercicio pleno de esas funciones, las normas constitucionales le han asignado legitimación procesal amplia; ello implica la posibilidad de impugnar judicialmente comportamientos estatales y aún, actos de particulares que violaren derechos fundamentales; 5) si bien fueron los derechos individuales los que motivaron inicialmente su difusión, en consonancia con la tendencia que predica que los derechos humanos se van reconociendo y defendiendo progresivamente, sus competencias han aumentado también al amparo de las crecientes necesidades sociales, es decir, en el ámbito de los derechos económicos, sociales y culturales; 6) recientemente se ha ido perfilando una nueva y trascendente misión de nuestro Ombudsman; me refiero a la custodia de los intereses colectivos o difusos o derechos de incidencia colectiva, como los denomina la Constitución de mi país; no se trata de la colectivización de la legitimación sino de la institucionalización de una figura que, administrativa y judicialmente, se presenta como defensora de los intereses de la sociedad; 7) personalmente he venido sosteniendo que su perfil adecuado es el de un colaborador crítico de la autoridad, no su contradictor efectista; a esos fines, y siempre que las circunstancias lo permitan, debe agotar sus esfuerzos para perseverar en una gestión mediadora entre la Administración y el ciudadano.

Con relación a este último aspecto, estoy convencido que el Defensor del Pueblo de nuestros países se encuentra en la privilegiada posición de asumir, desde el propio Estado, la difícil tarea de mostrar una radiografía del grado de dolencias, carencias e insatisfacciones de una sociedad. Y lo que lo legitima aún más es que, actuando con plena independencia funcional y sin recibir instrucciones de ninguna autoridad, ese diagnóstico lo efectúa desde el mismo Estado permitiéndole a éste recrear su relación con la sociedad.

Es que el Defensor del Pueblo actúa sobre antinomias con la vocación de superarlas. Así, por ejemplo, actúa sobre la dualidad público-privado; autoridad-libertad; capital-trabajo; interés público-interés privado; entre otras. Nuestras instituciones son espacios institucionales donde germina la semilla de una nueva forma de democracia, la democracia participativa que supera a la tradicional representativa. De esta forma, los individuos abandonan la clásica posición de "administrados" para asumir el nuevo rol de "ciudadanos" o "contribuyentes" que no sólo tienen la obligación de votar o pagar sus impuestos sino, fundamentalmente, la posibilidad jurídica de exigir el reconocimiento de sus derechos los cuales, por otra parte, no son una dádiva graciosa del Estado sino una justa exigencia de la sociedad moderna.

Cierto es que poco podrá hacer el Ombudsman o Defensor del Pueblo frente a un conflicto armado; pero donde sí puede contribuir activamente es frente al creciente clamor del latinoamericano que ya no se conforma con el derecho a la vida; quiere más y eso implica mejor calidad de vida, mejor educación, mejor salud, mayor protección de los valores comunes, etc. No debemos olvidar que una de las decisiones fundamentales de los países de América Latina ha sido la permanente búsqueda de la institucionalidad, es decir, la elección por el Estado de Derecho. No obstante los múltiples obstáculos que se han presentado, los pueblos de América Latina han persistido en ese objetivo. Sin embargo, el constitucionalismo americano de la última década, el mismo que fue precursor de los derechos sociales, hoy ambiciona algo más que la tutela de los viejos derechos que consagraron las constituciones del siglo pasado. Hoy, junto a los derechos individuales, nuestras sociedades ansían, en primer lugar, la plena vigencia de los derechos sociales y, en segundo término, de los derechos de incidencia colectiva.

Desde su condición de órgano de defensa de la Constitución y frente a los generalizados procesos de reforma del Estado que se llevan a cabo en los países de América Latina, con incidencia tanto en el ámbito administrativo como en el plano económico y social, cabe preguntarse ¿qué observa el Defensor del Pueblo en su cotidiano contacto con las necesidades de la gente?

Observa: 1) que existe un notorio divorcio entre las necesidades del pueblo y las prioridades de su dirigencia gobernante; que existe una alarmante crisis de la representación política y de credibilidad en los políticos; 2) que los

procesos de liberalización de la economía (que implican desnacionalización, concentración empresaria y profundización de las diferencias sociales) terminan fortaleciendo las macroeconomías pero destruyendo millones de pequeñas microeconomías con la consecuente vulneración de los derechos económicos, sociales y culturales de los más débiles; 3) que si bien todo hace pensar que murió aquel Welfare State o Estado de Bienestar, no nació paralelamente una sociedad de bienestar y ello debe implicar un severo llamado de atención a los gobernantes a fin de que el Estado no abdique de funciones indelegables ya que nunca el capital privado podrá suplir, desde su finalidad crematística, los objetivos de bien común que debe perseguir toda institución estatal; 4) que urge alcanzar el pleno y armónico desarrollo de nuestros pueblos en un plano de justicia social.

Porque estas dolencias de la sociedad no son el resultado de nostalgias de años pasados, es que los Ombudsman representantes de 86 países reunidos hace pocas semanas en Buenos Aires, en el marco de la Sexta Conferencia Internacional del Instituto Internacional del Ombudsman, en su Declaración final prestaron especial atención al impacto producido sobre sus actividades por los programas económicos financiados por las instituciones internacionales y los bancos de desarrollo regional. Por esta razón formularon un especial pedido para que dichas organizaciones lleven adelante sus programas dentro del marco de los instrumentos internacionales de los derechos humanos.

Es que la dignidad de la persona, como valor supremo del ordenamiento jurídico, exige una mayor sensibilización hacia los derechos económicos, sociales y culturales. El progreso de la civilización humana se mide sobre todo por la ayuda dada por el más fuerte al más débil; en la limitación de los poderes naturales de aquél como reconocimiento de las exigencias morales de éste; en el aumento en el sentido de una fraternidad humana sin la cual los derechos a la libertad se convierten en privilegios egoístas y el principio de igualdad jurídica, en una nivelación basada en el sometimiento al poder del más fuerte.

10. Dentro de este panorama que aborda profundas transformaciones, destaco que la Institución del Defensor del Pueblo de América Latina está llamada a convertirse en un referente inexcusable para la defensa de los derechos humanos, para la consolidación del sistema democrático y, en última instancia, para la defensa de la Constitución de nuestros países.

Desde la estabilidad institucional, y ante las reformas de nuestros Estados, los Defensores del Pueblo aspiramos a ilustrar y sensibilizar a los poderes públicos acerca de la urgencia de subordinar la economía al hombre -y no a la inversa- para que las declaraciones de derechos no se conviertan en catálogos de ilusiones que, por su incumplimiento, terminen marchitando la confianza en el sistema democrático. Sabemos que la tarea no es fácil; que tenemos enfrente a dos poderosos oponentes, el poder político y el poder económico. Sin embargo, quienes ejercemos la tarea de Defensores del Pueblo somos plenamente conscientes que esta Institución es, en última instancia, un canto de rebeldía ante la injusticia y una apuesta a la solidaridad.

ÍNDICE

PONENCIA i

ÍNDICE I

PLENO 1

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES 2

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR TOMÁS GOLDER -VS- EL TRIBUNAL DE APELACIONES Y CONSULTAS DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ (FAMILIA). MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 2

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PROPUESTA POR APARTHOTEL COSTA DEL SOL, S. A., TRUMP TOWER, S. A., EL CHIC, S. A. Y JACQUELINE ABADI DE ARGUEDAS; CONTRA EL JUEZ QUINTO DE CIRCUITO, RAMO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 3

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTA POR EL LICENCIADO JOEL LUQUE, EN SU CALIDAD DE APODERADO DEL SEÑOR ANTONIO LUIS TATIS GRIMALDO, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL ORDINAL SEGUNDO DE LA PARTE RESOLUTIVA DE LA SENTENCIA DE 8 DE JULIO DE 1994, DICTADA POR EL JUEZ PRIMERO DEL CIRCUITO DE COCLÉ, RAMO CIVIL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 4

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR GYMARA DE OBALDÍA BRID CONTRA LA ORDEN CONTENIDA EN LA NOTA JTIA-109 DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 1996 EMITIDA POR LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 5

DEMANDA DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LICENCIADO ROGELIO CRUZ EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE JOSÉ CASTRILLÓN HENAO EN CONTRA DE LA ORDEN DE HACER QUE LO MANTIENE INCOMUNICADO DE ABOGADOS Y FAMILIA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 7

RECURSO DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES CONTRA EL JUEZ CUARTO DE TRABAJO DE LA PRIMERA SECCIÓN, POR HABER EXPEDIDO LA SENTENCIA N° 48 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1995, PROPUESTO POR PANAMETAL INTERNACIONAL, S. A. Y DESARROLLO PAN CHILE, S. A. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 8

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR FÁBRICA DE ALIMENTOS Y HELADOS, S. A., CONTRA LA CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° DM-38-96 DE 15 DE OCTUBRE DE 1996, EXPEDIDA POR EL MINISTRO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 10

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR EDIS CÓRDOBA DÍAZ CONTRA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN RESOLUCIÓN DE 23 DE JULIO DE 1996 DICTADA POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 13

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR RICARDO ALMANZA BAULES EN CONTRA DE RES. 2T-C DE 9 DE AGOSTO DE 1996, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MENORES DEL PRIMER DISTRITO

JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 14

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR TCS DE PANAMÁ, S. A. CONTRA LA ORDEN DE HACER, CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 7 DE OCTUBRE DE 1996, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 16

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE BOUTIN LAW FIRM, EN REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA MULTILEASING, S. A., CONTRA LA ORDEN DE NO HACER EMITIDA POR EL JUEZ SEGUNDO SECCIONAL DE TRABAJO Y CONTENIDA EN EL ACTA DE AUDIENCIA DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 1996, DENTRO DEL PROCESO LABORAL QUE EN SU CONTRA LE HA INTERPUESTO RAÚL B. CASTILLERO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 18

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO FRANCISCO FANOL FLORES VILLA, EN REPRESENTACIÓN DE FELICIA RIVERA DE ARAOLAZA, CONTRA EL REGLAMENTO GENERAL DE ELECCIÓN DEL DECANO Y VICE DECANOS DE LAS FACULTADES, DIRECTORES DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS REGIONALES Y DIRECTORES DE LOS CENTROS UNIVERSITARIOS, EMITIDO POR EL GRAN JURADO DE ELECCIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 20

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE GALINDO, ARIAS Y LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA RITA IRENE TYPALDOS DE OZORES, CONTRA LA ORDEN DE HACER IMPARTIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO, CONSISTENTE EN LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA N° 7.522 DE LA NOTARIA PRIMERA DE CIRCUITO DE PANAMÁ EN LA SECCIÓN DE MICROPELÍCULAS MERCANTIL DE DICHO REGISTRO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 21

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LIC. JOSÉ LEZCANO EN FAVOR DE RAQUEL MARÍA LEGENDRE DE MORENO VS JUEZ QUINTO DEL CIRCUITO DE CHIRIQUÍ. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 33

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO GILBERTO BÓSQUEZ DÍAZ EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE SAMUEL FRANCISCO DE LA GUARDIA WISE CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 14 DE NOVIEMBRE DE 1995, DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 34

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS RANGEL CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE GAMALIER GARCÍA VALENCIA, CONTRA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 12035 DE 6 DE DICIEMBRE DE 1995, DICTADA POR EL DIRECTOR DE MIGRACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 36

AMPARO DE GARANTÍAS PRESENTADO POR EL LICENCIADO AGUSTÍN SELLHORN, EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD SEA DELI PANAMÁ, S. A., CONTRA LA SENTENCIA DE 28 DE OCTUBRE DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS

(1996). 37

RECURSO DE HABEAS CORPUS 38

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALFREDO DE JESÚS SILVA CONTRERAS EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 38

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDUARDO ROGELIO BOYCE GUTIÉRREZ (A) EDUARDITO EN CONTRA DE LA JUEZ SEGUNDA DE CIRCUITO PENAL DE LA PROVINCIA DE COLÓN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 41

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALFONSINA OTAÑO MONTERO EN CONTRA DEL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 43

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CONSTANTINO PERALTA RODRÍGUEZ CONTRA EL JUEZ SEGUNDO DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 45

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JORGE LUIS ACOSTA CONTRA EL DIRECTOR DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 46

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DANIEL ANTONIO DÍAZ DE LEÓN CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 47

RECURSO DE HABEAS CORPUS PREVENTIVO A FAVOR DE JUAN GALLARDO CONTRA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SIETE (7) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 48

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALEXANDER APOLAYO ESCOBAR Y AMELED ANTONIO APOLAYO CONTRA EL FISCAL SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 50

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HÉCTOR ELÍAS SUÁREZ ZULUAGA Y JOSÉ GARCÍA HERNÁNDEZ EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . 53

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JHON JAIRO VALENCIA LAMIR EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 54

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS PATTERSON BURKER CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 55

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ MANUEL RAMOS AGUIRRE CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 56

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ATANEL SANJUR ARENAS CONTRA EL FISCAL

AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE. ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 57

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE IVÁN GABRIEL VÁSQUEZ TUÑÓN CONTRA LA JUEZ TERCERA DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . 58

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ GUILLÉN CONTRA EL FISCAL SEXTO DE CIRCUITO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 60

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MANUEL DE JESÚS SILVA CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 62

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FIDENCIO GONZÁLEZ Q. CONTRA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 64

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARIO AUGUSTO KING CERRUD CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 65

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MANUEL CENOBIO CASTILLO GONZÁLEZ, CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 66

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JAVIER ARRIETA SANTOS CONTRA LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 66

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUAN CHAU DE ARMERO CONTRA EL FISCAL PRIMERO DE CIRCUITO DE COLÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 70

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ GIL ANDRADE CÁCERES CONTRA EL JEFE DEL DIIP Y JEFE DEL CUARTEL DE SAN FELIPE. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 72

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ELDA ESTHER SANDOVAL QUINTERO CONTRA EL FISCAL DE CIRCUITO DE COCLÉ. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 72

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FRANCISCO JOSÉ CASTAÑEDA BAYARD CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 73

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FAUSTO CAICEDO CONTRA LA JUEZ DÉCIMA TERCERA DE CIRCUITO DE LO PENAL DE PANAMÁ, MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 75

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS ALBERTO SMITH SÁNCHEZ CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO

PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 80

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS, A FAVOR DE DALYS MORALES CONTRA LA JUEZ LA SEGUNDA DE CIRCUITO PENAL DE COLÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 81

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE OSCAR ORIEL CÓRDOBA HENRIQUEZ CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 84

HABEAS CORPUS A FAVOR DE DAMARIS GRACIANI REYES CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 85

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE SAMUEL BONILLA URRIOLA CONTRA EL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. (CORRECTIVO). MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 86

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FREDDY JOSÉ MEDINA CÓRDOBA CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 90

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ANTONIO GAITÁN PINTO EN CONTRA DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 94

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUANA MAGALYS MORALES CONTRA EL JUEZ DÉCIMO CUARTO DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL EN GRADO DE APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 96

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE BLANCA MORENO DE MIRANDA CONTRA EL FISCAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 97

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GILBERTO ESPINOZA MACIAS CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 99

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALEXIS ANTONIO ASPRILLA WINFORD CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 102

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ANTONIO LEAL, PABLO BRAVO E ISRAEL ZÚÑIGA CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 105

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ORLANDO GONZÁLEZ CASTILLO EN CONTRA DEL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 106

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE AMADO ISNEL SANCLEMENTE COSSIO CONTRA

EL FISCAL TERCERO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 107

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDGAR RIVERA LOBÓN CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 108

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD 110

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ENRIQUETA CABRERA CONTRA RESOLUCIÓN DE 22 DE DICIEMBRE DE 1995, EMITIDA POR EL JUZGADO TERCERO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ, RAMO CIVIL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 110

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN CONTRA DE LA ÚLTIMA ORACIÓN DEL INCISO PRIMERO DEL ARTÍCULO 162 DE LA LEY 51 DE 11 DE DICIEMBRE DE 1995 "POR LA CUAL SE DICTA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 1996". MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 111

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDO POR CARRILLO, CARRILLO Y PÉREZ CONTRA RESOLUCIÓN N° 05 DE 25 DE OCTUBRE DE 1994, DICTADA POR LA ALCALDÍA DEL DISTRITO DE COLON Y LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ARQUITECTURA E INGENIERÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLON. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 116

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR AQUILIA QUINTERO DE HIDALGO CONTRA LA SENTENCIA N°6 DE 28 DE MAYO DE 1996, DICTADA POR EL JUZGADO MUNICIPAL DE SANTIAGO, RAMO PENAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 117

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR EL LICENCIADO NESTOR UREÑA BATISTA, DEFENSOR DE OFICIO CONTRA LA SENTENCIA N° 27 DE 14 DE MARZO DE 1996, DICTADA POR EL JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VERAGUAS, QUE CONDENA AL SEÑOR EDY MORENO BONILLA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 118

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO LUIS ALBERTO PALACIOS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CONTRA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 190 DE LA LEY N° 51 DE 11 DE DICIEMBRE DE 1995, "POR EL CUAL SE DICTA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 1996". MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 120

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR EL LIC. RAMÓN F. CASTELLANOS DENTRO DEL PROCESO LABORAL SANDRA DE GONZÁLEZ VS EDITORA PANAMÁ AMÉRICA, S. A. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 122

CONSULTA DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE EL ARTÍCULO 427 DEL CÓDIGO DE TRABAJO DENTRO DEL EXPEDIENTE QUE CONTIENE EL PLEITO DE PETICIONES DEL SINDICATO INDUSTRIAL DE AGENCIAS DE SEGURIDAD -VS- SEGURIDAD PERMANENTE Y PROTECCIÓN, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 123

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO ERNESTO E.

NAVARRO BENAVIDES EN CONTRA DE LOS ARTÍCULOS 1391, 1392, 1393, 1395, 1399 DEL CÓDIGO JUDICIAL; 1320 DEL CÓDIGO CIVIL Y LA RESOLUCIÓN DE FECHA 18 DE JULIO DE 1991 DEL JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 124

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL SEÑOR MARCELINO MONTERREY EN CONTRA DE LA LEY N° 107 DE 8 DE OCTUBRE DE 1973. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 126

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA LICENCIADA SHEYLA CASTILLO CHANIS DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY 47 DE 1946. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 127

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE DE OBALDÍA & GARCÍA DE PAREDES, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ASFALTOS PANAMEÑOS, S. A., CONTRA EL OFICIO N° 140 DEL 30 DE AGOSTO DE 1996, EXPEDIDO EN FORMA CONJUNTA POR LA TESORERA Y EL INGENIERO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BUGABA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 129

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA POR EL LIC. JERRY WILSON EN REPRESENTACIÓN DE REYNALDO VENTO SANJUR CONTRA EL ARTICULO 1740 DEL CÓDIGO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA SEIS (1996). . 130

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR EL LICENCIADO CARLOS A. ERHMAN CONTRA CIERTAS PARTES DEL CONTRATO N° 70-96 CELEBRADO EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y LA SOCIEDAD ICA PANAMÁ, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 131

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA POR EL LIC. BORIS E. BARRIOS G. EN CONTRA DEL DECRETO N° 452 DE 10 DE OCTUBRE DE 1990 "POR EL CUAL SE ESTABLECE EL COBRO DE TASAS PARA ALGUNOS SERVICIOS QUE PRESTA EL MINISTERIO DE SALUD". MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 136

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO JUAN ANTONIO LEDEZMA V. CONTRA LA SENTENCIA PJ-5 DE 5 DE JULIO DE 1989 EXPEDIDA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 5 Y CONTRA EL EDICTO N° 139 JCD DE 16 DE AGOSTO DE 1989. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 137

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE EL DECRETO EJECUTIVO N° 476 DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 1995 (SOBRE INDULTOS) (VER EXPEDIENTES CON NÚMEROS 174-96; 334-96; 427-96; 646-96; 656-96; 659-96; 784-95; 800-95; 841-95; 801-95; 881-95; 900-95; 575-96; 812-96; 932-95; 939-95; 958-95; 991-95; 1001-95; 1002-95; 1003-95; 1007-95; 1023-95; 1024-95; 44-96; 48-96; 53-96; 78-96; 88-96; 89-96; 137-96 Y 173-96). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 141

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR SHIRLEY & DÍAZ EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR JORGE E. ULLOA EN CONTRA DE LA FRASE "SIEMPRE QUE SU SEPARACIÓN DEL CARGO NO OBEDEZCA A LA COMISIÓN DE ALGUNA FALTA GRAVE EN EL EJERCICIO DE SU EMPLEO", CONTENIDA EN EL TERCER INCISO DEL ARTÍCULO 796 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO, MODIFICADO POR LA LEY 5ª DE 1936 Y REFORMADA POR LA LEY 121 DE 6 DE ABRIL DE 1943. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 147

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA POR EL LICDO. JUAN ANTONIO LEDEZMA VERGARA EN CONTRA DEL ARTÍCULO 1038 DEL CÓDIGO JUDICIAL Y LA RESOLUCIÓN N° 201-035 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 150

TRIBUNAL DE INSTANCIA 151

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ROLANDO E. PALACIOS R. EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL DENTRO DEL PROCESO SUMARIO PROMOVIDO POR LA SOCIEDAD BERASVAS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 151

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA MIRTZA FRANCESCHI DE AGUILERA DENTRO DE LA ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ROLANDO E. PALACIOS E. EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL DENTRO DEL PROCESO SUMARIO PROMOVIDO POR LA SOCIEDAD BERASVAS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 152

SUMARIAS SEGUIDAS A GREGORIO DÍAZ CARABALLO Y AL H. L. JORGE DÍAZ CARABALLO, POR SUPUESTO DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE GREGORIO ALABARCA, MIGUEL BATISTA, ESTHER MONTENEGRO, FRANCISCA CÓRDOBA Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 153

QUERELLA INTERPUESTA EN CONTRA DE LA H. L. GLORIA DEL CARMEN YOUNG CHIZMAR POR EL DELITO CONTRA LA LIBERTAD, EN PERJUICIO DE NEILA ITZEL AYARZA AGUILAR, A FIN QUE SE FIJE LA FIANZA QUE HA DE CONSIGNAR LA DENUNCIANTE. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 154

SALA PRIMERA DE LO CIVIL 156

ACLARACIÓN DE SENTENCIA 157

CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE ROBERTO ANTONIO BERASTEGUI. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 157

APELACIONES 158

APELACIÓN INTERPUESTA POR OSCAR ANTONIO NAVARRO ACEVEDO CONTRA EL AUTO DE FECHA TRES (3) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO (1995) DICTADO POR EL REGISTRO PÚBLICO RELACIONADA SOBRE EL DOCUMENTO INGRESADO BAJO EL ASIENTO 1480 DEL TOMO 234 DEL DIARIO. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 158

RECURSO DE CASACIÓN CIVIL 161

JOSÉ ANTONIO MONCADA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A ROBERTO EISENMAN Y CORPORACIÓN LA PRENSA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 162

KOLON INTERNATIONAL CORP. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE MEDICAMENTOS CENTROAMERICANOS, S. A. (MÉDICA, S. A.).

MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 164

PROYECTOS FUTURAMA, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE EXCLUSIÓN DE LA ENTIDAD EXTRANJERA FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION PRESENTADA DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO PROPUESTO POR BANCO GIROD DE PANAMÁ, S. A. (EN LIQUIDACIÓN) CONTRA PROYECTOS FUTURAMA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 165

JOSÉ GUILLERMO BROCE BRANDAO RECURRE EN CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO DE DIVORCIO QUE LE SIGUE A LA SEÑORA DALFIA MAR ACOSTA SÁENZ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SIETE (7) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 166

EMPRESAS LAGO, S. A. RECURRE EN CASACIÓN DENTRO DE LA EXCEPCIÓN DE PAGO INTERPUESTA COMO TERCERO INTERESADO EN EL PROCESO EJECUTIVO PROMOVIDO POR BANCO DE BOGOTÁ, S. A. CONTRA LUIS ALBERTO GÓMEZ ESTRIBÍ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, SIETE (7) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 167

JUDITH ESTHER MON DE GRIMALDO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A JORGE HASSAN GRIMALDO. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 168

RICHARD ZAFRANI KADOCH RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO INTERPUESTO POR CERVECERÍA NACIONAL, S. A. CONTRA RICHARD ZAFRANI KADOCH, CENTRAL NORMANDIE, S. A. Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 169

MARÍA DE LOS SANTOS FUENTES DE VEGA, FÉLIX AMABLE PONCE Y COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. A. RECURREN EN CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍA QUE AQUELLA LE SIGUE A ESTOS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 171

BALDOMIR KRISAJ Y EDITH CALVERA DE KRIZAJ RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUEN A INVERSIONES BAHÍA KAPA, S. A. Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 172

LA FISCALÍA TERCERA SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO DE REPOSICIÓN DE CUPONES EXTRAVIADOS INCOADO POR OMAYRA GARCÍA DE BERBEY CONTRA EL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO Y CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. SALVAMENTO DE VOTO DEL MAG. RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 174

RECURSO DE HECHO 176

EL LICENCIADO ROLANDO A. SANTAMARÍA INTERPONE RECURSO DE HECHO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL 10 DE JULIO DE 1996, DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL PROCESO ORDINARIO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO INSTAURADA POR VICTORIANO GONZÁLEZ ORTEGA CONTRA ANTHONY LIM O ANTHONY PATRICK LIM, DAMARIS CHONG DE LIM, HORACIO CHIAL Y ADRIENNE PEARL LIM DE CHIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 176

EL LICENCIADO JORGE JAÉN CASTILLO INTERPONE RECURSO DE HECHO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL 18 DE JULIO DE 1996, DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL PROCESO ORDINARIO INSTAURADO POR LEONCIO ELÍAS CASTILLO CONTRA RAQUEL VALDÉS DE

HERDON. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 177

RECURSO DE REVISIÓN 179

EUGENE MCGRATH RENAULD INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DEL 14 DE JULIO DE 1995, DICTADA POR LA SALA PRIMERA DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DENTRO DEL PROCESO SUMARIO DE LANZAMIENTO INCOADO POR BANCO NACIONAL DE PANAMÁ CONTRA EUGENE MCGRATH RENAULD. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 179

SALA SEGUNDA DE LO PENAL 181

AUTO APELADO 182

FIANZA DE EXCARCELACIÓN APELADA, A FAVOR DE MOISÉS ALEJANDRO GARCÍA RAMOS, SINDICADO POR DELITO DE HOMICIDIO, EN PERJUICIO DE ROGELIO ARTURO HARRY ZORRILLA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 182

AUTO DE ENJUICIAMIENTO APELADO 183

APELACIÓN DE AUTO DE PROCEDER, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A JOSÉ TRUJILLO MONTAÑO, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE CASIMIRO POTES SEGURA Y JORGE BARQUEÑO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 183

AUTO CONSULTADO 184

PROCESO QUE SE SIGUE A FRANCISCO SABA ACOSTA, SINDICADO POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO, COMETIDO EN PERJUICIO DE MANUEL FRANCISCO ASPRILLA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 184

IMPEDIMENTO 186

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAG. HUMBERTO A.COLLADO T., DENTRO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, INTERPUESTO CONTRA EL AUTO EMITIDO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL, MEDIANTE EL CUAL SE CONFIRMA EL RECHAZO DE PLANO DEL INCIDENTE DE RECALIFICACIÓN DEL SUMARIO SEGUIDO A RICARDO ARDITO JUÁREZ, SINDICADO POR DELITO DE HURTO PECUARIO, EN PERJUICIO DE LA SOCIEDAD GANADERA PABSA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 186

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL DEFENSOR DE OFICIO DENTRO DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ELLIS MURILLO GODOY, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO Y ROBO EN PERJUICIO DE ARCENO AGRAZAL Y LA EMPRESA VIDRIOS PANAMEÑOS. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 187

RECURSO DE CASACIÓN PENAL 188

ADMISIBILIDAD DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A RAÚL BURGOS SÁNCHEZ, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 188

CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ANTONIO RAMOS COGLEY, POR DELITO

CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN PERJUICIO DEL CONSULADO DE PANAMÁ EN NICARAGUA. MAGISTRADO PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 188

CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A MAGALYS ESTELA CUEVAS REAL DE ZUBIETA Y OTROS POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN PERJUICIO DE LEONARDO LUCAS LA MOTH BETHANCOURT. MAGISTRADO PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 190

CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ÁNGEL SANTIAGO SÁNCHEZ FLORES, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 191

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JAIME BERMÚDEZ VANEGAS, POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 194

ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A HUGO HENRÍQUEZ VELÁZQUEZ, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE FLORENCIO ANTONIO VÁSQUEZ MARTÍNEZ. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 195

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A JUAN BAUTISTA HERNÁNDEZ, POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 196

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO CONTRA MIGUEL MARTÍN ALVARADO POR DELITOS DE HOMICIDIO CULPOSO Y LESIONES CULPOSAS COMETIDOS EN PERJUICIO DE FÉLIX CÓRDOBA Y EDUARDO CASTILLO, RESPECTIVAMENTE. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 197

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL INCIDENTE DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO A FAVOR DE ANTONIO VILLARREAL EN EL PROCESO QUE SE LE SIGUE POR PECULADO EN PERJUICIO DE LOS CASINOS NACIONALES. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 201

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A DIOMEDES OROCÚ, POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO Y CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL (LESIONES), EN PERJUICIO DE RUPERTO CENTENO O RUPERTO MORALES. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 202

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A JOSÉ DE LA CRUZ ARAUZ LLERENA Y OTRO, POR DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 203

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO EN EL PROCESO SEGUIDO CONTRA MANUEL ANTONIO RELUZ VILLAMIL, MARLON ALBERTO LARA PALACIOS, ITZEL MARITZA RAMÍREZ Y MARITZA ALICIA MEJÍA, POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA (DROGA). MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO COLLADO T. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 203

CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A MARITZA EUGENIA ORTEGA

VILLAVICENZO DE ROBLES, POR DELITO DE POSESIÓN ILÍCITA DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 205

QUEJA 206

QUERELLA PRESENTADA POR JOAQUÍN JOSÉ VALLARINO COX EN CONTRA DE EDGARDO VILLALOBOS, CARLOS E. DE ICAZA Y MARUQUEL AROSEMENA, MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE DELITO DE CALUMNIA E INJURIA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 206

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN 207

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR EL LICDO. JAVIER QUIROZ CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE INADMITE EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A MUSA SERAT. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DOCE (12)) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 207

RECURSO DE HECHO 209

RECURSO DE HECHO, CONTRA PROVIDENCIA DE 10 DE OCTUBRE DE 1996, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, POR MEDIO DE LA CUAL SE DENIEGA EL AUTO DE 7 DE OCTUBRE DE 1996, MEDIANTE EL CUAL SE RECHAZA DE PLANO EL INCIDENTE DE NULIDAD. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 209

RECURSO DE HECHO PRESENTADO POR EL LCDO. SILVIO GUERRA, CONTRA LA PROVIDENCIA DE 10 DE OCTUBRE DE 1996, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, POR MEDIO DE LA CUAL SE DENIEGA LA APELACIÓN INTERPUESTA CONTRA EL AUTO DE 7 DE OCTUBRE DE 1996, MEDIANTE EL CUAL SE RECHAZA DE PLANO EL INCIDENTE DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 209

RECURSO DE REVISIÓN 211

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A AGUSTÍN PALMA ESPINOSA, SINDICADO POR DELITO DE ROBO EN PERJUICIO DEL BANCO EXTERIOR. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 211

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A JORGE ALBERTO MOSQUERA MURILLO, SINDICADO POR DELITO DE PECULADO, EN DETRIMENTO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 213

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JUAN JOSÉ FALCÓN DÁVILA, SINDICADO POR EL DELITO DE EXPEDICIÓN DE CHEQUES SIN LA SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS EN PERJUICIO DE LA EMPRESA LOTUS INTERNATIONAL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 215

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JUAN JOSÉ FALCÓN DÁVILA SINDICADO POR EL DELITO DE EXPEDICIÓN DE CHEQUES SIN LA SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS EN PERJUICIO DE LA EMPRESA LOTUS INTERNACIONAL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 217

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JACINTO CINUS DE LEÓN, SINDICADO POR EL DELITO DE ROBO A MANO ARMADA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO COLLADO T. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 219

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A LUIS ANTONIO KAWANO MURILLO, SINDICADO POR EL DELITO DE HURTO Y ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO COLLADO T. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 220

SENTENCIA APELADA 221

APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A ENRIQUE BARRÍA, POR DELITO DE HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, EN PERJUICIO DE GLADYS RAQUEL BARRIOS DE BARRÍA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 221

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA EN EL PROCESO SEGUIDO A RODOLFO RUGAMA GALIANO, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE JUAN DE LA CRUZ GRACIA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 224

JUICIO SEGUIDO A LUIS ANTONIO CASTILLO SAMUDIO, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE MARTA ESTELA CASTILLO CERRUD. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 226

TRIBUNAL DE INSTANCIA 231

DENUNCIA CONTRA LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES EN LA DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN POR EL SUPUESTO DELITO CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL EN PERJUICIO DE LOS CIUDADANOS CHINOS WU PIN XI, FAN GUANG WEI, OU KIN, JIANG LI FANG, ZHONG SAO SENG, ZHONG ZHANG GUI, JIANG XIU RU, LAU KEN, WANG WEN SHI, WU JIN TUAN. MAGISTRADO PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 231

ACUSACIÓN PARTICULAR PRESENTADA POR EL LICENCIADO JOSÉ E. GÓMEZ EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE UBALDA RODRÍGUEZ QUINTERO, CONTRA RICAURTER GONZÁLEZ GONZÁLEZ, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE SERGIO FERNANDO FRANCO RODRÍGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 232

SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 234

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN 235

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DAVID G. MEJÍA EN REPRESENTACIÓN DE JORGE LUIS JIMÉNEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 81 DE 23 DE JULIO DE 1996, DICTADO POR CONDUCTO DEL MINISTRO DE HACIENDA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 235

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA PETRA MARIA SORIANO ARAÚZ, EN REPRESENTACIÓN DE MARTA MILITZA GAMBOA, PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES, LOS ACUERDOS MUNICIPALES N° 16 Y 17 DE 24 DE MARZO DE 1995, EMITIDOS POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE CHANGUINOLA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ,

CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . 235

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA AIDA JURADO ZAMORA, EN REPRESENTACIÓN DE LÁZARO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, PARA QUE LA SALA TERCERA DECLARE, QUE EL DEMANDANTE TIENE DERECHO A SER RESTITUIDO AL CARGO DE TENIENTE DE LA FUERZA PÚBLICA, POR HABERLO DISPUESTO ASÍ EL JUZGADO SEXTO PENAL DE CIRCUITO DE CHIRIQUÍ, MEDIANTE AUTO N° 92 DE 1° DE FEBRERO DE 1996, Y QUE ES VIOLATORIA LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO INCURRIDO POR EL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA AL NO EJECUTAR UNA ORDEN JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . 236

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICDO. FIDEL PÉREZ EN REPRESENTACIÓN DE JUAN SOLÍS, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 23 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 1995, DICTADA POR LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 239

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAMÓN DE LA O FERNÁNDEZ, EN REPRESENTACIÓN DE ALCIDES D. LINARES RIVERA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO N° 27 DE 27 DE MARZO DE 1996, EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 241

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA LENIS M. ORTEGA EN REPRESENTACIÓN DE ALBERTO BOLÍVAR CONTE, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN DE 7 DE FEBRERO DE 1996 SUSCRITA POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 241

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ALEJANDRO PÉREZ, EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS JAVIER BAZÁN, PARA QUE SE DECLAREN NULAS, POR ILEGALES, LA RESOLUCIÓN DE 17 DE OCTUBRE DE 1994, LA RESOLUCIÓN N° 1452 DE 27 DE DICIEMBRE DE 1994 Y EL ACTA DE SALA DE ACUERDOS N° 1 DE 17 DE ENERO DE 1995, EMITIDAS POR LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 245

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDUARDO RÍOS, EN REPRESENTACIÓN DE RIGOBERTO ANTONIO SOSA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 96-1592 DE 17 DE ABRIL DE 1996, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SIETE (7) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 248

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EMETERIO MILLER EN REPRESENTACIÓN DE ETHNOR DEL ISTMO, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 88-96 DE 14 DE MAYO DE 1996, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 249

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ, S. C. P., EN REPRESENTACIÓN DE ARIADNA

ESPINOSA BERNAL, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO N° 578 DE 31 DE OCTUBRE DE 1994, PROFERIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 250

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DOCTOR NORBERTO REY CASTILLO PEREA, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS ARMANDO LESCURE, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO N° 80 DE 3 DE ABRIL DE 1995, EMITIDO POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 251

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ E. GÓMEZ EN REPRESENTACIÓN DE IRIS WALKIRIA NIETO HURTADO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 344-95 DE 28 DE JULIO DE 1995, DICTADA POR LA ALCALDÍA DEL DISTRITO DE CHITRÉ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 252

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. JAIME J. JOVANÉ, EN REPRESENTACIÓN DE MARVIODAL, S. A., LUNILDA, S. A. Y LUJÁN, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 201-589 DE 25 DE MARZO DE 1994, PROFERIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TRECE (13) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 253

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA MIRANDA Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE MIRNA DE GRACIA DE LAY, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 107 DE 5 DE OCTUBRE DE 1990, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 258

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA GALINDO, ARIAS Y LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE HORACIO ICAZA Y CÍA., S. A. (LA CASA DEL MÉDICO), PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 8542-D. G. DE 4 DE OCTUBRE DE 1995, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 260

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS D. ESPINOSA EN REPRESENTACIÓN DE JUAN ALBERTO RODRÍGUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 7 DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 1996, DICTADA POR LA FISCAL TERCERA DEL CIRCUITO DE CHIRIQUÍ, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 261

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LCDO. JULIO LU OSORIO EN REPRESENTACIÓN DE FÉLIX GARCÍA HIGUERA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 1 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 1995, DICTADA POR LA DIRECTORA PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE HERRERA, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 262

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RITO TORRES GUEVARA, EN REPRESENTACIÓN DE RAFAEL TORRES GUEVARA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, TODO LO ACTUADO EN EL SUPUESTO PROCESO DISCIPLINARIO LEVANTADO AL SEÑOR RAFAEL TORRES GUEVARA, POR DEFECTOS DE FONDO Y DE FORMA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 264

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DOCTOR NORBERTO CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE ANALIDA ORTEGA RÍOS, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO N° 204 DE 14 DE AGOSTO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 265

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RANDOLPH LAWSON, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA N° 95(1001 01)22 DEL 25 DE JULIO DE 1995, EXPEDIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 268

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DOCTOR ROLANDO MURGAS TORRAZA, EN REPRESENTACIÓN DE DAMARIS LEOTEAU RUIZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 187 DE 25 DE JULIO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 270

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ISAÍAS BARRERA EN REPRESENTACIÓN DE GILBERTO E. CUEVAS C., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 439 DE 20 DE ENERO DE 1988, DICTADA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 274

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO PEDRO MORENO EN REPRESENTACIÓN DE AURA AGUDO Y LIZ CASTRELLÓN, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 23 DE 21 DE MAYO DE 1987, DICTADA POR LA JUNTA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 278

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE PITTÍ Y ASOCIADOS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO CAMBRIDGE CONSULTING CORPORATION, SOPHA CONSEIL SANTE Y H. L. M., S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 157 DEL 19 DE AGOSTO DE 1996, EXPEDIDA POR LA MINISTRA DE SALUD Y EL DIRECTOR DEL PROYECTO DE DINAMIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES EN LAS INSTITUCIONES PRIORITARIAS DEL SECTOR PÚBLICO (PAN/95/001) MIPPE-SALUD PNUD, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 285

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO NORBERTO CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE LUSVI HIDIS

NIETO TROLLA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO N° 204 DE 14 DE AGOSTO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 286

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DOCTOR ROLANDO VILLALAZ, EN REPRESENTACIÓN DE ALEXIS ELÍAS MORÓN MALEK, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 9334-94 DE 5 DE DICIEMBRE DE 1994, EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 289

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAÚL ADAMES FRANCESCHI, EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ ÁNGEL PAREDES, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 1659-95 DE 8 DE MARZO DE 1995, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL Y SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 290

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ALEXIS HERRERA EN REPRESENTACIÓN DE ICAZA, GONZÁLEZ-RUIZ Y ALEMÁN PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL SILENCIO ADMINISTRATIVO INCURRIDO POR LA COMISIÓN BANCARIA AL NO CONTESTAR LA SOLICITUD DE LICENCIA FIDUCIARIA PRESENTADA EL 22 DE MAYO DE 1996, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 291

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DOCTOR ROLANDO VILLALAZ, EN REPRESENTACIÓN DE ARELIS REMOND DE MARTINELLI, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 3040 DE 27 DE ABRIL DE 1995, EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 292

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JAIME ANTONIO RUIZ, EN REPRESENTACIÓN DE ERIC MARCEL NIETO HURTADO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN DE 20 DE AGOSTO DE 1996, EXPEDIDA POR EL JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO DE HERRERA, RAMO CIVIL, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 293

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JAIME A. JÁCOME DE LA GUARDIA EN REPRESENTACIÓN DE VÍCTOR PERÉA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 166 DE 14 DE AGOSTO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL DE APELACIONES Y CONSULTAS DEL MUNICIPIO DE COLÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 294

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA SHIRLEY Y DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DE ALBERTO SOTOMAYOR, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA N° 1330-95 DE 2 DE AGOSTO DE 1995, EMITIDA POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ Y LA NOTA N° 95-2126 DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 1995, EMITIDA POR EL VICERECTOR ACADÉMICO A. I. DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA

FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 295

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE COCHEZ-PAGES-ABOGADOS, EN REPRESENTACIÓN DE MIGUEL FILEMÓN PALMA CASTILLO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 201 DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 1996, EMITIDA POR EL MINISTRO DE HACIENDA Y TESORO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 298

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GENARINO ROSAS, EN REPRESENTACIÓN DE ALBERTO JAVIER APONTE BARSALLO, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 738 DE 21 DE DICIEMBRE DE 1994, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 299

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD 301

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ERIC ALBERTO YEE PERALTA, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS ERNESTO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° D. N. 8-5-0943 DE 18 DE MAYO DE 1993, DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 301

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GILBERTO RYALL EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ ANTONIO MARÍN ORTEGA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL ACUERDO N° 4 DE 23 DE ENERO DE 1975, DICTADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE CHORRERA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 301

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE GUERRA Y GUERRA, EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD UTRACOLPA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 31 Y N° 31-1, AMBAS DEL 20 D SE ABRIL DE 1995, EXPEDIDAS POR EL DIRECTOR NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 304

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL DOCTOR LUIS DE LEÓN ARIAS, EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES CONTADORES DE PANAMÁ, ASOCIACIÓN DE CONTADORES PÚBLICOS DE PANAMÁ Y EL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS DE PANAMÁ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 11 DE 28 DE MARZO DE 1994, EMITIDA POR EL MINISTRO DE COMERCIO E INDUSTRIAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 305

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ E. EHRMAN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN DE GABINETE N° 140 DE 11 DE JULIO DE 1996, DICTADA POR EL CONSEJO DE GABINETE. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SIETE (7) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 306

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE BARRANCOS, CLARAMUNT, HENRIQUEZ Y OLIVARES, C. P. C., EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE RESIDENTES DE URBANIZACIÓN LA LOMA, S.

A., PARA QUE SE DECLARE NULOS POR ILEGALES, LA RESOLUCIÓN N° 718/92 DEL 2 DE MARZO DE 1993 Y EL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN N° 273 DEL 6 DE ABRIL DE 1994, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SIETE (7) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 308

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RIGOBERTO VERGARA, EN REPRESENTACIÓN DE ALMACENES COSCO, S. A., PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES, LOS RESUELTOS N° 781 DE 9 DE FEBRERO DE 1973, EL RESUELTO S/N DE 31 DE OCTUBRE DE 1995, AL RESUELTO S/N DE 19 DE JUNIO DE 1996, AMBOS EXPEDIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TRECE (13) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 321

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA MORGAN Y MORGAN, EN REPRESENTACIÓN DE CRUCERO EXPRESS, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO EJECUTIVO N° 54 DE 2 DE JUNIO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRECE (13) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . 323

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO SERVANDO VERGARA QUIROZ, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACUERDO N° C. E. 008-94 DE 14 DE OCTUBRE DE 1994, EMITIDO POR EL COMITE EJECUTIVO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRECE (13) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 326

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. FRANCISCO FANOL FLORES EN REPRESENTACIÓN DE FELICIA RIVERA DE ARAOLAZA PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL REGLAMENTO EMITIDO PARA ORGANIZAR LAS ELECCIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA POR EL GRAN JURADO DE ELECCIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 331

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JUAN AGUILERA FRANCESCHI, EN REPRESENTACIÓN PROPIA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO N° 13 DE 1° DE FEBRERO DE 1995, PROFERIDO POR LOS FISCALES DEL CIRCUITO DE CHIRIQUÍ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 332

IMPEDIMENTO 332

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAG. ARTURO HOYOS, DENTRO DE LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO PEDRO MORENO CÉSPEDES, EN REPRESENTACIÓN DE AURA IRIS AGUDO Y LIZ MARY CASTRELLÓN, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 28 DE 21 DE MARZO DE 1987, DICTADA POR LA JUNTA DE FACULTAD DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: JUAN A. TEJADA MORA. PANAMÁ, CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 332

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENNTO DEL MAG. HUMBERTO A. COLLADO T. DENTRO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, INTERPUESTO CONTRA EL AUTO DICTADO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL, MEDIANTE EL CUAL SE CONFIRMA EL RECHAZO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR INTERPUESTA POR RICARDO ARDITO JUÁREZ Y PABLO DOMINGO ARDITO JUÁREZ, CONTRA CESAR ARDITO BARLETTA VILLARREAL, SINDICADO POR EL SUPUESTO DELITO DE SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE

DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 334

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN LICDA. DE FLTECHER, DENTRO DE LA DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA DE ABOGADOS VELARDE Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE JORGE ISAAC GONZÁLEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 407 DE 19 DE MARZO DE 1996, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE FONDOS COMPLEMENTARIOS DE PRESTACIONES SOCIALES, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 335

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN LICDA. DE FLETCHER, DENTRO DE LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GENARINO ROSAS EN REPRESENTACIÓN DE GUILLERMO SERRANO FLORES, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO N° 175 DE 24 DE JUNIO DE 1996, DICTADO POR CONDUCTO DEL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 335

JURISDICCIÓN COACTIVA 336

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ERNESTO SANTIAGO SELLES, EN REPRESENTACIÓN DE HÉCTOR RAMIRO QUINTERO GIRÓN, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, SUCURSAL DE CHITRÉ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 337

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO BORIS E. BARRIOS, EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS ALBERTO ECHEVERRÍA, CONTRA EL AUTO DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 1996, DICTADO POR EL JUEZ EJECUTOR DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, EN EL CUAL SE DECRETA FORMAL SECUESTRO SOBRE BIENES DE TALLER REVASA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . 338

INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE SECUESTRO, INTERPUESTO POR LA LICENCIADA ALMA LORENA CORTÉS, EN REPRESENTACIÓN DE OMICRÓN PANAMÁ CORPORATION, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL LE SIGUE A LA EMPRESA AEROVÍAS LAS AMÉRICAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 340

TERCERÍA COADYUVANTE, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA IVIS BOTELLO, EN REPRESENTACIÓN DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, CASA MATRIZ, CONTRA FRANCO E HIJOS, S. A. Y OTROS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . 342

INCIDENTE DE NULIDAD DE REMATE, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO ARAÚZ CUEVAS, EN REPRESENTACIÓN DE CUPERTINO CASTRO, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE COLÓN LE SIGUE A EMILY SINMKINS G. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TRECE (13) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 345

TERCERÍA COADYUVANTE, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA IVIS BOTELLO, EN REPRESENTACIÓN DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ-ÁREA METROPOLITANA-CASA MATRIZ, A PUBLICACIONES PANAMEÑAS, S. A. Y OTROS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS

NOVENTA Y SEIS (1996). 345

INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE REMATE, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO GABRIEL ARIEL LAWSON, EN REPRESENTACIÓN DE INVERSIONES E INDUSTRIAS CHANOC, S. A., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE AHORROS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 348

SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES 349

CARTA ROGATORIA 350

CARTA ROGATORIA N° 2 DE 21 DE FEBRERO DE 1996, LIBRADA POR EL JUZGADO REGIONAL DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ, D. C., COLOMBIA, EN EL PROCESO RDO. N° 3.327B DENTRO DE LA CAUSA QUE ADELANTA CONTRA MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ OREJUELA POR LA INFRACCIÓN A LOS ARTÍCULOS 33 Y 34 DEL ESTATUTO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, LEY 30 DE 1986. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 350

CARTA ROGATORIA LIBRADA POR EL JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN EL DISTRITO FEDERAL, MÉXICO, DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO MERCANTIL PROMOVIDO POR NEW NOSE INTERNATIONAL, S. A. EN CONTRA DE NEW NOSE, S. A. Y OTRA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). . . 353

SOLICITUD DE ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL N° 12 DE 9 DE AGOSTO DE 1995, PROCEDENTE DE LA FISCALÍA 78 ADSCRITA A LA UNIDAD DE DELITOS FINANCIEROS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, RELATIVA A LA INVESTIGACIÓN 224393, SE ADELANTA EN CONTRA DE LOS SEÑORES MARÍA CONSTANZA BENAVIDES RUEDA Y EDUARDO CAMARGO CERÓN POR LA SUPUESTA COMISIÓN DEL DELITO DE EXPORTACIÓN FICTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 354

EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA 357

ROSSAVEL RÍOS O MARÍA CHAMBERS, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA DE DIVORCIO DECRETADO POR LA CORTE DE COMMON PLEAS DE PORTAGE COUNTY, OHIO, ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA Y QUE DISUELVE EL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE LA UNÍA AL SEÑOR PLEAS CHAMBERS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 357

MIRIAM ALICIA URRUTIA MEDINA, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA DICTADA POR LA CORTE DEL CIRCUITO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE DADE, ESTADO DE FLORIDA, FECHA EL 15 DE MAYO DE 1995, POR MEDIO DE LA CUAL DISUELVE EL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE LA UNÍA AL SEÑOR ANTONIO ESPINO SCLOPIS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 358

LESBIA ESTHER ALVARADO GOVEA, ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE SU HIJA MENOR SHARLENE SUSSETT ESPINALES ALVARADO, SOLICITA LA AUTORIZACIÓN Y LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CIVIL DEL CAMBIO DE NOMBRE DE LA NIÑA SHARLENE SUSSETT ESPINALES ALVARADO A ROSE SHARLENE ESPINALES ALVARADO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 359

GUILLERMO ISAAC ZAPATA, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL ESTADO DE WASHINGTON, PARA EL CONDADO DE KING, DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, FECHADA EL 24 DE MARZO DE 1981, MEDIANTE LA CUAL SE

DECLARÓ DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE LO UNÍA A LA SEÑORA ARLINE LIEN EHR GARCÍA ARONNE. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 361

SHIRLEY & DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DE LAS SOCIEDADES MARICULTURE CORPORATION Y PAN AMERICAN SEAFOOD, INC., SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS, DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK, DONDE DECLARA Y CONDENA A LA SOCIEDAD CANLA INTERNACIONAL, CORP., A PAGAR A LAS DEMANDANTES LA SUMA UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO DÓLARES (B/.1,000,348.00). MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 362

EXHORTOS 364

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, REPÚBLICA DE ARGENTINA, EN LOS AUTOS CARATULADOS "PIRILLO JOSÉ S/QUIEBRA C/COMPAÑÍA INMOBILIARIA INTERFINANZAS, S. A. Y ALBROOK, CON EL OBJETO DE RECABAR LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA OBTENER INFORMACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO. CORRECCIÓN DE LA PARTE RESOLUTIVA MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 364

SOLICITUD DE ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL LIBRADA POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA STUTTGART-BAD CANNSTATT, REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, DENTRO DEL PROCESO DE ALIMENTOS PROMOVIDO POR MICHAELE LEWIS CONTRA JAMES MICHAEL LEWIS, EN BENEFICIO DE SUS MENORES HIJOS SHANNA MAE KRISTINA Y JAMES STEWART SEBASTIAN, A FIN DE QUE SE REALICEN LOS TRÁMITES PERTINENTES PARA LA NOTIFICACIÓN DEL DEMANDADO. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 364

TRIBUNAL DE INSTANCIA 366

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR MARÍA TERESA GARCÍA CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 02-96 DE FECHA VEINTITRÉS (23) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996), EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, RAMO FAMILIA. MAGISTRADO: PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 366

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR JOSÉ ÁNGEL CARRERA CARILLO CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 52-96 DE FECHA NUEVE (9) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996), EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL PRIMERO DISTRITO JUDICIAL, RAMO PENAL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 368

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR MARÍA TERESA GARCÍA CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 01-96 DE FECHA 23 DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996), EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL RAMO FAMILIA DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 369

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR ALEXIS BOANERGES CHÁVEZ BRENES CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 54-96 DE FECHA NUEVE (9) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, RAMO PENAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 371

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR DENIA DEL CARMEN PÉREZ DE LEÓN CONTRA

LA RESOLUCIÓN N° 89-96 DE FECHA VEINTITRÉS (23) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996), EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, RAMO CIVIL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996). 373

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PLENO

NOVIEMBRE 1996

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTO POR TOMÁS GOLDER -VS- EL TRIBUNAL DE APELACIONES Y CONSULTAS DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ (FAMILIA). MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor TOMÁS GOLDER RIVERA ha presentado, por intermedio de la firma Barrancos & Asociados, recurso de apelación contra la resolución expedida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 26 de agosto de 1996, que no admite la demanda de amparo de garantías constitucionales interpuesta por la parte actora contra el Tribunal de Apelaciones y Consultas del Primer Circuito Judicial de Panamá (Familia).

En la demanda se formula pretensión consistente en una petición dirigida al Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá para que éste revoque el auto N° 31 emitido por el Tribunal de Apelaciones y Consultas de Familia del Primer Circuito Judicial, calendado el 25 de julio de 1996, según fue reformado por el auto N° 759 de 6 de agosto de 1996. El Primer Tribunal Superior no admitió el recurso de amparo en estudio, por considerar que el amparista no aportó documento alguno que acreditara el agotamiento del medio ordinario de impugnación que cabe contra el auto N° 31 de 25 de julio de 1996, que en este caso es el recurso de reconsideración, según lo previsto en el artículo 1114 del Código Judicial en concordancia con el artículo 746 del Código de Familia.

Como la acción de amparo de garantías que nos ocupa es contra una resolución judicial, procede el Pleno a verificar si dicha acción extraordinaria cumple con los requisitos legales necesarios. En ese sentido, el artículo 2606 del Código Judicial, que fue reformado por el Decreto de Gabinete N° 50 de 20 de febrero de 1990, es claro al enunciar que es necesario, para los efectos de la viabilidad del amparo de garantías, que el proponente haya demostrado haber agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate.

Luego de efectuar un análisis de la documentación allegada al expediente, el Pleno observa que, efectivamente, no consta que el amparista presentó prueba alguna que demuestre el agotamiento del medio ordinario de impugnación que cabe contra el auto N° 31 de 25 de julio de 1996 expedido por el Tribunal de Apelaciones y Consultas del Primer Circuito Judicial de Panamá (Familia), que en este caso es el recurso de reconsideración tal como lo establece el último párrafo del artículo 1114 del Código Judicial en concordancia con el artículo 746 del Código de Familia.

En virtud de lo antes anotado, una vez que se ha examinado que el recurso de apelación fue concedido con arreglo a la ley tal como lo prevé el párrafo tercero del artículo 1121 del Código Judicial, el Pleno estima que la acción de amparo de garantías constitucionales que nos ocupa en esta ocasión, no cumple con los requisitos necesarios para su admisión, razón por la cual, lo procedente es, pues, confirmar la resolución expedida por el Primer Tribunal Superior de Justicia que declara su inadmisibilidad.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución de 26 de agosto de 1996 expedida por el Primer Tribunal Superior de Justicia que NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por TOMAS GOLDER contra el auto N° 31 de 25 de julio de 1996 proferido por el Tribunal de Apelaciones y Consultas del Primer Circuito Judicial de Panamá (Familia) el cual fue reformado por el auto N° 759 de 6 de agosto de 1996.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, PROPUESTA POR APARTHOTEL COSTA DEL SOL, S. A., TRUMP TOWER, S. A., EL CHIC, S. A. Y JACQUELINE ABADI DE ARGUEDAS; CONTRA EL JUEZ QUINTO DE CIRCUITO, RAMO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS

Mediante resolución del 2 de octubre de este año, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial no admitió la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta por la firma forense Moreno & Fábrega, en calidad de apoderada especial de **APARTHOTEL COSTA DEL SOL, S. A., El CHIC, S. A. y TRUMP TOWER, S. A.** contra el **JUEZ QUINTO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, RAMO CIVIL** (fs. 18-20).

Contra esa decisión jurisdiccional la firma forense Moreno & Fábrega presentó, en término oportuno, escrito de apelación.

DISCONFORMIDAD DEL APELANTE

El licenciado Jorge Fábrega P., sostiene que el argumento del Tribunal Superior para no acoger el Amparo de Garantías Constitucionales, en el sentido de que no se han agotado los medios o trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución que contiene la orden atacada; no es suficiente para que se permita la violación de una norma tan fundamental.

Considera que por medio del recurso de reconsideración se puede atacar una norma legal y no una norma constitucional; y dado que el control constitucional está confiado sólo a la Corte Suprema de Justicia, se han agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial referida (fs. 22-24).

ANÁLISIS DE FONDO

El tribunal de primera instancia determinó que la demanda presentada por la firma forense Moreno & Fábrega cumple con los requisitos formales que establece el artículo 2610 del Código Judicial, no así con el requisito indispensable señalado en el numeral 2 del artículo 2606 del mencionado código, al advertir que los amparistas no han demostrado que han agotado los medios o trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución objeto de la acción de amparo.

Sostiene además, que si bien el auto que contiene la orden atacada no admite recurso de apelación, de conformidad con el artículo 1114 del Código Judicial sí admite el recurso de reconsideración.

Observa el Pleno que el accionante no agotó los medios y trámites previstos en la ley a objeto de impugnar la resolución de 5 de septiembre de 1996 dictada por el Juzgado Quinto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial, en el cual admitió las pruebas presentadas por las partes, entre las que se encuentra la orden acusada, consistente en realizar prueba pericial a los libros de las empresas que representa la firma forense Moreno & Fábrega en violación de los artículos 29 y 32 constitucionales.

Si bien es cierto que la exigencia del artículo 2606 numeral 2 del Código Judicial en el sentido de agotar las acciones, trámites y recursos ordinarios antes de optar por el amparo contra resoluciones judiciales, no es inflexible, por cuanto permite acudir a esta vía frente a órdenes cuya gravedad e inminencia del daño o lesión a las garantías constitucionales esté próximo a producirse, no es el caso que se presenta en esta ocasión, pues la resolución contentiva de la orden acusada es susceptible de ser impugnada por medio del recurso de reconsideración, tal como lo indicó el tribunal de primera instancia. Por tanto, no puede el recurso extraordinario de amparo de garantías constitucionales reemplazar los medios ordinarios de impugnación que la ley brinda a las partes y que por regla general se otorgan en el efecto suspensivo.

En virtud de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la resolución apelada.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROPUESTA POR EL LICENCIADO JOEL LUQUE, EN SU CALIDAD DE APODERADO DEL SEÑOR ANTONIO LUIS TATIS GRIMALDO, CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN EL ORDINAL SEGUNDO DE LA PARTE RESOLUTIVA DE LA SENTENCIA DE 8 DE JULIO DE 1994, DICTADA POR EL JUEZ PRIMERO DEL CIRCUITO DE COCLÉ, RAMO CIVIL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Procedente del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, en virtud del recurso de apelación concedido al licenciado **JOEL LUQUE**, en su calidad de apoderado del señor **ANTONIO LUIS TATIS GRIMALDO**, ingresó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia el expediente contentivo de la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta contra la orden de hacer contenida en el ordinal segundo de la parte resolutiva de la sentencia de 8 de Julio de 1994, dictada por el Juez Primero del Circuito de Coclé, Ramo Civil.

La resolución apelada, calendada el 23 de septiembre de 1996, no admite la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta en virtud de que la orden de hacer que se cuestiona como lesiva a la garantía individual del derecho a la propiedad legítimamente adquirida y que aparece ínsita en la sentencia de 8 de julio de 1994, proferida por el Juzgado Primero del Circuito de Coclé, Ramo Civil, fue objeto de acciones ordinarias (apelación) y extraordinarias (casación), en las que se esgrimieron los mismos argumentos que aparecen en la acción de amparo y que fueron considerados en las instancias respectivas a través de las resoluciones dictadas, lo que deviene, según el criterio del Tribunal "en la figura jurídica de 'preclusión' cuya razón se fundamenta en la necesidad de dar estabilidad al proceso".

Con base en las consideraciones anteriores el Tribunal estima que se ha faltado a la sinceridad del procedimiento judicial, incurriendo el accionante en falta de lealtad y buena fe para el proceso y las partes, al tenor de lo preceptuado por el artículo 462 del Código Judicial.

Cabe recordar que la admisibilidad in limine de la acción de amparo de

garantías constitucionales se funda en la concurrencia de requisitos externos e internos del libelo, especialmente cuando se trata de resoluciones judiciales. Es indispensable entonces verificar si el amparista le ha dado cumplimiento a los requerimientos establecidos en los artículos 2606, 2608, 2609, 2610 y 2611 del Código Judicial.

En el presente caso hay constancia del agotamiento de los medios y trámites previstos en la ley para la revisión ordinaria y extraordinaria de la resolución judicial dictada por el Tribunal de primera instancia y que es objeto de la acción que nos ocupa, no obstante, el poder que se utiliza es una copia del que se otorgó para representar al demandado en un proceso civil. Por lo demás, se acompaña la orden de hacer impugnada y se anota la disposición constitucional que se considera infringida, al igual que el concepto de la violación de la misma.

En cuanto a la procedencia de la acción, cabe aclarar que en este caso, además de agotar los medios de impugnación ordinarios, se hizo uso del recurso de casación, fallo que decide el fondo del mismo, con fecha 16 de julio de 1996, en el cual la Sala Civil de esta Corporación Judicial examinó una causal probatoria que incidía sobre la decisión del juicio civil de familia sobre separación de cuerpos basado en la causal de trato cruel, y al no casar la sentencia la mantuvo incólume en el sentido de que no sólo se decreta la separación de cuerpos, sino también la salida del cónyuge culpable del domicilio conyugal.

El artículo 204 de la Constitución Nacional niega la posibilidad de amparo contra decisiones de Salas de la Corte.

Nótese que es irrelevante que en casación se haya tratado el punto o no, porque si no lo hizo es tanto como que no haya recurrido pudiendo hacerlo. Razón igualmente suficiente para rechazar el amparo.

Si se admite el recurso se desconoce la sentencia de una Sala de la Corte. Eso es cierto. O sea, se invalidaría con el amparo sentencia de una Sala de la Corte, contra la cual no cabe amparo.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución de 23 de septiembre de 1996.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA NGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR GYMARA DE OBALDÍA BRID CONTRA LA ORDEN CONTENIDA EN LA NOTA JTIA-109 DE 12 DE SEPTIEMBRE DE 1996 EMITIDA POR LA JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **CARLOS EUGENIO CARRILLO GOMILA**, actuando en nombre y representación de **GYMARA DE OBALDÍA BRID**, ha interpuesto acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la orden contenida en la Nota N° JTIA-109 de 12 de septiembre de 1996, dictada por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura.

La Corte procede al examen del libelo de amparo a fin de determinar si se encuentra debidamente formulado y cumple con los requisitos de procedibilidad que establece la ley, para que pueda ser acogido.

En este caso, según expresa el demandante, la acción de amparo está dirigida contra "la orden contenida en la nota número JTIA-109 DE 17 de septiembre de 1996, emitida por el Presidente de la **JUNTA TÉCNICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA** en la cual se ordena la negación a una denuncia presentada por nuestra representada".

La nota objeto de la presente acción de amparo fue aportada con la demanda, figura a foja 1 de este expediente y su contenido textual es el siguiente:

"Panamá, 12 de septiembre de 1996
Arquitecta
GYMARA DE OBALDÍA BRID
Ciudad:

Ref: Denuncia contra el Ing. Víctor Young Andrade y el Ing. Rigoberto Anaya, del 17 de junio de 1996.
Asunto: Respuesta a la Denuncia
Estimada Arq. De Obaldía:

La Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura, después de estudiar el texto de la denuncia en referencia, dictamina que:

1. El Ing. Víctor Young Andrade no ha infringido las disposiciones de la Ley N° 15 de 1959.

2. El Ing. Rigoberto Anaya no ha infringido las disposiciones de la Ley N° 15 de 1959.

Atentamente,

ARQ. ALFONSO PINZÓN
Presidente
AF/AP/ZDEG."

Aun cuando a simple vista se infiere que el acto atacado constituye una orden de NO HACER, que bien pudo haber sido emitido por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura sin obediencia a lo dispuesto por el Decreto N° 775 de 2 de septiembre de 1960 para el procedimiento, trámite y sanción de las infracciones a la Ley 15 de 26 de enero de 1959, dejando a la actora sin la oportunidad de participar en la denuncia interpuesta por ella, no es posible admitir la presente acción de amparo ya que la afectada no agotó la vía del recurso contencioso administrativo de plena jurisdicción contra el acto impugnado.

En este caso, a pesar de que conforme al Decreto N° 775 del 2 de septiembre de 1960, contra el acto acusado no cabe recurso ordinario alguno en la vía administrativa, la amparista aún podía recurrir a la vía contencioso administrativa ante la Sala Tercera de esta Corporación, para que fuese atendida su petición, según lo sostenido por la doctrina jurisprudencial de la Corte.

Por lo expresado el amparo resulta manifiestamente improcedente.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesta por GYMARA DE OBALDÍA BRID contra la orden contenida en la Nota JTIA-109 de 12 de septiembre de 1996, emitida por la Junta Técnica de Ingeniería y Arquitectura.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PRESENTADO POR EL LICENCIADO ROGELIO CRUZ EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE JOSÉ CASTRILLÓN HENAO EN CONTRA DE LA ORDEN DE HACER QUE LO MANTIENE INCOMUNICADO DE ABOGADOS Y FAMILIA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Rogelio Cruz, actuando en nombre y representación de JOSÉ CASTRILLÓN HENAO, ha presentado demanda de amparo de garantías constitucionales en contra de una orden escrita, expedida por el señor Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, que les impide mantener una comunicación personal y correspondencia privada con sus abogados y su familia.

El Pleno pasa a examinar la demanda a fin de determinar si se dan los presupuestos procesales necesarios para que aquélla pueda ser admitida.

El Pleno de esta Corporación observa que, en la presente demanda de amparo de garantías constitucionales, se ha omitido la presentación de la copia autenticada de la orden de hacer escrita que se impugna. El apoderado judicial de la parte actora manifiesta en el renglón denominado PRUEBAS, que "no podemos acompañar copia de la orden impugnada, puesto que, a pesar de haberla pedido, no se nos ha entregado." Como prueba de la orden escrita impugnada el apoderado judicial del demandante nos remite al sumario completo que adelanta la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, especialmente el folio 7440 (Tomo XVII), donde aparece el oficio N° DIIP/DG/1303-96 fechado el día 30 de julio de 1996, dirigido por el Subcomisionado Tomás Ricardo García Tobar, vía el Comisionado José A. Gómez, para el Director General de la Policía Nacional, señor José L. Sosa, en el cual señala que las instrucciones de revisar la documentación para el señor Castrillón Henao fueron dadas por el Fiscal de Drogas, Licenciado Rosendo Miranda.

Esta Corporación considera que el oficio que menciona el apoderado judicial del demandante en su escrito, el cual fue aportado conjuntamente con la demanda de amparo que nos ocupa, no constituye la orden escrita impugnada en la presente demanda, por lo que persiste la omisión señalada a la parte actora en recursos anteriores. El apoderado judicial del demandante debe ser más claro al señalar la orden impugnada, por cuanto en el primer recurso extraordinario de amparo hizo alusión a una orden sin aclarar si la misma se dio por escrito o de manera verbal, mientras que en la segunda demanda de amparo señaló que se trata de una orden verbal, de la cual tampoco probó su existencia. En este tercer recurso, el apoderado judicial del demandante señala que se trata de una orden escrita, indica quien es el funcionario que expidió la orden, pero no aporta la copia autenticada de dicha orden escrita impugnada, omisión esta que no le es dable subsanar al Pleno de esta Corporación.

En este mismo orden de ideas, el apoderado judicial del demandante aporta nuevamente como prueba una declaración notarial jurada, rendida por el Licenciado César Guardia, otro de los apoderados judiciales del señor Castrillón Henao, la cual -tal como lo señalamos en el recurso anterior- no constituye prueba de la orden impugnada. También se aporta toda una serie de documentos emitidos por el detenido para su apoderado judicial o familiares y otros documentos expedidos por el apoderado judicial para su representado o de los familiares del señor Henao los cuales presentan el sello de censurado que contienen los documentos que reciben y envían todos los detenidos en nuestros centros penitenciarios, lo cual,

lejos de constituir prueba de la incomunicación alegada por la parte actora, son prueba fehaciente de que el señor Castrillón Henao remite y recibe tanto documentos como correspondencia de su representante judicial y de sus familiares.

Dado que la orden escrita impugnada no fue acreditada en el expediente y a la Corte no le es dable suplir esta omisión, lo procedente es, pues, no admitir la demanda.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda de amparo de garantías constitucionales presentada por el Licenciado Rogelio Cruz en representación del señor José Castrillón Henao, contra la orden de hacer escrita, expedida por el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(Con salvamento de voto) (Con salvamento de voto)
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS
RAFAEL A. GONZÁLEZ Y AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

Respetuosamente, disentimos del criterio de la mayoría del Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

Anteriormente se interpusieron dos acciones de amparo de garantías constitucionales contra la misma orden que se impugna en el presente caso y, como en esta ocación, no fueron admitidas por razones similares a las que expone la sentencia.

Consideramos que la naturaleza de la situación demandada requería que la acción constitucional fuera acogida y se le solicitara al funcionario público acusado un informe acerca de los hechos.

Por esas consideraciones, salvamos el voto.

Fecha ut supra.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES CONTRA EL JUEZ CUARTO DE TRABAJO DE LA PRIMERA SECCIÓN, POR HABER EXPEDIDO LA SENTENCIA N° 48 DE 17 DE NOVIEMBRE DE 1995, PROPUESTO POR PANAMETAL INTERNACIONAL, S. A. Y DESARROLLO PAN CHILE, S. A. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense MORGAN & MORGAN ha formalizado Recurso de Apelación contra la Resolución de 13 de septiembre del presente año, promovido por el Primer Tribunal Superior de Justicia, donde se resuelve no admitir la acción de Amparo de Garantías Constitucionales formulada por PANAMETAL INTERNACIONAL, S. A. y la parte resolutiva de la sentencia N° 48 de 17 de noviembre de 1995, dictada por el Juzgado Cuarto de Trabajo de la Primera Sección y en la que se dispuso

condenar a dichas Empresas en forma solidaria, al pago de la suma de B/.178,890.00, en favor del señor GUSTAVO CHELLEW SCHROEDER.

Para resolver, el Pleno de la Corte pasó a examinar lo expuesto en la Resolución apelada con fundamento para la NO ADMISIÓN de la acción propuesta.

En ese orden de ideas al entrar a considerar el Tribunal del conocimiento si la acción de amparo con los requisitos establecidos en el artículo 2606 del Código Judicial, subrogado por el Decreto de Gabinete N° 50 de 20 de febrero de 1990, manifiesta "que para que la acción de amparo prospere se requiere haber agotado los medios de impugnación previstos, en este caso, el procedimiento judicial laboral, artículo 214 y siguientes del Código de Trabajo, postula el Recurso de apelación contra la sentencia, y según consta en la copia de la sentencia aportado, el apoderado de las sociedades demandadas, hoy amparistas, no apeló de la sentencia (fojas 65-69) siendo así los amparistas no han cumplido con tal requisito".

Por otra parte, se sostiene en el fallo apelado "que la orden contenida en la sentencia N° 48 tiene fecha de 17 de noviembre de 1995 y es criterio aceptado, que la acción de amparo es un remedio constitucional contra órdenes de autoridades, revestidos de gravedad e inminencias de daño al amparista, situación que de acuerdo con la fecha de la resolución impugnada, está expedida hace más de 9 meses".

En base a esas dos razones, concluye el Primer Tribunal Superior estimando que el amparo incoado es manifiestamente improcedente y por tanto no admite el mismo.

Revisando parte de las constancias procesales que se acompañan con la demanda de amparo, se precisa lo siguiente: 1°) "Que el 29 de junio de 1995 el señor GUSTAVO CHELLEW SCHROEDER, presentó demanda laboral, por medio de apoderado, contra las sociedades PANAMETAL, INTERNACIONAL, S. A. Y DESARROLLO PAN-CHILE, S. A. (VER FOJAS 44); 2°) Que el señor MARIO VELÁZQUEZ CHIZMAR, Director Presidente de esas sociedades y el señor GUSTAVO CHELLEW SCHROEDER, Director Secretario de las referidas sociedades habían presentado renuncia de sus respectivos cargos en dichas sociedades el día 20 de junio de 1995 (ver fojas 34 y 35), 3°) que esas renuncias de Director Presidente y de Director Secretario, respectivamente de las Sociedades PANAMETAL, INTERNACIONAL, S. A. Y DESARROLLO PAN CHILE, S. A., les fueron aceptadas por la Asamblea General de Accionista de dichas sociedades en reuniones celebradas el 23 de junio de 1995, donde actuaron como presidente y Secretario de dichas Asambleas de Accionistas los señores MARIO VELÁZQUEZ CHIZMAR Y GUSTAVO SCHROEDER; 4°) que las actas de las reuniones a que nos referimos fueron protocolizadas mediante escrituras públicas N° 2984 y 2985, de 23 de junio de 1995 y presentadas para su inscripción al Registro Público el día 3 de julio de 1995 (ver fojas 107 y 113); 5°) que cuando el señor MARIO VELÁZQUEZ CHIZMAR otorgó poder al Licdo. EDWIN SALAMÍN, para que lo representara en la demanda laboral interpuesta por GUSTAVO CHELLEW SCHROEDER contra PANAMETAL, S. A. y DESARROLLO PAN-CHILE, S. A., ya no era Presidente de dichas sociedades, por cuanto que había renunciado de ese cargo desde el 20 de junio de 1995.

Cierto es que contra la sentencia pronunciada por el Juez Cuarto de Trabajo fechada el 17 de noviembre de 1995 no hubo apelación por ninguna de las partes, pero sin pretender conocer del fondo de lo planteado en la demanda de amparo, donde se ataca la legitimidad de personería y se alega la violación del artículo 32 de la Constitucionalidad Nacional, se estima que **inadmisibilidad** de la acción de amparo con el argumento planteado de la no apelación de la sentencia pronunciada, no responde a las argumentaciones y probanzas que se dan en este amparo donde se esgrime precisamente que las sociedades en cuyo favor se interpone esta demanda laboral propuesta por GUSTAVO SCHROEDER contra las mismas.

Igual ocurre en lo referente al segundo motivo que se da para inadmitir la acción propuesta, por que aún cuando que en pronunciamientos anteriores está Corporación se ha referido a "la gravedad e inminencia de daño al amparista", se considera que en el caso presente, con vista en los antecedentes procesales, el amparista ha procurado mediante recursos legales previos interpuestos antes de la presentación de este amparo, dejar sin efecto la orden de hacer contenida en

la sentencia pronunciada por el Juez Cuarto de Trabajo, recursos que hasta la fecha no le han sido favorables y que en la tramitación y decisión de los mismos se tomaron varios meses. En cuanto a lo inminente del daño, lo resuelto en el fallo pronunciado por el Juez Cuarto de Trabajo se concretiza en el proceso de ejecución en que se encuentra el fallo promovido, proceso de ejecución que afecta a bienes de las sociedades demandadas.

De lo que se deja expuesto y luego del examen de la demanda de amparo propuesta, esta Corporación concluye que cumple con las formalidades necesarias para su admisión y así se debe declarar Para posteriormente entrar a resolver sobre el fondo de la misma.

En mérito de lo que se deja dicho, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la resolución de 13 de septiembre de 1996, dictada por el Tribunal Superior de Justicia y ORDENA admitir el Amparo de Garantías Constitucionales, propuesto por **PANAMETAL, S. A. y DESARROLLO PAN-CHILE, S. A.**, contra la orden de hacer contenida en la parte resolutiva de la sentencia N° 48 de 17 de noviembre de 1995, proferida por el Juez Cuarto de Trabajo de la Primera Sección.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR FÁBRICA DE ALIMENTOS Y HELADOS, S. A., CONTRA LA CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° DM-38-96 DE 15 DE OCTUBRE DE 1996, EXPEDIDA POR EL MINISTRO DE TRABAJO Y BIENESTAR SOCIAL. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante providencia calendada 22 de octubre del presente año, esta corporación de justicia admitió la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por el licenciado Napoleón Aguilar Moreno, en nombre y representación de la sociedad anónima **FÁBRICA DE ALIMENTOS Y HELADOS, S. A.**, contra la orden de hacer, contenida en la resolución N° D. M. 38/96, de 15 de octubre de 1996 proferida por **EL MINISTRO DE TRABAJO**. Por tanto, de conformidad con el artículo 2611 del Código Judicial se requirió de la autoridad demandada el envió de la actuación correspondiente o en su defecto un informe escrito de los hechos materia de la acción.

FUNDAMENTO DEL AMPARISTA

El licenciado Aguilar Moreno apoya el recurso presentado en diez puntos que se pueden sintetizar de la siguiente manera:

1. Que el Sindicato Industrial de Trabajadores de Comida Rápida presentó ante la Dirección General de Trabajo un pliego de peticiones en contra de la empresa Fábrica de Alimentos y Helados, S. A.

2. Que la empresa al ser notificada resolvió solicitar a la Dirección General de Trabajo un previo y especial pronunciamiento, al estimar que se estaba violando el artículo 342 numeral 3 del Código de Trabajo.

3. Que al resolver la solicitud, la Dirección General de trabajo determinó que la denominación del Sindicato de Trabajadores de Comida Rápida es industrial, y que si bien la mayoría de los trabajadores afiliados a él, laboran en empresas que preparan y expenden comida rápida, no implica que solamente pueden permitir en sus filas a trabajadores que venden al por menor éstas comidas rápidas, dado que su denominación no hace alusión específica a ello. Por lo que pueden incluir a aquellas fábricas que elaboran o preparan estos alimentos que son suministrados mediante venta a los establecimientos que los expenden como comida rápida, pues esa es su calidad desde el momento de su elaboración en la fábrica como al momento de su venta.

4. Que el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social de manera reiterada **- resolución D. M. 6/91 de 14 de enero de 1991-** ha sostenido que los sindicatos no pueden crear anarquía en las empresas afiliando indiscriminadamente a trabajadores en cualquier organización independientemente de la actividad comercial. De conformidad con la licencia expedida a la empresa que representa ésta se dedica a la Fabricación de Helados y Productos Lácteos y no se puede afiliar a ningún sindicato que tenga como función objetiva la venta de comida rápida.

5. Que las empresas que tienen trabajadores afiliados al Sindicato Industrial de Comida Rápida, se dedican a preparar comida rápida para vender al público, con alimentos y productos fabricados por empresas de otra clase, que son las fabricas. A lo que no se dedica la empresa que representa.

6. Que el SITCRA tiene afiliados a trabajadores que laboran en la venta de comida rápida en las empresas: Topsy, Kentucky Fried Chiken, Yogen Froz, y los restaurantes Giret, Melchi, MacDonald, San José 24 horas, Parrillada Pollos Asados Yap Yap, cuyas actividades son la venta de comida rápida directamente al consumidor. Ninguna de esas empresas es fábrica por lo que no son de la misma clase que Fábrica de Alimentos y Helados, S. A.

7. Que la solicitud del previo y especial pronunciamiento sobre que el sindicato no tiene derecho a presentar Pliego de Peticiones a la empresa Fábrica de Alimentos y Helados, S. A. por no ser de la misma clase de las empresas en las cuales trabajan sus afiliados, suspendió los términos de la negociación. Mediante el recurso de amparo solicita se mantenga la suspensión.

8. Que en fallo de 10 de mayo de 1981 la Corte Suprema de Justicia denegó un amparo indicando que SITRACOVIP no podía afiliar trabajadores al Sindicato de empresas que no tuviese actividades similares a las empresas en las cuales tenía afiliados trabajadores dicho sindicato.

9. Que en fallo reciente **-17 de mayo de 1996-** la Corte Suprema de Justicia se refiere a ese aspecto. Por lo que la empresa a la que representa no está obligada a negociar el pliego presentado por el Sindicato, por se de actividad distinta a la actividad relacionada con los trabajadores del Sindicato.

10. Que el Sindicato se refiere a trabajadores de comida rápida como los restaurantes y no a la fabricación de helados y productos lácteos, lo que se aprecia en las licencias respectivas.

Menciona el amparista como disposiciones constitucionales violadas los artículos 32, y 73; y solicita se ordene la suspensión de la orden de hacer impartida en forma arbitraria (fs. 13-19).

ANÁLISIS DE FONDO

En primer lugar, es importante determinar cuál es el objeto de la acción de amparo de garantías constitucionales. De conformidad con lo normado en el artículo 2606 del Código Judicial, el objetivo de este recurso es desvirtuar una orden de hacer o de no hacer que viole los derechos y garantías que consagra la Constitución Nacional.

Al examinar los antecedentes remitidos, se puede leer a fojas 37 el auto

N° 93-DGT-96 de 6 de agosto de 1996, en virtud del cual se resolvió el incidente de previo y especial pronunciamiento presentado por el accionante al contestar el pliego de peticiones del Sindicato Industrial de Comida Rápida contra la empresa Fábrica de Alimentos y Helados, S. A. Dicho auto rechaza por improcedente el incidente al considerar que un sindicato industrial está formado por personas de varias profesiones, oficios o especialidades que prestan servicios en dos o más empresas de la misma clase y por ello se pueden incluir las fábricas que elaboran o preparan los alimentos que son suministrados por establecimientos de expendio de comida rápida.

El recurso de reconsideración con apelación en subsidio, incluyó además la impugnación de la admisión de afiliados (art. 394 del Código de Trabajo) lo que amplió la pretensión para la cual no tenía legitimación activa, lo que dio lugar a la Resolución N° 57-DGT-96 de 22 de agosto de 1996 de la Dirección General de Trabajo que rechaza por improcedente el recurso de reconsideración con apelación en subsidio.

Contra esa resolución se presenta el recurso de hecho ante el Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, quien expide la Resolución DM 38-96 de 15 de octubre, que ha sido objeto de censura a través de la presente acción.

El motivo de la impugnación lo es la orden de hacer contenida en la resolución N° D. M. 38/96 del 15 de octubre de 1996, emitida por el Ministro de Trabajo y Bienestar Social, la cual en su parte resolutiva rechaza de plano el recurso de hecho propuesto por Fábrica de Alimentos y Helados dentro del Pliego de Peticiones que presentó el Sindicato Industrial de Trabajadores de Comida Rápida (STICRAS).

En la misma se ordena devolver el expediente a su despacho de origen para que se continué con el proceso de conciliación respectivo.

Ahora bien, esa orden es consecuencia del rechazo del recurso de hecho al considerar que no procedía de conformidad con el artículo 909 del Código de Trabajo, dado que éste no se refiere a procesos de orden administrativo sino jurisdiccional y además el escrito presentaba fallas elementales al extremo de no contener firma alguna (cfr. fs. 53), por lo que como lo indica la resolución, no debió ser recibido.

El licenciado Aguilar Moreno ataca esa orden y sostiene que la misma es arbitraria, pero como se anotó antes la misma es consecuencia de la decisión adoptada en el sentido de rechazar de plano el recurso de hecho, que recae en aspectos adjetivos por lo que no vulnera normas constitucionales referentes al debido proceso (arts. 32 y 73).

Siendo así, no se puede pretender por esta vía legal dejar sin efecto el auto N° 93-DGT-96 de 6 de agosto de 1996 que rechazó por improcedente el incidente propuesto por la empresa Fábrica de Alimentos y Helados, S. A., y esa resolución es irrecurrible. Por otra faz, la decisión de la autoridad demandada no llegó a pronunciarse sobre los puntos alegados en esa oportunidad sino sobre la improcedencia del recurso interpuesto.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, declara NO VIABLE la acción de amparo de garantía constitucional interpuesta por el licenciado Napoleón Aguilar Moreno, en nombre y representación de Fábrica de Alimentos y Helados, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR EDIS CÓRDOBA DÍAZ CONTRA ORDEN DE NO HACER CONTENIDA EN RESOLUCIÓN DE 23 DE JULIO DE 1996 DICTADA POR EL TRIBUNAL MARÍTIMO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ingresó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la acción de amparo de garantías constitucionales presentada por el licenciado **Eduardo E. Ríos Molinar**, en representación de **EDIS CÓRDOBA DÍAZ**, contra la orden de no hacer contenida en Resolución de 23 de julio de 1996 (f. 1), dictada por el Juez del Tribunal Marítimo de Panamá, Licenciado Alvaro Cabal D.

Observa la Corte que la supuesta orden de no hacer, cuya revocación se pretende, se desprende de la Resolución de 23 de julio de 1996, mediante la cual el Tribunal Marítimo ordenó al Alguacil del Tribunal que practicara físicamente el embargo de la motonave (M/N) ARIEL ASLAM de bandera panameña, inscrita a ficha N° 826, rollo 50300, imagen 0066 de la Sección de Micropelículas Mercantil, decretado por el Juzgado Cuarto de Trabajo de la Primera Sección, dentro del proceso laboral promovido por **EDIS CÓRDOBA DÍAZ** contra DISTRIBUIDORA DE MARISCOS, S. A., previa la consignación de las sumas que establece el párrafo tercero del artículo 166 del Código de Procedimiento Marítimo, es decir, la suma de tres mil quinientos balboas (B/.3.500.00).

En la Resolución contentiva de la orden se establece que, en virtud de lo establecido en el artículo 194 y siguientes de la Ley 8 de 30 de marzo de 1982, corresponde al Tribunal Marítimo ejecutar la diligencia de embargo sobre la motonave ARIEL ASLAM, propiedad de DISTRIBUIDORA DE MARISCOS, S. A., según fue decretado por el Juez Cuarto de Trabajo de la Primera Sección y, en este orden, el Tribunal Marítimo aprehendió el conocimiento de la acción de embargo y ordenó el embargo, previa la caución de los gastos que el Alguacil del Tribunal requiriera para la conservación, mantenimiento y custodia de los bienes (Art. 166 de la Ley 8 de 1982); entendiéndose en todo caso que se trata de una orden de hacer, contrario a lo alegado por la parte demandante.

En el libelo de la demanda (fs. 3 a 5), conforme con lo establecido por el artículo 2610 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 654 del mismo Código, se detalla en forma expresa la orden impugnada -la orden de practicar el embargo decretado, previa la consignación de las sumas establecidas en el párrafo tercero del artículo 166 de la Ley 8 de 1982-, se establece el nombre del servidor público que la impartió -Juez Marítimo, Licenciado Alvaro Cabal D.-, se enumeran los hechos en que se funda la pretensión, se explican las garantías fundamentales violadas (Art. 32 de la Constitución Nacional) y el concepto en que lo han sido (violación directa). Además, con la demanda se acompañó la prueba de la orden impartida, es decir, copia debidamente autenticada de la Resolución de 23 de julio de 1996, dictada por el Tribunal Marítimo (f. 1); y copia autenticada del Oficio N° 563 de 18 de julio de 1996, del Juzgado Cuarto de Trabajo de la Primera Sección (f. 2).

Ahora bien, para determinar la admisibilidad de la demanda de amparo de garantías constitucionales, la misma ha de atenerse a los requisitos consignados en el artículo 2606 del Código Judicial y, siendo que la orden impugnada reviste la naturaleza de una resolución judicial -resolución de 23 de julio de 1996 (f. 1), dictada por el Juez del Tribunal Marítimo de Panamá, Licenciado Alvaro Cabal D., dentro del proceso laboral propuesto por **EDIS CÓRDOBA DÍAZ** contra DISTRIBUIDORA DE MARISCOS, S. A., ante el Juzgado Cuarto de Trabajo de la Primera Sección-; cabe señalar que la acción de amparo procede contra resoluciones judiciales, siempre y cuando se cumpla con las condiciones particulares

enumeradas en el artículo 2606 del Código Judicial, cuyo ordinal 2°, establece que "Sólo procederá la acción de amparo cuando se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate.".

En el caso que nos ocupa, la Corte estima que el demandante no ha dado cumplimiento a dicho requisito consistente en demostrar el agotamiento de los medios previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial atacada. Ello es así, porque la resolución dictada por el Tribunal Marítimo, según lo establecido en el artículo 478 de la Ley 8 de 1982, en relación con el artículo 471 ibídem, es susceptible de ser impugnada mediante el recurso de reconsideración. Y, por lo tanto, a falta de prueba en la demanda de amparo, que demuestre el agotamiento de todos los medios y trámites previstos en la Ley para la impugnación de la resolución judicial acusada, no puede admitirse la acción de amparo presentada en este caso, según lo establecido en el artículo 2606, ordinal 2°, del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el licenciado Eduardo E. Ríos Molinar, en representación de EDIS CÓRDOBA DÍAZ, contra la orden de no hacer contenida en Resolución de 23 de julio de 1996, dictada por el Juez del Tribunal Marítimo de Panamá.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS MUÑOZ POPE (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES PROMOVIDO POR RICARDO ALMANZA BAULES EN CONTRA DE RES. 2T-C DE 9 DE AGOSTO DE 1996, EMITIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MENORES DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ingresó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por el licenciado **Pedro Didier Torres**, en representación de **RICARDO ANTONIO ALMANZA BAULES**, contra la resolución N° 2T-C de 9 de agosto de 1996, emitida por el Tribunal Superior de Menores del Primer Distrito Judicial de Panamá.

En la resolución N° 2T-C de 9 de agosto de 1996 impugnada (fs. 1 a 11), el Tribunal Superior de Menores, revocó la resolución N°-002.S. A.-96 de 2 de enero de 1996, del Juzgado Primero Seccional de Menores de Panamá, dictada dentro del proceso de tránsito donde intervienen como partes el menor **RICARDO ANTONIO ALMANZA CERCEÑO** y el señor CÉSAR M. ARROCHA, y declaró a **RICARDO ANTONIO ALMANZA CERCEÑO** responsable del accidente de tránsito (colisión) ocurrido el día 13 de diciembre de 1994 y, en consecuencia, quedó obligado a la indemnización de los daños causados al señor CÉSAR M. ARROCHA, y le impuso a los representantes legales del menor **RICARDO ANTONIO ALMANZA CERCEÑO**, una multa de veinte balboas (B/.20.00), por la falta de tránsito cometida.

Cabe señalar que la acción de amparo procede contra resoluciones judiciales, siempre y cuando se cumpla con las Condiciones particulares

enumeradas en el artículo 2606 del Código Judicial, cuyo numeral 2, establece que "Sólo procederá la acción de amparo cuando se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate.", y en el caso que nos ocupa, la Corte estima que el demandante ha dado cumplimiento a dicho requisito consistente en demostrar el agotamiento de los medios previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial atacada, puesto que la misma no era susceptible de recurso ordinario alguno.

En el libelo de la demanda (fs. 28 a 32), conforme con lo establecido por el artículo 2610 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 654 del mismo Código, se detalla en forma expresa la orden impugnada -Resolución N° 2T-C de 9 de agosto de 1996 (fs. 1 a 11)-, se establece el nombre del servidor público que la impartió -Tribunal Superior de Menores del Primer Distrito Judicial de Panamá-, se enumeran los hechos en que se funda la pretensión, se explican las garantías fundamentales infringidas (Art. 32 de la Constitución Nacional) y el concepto en que lo han sido (violación directa). Además, con la demanda se acompañó la prueba de la orden impartida, es decir, copia debidamente autenticada de la Resolución N° 2T-C de 9 de agosto de 1996 (fs. 1 a 11), emitida por el Tribunal Superior de Menores del Primer Distrito Judicial de Panamá; y demás piezas procesales de importancia.

No obstante, advierte la Corte que, si bien el demandante indicó que en la resolución atacada el Tribunal Superior de Menores infringió de manera directa, por comisión, la garantía fundamental del debido proceso consignada en el artículo 32 de la Constitución Nacional, de los hechos de la pretensión expuestos en la presente demanda se advierte que el supuesto vicio de inconstitucionalidad de que se acusa a la resolución judicial se fundamenta en una errónea apreciación de las pruebas aportadas por parte del Tribunal Superior de Menores del Primer Distrito Judicial y así fácilmente se aprecia de los hechos segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto de la demanda así como también de lo expuesto en el punto referente al concepto de la infracción cuando manifiesta que "... el Tribunal Superior de Menores al dictar la resolución impugnada no valoró las pruebas conforme a la Sana Critica (sic) tal y como lo consagra la ley y la Constitución, ya que dichas pruebas debieron valorarse de una forma objetica (sic) y de acuerdo a la experiencia (Pruebas periciales) y la lógica; así como lo realizó el Tribunal de Primera Instancia" (f. 31). Por lo tanto, observamos que el demandante interpretó indebidamente el contenido de la garantía del debido proceso, que a través de una norma negativa dispone el cumplimiento de las formalidades procesales dentro de un proceso legal, es decir, el derecho a la defensa, dentro del cual se contempla el principio de que nadie está obligado a declarar contra sí mismo o contra sus parientes dentro de los grados de parentesco señalados en la ley, el principio de que no hay pena sin ley aplicable al caso, el derecho a ser representado por un apoderado legal y, además, dicha garantía contiene la prohibición del doble juzgamiento y dispone, a su vez, que el juzgamiento corresponde a la autoridad competente, es decir, al juez natural a quien corresponda el conocimiento del caso.

El Pleno de esta Corporación, en forma reiterada, se ha pronunciado en el sentido de que los posibles errores de juicio cometidos por el juez en la valoración de las pruebas, alegados por el demandante, no son susceptibles de reparo mediante el ejercicio de la acción constitucional de amparo, porque ello convertiría al tribunal que conoce de este tipo de asuntos en una instancia más del proceso, lo que resulta incompatible con la finalidad del amparo, que consiste en obtener la invalidación de un acto que afecta al impugnante, con el propósito de enervarlo por violatorio de las garantías constitucionales y, siendo que la resolución acusada, aunque contuviese vicios de actividad o de juicio, no es posible enervarla por la vía del recurso de amparo de garantías constitucionales, esta Superioridad considera que la demanda sub-examine resulta manifiestamente improcedente y, según se desprende del artículo 2611 del Código Judicial, no debe admitirse.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el licenciado Pedro Didier Torres, en representación de RICARDO ANTONIO ALMANZA BAULES, contra la resolución N° 2T-C de 9 de agosto de 1996, emitida por el Tribunal Superior de Menores del

Primer Distrito Judicial de Panamá.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR TCS DE PANAMÁ, S. A. CONTRA LA ORDEN DE HACER, CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 7 DE OCTUBRE DE 1996, EXPEDIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRABAJO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

JOSÉ GUILLERMO LEWIS NAVARRO, en su calidad de Presidente y Representante Legal de la sociedad denominada **TCS DE PANAMÁ, S. A.**, confirió poder especial a la firma forense Alfaro, Ferrer, Ramírez & Alemán, para presentar acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer contenida en la Resolución de 7 de octubre de 1996, expedida por el Director General de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social, en virtud de la cual ordenó el traslado a la empresa demandante de un Pliego de Peticiones propuesto por el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS).

Por cumplidas las reglas de reparto, se expidió la providencia de 21 de octubre (fs. 17), mediante la cual se admitió la acción de amparo presentada y se requirió de la autoridad demandada el envío de la actuación o en su defecto de un informe escrito que se refiera a los hechos que sustentan la acción propuesta.

El 22 del mismo mes, se recibió la nota N° 810-DGT-96, que en lo pertinente, es del siguiente tenor:

> "El 3 de octubre del año que decurre el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), presentó ante el Departamento de Relaciones de Trabajo, el cual está adscrito a la Dirección General de Trabajo, Pliego de Peticiones en contra de la Empresa T.C.S. de Panamá, S. A., procediéndose a su revisión con el propósito de verificar si reunía los requisitos exigidos en los artículos 427, 428 y 429 del Código de Trabajo.
>
> De conformidad con la ley, de no encontrarse defectos en la presentación se dictó la providencia calendada 7 de octubre de 1996, por el cual se ordena la notificación del Pliego a la Empresa T. C. S. de Panamá, S. A., diligencia que fue evacuada el día 14 de octubre de 1996, concediéndosele un término de cinco (5) días para su contestación, el cual precluía el lunes 21 de octubre del año en curso.
>
> Ateniéndonos al procedimiento establecido en el Código de Trabajo, no nos es dable rechazar un Pliego de Peticiones si el mismo reúne los requisitos que se exigen para su presentación.
>
> La ausencia de normas de procedimiento ante situaciones de conflictos en donde la empresa (cualquiera que sea) se niegue a

sentarse en la mesa de negociaciones, ha generado que esta autoridad administrativa resuelva las inconformidades jurídicas plasmadas en la contestación al Pliego de Peticiones, vía incidente.

Es en la contestación del Pliego en donde esta autoridad entra a conocer las situaciones de hecho y de derecho que puedan variar disposiciones establecidas en la ley concediéndole a cada quien lo que le corresponde.

En ese sentido, debió el amparista alegar en su contestación al Pliego, las razones por las que consideraba que no debía sentarse a negociar dicho Pliego de Peticiones, presentado por el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), en su contra.

Nuestros funcionarios receptores de la documentación tienen instrucciones al respecto, remitiendo a esta Dirección, toda la gestión de las partes con el propósito de que este Despacho resuelva las incidencias que por general presentan las empresas requeridas.

Estimamos con todo respeto Honorables Magistrados, que el amparista omitió la vía del incidente ante la autoridad conocedora y se adelantó a proponer la acción de Amparo de Garantías Constitucionales sin que conociéramos en primera instancia sus inconformidades jurídicas.

Es más, a fecha 21 de octubre de 1996, presentó la contestación al Pliego mostrando actitud ambivalente, en el sentido de que niega que sus trabajadores estén afiliados al SUNTRACS y a la vez se muestra anuente a sentarse en la mesa de negociaciones.

Para mayor ilustración remitimos a vuestra superioridad la gestión y actuación correspondiente".

Tal como lo manifiesta en la nota transcrita, el Director General de Trabajo adjunta los originales del expediente que recoge la gestión realizada por el Sindicato Único Nacional de Trabajadores de la Construcción y Similares, y el proyecto de Convención Colectiva y sus anexos.

Salta a la vista que simultánea a la providencia de admisión de la acción de amparo de garantías constitucionales presentada, TCS DE PANAMÁ, S. A., optó por contestar el pliego de peticiones que le presentara el SUNTRACS, gestión ésta que impide la continuidad del proceso de amparo, por cuanto los mismos reparos que se hicieron a la orden del traslado del pliego de peticiones, aparecen en el escrito presentado el 21 de octubre de 1996 y, como señalara la autoridad demandada en su respuesta al Tribunal de Amparo, es en la etapa de contestación del traslado cuando al presentarse las objeciones e incidencias se conocen las mismas y corresponde resolver sobre su procedencia.

Si bien es cierto que el Pleno de la Corte en sentencia de 17 de mayo de este año resolvió dos acciones de amparo de garantías constitucionales en las que hacían censuras similares al presente caso, la parte demandante a posteriori de la presentación de la acción, ha optado por la continuidad del trámite conciliatorio y por ello ha dejado de existir el objeto del proceso, ya que el reclamo se hacía contra la resolución de 7 de octubre de 1996, mediante la cual la Dirección General de Trabajo ordenó el traslado del pliego de peticiones propuesto por SUNTRACS.

Por razón de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara que se ha producido SUSTRACCIÓN DE MATERIA en este caso y ordena su archivo.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE BOUTIN LAW FIRM, EN REPRESENTACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA MULTILEASING, S. A., CONTRA LA ORDEN DE NO HACER EMITIDA POR EL JUEZ SEGUNDO SECCIONAL DE TRABAJO Y CONTENIDA EN EL ACTA DE AUDIENCIA DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 1996, DENTRO DEL PROCESO LABORAL QUE EN SU CONTRA LE HA INTERPUESTO RAÚL B. CASTILLERO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de amparo de derechos fundamentales propuesta por la firma forense Boutin Law Firm, en representación de Multileasing, S. A., contra "la orden de no hacer emitida por el Juez Segundo Seccional de Trabajo de la Provincia de Panamá, en el acta de audiencia realizada el día 27 de septiembre de 1996" (f. 3).

La alzada se dirige contra resolución de 11 de octubre del año en curso, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia, que no admite la acción de amparo de derechos fundamentales propuesta. Por sustentada la apelación en tiempo oportuno, debe el Pleno examinar la resolución recurrida a la luz de los argumentos que trae el libelo de impugnación, a lo que procede.

El juzgador de primera instancia no acogió la presente iniciativa constitucional por considerar que "... está dirigida contra un acta de audiencia, la cual no reviste la forma de una orden de hacer o no hacer, ya que ésta es sólo una relación escrita de lo acontecido en una audiencia" (f. 22).

Por su parte, el apoderado judicial de la amparista sostiene que el a-quo confunde la noción de orden y su "sostén o soporte material", la naturaleza de la misma con su "medio de expresión" (f. 31), lo que lo llevó a no admitir la demanda de amparo.

El examen del expediente informa que estamos en presencia de la impugnación de un acto de autoridad proferido en forma verbal, procedimiento autorizado por la jurisprudencia que sobre la materia tiene establecido el Pleno, en cumplimiento de lo normado por el artículo 2606 del Código Judicial.

En efecto, en causas como la que ahora se examina, jurisprudencia reiterada del Pleno se pronuncia en el sentido de que cuando la orden de hacer o de no hacer es de naturaleza implícita o de carácter verbal, a los efectos de su acreditación es necesario presentar prueba documental preconstituida, consistente en la deposición de dos testigos hábiles, de conformidad con lo que establece el artículo 48 de la ley 135 de 1943, aplicada por analogía (Cfr. Sentencias de Pleno de 10 de julio de 1992, 5 de agosto de 1993, 18 de noviembre de 1993, 10 de diciembre de 1993, 14 de marzo de 1994, 14 de octubre de 1994 y 26 de julio de 1996).

El artículo 48 de la Ley 135 de 1943 es del siguiente tenor:

> "ARTÍCULO 48. Si se trata de un acto, orden o disposición de que no hay constancia escrita por haberlo dictado verbalmente la autoridad respectiva el interesado o perjudicado deberá presentar en abono de la demanda dos testimonios hábiles por lo menos".

Si bien ésta es la posición constante de esta Corporación de Justicia, para el caso concreto in examine estima el Pleno que la copia debidamente autenticada

del acta de audiencia, celebrada el 27 de septiembre de 1996, constituye una prueba idónea del acto considerado como arbitrario por la supuesta conculcación de los derechos fundamentales de la amparista. Ante el vacío normativo existente en la legislación procesal constitucional sobre amparo, concretamente en materia probatoria, considera la Corte que nada impide que, de conformidad con las normas del Libro II del Código Judicial sobre pruebas, un acta de audiencia, en tanto que documento público (a. 821, C. J.), sirva como medio probatorio eficaz para la comprobación de la existencia de una **orden verbal** que se considere lesiva de derechos constitucionales.

A juicio de la Corte, en esta causa resulta difícil aportar dos testimonios hábiles para dar cumplimiento al mandato de la norma transcrita. Ello es así toda vez que el apoderado judicial de la amparista debería utilizar como testigos de la actuación que impugna al abogado de la contraparte y a los funcionarios del propio tribunal demandado, circunstancia que plantea la práctica imposibilidad de dar cumplimiento de la exigencia en cuestión.

Por las consideraciones expuestas, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la resolución de 11 de octubre de 1996, proferida por el Primer Tribunal Superior y, en su lugar, ORDENA QUE SE ADMITA la demanda de amparo de derechos fundamentales presentada por la firma forense Boutin Law Firm.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO FRANCISCO FANOL FLORES VILLA, EN REPRESENTACIÓN DE FELICIA RIVERA DE ARAOLAZA, CONTRA EL REGLAMENTO GENERAL DE ELECCIÓN DEL DECANO Y VICE DECANOS DE LAS FACULTADES, DIRECTORES DE INSTITUTOS TECNOLÓGICOS REGIONALES Y DIRECTORES DE LOS CENTROS UNIVERSITARIOS, EMITIDO POR EL GRAN JURADO DE ELECCIONES DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO

VISTOS:

El Licenciado Francisco Fanol Flores Villa, actuando en nombre y representación de FELICIA RIVERA DE ARAOLAZA, ha presentado demanda de amparo de garantías constitucionales contra algunos artículos del Reglamento General de Elección del Decano y Vice Decanos de las Facultades, Directores de Institutos Tecnológicos Regionales y Directores de los Centros Universitarios, emitido por el Gran Jurado de Elecciones de la Universidad Tecnológica.

El Pleno de esta Corporación observa que la demanda adolece de varios defectos que la hacen inadmisible. En primer lugar, se trata de un reglamento, acto administrativo de carácter general e impersonal, que no admite demanda de amparo pues no es una orden concreta librada contra una persona que pueda lesionar los derechos fundamentales de ella. Se aprecia también que la parte demandante, omite hacer mención expresa de la orden impugnada, pues se refiere de manera indeterminada a "algunos artículos del Reglamento General de Elección de Decano y Vice Decanos de las Facultades, Directores de Institutos Tecnológicos Regionales y Directores de los Centros Regionales Universitarios"; por otro lado tampoco se menciona el nombre del servidor público, funcionario, instituciones o corporación que impartió la orden impugnada ni el concepto en que se estiman infringidas las garantías fundamentales que se alegan violadas, incumpliendo los

requisitos formales exigidos en los numerales 1, 3 y 4 del artículo 2610 del Código Judicial.

En segundo lugar, se observa que estamos ante un típico acto administrativo general que debe ser impugnado ante la jurisdicción contencioso administrativa que se encuentra radicada en la Sala Tercera de esta Corte Suprema de Justicia. Ha dicho el Pleno en múltiples ocasiones que los actos administrativos deben impugnarse, en la vía gubernativa en la cual existen remedios procesales eficaces y luego ante la citada jurisdicción contencioso administrativa, ya que ésta es la justicia especializada para el juzgamiento de estos actos. El proceso de amparo no es el medio para la impugnación de los actos administrativos de carácter general, como los reglamentos.

En consecuencia, el PLENO de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, N0 ADMITE la demanda de amparo de garantías constitucionales presentada por el Licenciado Francisco Fanol Flores Villa, actuando en nombre y representación de FELICIA RIVERA DE ARAOLAZA, contra el Reglamento General de Elección del Decano y Vice Decanos de las Facultades, Directores de Institutos Tecnológicos Regionales y Directores de los Centros Universitarios, emitido por el Gran Jurado de Elecciones de la Universidad Tecnológica.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE GALINDO, ARIAS Y LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA SEÑORA RITA IRENE TYPALDOS DE OZORES, CONTRA LA ORDEN DE HACER IMPARTIDA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO PÚBLICO, CONSISTENTE EN LA INSCRIPCIÓN DE LA ESCRITURA N° 7.522 DE LA NOTARIA PRIMERA DE CIRCUITO DE PANAMÁ EN LA SECCIÓN DE MICROPELÍCULAS MERCANTIL DE DICHO REGISTRO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma de abogados **Galindo Arias & López** presentó acción de amparo de garantías constitucionales contra la orden de hacer impartida por la Dirección General del Registro Público, consistente en la inscripción de la Escritura Pública N° 7522 de 21 de octubre de 1996, de la Notaría Primera del Circuito de Panamá, por la cual se protocoliza Acta Notarial de la Reunión Extraordinaria de la Asamblea de Accionistas de **PRISCO, S. A.**

Admitida la demanda de amparo se le solicitó a la autoridad demandada el envío de la actuación o en su defecto un informe acerca de los hechos materia de la acción de amparo, que contestó de la siguiente manera:

> "Me refiero a su Oficio # SGP-1746-96 de 1° de noviembre de 1996, con el cual se remite copia de la admisión de la acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesto por la Firma de Abogados Galindo, Arias y López en nombre y representación de la señora Rita Irene Typaldos de Ozores contra la orden de Hacer impartida por la Dirección General del Registro Público, consistente en la inscripción de la Escritura Pública # 7522 de la Notaría Primera del Circuito de Panamá en la Sección de Micropelículas Mercantil de

dicho Registro.

Mediante dicho oficio se nos solicita suspender todo el procedimiento y enviar el expediente o la parte respectiva del mismo a esa Corporación Judicial.

Al respecto, tengo a bien remitirle para su mayor referencia y a manera de informe, la relación de los hechos que motivaron la presente controversia.

En el caso en referencia se trata de la Escritura Pública # 7522 de 21 de octubre de 1996, de la Notaría Primera, por la cual se protocoliza acta Notarial de la reunión extraordinaria de la Asamblea de Accionistas de Prisco, S. A.

La referida Escritura Pública ingresó al Diario del Registro mediante Asiento 8941 del Tomo 250 del día 22 de octubre de 1996 a la 1:04 p. m. por Brígido Navarro.

La misma quedó registrada el día 24 de octubre de 1996 en la Sección de Micropelículas (Mercantil) del Registro Público a la Ficha 30239, Rollo 5763, Imagen 0105.

Cabe mencionar que para la calificación del contenido de la mencionada Escritura # 7522, la misma fue objeto de estudio con las constancias registrales de la Sociedad Prisco, S. A., que consta en la Ficha 30239.

Del estudio efectuado no resultó defecto alguno que impidiera la inscripción, por tal razón la misma fue inscrita atendiendo a lo establecido por el Artículo 1795 del Código Civil y del Artículo 47 y concordantes del Decreto 9 de 1920, Ley 32 de 1920.

Adjunto copia autenticada de la Escritura # 7522."

La firma de abogados Galindo Arias & López, en relacióncon los hechos que dan origen al presente amparo manifestaron lo siguiente:

"PRIMERO: PRISCO, S. A. es una sociedad anónima constituida mediante Escritura Pública N° 1666 de 31 de diciembre de 1971, de la Notaría Primera del Circuito Notarial de Panamá, e inscrita desde el 2 de febrero de 1992, al Tomo 850, folio 286, asiento 101.087 "A", de la Sección de Personas Mercantil del Registro Público.

SEGUNDO: Con anterioridad al 24 de octubre de 1996, fecha en que fue inscrita por órdenes de la Directora del Registro Público, la Escritura N° 7.522 de 21 de octubre de 1996, de la Notaría Primera del Circuito, la Junta Directiva y los Dignatarios de PRISCO, S. A. eran las siguientes personas:

Directora-Presidenta, Rita Irene Typaldos de Ozores Directora-Secretaria, María Cristina Ozores Typaldos, y Directora-Tesorera, María Ángeles Ozores de Ochy.

TERCERO: De conformidad con la cláusula tercera de su pacto constitutivo, el capital social autorizado de PRISCO, S. A. es de mil (1000) acciones comunes, al portador y sin valor nominal.

CUARTO: Nuestra representada RITA IRENE TYPALDOS DE OZORES es tenedora de las mil acciones emitidas al portador que PRISCO, S. A. emitió al portador, según consta en los certificados de acciones N° 1 por 600 acciones, y el N° 2 por 400 acciones, cuya copia autenticada se acompaña con esta demanda.

QUINTO: Nuestra representada conservaba dichos certificados de

acciones en una caja de seguridad abierta a su nombre en la Casa Matriz del PRIMER BANCO DE AHORROS, S. A. (PRIBANCO).

SEXTO: Los certificados de acciones que se detallan en los dos hechos anteriores, fueron objeto de una acción cautelar de conservación decretada por el Juzgado Segundo del Circuito del Primer Distrito Judicial de Panamá, Ramo Civil, (en adelante el JUEZ SEGUNDO), mediante Auto N° 578 de 25 de marzo de 1996.

SÉPTIMO: Según se dispone en el auto N° 578, la medida cautelar de conservación persigue el aseguramiento de los mismos, para que sean posteriormente inventariados dentro de los juicios de sucesión intestada de FÉLIX CARLOS DUQUE GÓMEZ y de CARMINA ADELA DUQUE GÓMEZ, cuya apertura fue decretada por el Juez Segundo, a petición de los señores TOMÁS GABRIEL ALTAMIRANO DUQUE, MARÍA ISABEL KODAT DE BAZÁN, ALEJANDRO DUQUE VILLARREAL, TOMÁS GERARDO DUQUE VILLARREAL, CARMEN LORENA DUQUE DE OROZCO Y DYANE ALICE DUQUE DE LÓPEZ, quienes alegan ser sus herederos ab intestato.

OCTAVO: En el auto N° 578, el Juez Segundo del Circuito dispuso, además el nombramiento, a petición de los solicitantes de la medida cautelar, de GUILLERMO MANFREDO BERNAL Y MARCO ANTONIO SAAVEDRA CATALA, como depositarios y administradores de los dos certificados de PRISCO, S. A., objeto de la medida de cautelación.

NOVENO: La medida cautelar de conservación se practicó el día 28 de marzo de 1996. Sin embargo, el depósito judicial de las acciones de PRISCO, S. A. no llegó a practicarse o perfeccionarse con la entrega de los dos certificados de acciones a los supuestos depositarios o administradores, Guillermo Manfredo y Marco Antonio Saavedra.

DÉCIMO: En efecto, se constituyó como depositario judicial, y responsable, por tanto, de la conservación de los referidos certificados de acciones de PRISCO, S. A., LA CASA MATRIZ DEL PRIMER BANCO DE AHORROS Y PRESTAMOS, S. A., tal como se desprende de los siguientes documentos que se acompañan con la demanda:

a) De la copia de la diligencia de avalúo y depósito de los certificados de acciones de PRISCO, practicada el 28 de marzo de 1996, por la Alguacil Ejecutora del Juzgado Segundo del Circuito, en la que se dispuso que los certificados fueran entregados en consignación y depósito, al Primer Banco de Ahorros y Préstamo, S. A., el cual, en atención a lo que prescribe el numeral 4 del artículo 526 del Código Judicial, quedó constituido desde ese momento en depositario judicial de los mismos;

b) La nota de la misma fecha (28 de marzo de 1996) que suscribieron la Alguacil Ejecutora y la Oficial de Valores de Pribanco, en la que hacen constar la consignación material en dicho banco de los Certificados de acciones de PRISCO, S. A.;

c) El oficio N° 621, de 29 de marzo de 1996 que el Señor Juez Segundo del Circuito de Panamá, le dirigió al Gerente del Primer Banco de Ahorros, S. A. (PRIBANCO), Casa Matriz, ratificándolo como depositario judicial de las acciones de PRISCO, S. A. y haciéndolo responsable de la conservación de los referidos certificados de acciones.

DÉCIMO PRIMERO: Por practicada en tales condiciones y circunstancias la medida cautelar de conservación sobre las acciones de PRISCO, S. A., los señores GUILLERMO MANFREDO Y MARCO ANTONIO SAAVEDRA CATALA, arrogándose una supuesta potestad de la que no están investidos los depositarios y administradores judiciales, le pidieron al señor Juez Segundo del Circuito de Panamá que ordenara la convocatoria judicial de una reunión extraordinaria de accionistas de PRISCO, S. A., peti-

ción que le fue negada por resolución N° 1979 de 12 de agosto de 1996.

DÉCIMO SEGUNDO: En abierto desafío a lo decidido por el Juez Segundo, los depositarios MANFREDO BERNAL Y SAAVEDRA CATALA, procedieron a solicitar a la Presidente de PRISCO, S. A. la convocatoria a una reunión extraordinaria accionistas de dicha sociedad, y en ausencia de la Señora Typaldos de Ozores, su Presidenta, la petición de convocatoria fue entregada a la Secretaria de la Junta Directiva, Señora María Cristina Ozores T., conforme el acta notarial levantada por el Notario Primero Circuito de Panamá, el 7 de octubre de 1996.

DÉCIMO TERCERO: Sin esperar siquiera a que la Junta Directiva de PRISCO, S. A. se pronunciara sobre la petición de convocatoria y, en consecuencia, sin que hubiere convocatoria válida, el día 18 de octubre de 1996, los presuntos depositarios, Marco A. Saavedra Catalá y Guillermo Manfredo Bernal, procedieron por propia iniciativa, y en presencia del Notario Primero del Circuito de Panamá, que dio fe del acto, a celebrar una supuesta Asamblea de Accionistas de dicha sociedad, alegando que en la misma estuvieron `debidamente representadas el 66.6% de la totalidad de las acciones de PRISCO, S. A. y que esta reunión había sido convocada debidamente , afirmaciones que no son ciertas, según se desprende de lo consignado en los hechos décimo a décimo tercero, anteriores, y de la documentación que se acompaña con esta demanda.

DÉCIMO CUARTO: En la referida reunión actuó como Presidente ad hoc Marco A. Saavedra Catalá y como Secretario Ad hoc Guillermo manfredo Bernal, el último de los cuales, alegando ser el Secretario de PRISCO, S. A., certificó que se encontraban debidamente representadas en la reunión el 66.6% de las acciones de PRISCO, S. A., lo cual es absolutamente falso.

DÉCIMO QUINTO: En la referida reunión, y con el voto de los señores Saavedra Catalá y Manfredo Bernal se adoptaron acuerdos sociales varios, cuyo evidente propósito es únicamente justificar el nombramiento de nuevos directores y dignatarios de PRISCO, S. A., (asunto que ni siquiera estaba incluido en el orden del día) por personas que ni son accionistas ni pueden arrogarse la representación de éstos.

DÉCIMO SEXTO: En efecto, en la supuesta reunión extraordinaria de accionistas de PRISCO, S. A., celebrada el 18 de marzo de 1996 por personas totalmente ajenas a la sociedad, se dispuso destituir a los Directores y Dignatarios inscritos y designar en su reemplazo a las siguientes personas:

ALEJANDRO DUQUE VILLARREAL ... DIRECTOR Y PRESIDENTE
GABRIELA ALTAMIRANO DUQUE ... DIRECTOR Y SECRETARIA
TOMÁS GABRIEL ALTAMIRANO DUQUE ... DIRECTOR Y TESORERO Y
SANTIAGO ERNESTO DUQUE ZERR ... DIRECTOR Y VICE TESORERO.

DÉCIMO SÉPTIMO: La supuesta reunión extraordinaria de accionistas de PRISCO, S. A. celebrada el 18 de marzo (sic) de 1996, pese a todas las omisiones y violaciones legales que se relatan en los hechos anteriores, fue protocolizada mediante Escritura Pública N° 7.522 de 21 de octubre de 1996 de la Notaría Primera del Circuito de Panamá.

DÉCIMO OCTAVO: La más somera lectura de la Escritura 7.255 le habría bastado a la Directora del Registro Público para constatar que en ella se omitió un documento que es esencial para acreditar si MANFREDO Y SAAVEDRA CATALA eran efectivamente los depositarios de las acciones de PRISCO, S. A. al momento de celebrar la Asamblea de Accionistas de ésta última. Nos referimos a la copia de la

diligencia judicial que acredita que el depósito judicial decretado por el Juez Segundo del Circuito se perfeccionó con la entrega de los bienes depositados al o los depositarios, que en este caso debieron ser los Señores MANFREDO y SAAVEDRA CATALA, para que la diligencia fuera consecuente con lo que estos señores hicieron constar en la referida Escritura.

DÉCIMO NOVENO: La aludida Escritura N° 7.522 fue presentada para su inscripción en la Sección de Micropelículas del Registro Público el 22 de octubre de 1996, bajo el asiento 8941 del Tomo 250 del Diario.

VIGÉSIMO: Contrariando las más elementales reglas que informan el proceso de calificación a que por ministerio de la ley debe someterse una Escritura Pública para garantizar la legalidad de los actos en ella consignados, la señora DIRECTORA DEL REGISTRO PÚBLICO ordenó la inscripción de la Escritura N° 7.522, quedando la misma registrada a partir del día 24 de octubre de 1996."

En cuanto a la violación de las disposiciones constitucionales y el concepto de la infracción, la firma demandante en esta acción de amparo los expuso de la siguiente manera:

"La orden impugnada violó el artículo 32 de la Constitución Nacional, que establece lo siguiente:

`Artículo 32. Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria.

En incontables precedentes el Pleno de la Corte ha establecido que el principio del debido proceso que consagra el artículo 32 de la Constitución Nacional, contempla tres concatenadas garantías: (a) la de que nadie será juzgado sino por autoridad competente, (b) la de que el juzgamiento ha de ser conforme a los trámites legales; y (c) la de que nadie será juzgado más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria. También ha quedado claro que si bien en sus inicios la garantía del debido proceso era reconocida únicamente dentro del ámbito penal, a partir de la década del setenta se ha extendido a los procesos civiles, laborales, etc., hasta culminar con el criterio que actualmente prevalece, que lo hace extensivo a los procedimientos o trámites administrativos, tal como se desprende de las sentencias proferidas el 24 de junio de 1992, referente a una orden dictada por el Ministerio de Educación, y, más recientemente, el 23 de febrero de 1994, relativa a una orden dictada por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Con relación a la garantía del debido proceso, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en sentencia de 12 de mayo de 1995, se ha pronunciado así:

`El debido proceso, entendido como un complejo de derechos de naturaleza procesal con rango constitucional comprende, entre otras cosas, el derecho que tiene el individuo a ser oído, a recibir traslado de la demanda, a la competencia ante tribunal competente predeterminado por la ley, independiente e imparcial. Comprenden también la contradicción y la bilateralidad, con lo que se brinda a cada parte la oportunidad de manifestarse sobre las pretensiones de la contraria.

Entre sus garantías figuran el derecho de aportar pruebas y contrapruebas lícitas que guarden relación con el objeto del proceso, de objetar el caudal probatorio de la contraparte y las pruebas aportadas de oficio por el tribunal, como también la facultad de hacer uso de los medios de impugnación o recursos reconocidos por la ley, tanto ordinarios como extraordinarios, contra las resoluciones

jurisdiccionales.

Como es bien sabido, las acciones expedidas por una sociedad anónima le confieren a su titular un cúmulo de derechos subjetivos, de los cuales el accionista no puede ser privado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales. En eso consiste la garantía del debido proceso contenida en el artículo 32 de la Constitución.

Entre los múltiples derechos subjetivos que la ley le atribuye al accionista, figuran los siguientes:

1. El derecho de voto (véase artículo 45 de la Ley 32 de 1927).

2. El derecho a pedir la convocatoria judicial de la Junta General de Accionistas (véase artículo 420 del Código de Comercio, cuya vigencia fue restablecida mediante el artículo 1 de la Ley 9 de 1946, modificado por el artículo 39 del Decreto de Gabinete N° 247 de 1970).

3. El derecho a pedir que la Junta Directiva o las personas debidamente facultadas para ello por la ley, el pacto social o los estatutos convoquen extrajudicialmente a la Junta General de Accionistas (véase la norma mencionada en el numeral anterior).

Consta en autos que los señores Saavedra y Manfredo, sin ser accionistas de PRISCO, S. A., intentaron infructuosamente ejercer el citado derecho de convocar judicialmente a la Junta General de Accionistas de PRISCO, S. A. (véase la resolución judicial que se adjunta). El Juez Segundo del Circuito de Panamá, como queda dicho, les negó dicha convocatoria y los señores Saavedra y Manfredo no recurrieron contra dicha decisión, allanándose así a la misma. Fracasada su improcedente gestión judicial, los señores Saavedra y Manfredo, como si fueran accionistas de la sociedad, le solicitaron a la Presidenta de PRISCO, S. A. que la Junta Directiva de la sociedad convocara extrajudicialmente a una sesión de la Junta General de Accionistas (véase la copia de la Escritura Pública N° 7.522 que milita en autos). Sin esperar siquiera a que la Junta Directiva de PRISCO, S. A. se pronunciara sobre el particular, los señores Saavedra y Manfredo procedieron a reunirse, por sí y ante sí, como si ellos representaran a la totalidad de los accionistas de PRISCO, S. A. y tomaron diversas decisiones, entre ellas la de nombrar nuevos directores y dignatarios de la sociedad, tema que ni siquiera estaba previsto en la convocatoria espuria efectuada por ellos mismos, tal como se desprende de la referida escritura pública, de la que, por pertinente, transcribimos el siguiente párrafo:

`... A continuación se da lectura al siguiente punto del día. Lo que propongan los señores accionistas. El Presidente de la reunión propone que para mejor salvaguardar y defender los intereses de la sociedad es preciso que los miembros de la actual Junta Directiva y los dignatarios de la sociedad sean sustituidos en su totalidad. Con lo que a moción debidamente presentada y sustentada, se aprobó por unanimidad nombrar como nuevos directores y dignatarios de la sociedad a las siguientes personas:

ALEJANDRO DUQUE VILLARREAL -DIRECTOR Y PRESIDENTE
GABRIELA ALTAMIRANO DUQUE -DIRECTORA Y SECRETARIA
TOMÁS GABRIEL ALTAMIRANO DUQUE -DIRECTOR Y TESORERO
SANTIAGO ERNESTO DUQUE ZERR -DIRECTOR Y VICE TESORERO

Los cuales tomarán posesión y sus nombramientos serán efectivos inmediatamente al finalizar la presente reunión.

La escritura de que se viene haciendo mérito fue presentada para su

inscripción en el Registro Público y el registrador general dio la inopinable orden de que la misma se inscribiera. Al proceder así, el registrador, entre otras arbitrariedades, ha privado a los tenedores de las acciones objeto de la medida cautelar antes mencionada del derecho de voto sobre las mismas y, lo que es aún más grave, les ha transferido dicho derecho a unos señores que, aparte de no tener la calidad de accionistas de PRISCO, S. A., ni siquiera son depositarios judiciales de tales acciones, ya que, como queda explicado, el verdadero depositario de las referidas acciones es Pribanco. Para advertir esta omisión a la Registradora le habría bastado observar que en la Escritura N° 7.255 no consta la diligencia de depósito de las acciones de PRISCO, S. A., diligencia que era esencial para que la Directora pudiera determinar si se constituyó o no el depósito judicial que alegan MANFREDO BERNAL y SAAVEDRA CATALA, para tratar de justificar su forzada intromisión en una sociedad anónima en la que son totalmente extraños, por no ser ni accionistas, ni Directores ni Dignatarios. Y no se diga que no ha sido el registrador quien ha privado del derecho de voto a los tenedores de las acciones de PRISCO, S. A. que han sido cauteladas y quien, además, ha transferido el ejercicio de dicho derecho de voto a los señores Saavedra y Manfredo, ya que es evidente que la premisa sobre la cual descansa la arbitraria orden del registrador de inscribir en el Registro la escritura no puede ser otra que la de que el derecho de voto de las acciones cautelares corresponde a los señores Saavedra y Manfredo. Ello es que, en ausencia de tal premisa, el registrador no habría podido ordenar la inscripción de la escritura.

Y todo ello lo ha hecho el registrador con la circunstancia agravante de que no hay en nuestro ordenamiento jurídico ninguna disposición en la que el registrador pueda apoyar su infundada decisión de reconocer el derecho de voto sobre unas acciones a quien no es accionista de la sociedad emisora de tales acciones.

La decisión del registrador de privar a los accionistas de una sociedad del derecho de voto que les corresponde y de transferirle dicho derecho a un tercero, so pretexto de que esas acciones han sido objeto de una medida cautelar dictada dentro de un proceso no contencioso de apertura de un juicio de sucesión, es tan jurídicamente inaceptable y absurda como lo sería, por ejemplo, pretender que el secuestre de un bien inmueble está facultado para entregarle la administración y el control de ese bien inmueble a nadie menos que a la contraparte en el juicio dentro del que se ha decretado el secuestro. Eso es precisamente lo que ha ocurrido en el caso subjudice, puesto que Saavedra y Manfredo, al arrogarse el derecho de convocar, por sí y ante sí, sin ser accionistas, a una Junta General de Accionistas de PRISCO, S. A. y al ejercer en esa Junta el voto que sólo corresponde a los accionistas de dicha sociedad, calidad que ellos no ostentan, han procedido, sin que el asunto estuviera siquiera previsto en el orden del día, a nombrar como nuevos directores y dignatarios de la sociedad a personas que pretenden ser herederos de los hipotéticos dueños, ya fallecidos, de las acciones objeto de la medida cautelar, acciones que, emitidas al portador, se encontraban en una caja de seguridad abierta a nombre de la señora Rita Typaldos de Ozores en la entidad bancaria denominada Pribanco, la cual, sobre la base de lo que dispone el artículo 526, numeral 4, del Código Judicial, quedó constituida en depositaria de las acciones por orden del Juez Segundo del Circuito de Panamá, Ramo de lo Civil.

Con semejantes nombramientos, los señores Saavedra y Manfredo le han entregado a las personas ilícitamente nombradas como directores y dignatarios de PRISCO, S. A. el control absoluto y la dirección plena de los negocios de la sociedad, según se sigue del artículo 50 de la Ley 32 de 1927.

Lo anteriormente expuesto revela, pues, que el principio constitucional del debido proceso contenido en el artículo 32 de la Constitución Nacional fue violado en forma directa y flagrante por la orden impartida que se impugna en esta demanda.

B. SE VIOLÓ EL ARTÍCULO 44 DE LA CONSTITUCIÓN QUE ESTABLECE:

`Se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la Ley por personas jurídicas o naturales.
Acerca del alcance y significado de este artículo, el profesor Dr. César Quintero, al analizar la primera parte del artículo 45 de la Constitución de 1946, idéntica al artículo 44 de la Constitución vigente, hace los siguientes señalamientos:

`El tema que tratamos en esta Sección como un derecho más del individuo en función privada, transciende con mucho su supuesto carácter de simple derecho individual. En verdad, se trata de las normas jurídicas referentes a la base sobre la cual descansa la estructura económica del Estado panameño.

Los artículos 45, 46, 47, 48, 49 y 50 de la Constitución consagran la propiedad privada en su más amplia expresión, esto es, en todos sus modos y manifestaciones. (véase Derecho Constitucional, tomo I, 1967, pág. 175).
...
Volviendo al artículo 45 de nuestra Constitución, cuya primera parte examinamos, es evidente que dicha parte sienta la base jurídica de un sistema capitalista, toda vez que garantiza plenamente la propiedad privada, sin excluir ninguno de sus modos o formas. (op. cit. supra, pág. 187).

En distintas ocasiones, sobre la base de lo que dispone el artículo 44 de la Constitución, la Corte Suprema ha declarado la inconstitucionalidad de leyes o de actos jurídicos individuales que resultan violatorios del derecho a la propiedad privada establecido en la referida norma. Tal es, por ejemplo, el caso de la sentencia del Pleno de 29 de mayo de 1996, en la que se declaró inconstitucional el artículo 105 del Código de Familia por infringir el artículo 44 de la Constitución. Asimismo, en sentencia del Pleno de 20 de agosto de 1985 se declaró inconstitucional una medida cautelar de secuestro atacada mediante recurso de amparo, por estimar la Corte que dicha medida desconoció, entre otros, el artículo 44 de la Constitución.

En virtud de la norma que nos ocupa, el propietario de un bien, ya sea mueble o inmueble, tiene derecho a su uso y disfrute, así como al de que tal derecho le sea respetado, sin que dicho propietario pueda ser privado del mismo sino a través de procedimientos legales que cumplan la garantía del debido proceso.

Ahora bien, en el caso subjudice, como se ha visto, la orden del registrador general mediante la cual se ordena la inscripción de la Escritura Pública N° 7.255 en el Registro Público es ostensiblemente violatoria del artículo 44 de la Constitución en la medida en que se priva al accionista de una sociedad anónima del derecho de ejercer el voto que corresponde a las acciones emitidas por ésta y, por añadidura, se le confiere dicho derecho a una tercera persona, sin que haya mediado procedimiento legal alguno que autorice al registrador general para justificar semejante decisión.

En consecuencia, el artículo 44 de la Constitución Nacional resultó también violado, en forma directa por la orden que se impugna.

C. SE VIOLÓ EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN QUE ESTABLECE:

`Las autoridades de la República están instituidas para proteger en

su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley.

Si bien es cierto que la Corte Suprema, en muchas ocasiones, ha dicho que la norma transcrita es de carácter programático y que, por lo mismo, no puede ser invocada, por sí sola, para sustentar una demanda de amparo o de inconstitucionalidad, no es menos cierto que la Corte también ha dicho que cuando la infracción del precepto transcrito se da junto con la de otras disposiciones constitucionales, como ocurre en el caso subjúdice, esta norma sí puede servir de sustentáculo a un pronunciamiento de inconstitucionalidad del acto impugnado.

A mayor abundamiento, cabe mencionar que de distintos pronunciamientos de la Corte surge con nitidez la doctrina jurisprudencial de que cuando una autoridad pública, al dictar un acto individual, transgrede de manera ostensible las normas legales pertinentes, no sólo viola dichas normas, sino que, además, infringe el artículo 17 de la constitución, lo cual es tanto como decir que la violación de las normas legales queda de esta suerte elevada a la categoría de cuestión constitucional, atacable por la vía del recurso de amparo. En este sentido pueden consultarse las dos sentencias que, a título de ejemplo, mencionamos a continuación, en las cuales la Corte ha declarado la inconstitucionalidad de actos individuales dictados en contravención flagrante de determinados preceptos legales, a saber:

a. El fallo de 4 de agosto de 1978, en virtud del cual el Pleno de la Corte declaró la inconstitucionalidad de la sentencia de 3 de mayo de 1978, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo en el juicio laboral seguido por Adima Damaris González contra la Farmacia Parque Lefevre, en atención al hecho de que dicha sentencia fue dictada en contravención evidente de normas contenidas en el Código de Trabajo.

b. El fallo de 27 de febrero de 1980, en virtud del cual el Pleno de la Corte declaró la inconstitucionalidad de una resolución dictada por el Tribunal Superior de Trabajo, en consideración al hecho de que dicha sentencia fue dictada con infracción manifiesta de distintas disposiciones del Código de Trabajo.

Como hemos visto, al ordenar el registrador general, en ejercicio de su función calificadora, la inscripción de la Escritura Pública N° 7.522 incurrió en actos ostensiblemente ilegales en la medida en que dispuso que es inscribible en el Registro Público un acta de una hipotética Junta General de Accionistas celebrada en circunstancias en que:

1. La Junta no fue debidamente convocada.

2. En la Junta participaron y votaron personas que no tienen el carácter de accionistas de la sociedad.

3. En la Junta se acordó cambiar los directores y dignatarios inscritos de la sociedad, pese a que el asunto no estaba ni siquiera previsto en el orden del día.

4. Además, a la escritura no se acompañó prueba que acreditara que la constitución del depósito judicial de las acciones de PRISCO, S. A. se perfeccionó con la entrega a MANFREDO y SAAVEDRA CATALA de las acciones de PRISCO, S. A. que dicen representar.

Al proceder de esta manera, el registrador general infringió, a ojos vista, el principio de legalidad que rige en el sistema registral panameño, según se sigue del artículo 1795 del Código Civil y de los

artículos 46 y siguientes del Decreto N° 9 de 1920 (véase la obra `El Registro Público en Panamá , publicada por el Centro de Investigación Jurídica de la Universidad de Panamá, 1985, pág. 9).

Cualquiera de las irregularidades mencionadas era más que suficiente para que el registrador denegara la inscripción del acta. Al no hacerlo así, el registrador infringió su obligación de proteger los derechos subjetivos de la recurrente, obligación que le impone el artículo 17 de la Constitución."

MOTIVACIONES DE LA CORTE

El presente proceso de amparo tiene su origen en una reunión extraordinaria de accionistas celebrada por los señores Marcos A. Saavedra Catalá y Guillermo Manfredo Bernal, designados como depositarios y administradores de los bienes a inventariar de la sucesión intestada de Félix Carlos Duque Gómez (Q. E. P. D.) y Carmina Adela Duque Gómez (Q. E. P. D.), por el Juez Segundo del Circuito de Panamá, mediante la cual protocolizaron el acta resultante de dicha reunión, en que cambiaron la Junta Directiva de la Sociedad Prisco, S. A. y la inscribieron en el Registro Público.

Del contenido del expediente se desprenden los siguientes hechos:

Primero: Que los señores depositarios y administradores de los bienes de la sucesión mencionada solicitaron al Juez Segundo del Circuito de Panamá, una autorización para la convocatoria de una junta general de accionistas de la Sociedad Prisco, S. A.

Que el Juez Segundo del Circuito resolvió el 12 de agosto de 1996 la solicitud anterior de la siguiente manera:

"El Artículo 1610 del Código Judicial, señala lo siguiente:

`Artículo 1610. Los administradores de herencia tendrán las facultades que la ley concede a los albacea.

Si ello es así, veamos entonces cuáles son las facultades de los albacea de conformidad con el Código Civil, que señala estas funciones en su Artículo 864, cuyo tenor es el siguiente:

`Artículo 864. No habiendo el testador determinado expresamente las facultades de los albacea, tendrán las siguientes:

1. disponer y pagar el funeral del testador con arreglo a lo dispuesto por él en el testamento; y, en su defecto, según la costumbre del lugar;

2. satisfacer los legados con conocimiento de los interesados y autorización judicial;

3. vigilar sobre la ejecución de todo lo demás ordenado en el testamento, y sostener, siendo justo, su validez en juicio y fuera de él; y

4. tomar las precauciones necesarias para la conservación y custodia de los bienes, con intervención de los herederos presentes.

Claramente, se desprende de la norma, que entre sus funciones no se encuentra la de poder solicitar la convocatoria de la Junta General de Accionistas de una sociedad anónima, por lo que la petición que se nos formula, es a todas luces improcedente y así debemos resolver.

Por lo expuesto, el que suscribe, **JUEZ SEGUNDO DE CIRCUITO DE LO CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL**, administrando justicia en nombre

de la República y por autoridad de la Ley;

RESUELVE:

Primero: RECHAZAR DE PLANO la petición formulada por los Depositarios Administradores de las acciones de PRISCO, S. A., por improcedente.

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 864 del Código Civil; Artículo 1610 del Código Judicial de la República de Panamá."

Segundo: El 7 de octubre de 1996, los depositarios Guillermo Manfredo Bernal y Marco Antonio Saavedra Catalá, luego de la negativa judicial anterior, con la presencia del Notario Primero del Circuito de Panamá, mediante acta notarial de la fecha indicada, procedieron a notificar la convocatoria a una Asamblea General de Accionistas, a la señora Rita Irene T. de Ozores, quien no se encontraba en el país y entregaron una carta a la Señora María Cristina Ozores Typaldo Secretaria de la Sociedad Prisco, S. A. con la misma fecha 7 de octubre de 1996, que decía lo siguiente:

"7 de octubre de 1996.

Señora Rita Irene T. de Ozores.
Presidenta de Prisco, S. A.
Ciudad

Estimada Señora Presidenta: En nuestra condición de Depositarios Administradores de las dos terceras (2\3) partes de las acciones de la sociedad PRISCO, S. A., designados por el Juzgado Segundo del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, tal como es de su conocimiento por haber intervenido en la respectiva diligencia de entrega en las oficinas de PRIBANCO, solicitamos formalmente por su conducto a la Junta Directiva de la Sociedad, que convoque a una sesión de la Junta General de Accionistas de la sociedad, que debe realizarse de acuerdo a lo estipulado en la Cláusula Quinta del pacto social el día viernes 18 de octubre de 1996 a las 10:00 a. m. en la Calle Beatriz M. de Cabal, Edificio El Banco Aliado, Piso N° 8, de la Ciudad de Panamá. Los puntos a tratar serían los siguientes: 1. Situación financiera de PRISCO, S. A.; 2. Nombramiento de revisores para analizar la gestión social; 3. Procesos en que es parte PRISCO, S. A.; y 4. Lo que propongan los señores accionistas. Como quiera que representamos el 66.6% de la totalidad de las acciones y, según Ud. ha manifestado, tiene a su cargo la custodia de las acciones restantes, por este medio quedan notificadas las personas que representan la totalidad de las acciones de la sociedad. Igualmente, se le comunica que de acuerdo a lo establecido por la Ley, de no comparecer usted personalmente, la reunión de accionistas podrá celebrarse validamente presidida por otro miembro de la Junta Directiva o por un miembro Ad-Hoc nombrado por la mayoría de los accionistas presentes en la reunión convocada en debida forma."

Tercero: Los señores Marcos A. Saavedra Catalá y Guillermo Manfredo Bernal concurrieron ante el Notario Primero del Circuito de Panamá a protocolizar el acta de una reunión de la Sociedad Prisco, S. A., del 18 de octubre de 1996, de la cual quedó constancia en la Escritura Pública N° 7522 del 21 de octubre de 1996, reunión en la cual, entre otras cosas, decidieron, como depositarios y administradores del 66.6% de las acciones de Prisco, S. A. cambiar la Junta Directiva de la Sociedad Prisco, S. A. reemplazando a la señora Rita Irene Typaldo de Ozores como Presidenta de dicha sociedad, María Ángeles O. de Ochy, como Tesorera y a María Cristina Ozores Typaldo como Secretaria, y en su lugar designaron a AlejandroDuque Villarreal Director Presidente, Gabriela Altamirano Duque, Directora Secretaria, Tomás Gabriel Altamirano Duque, Director Tesorero y Santiago Ernesto Duque Zerr, Director y Vice Tesorero, todo esto en ausencia de los titulares que componían la Junta Directiva de la Sociedad. Esta escritura se inscribió en el Registro Público el día 24 de octubre de 1996, que es

precisamente, la orden impugnada por la presente acción de amparo.

Cuarto: Mediante auto 611 del 29 de marzo de 1996, a solicitud de la parte actora en el juicio de sucesión citado ya en esta acción de amparo, el Juez Segundo del Circuito de Panamá, Ramo Civil, ordenó "oficiar a las sociedades o empresas en donde Prisco, S. A. posea acciones para que se abstengan de realizar cualquier transacción, negocio, novación, transformación, operación, acto de disposición o enajenación que se relacione con la Sociedad Prisco, S. A.," así como señalar que los depositarios administradores de las referidas acciones son los señores Guillermo Manfredo y Marco Antonio Saavedra Catalá.

De los hechos expuestos y la lectura del expediente se puede apreciar que la señora Rita Irene Tipaldo de Ozores sostiene ser la tenedora de 1000 acciones al portador de la empresa Prisco, S. A. y los herederos ab-intestato de los señores Félix Carlos Duque Gómez (q. e. p. d.) y Carmina Adela Duque Gómez (q. e. p. d.) que los causantes eran los propietarios de las acciones al portador que tiene la señora Rita Irene Tipaldo de Ozores, razón por la cual pidieron la medida cautelar de conservación y protección y obtuvieron del Juez, con base en el artículo 558 del Código Judicial. Que las mencionadas acciones al portador se encuentran desde el 28 de marzo de 1996 por disposición del Tribunal con base en el artículo 526 N° 4 del Código Judicial, bajo la custodia del Primer Banco de Ahorros y Préstamo, S. A.

El mencionado marco de referencia nos permite ahora analizar la situación jurídica constitucional planteada en el amparo.

En primer lugar considera la Corte Suprema, que por regla general, no puede en una acción de amparo, entrar a considerar las razones que motivaron al Director General del Registro Público, en el proceso de calificación de una escritura pública, a determinar si ordenaba, rechazaba o suspendía una inscripción. Esto la Corte lo ha sostenido en innumerables ocasiones tratándose de los jueces, en cuanto a su apreciación sobre la solución jurídica del caso bajo examen de su Tribunal, considerando que la Corte, en el amparo, no es una tercera instancia.

Sin embargo, el presente caso es una excepción. El Director del Registro estaba frente a una escritura en la que los que aparecían como representantes de los accionistas eran depositarios y administradores judiciales, según la copia del auto 578 de 25 de marzo de 1996, que se transcribe en la Escritura Pública N° 7522, de 21 de octubre de 1996, de la Notaría Primera del Circuito de Panamá.

Estima la Corte que para la correcta calificación formal de la mencionada Escritura, era necesario, con base en el artículo 47 del Decreto 9 de 1920 y en vista de que no eran los propios accionistas ni la Junta Directiva inscrita la que participaba en la protocolización de la escritura, era imprescindible un mínimo grado de prudencia, en el sentido de solicitar al Juez, el expediente donde constaba el juicio de sucesión, para hacer las verificaciones de rigor legal. Si así lo hubiera hecho, se habría percatado que se estaba pasando por encima de una resolución judicial que había negado la pretensión de realizar la reunión general de accionistas; que se había dictado una resolución suspendiendo las operaciones en relación con dichas acciones a la señora Rita Irene Tipaldo de Ozores y como consecuencia lógica no era posible que los administradores judiciales, pudieran realizar operaciones con las acciones, como son nada menos que cambiar la Junta Directiva de una sociedad anónima que es la que dirige los negocios de la sociedad y cambiarla para que se sustituyera la dirección y operación de la Empresa. Que si las acciones eran al portador, el título o posesión en exhibición, es el derecho que permite ejercitar sus beneficios y que dichas acciones se encontraban en custodia del Primer Banco de Ahorros y Préstamo, S. A. El artículo 47 citado del Decreto 9 de 1920, dice así:

> "Artículo 47. El Registrador suspenderá la inscripción de documentos que contengan actos o contratos nulos o **que carezcan de alguna de las formalidades extrínsecas que las leyes exigen**, o de algunos de los requisitos que debe contener el asiento y ordenará la inscripción de los demás.

> La comparación corresponde a los Jefes de Sección y la apreciación de derecho al Registrador General. Verificada ésta, entregará todos los documentos bajo constancia a los Jefes de Sección respectivos, con indicación de cuales son para inscribir, previo cotejo, en su caso, y cuales para confrontar simplemente por haber obtenido calificación desfavorable." (Subrayado es nuestro).

No existe la menor duda de que esta escritura N° 7522 carecía de las formalidades extrínsecas que las leyes exigen y debió suspenderse su inscripción, que desobedecía una orden judicial, que permitía el uso de acciones que estaban en una medida de conservación y protección y que administradores de accionistas al portador sin exhibición del título, ejercieran derechos sobre acciones en custodia en un Banco local, violándose el debido proceso de calificación, por lo que se acepta el cargo de infracción del artículo 32 de la Constitución Nacional.

Por lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONCEDE el amparo contra la orden de inscripción del Director General del Registro Público de la Escritura Pública N° 7522 de 21 de octubre de 1996 de la Notaría Primera del Circuito de Panamá y en consecuencia REVOCA la mencionada inscripción.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR LIC. JOSÉ LEZCANO EN FAVOR DE RAQUEL MARÍA LEGENDRE DE MORENO VS JUEZ QUINTO DEL CIRCUITO DE CHIRIQUÍ. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ingresó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el licenciado **José Lezcano** en representación de **RAQUEL MARÍA LEGENDRE DE MORENO**, contra la orden de hacer contenida en el auto N° 1145 de 5 de julio de 1996 (fs. 10-11), dictada por el Juez Quinto del Circuito de Chiriquí, Ramo Civil.

Mediante resolución de 23 de septiembre de 1996 (fs. 31 a 34), el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial no admitió la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el licenciado **José M. Lezcano** en favor de **RAQUEL MARÍA LEGENDRE DE MORENO**, contra la Juez Quinta del Circuito de Chiriquí, por no haberse demostrado el "... agotamiento de todos los medios disponibles para la impugnación de la resolución judicial acusada ..." (f. 34).

Observa la Corte que la orden de hacer cuya revocación se pretende, se desprende del auto N° 1145 de 5 de julio de 1996 (fs. 10-11), dictado por el Juzgado Quinto del Circuito de Chiriquí, Ramo Civil, mediante el cual se rechaza la petición hecha por el apoderado de la señora **RAQUEL MARÍA LEGENDRE DE MORENO**, en el sentido de que se ordene la devolución de la suma depositada por ella con motivo de la sustitución del secuestro decretada mediante auto N° 66 de 29 de enero de 1992, descontando de la misma lo que adeuda en concepto de costas y gastos judiciales. Y, en consecuencia, la orden de hacer atacada obliga a **RAQUEL MARÍA LEGENDRE DE MORENO** a cancelar a CLÍNICA HOSPITAL DAVID, S. A. la suma total adeudada por VIELKA MORENO, de acuerdo a sentencia de 23 de mayo de 1996, dictada

por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial.

En el libelo de la demanda (fs. 2 a 5), conforme con lo establecido por el artículo 2610 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 654 del mismo Código, se detalla en forma expresa la orden impugnada, se establece el nombre del servidor público que la impartió -Juez Quinto del Circuito de Chiriquí, Ramo Civil-, se enumeran los hechos en que se funda la pretensión, se explican las garantías fundamentales violadas (Art. 32 de la Constitución Nacional) y el concepto en que lo han sido (violación directa por omisión). Además, con la demanda se acompañó la prueba de la orden impartida, es decir, copia debidamente autenticada del Auto N° 1145 de 5 de julio de 1996 (fs. 10 a 11), dictado por el Juez Quinto del Circuito de Chiriquí, Ramo Civil; y copias autenticadas del Auto N° 1400 de 16 de agosto de 1996 (fs. 12 a 13), dictado por el Juez Quinto del Circuito de Chiriquí, Ramo Civil; de la sentencia civil de 23 de mayo de 1996 (fs. 14 a 22), dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito; y, de otras piezas procesales de importancia.

Ahora bien, para determinar la admisibilidad de la demanda de amparo de garantías constitucionales, la misma ha de atenerse a los requisitos consignados en el artículo 2606 del Código Judicial, y siendo que la orden impugnada reviste la naturaleza de una resolución judicial; cabe señalar que la acción de amparo procede contra resoluciones judiciales siempre y cuando se cumpla con las condiciones particulares enumeradas en el artículo 2606 del Código Judicial, cuyo ordinal 2° establece que "Sólo procederá la acción de amparo cuando se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate.". Lo anterior significa que para abrir las puertas a la proposición de un amparo, previamente han debido agotarse todos los recursos y trámites establecidos en la ley para impugnar la resolución judicial respectiva, es decir, que se haya hecho uso adecuado de los medios de impugnación idóneos previstos por el ordenamiento jurídico para atacar la resolución judicial de que se trate.

Desde este punto de vista, no es cualquiera gestión de parte la que hace que uno de los presupuestos de la acción de amparo quede constituido (numeral 2 del Art. 2606 del Código Judicial), sino que es conditio sine qua non que el amparista haya ejercitado previamente los medios adecuados de impugnación, para que se entienda agotada la vía ordinaria, en base al principio de definitividad de la acción de amparo, consagrado en el artículo 2606, numeral 2, del Código Judicial. Y en el caso que nos ocupa, la Corte comparte el criterio del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial en la resolución de 23 de septiembre de 1996 apelada, en el sentido de que el demandante no ha dado cumplimiento a dicho requisito, consistente en demostrar el agotamiento de los medios ordinarios previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial atacada, porque no interpuso el recurso de hecho -que se surte ante el superior jerárquico, conforme con lo establecido en el artículo 1137 y siguientes del Código Judicial-, contra la negativa del Juzgado Quinto del Circuito de Chiriquí, Ramo Civil, de concederle la apelación que había solicitado mediante auto N° 1400 de 16 de agosto de 1996 y, en tal razón, a falta de prueba en la demanda de amparo, que demuestre el agotamiento de todos los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial acusada, no puede admitirse la procedencia de la acción de amparo presentada en este caso, según lo establecido en el artículo 2606, ordinal 2°, del Código Judicial. Sobre el particular son consultables los fallos calendados 21 de octubre de 1994; 16 de febrero de 1995; 24 de febrero de 1995; 2 de marzo de 1995; 31 de marzo de 1995; 25 de abril de 1996; 26 de julio de 1996; 5 agosto de 1996; y 14 de agosto de 1996, entre otros.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la resolución de 23 de septiembre de 1996, dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, mediante la cual NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el licenciado José Lezcano en representación de RAQUEL MARÍA LEGENDRE DE MORENO, contra el Juez Quinto del Circuito de Chiriquí, Ramo Civil.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTO POR EL LICENCIADO GILBERTO BÓSQUEZ DÍAZ EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE SAMUEL FRANCISCO DE LA GUARDIA WISE CONTRA LA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN DE 14 DE NOVIEMBRE DE 1995, DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Gilberto Bósquez Díaz ha presentado, actuando en nombre y representación de Samuel Francisco De La Guardia Wise, acción de amparo de derechos fundamentales contra Resolución de 14 de noviembre de 1995, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

Corresponde en este momento procesal determinar si la demanda objeto de examen cumple con los presupuestos procesales de admisibilidad establecidos por la ley, así como los señalados por reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

En primer lugar, se observa que el libelo debió dirigirse al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de lo establecido en el artículo 102 del Código Judicial, y no a los "Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia", como hace el demandante.

De igual manera, se advierte que el auto atacado fue dictado el 14 de noviembre de 1995 y notificado personalmente al licenciado Bósquez Díaz el 16 del mismo mes y año, por lo que el término de ejecutoria venció el 22 de noviembre de 1995. Sobre este particular, el artículo 2606 del Código Judicial establece que la acción de amparo de garantías fundamentales puede ejercerse contra toda clase de acto de autoridad pública que vulnere derechos consagrados en la Constitución, que revista la forma de una orden de hacer o de no hacer, "cuando por la **gravedad e inminencia** del daño que representan requieren de una revocación inmediata". Llama la atención entonces el hecho de que el amparista haya dejado transcurrir más de once meses desde la ejecutoria del acto que acusa como lesivo a sus intereses para proponer la acción, lo que apunta hacia la ausencia del requisito de gravedad e inminencia del daño que exige la ley. Sobre esta materia existe profusa jurisprudencia que es posible consultar en sentencias de 14 de enero de 1993, 12 de mayo de 1993, 30 de septiembre de 1993 y 15 de abril de 1994, entre otras.

Por otra parte, el recurrente anuncia una pretensión completamente extraña a este instituto de garantías. En efecto, solicita el letrado que **"se DECLARE LA NULIDAD DE TODO LO ACTUADO** ... y como consecuencia **SE APRUEBE LA SENTENCIA CONSULTADA"** (f. 15, resalta el demandante). Cabe recordar que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, como máximo tribunal de las garantías constitucionales, no es una instancia intraprocesal adicional. De allí que no puedan las partes en un proceso pretender que la Corte se convierta en tribunal de apelaciones de la jurisdicción ordinaria, pretendiendo la revisión integral de la actuación de juez de la causa.

Las anteriores consideraciones, en su conjunto, indican que esta iniciativa constitucional es manifiestamente improcedente, lo que imposibilita de su admisión.

Por las razones expuestas, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda de amparo de derechos fundamentales presentada por el licenciado Gilberto Bósquez Díaz, en representación de Samuel Francisco De La Guardia Wise.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS RANGEL CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE GAMALIER GARCÍA VALENCIA, CONTRA ORDEN DE HACER CONTENIDA EN LA RESOLUCIÓN N° 12035 DE 6 DE DICIEMBRE DE 1995, DICTADA POR EL DIRECTOR DE MIGRACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Carlos Rangel Castillo, actuando en nombre y representación de GAMALIER GARCÍA VALENCIA, ha interpuesto ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de amparo de garantías constitucionales contra Resolución N° 12035 de 6 de diciembre 1996, proferida por el Director del Departamento Nacional de Migración y Naturalización, mediante la cual "ordena ilegalmente la **deportación** de mi representado" (f. 12, destaca la Corte).

Alega el licenciado Rangel que la orden atacada infringe los artículos 17 y 32 de la Carta Fundamental, así como la ley N° 17 de 10 de agosto de 1994.

Con el objeto de decidir sobre la admisibilidad de esta iniciativa constitucional, procede la Corte Suprema a examinar si el libelo de amparo cumple con los requisitos formales que establecen los artículos 2610 y 654 del Código Judicial, así como con los señalados por la jurisprudencia de esta Corporación.

El examen de la demanda de amparo permite advertir que el licenciado Rangel no ha presentado prueba de la orden que estima infractora de los derechos fundamentales. Por otro lado, el libelo debió dirigirse al Presidente de la Corte Suprema de Justicia, de conformidad con lo normado en el artículo 102 del Código Judicial, y no a los "Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia", como hace el demandante.

Es evidente, entonces, que esta iniciativa constitucional no satisface los presupuestos del artículo 2610 de la referida excerta legal, por cuanto adolece de defectos formales y de técnica jurídica.

De otra parte, el Pleno de la Corte estima conveniente destacar que en la causa que ahora se examina, se pretende atacar un acto que conlleva la **deportación** de una persona, por lo que hay que hacer énfasis en lo preceptuado por la normativa legal relacionada con la acción constitucional de habeas corpus. El numeral 5 del artículo 2566, atinente a esta acción extraordinaria, establece como "acto sin fundamento legal", entre otros, la **deportación sin justa causa**, lo que evidencia que es el habeas corpus la vía especial que instituye la ley para el conocimiento de reclamos de esta naturaleza, de donde resulta la improcedencia de esta acción de amparo de garantías.

Por las razones que anteceden, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la

demanda de amparo de derechos fundamentales presentada por el licenciado Carlos Rangel Castillo, en representación de Gamalier García Valencia.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AMPARO DE GARANTÍAS PRESENTADO POR EL LICENCIADO AGUSTÍN SELLHORN, EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD SEA DELI PANAMÁ, S. A., CONTRA LA SENTENCIA DE 28 DE OCTUBRE DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Agustín R. Shellhorn, quien actúa en virtud de poder conferido por Diamantis Papadimitriu, representante legal de la sociedad Sea Deli Panamá, S. A., ha interpuesto acción de amparo de garantías constitucionales contra "la orden de hacer contenida en la parte resolutiva de la Sentencia de 28 de octubre de 1996, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo, Primer Distrito Judicial." (F. 3)

Corresponde en este momento determinar si la acción propuesta cumple con los requisitos de procedibilidad que establece el artículo 2610 del Código Judicial. En ese sentido, en el examen del libelo presentado se advierte que el demandante cumple con los presupuestos procesales de naturaleza formal señalados en los ordinales 1°, 2° y 3° de dicho precepto legal, pero no así con el requisito indicado en el párrafo final del inciso cuarto, el cual cumple sólo en parte.

En el mencionado inciso prescribe: "Con la demanda se presentará la prueba de la orden impartida, si fuere posible **o manifestación expresa, de no haberla podido obtener**" (destaca la Corte).

Una detenida revisión de la documentación que contiene el cuaderno permite establecer que el amparista no aportó copia autenticada de la resolución que ataca, esto es de la sentencia de 28 de octubre de 1996, proferida por el Tribunal Superior de Trabajo. De otra parte, tampoco se consigna en el libelo, como lo exige la norma, manifestación expresa de que no pudo ser obtenida.

De igual manera, se advierte que el peticionario fundamenta su reclamo en la afirmación de que "el Tribunal Superior de Trabajo efectuó una equivoca evaluación e indebida aplicación del derecho en el caso **sub judice** y emitió una sentencia arbitraria al no valorar las pruebas existentes, alegando la inexistencia del escrito de mutuo consentimiento, incurrió en un error de hecho en la existencia de la prueba ..." (f. 3). Al respecto, la Corte considera necesario señalar, de conformidad con jurisprudencia reiterada, que la acción de amparo de derechos fundamentales no puede ser utilizada como un mecanismo procesal dirigido a la revisión de lo actuado por el juez de la causa en materia de valoración de los medios de prueba, como si fuera una *tercera instancia*. Se trata propiamente de una acción autónoma, extraordinaria, de naturaleza constitucional, tendiente a proteger derechos subjetivos consagrados en nuestra Carta Fundamental (sentencias de amparo de 15 de enero de 1993 y de 13 de enero de 1994, entre otras).

Por las razones anteriores, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por el licenciado Agustín R. Shellhorn, en nombre y representación de Diamantis Papadimitriu, presidente y representante legal de la Sociedad Sea Deli Panamá, S. A. contra sentencia de 28 de octubre de 1996, dictada por el Tribunal Superior de Trabajo, del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALFREDO DE JESÚS SILVA CONTRERAS EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Raúl J. Ossa, ha interpuesto ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, recurso de Habeas Corpus a favor del señor Alfredo de Jesús Silva Contreras y contra la Fiscalía Especializada en delitos relacionados con drogas.

Librado el mandamiento de Habeas Corpus contra la Fiscalía Especializada en delitos relacionados con drogas, la misma dio respuesta mediante el Oficio N° 10701 de 11 de octubre de 1996, en los siguientes términos:

> "Los hechos que motivaron la detención preventiva del sindicado ALFREDO DE JESÚS SILVA CONTRERAS, los reseñamos de la siguiente manera:
>
> 1.- El día veinte (20) de julio de 1995, la división de estupefacientes de la Policía Técnica Judicial, con el aval de esta Agencia de Instrucción inicia una serie de diligencias, tendientes a recabar información tendiente a ubicar a los miembros de una organización criminal, dedicada a actividades de narcotráfico, utilizando para ello los muelles y puertos de las ciudades de Panamá y Colón para la preparación de compartimientos ocultos (caletos), en yates de lujo y veleros tipo catamarán, entre otros.
>
> 2.- En el desarrollo de dichas diligencias se logra la identificación de algunos integrantes de dicha organización, mencionándose entre ellos a ALFREDO SILVA CONTRERAS, quien era el encargado de hacer las reparaciones mecánicas a los botes que regentaban los colombianos EDNA CONSTANZA RODRÍGUEZ POLONIA (alias) JUANITA, actualmente prófuga y MAURICIO HERNÁNDEZ (alias) LUCHO, actualmente evadido de la cárcel modelo, donde se encontraba detenido preventivamente, en virtud de esta causa penal.
>
> 3. Los informes recabados por la División de Narcóticos, indican conforme obra en autos, que los miembros de dicha organización criminal prepararon entre otras embarcaciones de lujo, el velero, tipo catamarán MICHAEL ANGELO, al que le hicieron compartimientos

ocultos (caletos) con el único propósito de transportar sustancias ilícitas y en la preparación de estos, participó también el colombiano GABRIEL JAIME VÁSQUEZ ESCOBAR, lo que se desprende de los informes rendidos por los inspectores GUTIÉRREZ y DE LA PEÑA, y de las vistas fotográficas que evidencian el tipo de trabajos que realizaban en la embarcación, tanto VÁSQUEZ como ALFREDO DE JESÚS SILVA CONTRERAS.

4. El día 25 de octubre de 1995, en una operación conjunta, las autoridades panameñas solicitan el apoyo de autoridades norteamericanas, para abordar e incautar el velero tipo catamarán MICHAEL ANGELO, que iba piloteada por los austriacos MICHAEL JANSENBERGER y CHRISTIAN ROGLER, quienes zarparan de puertos nacionales dentro del cual se encuentran, en compartimientos ocultos, la cantidad de DOS MIL (2000) PAQUETES, forrados con cinta adhesiva de diferentes colores, los cuales contenían en su interior cierta cantidad de una sustancia en forma de polvo de color blanco que al ser sometida a prueba de campo, dio resultado positivo para la determinación de la sustancia conocida como COCAÍNA.

5.- Es prudente señalar que los informes de seguimiento realizados por la División de Narcóticos de la P. T. J., refieren con claridad meridiana, la llegada de los prenombrados JANSENBERGER y ROGLER y sobre las personas que fueron a llevarlos a recoger la embarcación para zarpar en aguas del Pacífico.

6.- Al rendir indagatoria, ALFREDO DE JESÚS SILVA CONTRERAS, señala como bien lo indica el recurso de Habeas Corpus, que laboró en la empresa MARÍTIMA DE CABOTAJE, de la que renunció para "trabajar" con EDNA CONSTANZA RODRÍGUEZ POLONIA y MAURICIO HERNÁNDEZ. Reconoce igualmente haber realizado reparaciones a las embarcaciones MARÍA DEL MAR y MICHAEL ANGELO (ambos catamaranes), al velero ORIENT EXPRESS. Señala que acompañó a los austriacos a Contadora, donde recogieron el catamarán MICHAEL ANGELO y se fueron. En cuanto a GABRIEL JAIME VÁSQUEZ ESCOBAR, quien es identificado en los informes de la P. T. J., como el especialista en hacer los caletos, SILVA CONTRERAS indica que este llevó unas hojas de playwood, pero dice desconocer para que, pese a estar haciendo reparaciones en el mismo yate.

7. El Cuerpo del Delito está plenamente acreditado a foja 511 del expediente, con el resultado que el laboratorio Técnico de la P. T. J., da respecto de la sustancia incautada, la que fue positiva para la determinación de Cocaína, en la cantidad de 2,186.455. Gramos.

8.- Contra el sindicado ALFREDO DE JESÚS SILVA CONTRERAS, pesan serios indicios que lo incriminan en la comisión del ilícito, además de los de presencia y oportunidad. Ello es así, toda vez que el sindicado ALFREDO DE JESÚS SILVA CONTRERAS, admite haber estado presente cuando el sindicado VÁSQUEZ ESCOBAR, lleva las hojas de playwood, con las que precisamente se hicieron los caletos o compartimientos ocultos, y la excepción que presenta, en cuanto a desconocer el propósito de la presencia de este material, es muy pobre, dado que el tamaño de la embarcación le permitía ver que se estaba haciendo dentro de la misma. De igual manera tenemos que acepta haber estado presente en embarcaciones, como el ORIENT EXPRESS, en la que conforme obra en el expediente, se encontraron trazos de sustancia ilícita, lo que evidencia que es parte importante dentro de la organización criminal...
...
En ese orden de ideas, tenemos que ALFREDO DE JESÚS SILVA CONTRERAS, dentro del organigrama de la organización criminal era una pieza fundamental que le daba mantenimiento a las embarcaciones utilizadas por esta para el tráfico de sustancias ilícitas, y en todas las que se encuentran aprehendidas por esta agencia de instrucción han dado muestras de trazos de drogas ilícitas.

> De igual manera, se desprende de autos que el sindicado SILVA CONTRERAS, no era un simple empleado que se dedicaba a reparar los barcos de la organización, si no que además de ello, participaba en todas las actividades en las que participaban los sindicados MAURICIO HERNÁNDEZ y GABRIEL JAIME VÁSQUEZ ESCOBAR, que no eran precisamente de reparación de los veleros, como se desprende de la declaración rendida por los sindicados VÁSQUEZ ESCOBAR, HERNÁNDEZ MONSALVE, lo que evidencia el grado de compenetración y confianza con el resto de los miembros de la organización criminal."

En este momento, corresponde determinar si la medida cautelar de carácter personal atacada, cumple con los requisitos que al efecto establecen los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

De conformidad con la diligencia que ordena la detención preventiva del señor ALFREDO DE JESÚS SILVA CONTRERAS, la medida se fundamenta en la supuesta comisión de delitos contra la salud pública, concretamente el tráfico de drogas.

En las sumarias consta como elemento que comprueba la existencia del hecho punible, los informes recibidos por las autoridades de la División de Estupefacientes de la Policía Técnica Judicial, en el cual se proporciona información sobre una organización internacional dedicada a actividades de narcotráfico en ciertos puertos y muelles de Panamá y Colón y la identificación de alguno de los sujetos sospechosos presuntos integrantes de la organización antes aludida sobre quienes se realiza toda una serie de operaciones de vigilancias y seguimientos en las cuales incluso se filman las actividades y los sujetos vinculados a esta organización, todo esto por el espacio de aproximadamente tres (3) meses, durante los cuales se pudo recopilar una serie de información de reuniones de los miembros y colaboradores, entre los cuales se encontraba el prenombrado ALFREDO DE JESÚS SILVA CONTRERAS, relacionado con la preparación y reparación de las naves de la organización.

Efectuado un operativo con la participación, incluso, de algunas agencias y autoridades norteamericanas, se retuvo y abordó el catamarán MICHAEL ANGELO, al cual se le efectuó una requisa, incautándosele la cantidad de 2,000 paquetes forrados con cinta adhesiva contentivos de una sustancia en forma de polvo de color blanco que se presumía, era cocaína. Sometida la evidencia a la prueba de campo, ésta, resultó positiva para la determinación de COCAÍNA, con un peso de 2,186.445.0 gramos.

Con fundamento en lo anterior, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas ordenó la detención preventiva del señor ALFREDO DE JESÚS SILVA CONTRERAS, entre otros, por considerar que existían suficientes pruebas que lo involucraban en delitos relacionados con drogas. La orden de detención fue expedida mediante resolución fechada el día 1° de noviembre de 1996, visible de fojas 10 a 14 del expediente.

El Pleno de esta Corporación estima que, el informe emitido por el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas, así como la diligencia de prueba de campo, constituyen hechos suficientes para vincular al señor ALFREDO DE JESÚS SILVA CONTRERAS, con los hechos a él imputados. Lo anterior, aunado al hecho de que el delito de tráfico de drogas tiene señalado pena mínima de prisión superior a los dos años, justifica la aplicación de la detención preventiva decretada por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, por cuanto el artículo 2148 del Código Judicial es claro al señalar que la misma, sólo procede por delitos que tengan señalada pena mínima de dos años de prisión, o cuando el autor o partícipe ha sido sorprendido en flagrante delito.

En virtud de lo antes expuesto, el Pleno de esta Corporación estima que en la detención preventiva del señor ALFREDO DE JESÚS SILVA CONTRERAS, no se ha infringido el debido proceso establecido en la Constitución Nacional y en las leyes de la República, ni tampoco las normas jurídicas que regulan la detención preventiva y por lo tanto, es procedente declarar legal dicha detención.

En consecuencia, el PLENO de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención del

señor ALFREDO DE JESÚS SILVA CONTRERAS y, por lo tanto, dispone que el detenido sea puesto a órdenes de la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDUARDO ROGELIO BOYCE GUTIÉRREZ (A) EDUARDITO EN CONTRA DE LA JUEZ SEGUNDA DE CIRCUITO PENAL DE LA PROVINCIA DE COLÓN. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor SAMUEL MATHES JAMES presentó ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, acción de habeas corpus a favor de EDUARDO BOYCE GUTIÉRREZ, quien se encuentra privado de su libertad a órdenes del JUEZ SEGUNDO DE CIRCUITO DE COLÓN, RAMO PENAL, por delito contra el patrimonio.

Librado el mandamiento, y luego de haber recibido el informe del funcionario demandado, aquel tribunal, mediante sentencia de ocho (8) de octubre de mil novecientos noventa y seis (1996), decidió declarar legal la medida cautelar personal de detención y poner el detenido a órdenes nuevamente del Juzgado Segundo del Circuito de Colón. Esa decisión ha sido apelada ante esta Corporación de Justicia.

El Segundo Tribunal Superior de Justicia, para declarar legal la detención, expresó en su parte pertinente, lo siguiente:

"...
La conducta reprochable consiste en un concurso material delictivo de apoderamiento ilícito de bienes ajenos en perjuicio de un establecimiento comercial y de varios clientes presentes, llevado a cabo por dos personas, utilizando armas de fuego, por tanto, consiste en el delito de Robo Calificado, tipificado en el artículo 186 del Código Penal, modificado por el artículo 1 de la Ley 15 de 1993, que contempla sanción de 5 a 7 años de prisión.

El delito de Robo es competencia de los jueces de circuito de la jurisdicción donde fue llevado a cabo el hecho punible, según lo previsto en los artículos 159, ordinal 15°, y 1999 de Código Judicial, además permite la detención preventiva, previo cumplimiento de las exigencias legales contempladas en el artículo 2159 del Código Judicial, porque la pena mínima prevista en la excerta legal citada no es menor de 2 años de prisión.

Ahora bien, en el proceso penal citado constan pruebas contra el señor EDUARDO BOYCE GUTIÉRREZ, consistente en los informes rendidos por los señores de la Policía que le aprehendieron, debidamente ratificados, nos referimos al Cabo II Augusto Barranco (fs. 48), también el procesado EDUARDO ROGELIO BOYCE GUTIÉRREZ está confeso de la comisión del hecho punible; está comprobada la existencia y propiedad de los bienes robados como el cuerpo del delito; el proceso lo sigue autoridad competente y le han garantizado el debido proceso legal; además actualmente está pendiente de fijar la fecha de la audiencia preliminar; lo cual no ha sido posible porque se

está tramitando la demanda de Habeas Corpus ...".

Contra la sentencia anterior el apelante sostiene que su detención es ilegal, dado que él no se encuentra a órdenes de la autoridad competente pues, según la Ley 53 del 12 de diciembre de 1994, en la cual, entre otros, se reforma el artículo 175 del Código Judicial, se establece que en los procesos por delitos de hurto, apropiación indebida, estafa y daños, cuyas cuantías no excedan los DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.250.00), tendrán competencia las autoridades de policía. En base en lo anterior el accionante sostiene que, por ser CIENTO CUARENTA Y TRES BALBOAS (B/.143.00) la cantidad hurtada, el Juzgado de Circuito no es el competente sino las Autoridades de Policía.

La Corte observa que existe una confusión del apelante en la calificación del delito a él imputado, pues confunde el hurto con el robo, provocando así la petición de una norma improcedente. La diferencia entre los dos conceptos es clara. La primera involucra apoderamiento de cosa mueble ajena, mientras que en la segunda, en el apoderamiento de la cosa mueble ajena, debe mediar violencia o intimidación en las personas.

El Pleno advierte que dentro de las sumarias constan las pruebas contra el señor EDUARDO BOYCE GUTIÉRREZ, de que el delito cometido es "robo calificado" y no "hurto", las mismas consisten principalmente, en los informes rendidos por los policías que le aprehendieron; la confesión del mismo, la existencia y propiedad de los objetos robados.

En parte de la declaración rendida por el propio ROGELIO BOYCE GUTIÉRREZ (A) EDUARDITO, se puede apreciar que se declara confeso del delito de robo y así lo expresa:

> "..., ya caminando JUAN, me señaló el lugar del asalto ó (sic) íbamos a asaltar, que era un negocio de ventas de piezas de carro, que esta ubicado por la ave. Meléndez, cuando llegamos allí JUAN, sacó un revólver y apuntó al Chino, dueño del negocio y me dijo que recogiera la plata y así lo hice, quiero dejar constancia que el arma que yo portaba JUAN me la prestó, luego que recogimos el dinero, salimos corriendo ...".

Por otra parte, el Código Penal es claro cuando expresa en el artículo 186 lo siguiente:

> "ARTÍCULO 186: La pena a la que se refiere el artículo anterior, será de 5 a 7 años de prisión, si el delito se comete en algunos de los siguientes casos:
>
> 1. Utilizando armas.
> 2. Por enmascarado.
> 3. Por dos o más personas.
> 4. Por medio de actos que afecten a la libertad personal".

A lo largo de la investigación se ha dejado sentado, e incluso así lo ha manifestado el imputado, que el delito fue cometido con armas de fuego, y por más de dos personas, por lo que claramente se enmarca dentro del robo calificado, cuya pena es superior a los dos años, siendo la autoridad competente para su juzgamiento los jueces de circuito.

En base a lo anterior, la Corte coincide con lo expuesto por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, pues dentro del presente proceso que se le sigue a EDUARDO BOYCE GUTIÉRREZ, se han seguido las exigencias contempladas en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, para declarar legal la detención preventiva.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, el 8 de octubre de 1996, en que se DECLARA LEGAL la detención de EDUARDO BOYCE GUTIÉRREZ (A) "EDUARDITO" y, ORDENA su filiación bajo la responsabilidad del Juzgado

Segundo del Circuito de Colón.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALFONSINA OTAÑO MONTERO EN CONTRA DEL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **Manuel Pousa Caride** presentó acción de habeas corpus a favor de la señora **ALFONSINA OTAÑO MONTERO** y contra el Director General de Migración, por considerar que la detención de que fue objeto el 20 de septiembre del presente año es ilegal.

Librado el mandamiento de habeas corpus, el Director de Migración lo contestó de la siguiente forma:

"a) La señora ALFONSINA OTAÑO MONTERO, de nacionalidad dominicana, fue aprehendida por unidades de la Corregiduría Nocturna y remitido a nuestra institución, mediante nota N° C. P. N. 1050-96, fechada 21 de septiembre de 1996. Posteriormente, se procedió a dictar la orden de detención mediante Resolución N° 0077 del 23 de septiembre de 1996, por indocumentada.

b) Los motivos de hecho en que se fundamenta la detención de dicha ciudadana son:

PRIMERO: Que el día 21 de septiembre de 1996, unidades de la Corregiduría Nocturna, procedieron a aprehender a la señora ALFONSINA OTAÑO MONTERO, de nacionalidad dominicana por indocumentada.

SEGUNDO: Que posteriormente, se procedió a remitir a la mencionada señora a esta institución, a fin de que se verificara su status migratorio.

TERCERO: Que de acuerdo a nuestros archivos, a la señora ALFONSINA OTAÑO MONTERO, se le negó la solicitud de Visa de Inmigrante, mediante Resolución N° 6382, del 17 de septiembre de 1996, por no cumplir con los requisitos legales.

CUARTO: Que de acuerdo a lo antes mencionado, se procedió a ordenar la deportación del territorio nacional, de la señora ALFONSINA OTAÑO MONTERO, dominicana, mediante Resolución N° 7145, del 11 de octubre de 1996, la cual le fue notificada mediante Edicto N° 41 del 16 de octubre de 1996, en vista de que la mencionada señora se negó a firmar.

QUINTO: Que a la fecha, dicha resolución se encuentra ejecutoriada.

Los motivos de derecho están fundamentados en los preceptos legales contenidos en el Decreto Ley N° 16 de 30 de junio de 1960,

modificado por el Decreto Ley N° 13 de 20 de septiembre de 1965 y adicionado por la Ley 6ª del 5 de marzo de 1980, específicamente los Artículos 65, 85 y 86."

El licenciado **Manuel Pousa Caride** funda su acción de habeas corpus en los siguientes hechos:

"**Primero**: La señora Alfonsina Otaño Montero fue detenida el día 20 de septiembre del presente año, en el Distrito de La Chorrera por miembros de la Corregiduría los que la pusieron bajo las órdenes de la Dirección de Migración al no tener sus documentos migratorios en regla.

Segundo: En la actualidad, la señora Alfonsina Otaño Montero se encuentra detenida en el Centro Femenino de Rehabilitación Doña Cecilia Orillac de Chiari, a órdenes del Departamento de Migración y Naturalización del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Tercero: Hasta el momento, no existe resolución alguna de autoridad competente que por escrito le haya notificado a la detenida las razones de su detención. Por lo tanto, dicha detención es ilegal y violatoria de los derechos fundamentales de Alfonsina Otaño Montero, al haberse efectuado la misma sin cumplir las formalidades legales pertinentes, tal como lo establecen los artículos 21 y 22 de la Constitución Nacional.

Cuarto: Como quiera que la detención data del 20 de septiembre de 1996 sin que a la fecha de hoy, 9 de octubre de 1996, se haya abierto causa formal en su contra, la privación de su libertad es ilegal por ser violatoria de los artículos 21 y 22 de nuestra Carta Fundamental.

Quinto: El hecho de mantener a una persona detenida indefinidamente "bajo investigación" atenta no sólo contra los principios constitucionales de presunción de inocencia y el debido proceso, entre otros, sino también contra los derechos humanos universales reconocidos por nuestro país. Cabe pensar, además, que la circunstancia de que la detenida es extranjera agrava la ilegalidad de su detención frente a la aparente indiferencia de las autoridades, desvirtuando el principio de igualdad entre extranjeros y nacionales, consagrado en el artículo 20 de nuestra Constitución."

Un examen de las constancias del expediente demuestran que, contrario a lo expresado por el abogado que presenta el habeas corpus, consta a foja 8 del expediente que mediante resolución DNMYN 0077 de 23 de septiembre de 1996 el Director Nacional de Migración y Naturalización ordenó la detención de la señora **ALFONSINA OTAÑO MONTERO**, de nacionalidad dominicana, por no portar documentos que acreditaran su residencia legal en el país. Igualmente consta en el expediente, a foja 9 y 10, que la Dirección Nacional de Migración y Naturalización negó una solicitud de visa a la señora **ALFONSINA OTAÑO MONTERO**, por no cumplir con los requisitos legales. Y a foja 11 la Dirección de Migración y Naturalización, mediante resolución N° 7,145 de 11 de octubre de 1996, resuelve deportar del territorio nacional a la señora **ALFONSINA OTAÑO MONTERO**, por no portar documentos que acrediten su residencia legal en el país.

Lo anteriormente expuesto es base suficiente para considerar correcta la actuación de la Dirección Nacional de Migración y Naturalización.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención de la señora ALFONSINA OTAÑO MONTERO.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CONSTANTINO PERALTA RODRÍGUEZ CONTRA EL JUEZ SEGUNDO DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En grado de apelación ha ingresado a esta máxima Corporación de Justicia la acción de **Habeas Corpus** interpuesta por el licenciado Silvio Guerra Morales contra el Juez Segundo de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, a favor de **CONSTANTINO PERALTA**, quien se encuentra detenido en la Cárcel El Renacer, imputado por delitos de peculado.

Contra la resolución de 3 de octubre de 1996, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia que declaró LEGAL la detención del prenombrado CONSTANTINO PERALTA, se anunció, pero no se llegó a sustentar, el recurso de apelación en virtud del cual ha ingresado este expediente al Pleno de la Corte. Por tanto, el examen ha de limitarse a las consideraciones expresadas en el fallo impugnado, para decidir si es o no conforme a la ley.

Expresa la resolución apelada que la acción de habeas corpus se propuso en base a que la autoridad acusada no emitió orden escrita de detención preventiva contra Peralta si no que, en Auto de 24 de febrero de 1994, se limitó a cancelar las medidas cautelares impuestas y ordenó su reingreso a la cárcel. Además, en dicha acción se indica que se le debe conceder la libertad, ya que ha cumplido siete años de prisión, lo que de acuerdo a la pena que pudiera serle impuesta excedería la misma, de conformidad con el artículo 2417 del Código Judicial.

Por su parte, el funcionario demandado al contestar el mandamiento de habeas corpus informó que la detención de Peralta fue ordenada mediante diligencia escrita de fecha 31 de enero de 1990, dictada por la Fiscalía Sexta de Circuito. Que su despacho lo llamó a responder en juicio por el delito de peculado el 10 de septiembre de 1993 y que, mediante resolución de 7 de febrero de 1994, se canceló la medida cautelar impuesta ordenando su reingreso a la cárcel, decisión que fue confirmada por el Tribunal Superior.

Con el informe rendido por razón del habeas corpus, se enviaron al Tribunal los expedientes que contienen lo actuado contra Constantino Peralta, de los cuales se pudo corroborar y ampliar lo informado, al observarse que, en efecto, se expidió orden de detención según consta a fojas 464-465; que posterior a su emisión se dispuso mediante resolución de 18 de febrero de 1992, aclarada en auto de 7 de abril de 1992 (que figuran a fojas 2131-2139, 2152-2158), que Constantino Peralta fuera trasladado por razones de salud a un centro hospitalario por el tiempo necesario; mediante auto de 10 de septiembre de 1993 fue llamado a juicio y se mantuvo la medida dispuesta (fs. 2336-2363); sin embargo, por solicitud de la Fiscalía Sexta de Circuito, previa evaluación del médico forense, se dictó auto de 16 de junio de 1995 (fs. 2567-2572) que canceló la medida de mantenerlo recluido en el hospital y se ordenó su reingreso al centro carcelario.

Sobre la base de lo anteriormente anotado, el tribunal de habeas corpus señaló que no le asiste razón al demandante en cuanto a la ilegalidad que atribuye a la detención actual de Peralta, ya que el hecho de haberse dictado una resolución disponiendo la reclusión de Peralta en un centro hospitalario no implica la sustitución de su detención preventiva por otra medida cautelar de

menor gravedad. De modo que, cuando se canceló dicha medida por innecesaria, "procedía sin más actuación el reingreso del procesado al centro carcelario respectivo".

Sobre la otra causa de ilegalidad de la detención, sostiene el Tribunal que, mediante resolución de 2 de agosto de 1996, que confirmó la sentencia de 15 de diciembre de 1995 dictada por el Juzgado Segundo Penal, se condenó a Peralta a siete años de prisión y 200 días-multas e inhabilitación para el ejercicio de funciones pública como autor del delito de peculado. Sin embargo, si bien en la actualidad el procesado cumplió, al estar detenido preventivamente, la pena de siete años que le fuera impuesta en uno de los procesos seguidos en su contra, "el presente proceso que por delito de peculado se le sigue y dentro del cual se instaura esta acción de habeas corpus no ha concluido", así como tampoco otros procesos que por el mismo delito se le siguen en distintos despachos judiciales, sobre los cuales las partes han ejercido diversos recursos de los que tiene conocimiento dicho tribunal.

Luego de lo expuesto, la Corte considera que los razonamientos manifestados en la resolución apelada, para mantener la detención preventiva de CONSTANTINO PERALTA, decretada en uno de los procesos penales que se le siguen, están debidamente fundamentados y se ajustan a nuestro ordenamiento jurídico.

Conforme al criterio del a-quo, el hecho de que dentro del proceso respectivo se cancelara una medida de reclusión hospitalaria girada a favor del sindicado y se ordenara su reingreso a un centro penitenciario, sin emitirse nuevamente una orden de detención preventiva, no es razón para considerar que la detención actual es ilegal, ya que, anteriormente, mediante diligencia debidamente motivada, (fs.464) el funcionario de instrucción había dictado la orden para que la misma se practicara, por lo que el traslado del imputado a un hospital por un tiempo determinado no anulaba la resolución que previamente dispuso su detención y la misma quedaba vigente al finalizar la medida de internamiento hospitalario.

Finalmente, cabe agregar que la acción constitucional de habeas corpus no es medio idóneo para solicitar la aplicación de lo normado por el artículo 2417 del Código de Procedimiento Penal, pues se trata de una situación técnico procesal que debe ventilarse ante las instancias ordinarias correspondientes.

Además, el proceso penal dentro del cual se solicita la libertad del sindicado no ha concluido, por lo que no se ajusta a lo dispuesto por la referida norma procesal y, en atención a lo que señala el proponente de esta acción, es hasta el mes de enero de 1997 cuando su poderdante habrá cumplido siete años de encontrarse privado de su libertad (fs. 3) en forma preventiva, de modo que tampoco resultaría aplicable el artículo 2418 del Código Judicial, pues dicho tiempo no equivale al máximo de la sanción que podría corresponder al delito que se le imputa, que sería de los que figuran contra la Administración Pública (art.322 C. Penal).

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución de 3 de octubre de 1996, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia dentro de la Acción de Habeas Corpus interpuesta a favor de CONSTANTINO PERALTA.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JORGE LUIS ACOSTA CONTRA EL DIRECTOR DE

MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Nodier Gustavo Santiago, apoderado judicial del señor JORGE LUIS ACOSTA ROCHE GÓMEZ, interpuso demanda de Habeas Corpus contra el Director de Migración y Naturalización, por considerar que esta autoridad mantiene detenido ilegalmente a su representado.

Así las cosas, al ingresar el expediente al despacho sustanciador y encontrándose el proyecto para la lectura del resto de los Magistrados, que conforman el Pleno de esta Alta Corporación de Justicia, se recibió en la Secretaría General, escrito de DESISTIMIENTO presentado por el proponente de la acción de Habeas Corpus que a la letra dice:

"HONORABLES MAGISTRADOS DEL PLENO DE LA CORTE
SUPREMA DE JUSTICIA.

Por medio del presente escrito, yo, **NODIER GUSTAVO SANTIAGO** varón, PANAMEÑO, mayor de edad, portador de la cédula de identidad personal N° 4-126-1396, abogado en ejercicio, con oficinas profesionales ubicadas en ciudad de Panamá, y demás generales conocidas en actuaciones previas en demanda de habeas corpus interpuesto ante esa Alta Corporación, respetuosamente concurro ante esa Superioridad al objeto de manifestar como manifiesto que **DESISTO** de la demanda de habeas corpus interpuesta contra el Director Nacional de la Dir. de Migración y Naturalización del Min. de Gobierno y Justicia, por haber sido liberado el día sábado 26 de octubre el señor JORGE LUIS ACOSTA ROCHE, nuestro defendido, y sometido a limitaciones distintas a la privación de la libertad personal, por lo cual carece de objeto la demanda interpuesta.

Igualmente debo señalar que se nos explicó que se prefirió mantenerlos en la Dirección al objeto de evitar la separación de los miembros de la familia.

Con respeto.

(fdo.) LIC. NODIER G. SANTIAGO Q.
Céd. 4-126-1396"

En consecuencia, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ACEPTA EL DESISTIMIENTO presentado, ORDENA EL CESE del procedimiento; y el ARCHIVO del expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE DANIEL ANTONIO DÍAZ DE LEÓN CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Sr. **DANIEL ANTONIO DÍAZ DE LEÓN**, detenido en la Cárcel Modelo por estar sindicado por el delito de robo en perjuicio de la señora **CANDELARIA CRUZ ORTEGA**, hizo llegar a la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia, mediante Buzón Penitenciario de la Procuraduría General de la Nación, acción de habeas corpus contra el Señor Fiscal Auxiliar de la República, con la finalidad de que se declare ilegal su detención.

Inmediatamente se libró el mandamiento de habeas contra el señor Fiscal Auxiliar de la República, quien lo contestó señalando que mediante Oficio N° 10099 del 4 de julio de 1996, que remitió el expediente a la Fiscalía Segunda de Circuito de Panamá, y por medio de la Nota N° 11029, el sindicado fue puesto a órdenes de ese Despacho.

También manifestó el señor Fiscal que actualmente el sumario está ubicado en el Juzgado Segundo De Circuito de Panamá, Ramo Penal, y que **DANIEL ANTONIO DÍAZ DE LEÓN** se encuentra a órdenes de ese Tribunal.

Advierte esta Colegiatura que no es competente para conocer la presente acción, pues el detenido está a órdenes de un Juzgado de Circuito. Según la regla de competencia para este tipo de acción, establecida en el artículo 2602, numeral 2° del Código Judicial, que señala que los Tribunales Superiores de Justicia son competentes para conocer los actos que procedan de autoridades o funcionarios con mando y jurisdicción en una provincia, como lo son los Juzgados de Circuito.

En consecuencia, es menester declinar la competencia de este negocio en el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SE INHIBE de conocer de la acción de habeas corpus presentada por DANIEL ANTONIO DÍAZ DE LEÓN, a su favor, y en consecuencia DECLINA la competencia para conocer este caso en el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS PREVENTIVO A FAVOR DE JUAN GALLARDO CONTRA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SIETE (7) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **Néstor Egberto Ureña Batista**, defensor de Oficio del Circuito Judicial de Veraguas, ha presentado acción de habeas corpus preventivo a favor del señor **JUAN GALLARDO** y contra el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial.

Librado el mandamiento de habeas corpus el licenciado A. Relly Sierra Goytía, Magistrado Sustanciador, contestó así:

"PRIMERO: En este Tribunal Superior no ha sido ordenada la detención

del señor Juan Gallardo. A nuestro despacho ingresó procedente del Juzgado Primero del Circuito de Veraguas, Ramo Penal, un proceso seguido contra el señor Gallardo por el delito contra el patrimonio en perjuicio de Molino Telerique, en virtud de apelación de un auto, el cual fue confirmado y devuelto al Tribunal A-quo.

SEGUNDO: Al no haber sido ordenada la detención en este despacho, es imposible tener motivos o fundamentos de hecho y de derecho para la misma.

TERCERO: El señor Juan Gallardo no se encuentra a órdenes nuestras en vista que el proceso que ingresó a nuestro Tribunal fue devuelto al Juzgado Primero del Circuito de Veraguas, Ramo Penal, el día 14 de agosto de 1996."

El licenciado Néstor Egberto Ureña Batista funda su habeas corpus preventivo en los siguientes hechos:

"PRIMERO: Que mi representado fue juzgado por el delito de hurto en perjuicio de Molino Tolerique, S. A., por la Juez Primera del Circuito de Veraguas, Ramo Penal.

SEGUNDO: Que el señor JUAN DE DIOS GALLARDO CASTILLO, fue condenado por el Juzgado en mención, mediante Sentencia N° 144 de 29 de noviembre de 1996, a sufrir la pena de prisión de veinte (20) meses e inhabilitación por igual período.

TERCERO: Que en esa misma resolución la Juzgadora de Primera instancia, convirtió la pena de prisión a días multas, siguiendo nuevas corrientes que hay dentro de nuestro proceso penal, como alternativas a la prisión.

CUARTO: Que esta sentencia fue apelada y revocada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, mediante la decisión de 19 de marzo de 1996.

QUINTO: Que la revocatoria de la medida de reemplazo o conversión de pena, es ilegal y por tanto lleva implícita una ilegal próxima privación de la libertad en perjuicio del derecho que le asiste al señor Juan de Dios Gallardo Castillo."

Los hechos relacionados con este habeas corpus se dan con motivo del hurto de dos mil veintiún balboas (B/.2,021.00) de parte del señor JUAN GALLARDO en perjuicio de la Empresa Molinos Tolerique, S. A. El señor GALLARDO aceptó que había cometido el hurto. El Juez lo condenó a veinte (20) meses de prisión, pero en la misma sentencia de primera instancia le reemplazó la pena por cincuenta (50) días multa, a razón de dos balboas (B/.2.00) el día multa, es decir, cien balboas (B/.100.00), por hurtarse dos mil veintiún balboas (B/.2,021.00). La Fiscal apeló y el caso subió al Tribunal Superior.

Un análisis jurídico del caso demuestra que, efectivamente, puede considerarse la orden de detención contra el señor JUAN GALLARDO la sentencia de segunda instancia que dictó el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, reformando la decisión de primera instancia en cuanto al reemplazo de la pena impuesta de cincuenta (50) días multa, a dos balboas (B/.2.00) por día, por la pena de veinte (20) meses de prisión, por considerar que el Juez de primera instancia, "al hacer la evaluación del caso subjudice, debió tomar en consideración ciertos aspectos tales como la importancia o valor de la cosa hurtada y la conducta del agente posterior al hecho punible, aquí hacemos referencia específicamente a que no consta en el expediente actuación alguna en la cual el imputado se compromete a resarcir los daños sufridos por el ofendido, menos aún, existe un real arrepentimiento del mismo."

En el presente caso estamos en presencia de un proceso penal concluido. El señor GALLARDO se encuentra en situación de cumplir la pena que se le impuso, la

cual está ejecutoriada, razón por la cual la privación de su libertad es totalmente legal, luego de ser procesado y condenado con todos los trámites de la ley.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la orden de detención del señor JUAN GALLARDO.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALEXANDER APOLAYO ESCOBAR Y AMELED ANTONIO APOLAYO CONTRA EL FISCAL SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado GABRIEL ZAMBRANO GONZÁLEZ ha promovido acción de habeas corpus ante esta Superioridad a favor de ALEXANDER APOLAYO ESCOBAR y AMELETH ANTONIO APOLAYO RIVAS, quienes se encuentran detenidos en la Cárcel Pública de Los Santos, a órdenes de la Fiscal Primera Superior del Cuarto Distrito Judicial.

El Magistrado Sustanciador libró mandamiento de habeas corpus contra el funcionario demandado, a fin de que ponga al detenido a órdenes de esta Corporación y rinda un informe, de conformidad con los presupuestos que señala la ley.

En efecto, se ha recibido el referido informe, el cual en su parte medular contiene lo siguiente:

"...

1. Sí, es cierto que ordené la detención preventiva del señor ALEXANDER APOLAYO ESCOBAR, mediante la Resolución calendada veinte (20) de septiembre de este año, por encontrarse imputado por le (sic) supuesta comisión de Delitos CONTRA LA SALUD PÚBLICA (Drogas), dicha resolución se encuentra visible de fojas 114 a 119 del proceso principal;

2. Los motivos de hecho que dieron origen a la privación preventiva de la libertad al señor APOLAYO ESCOBAR, tiene su fundamento en la investigación que al mismo y otros, se le sigue ante esta Agencia del Ministerio Público, por la comisión de delitos CONTRA LA SALUD PÚBLICA (Drogas).

El inicio de la investigación correspondiente se debió a una gran cantidad de información que a nivel confidencial recolectaron las Agencias de las Agencias (sic) de las Policías Técnicas Judiciales y Zonas de Policías (Sub-DIIP) del área con respecto a la asociación para la venta y distribución de drogas en La Villa de Los Santos, por parte de los señores RICARDO, ELIÉCER, CARLOS y JOSÉ ISABEL GARRIDO, AMELET y ALEXANDER APOLAYO, OMAR SAUCEDO, ADRIÁN QUINTERO, ERICK QUICTON, LEONEC BAZÁN y unos sujetos conocidos como JACQUELINE LA MULA y TELETÓN, dejamos constancia que en fase inicial de la investigación de la mayoría de estos señores sólo se conocían sus apodos.

En vista de esta situación se procedió a montar un operativo encubierto de compra controlada de drogas el cual resultó positivo para detectar y posteriormente encontrar droga ilícita así como para la captura del señor ELIÉCER GARRIDO quien fue señalado como el vendedor en este operativo y de los señores CARLOS GARRIDO, RICARDO GARRIDO y AMELET ANTONIO APOLAYO, quienes posterior a la operación llegaron al lugar del hecho tal cual se detalla en las diligencias de folios 9 a 27.

Al proceder a imprimírsele el trámite correspondiente a las investigaciones, la Policía Técnica Judicial (PTJ) de Los Santos y P. T. J. de Las Tablas, remitieron todos y cada uno de los Informes de seguimientos que tienen relación con el presente proceso, entre los cuales existe información obtenida, vigilancia, ubicación de las personas y lugares de venta de drogas, así como la determinación de la asociación entre estos sujetos para el comercio de la droga, mencionándose entre ellos a un sujeto de apodo "SALSITA" el cual corresponde al nombre de ALEXANDER APOLAYO ESCOBAR, quien manifiesta en su propia indagatoria de fojas 98 a 101, se le conoce o le dicen "ALEX".

De igual forma consta de folios 69 a 72 el Informe de Inteligencia suscrito por el Inspector CRISTÓBAL HERRERA y el Detective MANUEL REYES, en donde señalan que uno de los componentes de la Organización que dirigían los Hermanos GARRIDO lo era el señor ALEXANDER APOLAYO (A) "SALSITA", quien prestaba cooperación y auxilio en la comisión del hecho delictivo en investigación.

También debe destacarse la declaración jurada rendida por el señor JOSÉ LONY VÁSQUEZ ÁVILA de fojas 42 a 47, en donde indica que el sujeto "SALSITA" APOLAYO era uno de los que aportaba dinero para comprar droga conjuntamente con los hermanos GARRIDO, para su posterior venta.

Consta en la investigación el Informe de Análisis de Documento de folios 84 a 87 en donde se detallan los documentos encontrados en la residencia de los hermanos GARRIDO y los cuales mantenían escritos sobre los mismos una serie de anotaciones que de manera rudimentaria componen la contabilidad de la organización y entre ella el documento de fojas 89 en donde aparece el apodo de "ALEX" que es ALEXANDER APOLAYO y según la Policía la cantidad de pases de cocaína que al mismo le correspondían.

Por último debemos destacar el Informe de Relación suscrito por el Detective Secundino Avila de la Organización Regional Anti-Drogas, en donde explica la menera (sic) en que estaba organizada la banda así como la relación directa de todos y cada uno de los sujetos involucrados en el presente proceso; también de manera técnica diagrama dicha relación.

Como ustedes podrán observar Honorables Magistrados nos encontramos ante una serie de conductas que mantienen relación directa con delitos de Drogas, entre ellos podemos mencionar la asociación ilícita, la venta de tráfico de droga en el área de La Villa de Los Santos, por lo tanto de acuerdo al Texto único Refundido de las Leyes 23 de 30 de diciembre de 1986 y 13 de 27 de julio de 1994, así como los Artículos 2148 y 2159 del Código Judicial para ordenar como en efecto se ordenó la Detención preventiva del accionante APOLAYO ESCOBAR.

3. El señor APOLAYO ESCOBAR se encuentra detenido a nuestras órdenes en la Cárcel Pública de Chitré, pero debido a la presente acción procedemos a ponerlo a órdenes de la Honorable Corte Suprema de Justicia, hasta que se decida la causa que nos ocupa". (Fs. 6 a 9).

La presente acción de habeas corpus se solicita a favor de los señores

ALEXANDER APOLAYO ESCOBAR y AMELETH ANTONIO APOLAYO RIVAS, quienes efectivamente figuran dentro del listado de personas cuya detención fue decretada por el Fiscal Superior del Cuarto Distrito Judicial, mediante resolución de 20 de septiembre de 1996.

En el ilícito investigado, ya esta Superioridad se pronunció mediante resolución de fecha 18 de octubre de 1996, con motivo de la acción de habeas corpus propuesta a favor de OMAR SAUCEDO, decretándose legal su detención y quien forma parte del listado de personas que señala la resolución de 20 de septiembre de 1996, como supuestos infractores de la ley, en la comisión del delito contra la Salud Pública.

Como lo señalamos en el fallo anterior, se trata de una organización criminal dedicada al tráfico y venta de droga conocida como "COCAÍNA", que opera en la Villa de Los Santos, realizándose una operación encubierta de compra controlada de drogas, la cual fuera ordenada por la autoridad competente. Tal como se desprende del informe transcrito, al efectuarse el allanamiento posterior, se logró comprobar la existencia de la sustancia ilícita.

Ahora bien, en la resolución comentada figura el nombre de AMELETH ANTONIO APOLAYO RIVAS como uno de los miembros que integran esta organización. Aun cuando no consta en el informe del funcionario acusado que éste haya sido detenido, se ha expedido orden en su contra, visible de fojas 114 a 119 del expediente que contiene los antecedentes del caso en estudio. No obstante, existe una vinculación directa, tanto de él como de su hermano ALEXANDER APOLAYO (a) "ALEX" o "SALSITA", que amerita la detención de ambos. Veamos:

A foja 27 del cuaderno que contiene los antecedentes se menciona, entre otros, a AMELETH APOLAYO y ALEXANDER APOLAYO como unas de las personas "... que según las informaciones que se ha recabado a lo largo de esta investigación guardan relación con la venta ilegal de drogas ...". En la declaración jurada rendida por JOSÉ LONNY VÁSQUEZ ÁVILA, que identifica a AMELETH con el apodo de "BEBIGRÓN" (f. 44) e indica que éste y SALSITA APOLAYO, le dan plata a los hermanos GARRIDO para que compren droga y luego ellos la venden en su casa, indicando que la misma está ubicada detrás del Jardín La Cabaña, en una casa que tiene dos pisos.

Se observa a foja 65 del expediente un informe de vigilancia rendido por el Detective II Manuel Reyes, quien expone que en el operativo de vigilancia a los hermanos Garrido, debido a las denuncias, investigaciones e informes confidenciales que constan en el expediente, se tiene conocimiento de que éstos se dedican a la venta y tráfico de drogas en el área de la Villa de Los Santos, quienes se dirigían en un Toyota Carina, color celeste con matrícula 899166, hacia la Ciudad de Chitré, en compañía de los Hermanos APOLAYO. Al llegar a esta Ciudad, entraron a un local comercial (jorón) en donde se le acercaron varias personas en actitud sospechosa.

En otro informe que se aprecia a foja 78 del expediente, el Cabo 12112, CARLOS ELÍAS VERGARA, expresa que de acuerdo a un informante de entero crédito, mediante una llamada telefónica manifestó que los señores: RICARDO GARRIDO (a) RICKY, JOSÉ I. GARRIDO (a) YUYO, ELIÉCER GARRIDO (a) ELIE, PATO, PIYOYO Y LA MUJER JACKELINE (a) LA MULA, PAPEL, primo de los Garrido y uno apodado SALSITA de apellido APOLAYO, tienen una organización de venta y consumo de drogas en la Villa de Los Santos, utilizando la cercanía de la Bodega NANDY o unos cuartos a sus alrededores o el vehículo Toyota Carina, (sobre el cual hicimos referencia anteriormente), el que estacionan en cualquier calle o actividad social para realizar venta de drogas. Inmediatamente, a foja 79 consta la verificación de la información, en donde se constata que en la Estación Lissy y la Bodega Nandy, se encontraban en movimiento sospechoso y debidamente identificados, los señores antes mencionados, incluyendo a Apolayo "SALSITA", quienes eran abordados por una gran cantidad de consumidores de drogas del área.

De acuerdo a la propia declaración indagatoria de los hermanos APOLAYO, aceptan que tienen una relación de amistad con los hermanos GARRIDO, y se corrobora con el informe secretarial a foja 68 del Detective II MANUEL REYES, quien indica que al llegar a la Sub Agencia de la Policía Técnica de la Villa de

Los Santos custodiando a ALEXANDER APOLAYO, el señor RICARDO GARRIDO (a) "RICKY", quien se encontraba aprehendido en dicho lugar, por el supuesto delito contra la salud pública, "... manifestó en voz alta y riéndose al momento de ver a "SALSITA", O SOLAMENTE FALTA PATO".

Por último, se aprecia de fojas 84 a 87 del expediente, el análisis de los documentos encontrados en la diligencia de allanamiento en la residencia de los hermanos Garrido, uno identificado como Documento B (f. 85), en el que aparecen los apodos de la mayoría de las personas antes señaladas, con unas cantidades al lado de cada uno de ellos, presumiéndose que es la cantidad de droga repartida para la venta.

En el caso en estudio se ha comprobado el delito de tráfico de drogas, el cual tiene fijada pena mínima de prisión superior a los dos (2) años según la Ley 23 de 1986, y aparecen evidencias de vínculo de participación en el ilícito de los accionantes en habeas corpus, por lo que el Pleno considera que la orden de detención de los señores AMELETH APOLAYO y ALEXANDER APOLAYO, no ha infringido el debido proceso establecido en la Constitución Nacional ni en las leyes de la República, así como tampoco violan las normas jurídicas que regulan la detención preventiva, por tanto, es procedente la presente medida cautelar de los referidos señores, por haberse dado cumplimiento a los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva dictada contra los señores ALEXANDER APOLAYO ESCOBAR (a) "ALEX o SALSITA" y AMELETH ANTONIO APOLAYO RIVAS (a) "BEBYGRÓN o BEBY", y ORDENA sean puestos nuevamente a órdenes de la FISCALÍA PRIMERA SUPERIOR DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE HÉCTOR ELÍAS SUÁREZ ZULUAGA Y JOSÉ GARCÍA HERNÁNDEZ EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La Lcda. MAYRA GAVIRIA RUIZ, actuando en representación de HÉCTOR ELÍAS SUÁREZ ZULUAGA y JOSÉ GARCÍA HERNÁNDEZ, ha interpuesto acción de habeas corpus contra el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

Acogida la acción se libró mandamiento de habeas corpus contra dicho funcionario, quien mediante Oficio N° 10706 de 7 de octubre de 1996 expuso lo siguiente:

> "Se nos ha corrido traslado de la acción de Habeas Corpus interpuesta por la Licenciada MAYRA GAVIRIA RUIZ a favor de HÉCTOR ELÍAS SUÁREZ Z., y en contra del infrascrito.
>
> En relación a la acción presenta (sic) tenemos que informarle que el expediente seguido a HÉCTOR ELÍAS SUÁREZ y otros se encuentra actualmente en el Juzgado Primero del Tercer Circuito Judicial, en

> razón de acción presentada por otra de las partes, por lo que se nos hace imposible pronunciarnos al respecto ya que no contamos con copias del mismo dado el volumen de fojas con que cuenta."

Frente a la situación planteada, se deduce que el negocio sometido a consideración en esta oportunidad, la Corte Suprema carece de competencia para conocer del mismo, como quiera que según lo establece el numeral 2 del artículo 2602 del Código Judicial, los Tribunales Superiores de Distrito Judicial son competentes para conocer de la acción de habeas corpus por actos que procedan de autoridades o funcionarios con mando y jurisdicción en una provincia, lo cual es aplicable a la acción de habeas corpus que se examina, ya que según expresa el Fiscal Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, el expediente seguido a HÉCTOR ELÍAS SUÁREZ Z. y otros, se encuentra en el Juzgado Primero del Tercer Circuito Judicial.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SE INHIBE del conocimiento de la acción de habeas corpus presentada por la Lcda. MAYRA GAVIRIA RUIZ a favor de HÉCTOR ELÍAS SUÁREZ y JOSÉ GARCÍA HERNÁNDEZ y DECLINA su conocimiento en el Tribunal Superior Justicia del Tercer Distrito Judicial, para que se continúe con el trámite que la ley establece.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JHON JAIRO VALENCIA LAMIR EN CONTRA DEL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Esteban García M. ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de Jhon Jairo Valencia Lamir y contra el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

Acogido el auto se libró el mandamiento de habeas corpus contra el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas, quien contestó, mediante Oficio N° 11337 de 22 de octubre de 1996, lo siguiente:

> "PRIMERO: este Despacho no ha ordenado la detención preventiva del prenombrado.
>
> SEGUNDO: El señor JOHN JAIRO VALENCIA reporta una orden de impedimento de salida de nuestro país, ordenada por este Despacho, mediante oficio N° 1356 de 6 de abril de 1992.
>
> Por tal motivo se dió (sic) inicio a su investigación, de lo que se desprendió que el mismo mantenía una orden de detención en el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Colón, por lo que fue puesto a órdenes de ese Despacho." (fs. 5 y 6)

Del anterior informe se deduce claramente que en el negocio sometido a consideración en esta oportunidad, la Corte Suprema carece de competencia para conocer del mismo, como quiera que en base a lo que establece el numeral 2 del artículo 2602 del Código Judicial, los Tribunales Superiores de Distrito

Judicial, son competentes para conocer de la acción de habeas corpus por actos que procedan de autoridades o funcionarios con mando y jurisdicción en una provincia, lo cual es aplicable a la acción de habeas corpus que se examina, ya que según lo que expresa el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas el señor Jhon Jairo Valencia Lamir fue remitido a órdenes del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Colón.

Procede entonces, declinar el conocimiento de la presente acción de habeas corpus ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial.

En consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2588 del Código Judicial, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SE INHIBE del conocimiento de la acción de habeas corpus presentada por el licenciado Esteban García M. en representación Jhon Jairo Valencia Lamir y DECLINA su conocimiento en el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, para que se le de el trámite que la ley establece.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS PATTERSON BURKER CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **Noel E. Vargas T.** presentó acción de Habeas Corpus a favor de **CARLOS PATERSON BURKER** y en contra del Fiscal Auxiliar de la República, por considerar que la privación de la libertad que sufre desde 26 de octubre de 1996, es ilegal.

Librado el mandamiento de Habeas Corpus, el Fiscal Auxiliar de la República, **Carlos Augusto Herrera**, lo contestó de la siguiente manera:

> "En relación a darle respuesta a mandamiento de Habeas Corpus, librado en contra del suscrito y en favor de CARLOS PATTERSON BURKER, informo a usted, que el expediente fue remitido a la FISCALÍA QUINTA DEL CIRCUITO DE PANAMÁ, mediante Oficio N° 16224, del 30 de octubre de 1996. La libertad del aprehendido a la Policía Técnica Judicial, con el Oficio N° 16221, el 30/10/96".

En vista al Oficio anterior, en donde se pone de manifiesto que se ordeno la libertad del aprehendido y se remitió el expediente a la Fiscalía Quinta del Circuito de Panamá, no es dable continuar con este negocio.

Por lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EL CESE DE PROCEDIMIENTO en esta acción de Habeas Corpus por haber obtenido la libertad la persona a cuyo favor se interpuso.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ MANUEL RAMOS AGUIRRE CONTRA EL DIRECTOR GENERAL DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **MARCO ANTONIO HERRERA MOW** presentó acción de Habeas Corpus a favor de **JOSÉ MANUEL RAMOS AGUIRRE**, quien según la accionante "se encuentra privado de su libertad de manera ilegal" en una celda de la Policía Técnica Judicial, a órdenes del Director de dicha dependencia.

Librado de inmediato el respectivo mandamiento contra la autoridad acusada, ésta informó que el favorecido con esta acción había sido puesto en libertad por orden del Fiscal Auxiliar de la República (fs. 7). Sin embargo, se libró nuevamente el mandamiento, ahora contra el Fiscal Auxiliar, quien respondió en los siguientes términos:

"OFICIO N° 16217-FAR
Panamá, 30 de octubre de 1996.
Magistrado Ponente de la Corte Suprema de
Justicia. E. S. D.

Señor Magistrado:

En contestación a Mandamiento de Habeas Corpus presentado a favor del señor JOSÉ MANUEL RAMOS AGUIRRE, en contra del suscrito Fiscal Auxiliar de la República, rindo a usted el presente informe.

1. No es cierto que se haya ordenado la detención preventiva del señor JOSÉ MANUEL RAMOS AGUIRRE, pues mediante resolución del 24 del mes y año en curso, y Oficio N° 15929 de las calendas antes citada, dirigido al Director de la Policía Técnica Judicial, se dejó sin efecto la aprehensión del recurrente RAMOS AGUIRRE.

2. No tiene razón de ser en base al punto anterior.

3. No tiene razón de ser en base a los puntos anteriores.

De conformidad a lo normado en el artículo 2582 del Código Judicial, hacemos de su conocimiento, que el encartado fue indagado en este despacho, en base a la denuncia suscrita por el señor LUIS FELIPE VILLARREAL JURADO, por la comisión de delitos Contra el Pudor y la Libertad Sexual, en perjuicio de su hija, menor de edad de nombre LIMA IRENE VILLARREAL AMAYA, negocio este que mediante Oficio N° 15931 del 25 de los corrientes, fue remitido a la Fiscalía 7ª, de Circuito.

De usted atentamente,

LCDO. CARLOS AUGUSTO HERRERA
Fiscal Auxiliar la República."

De este informe se colige que el señor JOSÉ MANUEL RAMOS AGUIRRE no se

encuentra privado de su libertad, pues el Fiscal Auxiliar mediante resolución de 24 de octubre de 1996 dejó sin efecto su aprehensión y remitió el negocio a la autoridad competente. Por ello a juicio de este tribunal de habeas corpus, procede concluir el trámite de esta acción constitucional.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, se ORDENA EL CESE del procedimiento del Habeas Corpus propuesto a favor JOSÉ MANUEL RAMOS AGUIRRE y el ARCHIVO DEL EXPEDIENTE.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ATANEL SANJUR ARENAS CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE. ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada **SARAI ISABEL BLAISDELL NÚÑEZ**, ha interpuesto Recurso de Habeas Corpus a favor del señor **ATANEL SANJUR ARENAS**, quien se encuentra detenido por el delito contra el **PUDOR y la LIBERTAD SEXUAL** en perjuicio de la menor **XIOMARA GARCÍA DUARTE.**

Librado el Mandamiento de Habeas Corpus, la autoridad demandada contestó en los siguientes términos:

"Panamá, 1° de noviembre de 1996
Licenciado
ELIGIO A. SALAS
Honorable Magistrado
Corte Suprema de Justicia
Ciudad

Honorable Magistrado:

En relación a darle respuesta a mandamiento de Habeas Corpus, librado en contra del suscrito y en favor de ATANEL SANJUR ARENAS, informo a usted, que el expediente fue remitido a la FISCALÍA ESPECIAL DE ANCÓN, mediante Oficio N°15703, del 21 de octubre de 1996. El traspaso del detenido a la Cárcel Modelo, con Oficio N° 15703.

Sin otro particular, quedo de usted,

(fdo.) Carlos Augusto Herrera
Fiscal Auxiliar de la República".

Ante la circunstancia expresada en el informe transcrito, indicando que el beneficiario de la acción no se encuentra a órdenes de la Fiscalía Auxiliar de la República debido a que el expediente fue remitido a la **FISCALÍA ESPECIAL DE ANCÓN**, el Pleno de la Corte no es competente para conocer de esta acción constitucional, a tenor de lo dispuesto en el artículo 2602 del Código Judicial.

En consecuencia, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA el conocimiento de la presente acción de Habeas Corpus al SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE IVÁN GABRIEL VÁSQUEZ TUÑÓN CONTRA LA JUEZ TERCERA DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado a esta Corporación, en grado de apelación, la acción de habeas corpus promovida por el licenciado Nibardo Elías Cabrera a favor de Iván Gabriel Vásquez Tuñón y contra la Jueza Tercera del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial.

Mediante sentencia de 19 de septiembre de 1996, el Segundo Tribunal Superior de Justicia resolvió en primera instancia esta acción y declaró legal la detención de Iván Gabriel Vásquez con base en las siguientes razones:

> "De acuerdo a las constancias procesales, GRISELDA ORTIZ, menor de 16 años, fue víctima de una violación el 19 de marzo de 1996 por parte de un sujeto llamado IVAN VÁSQUEZ. La afectada señaló que alrededor de las nueve de la noche se montó en el taxi de dicho sujeto y que la obligó a quitarse la ropa, a que mantuviera sexo oral y relaciones sexuales e incluso le metió tres dedos en sus partes íntimas. Señaló que el sujeto le gritó disgustado que no era señorita por lo que ella se bajó del auto prácticamente desnuda y éste arrancó el auto y le tiró una camiseta para que se cubriera. Ella corrió por los alrededores de los Hogares Crea donde fue auxiliada por Tilcia Aparicio (fs. 18-20), Jaime Raúl Ortiz (fs. 21-23), Estela de Lourdes Guardia (fs. 33-35) quienes laboran en dicha Institución.
> ...
> Por su parte ITZEL VÁSQUEZ (fs. 109-111), MARIO ALBERTO IGUALA (fs. 112-113), LUIS CARLOS ARIZA (fs. 114-115) y AIDA ELENA PÉREZ DE MENDOZA (fs. 116-117), señalan que el imputado mantenía un contrato de transporte que consistía en buscarlos al trabajo ubicado en el McDonald de Vía España a las doce de medianoche y llevarlos sus casa (sic) y que para la fecha del incidente los transportó.
>
> En audiencia preliminar celebrada el 16 de agosto de 1996, se abrió causa criminal contra el procesado.
> ...
> Este Tribunal considera que existen suficientes elementos de convicción para mantener detenido a IVAN GABRIEL VÁSQUEZ TUÑÓN. En su contra consta el señalamiento directo de la joven afectada, incriminación que se ve aumentada con los testimonios de las personas que se encontraban en HOGARES CREA y vieron a la joven prácticamente desnuda y muy afectada por la agresión sexual. El delito de violación desde un inicio exige la aplicación de la detención preventiva, ya que tiene una pena superior a los dos años

de prisión y no es excarcelable bajo fianza. Estos elementos conducen a justificar la orden de detención preventiva."

De acuerdo con el informe rendido por la funcionaria demandada con motivo de la acción de habeas corpus, la detención preventiva de Iván Gabriel Vásquez Tuñón no fue ordenada por su despacho sino decretada por el Fiscal Auxiliar de la República mediante providencia de 26 de marzo de 1996. Además dicho informe señala que en Audiencia preliminar llevada a cabo el día 16 de agosto de 1996, se abrió causa criminal contra Iván Gabriel Vásquez Tuñón por la supuesta infracción de las normas legales contenidas en el Capítulo I, Título VI, del libro II del Código Penal, reformado por la Ley 27 de 16 de junio de 1995, relacionado con los delitos contra el pudor y la Libertad sexual (fs. 20-21).

El proceso penal en estudio se inicia cuando la señora Santa Cristina Ortiz Tejada presentó querella, ante la División de Delitos contra el Pudor y la Libertad Sexual de la Policía Técnica Judicial, el 23 de marzo de 1996, porque su hija Griselda Ortiz había sido víctima de violación carnal, señalando como autor del delito a Iván Gabriel Vásquez Tuñón (fs. 25-27).

De foja 29 a 32 del sumario se lee la declaración jurada que rindió Griselda Ortiz, quien fue la víctima del hecho punible que se denunció. En su declaración ella relata que el martes 19 de marzo de 1996 fue llevada a un lugar llamado "El Peñón", por un muchacho llamado Chacho, conductor de un taxi, quien la obligó a tener relaciones sexuales y que incluso la amenazó de muerte de esta forma: "... me dijo que yo no era señorita que lo estaba engañando, (sic) y que yo tenía que darle algo, por que (sic) sino no iba a salir viva de ahí, y yo le decía que yo no lo había engañado y me puse a llorar ..."

El examen médico forense de Griselda Ortiz, muestra que la joven presenta un himen anular no desflorado, sin embargo ésta manifestó en su declaración que fue penetrada además, dicho examen también muestra señales de violencia externa en brazos, piernas y tronco, todo lo cual indica el uso de fuerza (foja 8).

Consta en autos la declaración de Jaime Raúl Ortiz Esper (fs. 21-23) en la cual manifestó que el día miércoles 20 de marzo de 1996, a las seis y cuarto de la mañana, por el área de Hogares Crea Femenino situado en las Cumbres, encontró a la joven Griselda Ortiz Plummer semi-desnuda y muy asustada, por lo que se fue al centro de rehabilitación femenino en busca de alguien que la auxiliara. Por otro lado consta en el expediente las declaraciones de Tilcia Oderay Aparicio (fs. 18-20) y Estela de Lourdes Guardia (fs. 33-35) quienes habitan en el Centro de Rehabilitación Hogares Crea, y corroboran que efectivamente el señor Jaime Raúl Ortiz les avisó de la presencia de una muchacha en los predios de la Institución. Además, afirman que como ésta necesitaba ayuda procedieron a auxiliarla suministrándole ropa y alimento. También declararon que la joven les manifestó que había sido violada en el área de El Peñón por un sujeto que conocía y que luego ella había corrido por el monte hasta la cerca que bordea la Institución, y por último estas testigos informaron lo sucedido a la policía de Alcalde Díaz.

A foja 68 del sumario se lee la providencia de 26 de marzo de 1996, por medio de la cual se ordenó la declaración indagatoria de Iván Gabriel Vásquez Tuñón a quien se imputa la comisión del delito de violación carnal en perjuicio de Griselda Ortiz. Aquel, al rendir la indagatoria ordenada negó haber violado a esta joven y manifestó que son mentiras los cargos que ella le hace porque en la fecha y hora en que ocurrieron los hechos él estaba trabajando en su taxi, cumpliendo con unos contratos de transporte celebrados con varios empleados del McDonald de Vía España. Sin embargo reconoció haber recogido a Griselda Ortiz en el sector N° 1 de Gonzalillo y afirma que ella le manifestó que deseaba pasar el tiempo con él, proposición que no aceptó, dejándola en la entrada de Gonzalillo. También admitió haberse presentado en la casa de la señora Santa Cristina Ortiz, madre de la víctima, con el fin de averiguar cual era el problema en que la joven lo había involucrado.

Por estos cargos, la Jueza del conocimiento llamó al detenido Vásquez Tuñón a responder en juicio. Tanto en la diligencia en que se ordena su detención preventiva, como en el auto de enjuiciamiento, se le imputa la comisión de un

delito contra el pudor y la libertad sexual sancionado con pena mínima de dos años de prisión, tal como lo exige el artículo 2148 del Código Judicial para aplicar la medida cautelar de detención preventiva. Además en ambas actuaciones judiciales se señalan los elementos probatorios por medio de los cuales se ha comprobado la comisión del delito y los indicios que vinculan a Vásquez Tuñón con el ilícito perpetrado contra la joven Griselda Ortiz Plummer, cumpliendo así con lo ordenado por el artículo 2159 del Código Judicial.

Los testimonios de Itzel Vásquez (fs. 109-111), sobrina del imputado, de Mario Alberto Iguala (fs. 112-113), Luis Carlos Ariza (fs. 114-115) y de Aida Elena Pérez de Mendoza (fs. 116-117), quienes laboran en el restaurante MacDonald de Vía España, y tienen contrato de transporte con el procesado Ivan Gabriel Vásquez Tuñón, deberán ser valorados al dictar la sentencia de primera instancia, tomando en consideración lo afirmado por los testigos Jaime Raúl Ortiz, Tilcia Aparicio, Estela de Lourdes Guardia, el señalamiento directo que hace la ofendida Griselda Ortiz, y las demás diligencias de investigación practicadas.

En mérito de lo expuesto, la detención preventiva del señor Iván Gabriel Vásquez es legal, y el Pleno de esta Corporación de Justicia debe confirmar la sentencia de primera instancia en la que así lo declara el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley CONFIRMA la sentencia dictada el 19 de septiembre de 1996 por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, del Primer Distrito Judicial, mediante la cual se declara LEGAL la detención del señor Iván Gabriel Vásquez Tuñón, ordenada por el señor Fiscal Auxiliar de la República y mantenida por la Jueza Tercera del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial y DISPONE que el detenido sea puesto a órdenes de esta funcionaria judicial.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ GUILLÉN CONTRA EL FISCAL SEXTO DE CIRCUITO DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Procedente del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial se ha recibido la apelación presentada por el licenciado JOSÉ PÍO CASTILLERO, contra la sentencia dictada por ese cuerpo colegiado el 2 de octubre de 1996, mediante la cual se declara legal la detención decretada por el Fiscal Sexto de Circuito de Panamá contra JOSÉ GUILLÉN, dentro del sumario que se le instruye por el delito de robo a mano armada en perjuicio de JOSÉ VELÁZQUEZ SÁNCHEZ.

En la sentencia apelada se indica que la detención preventiva fue dispuesta y ejecutada formalmente en la diligencia de fecha 23 de mayo de 1996, en la que se atendieron todos los aspectos formales que requiere la ley para decretar la medida cautelar.

El Tribunal Superior en parte del fallo manifiesta:
"...
El que el diagnóstico apunte a una imputabilidad disminuida, esto no

> significa de modo alguno que GUILLÉN SAM sea irresponsable de sus acciones, sino que sigue siéndolo, empero en un menor grado de reproche. De allí entonces que la Ley contemple para estos la aplicación de medidas de seguridad, más no penas de prisión (compárese con los artículos 112 e ibídem del Código Penal), cuales requieren un estricto seguimiento. La aplicación de estas medidas son aplicables en cualquier estadio del proceso (instructora, calificación y plenario), pero que esto no es óbice para que se decrete la medida atacada como ilegal, previa valoración de las conductas imputadas y posible condición de peligrosidad del sujeto, cual es el caso debatido.
>
> No puede esta Corporación de Justicia bajo ningún concepto soslayar que en principio las presuntas conductas vulneradas por JOSÉ MARÍA GUILLÉN SAM, lo son el delito de robo, contra la libertad individual y contra la salud pública (drogas), sin perjuicio de que se trata de una medida de tipo personal que se dispuso y ejecutó formalmente en la diligencia calendada 23 de mayo de 1996, (fs. 27-28), en tanto que previamente se ordenó recabar su indagatoria (fs. 18-19), por lo que en este aspecto se atienden las formalidades requeridas por la Constitución y la Ley. ...".

El proponente del habeas corpus indica que el favorecido con la acción, JOSÉ GUILLÉN, tiene imputabilidad disminuida, y por lo tanto, no le son aplicable penas, sino medidas de seguridad, de acuerdo a lo que establecen los artículos 112 y 113 del Código Penal.

Procede el Pleno a resolver el presente proceso constitucional, confrontando los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, que establecen los presupuestos legales que deben concurrir para considerar fundamentada la detención preventiva del individuo.

En primer término, para poder decretar la detención preventiva de un individuo, el hecho punible a él reprochado debe tener como pena mínima dos (2) años de prisión. El presente caso se trata del delito de robo a mano armada, cuya pena mínima es de cinco (5) años de prisión, la cual supera el mínimo exigido para declarar la detención preventiva.

De conformidad con lo normado por el artículo 2159 del Código Judicial, la detención fue dictada por funcionario competente mediante resolución motivada, en que se expresa el hecho punible, los elementos que demuestran su existencia y las pruebas que existen contra JOSÉ MARÍA GUILLÉN SAM, al ser señalado directamente por el denunciante, señor JOSÉ VELÁZQUEZ.

El señor JOSÉ VELÁZQUEZ, en parte de la ampliación de la denuncia, expresa:

> "..., Señor Inspector, el auto le hace falta el alto (sic) voz de radio transmisor, ya que el mismo fue arrancado, y posteriormente se recuperó el vehículo Toyota tercel color blanco, con matrícula comercial N° 3632, en el sector del relleno de Curundú, logrando la captura de dos sujetos uno mayor de edad y un menor de edad, ellos fueron llevados al cuartel de Curundú, entre otros sujetos mediante el operativo, y estando en el lugar rindiendo mi reporte pude identificar a uno de los sujetos, al mayor de edad, con el nombre de MARIO GUILLÉN, el mismo era de contextura robusta, de cabello negro, de tez trigueña, el mismo tiene con (sic) de 19 años de edad a 30 años de edad, este fue el sujeto, que se me sento (sic) en la parte de adelante del taxi, este me decía que le diera valor al taxi y que me quedara callado o si no me iba a explotar, y luego me subieron al multifamiliar de Curundú, color chocolate, y me amarraron, dejándome abandonado en la azotea del edificio antes mencionado ...".

La Corte coincide pues, plenamente con lo planteado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, dado que aunque al sindicado se le haya diagnosticado "imputabilidad disminuida", su estado de peligrosidad permite decretar la medida cautelar a él impuesta, además en este caso concurren las exigencias preliminares

que hacen procedente la detención del favorecido con esta acción de habeas corpus. Por ello, hasta el momento se justifica la detención del prenombrado JOSÉ MARÍA GUILLÉN SAM, sin perjuicio de que posteriormente pueda cambiar su situación.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia de 2 de octubre de 1996, dentro de la acción de habeas corpus interpuesta por JOSÉ MARÍA GUILLÉN SAM, mediante apoderado judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MANUEL DE JESÚS SILVA CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado AGUSTÍN R. SELLHORN, presentó acción de habeas corpus preventivo en favor del señor MANUEL DE JESÚS SILVA B., y contra el FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA, quien supuestamente ha emitido la orden de detención en contra de su representado.

Librado el mandamiento en contra del funcionario demandado, se le conminó para que dentro del término de ley rindiera un informe acerca de si ordenó la detención, los motivos o fundamentos de hecho que tuvo para ello y si mantiene a sus órdenes a la persona favorecida con esta acción, o, en caso de haber transferido a otro funcionario, indicar exactamente a quién, en qué tiempo y por qué causa hizo dicha transferencia.

El Fiscal Auxiliar de la República, contestó el mandamiento, en los siguientes términos:

"Honorable Magistrado:

En relación a darle respuesta a mandamiento de Habeas Corpus, librado en contra del suscrito y en favor de MANUEL DE JESÚS SILVA, informo a usted, que el expediente fue remitido a la FISCALÍA SÉPTIMA DEL CIRCUITO, mediante Oficio N° 15931, del 25 de octubre de 1996. La libertad del aprehendido a la Policía Técnica Judicial, con el oficio N° 15929 de 24-10-96.

De usted, atentamente,
(fdo.)
Licdo. Carlos Augusto Herrera
Fiscal Auxiliar de la República".

De la lectura de la nota transcrita se desprende que actualmente el sindicado se encuentra a órdenes de la FISCALÍA SÉPTIMA DE CIRCUITO, por lo que correspondería declinar el conocimiento al Segundo Tribunal Superior, sin embargo, en la parte final de la nota, el Fiscal Auxiliar de la República manifiesta que mediante oficio N° 15929 se ordenó la libertad del sindicado.

Ante tal situación, el Magistrado Sustanciador, por medio de la Secretaria

General de la Corte, solicitó copia autenticada de la nota de libertad del señor MANUEL DE JESÚS SILVA, que fuera emitida por ese despacho de instrucción (fs. 10)., dado que ante un habeas corpus preventivo, es necesario establecer si el favorecido con esta acción ya había sido aprehendido y puesto en libertad, dado que procedería entonces, el cese de la acción.

Sin embargo, al día siguiente, el 6 de noviembre de 1996, el Fiscal Auxiliar de la República envía a esta Superioridad el oficio 15522, cuyo texto es el siguiente:

"Licenciado
CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General de la Corte
Suprema de Justicia.
E. S. D.

Agradecemos con el mayor de los respetos, a atención que nos dispense, en cuanto a los datos y la acción solicitada en el presente documento.

ACCIÓN: Envío a usted copia autenticada de nuestro oficio N° 15929 fechado el 24 de octubre de 1996.

Delito: CONTRA EL PUDOR Y LA LIBERTAD SEXUAL.

Denunciante: LUIS FELIPE VILLARREAL JURADO.

Imputado (s): JOSÉ MANUEL RAMOS AGUIRRE.

Otros: MANUEL DE JESÚS SILVA NO HA SIDO APREHENDIDO.

Lo anterior guarda relación con su oficio 1751 de 5/11/96.

Sin otro particular,

Lic. Carlos Augusto Herrera
Fiscal Auxiliar de la República".

En base a lo anterior, el Pleno observa que el señor MANUEL DE JESÚS SILVA no ha sido aprehendido, no obstante, el expediente contentivo de las sumarias contra MANUEL DE JESÚS SILVA, como señala el Fiscal Auxiliar de la República, ha sido remitido a la Fiscalía Séptima de Circuito, razón por la cual este Pleno carece de competencia para conocer la causa constitucional. Por lo que la Corte debe declinar el conocimiento de la acción, pues por tratase de un habeas corpus preventivo es necesario determinar si existe o no la orden de detención que alude el favorecido, y así poder establecer la legalidad o ilegalidad de la misma, no obstante la autoridad judicial competente es el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

El artículo 2588 del Código Judicial establece que cuando la persona contra quien se dirige el mandamiento de habeas corpus no tiene bajo sus órdenes al detenido y manifiesta que el mismo se encuentra a órdenes de otro funcionario, si el tribunal no es el competente para seguir conociendo de la acción, deberá enviar, sin dilación alguna, los autos al funcionario judicial competente. En consecuencia, siendo esta la situación que se plantea en el caso en estudio, es procedente remitir la presente acción de habeas corpus al Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLINA EL CONOCIMIENTO de la presente acción de habeas corpus ante el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Cúmplase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FIDENCIO GONZÁLEZ Q. CONTRA LA DIRECCIÓN NACIONAL DE CORRECCIÓN. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado al conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la acción de habeas corpus interpuesta a favor del señor **FIDENCIO GONZÁLEZ QUIROZ**, contra la Dirección Nacional de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia. El beneficiario del habeas corpus alega que la detención que sufre es violatoria del artículo 22 de la Constitución Nacional, porque se realizó sin que mediara orden de arresto previa.

Se libró mandamiento contra la autoridad acusada, quien respondió mediante Oficio N° 3862-DNC. 96. S. de 1° de noviembre de 1996, lo siguiente:

> "A. En ningún momento la suscrita ha ordenado la detención del señor **FIDENCIO GONZÁLEZ QUIROZ**.
>
> B. No podemos hacer referencia a motivos o fundamentos de hecho o derecho de la detención, dado que esta Dirección no la ha ordenado.
>
> C. El señor **FIDENCIO GONZÁLEZ QUIROZ** se encuentra a órdenes de esta Dirección, guardando prisión en la Cárcel Modelo, toda vez que fue condenado por el Juzgado Quinto de Circuito de lo Penal del Primer Distrito Judicial de Panamá, mediante Sentencia de fecha 14 de agosto de 1995, Reformada por el Segundo Tribunal Superior el 22 de marzo de 1996, el cual le revoca DOS (2) años de prisión por la comisión del delito de LESIONES PERSONALES DOLOSAS en perjuicio del señor Héctor Gustavo Quiroz." (Foja 15).

Igualmente, se remitió a esta corporación judicial el expediente contentivo del proceso penal seguido al señor FIDENCIO GONZÁLEZ, por el delito de lesiones personales en perjuicio del señor HÉCTOR GUSTAVO QUIROZ.

De fojas 98 a 102 de ese expediente, es consultable la sentencia proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia a la que se refiere el informe transcrito, mediante la cual revocó la suspensión provisional de la pena y decretó la detención del beneficiario de la presente acción constitucional, con el objeto de que cumpliera con la pena de prisión de dos años que le fuera impuesta mediante sentencia proferida por el Juzgado Quinto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Penal, el 14 de agosto de 1995.

De lo anteriormente señalado se colige que la detención del señor FIDENCIO GONZÁLEZ no tiene vicios de ilegalidad, ya que la privación de libertad que sufre obedece a una sentencia condenatoria impuesta dentro de un proceso penal en el cual se le otorgaron todas las garantías para su defensa.

Por tanto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA y por autoridad de la LEY, DECLARA LEGAL la detención del señor FIDENCIO GONZÁLEZ QUIROZ y ORDENA que sea puesto, nuevamente, a órdenes de la Dirección Nacional de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MARIO AUGUSTO KING CERRUD CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mientras se surtía el trámite de lectura del proyecto de resolución de la acción de habeas corpus interpuesta por el licenciado HUMBERTO MOSQUERA BETHANCOURT en favor del señor **MARIO AUGUSTO KING CERRUD** contra la detención preventiva decretada por el Fiscal Especializado en Delitos relacionados con Drogas, el apoderado del detenido presentó en Secretaría escrito mediante el cual manifiesta su intención de desistir.

Pues bien, la Corte ha sostenido que en materia de habeas corpus es factible el desistimiento siempre y cuando quien lo manifieste sea el detenido, su defensor o la persona que interpuso la acción.

Como quiera que en el presente negocio la expresión de desistimiento proviene del abogado del detenido, el Pleno nada tiene que objetar y, en consecuencia, procede admitir el desistimiento.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el desistimiento presentado por el Licenciado HUMBERTO MOSQUERA BETHANCOURT dentro de la acción de habeas corpus interpuesta en favor del señor MARIO AUGUSTO KING CERRUD; en consecuencia, ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS MUÑOZ POPE (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE MANUEL CENOBIO CASTILLO GONZÁLEZ, CONTRA EL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Narciso Herrera Grau, interpuso acción de habeas corpus a favor del señor **MANUEL CENOBIO CASTILLO GONZÁLEZ**, y contra el **DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL**.

Una vez librado el correspondiente mandamiento ejecutivo contra la

autoridad acusada quien, mediante Nota N° A. L. 1471-96 de 6 de noviembre de 1996 (f. 4), manifestó que el señor MANUEL CENOBIO CASTILLO GONZÁLEZ, se encuentra bajo su custodia pero a órdenes de la Fiscalía Auxiliar de la República, desde el día 5 de noviembre de 1996.

Se libra nuevamente mandamiento de habeas corpus pero en esta ocasión contra el Fiscal Auxiliar de la República, contestando por medio de Oficio N° 16723 de 12 de noviembre de 1996, que el señor CASTILLO GONZÁLEZ, fue puesto a órdenes de la Fiscalía Segunda del Circuito de Panamá, situación que varía la competencia de éste Tribunal.

En consecuencia la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLINA el conocimiento de esta acción ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial y ORDENA, su inmediata remisión.

BASE LEGAL: artículos 2588 y 2602 del Código Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JAVIER ARRIETA SANTOS CONTRA LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada **Teresa Ibáñez**, Defensora de Oficio de **JAVIER ARRIETA**, presentó acción de Habeas Corpus a favor de su patrocinado y contra el Fiscal Especial en Delitos relacionados con drogas, quien ordenó la detención.

Librado el mandamiento de Habeas Corpus, el fiscal de drogas lo contestó de la siguiente manera:

"A. FUNDAMENTOS DE HECHO

El 3 de septiembre pasado, funcionarios de la Policía Técnica Judicial, fueron notificados telefónicamente, por funcionarios de la empresa DHL, de la existencia de una mesa que les parecía sospechosa. Manifestaron además, que uno de los trabajadores de la empresa había perforado dicha mesa, brotando de la misma una sustancia en forma de polvo, color blanco.

Habida dicha información, se procedió a verificar la misma, a través de una Inspección Ocular al citado bien, estableciéndose, de manera presuntiva, con la prueba de campo, la existencia de la sustancia ilícita revestida de las características arriba descritas.

Expresaron los empleados de DHL, que la citada mesa fue llevada por tres sujetos en un vehículo pick up, con matrícula 32897 y que la misma era remitida por IRVING JAÉN.

Posteriormente se pudo establecer que el vehículo en el cual se llevó la mesa para su envío es de propiedad del señor JAVIER

ARRIETA.

JAVIER ARRIETA al ser inquirido en relación a su vinculación con el hecho investigado, manifestó que ese día él le había alquilado dicho vehículo al señor GINO CARBALLO, a las 7:00 a. m. y que el mismo se lo devolvió a las 6:30 p. m. De igual forma, excepcionó diciendo que él le había alquilado ese vehículo, en otras ocasiones a los señores LUIS CARLOS ALVARADO Y SANTOS ARROYO.

Los hechos no pueden ser apreciados de manera aislada, por el contrario, cuando por todos es conocidos que en el ámbito del narcotráfico existe la distribución de tareas para la posterior consecución del fin deseado.

Cierto es que JAVIER ARRIETA no fue reconocido por los empleados de DHL como uno de los sujetos que llevó la mesa a dicha empresa, no obstante, el sólo acto de llevar el bien para su posterior envío no constituye la configuración total del ilícito cometido.

El hecho investigado, no se circunscribe únicamente a llevar la droga para su envío al extranjero, si nos retrotraemos, a las etapas anteriores, nos tendremos que ubicar inicialmente en la adquisición de la sustancia (la compara (sic) y el pago de la droga), en la elaboración y preparación de la mesa para buscar la forma de ocultar la droga, en la disponibilidad del transporte, en el envío, en la recepción, etc.

Así vemos entonces que a JAVIER ARRIETA, le correspondía dentro de la amplia gama de funciones, facilitar el transporte para el envío de la mesa. Eso es así, ya que el vehículo en mención no tenía la calidad de acarreo, tampoco existe un contrato o documento, por lo menos simple, que acredite la supuesta relación contractual.

Lo que si es cierto es que el vehículo utilizado para transportar la mesa que contenía la droga es de propiedad del sumariado ARRIETA, lo que constituye elemento de prueba suficiente en su contra para ordenar y mantener la detención preventiva del mismo, hasta tanto no se compruebe lo contrario, para lo cual el despacho está realizando las gestiones (Fs. 38-39, 92, 93). En ese sentido, consideramos que, en estricto derecho, nos es imposible variar ese criterio, toda vez que no se ha acreditado aún la existencia o no de la persona mencionada por ARRIETA como el sujeto que utilizó el vehículo el día que se llevó la mesa a DHL. Hacemos énfasis en lo anterior, ya que este despacho, en asocio de la P. T. J., intentó ubicar al sujeto señalado por ARRIETA, obteniéndose resultados negativos (Ver informe de Fs. 38-39). De igual forma, las excepciones presentadas por el imputado, tampoco ha sido probadas, toda vez que el mismo, con precisión, no dio información al respecto.

B. FUNDAMENTOS DE DERECHO.

En las presentes sumarias el hecho punible que se investiga, el cual constituye un delito Contra la Salud Pública, relacionado con drogas, se encuentra plenamente acreditado con el resultado del análisis de la sustancia (Fs. 66) y la vinculación del inculpado con el mismo, surge de los mecanismos de facilitador de los medios para trasladar la mesa que contenía la droga.

Con fundamento en lo establecido en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial, y 20 A, de la Ley 13 de 27 de julio de 1994, adoptamos la decisión que pretende invalidar la accionista.

3° El señor **JAVIER ARRIETA**, desde este momento se encuentra a vuestras órdenes, en razón de la acción presentada."

La licenciada **Teresa Ibáñez**, promotora del habeas corpus, funda su recurso en los siguientes hechos:

> "**PRIMERO**: **JAVIER ARRIETA** fue llamado a declarar ante las autoridades, ya que aparecía como el responsable o propietario del vehículo pick up con número de placa 328947.
>
> Al cuestionársele sobre los hechos investigados el mismo mencionó no haber utilizado el vehículo el día 2 de septiembre, ya que se lo había alquilado al señor GINO CARBALLO porque el mismo tenía que llevar a sus hijos a la escuela. GINO CARBALLO `se presentó a eso de las siete de la mañana (7:00 a. m.), regresándome el vehículo a eso de las seis y media de la tarde (6:30 p. m.)', agregando que el señor CARVALLO: `el día lunes me pagó (sic) veinte dólares (B/.20.00) por el uso del vehículo, porque yo me disguste (sic) debido a que el (sic) me dijo que lo iba a utilizar por una hora solamente y se quedó todo el día con el carro .
>
> **JAVIER ARRIETA** expresó que a fin de ayudarse económicamente, era su costumbre alquilar su vehículo y así lo hacía con el señor LUIS CARLOS ALVARADO Y SANTOS ARROYO, entre otros.
>
> **SEGUNDO**: Que a fin de confirmar o no sobre la posible responsabilidad del señor **ARRIETA**, la Fiscalía Especializada de Drogas mediante resolución del 26 de septiembre de 1996, ordenó se practicara diligencia de reconocimiento en rueda de detenidos contando para ello con los tres **empleados de D. H. L.**, que recibieron la mesa y que por ende, podían verificar o no sobre su identidad.
>
> Las referidas diligencias se realizaron el día 17 de octubre del presente año y ninguno de los participantes pudo señalar al señor **ARRIETA** como persona vinculada con el hecho ilícito.
>
> **TERCERO**: El Artículo 2147 del Código Judicial expresa que:
>
> `Nadie será sometido a medidas cautelares si no existen graves indicios de responsabilidad en su contra .
>
> En ese sentido resulta contrario a esta norma la detención preventiva que se le impone a nuestro patrocinado, quien ha podido explicar claramente las razones por las cuales su vehículo apareció en manos de otra persona, resultando de ello su desvinculación con el hecho investigado y que desde luego, constituye delito.
>
> **CUARTO**: Al no existir elementos que fundamenten la detención preventiva del señor **JAVIER ARRIETA**, consideramos que se ha incurrido en lo señalado por el artículo 2565 del Código Judicial y por ende se debe decretar ilegal la orden de detención que existe en su contra y frente a ello, ordenar su libertad inmediata."

Un estudio de los hechos que se presentan en el expediente hasta el momento de su evaluación en este habeas corpus, indican que el señor **JAVIER ARRIETA**, propietario del pick up, color gris con matrícula 328947, fue el que se utilizó para transportar la mesa que contenía 1,170.0 gramos de cocaína y que iba a ser enviada a Brooklyn, Nueva York a través de la empresa D. H. L. Si bien es cierto que en rueda de presos los empleados de D. H. L. no pudieron señalar al señor **ARRIETA** como uno de los tres individuos que llevaron la mesa, tampoco ha podido ser localizado el supuesto señor Gino Carvallo quien aduce **ARRIETA** fue la persona a la cual le alquiló su vehículo y que como se sabe, se utilizó para transportar la mesa con cocaína. Tal como se encuentran las investigaciones hasta el momento, vinculan al señor **ARRIETA** con el delito que se investiga y por lo tanto la Corte tiene que considerar la medida de detención preventiva como correcta, por fundarse en los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

Por lo expuesto la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención del señor JAVIER ARRIETA SANTOS y ordena que se ponga nuevamente a órdenes del Fiscal Especial en Delitos relacionados con drogas.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS MUÑOZ POPE (fdo.) ARTURO HOYOS
(Con Salvamento de Voto)

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO CARLOS E. MUÑOZ POPE

Lamento, con todo respeto, no estar de acuerdo con la decisión adoptada por la mayoría en esta oportunidad.

La única vinculación existente contra JAVIER ARRIETA radica en ser el dueño del vehículo utilizado para llevar la mesa a la que se le introdujo indebidamente droga y que el señor IRVING JAÉN pretendió enviar a Nueva York por medio de la empresa de courier DHL Panamá, S. A.

En el sumario, cuya copia remitió la Fiscalía de Drogas, se aprecia que desde el inicio de la investigación la agencia del Ministerio Público contó con una copia de la cédula de IRVING JAÉN que suministró la empresa de courier, lo que debe permitir una mayor claridad en el asunto que nos ocupa y el propio JAVIER ARRIETA indicó el nombre de la persona a quien le dio el vehículo el día de los hechos para la realización de una diligencia concreta y determinada, que no es precisamente la de transportar la mesa en cuestión.

Por otra parte, resulta sorprendente que la fiscalía disponga de la fotocopia de la cédula de JAEN y una descripción de la persona que utilizó el vehículo de ARRIETA, con indicación exacta de su domicilio o residencia, y no hayan adelantado mayor gestión al respecto.

Llama la atención que el detenido fue sometido a reconocimiento por medio de una rueda de detenidos y los empleados de la empresa DHL Panamá, S. A. manifestaron que no era ninguna de las personas que el día de los hechos llevó la mesa a la empresa para su envío a la ciudad de Nueva York.

Siendo estos los hechos, me parece que no existe indicio grave ni elemento probatorio contundente que justifique la privación de libertad del señor JAVIER ARRIETA, pues hasta el presente el Ministerio Público sólo ha probado que esta persona es el propietario real de un vehículo que está a nombre de un tercero, ya que razones de conveniencia para ARRIETA así lo aconsejaban.

Declarar legal la detención en esta oportunidad es hacer recaer en el individuo responsabilidad penal objetiva, lo que está totalmente rechazado por la ciencia penal moderna. Por todo lo expuesto, aunque estoy de acuerdo con el uso del peso de la ley contra cualquiera que la infrinja el sistema de prohibiciones o mandatos consagrados como delito por el ordenamiento jurídico vigente, no creo conveniente sacrificar los más caros principios del Derecho Penal y del Derecho Procesal Penal en atención a la represión de los delitos relacionados con drogas.

En atención a lo anterior, con todo respeto, SALVO MI VOTO.

Fecha Ut supra.

(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS

Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUAN CHAU DE ARMERO CONTRA EL FISCAL PRIMERO DE CIRCUITO DE COLÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado a la Corte Suprema de Justicia, en grado de apelación, acción de habeas corpus interpuesta a favor de Juan N. Chau de Armero, quien es investigado por la Fiscalía Primera de Circuito de Colón, acusado de la comisión de delito contra la fe pública.

BREVE HISTORIA DEL CASO

Las sumarias se iniciaron a seguidas de denuncia presentada por la firma Ceballos y Ceballos, según poder conferido por el representante legal de Textiles Universales, S. A. En los términos de la denuncia, Juan N. Chau cometió delito de falsedad "consistente en la entrega a **TEXTILES UNIVERSALES, S. A.** de un cheque que resultó no tener fondos" (f. 2, cuaderno de antecedentes).

El denunciante afirma que Chau compró mercancías en el mencionado comercio de Zona Libre de Colón por la suma de treinta y cinco mil balboas (B/.35,000.00), y pagó con el cheque N° 319 de 22 de noviembre de 1994, girado por **AGFI LAND DEVELOPMENT, INC.**

Sostiene el recurrente que el Fiscal Primero del Circuito de Colón le aplicó la medida cautelar contenida en el literal a) del artículo 2147 B del Código Judicial, que consiste en el impedimento de salida del país sin autorización judicial. Según indica, no existe resolución que decrete la medida, la que tampoco le ha sido notificada, y que "... el señor fiscal remitió un oficio a Migración en tal sentido, fechado 11 de noviembre de 1995 y con número 4458" (f. 1, cuaderno de habeas corpus). En el hecho tercero del libelo se afirma que la medida "contenida en el oficio citado en el segundo punto es violatorio de la Constitución Nacional, por cuanto que impide mi libre movimiento, sin que haya prueba de que he cometido un delito" (f. 1).

LA RESOLUCIÓN RECURRIDA

El recurso de alzada, presentado y sustentado en tiempo oportuno por el licenciado Gerardo Carrillo G., se dirige contra sentencia de 9 de octubre de 1996, dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial. En su parte resolutiva la resolución apelada **"DECLARA LEGAL** la medida procesal de la Fiscalía Primera del Circuito de Colón, en el sentido de hacer comparecer al señor **JUAN NOLBERTO CHAU ARMERO** para que rinda declaración indagatoria."(F. 15).

El peticionario solicita que, previa revocatoria de la resolución apelada, declare ilegal la medida cautelar que dice decretada por la Fiscalía Primera de Colón, que le impide a su patrocinado salir del país sin autorización judicial.

DECISIÓN DE LA CORTE

En opinión del Pleno de la Corte Suprema, contra el investigado Juan Nolberto Chau Armero no se ha decretado ninguna de las medidas cautelares de carácter personal que contempla el artículo 2147 B de la excerta procesal. Para comprobar este aserto, es preciso analizar la resolución de 20 de noviembre de 1995 proferida por la Fiscalía Primera del Circuito de Colón (fs. 13-14), así como el Telegrama Oficial de 22 de noviembre de 1995, dirigido al licenciado Germán Sánchez, Director Nacional de Migración y Naturalización (f. 16).

El primero de estos actos A): **"DISPONE recibir declaración indagatoria al**

señor NOLBERTO CHAU", y B): poner en conocimiento de las autoridades migratorias que esa agencia del Ministerio Público **requiere la presencia** del investigado, **"para que se le comunique el deber de presentarse a esta Agencia del Ministerio Público"**. El segundo de los actos mencionados, o sea el telegrama oficial, se limita a comunicar al Director Nacional de Migración y Naturalización del contenido de la diligencia de 20 de noviembre de 1995.

La acción de habeas corpus, en su modalidad reparadora, tiene un objeto específico, cual es resolver sobre la legalidad de una medida procesal que afecte la libertad ambulatoria de una persona, para, en caso negativo, restituir la libertad del detenido o desafectar la libertad corporal de quien se encuentre sometido a medidas cautelares distintas a la detención preventiva.

En esta causa resulta evidente la inexistencia de una medida cautelar que afecte la libertad ambulatoria de Chau de Armero, por lo que considera la Corte que la sentencia apelada debe ser revocada, toda vez que en su parte dispositiva resuelve sobre una materia totalmente ajena a la finalidad del proceso constitucional de habeas corpus, al pronunciarse acerca de la legalidad de someter al denunciado a los rigores de la indagatoria.

Por las consideraciones anteriores, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA la sentencia de 9 de octubre de 1996, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, y ORDENA EL CESE del procedimiento en esta causa.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JOSÉ GIL ANDRADE CÁCERES CONTRA EL JEFE DEL DIIP Y JEFE DEL CUARTEL DE SAN FELIPE. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Humberto Mosquera Bethancourt promovió el 5 del presente mes de noviembre acción de habeas corpus a favor del señor **JOSÉ GIL ANDRADE CÁCERES** y en contra del Jefe del DIIP y Jefe del Cuartel de San Felipe.

El día 12 del mismo mes de noviembre, el licenciado Humberto Mosquera Bethancourt desistió de la acción de habeas corpus promovida, mediante escrito fechado ese mismo día y presentado en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia.

Como quiera que toda persona que haya entablado una demanda, promovido un incidente o interpuesto un recurso, puede desistir expresa o tácitamente conforme lo establece el primer párrafo del artículo 1073 del Código Judicial, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia considera que debe acogerse el desistimiento presentado.

En consecuencia, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO presentado por el licenciado Humberto Mosquera Bethancourt dentro de la acción de habeas corpus promovida a favor del señor JOSÉ GIL ANDRADE

CÁCERES y contra el Jefe de la DIIP y Jefe del Cuartel de San Felipe.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ELDA ESTHER SANDOVAL QUINTERO CONTRA EL FISCAL DE CIRCUITO DE COCLÉ. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mientras se surtía el trámite de lectura del proyecto de resolución de la acción de habeas corpus en grado de apelación, interpuesta por el licenciado RAÚL GARCÍA C. en favor de la señora **ELDA ESTHER SANDOVAL QUINTERO** contra la Sentencia emitida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial el pasado 22 de octubre de 1996, en la cual se declaró legal su detención, el apoderado de la detenida presentó en Secretaría escrito mediante el cual manifiesta su intención de desistir.

Pues bien, la Corte ha sostenido que en materia de habeas corpus es factible el desistimiento siempre y cuando quien lo manifieste sea el detenido, su defensor o la persona que interpuso la acción.

Como quiera que en el presente negocio la expresión de desistimiento proviene del abogado de la detenida, el Pleno nada tiene que objetar y, en consecuencia, procede admitir el desistimiento.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el desistimiento presentado por el Licenciado RAÚL GARCÍA C. dentro de la acción de habeas corpus interpuesta en favor de la señora ELDA ESTHER SANDOVAL QUINTERO; en consecuencia, ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FRANCISCO JOSÉ CASTAÑEDA BAYARD CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada SANDRA MOLINA ha interpuesto acción de Habeas Corpus a favor

de **FRANCISCO JOSÉ CASTAÑEDA BAYARD** contra la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, solicitando que se resuelva si la detención que sufre el prenombrado ciudadano es fundada y, en caso contrario se le ponga en inmediata libertad.

Librado el mandamiento de habeas corpus, el funcionario contestó, mediante oficio que corre de fojas 10 a 14, en los siguientes términos:

"...
PRIMERO: Si es cierto que ordené la **DETENCIÓN PREVENTIVA de FRANCISCO CASTAÑEDA BAYARD**, mediante providencia fechada diecisiete (17) de octubre de 1995, lo cual corre de fojas 160 a fojas 167 del expediente principal.

SEGUNDO: Los fundamentos de hecho y de derecho que nos llevaron a tomar la decisión de ordenar la **DETENCIÓN PREVENTIVA de FRANCISCO JOSÉ CASTAÑEDA BAYARD**, se basa en lo siguiente:

La noche del día 17 de octubre de 1995, fueron retenidos (sic) en las inmediaciones de la barriada San Gerardo Mayela de esta ciudad, los señores **FRANCISCO JOSÉ CASTAÑEDA BAYARD**, **IVÁN ALEXANDER ROSAS VILLALOBOS y EDWIN AGRAZAL**, quienes transportaban un camión, en donde se logran incautar veintiún (21) cajas las cuales contenían SETECIENTOS CUARENTA Y OCHO (748) paquetes forrados con cinta adhesiva los cuales resultaron ser 773,355,00 gramos de **COCAÍNA**.

La detención de las personas antes señaladas se logran en los momentos en que el inspector de la Dirección General de Aduanas **MELANIO ESPINOZA** observa pasar un camión marca Ford de color blanco, decide darle seguimiento hasta la barriada San Gerardo Mayela, en ese momento le solicita a los individuos que abran el camión, pues sospechaba que se trataba de mercancía de contrabando, observó que el vehículo no contaba con los sellos aduaneros respectivos, en esos momentos le ofrecieron dinero en efectivo, sin embargo, decidió solicitar apoyo a la Policía Nacional.

Es importante destacar que el camión fue estacionado en la parte exterior de la residencia número 45 de la mencionada urbanización, el señor FRANCISCO JOSÉ CASTAÑEDA BAYARD, era la persona que mantenía las llaves de dicho inmueble, en donde se logran incautar cierta cantidad de cajas plegadas similares a las cajas en donde se transportaban los paquetes, una maquilla sunchadora con pinza engrapadora, gran cantidad de grapas, un rollo suplidor de cinta plástica para sunchar, una bolsa que contenía en su interior aproximadamente quinientas bolsitas plásticas transparentes, dos latas de aerosol de repelentes para perros, dos rollos de cinta adhesiva de color chocolate, marcadores de color azul y negro, entre otras cosas.

El señor **CASTAÑEDA BAYARD** portaba además el contrato de arrendamiento de la mencionada vivienda, el cual está a nombre de **JAIME PAREDES**.

El camión en donde se incauta el material ilícito es propiedad del ciudadano **EUSEBIO TORRES JULIO**, a quien se le ha investigado anteriormente por otros ilícitos relacionados con el tráfico de estupefacientes.

CASTAÑEDA BAYARD, al igual que los otros imputados **ROSAS Y AGRAZAL**, niegan la comisión del ilícito, indicando que desconocían lo que transportaban en el camión.

El día 22 de mayo del año en curso, el despacho lleva a cabo diligencia de allanamiento al apartamento número 12 del edificio Santa Rosa ubicado en la calle J del Corregimiento de Santa Ana, en

dicho lugar se logra la detención de la ciudadana Colombiana **MARTA CECILIA ROSERO DE CASTILLO**, y se incautan siete paquetes de COCAÍNA. La señora DE CASTILLO señala un lugar en la avenida doce de octubre de esta ciudad en donde asegura se presentó junto al señor **PABLO ANTONIO TORRES CUELLAR**, ciudadano de la misma nacionalidad, a retirar las paquetes de drogas.

Por lo anterior el despacho realiza allanamiento al apartamento 9ª del edificio Villas de Andalucía, lográndose la detención de los colombianos **DIEGO AGUIRRE, MOISÉS NADER y el panameño EUSEBIO TORRES JULIO**, propietario del camión en donde se incautan los 748 kilos de cocaína el día 17 de octubre de 1995. Durante ese allanamiento se logran ocupar cintas magnetofónicas y de video.

En las cintas de video se logran observar durante una festividad a los señores **FRANCISCO JOSÉ CASTAÑEDA BAYARD, IVÁN ALEXANDER ROSAS VILLALOBOS, FREDY TORRES JULIO, GUILLERMO GOTI MUÑOZ y OMAR REBOLLÓN BUITRAGO**, éste último actualmente detenido por otra causa relacionada con el tráfico de estupefacientes.

Como se observa en las constancias procesales, se trata de una organización criminal compleja, con toda una estructura de trabajo, en donde las funciones de cada miembro están delimitadas, las mismas llevan como finalidad el trasiego de sustancias nocivas en nuestro país, para la venta local y el envío de grandes cantidades a otras latitudes, como en el caso que nos ocupa.

En contra del señor **FRANCISCO JOSÉ CASTAÑEDA BAYARD** surgen probanzas que nos demuestran su vinculación frente al delito bajo estudio, como es el hecho de que fue la persona que acude a buscar las llaves del camión hasta la vía Tocumen próximo a las instalaciones de la Universidad Tecnológica, el mismo es trasladado por **IVÁN ROSAS** hasta la barriada San Gerardo Mayela de esta ciudad, en donde es detectado por la s autoridades, el señor **CASTAÑEDA** llevaba consigo las llaves de la residencia 45 de la mencionada urbanización, dentro de la misma se lograron detectar cajas de cartón, herramientas para empacar las mismas, cintas adhesivas, repelentes para caninos, y un número plural de sobres plásticos transparentes, es decir, se incautan instrumentos y materiales utilizados en el embalaje de sustancias ilegales.

Los fundamentos de derecho para ordenar la **DETENCIÓN PREVENTIVA de FRANCISCO JOSÉ CASTAÑEDA BAYARD** fue el contenido de los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial. ..." (Fojas 10-14)

Lo indicado en el informe que antecede ha sido verificado en los antecedentes adjuntos a este expediente, por lo que carecen de fundamento las acusaciones que hace la accionante, en el sentido de que se violaron los derechos constitucionales del favorecido con esta acción, por no existir orden de detención expedida por autoridad competente, pues el Fiscal de Drogas emitió dicha orden mediante resolución de 17 de octubre de 1995 (fs.160 a 167 antecedentes).

Igualmente, resulta desvirtuado el argumento relativo a que la imputación que se le hace a **CASTAÑEDA** para mantener su detención no está sostenida en datos certeros que demuestren su presunta responsabilidad, ya que, hasta el momento, obran en autos diversas piezas procesales que lo vinculan a la aludida organización criminal, dedicada al trasiego de sustancias ilícitas.

Así, entre otras circunstancias, se destaca que **CASTAÑEDA BAYARD** era la persona que tenía en su poder las llaves y el contrato de arrendamiento de la casa N° 45 en la barriada San Gerardo Mayela, a la cual arribó el camión que transportaba 748 paquetes de cocaína (773,355,00 gramos), inmueble en el cual se encontraron distintos materiales que se utilizan para el empaque de dicha sustancia. También tiene relevancia que Castañeda aparezca en los videos,

ocupados en otro allanamiento, participando en festividades con sujetos sindicados por tráfico de estupefacientes.

Por las consideraciones expuestas, a juicio de la Corte, la detención preventiva decretado contra **FRANCISCO CASTAÑEDA BAYARD** está justificada, pues se enmarca en lo preceptuado por los artículos 2148 y 2159 del Código judicial.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de FRANCISCO JOSÉ CASTAÑEDA y, ORDENA que sea puesto nuevamente a órdenes de la autoridad competente.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FAUSTO CAICEDO CONTRA LA JUEZ DÉCIMA TERCERA DE CIRCUITO DE LO PENAL DE PANAMÁ, MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

En la acción de habeas corpus de que ahora conoce el Pleno de la Corte Suprema se recurre contra decisión del Segundo Tribunal Superior de Justicia que declara legal la detención de Fausto Caicedo, procesado por delito contra la salud pública relacionado con tráfico internacional de drogas.

LO QUE SE RECURRE

La particularidad de la causa radica en el hecho de que Caicedo resultó favorecido en **sentencia mixta** dictada por el Juzgado Décimo Tercero de Circuito del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, mediante la cual se le absuelve junto con otro imputado y se condena a un tercero. Ese acto jurisdiccional **fue apelado** por la representación del Ministerio Público, lo que motivó que se postergara la libertad del absuelto hasta la ejecutoria de la sentencia, con fundamento en lo que preceptúa el artículo 2417 del Código Judicial, que es del siguiente tenor:

> "Artículo 2417. Si al dictar sentencia condenatoria resulta que ya el imputado ha cumplido en prisión el tiempo que le hubiese correspondido, el Tribunal ordenará su libertad, sin necesidad de fianza, mientras se surte la consulta o apelación. Si la sentencia es absolutoria, se aplicará lo dispuesto en este artículo".

Al referirse a la citada disposición, el tribunal de habeas corpus expresa:

> "La excerta legal es clara, por cuanto contempla que la libertad del imputado se dará cuando éste tuviese cumplido en detención preventiva el tiempo que corresponde a la sanción aplicable de acuerdo con la norma penal transgredida, ya fuese por motivos de sentencia condenatoria o absolutoria y ésta es apelada" (fs. 4-5).

Entre los argumentos esgrimidos por la defensa de Caicedo figura de manera prominente la afirmación de que la postergación de la libertad contraría el principio de presunción de inocencia. La tesis contraria, en el sentido de que

la absolución del procesado no enerva la potestad de la autoridad jurisdiccional para proceder como lo hizo, se consigna en la resolución apelada de la siguiente manera:

> "Tenemos entonces que el recurso de apelación del Ministerio Público suspende los efectos de la sentencia absolutoria, porque la oración final del artículo 2417 del Código Judicial así lo ordena y ello tiene lógica por cuanto, aun cuando la persona fue absuelta, los efectos de esa resolución quedan suspendidos y subsiste la detención preventiva decretada desde la fase preparatoria o de instrucción sumarial, mantenida al momento de calificar la fase intermedia y durante el proceso e incluso podría ser que la decretaron a partir del auto de enjuiciamiento y debido a que quedó ejecutoriado, subsiste esa medida cautelar personal, además están vigente los cargos formulados en el auto de proceder" (f. 16).

OPINIÓN DEL PLENO

La discrepancia planteada impone que en su consideración se atiendan las implicaciones que presenta desde los puntos de vista a) hermenéutico, b. de política criminal y c. de lege ferenda.

En cuanto al primero de ellos, la **regla general** sobre el efecto de las apelaciones en el procedimiento penal la proporciona el artículo 2430, C. J.: "Las apelaciones de **la sentencia** y del auto de enjuiciamiento **se concederán en el efecto suspensivo**.

El artículo 2417, C. J., que sirve de apoyo a los razonamientos contendientes, no hace sino **confirmar** esta regla, toda vez que, a quisa de excepción, autoriza la libertad del condenado mientras se surte la apelación, en los casos en que ya hubiere cumplido la pena que le corresponde, sin necesidad de fianza. En cuanto al absuelto, lo subsume en ese mismo condicionamiento, cuando ha cumplido en prisión el tiempo de la pena que le habría correspondido de resultar condenado.

Las situaciones que consideran los artículos 2389 (libertad inmediata del beneficiado con veredicto absolutorio de Jurado de Conciencia) y 2216 (libertad inmediata del beneficiado por **auto** de sobreseimiento), además de no ser atinentes a lo tratado, se presentan más bien como también confirmatorias de la regla **in examine**, toda vez que corresponden a la salvedad establecida por el artículo 2430, C. J., en su inciso segundo, concerniente a los casos en que la ley, de manera expresa, le asigna a la apelación de la sentencia un efecto distinto del suspensivo.

Hay una evidente consideración de política criminal implícita en este asunto: se trata del aseguramiento de los imputados en delitos con alto impacto social, frecuentemente evadidos de la acción de la justicia con el auxilio de diversos mecanismos procesales, entre ellos el que ahora se considera. Este imperativo, sin embargo, deja de lado, y ciertamente perjudica, a quienes no participan en delitos graves y no plantean el problema de su aseguramiento.

De allí que el examen de la situación derive al terreno de la lege ferenda, por la necesidad de diseñar legislativamente una fórmula que permita mantener el compromiso invariable del Pleno de la Corte con el principio favor libertatis, sin ceder a la demanda de inaplicación de nuestro derecho positivo. Este parece ser el sentido de la norma argentina citada en el libelo de sustentación de la alzada (f. 22), que dispone la libertad del absuelto **bajo caución** hasta tanto la sentencia quede firme, fórmula que sugiere la redacción del artículo 2417, C. J., que prevé la libertad "sin necesidad de fianza".

Por las razones que anteceden el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la sentencia apelada.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (CON SALVAMENTO DE VOTO)
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(CON SALVAMENTO DE VOTO) (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(CON SALVAMENTO DE VOTO)
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS
EDGARDO MOLINO MOLA, AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
Y HUMBERTO COLLADO

Con todo respeto nos apartamos de la decisión de mayoría que antecede, por las siguientes razones:

Estamos en presencia del caso en que el ciudadano panameño **FAUSTO CAICEDO,** fue absuelto por sentencia de primera instancia del cargo de delito contra la salud pública en la que se ordenaba su libertad, una vez ejecutoriada la sentencia. Contra dicha resolución anunció apelación la Fiscal Octava del Primer Circuito Judicial y también apeló el procesado Jaime Sierra Peralta, quien fue condenado en esta sentencia.

El problema jurídico gira en torno a la interpretación del artículo 2417 del Código Judicial, que es del tenor siguiente:

> "Artículo 2417. Si al dictar sentencia condenatoria resulta que ya el imputado ha cumplido en prisión el tiempo que le hubiese correspondido, el Tribunal ordenará su libertad, sin necesidad de fianza, mientras se surte la consulta o apelación. Si la sentencia es absolutoria, se aplicará lo dispuesto en este artículo."

El Segundo Tribunal Superior de Justicia, interpreta la norma transcrita en el sentido de que a pesar de la sentencia absolutoria, si ésta es apelada se mantiene la detención preventiva, ya que la apelación suspende los efectos de la sentencia absolutoria y ésta por tanto no puede cumplirse hasta tanto quede ejecutoriada, tal como lo expresa la sentencia de primera instancia.

Lo expresado anteriormente es la regla general y así lo confirma el artículo 2430 del Código Judicial que dispone que, "las apelaciones de la sentencia y del auto de enjuiciamiento se concederán en el efecto suspensivo. En los demás casos la apelación se dará en el efecto devolutivo, salvo que en cada caso la ley lo establezca en otro efecto".

El 2417 del Código Judicial nada expresa sobre el efecto en que se concede la apelación. Esta norma señala el caso en que condenada una persona, si ha cumplido el tiempo de prisión que le hubiere correspondido, deberá ser puesto en libertad, sin necesidad de fianza. Y a continuación expresa que si la sentencia es absolutoria, se aplicará lo dispuesto en este artículo. En ambos casos, el artículo se refiere a la orden de libertad y parece partir del supuesto de que la sentencia esté ejecutoriada, es decir, en firme, ya que es un principio legal de que cuando la resolución queda ejecutoriada es cuando debe cumplirse (artículo 1021 C. Judicial). Pero todos estos casos, de sentencia ejecutoriada, generalmente parten del supuesto de una sentencia condenatoria. Tratándose de una sentencia absolutoria, la regla especial, es diferente. En el caso de la condena, se espera hasta el último recurso para cumplir la condena en beneficio del principio de favorabilidad al reo, pero en la sentencia absolutoria, en base a los principios de favor libertatis y de presunción de inocencia, la libertad debe concederse inmediatamente, sin necesidad de fianza, a pesar de los recursos que puedan interponerse. Por ello, cuando el artículo 2417 dice que "se aplicará lo dispuesto en este artículo", en la sentencia absolutoria, se está refiriendo a que el Tribunal ordenará su libertad, sin necesidad de fianza, porque no se puede colegir que se refiere al cumplimiento de una pena, pues se trata de quien ha sido absuelto, y mal puede correctamente aludirse a ninguna pena. La sentencia de primera instancia ordena la libertad por esa razón, porque la decisión fue

absolutoria y por tanto no establece ninguna pena.

Cuatro artículos del Código Judicial patrio comprueban que ésta es la interpretación correcta, veamos: El artículo 2389 dice que cuando el veredicto del jurado fuere absolutorio el presidente de la audiencia ordenará la libertad del imputado, **la que se cumplirá enseguida y después dictará la resolución declarando terminado el juicio.** El artículo 2216 del Código Judicial expresa que, cuando se dicte auto de sobreseimiento, se decretará la libertad provisional del o de los sumariados **hasta que se decida la apelación.** El artículo 2592 del Código Judicial señala que si la detención o prisión carece de fundamento legal, el Tribunal de habeas corpus así lo hará constar en su resolución **y ordenara la libertad inmediata de la persona detenida o presa arbitrariamente.** El artículo 2599 del mismo código, confirma lo anterior cuando sostiene que contra la sentencia que dicte el tribunal de habeas corpus, sólo cabe el recurso de apelación en el efecto suspensivo, **en el caso que se declare procedente la detención.** La Corte ha sostenido en reciente fallo que no cabe la apelación si se declara ilegal la detención en la acción de habeas corpus. En sentencia de 9 de mayo de 1996, en el recurso de hecho interpuesto por el Fiscal Primero de Circuito de Colón, contra Resolución de 18 de enero de 1996, dictada por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dentro de la acción de habeas corpus a favor de MOISÉS DAVID MIZRACHI e IDA DOMÍNGUEZ, la Corte dijo refiriéndose al artículo 2599 del Código Judicial:

> "Se evidencia que dicha normativa, no hace más que proteger el derecho a la libertad personal, cuando establece que la **decisión jurisdiccional que concluye un juicio especial constitucional de habeas corpus sólo puede ser cuestionada, mediante recurso de apelación, cuando se declare procedente la detención.**"

Si la ley concede en caso de que se dicte sobreseimiento o un veredicto absolutorio, o una detención ilegal en la acción de habeas corpus, libertad al detenido sin que la apelación suspenda la medida otorgada, en los dos primeros casos y sin siquiera permitir la apelación en el tercer caso, con mayor razón debe entenderse que concede la libertad al detenido si se produce una sentencia absolutoria en derecho a favor del acusado. No es jurídica y lógicamente admisible que se suspenda la orden de libertad con motivo de la apelación de la sentencia, ya que estamos ante la fase final del proceso y en la que el juzgador ha podido apreciar todas las fases del proceso en su totalidad y comprobada la inocencia del procesado y solo pende de la revisión por la apelación.

La libertad es el don mas preciado del ser humano y tramitado el proceso hasta el fin de la primera instancia que concluye con una sentencia absolutoria sería ilógico e injusto mantener a una persona privada de su libertad por un delito que se valoró, por su juez natural, que no tiene responsabilidad alguna. La doctrina y el Derecho Comparado indican que una persona absuelta no puede continuar detenida, aunque la sentencia haya sido apelada, y en el caso de Panamá el artículo 2417 del Código Judicial, dice más, pues señala que esa libertad será sin necesidad de fianza, previsión legal que rige para el condenado que ya cumplió la pena que se le impondría mientras se llevó a cabo el proceso. Si al condenado lo ponen en libertad porque cumplió la pena imponible sería absurdo mantener en prisión al que ha sido absuelto.

La sentencia absolutoria, queda en firme inmediatamente, sólo para los efectos de concederle la libertad inmediata al favorecido con la decisión, sin necesidad de fianza, y los recursos o medios de impugnación no suspenden su cumplimiento. Cabe anotar, sin embargo que únicamente en el caso de que se revoque la sentencia absolutoria por una condena podrá nuevamente privarse de la libertad a quien obtuvo una sentencia absolutoria.

Esta es la solución que también encontramos en el derecho comparado. El artículo 504 del Código de Procedimiento Penal Argentino dice lo siguiente:

> "Artículo 504. La apelación de sentencia definitiva se otorgará libremente y en ambos efectos, a no ser que el interesado pida que se le conceda solo en relación. **Si la sentencia fuese absolutoria,**

> **o la condena se dejase en suspenso, o la pena impuesta se encontrase cumplida con la detención sufrida, el Juez, sin perjuicio del recurso, concederá la libertad bajo caución con audiencia fiscal."** (resaltado es nuestro)

El artículo 198 del Código de Procedimiento Penal Colombiano dice lo siguiente:

> "Artículo 198. **Las resoluciones relativas a la libertad y detención y las que ordenan medidas preventivas, aun cuando estén contenidas en providencias apelables en el efecto suspensivo, se cumplirán de inmediato.**" (resaltado es nuestro)

El artículo 503 del Código de Procedimiento Penal de Costa Rica dice lo siguiente:

> "Artículo 503. **Cuando la sentencia sea absolutoria, el tribunal dispondrá inmediatamente la libertad del imputado que estuviere preso y la cesación de las restricciones cautelares impuestas, aunque aquélla fuere recurrible.**" (resaltado es nuestro)

Los ejemplos anteriores son suficientes, para demostrar que ésta es la interpretación correcta del artículo 2417 del Código Judicial. Los delitos relacionados con drogas, que por su gravedad nadie puede desconocer que deben ser penados con severidad, tampoco pueden impedir que se violen fundamentales principios del Derecho Penal en otros delitos, y en el mismo delito de drogas, sacrificando a personas inocentes declaradas así judicialmente, aunque se recurra contra dicha decisión. Es bien conocido el adagio de que es preferible absolver a un culpable que condenar a un inocente. La situación que ofrece nuestro país en cuanto a su creciente población penitenciaria que registra el más alto índice de detenidos por cada 100,000 habitantes de toda América Latina, debe inclinarnos a revisar a fondo el mantenimiento de normas e interpretaciones notoriamente represivos como la que recoge el fallo del cual disentimos.

Fecha ut Supra

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) HUMBERTO COLLADO
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE CARLOS ALBERTO SMITH SÁNCHEZ CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Uzziel Morán Toribio presentó ante esta Corporación de Justicia acción de habeas corpus a favor de CARLOS ALBERTO SMITH SÁNCHEZ y contra el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

Por concedido el mandamiento de habeas corpus, la autoridad demandada remitió el informe de conducta a que se refiere el artículo 2582 del Código Judicial, para explicar que la detención de Smith Sánchez fue decretada mediante resolución fechada 8 de octubre del año en curso, con indicación de las circunstancias de hecho y de derecho que dieron motivo al decreto de restricción de la libertad corporal.

La Corte procede a examinar si la medida cautelar de carácter personal atacada cumple con los requisitos que establecen la Constitución y la ley.

Según la resolución que ordena la detención preventiva de Smith, la detención se fundamenta en la presunta comisión de delito contra la salud pública, relacionado con drogas.

De conformidad con la contestación del mandamiento de habeas corpus y la resolución de 8 de octubre de 1996, la medida se fundamenta en informe confeccionado por las unidades de la Fuerza Pública que lo apresaron. Según la referida comunicación policiva, al momento de su detención, a la altura de Las Colinas, Sector N° 8, San Miguelito, Smith Sánchez arrojó al suelo con su mano derecha un objeto blanco cuando se acercaban las unidades de la Policía. En una inspección del área, fue hallada una bolsa plástica blanca con rayas horizontales de color verde, contentiva de 29 carricillos plásticos que contenían una sustancia en forma de polvo blanco, cuya propiedad es negada por Smith, versión ésta que es respaldada en declaración notarial que rindiera Alcides de la Rosa Rodríguez, quien afirma se encontraba en el lugar donde ocurrieron los hechos (fs. 26-27). Sometido el material ocupado a la prueba técnica de rigor, resultó positiva para la determinación de **COCAÍNA**, con un peso de **1.75 gramos** (fs. 4 y 30 del cuaderno de antecedentes). Es importante resaltar que cuatro de los carricillos llegados al laboratorio para su examen se encontraban vacíos (f. 30).

Además de que la cantidad de sustancia ilícita incautada sobrepasa ligeramente la medida posológica máxima de consumo establecida por el Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, que es 1.5 gramos, se advierte también la ausencia de otros elementos incriminatorios, tales como dinero fraccionado, lo que permite concluir que no estamos frente al supuesto de que el imputado pretendiera comercializar la sustancia ilícita. Por lo anterior, a juicio de la Corte se trata más bien en este caso del delito de posesión ilícita de drogas para fines de consumo personal, tipo delictivo que lleva aparejada pena mínima de un (1) año de prisión, de conformidad con la legislación penal vigente.

Además de las anteriores comprobaciones, el cuaderno de antecedentes revela otras circunstancias personales del imputado con relevancia procesal. Así, se trata de un paciente del servicio de neurología de la Caja de Seguro social, donde un informe de comisión médica de invalidez diagnosticó que sufre de **epilepsia tipo gran mal** (f. 24), "parcialmente refractaria al tratamiento" (f. 23). La atención médica que se le presta en esa institución social pareciera respaldar la afirmación que el detenido hace en su declaración indagatoria, en el sentido de que trabaja en la actividad de "barbero estilista", con un salario semanal de B/.60.00 (f. 9). Por otra parte, también se encuentra acreditado que "no ha sido penado por violaciones de policía ni por delito común alguno" (f. 20).

Por las consideraciones expuestas, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ILEGAL la detención preventiva de Carlos Alberto Smith Sánchez y, en consecuencia, ORDENA que el detenido sea puesto inmediatamente en libertad, si no tiene otra causa pendiente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS, A FAVOR DE DALYS MORALES CONTRA LA JUEZ LA SEGUNDA DE CIRCUITO PENAL DE COLÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado a esta Corporación, en grado de apelación, la acción de Habeas Corpus promovida por el señor Samuel H. Mathews J. a favor de Dalys Morales, y contra la Jueza Segunda de Circuito de Colón, Ramo Penal.

Mediante Sentencia de 14 de octubre de 1996, el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial resolvió en primera instancia esta acción y declaró legal la detención de Dalys Morales, por las siguientes consideraciones:

> "... Arguye el recurrente que la señora morales es paciente del Hospital Oncológico Nacional y se encuentra en un estado de salud grave, por lo que no debería estar bajo detención preventiva y debe ser beneficiada con otro tipo de medida cautelar; por ello, solicita declare ilegal la privación de libertad que ésta sufre y que en su lugar se ordene su inmediata libertad.
> ...
> En cuanto al estado de salud de la señora Dalys Morales Vidal, la Señora Juez indicó que existe un cuadernillo de su evaluación médica en el que el Dr. Alonso Young, Sub-Director Médico del Instituto Oncológico Nacional, en el oficio visible a foja 17 del mismo estableció que la paciente puede continuar recluida en la cárcel bajo ciertas recomendaciones.
> ...
> Revelan los autos que la detención preventiva de la prenombrada Morales Vidal se dio a raíz de una Diligencia de Allanamiento dispuesta por el señor Fiscal Cuarto del Circuito de Colón, en el Cuarto N° 5 de la casa N° 10031, sita en la calle 11 y Ave. Herrera de esa ciudad, residencia de la imputada, en la que se incautó la sustancia ilícita que al ser analizada se determinó que era cocaína (crack) en la cantidad de 10.95 gramos ...
>
> ... es evidente que esos elementos de juicio hacen valedera la detención preventiva decretada contra la señora Dalys Morales Vidal. No obstante, se observa en la acción impetrada, que el punto relevante estriba en el grave estado de salud que según el recurrente sufre la sindicada, lo que es motivo suficiente para declarar legal la detención de la misma.
> ...
> Es decir no es el recurrente quien va a determinar la gravedad de la salud de la detenida; de eso se encargó el especialista en la nota mencionada; es más, éste da indicaciones de los pasos que deben seguirse en caso de presentarse una urgencia con dicha detenida, quien como se dijo ya gozaba del beneficio de medidas cautelares sustitutivas de la prisión en otros dos procesos que se le sigue en el Despacho de la funcionaria acusada y aún así, sin pensar en su estado de salud, vuelve a ser vinculada y señalada como presunta autora de un ilícito, precisamente contra la Salud Pública." (Fs. 13-16).

De acuerdo con el informe rendido por la Jueza Segunda del Circuito de Colón, con motivo de la presente acción de habeas corpus, la detención preventiva de Dalys Morales no fue ordenada por su Despacho, sin embargo, la detenida está a sus órdenes debido a la diligencia de reparto del expediente instruido en su contra, el cual quedó radicado en su Despacho. Agrega que en la actualidad está pendiente en el proceso la notificación del auto de enjuiciamiento, fechado 2 de octubre de 1996 (foja 10).

A foja 15 del expediente se lee la diligencia dictada el 28 de junio de 1994, por el Fiscal Cuarto, por medio de la que dispone mantener la detención preventiva de la señora Dalys Judith Morales Vidal señalando como hechos que motivaron dicha medida cautelar los relatados en el acta de la diligencia de allanamiento practicada el 27 de junio 1994, por el secretario de la Secretaría

Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de la provincia de Colón y los agentes del (DIIP), en la casa N° 10031, cuarto N° 5 altos, sita en calle 10 y 11 Avenida Herrera, frente al Boite La Flor, en la cual se dejó constancia que al llegar al lugar, el cabo II Alberto Agusto Fernández vio al menor Luis Morales lanzar por la ventana de la casa un objeto, por lo que éste y el cabo Aristides Ortega procedieron a buscar dicho objeto que resultó ser una cartera chocolate que contenía 73 envoltorios de papel aluminio con una sustancia sólida que se presumió era crack. Además en esta diligencia se deja constancia que la señora Dalys Morales manifestó a los agentes que ella estaba bajo medida cautelar a disposición de la Fiscalía Cuarta por otro caso de drogas (fs. 4-7).

A foja 25 se lee el análisis hecho por el laboratorio Técnico Especializado en Drogas de la Policía Técnica Judicial de la sustancia incautada, que resultó ser cocaína (crack) con un peso de 10.95 gramos.

La señora Dalys Morales Vidal en la declaración indagatoria rendida negó ser propietaria de la droga incautada, sin embargo manifestó estar gozando de una medida cautelar. (Fs. 11-13) Por su parte en las declaraciones juradas rendidas por los cabos segundos Alberto Gaitán Augusto Fernández (fs. 26-27) y Gilberto Jesús Esquina (fs. 60-61), se ratifican del contenido del acta de diligencia de allanamiento practicada el 27 de junio de 1994, en la residencia de Dalys Morales.

En mérito de los hechos expuestos, la jueza del conocimiento, mediante auto fechado 2 de octubre de 1996, abrió causa criminal contra Dalys Judith Morales Vidal, por la comisión de delito Contra la Salud Pública, señalando los elementos probatorios por medio de los cuales se ha comprobado la existencia del delito y los indicios de responsabilidad allegados a la investigación en su contra. Además, en el párrafo segundo del artículo 260 del Código Penal se señala como sanción para el delito investigado la pena mínima de dos años de prisión, tal como lo exige el artículo 2148 del Código Judicial para aplicar la medida cautelar de detención preventiva.

Con relación al estado de salud de la imputada existe un cuadernillo de 20 fojas, contentivo del informe de su evaluación médica. De dicho informe se desprende que en efecto la señora Dalys Morales padece de cáncer cérvico-uterino sin embargo el Dr. Alonso Young Sub-Director del Instituto Oncológico Nacional mediante nota de 10 de julio de 1996, enviada a la Jueza Segunda del Circuito de Colón, señaló que la señora Morales actualmente recibe los tratamientos médicos necesarios para controlar su enfermedad y que personalmente considera que la misma puede continuar recluida en la Cárcel siempre y cuando se le garanticen una serie de condiciones que enumera en su nota visible a foja 17 del mencionado cuadernillo.

La señora Dalys Morales al sustentar el recurso de apelación promovido trata de restarle valor probatorio a la nota que el Dr. Alfonso Young envió a la Jueza de la causa, documento citado en la sentencia apelada, dictada el 14 de octubre de 1996 por el Segundo Tribunal de Justicia, porque fue extendido en papel simple, y la firma del doctor no fue ratificada ante las autoridades competentes. Sin embargo, se trata de un documento emanado de una institución estatal y suscrita por su subdirector.

Tomando en consideración lo expuesto el Pleno ha llegado a la conclusión de que la sentencia apelada debe confirmarse porque la detención preventiva de la señora Dalys Morales Vidal es legal, su enfermedad no le impide estar detenida, siempre que continúe recibiendo la atención médica recomendada y esta medida esta justificada en vista de que cuando fue detenida estaba cumpliendo una medida cautelar mas benigna, tal como ella misma lo informó al ser indagada.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley CONFIRMA la sentencia dictada el 14 de octubre de 1996 por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, mediante la cual se declara LEGAL la detención de la señora Dalys Morales Vidal, ordenada por el señor Fiscal Cuarto del Circuito Judicial de Colón y mantenida por la Jueza Segunda del Circuito Penal de Colón y DISPONE que la detenida sea puesta a órdenes de esta funcionaria

judicial.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE OSCAR ORIEL CÓRDOBA HENRIQUEZ CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La señora Elisabeth Bravo ha promovido acción de Habeas Corpus contra el Fiscal Auxiliar de La República y a favor de OSCAR ORIEL CÓRDOBA HENRIQUEZ.

Mediante auto de 12 de noviembre de 1996, se libró el mandamiento de Habeas Corpus correspondiente y se requirió al funcionario demandado que informara si había ordenado la detención de OSCAR ORIEL CÓRDOBA HENRIQUEZ, los motivos o fundamentos de hecho y de derecho que tuvo para ello y si el mismo está detenido a sus órdenes o a órdenes de otra autoridad.

El funcionario demandado contestó el mandamiento de habeas corpus librado mediante Oficio N° 16801 de 13 de noviembre de 1996, en el cual informó lo siguiente:

> "1. Si es o no cierto que ordené la detención del recurrente y de serlo, si la ordené verbalmente o por escrito;
> No, no he ordenado la detención del señor OSCAR ORIEL CÓRDOBA HENRIQUEZ.
>
> 2. Los motivos o fundamentos de hecho y de derecho que tuve para ello;
> Por lo anterior, no pertinente.
>
> 3. Si tengo bajo mi custodia u órdenes al señor CÓRDOBA HENRIQUEZ, y en caso de haberlo transferido a otro, que indique en qué tiempo y por qué causa;
> No tengo bajo mis órdenes al prenombrado CÓRDOBA HENRIQUEZ, ni lo he transferido a otro funcionario. Vale indicar que mediante providencia fechada 12 de noviembre de 1996, se dejó sin efecto la aprehensión del señor OSCAR ORIEL CÓRDOBA HENRIQUEZ, pues al ser revisado el sumario en su contra no existía en el mismo elementos para ordenar su detención preventiva, ni someterlo a otra medida cautelar."

Adjunto al precitado oficio, el funcionario demandado envió copia del oficio N° 16766 FAR de 12 de noviembre de 1996, dirigido al Director General de la Policía Técnica Judicial, por el cual queda sin efecto la detención de OSCAR ORIEL CÓRDOBA HENRIQUEZ.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia estima que debe ordenarse el cese de este procedimiento de conformidad con el artículo 2572 del Código Judicial, ya que se ha puesto en libertad a la persona en cuyo favor se promovió la acción.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA EL CESE del procedimiento en la acción de habeas corpus promovida a favor de OSCAR ORIEL CÓRDOBA HENRIQUEZ y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

HABEAS CORPUS A FAVOR DE DAMARIS GRACIANI REYES CONTRA EL FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El señor Uzziel Morán Toribio, en representación de la señora **DAMARYS GRACIANI REYES**, presentó acción de habeas corpus contra la orden de privación de libertad expedida por el **FISCAL ESPECIALIZADO EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS**, el día 24 de octubre del presente año.

Acogida la acción de habeas corpus, se solicitó al Fiscal Especializado en delitos relacionados con Drogas el informe correspondiente sobre los motivos y fundamentos de hecho y de derecho que tuvo para ordenar la detención de la accionante. En respuesta a dicho mandamiento por Oficio 11907 del 5 de noviembre, fue recibido en la Secretaría General el informe solicitado en el cual la autoridad acusada aceptó haber expedido la orden de detención contra la señora Graciani Reyes, mediante resolución motivada, por razón de un allanamiento practicado en el apartamento N° 19 del Edificio N° 5, ubicado en la calle 27 del Chorrillo, de propiedad de los señores Albín Reyes y Damarys Isabel Graciani Reyes, diligencia que permitió localizar dentro de un coche de bebé un peluche en cuyo interior se guardaba un cartucho plástico con 217 carrizos, contentivos de polvo blanco con apariencia de droga ilícita (cocaína); igualmente se encontró en el altillo de ese apartamento 410 carrizos vacíos dentro de un chaleco militar camuflado.

Al informe se adjuntó copia del expediente que contiene las diligencias que se han adelantado hasta el presente y en las que aparecen las declaraciones de los hermanos Reyes, en la que la accionante niega tener conocimiento de la existencia de esa droga, mientras que Albin Reyes acepta que es de su propiedad, destinada a su propio consumo, ya que es adicto desde la edad de 15 años.

En el escrito contentivo de la acción de habeas corpus, al cual se adjunta copia autenticada de la sentencia expedida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia el 31 de julio de 1995, y el certificado de nacimiento del menor Luis Antonio Rodríguez Graciani, hijo de Damarys Isabel Graciani Reyes, se plantea el hecho de que en este caso se trata de una joven en estado de lactancia a su prole, a quien en la actualidad no le es posible amamantar a su pequeño hijo, y el fallo de la Corte sentó un precedente favorable al resolver una acción similar, que permitió, con base en los literales a, b y c del artículo 2147B del Código Judicial, el reemplazo de la detención preventiva por medidas cautelares, que le dieron la oportunidad de atender y proteger a su menor hijo.

Si bien es cierto que la ley permite en los casos de mujeres embarazadas, y en período de lactancia, y a las personas mayores de 65 años que se les

sustituya la detención preventiva por cualquiera de las otras medidas cautelares que establece la ley, en el presente caso no puede perderse de vista el hecho de que la droga fue localizada dentro de un peluche, que se supone es o debía ser uno de los juguetes de entretenimiento del bebé, Luis Antonio Rodríguez Graciani. Además, la cantidad de carrizos localizados, unidos a los indicios de presencia y oportunidad comprometen la vinculación de la accionante a los hechos que se investigan. No obstante, la atención y cuidado del infante requieren la presencia de la madre en esta fase instructoria, protección que debe garantizar el Estado, salvo que otras circunstancias de especial consideración lo impidan.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de DAMARYS ISABEL GRACIANI REYES y la reemplaza por las medidas cautelares previstas en los literales a y b del artículo 2147-B del Código Judicial, que consisten en la prohibición de salir del territorio nacional y el deber de presentarse cada quince días ante el despacho del agente de instrucción o el Juez de la causa.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE SAMUEL BONILLA URRIOLA CONTRA EL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. (CORRECTIVO). MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **Néstor Egberto Ureña Batista**, Defensor de Oficio del Circuito Judicial de Veraguas, presentó acción de habeas corpus contra el mayor jefe de la Tercera Zona Policial de Veraguas ante el Tribunal Superior de Justicia del Segundo Distrito Judicial, quien declinó la competencia en el Pleno de la Corte Suprema de Justicia al conocer que la orden de traslado a la Isla Penal de Coiba fue impartida por el Ministro de Gobierno y Justicia.

Librado el mandamiento de habeas corpus contra el Ministro de Gobierno y Justicia lo contestó de la siguiente manera:

> "Para tales efectos y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 2582 del Código Judicial, informo al Honorable Magistrado lo siguiente:
>
> **Primero**: En mi carácter de Ministro de Gobierno y Justicia no he impartido orden de detención de ninguna naturaleza contra el demandante, señor SAMUEL BONILLA URRIOLA.
>
> **Segundo**: No habiéndose ordenado su detención, es innecesaria otra explicación sobre esta pregunta.
>
> **Tercero**: El señor **Samuel Bonilla Urriola** fue condenado por el Juzgado Primero del Circuito de Veraguas, Ramo de lo Penal, mediante Sentencia N° 59 de 15 de mayo de 1996, a cumplir pena de 40 meses de prisión, por el delito de hurto con penetración, en perjuicio del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. El sentenciado se encontraba cumpliendo dicha pena en la cárcel pública de Santiago de Veraguas,

bajo custodia de la Dirección Nacional de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia.

El día 24 de junio de 1996, la Fiscalía Primera del Circuito de Veraguas ordenó la detención preventiva del señor Bonilla Urriola, y en estos momentos el procesado se halla a órdenes del Juzgado Primero del Circuito de Veraguas, Ramo Penal.

El 2 de agosto del presente año, mediante nota N° 2745-DNC. 96. s dirigida al Mayor de la Zona de Policía de Veraguas, ordené el traslado de 96 internos recluidos en la cárcel pública de Santiago hacia la colonia Penal de Coiba. Entre dichos internos trasladados a Coiba se encontraba el mencionado Bonilla Urriola, quien aún se encuentra en aquel centro penitenciario, bajo custodia de la Dirección Nacional de Corrección.

Es conveniente explicar que el traslado de los 96 internos de la ciudad de Santiago a la isla de Coiba, se llevó a cabo por razón de que el Gobierno Nacional decidió cerrar la Cárcel Modelo, y se requería trasladar a cierta cantidad de reclusos de este Centro a otras cárceles de la República, entre ellas las cárceles de Santiago, Penonomé, David, etc. Es decir, se realizó un movimiento de internos de uno a otro centro penitenciario."

El licenciado **Néstor Egberto Ureña Batista** fundó su acción de habeas corpus en los siguientes hechos:

"**PRIMERO**: Que el señor SAMUEL BONILLA URRIOLA esta detenido a órdenes de organismos jurisdiccionales radicados en el Circuito Judicial de Veraguas.

SEGUNDO: Que el día de hoy 21 de octubre de 1996, el señor BONILLA URRIOLA tenía audiencia en el Juzgado Primero Penal del Circuito Judicial de Veraguas, y la misma no se realizó porque, según nos informaron el señor fue trasladado a la Isla Penal de Coiba.

TERCERO: Que el traslado a la Isla Penal de Coiba del señor SAMUEL BONILLA URRIOLA, desmejora material y formalmente la condición de detenido de esta persona.

a. Material: Porque para nadie es un secreto las condiciones de insalubridad y seguridad que representa una Isla Penal de cárcel abiertas.

b. Formalmente: Porque a raíz de este traslado se ha retrasado innecesariamente su proceso.

CUARTO: Que el Código Judicial exige, y con sobrada razón que los imputados bajo detención, cumplan esta medida cautelar en la cárcel de la sede donde son juzgados.

QUINTO: Que la doctrina dominante respecto a la pretensión de la Acción de habeas Corpus, contempla que este recurso es viable no sólo cuando hay privación de la libertad, sino que también en aquellos casos donde se producen desmejoramiento de las condiciones materiales y formales de los imputados.

La cárcel de Santiago no es una bendición, pero sus condiciones son mejores que las de la isla penal de Coiba, la cual ha sido el medio para desalojar a la cárcel modelo, de donde vienen reos sumamente peligrosos.

Recordamos que hace unos años hubo más de 20 homicidios, por problemas entre presos de ese centro, los cuales fueron registrados en el Tribunal Superior, ya que les ha tocado resolver dichas causas.

> **SEXTO:** Que el desmejoramiento de las condiciones del detenido es ilegal e impide la buena marcha de la administración de justicia.
>
> Solicitamos que se ordene el traslado del señor BONILLA URRIOLA a la Cárcel Pública de Santiago de Veraguas, para corregir este ilegal e injusta afectación de sus estatus de detenido."

La presente acción de habeas corpus es la que se conoce en la doctrina como habeas corpus correctivo y que ha sido aceptada por la jurisprudencia de esta Corte Suprema de Justicia, quien estableció en su sentencia de 24 de agosto de 1994 que el artículo 2153 del Código Judicial permitía esta iniciativa constitucional correctiva. El artículo 2153 del Código Judicial es del siguiente tenor:

> "Artículo 2153. La detención preventiva a que se refiere el artículo anterior, debe cumplirse en la respectiva cárcel de la provincia donde se cometió el delito, y en su defecto, en la cárcel del distrito correspondiente. **En consecuencia, ningún imputado, preventivamente detenido, podrá ser trasladado a cárceles distintas de la sede del Tribunal que conoce de sus casos.**" (Resaltado es de la Corte).

Igualmente en sentencia de 11 de agosto de 1993, anteriormente la Corte había sustentado el mismo criterio en el habeas corpus a favor de los señores Alexie Esthelbert Laurence y Rafael Días Luna contra el Fiscal Auxiliar de la República.

Más recientemente en sentencia de 29 de octubre de 1996 la Corte, a pesar de que declaró legal la detención de los señores DANILO LÓPEZ, GUIDO SALAZAR, MIRTA DE BLAS, LUIS LADEUT, ALFREDO FORBES Y OTROS, DISPUSO que fueran trasladados inmediatamente a otro centro penitenciario del Distrito de Panamá, por considerar que la pena de prisión por más de tres años, era una situación que no correspondía a los detenidos en el Penal de Coiba en este caso.

En cuanto a la doctrina, Néstor P. Sagüés en su libro **HABEAS CORPUS**, en la página 86 expresa que el habeas corpus correctivo es el que "tiene por meta `cambiar el lugar de detención cuando no fuera el adecuado a la índole del delito cometido o a la causa de la detención , y también, reparar el `trato indebido al arrestado (Humberto Quiroga Lavié). Actuaría, asimismo, para subsanar la `agravación de las limitaciones legalmente impuestas (Jorge A. Clariá Olmedo). Serio precedente de este instituto sería el `juicio de manifestación aragonés, que entre otras metas, tenía la de concluir con las vejaciones a detenidos, torturas en cárceles o agravios en las personas de los presos".

La ley N° 87 de 1° de julio de 1941 sobre establecimientos penales y correccionales, publicada en la Gaceta Oficial N° 8,559 del 19 de julio de 1941, en sus artículos 3, 4, 10 y 35, da pie para interpretar la aceptación del habeas corpus correctivo en nuestra legislación, además del artículo 2153 del Código Judicial, ya citado al establecer en qué lugares se deben cumplir las penas y las detenciones preventivas, relacionando esta ley con el artículo 23 de la Constitución, que establece que todo individuo detenido fuera de los casos y la forma que prescribe en esta Constitución y la ley, será puesto en libertad a petición suya o de otra persona, mediante el recurso de habeas corpus.

Los mencionados artículos dicen lo siguiente:

> "Artículo 3° Habrá en la República de Panamá todos los establecimientos penales y correccionales que sean necesarios, creados por la Ley o por el Poder Ejecutivo, mediante facultad expresa que se le concede al efecto."
>
> "Artículo 4° Por ahora existirán los siguientes:
>
> a) Colonia Penal de Coiba para los varones mayores de diez y ocho años de edad, que deban sufrir pena de prisión por más de tres años

> o pena de reclusión por cualquier término que sea. También sufrirán su condena en la Colonia Penal de Coiba los que deben cumplir confinamiento por el término fijo de tres años que determina el ordinal 3° del artículo 3° de la Ley 57 de 1941;
>
> b) Cárceles provinciales en cada una de las cabeceras de las Provincias en que se divide el territorio de la República, en las cuales se cumplirán las penas de prisión menores de tres años, y de arresto por más de treinta días;
>
> c) Cárceles distritoriales, en las que se cumplirán penas de arresto por menos de treinta días;
>
> d) Reformatorio de Mujeres en el cual cumplirán las penas privativas de la libertad las mujeres mayores de diez y ocho años cualquiera que sea el término de la pena impuesta;
>
> e) Reformatorio de Menores en el cual cumplirán las penas que deban sufrir los menores de diez y ocho años, cualquiera que sea su término."
>
> "Artículo 10. La detención preventiva se cumplirá en el establecimiento penal del lugar donde tenga su asiento el tribunal a quien corresponde juzgar al penado.
>
> La detención preventiva de mujeres y de los menores de diez y ocho años que deba cumplirse en lugares en los cuales no haya establecimientos penales especiales para ellos, se cumplirá en el lugar que determine el tribunal que debe juzgarlo."
>
> "Artículo 35. La Cárcel Provincial de Panamá es un establecimiento del Estado que se destina para asegurar y custodiar a los detenidos y a los enjuiciados por causa criminal, a los condenados por la misma causa **que, de acuerdo con las disposiciones legales, no deban cumplir sus penas en la Colonia Penal de Coiba o en otras cárceles, y a los condenados por faltas policivas**." (El resaltado es de la Corte).

Establecida la procedencia del habeas corpus correctivo en base a lo anteriormente expresado, entra la Corte a examinar la acción incoada.

Del informe del Señor Ministro de Gobierno y Justicia se desprende claramente que el señor **SAMUEL BONILLA URRIOLA** fue condenado por el Juzgado Primero del Circuito de Veraguas, Ramo de lo Penal, mediante Sentencia N° 59 de 15 de mayo de 1996, a cumplir pena de 40 meses de prisión, por el delito de hurto con penetración, en perjuicio del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y que el sentenciado se encontraba cumpliendo dicha pena en la cárcel pública de Santiago de Veraguas, bajo custodia de la Dirección Nacional de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Que con base en el hecho anterior es indudable que es correcto el traslado a la Isla Penal de Coiba que ordenó el Ministro de Gobierno y Justicia con fundamento en el literal A del artículo 4 de la Ley 87 de 1941 que establece que los condenados a penas de prisión por más de tres años deberán sufrir su pena en la Isla Penal de Coiba. En el presente caso el señor **SAMUEL BONILLA URRIOLA** fue condenado a 40 meses de prisión, que excede los tres años que requiere el artículo citado.

Por las razones expuesta, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL el traslado del SAMUEL BONILLA URRIOLA a la Isla Penal de Coiba.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE FREDDY JOSÉ MEDINA CÓRDOBA CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La licenciada **Carolina Arosemena Samudio** presentó acción de Habeas Corpus a favor del marino **FREDDY JOSÉ MEDINA CÓRDOBA**, quien es una de las unidades del Servicio Marítimo Nacional en la Isla de Naos, Distrito y Provincia de Panamá, en la que se encontraban detenidos, por razón de seguridad, debido a su alta peligrosidad, los señores **José María Infanson Castro, alias Media Luna; Nelson Gálvez Amanios, alias Mono Loco y Nelson Torres Moreno, alias Trauma**. El marino **Freddy José Medina Córdoba**, quien era uno de los custodios de los mencionados detenidos, fue privado de su libertad por Resolución de 8 de noviembre de 1996, expedida por la Fiscalía Auxiliar de la República, por el Agente de Instrucción Delegado adscrito a dicha Fiscalía, licenciado **Benjamín Arias**.

Acogida la acción y expedido el mandamiento de Habeas Corpus, el Fiscal Auxiliar de la República lo contestó de la siguiente manera:

> "a). Sí es cierto, que en este despacho, el Agente Delegado de la Fiscalía Auxiliar de La República, ordenó la detención del señor **FREDDY JOSÉ MEDINA CÓRDOBA** y la misma se hizo por escrito, mediante Resolución calendada ocho (8) de noviembre de los corrientes visibles a fojas 253 a 258 del presente negocio, dando cumplimiento a lo expuesto en los artículos 2148, 2158 y 2159 del Código Judicial, dispuso, dejar sin efecto la aprehensión de **KHANDU SHAHID GONZÁLEZ** y ordenó la detención preventiva de **FREDDY JOSÉ MEDINA CÓRDOBA**, por los cargos de supuesta comisión de los Delitos Contra la Administración Pública, contemplados en el Título X, Capítulo III del Libro II del Código Penal y Contra la Seguridad Colectiva (Asociación Ilícita para Delinquir), contemplado en el Título VII, Capítulo III, del Libro II del Código Penal, y dispuso su separación del cargo público que ejerce. A fojas 358-359, mediante resolución de fecha 14 de noviembre, el Fiscal Auxiliar de La República adicionó o reformó el documento antes descrito, agregando: ... `los delitos contemplados en el título once, Capítulo VI, del Código Penal, modificado por la ley 57 de 27 de diciembre de 1995 .
>
> b). En cuanto a los fundamentos de hecho que se dieron para tal medida, al momento de evaluar las piezas acopiadas al cuaderno penal, con respecto a **FREDDY MEDINA**, consta en autos que existen elementos que gravitan sobre el hecho que se encontraba supuestamente distraído en sus deberes de custodio de los detenidos, lo cual fue corroborado mediante declaración jurada rendida por **JORGE YANIS CÓRDOBA**, el cual manifestó que cuando fungía como Oficial Custodio en las instalaciones del Servicio Marítimo Nacional en varias ocasiones le llamó la atención porque se sentaba, se distraía, leía en horas de servicio; siendo esta situación una conducta reiterada por parte de **MEDINA**, en este tipo de servicios y sobre todo teniendo presente que se trataba de detenidos de "Alta Peligrosidad", y que estaban asignados a celdas de "Máxima Seguridad".
>
> También es importante destacar que **FREDDY MEDINA** no presenta eviden-

cias de haber sido maltratado por los prófugos, y siendo individuos de "Alta Peligrosidad" es posible esperar de ellos reacciones violentas y agresiones de mayor magnitud, lo cual nuevamente sugiere la participación de **MEDINA** en este hecho punible, siendo su manifestación de **"QUE HARÍAS SI LOS DETENIDOS TE OFRECIERAN DINERO PARA FUGARSE"**, una evidencia de la preparación del terreno para propiciar la fuga de los presos. Y no hemos escuchado los descargos de rigor del señor **MEDINA**, y por ello los cargos en su contra se mantienen.

c). El sindicado **FREDDY MEDINA**, se encuentra bajo la custodia de la Policía Nacional, a órdenes de esta Fiscalía según oficio 16682 del 8 de noviembre reformado por el oficio 16936 de fecha 14 de noviembre de 1996.

De acuerdo con el artículo 2582 del Código Judicial, estimamos que debo mencionar algunos aspectos que son de importancia y sustentan la medida atacada. En efecto, luego de la confección de la resolución que ordena el artículo 2115 del Código Judicial, en los que se menciona como fundamento legal: ... `la existencia de Delitos conexos, los mismos contemplados en el Código Penal, libro II, Título Once, Capítulo Sexto, modificado por la ley 57 de 27 de diciembre de 1995; Título Séptimo y Décimo, Capítulo III. Del mismo modo, en cuanto a los señores FREDDY MEDINA Y KHANDU SHIAD GONZÁLEZ, ambos miembros del Servicio Marítimo, graves indicios que los señalan en cuanto a los hechos que se investigan pese a que debemos ahondar en algunas pruebas, por este medio se dispone: Recibir declaración indagatoria a los señores FREDDY MEDINA Y KHANDU SHIAD GONZÁLEZ, conforme lo normado en el artículo 2115 del Código Judicial, del mismo modo, se deje sin efecto la aprehensión de los señores CECIBEL LONDOÑO, LUIS ALBERTO VILLARREAL, LUIS ALBERTO REYNA Y FELICIANO BATISTA, por lo que se debe girar de inmediato los oficios respectivos para cumplir con lo dispuesto . (Fs. 203).

A fojas 241-242, se indaga el prenombrado MEDINA, quien alega: `luego de intentar localizar a mi abogado, el cual es el licenciado Rogelio Arosemena, de la firma Arosemena y Arosemena y dado que no le he podido localizar, tengo instrucciones de él, que no declare nada hasta tanto esté presente, razón por la cual me acojo al artículo 22 de la Constitución Nacional de la República y no voy a declarar . Hay constancia que se le prestó el teléfono a fin de localizar a su abogado sin suerte.

Hay una solicitud de libertad inmediata a fojas 245-246, en la cual sustenta: Si analizamos el contenido de los artículos 365, 366, 367 y 368 del Código Penal, la pena que debe ser impuesta por los delitos tipificados en las normas anteriores, en el evento que nuestro patrocinado pudiese tener sólo en beneficio de dudas, alguna responsabilidad, ninguno ADMITE DETENCIÓN PREVENTIVA por motivo de la pena contemplada en cada uno de los artículos reseñados. Este escrito se presentó el 8 de noviembre de este año.

Debemos señalar sin lugar a dudas, que el peticionario desconoce la reforma contemplada en la ley 57 de 27 de diciembre de 1995, que en el artículo 5 establece una pena de prisión de 2 a 5 años cuando se trata de los artículos 365, 366, 367 y 368 del Código Penal.

El doce de noviembre hay otra gestión a fojas 264, en la cual entregan ropa en calidad probatoria.

Hay constancia mediante informe Secretarial, visible a fojas 280, en la cual se informa al pasante del abogado defensor para enterarlo de la intención de la ampliación de la indagatoria a MEDINA.

A fojas 295 se accede a la solicitud de copia hecha por escrito.

Cabe señalar que hay innumerables dificultades para esta actividad:

1. Primero, que debemos enviar el expediente fuera de la Fiscalía con un funcionario porque tales copias cuestan y debe ser sufragado por el interesado;

2. El expediente está siempre en movimiento por las otras actividades inherentes y se demuestra con las actuaciones visibles de foja 207 hasta las foja 347;

3. Tiene que estar en disposición ambas partes, es decir, el funcionario de la Fiscalía y el interesado;

4. El expediente debe estar armado y foliado. Debemos considerar que hay momentos en las que se realiza múltiples actividades;

5. El expediente debe estar a disposición del Fiscal, para resolver y ordenar actividades.

Con relación a las actividades fuera del despacho tenemos, a foja 338 hay constancia que el pasante del defensor, estuvo ocupando tiempo para revisar parte del expediente y sustraer información como está explicado.

A fojas 361 hay constancia de la entrega del expediente debidamente ordenado y foliado para proceder con las copias desde ayer entre las doce medio día y dos de la tarde para que fotocopiaran todas las diligencias que hasta ese momento estaban acreditadas. No hay constancia en los documentos que acompañan el traslado del mandamiento sobre la hora en que fue presentado ante la Máxima Corporación de Justicia.

Con base a la adición o reforma de la resolución que consta a foja 358-359, se dispuso en otra resolución la necesidad de evacuar la diligencia indagatoria, sobre los cargos y descargos que son propios, lo que consta a fojas 362; consta en un informe secretarial a fojas 364, tal intención y la respuesta del defensor, estableciendo para la citada diligencia el lunes 18 de noviembre a las dos de la tarde, por ello, para esa fecha y hora, debíamos tener un secretario dispuesto.

Dentro de las actividades realizadas y paralelas a todo lo expuesto, conocemos de las declaraciones testimoniales visibles de foja 265 en adelante de situaciones como: `... nos tomó casi cuatro (4) minutos librar a MEDINA, él se encontraba esposado, con las esposas dentro de la celda y le vimos una herida en la espalda con arma blanca,' (observar foto a foja 10) ... Esta conducta de estar cerca de la celda, es contraria a las actividades descritas en las instrucciones visibles de fojas 146-153 y de fojas 155-174".

La licenciada **Carolina Arosemena de Samudio** estima que la privación de la libertad que sufre su patrocinado es ilegal, por las siguientes razones:

"II. HECHOS EN QUE SE FUNDAMENTA ESTE RECURSO:

PRIMERO: El día 31 de octubre del año en curso se produjo la evasión, de las celdas de máxima seguridad del Servicio Marítimo Nacional (SMN), de los señores JOSÉ MARÍA INFANSON (a) Media Luna, NELSON TORRES (a) El Cuervo y NELSON GÁLVEZ (a) Mono Loco, quienes se encuentran bajo investigación por parte del Ministerio Público por la supuesta comisión de multiplicidad de ilícitos.

SEGUNDO: Producto de la evasión antes reseñada la Dirección de Investigación e Información Policial (DIIP) de la Policía Nacional inicia investigación por los hechos ocurridos y, una vez que el señor FREDDY JOSÉ MEDINA CÓRDOBA es dado de alta en la institución

hospitalaria del estado en donde fue recluido por motivo de heridas de las cuales fue víctima durante la evasión, es INVITADO por la DIIP a permanecer en las instalaciones de esa dependencia, sin que para ello existiese orden de autoridad competente.

TERCERO: El expediente contentivo de la investigación realizada por la DIRECCIONÓ DE INVESTIGACIÓN E INFORMACIÓN POLICIAL (DIIP) al parecer es remitido a la FISCALÍA AUXILIAR DE LA REPÚBLICA en horas de la tarde del día 8 del mes en curso, según señala reseña periodística aparecida en la PLANA 3 del periódico LA PRENSA de ese mismo día.

CUARTO: Si la afirmación anterior resulta ser cierta, entonces en el expediente, por lo menos para esa fecha, no podía reposar orden de detención de autoridad competente y el señor MEDINA CÓRDOBA de hecho había sido privado de su libertad por motivo de la investigación realizada por el DIIP en un acto abiertamente violatorio de la ley.

QUINTO: Si analizamos el contenido de los artículos 365, 366, 367 y 368 del Código Penal la pena que debe ser impuesta por los delitos en ellas tipificados y que resultan ser, alguna de ellas, el posible ilícito cometido por los evadidos y no por el señor MEDINA CÓRDOBA, ni siquiera en grado de participación criminal, NINGUNO ADMITE DETENCIÓN PREVENTIVA por motivo de la pena contemplada en cada uno de ellos.

SEXTO: Si la HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA comparte nuestra opinión, la "DETENCIÓN", que a la fecha desconocemos si existe o no, que viene sufriendo MEDINA CÓRDOBA es evidentemente al margen de la ley y VIOLENTA SUS DERECHOS.

III. FUNDAMENTO LEGAL QUE SIRVE DE SUSTENTO A ESTE HABEAS CORPUS:

Detenido en la manera y forma como queda indicado, se ha violado, flagrantemente, el artículo 21 de la Carta Fundamental por cuanto la detención atacada ha ocurrido fuera de los casos y las normas prescritas por la propia Constitución y la Ley, razón por la cual debe ser puesto en libertad inmediatamente en virtud del presente RECURSO EXTRAORDINARIO DE HABEAS CORPUS, tal cual lo preceptúa el artículo 23 de la Constitución Nacional. Bien comprendo las circunstancias extralegales que pudieran esgrimirse, pero no dejo de comprender igualmente que la libertad de los hombres es un bien sin precio que ni siquiera debe quedar sometida a estas contingencias, máxime cuando la FISCALÍA AUXILIAR le imputa ilícitos que no ha cometido el señor FREDDY MEDINA CÓRDOBA. El Tribunal de Habeas Corpus tendrá que convenir en que tienen que prevalecer las normas de la Constitución Nacional que tutelan la libertad individual y que sirven de pautas obligantes del debido proceso.

El Honorable Segundo Tribunal, en una decisión de 3 de septiembre de 1973 relacionada con un caso de detención ilegal, ha sostenido en tutela de los derechos ciudadanos que `POR IMPERATIVO DE LA NORMA CONSTITUCIONAL, TODA PERSONA TIENE DERECHO A INMUNIDAD DE ARRESTOS ARBITRARIOS Y PARA GARANTIZAR ESE DERECHO SUBJETIVO, EL ÓRGANO JURISDICCIONAL TIENE EL DEBER DE CALIFICAR LA LEGALIDAD O ILEGALIDAD DEL ACTO ACUSADO, TODA VEZ QUE SIENDO COMPETENTE PARA ELLO, SE LE INQUIERE EL EXAMEN RESPECTIVO SIN CONDICIONARLO A NINGÚN TIPO DE FORMALIDAD. SOLO ASÍ TENDRÍA EFECTIVIDAD CONSTANTE Y PERMANENTE EL DERECHO DE LA LIBERTAD PERSONAL Y JUSTIFICACIÓN DEL INTERÉS SOCIAL DE GARANTIZAR SU TUTELA .

En otro caso, fechado el 19 de enero también del año de 1973, la Honorable CORTE SUPREMA DE JUSTICIA declaró ilegal la detención de una persona y postuló las siguientes consideraciones que resultan ser de una extraordinaria aplicación a este caso. Dijo entonces la Honorable CORTE: `TRATÁNDOSE DE ASUNTO TAN DELICADO COMO ES LA

> LIBERTAD PERSONAL, LA CUAL ES GARANTIZADA POR LAS CONSTITUCIONES DE TODOS LOS PAÍSES CIVILIZADOS DEL MUNDO, DEBE INTERPRETARSE LA LEY EN EL SENTIDO DE GARANTIZAR SU EJERCICIO, EN TANTO NO HAYA FUNDADOS MOTIVOS PARA COARTARLA, Y EN CASO DE QUE HUBIERE DUDA ESTA DEBE SER INTERPRETADA EN BENEFICIO DEL REO O DE LA PERSONA CUYA LIBERTAD SE ENCUENTRA AMENAZADA ".

Un examen de la actuación revela que la medida de la detención preventiva tomada contra FREDDY MEDINA tiene fundamento legal en el artículo 2159 del Código Judicial, ya que existen elementos que demuestran que al custodio de los detenidos que se fugaron, en varias ocasiones se le llamó la atención, porque se sentaba, se distraía, y leía en horas de servicio. Además es de notar que de la propia actuación se desprende que los evadidos lo sorprendieron, sin que éste se diera cuenta de la presencia de los mismos, que lo atacaron con un cuchillo, y sólo se enteró cuando le pusieron dicha arma sobre el cuello, lo que demuestra que estaba totalmente desprevenido, lo cual es inadmisible en una persona que ejerce funciones de custodio. Además consta igualmente en Autos que **MEDINA** le preguntó a uno de sus compañeros **"QUE HARÍAS SI LOS DETENIDOS TE OFRECIERAN DINERO PARA FUGARSE"**. Igualmente no hay evidencias que **MEDINA** haya sido maltratado por los prófugos a pesar de la alta peligrosidad de los evadidos y la herida que le ocasionaron con el cuchillo no parece de mayor gravedad.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención del señor FREDDY JOSÉ MEDINA CÓRDOBA y ORDENA que sea puesto nuevamente a órdenes de la Fiscalía Auxiliar de la República.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ANTONIO GAITÁN PINTO EN CONTRA DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado al Pleno de la Corte Suprema la acción de habeas corpus interpuesta por el señor JAVIER ANTONIO QUINTERO RIVERA en favor de **ANTONIO GAITÁN PINTO**, y contra el Fiscal Especializado en Delitos relacionados con drogas.

Librado el mandamiento respectivo, el funcionario acusado rindió su informe de conducta en los siguientes términos:

> "1. Sí (sic) es cierto que se ordenó la detención preventiva del señor ANTONIO GAITÁN PINTO, la misma fue decretada mediante Resolución de este Despacho, fechada 29 de mayo de 1996.
>
> 2. La orden proferida contra el señor ANTONIO GAITÁN PINTO, surge de los señalamientos formulados en su contra, a través de los informes visibles a fojas (5-12) y (17-20) del expediente, así como también del Acta de Allanamiento visible a fojas 14-16, fechada 24 de mayo del presente año.

> Los elementos sobre los cuales se fundamenta tal decisión, emergen de los informes de inteligencia y vigilancia remitidos a este Despacho por la Policía Nacional del área "G" de Alcalde Díaz, donde hacen mención de una casa donde es habitada por una señora de nombre YOLANDA, quien en asocio de un sujeto apodado "CHINO" se dedican a la venta de sustancias ilícitas.
>
> Por tal razón se le da seguimiento a dicha información y en conjunto con esta Agencia de Instrucción, se procedió al allanamiento del lugar donde fueron encontrados los señores ANTONIO GAITÁN PINTO y MARÍA YOLANDA CAICEDO y, donde al efectuar el registro del lugar se pudo encontrar en la parte superior del baño de la residencia, un (1) envase contentivo de siete (7) sustancias sólidas de color crema que se presume sean droga (piedra o crack). De igual forma en una cartera de propiedad de la señora MARÍA YOLANDA CAICEDO se encontraron cuarenta y seis balboas en billetes de baja denominación, así como también, en otros envases se logró encontrar dinero fraccionado. Se encontró además en la residencia allanada cierta cantidad de bicarbonato de sodio, velas, grilletes, una pipa de fabricación casera, elementos éstos que en conjunto con las denuncia(sic) formuladas por moradores del lugar, donde hacen referencia de que en dicha casa se vendía droga, fuertes indicios de presencia y oportunidad que incriminan a los señores GAITÁN PINTO y CAICEDO DE LEÓN con la comisión de los hechos que se investigan.
>
> Al ser sometidos a los rigores de la declaración indagatoria los señores ANTONIO GAITÁN PINTO, acepta que la droga incautada era de su propiedad y para consumo personal, mientras tanto la señora MARÍA YOLANDA CAICEDO manifestó que desconocía todo en cuanto al hallazgo de la sustancia ilícita en mención, sin embargo, por su parte al ser evaluado por el médico psiquiatra, del Instituto de Medicina Legal, dice que el señor GAITÁN PINTO, no revela trastorno mental alguno, ni tampoco algún grado de dependencia a droga alguna, situación esta que desvirtúa las aceveraciones (sic) por parte del señor GAITÁN PINTO de que el mismo es consumidor de sustancias ilícitas.
>
> Como elemento probatorio que acredita la existencia del hecho punible que nos ocupa, consta de fojas 68-69 del expediente, el resultado del análisis de la droga incautada, emitida por el Laboratorio Especializado de la Policía Técnica Judicial, el cual arrojó resultado positivo para la determinación de COCAÍNA en la cantidad de 2.86 gramos.".

Del anterior informe y de lo obrado en el expediente principal, se desprende que **GAITÁN PINTO** fue detenido en una residencia ubicada en el sector de Alcalde Díaz, en momentos en que al realizarse un allanamiento se detectó la presencia de sustancias ilícitas para el tráfico y que al realizársele la prueba dieron resultados positivos para la droga COCAÍNA (CRACK) en una cantidad de 2.86 gramos.

En el escrito de habeas corpus, el señor QUINTERO RIVERA indica que la cantidad de droga incautada al señor **GAITÁN PINTO** es "escasa" y que por tanto se entiende, de acuerdo con la declaración del propio GAITÁN, que es para su consumo personal. Con base en esa premisa el recurrente solicita que se declare ilegal la detención pues el delito de posesión no tiene pena mínima de dos (2) años de prisión y por tanto no admite detención preventiva. No obstante, advierte el Pleno que para que la cantidad de sustancia ilícita incautada en un proceso de drogas se considere para consumo personal, debe ser igual o inferior a la medida posológica que al efecto ha indicado el Instituto de Medicina Legal y que consiste en 0.3 gramos, cantidad ésta que es sobrepasada con creces por la sustancia que se le incautara al detenido **GAITÁN PINTO.**

Por otro lado, la certificación que con motivo del examen psiquiátrico practicado en la persona de **GAITÁN PINTO**, emitiera el Instituto de Medicina Legal, específicamente el Dr. JUAN MANUEL BENÍTEZ, revela que el imputado no

presenta dependencia a droga alguna, con lo cual pierde validez el argumento de la posesión para consumo personal y adquiere fuerza el concepto de la posesión para venta.

El artículo 2148 del Código Judicial establece que cuando se trate de delitos que tengan señalada pena mínima de dos (2) años de prisión, se podrá decretar la detención preventiva de los sindicados, previo cumplimiento de las formalidades establecidas en dicho cuerpo de leyes.

Hasta el momento tenemos que el delito por el cual se encuentra detenido **ANTONIO ALBERTO GAITÁN PINTO** es de aquellos que atentan contra la Salud Pública relacionados con drogas, específicamente el de tráfico tipificado en el artículo 258, Libro II, Título VII, Capítulo V del Código Penal, en el que se establece una pena mayor de dos (2) años de prisión. De modo tal que se encuentran cumplidos los requisitos para decretar legal la detención preventiva del prenombrado **GAITÁN PINTO**.

Por otro lado, se advierte que a fojas 81-83 del cuadernillo principal, esta Corporación resolvió apenas el 22 de julio de este año, una acción de habeas corpus a favor de **ANTONIO ALBERTO GAITÁN PINTO**, bajo la ponencia del Magistrado FABIÁN A. ECHEVERS. En esa ocasión la Corte consideró que la orden de detención girada contra **GAITÁN PINTO** era **LEGAL**, pues cumplía con los requisitos que a tal efecto establecen la Constitución Política y el Código Judicial vigentes.

El artículo 2595 del Código Judicial establece el principio de la relatividad de la cosa juzgada en materia de habeas corpus, y en ese sentido la jurisprudencia de esta Corte ha indicado que es viable revisar mediante dicha acción la situación procesal de un detenido a quien antes le hubiere sido resuelta una acción constitucional de la misma naturaleza (ver sentencias de 19 de octubre de 1995, 24 de noviembre de 1995 y 6 de septiembre de 1996). No obstante esa posibilidad se reserva para las causas en las que surjan nuevos elementos de prueba que varíen el status procesal del detenido.

Observamos que en la presente encuesta penal no se ha registrado modificación alguna en la situación procesal del recurrente, ni han ingresado nuevos elementos probatorios favorables a su persona, de modo que justifiquen entrar a considerar nuevamente la legalidad o ilegalidad de la detención cuestionada.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva decretada contra ANTONIO ALBERTO GAITÁN PINTO y en consecuencia, ORDENA que sea filiado nuevamente en el respectivo centro penitenciario a órdenes del Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE JUANA MAGALYS MORALES CONTRA EL JUEZ DÉCIMO CUARTO DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL EN GRADO DE APELACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mientras se surtía el trámite de lectura del proyecto de resolución de la acción de habeas corpus en grado de apelación, interpuesta por el licenciado MIGUEL DEEN RODRÍGUEZ en favor de la señora **JUANA MAGALY MORALES** contra la Sentencia emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia en pasado 21 de octubre de 1996, en la cual se declarara legal su detención, el apoderado de la detenida presentó en Secretaría escrito mediante el cual manifiesta su intención de desistir.

Pues bien, la Corte ha sostenido que en materia de habeas corpus es factible el desistimiento siempre y cuando quien lo manifieste sea el detenido, su defensor o la persona que interpuso la acción.

Como quiera que en el presente negocio la expresión de desistimiento proviene del abogado de la detenida, el Pleno nada tiene que objetar y, en consecuencia, procede admitir el desistimiento.

Por lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el desistimiento presentado por el Licenciado MIGUEL DEE RODRÍGUEZ dentro de la acción de habeas corpus interpuesta en favor de la señora JUANA MAGALYS MORALES; en consecuencia, ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE BLANCA MORENO DE MIRANDA CONTRA EL FISCAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado Jaime E. Olmos Díaz ha interpuesto acción de habeas corpus a favor de Blanca Moreno de Miranda y contra el Fiscal Superior del Segundo Distrito Judicial.

Acogido el recurso se libró mandamiento de habeas corpus contra el Fiscal Superior del Segundo Distrito Judicial quien rindió el siguiente informe:

> "a.- Sí es Cierto (sic) que de manera escrita y mediante providencia debidamente motivada y razonada de fecha 22 de agosto de 1996 emanada de la Fiscalía Superior del Segundo Distrito Judicial (sic), Secretaría de Drogas, se ordenó la **DETENCIÓN (sic) PREVENTIVA DE BLANCA MORENO MIRANDA**..
>
> b.- Los motivos de hecho que se tuvo para ello estan (sic) debidamente consignados en la citada providencia y la cual consiste en que en fecha 21 de agosto del año que decurre (sic) se realizó diligencia de COMPRA CONTROLADA en el BAR LA TROPICANA ubicado en la Ciudad de Santiago de Veraguas y posterior diligencia de Allanamiento y Registro en el citado lugar con el fin de ubicar los billetes utilizados para dicha compra como también más sustancias ilícitas en el Congelador, y carrizos ya consumidos en el piso y en el área del servicio y además de (sic) ubicó un cuarto donde supuestamente se practicaba la prostitución clandestina.

A fojas 45 a 53 de la actuación se acredita la declaración indagatoria de **RODRIGO ALBERTO RODRIGUES (sic) SANTOS** cantinero de turno el día de los hechos el cual manifiesta que la dama de marras se dedica a la venta de sustancias ilícitas conjuntamente con otros ciudadanos y afirma y se ratifica bajo la gravedad de juramento a fojas 54 de la encuesta penal.

Por otra parte, consta en el sumario declaraciones que indican que en el Bar La Tropicana (lugar de los hechos) operaba una banda de distribuidores de sustancias ilícitas compuestas por personas del sexo masculino y femenino entre estos la ciudadana **BLANCA MORENO de MIRANDA** así lo corrobora **CARLOS RODRÍGUEZ ÁBREGO a fojas 102 a 109 y vuelta de las sumarias** en donde se acredita su declaración indagatoria, y en posterior ratificación bajo la gravedad del juramento (fojas 72 de la actuación). Los fundamento (sic) de derecho utilizados son los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial en relación con la Ley 13 de 27 de julio de 1994.

c.- A la tercera pregunta respondo que en la actualidad la prenombrada se encuentra a órdenes de este Despacho y en la cárcel pública de la Ciudad de Santiago de Veraguas, motivo por el cual hemos procedido a ponerla a disposición de esa Corporación de Justicia, tal cual se nos ha ordenado en el mandamiento de Habeas Corpus que en estos momentos contestamos."

Por su parte, el licenciado Jaime E. Olmos Díaz estima que la detención preventiva de la cual es objeto la señora Blanca Moreno de Miranda es ilegal, ya que la sustancia supuestamente ilícita jamás estuvo en su posesión.

En este momento, corresponde determinar si la medida cautelar de carácter personal atacada, cumple con los requisitos que al efecto establecen los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

La Corte observa que de fojas 98 a 100 de las sumarias, reposa la resolución fechada el 22 de agosto de 1996, mediante la cual el Fiscal Superior del Segundo Distrito Judicial, una vez efectuado un análisis inicial de los hechos, estimó que los mismos vinculan a la señora Blanca Moreno de Miranda, razón por la cual ordenó su detención preventiva.

Observa el Pleno que se trata de un proceso iniciado de oficio, por cuanto que a la señora Blanca Moreno de Miranda se le imputa delito contra la Salud Pública.

El Pleno estima que existen indicios que vinculan a la señora Blanca Moreno de Miranda con los hechos que se le imputan. Lo anterior es así, toda vez que obran en el expediente una serie de informes expedidos por la Zona de Policía de Veraguas (S. D. I. I. P. V.), que revelan la existencia de un grupo de personas en la Ciudad de Santiago de Veraguas que se dedican a la venta y distribución de sustancias ilícitas.

Aunado a ello, observa el Pleno que, a raíz de la información antes recabada, se efectuó una operación encubierta consistente en una compra controlada de droga en el Bar La Tropicana, que fue debidamente autorizada por la Fiscalía Superior del Segundo Distrito Judicial, y se destinó para ello la suma de cinco balboas (B/.5.00) en billetes detallados en su numeración. Como resultado de lo anterior, se ordenó el allanamiento de dicho bar, en donde se incautó 11 sobres plásticos transparentes y 3 carrizos que en su interior contenían una sustancia blanca que se presume sea droga. También se realizaron ocho detenciones de personas supuestamente involucradas entre las que se encuentra la señora Blanca Moreno de Miranda.

Consta a foja 250 de las sumarias el informe de laboratorio que certifica que la sustancia incautada es la droga conocida como cocaína en la cantidad de 1,76 gramos, pero los tres carrizos resultaron negativos por drogas ilícitas.

Igualmente, consta a fojas 45 a 53 del sumario la declaración indagatoria y ratificada bajo la gravedad del juramento (f. 54) rendida por el señor Rodrigo Alberto Rodríguez Santos en donde indica que Blanca Moreno de Miranda se dedicaba a la venta de sustancias ilícitas conjuntamente con otros ciudadanos. También consta a fojas 102 a 109 la declaración indagatoria de Carlos Rodríguez Ábrego en la que señala la existencia de una banda que se dedica a la distribución de sustancias ilícitas, usando como centro de distribución el bar La Tropicana.

Del estudio de las sumarias, el Pleno estima que de la declaración indagatoria de Rodrigo Alberto Rodríguez Santos (fs. 45 a 53), ratificada mediante la gravedad del juramento por el mismo (f. 54) y la declaración indagatoria de Carlos Rodríguez Ábrego (a) Carlitos (fs. 102 a 109), constituyen indicios suficientes que vinculan a la señora Blanca Moreno de Miranda con los hechos que se le imputan.

En virtud de lo antes expuesto, el Pleno de esta Corporación estima que la detención preventiva de la señora Moreno de Miranda, no ha infringido el debido proceso establecido en la Constitución Nacional y en las leyes de la República, ni tampoco las normas jurídicas que regulan la detención preventiva, por lo que lo procedente es, pues, declarar legal la detención.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de la señora Blanca Moreno de Miranda y, por tanto, dispone que la detenida sea puesta nuevamente a órdenes del Fiscal Superior del Segundo Distrito Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE GILBERTO ESPINOZA MACIAS CONTRA EL FISCAL ESPECIAL EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La señora ANAYANSI GONZÁLEZ DE ESPINOZA ha interpuesto acción de Habeas Corpus a favor de **GILBERTO ESPINOSA MACIAS** contra el Fiscal Especial en Delitos Relacionados con Drogas.

Librado el mandamiento de habeas corpus, el funcionario acusado contestó en los siguientes términos:

> "PRIMERO: Sí es cierto que ordené la DETENCIÓN PREVENTIVA del señor GILBERTO ESPINOZA, mediante providencia fechada dos (2) de julio de mil novecientos noventa y seis (1996).
>
> SEGUNDO: Los fundamentos de hecho y de derecho que nos llevaron a tomar la decisión de ordenar la DETENCIÓN PREVENTIVA del señor GILBERTO ESPINOZA MACIAS, radica en lo siguiente:
>
> El proceso criminal que nos ocupa se inicia con la solicitud de llevar a cabo la diligencia de Compra Controlada que formula el Jefe de División de Narcóticos de la Policía Técnica Judicial de Panamá, en razón de que se asegura que en una residencia ubicada en el

Corregimiento de Pedregal se vende droga.

Efectivamente se lleva a cabo dicha diligencia, en donde la persona de un informante hace la compra de droga con billetes previamente registrados (fotocopiados), los informes de los investigadores policiales dejan ver la existencia en el lugar de un individuo que portaba un arma de fuego.

Consecuentemente el despacho lleva a cabo diligencia de allanamiento al lugar, en donde se logra incautar cierta cantidad de COCAÍNA y los billetes utilizados en la COMPRA CONTROLADA. En ese lugar fueron detenidos los hermanos MIGUEL ÁNGEL ABREGO y JAIME ABREGO QUINTERO, además del señor GILBERTO ESPINOZA MACIAS, quien portaba un arma de fuego con serie limada.

La sustancia incautada fue sometida al respectivo análisis en el Laboratorio Técnico Especializado en Drogas de la Policía Técnica Judicial, arrojando resultados que demuestran la existencia del alcaloide conocido como COCAÍNA, con un peso total de 43.58 gramos.

Los fundamentos de derecho para ordenar la DETENCIÓN PREVENTIVA del señor GILBERTO ESPINOZA MACIAS, es el contenido de los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial.

TERCERO: El señor GILBERTO ESPINOZA MACIAS actualmente se encuentra a órdenes de vuestro Tribunal en razón de acción de habeas corpus interpuesta a su favor. Le adjuntamos copia de los Oficios N° 7722 y 7775, de 29 y 30 de julio de 1996". (Fs. 17 y 18).

La accionante, por su parte, señala que Gilberto Espinoza se encuentra privado de su libertad en la Cárcel Modelo por el supuesto delito contra la Salud Pública, a pesar de que el Segundo Tribunal Superior mediante sentencia de 10 de septiembre de 1996 declaró ilegal su detención.

Expresa, además, que Gilberto Espinoza fue detenido por el supuesto delito de posesión ilícita de armas de fuego, delito por el cual le fue concedida medida cautelar, pero que, a pesar de ello, en la Cárcel Modelo no le quieren dar la libertad, porque, según señalan, aún tiene pendiente el expediente de drogas.

La Corte ha podido verificar, tanto del informe del funcionario acusado como de las piezas procesales incorporadas al expediente, que la detención preventiva de GILBERTO ESPINOZA MACIAS fue ordenada mediante resolución de 2 de julio de 1996 (Fs. 47-50 antecedentes), junto con la detención de JAIME ABREGO QUINTERO y MIGUEL ÁNGEL ABREGO QUINTERO, por surgir suficientes elementos que vinculaban a estas personas con la comisión de un delito contra la SALUD PÚBLICA, relacionado con drogas. Sin embargo, al finalizar dicha resolución se dispuso lo siguiente:

"... Por otro lado y de acuerdo a lo establecido por el artículo 2 de la Ley 53 de 12 de diciembre de 1995, se ordena la remisión del arma de fuego encontrada en poder del señor ESPINOSA y la compulsa de copias, a la esfera correspondiente, debido a la presunta comisión de un delito denominado de manera genérica como POSESIÓN Y COMERCIO DE ARMAS PROHIBIDAS, a fin de que se investigue lo pertinente.
...".

Inicialmente, con relación a la detención de MIGUEL ÁNGEL ABREGO y GILBERTO ESPINOZA se interpuso Acción de habeas corpus ante esta máxima Corporación, que fue resuelta mediante fallo de 6 de agosto de 1996, declarando ilegal la detención de Miguel Ángel Abrego por el delito de drogas y DECLINANDO el conocimiento de la acción de habeas corpus a favor de GILBERTO ESPINOZA ante el Segundo Tribunal Superior, por ser la autoridad competente en lo que respecta al supuesto delito de posesión y comercio de armas prohibidas.

El Segundo Tribunal Superior, sin tener competencia para ello dictó

resolución de 10 de septiembre de 1996 (visible fojas 26 a 29) que decidió que era procedente "la declaratoria de ilegalidad de la detención preventiva que pesa sobre Gilberto Espinoza", bajo la perspectiva de considerar que "no existe vinculación subjetiva" de dicho sumariado con el delito de drogas investigado, ya que el precitado "no reside en el inmueble allanado, y porque en su poder no se encontró droga ni dinero marcado, sólo un arma de fuego sin la debida autorización".

Con la demanda de habeas corpus presentada, en esta oportunidad ante el Pleno de la Corte, se adjuntó copia de la resolución antes citada (de 10 de septiembre de 1996), la cual según el accionante fue anulada por el Segundo Tribunal Superior dictándose en su lugar la de 30 de septiembre de 1996, que declaró legal la detención de Espinoza, cuya copia también incorporó.

Según se observa de fojas 1 a 4 del este expediente de habeas corpus, el Segundo Tribunal Superior dictó dicha resolución, fechada 30 de septiembre de 1996, ésta vez declarando **LEGAL** la detención preventiva ordenada contra GILBERTO ESPINOZA en atención a la comisión del delito de posesión ilícita de arma de fuego, con fundamento en la Ley 53 del 12 de diciembre de 1995 que le señala pena de prisión de 2 a 3 años cuando el arma tenga el número de registro alterado o borrado.

Es decir, el conocimiento y pronunciamiento del Segundo Tribunal Superior como tribunal de habeas corpus en lo que concierne a la persona de GILBERTO ESPINOZA debido a la declinatoria de competencia que hiciera la Corte, fue únicamente en relación al delito de posesión ilícita de arma de fuego, que quedó radicado en la Fiscalía Novena del Primer Circuito Judicial de Panamá, dependencia que le informó que la detención por razón de ese delito la decretó la Fiscalía Auxiliar (resolución de 5 de julio de 1996), pero que sí mantuvo tal medida.

Luego de lo expuesto, la Corte ha podido apreciar que contra el favorecido con esta acción se investigan dos delitos, uno de drogas y otro de posesión de arma de fuego. El habeas corpus que examina el Pleno se fundamenta en el hecho de que, a pesar de que la detención preventiva, de Espinoza, por el delito de posesión de arma se declaró legal, su representante solicitó al Juzgado Sexto de Circuito Penal de Panamá una fianza de excarcelación, la cual le fue concedida, fue consignada el 22 de octubre de 1996, se expidió boleta de libertad, pero cuando fueron a buscar al Sr. Espinoza a la Cárcel "el director de la misma no autorizó la salida aduciendo de(sic) que el SR. ESPINOZA MACIAS, todavía está detenido por orden del Fiscal de Drogas".

En base a lo expuesto, resulta evidente que aún no existe pronunciamiento sobre la ilegalidad o legalidad de la detención preventiva que ordenó el Fiscal de Drogas contra Gilberto Espinoza por estar vinculado con el delito relacionado con Drogas, medida a la cual se refiere el informe enviado a esta Superioridad.

En tal sentido, si aún se encuentra vigente dicha detención contra Espinoza y por tal motivo está a órdenes del Fiscal de Drogas como agente instructor del respectivo delito, es procedente la no autorización de su salida por parte del Director de la Cárcel, ya que la fianza que le fuere otorgada obedece al delito de posesión ilícita de arma de fuego y no al delito contra la Salud Pública.

Así, al revisar las sumarias seguidas por el delito contra la Salud Pública, en las que figura como uno de los sindicados GILBERTO ESPINOZA MACIAS, se observa que éste fue detenido en el inmueble allanado, donde se encontró gran cantidad de droga, portando un revólver marca ROSSI, calibre 32 S&W, serie limada, con cuatro municiones vivas.

Se infiere de autos que previo al allanamiento, en la misma residencia ubicada en la calle principal de Pedregal, se realizó una compra simulada de sustancias ilícitas, en la que "se encontraban un aproximado de ocho (8) sujetos y que él le entregó el dinero a uno de los hermanos ABREGO, quien le solicitó a otro de los presentes que le buscara la mercancía, dirigiéndose este último a un anexo ...". (Fs. 17).

Como se ha reiterado, la orden de detención se decretó contra las personas que se encontraban en la residencia allanada, que son: JAIME ARTURO QUINTERO, quien declaró ser el propietario de la droga y negó cualquier responsabilidad que pudiera atribuírsele a su hermano MIGUEL ÁNGEL ABREGO QUINTERO, quien fue otro de los detenidos y cuya detención fue declarada ilegal por la Corte. El tercer imputado es GILBERTO ESPINOZA MACIAS, quien expresó en su declaración indagatoria (visible de fojas 38 a 46) que sólo conocía a los hermanos Abrego de vista y que no lo une ningún tipo de vínculo con ellos, que sólo fue a esa casa a buscar a la hermana de Jaime para ir a un baile, pero que estando ahí Jaime le dijo que le tuviera el arma 38 un rato porque iba a realizar un mandado. Por tanto, que nunca vio la droga, ni tenía conocimiento que en ese lugar se vendiera. Sin embargo, por su parte MIGUEL ÁNGEL ABREGO en su declaración indagatoria, entre otras cosas, señaló que "fui detenido en compañía de mi hermano JAIME ABREGO, un amigo de mi hermano de apellido ESPINOZA, ..." (Fs. 33).

En el expediente antecedente, sólo reposa a favor de GILBERTO ESPINOZA un certificado del Director de la PTJ en que señala que no registra antecedentes policivos y penales (fs. 105), situación que difiere a la demostrada en relación a MIGUEL ÁNGEL ABREGO, respecto a quien se aportaron una serie de pruebas documentales sobre su conducta, estudios y trabajo al cual se dedica.

Consecuentemente, el Pleno de la Corte considera que existen en el expediente suficientes indicios que vinculan a ESPINOZA MACIAS al delito contra la SALUD PUBLICA que investiga la Fiscalía Especializada en esos ilícitos. Por lo que debe mantenerse su detención preventiva, sin perjuicio de que posteriormente surjan otros elementos que puedan variar su situación procesal.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de GILBERTO ESPINOZA MACIAS y, ORDENA que sea puesto nuevamente a órdenes de la autoridad competente.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ALEXIS ANTONIO ASPRILLA WINFORD CONTRA EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Danilo Montenegro, Defensor de Oficio, presentó acción de habeas corpus en favor del señor **ALEXIS ANTONIO ASPRILLA WINFORD**, sindicado por el delito de homicidio en perjuicio de **CESAR DONADIO MORENO** -quien no ha sido detenido-, contra quien pende orden de detención preventiva emitida por la Fiscalía Auxiliar de la República en el mencionado proceso de homicidio.

Fundamentó el licenciado Montenegro su acción, principalmente, en los siguientes hechos:

Que **ASPRILLA WINFORD** fue sometido a indagatoria dentro de la investigación que se instruyó por la muerte violenta del taxista **CÉSAR DONADIO MORENO**, ocurrida el 12 de septiembre de 1995, en la barriada Roberto Durán, de San Miguelito. Su

detención preventiva fue ordenada el 19 de septiembre de 1995 por la Fiscalía Auxiliar de la República, y mediante resolución del 22 de abril de 1996, el Fiscal Cuarto Superior le otorgó libertad provisional por carecer de elementos probatorios que lo vincularan con la comisión del ilícito en investigación.

Que mediante Vista Fiscal N° 65 del 30 de abril de 1996, el Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial pidió al Segundo Tribunal Superior de Justicia que se dictara un auto de sobreseimiento provisional a favor de **ALEXIS ANTONIO ASPRILLA WINFORD** conforme al numeral 2 del artículo 2221 del Código Judicial.

Que mediante auto dictado por ese Tribunal, el 16 de julio de 1996, bajo la ponencia del Magistrado Ortega, se abrió causa criminal contra su defendido por los delitos genéricos de homicidio y robo, y ordenó la detención preventiva del sindicado. Se notificó al Licdo. Montenegro de esta decisión el 26 de agosto, y él presentó recurso de apelación.

Que como en virtud de dicha apelación, el Magistrado Sustanciador no suspendió la orden de detención contenida en el auto de proceder, fue lo que lo motivó a solicitar la suspensión de dicha orden.

Que el Segundo Tribunal Superior de Justicia negó lo pedido.

Luego de recibida la acción, se libró el mandamiento de habeas corpus de rigor, que fue contestado en tiempo oportuno por el Magistrado Ortega, en los siguientes términos:

> "A) Sí ordenamos la detención de **ALEXIS ANTONIO ASPRILLA WINFORD**; lo hicimos mediante el auto de llamamiento a juicio del 16 de julio de 1996 y solicitamos su detención mediante el oficio N° 158-O. V. del 5 de agosto de 1996.
>
> B) La detención se fundamenta en que por resolución del 16 de julio de 1996 (auto de llamamiento a juicio visible a fojas 268-274), **ASPRILLA WINFORD** fue llamado a responder criminalmente, como posible infractor de las normas contenidas en el Libro II, Título I, Capítulo I del Código Penal, o sea por el delito genérico de homicidio cometido en perjuicio de CESAR DONADIO MORENO. En el auto de proceder se ordenó la detención preventiva del sindicado.
>
> C) Hasta el día de hoy, **ALEXIS ANTONIO ASPRILLA WINFORD** no ha sido detenido.
>
> **HONORABLE MAGISTRADO SUSTANCIADOR:** Al momento de notificarse del auto de llamamiento a juicio dictado como se dijo el 16 de julio de 1996, el Licdo. Danilo Montenegro interpuso recurso de apelación que no ha sido concedido porque pende la notificación del procesado **ASPRILLA WINFORD**, petición que fue negada mediante resolución de 24 de octubre de 1996. Queremos destacar que, de acuerdo con el artículo 2221 del Código Judicial, la apelación se concede cuando las partes, dentro del término que se les confiere, formalizan la sustentación y es a partir de ese momento, cuando la resolución recurrida quedaría suspendida hasta tanto se decida la alzada, además la detención fue ordenada por la Fiscalía Superior desde el 19 de septiembre de 1995 y se cumplió, sólo que se suspendió en virtud de la libertad provisional otorgada, pero la resolución de la Fiscalía permaneció firme y ahora se reitera."

La orden de detención fue emitida en dicho auto, y fue debidamente motivada, cumpliendo plenamente con lo normado por el artículo 2159 del Código Judicial. La pena determinada para los delitos investigados superan el mínimo de los dos años de prisión, por lo cual también se cumple con el requisito impuesto por el artículo 2148 de la misma excerta.

Ahora bien, considera esta Corporación de Justicia que es necesario

observar ciertos detalles importantes para la determinación de la legalidad de la orden de detención emitida contra **ALEXIS ASPRILLA.**

Para ello, es conveniente hacer un recuento cronológico de las últimas actuaciones que atañen a la detención preventiva.

El Segundo Tribunal Superior de Justicia emitió auto encausatorio contra el sindicado, que incluyó la orden de detención preventiva en su contra, el 16 de julio de 1996.

El Fiscal Cuarto Superior se notificó de esa resolución el 30 de julio, y el defensor de **ASPRILLA**, Licdo. Danilo Montenegro, se notificó el 26 de agosto, anunciando apelación en el acto de notificación.

Pero a foja 279 del expediente principal, se observa el Oficio N° 158-O. V. del 5 de agosto de 1996, en el que el Magistrado Sustanciador le solicitó al Director de la Policía Técnica Judicial la detención y filiación del sumariado.

Es decir, que la solicitud de ejecución de la orden de detención preventiva fue emitida por el Segundo Tribunal Superior 21 días antes de que el defensor se notificara del auto en comento.

El día siguiente a la notificación del defensor y su anuncio de apelación -27 de agosto-, éste presentó al Magistrado Sustanciador un libelo en el que solicitó la suspensión de la orden de detención preventiva, ya que se percató del Oficio -ya mencionado- en el que el Tribunal de la causa solicitó la aprehensión y filiación de **ALEXIS ANTONIO ASPRILLA WINFORD.**

Se le corrió traslado de la misma al Fiscal Cuarto Superior, mediante providencia del 30 de agosto de 1996.

En contestación de traslado N° 82 del 19 de septiembre, el Fiscal Cuarto Superior se manifestó de acuerdo con la pretensión del abogado defensor, Licdo. Danilo Montenegro.

Entonces, en resolución del 24 de octubre, el Segundo Tribunal Superior de Justicia negó lo pedido, fundado en que, aunque el anuncio de la apelación suspende los efectos de la resolución recurrida, los delitos de homicidio y robo, dada la pena imponible, conllevan detención preventiva según el artículo 2148 del Código Judicial.

Considera esta Corporación de Justicia que la detención de **ASPRILLA WINFORD** es legal, por las siguientes consideraciones.

El aspecto importante del negocio estriba en la aplicación o no, del efecto suspensivo inherente a la apelación del auto de llamamiento a juicio, a la orden de detención preventiva que el mismo contiene.

Ello porque dicha orden cumple cabalmente con las exigencias del artículo 2148 del Código Judicial -que establece la aplicabilidad de la detención preventiva a sindicados por delitos cuya pena mínima de prisión es superior a dos años- ya que los delitos de homicidio y robo, establecidos en el sumario, superan esa pena.

También cumple la orden que nos ocupa los requerimientos del artículo 2159 de la misma excerta -que indican que la orden de detención debe contener la determinación del delito que se investiga y por el cual se detiene al sujeto, los hechos que indican la comisión del ilícito y los hechos que relacionan al detenido con el mismo-, ya que el auto de proceder emitido por el Segundo Tribunal Superior de Justicia contiene todos sus elementos.

El auto de llamamiento a juicio que pende contra **ALEXIS ASPRILLA** contiene la orden de detención preventiva, por consideraciones de economía procesal, pero las dos decisiones que se encuentran en la misma resolución tienen una naturaleza distinta.

El auto de proceder se dicta por considerar el Juzgador que existen méritos suficientes para considerar que el sindicado está relacionado con la comisión del ilícito y puede tener responsabilidad en la perpetuación del mismo.

Por su parte, la orden de detención preventiva es una medida cautelar que tiende a asegurar la presencia del justiciable en la etapa plenaria del proceso, por el peligro de que el sindicado evada su responsabilidad de responder a juicio.

Siendo que el inculpado ha sido llamado a responder en juicio-junto con otros- por la muerte del taxista **CÉSAR DONADIO MORENO**, su situación procesal se agrava y aumenta el peligro de que aquel sea ilocalizable por el peligro que le acarrea la posibilidad de ser encontrado responsable, ya sea como autor material o como colaborador en la comisión del mismo.

Además, si la orden de detención preventiva se hubiera ordenado en resolución distinta del auto de llamamiento a juicio, la apelación de ésta no hubiera afectado aquella, por lo que el PLENO considera que la detención de **ALEXIS ANTONIO ASPRILLA WINFORD** es legal.

En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención de ALEXIS ANTONIO ASPRILLA WINFORD; en consecuencia, lo pone a órdenes del Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ANTONIO LEAL, PABLO BRAVO E ISRAEL ZÚÑIGA CONTRA EL FISCAL AUXILIAR DE LA REPÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Darío Morrice Carrillo interpuso acción de habeas corpus a favor de los señores **ANTONIO LEAL**, **PABLO BRAVO e ISRAEL ZÚÑIGA**, contra el Fiscal Auxiliar de la República.

Acogido el recurso, se libró mandamiento contra la autoridad acusada, quien respondió mediante Oficio N° 17162 de 19 de noviembre de 1996, que los beneficiarios del presente habeas corpus fueron puestos a disposición del Fiscal de Circuito de la Provincia de Darién, el pasado 14 de noviembre de 1996.

Del informe del Fiscal Auxiliar se concluye que en vista de que los señores **ANTONIO LEAL**, **PABLO BRAVO e ISRAEL ZÚÑIGA** se encuentran a órdenes de una Fiscalía de Circuito, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia carece de competencia para conocer de la presente acción constitucional, conforme a lo establecido en el artículo 2602 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA y por autoridad de la LEY, DECLINA el conocimiento del presente habeas corpus, en el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, para los fines legales correspondientes.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE ORLANDO GONZÁLEZ CASTILLO EN CONTRA DEL DIRECTOR DE LA POLICÍA TÉCNICA JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La señora **María Visitación Castillo**, ha presentado ante esta Superioridad, acción de Habeas Corpus en favor de **ORLANDO GONZÁLEZ CASTILLO**, contra el Director de la Policía Técnica Judicial, por considerar que la detención de ilegalidad que sufre el prenombrado es ilegal.

Una vez acogido el recurso en mención, mediante providencia fechada 20 de noviembre de 1996 se libró el mandamiento de Habeas Corpus respectivo, el que fue contestado por el señor Director General de la Policía Técnica Judicial mediante Oficio N° A. L. 1528-96 del 20 de los corrientes en los siguientes términos:

> "Respetuosamente me dirijo a Usted par dar contestación a Mandamiento de **HABEAS CORPUS** presentado a favor del señor **ORLANDO GONZÁLEZ CASTILLO** en contra del suscrito Director General de la Policía Técnica Judicial.
>
> De acuerdo a lo establecido mediante el Artículo 2582 del Código Judicial, me permito rendir el presente informe:
>
> 1. No es cierto que hemos ordenado la detención del señor **ORLANDO GONZÁLEZ CASTILLO**.
>
> 2. No tiene razón de ser en base al punto anterior.
>
> 3. Tenemos bajo custodia al prenombrado **GONZÁLEZ CASTILLO**, no obstante el mismo fue puesto a órdenes de la Fiscalía Primera del Tercer Circuito Judicial, de Chorrera, mediante Oficio S. H. A. A. 1521-96 de 14 de noviembre de 1996 y de la Fiscalía Tercera del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante Oficio S. H. A. A. 1534-96 de 14 de noviembre de 1996.
>
> De esta forma damos contestación a la providencia calendada 20 de noviembre del presente año emitida por esa Máxima Autoridad de Justicia."

En vista de que el expediente que se instruye al señor **ORLANDO GONZÁLEZ CASTILLO** fue remitido por la Fiscalía Primera del Tercer Circuito Judicial, de Chorrera, mediante Oficio S. H. A. A. 1521-96 de 14 de noviembre de 1996 y de la Fiscalía Tercera del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante Oficio S. H. A. A. 1534-96 de 14 de noviembre de 1996, donde quedó radicada la instrucción sumarial y a cuyas órdenes se encuentra el prenombrado, procede enviar el presente recurso de Habeas Corpus presentado al Tribunal competente para conocer la acción de conformidad con el artículo 2602 del Código Judicial.

En consecuencia, la Corte Suprema, Pleno, administrandojusticia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLINA en el Segundo Tribunal

Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, la acción de Habeas Corpus presentada a favor de ORLANDO GONZÁLEZ CASTILLO.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE AMADO ISNEL SANCLEMENTE COSSIO CONTRA EL FISCAL TERCERO SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ha ingresado a conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de habeas corpus presentada por el licenciado Jorge Zúñiga a favor de AMADO ISNEL SANCLEMENTE y contra la Fiscalía Tercera Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Por acogida la presente iniciativa constitucional, se libró mandamiento de habeas corpus, de conformidad con la ley. El funcionario demandado, mediante oficio N° 3022 de 7 de noviembre del año que decurre, informa que la orden de detención preventiva que pesa sobre Sanclemente fue dictada por la Fiscalía Auxiliar de la República mediante resolución de 24 de mayo de 1996, decisión que mantuvo el funcionario acusado por medio de resolución de 6 de junio de 1996.

El informe de conducta recuerda el hecho que aparece acreditado a fojas 131-133 del expediente, en el sentido de que esta misma materia fue resuelta anteriormente, con el resultado de que se declaró legal la orden de privación de libertad que pesa sobre Sanclemente.

En virtud del principio de relatividad de la cosa juzgada en materia de habeas corpus, la Corte reconoce la viabilidad de revisar la situación procesal de los detenidos, siempre y cuando se acredite la existencia de nuevos elementos de convicción con eficacia para variar su status procesal.

En esta oportunidad reitera este tribunal de garantías constitucionales que la resolución que ordena la detención del imputado cumple fielmente con los requisitos que establecen los artículos 2148 y 2159 del Código Judicial. En efecto, como hecho imputado se expresa en la diligencia el delito de homicidio cometido en perjuicio de Alejandrina Alvarez Córdoba, quien fue vista con vida por última vez el 13 de mayo de 1996. Se menciona como elemento probatorio allegado al expediente para la comprobación del hecho punible la diligencia de levantamiento y reconocimiento del cadáver efectuada por la Fiscalía Auxiliar de la República el 15 de mayo de 1996 (fs. 2-4, antecedentes).

En lo concerniente a los elementos probatorios que figuran en el proceso contra la persona cuya detención se ordena, consta en las sumarias la declaración jurada rendida por Iris Argelis Lasso Ramos (fs. 88-91 de los antecedentes), quien manifiesta que vio a Sanclemente "a menos de tres pies de distancia" (f. 90) de la occisa, alrededor de la una de la mañana del lunes 13 de mayo del año que decurre. De igual modo figuran las declaraciones juradas de Ana Robledo García y Armando Robledo García, visibles a folios 43-44 y 40-42 de las sumarias, quienes expresan que vieron por última vez a Alejandrina Alvarez Córdoba el día domingo doce de mayo de 1996, junto a una persona cuya descripción física corresponde a la de Sanclemente.

El examen que ahora se hace nuevamente del cuaderno contentivo de la acción constitucional de habeas corpus, así como de las constancias sumariales, da cuenta de que no se han incorporado a la actuación nuevas pruebas que modifiquen el status del detenido, lo que conduce a que esta nueva iniciativa procesal carezca de mérito suficiente para justificar una variación en la calificación de la acción de habeas corpus.

Por las consideraciones anteriores, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva de Amado Isnel Sanclemente y, en consecuencia, ORDENA que el detenido sea puesto nuevamente a órdenes de la Fiscalía Tercera Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE HABEAS CORPUS A FAVOR DE EDGAR RIVERA LOBÓN CONTRA EL DIRECTOR NACIONAL DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El ciudadano colombiano Edgar Rivera Lobón ha presentado, en su propio nombre, acción de habeas corpus con la finalidad de que este tribunal colegiado conozca de su detención, ordenada mediante Resolución DNMSI-0129 de 11 de octubre de 1996, expedida por el Director Nacional de Migración y Naturalización. La misma autoridad dictó luego la Resolución OHMYN 7577 de 17 de octubre de 1996, que ordena **"DEPORTAR** del territorio nacional a los ciudadanos EDGAR RIVERA LOBÓN y GABINTONG MARTÍNEZ TORRES, de nacionalidad colombiana, por razones de seguridad y Orden Público".

Acogida la presente iniciativa constitucional, se libró el mandamiento de habeas corpus respectivo. El funcionario acusado rindió el informe de rigor, mediante nota N° DNMYN-358-96 de 7 de noviembre del año en curso, indicando que las personas mencionadas fueron aprehendidas por unidades del D. I. I. P. el 10 de octubre de 1996, cuando realizaban un allanamiento en busca de drogas en la barriada Torrijos-Carter. La Dirección de Información e Investigación Policial remitió a los nacionales colombianos al Departamento de Migración, con oficio #107-DIV-96.

El 11 de octubre del año que decurre se dictó orden de detención contra las personas mencionadas, ya que no portaban documentos que acrediten su residencia legal en el país (f. 9). A continuación, la Dirección Nacional de Migración y Naturalización dictó resolución de 17 de octubre de 1996, en la que ordena la deportación de los detenidos, por considerar que se trata de personas que "no constituyen unos ciudadanos Bona Fide y que atentan contra la seguridad y orden público en el territorio nacional, convirtiéndose en peligro inminente para la sociedad panameña" (f. 10).

DECISIÓN DE LA CORTE

Para decidir sobre la legalidad de la detención y de la orden de deportación expedida contra Edgar Rivera Lobón, debe la Corte referirse al Acuerdo suscrito entre las Repúblicas de Panamá y Colombia sobre Inmigrantes Irregulares, incorporado a nuestro Derecho Interno mediante la ley 17 de 10 de

agosto de 1994. En los "HECHOS" del libelo de habeas corpus, el peticionario de esta acción constitucional subjetiva manifiesta haber formulado solicitud para acogerse a los beneficios de ese convenio internacional y que, al ser requerido para que se identificara, "inmediatamente le mostré mi carnet del Convenio Panamá-Colombia, que me fue entregado en el Consulado de Colombia en Panamá, al hacer mis papeles para tramitar mi nacionalidad, ya que tengo aproximadamente 22 años de residir en este país, junto con mi esposa e hijos" (f. 1).

De conformidad con el artículo 12 de la citada ley, "Este acuerdo entrará a regir a partir de la fecha en que los gobiernos se comuniquen por la vía diplomática, el cumplimiento de los requisitos pertinentes y tendrá una duración de un (1) año prorrogable por mutuo acuerdo de las partes" (f. 12). Por tal razón, por Secretaría General de esta Corporación se cursó la Nota 1811-96 de 18 de noviembre de 1996 al Ministro de Relaciones Exteriores, para que informe sobre la vigencia del referido instrumento normativo. A folio 15 del cuaderno aparece certificación expedida por la Directora General de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores, en la que hace saber que el Acuerdo suscrito entre ambas naciones expiró el 31 de octubre de 1996.

Un examen del cuaderno de habeas corpus permite comprobar que el nacional colombiano Edgar Rivera Lobón formalizó oportunamente, el 12 de julio de 1996, solicitud para acogerse al convenio suscrito por ambos países, con el propósito de legalizar su permanencia en nuestro territorio, "con derecho a cédula de identidad personal" panameña (f. 12). El informe remitido por el Ministerio de Relaciones Exteriores confirma que el peticionario hizo solicitud para regularizar su status migratorio durante la vigencia del mencionado acuerdo internacional.

Es necesario destacar que todas las personas que se acogieron oportunamente a ese Acuerdo tienen derecho a que se resuelva su petición, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución vigente. El efecto que produce el cese de la vigencia del Acuerdo es que no puedan presentarse nuevas solicitudes, pero el acto normativo mantiene **eficacia residual** en cuanto a las aplicaciones o solicitudes que ya se encontraban en trámite.

De allí que en el caso de Edgar Rivera Lobón, cualquier medida restrictiva de la libertad corporal con fines de expulsión o deportación resulta contraria a lo normado en el artículo 11 de la Ley 17 de 10 de agosto de 1994, que suspende "las medidas de conminación de abandono del país y/o de expulsión y deportación de los nacionales de uno o el otro país que puedan hacer uso del presente régimen, mientras se encuentre vigente este Acuerdo" (f. 18).

Es importante llamar la atención sobre el manejo de información equívoca y la formulación de juicios de valor no debidamente sustentados por las autoridades migratorias en este caso. Es equívoca la información, suministrada sin aclaración alguna, de que Rivera fue detenido por unidades del D. I. I. P. en ocasión de "una diligencia de allanamiento en busca de drogas" (f. 10), como ligera es la afirmación que se hace, sin sustento alguno a pesar de la gravedad de la imputación, de que el detenido "no constituye ciudadano bona fide y atenta contra la seguridad y orden público del territorio nacional, convirtiéndose en peligro inminente para la sociedad panameña" (f. 10). Lo cierto del caso es que el D. I. I. P. puso a Rivera a órdenes de Migración y no de la Fiscalía de Drogas, que la autoridad demandada ni siquiera se refiere a historial del detenido que respalde tal afirmación, a pesar del tiempo prolongado de su residencia en nuestro país.

Por las razones que anteceden, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ILEGAL la deportación decretada por la Dirección Nacional de Migración y Naturalización contra Edgar Rivera Lobón, así como cualquier medida restrictiva de su libertad corporal, ordenada para el eventual cumplimiento de la deportación ilegal y, en consecuencia, ORDENA que el detenido sea puesto inmediatamente en libertad, si no tiene otra orden de detención pendiente de cumplimiento.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR ENRIQUETA CABRERA CONTRA RESOLUCIÓN DE 22 DE DICIEMBRE DE 1995, EMITIDA POR EL JUZGADO TERCERO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ, RAMO CIVIL. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Enriqueta Cabrera, actuando por intermedio de su apoderado judicial, el licenciado Carlos Eugenio Carrillo Gomila, ha presentado ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de inconstitucionalidad contra sentencia de 22 de diciembre de 1995, proferida por el Juzgado Tercero Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Civil.

De acuerdo con lo que sostiene la demandante, el acto atacado vulnera los artículos 52, 58, 212, 19 y 32 de la Carta Política vigente.

El negocio se encuentra para decidir sobre la admisibilidad de la demanda, a la luz de lo que establecen los artículos 2551 y 654 del Código Judicial, consagratorios de los presupuestos procesales que debe reunir el libelo de inconstitucionalidad para que la acción pueda ser acogida, así como con los establecidos por la jurisprudencia de esta Corporación de Justicia.

Se observa que la demanda atiende el cumplimiento de los requisitos especiales que señala el artículo 2551 del Código Judicial, pero pretermite el cumplimiento de los requisitos comunes de toda demanda consagrados en el artículo 654 de dicho cuerpo legal, concretamente los numerales 6 y 7, que requieren señalar los hechos de la demanda, debidamente numerados, los que deben contener una descripción de la secuencia del proceso que origina esta causa constitucional, y el **fundamento jurídico** de la acción, respectivamente.

Es evidente que una presentación ordenada de los hechos le facilita al juzgador la comprensión de la causa, especialmente cuando se precisan vicios constitucionales de tipo formal de normas generales, o cuando se señala la violación del debido proceso de ley en actos de carácter individualizado.

Considera la Corte conveniente reiterar que cuando se acude a la jurisdicción constitucional, ya sea por la vía principal de la acción de inconstitucionalidad o por la vía incidental, el peticionario debe cumplir con las exigencias tanto del artículo 2551 del Código Judicial como del artículo 654 de dicha excerta procesal.

Por las anteriores consideraciones, el PLENO de la CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por Enriqueta Cabrera, mediante apoderado judicial, contra sentencia de 22 de diciembre de 1995 proferida por el Juzgado Tercero Municipal del Distrito de Panamá, Ramo Civil.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN CONTRA DE LA ÚLTIMA ORACIÓN DEL INCISO PRIMERO DEL ARTÍCULO 162 DE LA LEY 51 DE 11 DE DICIEMBRE DE 1995 "POR LA CUAL SE DICTA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 1996". MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA, en ejercicio de la potestad que le confiere el ordinal 7° del artículo 276 de la Constitución Política, mediante procurador judicial, ha promovido demanda de inconstitucionalidad contra el artículo 162 de la Ley N° 51, de 11 de diciembre de 1995, en virtud de la cual se dictó el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 1996. La acción constitucional fue admitida mediante resolución de 28 de junio de 1996, y se ordenó corrérsele traslado al Procurador General de la Nación, lo que hizo en la Vista N° 23 de 29 de julio de 1996, en la cual concluyó que el artículo impugnado no era inconstitucional.

Continuando con el rito procesal en este tipo de procesos constitucionales, se fijó el negocio constitucional en lista durante el término correspondiente, el que sólo fue aprovechado por el demandante, con lo cual ha quedado el proceso en estado de decidir, a lo que se aboca este Pleno, previas las siguientes consideraciones:

La demandante, como ha quedado expuesto, ha promovido demanda de inconstitucionalidad, mediante la cual pretende que este Pleno declare que es inconstitucional el artículo 162, de la Ley 51 de 11 de diciembre de 1995, como ya ha quedado expresado.

La norma cuya inconstitucionalidad se demanda es del siguiente tenor:

"ARTÍCULO 162. ACCIONES DE PERSONAL. Las acciones de personal relativas a nombramientos, destituciones, ajustes salariales y ascensos emitidas por las instituciones del Gobierno Central se presentarán al Ministerio de Planificación y Política Económica para su revisión y envío para consideración y aprobación del Presidente de la República. Las acciones de personal de las instituciones del Sector Descentralizado se enviarán al Ministerio de Planificación y Política Económica, para su revisión y autorización".

El demandante fundamenta su acción constitucional en los siguientes hechos:

"1. El 11 de diciembre de 1995, mediante Ley 51, el Órgano Legislativo dictó el Presupuesto General del Estado.

2. En el Artículo 162 de la referida Ley, la Asamblea Legislativa estableció un Aparte atinente a las acciones de personal.

3. La última oración del primer inciso del Artículo 162 de la Ley 51 de 1995, supedita las acciones de personal de las entidades descentralizadas a la revisión y autorización previa del Ministerio de Planificación y Política Económica, norma que se ha pretendido aplicar a la Contraloría General de la República no obstante que es un organismo estatal independiente de acuerdo a nuestra Carta Política.

> 4. La Contraloría General de la República, por razón de la delicada misión asignada por el constituyente para fiscalizar y controlar los actos de manejo de los patrimonios públicos, precisa de que se respete la independencia que la Constitución Política le atribuye, puesto que es la única forma de que cumpla a cabalidad tal misión. Una solución contraria podría mediatizar u obstaculizar el ejercicio de sus funciones, con sacrificio de los intereses públicos". (Fs. 5 y 6).

El precepto legal, cuya declaratoria de inconstitucionalidad se pretende es, a su juicio, violatorio del artículo 275 de la Constitución Política, en virtud del cual se crea, como organismo público de control fiscal, la Contraloría General de la República, otorgándole, para el ejercicio de sus funciones, independencia. El artículo 162 de la Ley 51 de 1995, que tiene su vigencia por el período fiscal correspondiente a 1996 y, por lo tanto, se encuentra vigente durante el mismo, viola, en apreciación del recurrente, la expresada disposición constitucional, y el concepto en que tal violación se produce la plantea en los términos que a continuación se reproducen:

> "La última frase del Primer Párrafo del Artículo 162 de la Ley 51 de 1995, viola directamente el Artículo 275 de la Carta Magna, ya que somete las acciones de personal de la Contraloría General de la República, como ente descentralizado e independiente, a la revisión y autorización del Ministerio de Planificación y Política Económica.
>
> La norma de la Ley de Presupuesto que se impugna obliga a la Contraloría General de la República, de acuerdo a la interpretación que se le ha dado, a obtener la autorización del Ministerio de Planificación y Política Económica para poder nombrar, destituir, hacer ajustes salariales y decretar ascenso de su personal, a pesar de que se trata de una entidad estatal independiente del resto de los organismos del Estado.
>
> Esta limitación a la independencia de la Contraloría General tiene graves repercusiones para la misión y funciones que debe cumplir, pues se trata de un ente que fiscaliza y controla los actos de manejo de fondos y efectos públicos del Órgano Ejecutivo y demás entes públicos, por lo que debe dotársele de la libertad de acción necesaria para cumplir en forma apropiada con aquéllas". (F. 7).

La infracción constitucional se produce, por lo tanto, en virtud de que el artículo 162 de la Ley citada, lesiona la autonomía que le dispensa el artículo 275 de la Constitución, siendo que la disposición legal en referencia constituye un texto instrumental, adjetivo o transitorio.

Es evidente, por lo tanto, que el actor considera que la disposición legal viola el artículo 275, al asimilar la Contraloría General de la República a entidades descentralizadas. No obstante, es evidente que a esa conclusión no se puede arribar de una lectura detenida de la disposición legal impugnada.

El artículo legal cuestionado se encuentra dentro de la Ley que expidió el Presupuesto General del Estado para la vigencia d e 1996. Como es sabido, el Presupuesto constituye la ordenación jurídica de la actividad financiera en un período fiscal determinado, resultante del principio de reserva legal que le corresponde, como función pública, a la actividad financiera del Estado, entendida ésta como el establecimiento de los tributos y la ordenación de los gastos que puede realizar el Estado en el ejercicio fiscal al cual se refiere el Presupuesto de 1995, que recoge, de acuerdo con su régimen orgánico contenido en el Código Fiscal, la autorización para recaudar los ingresos derivados de tributos, así como la realización de gastos, así como las normas que, para el adecuado desarrollo de la función financiera antes destacada, resulta conveniente arbitrar. Dentro del expresado contenido de las leyes de presupuesto, el artículo cuya constitucionalidad se cuestiona se ubica entre aquellas normas que dicen relación con la ejecución del Presupuesto, y, concretamente, con la realización de los gastos indispensable para el desarrollo de los programas previstos en el mismo, en su triple manifestación cuantitativa, cualitativa y temporal, expresada

en los artículos 1108, 1121 y 1144 del Código Fiscal. Es, por lo tanto, la regulación legal relacionada con los gastos que deban realizar las entidades que se mencionan en ese artículo, es decir, las dependencias del Gobierno Central y de las Entidades Descentralizadas, sin que sea pertinente pronunciarse sobre el aspecto legal de si la citada norma le es aplicable a todas las entidades públicas, o solamente las que se encuentran en una situación jurídico-pública de descentralización, cuya determinación no le corresponde a las pretensiones que se deben satisfacer en un proceso constitucional de esta naturaleza.

La naturaleza de la ley de Presupuestos se ha debatido largamente desde que se cuestionó su naturaleza jurídica, recogiendo el resultado de esa discusión, al momento en que se expidió el Código Fiscal, en su artículo 1134. No obstante, al Pleno le resulta necesario destacar que esta distinción, para la ley de presupuesto, de leyes de naturaleza adjetiva, en el sentido de legislación vinculada por la legislación "sustantiva", no se corresponde con la naturaleza de la Ley de Presupuesto. Esta es la ley que regula y ordena la actividad financiera del Estado en un momento temporal determinado, y, por lo tanto, sus disposiciones, siempre que se encuentren relacionadas con la antedicha actividad financiera, resulta revestir la condición de una disposición legal plena, a la cual deben sujetarse las entidades públicas cuando realicen las actividades financieras, particularmente en materia de gastos, en el ejercicio fiscal al cual se contrae la vigencia de la ley presupuestaria.

El Magistrado Ponente, ha analizado el tema de la naturaleza jurídica de la Ley presupuestaria, en monografía titulada "El Marco Jurídico de la Actividad Financiera", en la que expresó la tesis de la naturaleza de ley plena de las leyes que expiden los Presupuestos Generales del Estado, que este Pleno hace cuya, en los siguientes términos:

> "...
> La auténtica esencia de la Ley de Presupuesto estriba en ser una ley sustancial, la Ley que adopta y organiza la regulación financiera del Estado durante el período al cual se aplica y que, por lo tanto, es la norma de conducta obligatoria que deben acatar las diferentes entidades públicas para llevar a cabo el Plan financiero contenido en la misma. Es, por lo tanto, incompatible la tesis de la Ley de Presupuesto como legislación vinculada (adjetiva) con la Ley de organización financiera que cumple la Ley de Presupuesto. ...".

(ANUARIO DE DERECHO N° 20, 1992, p. 193).

Dentro de este contexto es oportuno destacar que este Pleno, en sentencia de 5 de octubre de 1992, se pronunció sobre la naturaleza de ley plena de la ley de Presupuesto, en los siguientes términos:

> "...
> La Ley del Presupuesto, como ley formal que es, le permite a la Asamblea Nacional incorporar en ella cualquier regla que los legisladores consideren necesaria para el debido cumplimiento del Presupuesto, sólo limitada por las propias prohibiciones constitucionales, que no son el caso en este problema planteado. Es así como vemos que el artículo 84 se encuentra en el Título VI que contiene las Normas Generales de Administración Presupuestaria y en particular en el Capítulo I sobre Conceptos Generales. Todo el Título mencionado de la ley establece normas destinadas a regular los tres aspectos fundamentales del presupuesto, como son el presupuesto de rentas, el de gastos y el de inversiones. Por ello el establecer que el Presupuesto es un mandato de ejecución, lo que está diciendo es que el presupuesto debe cumplirse y que no puede quedar al arbitrio de la Administración el cumplirlo o no, claro está, previo el cumplimiento de los requisitos que se exigen para el desembolso de la partida, pero sujeto sólo a ese Presupuesto, si se cumple con esos requisitos establecidos. Por lo dicho no prospera el cargo". (R. J., octubre de 1992, p. 19).

Es evidente, por lo tanto, que una norma legal, relacionada con los gastos que han de realizar las entidades públicas, en modo alguno contradice la

Constitución Política, como en forma errónea plantea la demandante. No obstante, resulta importante para este Pleno matizar el contenido de la Ley de Presupuesto, en el sentido de que sus normas se deben circunscribir a materia que esté relacionada con la realización de gastos públicos, siendo lícito que, en tal circunstancia, establezca preceptos legales que, a juicio del Órgano Legislativo, sean indispensables para la realización de la función financiera, en este caso, relacionada con los gastos. Con respecto a los ingresos, por otra parte, su incorporación a la Ley de Presupuesto opera como una mera autorización para la realización de la función pública de recaudación, siendo irrelevante que su recaudación exceda las estimaciones presupuestarias en materia de ingresos, derivada de la condición, hasta cierto nivel, aleatorio en la recaudación de tributos establecidos por la ley, en acatamiento a los artículos 48, 153, numeral 10 y 274 de la Constitución Política. De allí que no sea constitucionalmente lícito, en la ley de Presupuestos, ni crear tributos o modificar los existentes, ni introducir modificaciones al ordenamiento jurídico, en la medida que no sea esencial para el ejercicio de la función financiera de realización de gastos.

Este tema ha sido objeto de decisión en otras latitudes, como por ejemplo, por el Tribunal Constitucional de España, que ha hecho la matización que indica esta decisión jurisdiccional, señalando, en la sentencia de 21 de mayo de 1986, que:

> "..., la obligación de incluir en los Presupuestos Generales del Estado la totalidad de los gastos e ingresos del sector público estatal no impide que, junto a la configuración de las correspondientes partidas, la Ley que aprueba dichos Presupuestos establezca otras disposiciones de carácter general en materias propias de la Ley ordinaria (con excepción de lo dispuesto en el apartado 7° del mismo artículo 134 (CE) que guardan directa relación con las previsiones de ingresos y las habilitaciones de gastos de los Presupuestos o con los criterios de política económica general en que se sustentan".
>
> (Alberto Palomar Olmeda y Herminio Losada González, "**El Procedimiento Administrativo y la Gestión Presupuestaria y su Control**", Dykinson, S. L., 1995, Madrid-España, p. 67).

La función de administración presupuestaria le corresponde al Órgano Ejecutivo, que la realiza por conducto del Ministerio de Planificación y Política Económica, tanto de conformidad con la Ley Orgánica del citado Ministerio, la Ley 16 de 1975, como por el artículo 188 de la Ley 51 de 1995. Para el Pleno resulta evidente que la intervención y control que incidan en los gatos públicos, que realiza el Ministerio de Planificación y Política Económica sobre los efectos de las acciones de personal, constituye una función constitucionalmente lícita, sin que, por otra parte, tal medida de control sobre la ejecución presupuestaria pueda desbordar el control presupuestario sobre los gastos públicos ni menoscabar el régimen jurídico interno aplicable a las entidades públicas, entre ellos la potestad de realizar aquellas funciones administrativas relacionadas con la administración de personal.

No obstante lo expresado, es evidente que el tema relacionado con las destituciones no tiene ningún efecto presupuestario en la realización de los gastos, por lo que la inclusión, como medida de control presupuestario, de las citadas destituciones, no tiene eficacia alguna con respecto a los gastos, por lo que la inclusión de las destituciones en el artículo 162 de la Ley 51, de 11 de diciembre de 1995 no se justifica constitucionalmente.

De lo anteriormente expuesto, resulta evidente que el artículo 162 de la Ley 51 de 11 de diciembre de 1995 no ha violado el artículo 275 de la Constitución Política, con excepción de la expresión "destituciones", ni ningún otro precepto constitucional, y así debe declararse.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE ES INCONSTITUCIONAL el vocablo "destituciones" contenido en el artículo 162 de la Ley 51 de 11 de

diciembre de 1995, y DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL el resto del artículo 162 de la Ley 151 de 11 de diciembre de 1995, por no violar el artículo 275 ni ningún otro de la Constitución Política.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(CON SALVAMENTO DE VOTO) (fdo.) ARTURO HOYOS
EDGARDO MOLINO MOLA (CON SALVAMENTO DE VOTO)
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS
ARTURO HOYOS Y RAFAEL A. GONZÁLEZ

Discrepamos de la mayoría.

En el Proyecto se expresa "Es evidente, por tanto, que una norma legal, relacionada con los gastos que han de realizar las entidades públicas, en modo alguno contradice la Constitución Política, como en forma errónea plantea la demandante" (f. 7).

Como cuestión de principio esta afirmación no se sustenta. Cualquier norma legal (también las relacionadas con gastos) puede eventualmente violar la Constitución.

En el caso del artículo 162 de la Ley N° 51 de 1995, en la parte que expresa:

> "Las acciones de personal de las instituciones del Sector Descentralizado se enviarán al Ministerio de Planificación y Política Económica para su revisión y autorización".

Es evidente que es inconstitucional; en tanto que se pretenda aplicarlo a la Contraloría General de la República, de la cual expresa el artículo 275 de la Constitución que es "un organismo estatal independiente", por razón de las delicadas funciones que ejerce.

¿Cómo podría ser independiente si debe someter al Ministro de Planificación y Política Económica, para su revisión y autorización, las acciones de personal?

Por acciones de personal ha de entenderse las "relativas a nombramientos, destituciones, ajustes salariales, y ascensos", como lo expresa la misma disposición legal señalada de inconstitucional.

No sólo viola esa disposición constitucional. También viola el artículo 99, que expresa que:

> "La Universidad Oficial de la República es autónoma. Se le reconoce personería jurídica, patrimonio propio y derecho de administrarlo. Tiene facultad para organizar sus estudios y designar y separar su personal en la forma que determine la Ley ...".

Estas consideraciones nos llevan a la conclusión de que efectivamente se trata de una disposición inconstitucional, lo que observamos respetuosamente.

Por estas razones salvamos el voto.

Fecha ut Supra.

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDO POR CARRILLO, CARRILLO Y PÉREZ CONTRA RESOLUCIÓN N° 05 DE 25 DE OCTUBRE DE 1994, DICTADA POR LA ALCALDÍA DEL DISTRITO DE COLON Y LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN, ARQUITECTURA E INGENIERÍA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE COLON. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado Carlos Eugenio Carrillo Gomila, actuando en nombre y representación del señor **TALAL DARWICHE**, presentó demanda de inconstitucionalidad contra la Resolución N° 05 de 25 de octubre de 1994, proferida por la Alcaldía del Distrito de Colón y la Dirección de Planificación, Arquitectura e Ingeniería Municipal del Distrito de Colón.

El negocio constitucional se encuentra en etapa de admisibilidad, por lo que el Pleno debe determinar si la demanda cumple con los requisitos comunes que establece el artículo 654 del Código Judicial, al igual que con los especiales que exige el artículo 2551 de ese mismo cuerpo de leyes.

El análisis del libelo de demanda revela que el recurrente omitió los hechos en que fundamenta su petición, de manera que la Corte no puede conocer cuáles son los vicios de inconstitucionalidad que le imputa al acto demandado. De acuerdo con el artículo 2552 del Código Judicial, la inobservancia de los requisitos señalados anteriormente, acarrea la inadmisibilidad de la acción de inconstitucionalidad.

Por otra parte es preciso señalar que la resolución que se pretende impugnar mediante esta acción constitucional, fue dictada por la Alcaldía del Distrito de Colón, por lo que constituye un acto administrativo susceptible de apelación ante el Gobernador de la Provincia de Colón y, posteriormente ante la jurisdicción contencioso administrativa. Sin embargo, el recurrente no acreditó que hubiera agotado la vía ordinaria para su impugnación. Al respecto, esta corporación judicial ha señalado que la acción de inconstitucionalidad "sólo puede interponerse contra actos definitivos, ejecutoriados y que no pueden impugnarse por otros medios", debido al carácter extraordinario y autónomo de las demandas de inconstitucionalidad. (Sentencia de 16 de diciembre de 1994. Registro Judicial de diciembre de 1994, págs. 120-122)

En mérito de lo expuesto, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA y por autoridad de la LEY, NO ADMITE la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Licenciado Carlos Eugenio Carrillo Gomila, en representación del señor TALAL DARWICHE.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR AQUILIA QUINTERO DE HIDALGO CONTRA LA SENTENCIA N°6 DE 28 DE MAYO DE 1996, DICTADA POR EL JUZGADO MUNICIPAL DE SANTIAGO, RAMO PENAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **Néstor Egberto Ureña Batista**, defensor de Oficio del Circuito Judicial de Veraguas, ha presentado acción de inconstitucionalidad mediante poder concedido por la señora **AQUILIA QUINTERO DE HIDALGO** contra la sentencia N° 6 del 28 de mayo de 1996 del Juzgado Primero Municipal del Distrito de Santiago, Ramo Penal.

Un examen de la presente acción a los efectos de considerar su admisión, lleva a estimar que debe ser inadmitida por las siguientes razones: el demandante pretende, según sus propias palabras, que "en este caso no se tomaron en cuenta todos los criterios de validez o legitimidad de la prueba, establecida en el Código de procedimientos", y señala los artículos 770, 772 y 820 del Código Judicial.

Como se observa, la disconformidad del demandante se centra en la aplicación de los principios de **apreciación y valoración de los medios probatorios** por parte del juzgador al decidir el proceso penal, aspectos que no son susceptibles de ser analizados dentro de una acción de inconstitucionalidad, que no puede ser considerada como una tercera instancia de proceso alguno.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la acción de inconstitucionalidad promovida por el licenciado Néstor Egberto Ureña Batista- contra la sentencia N° 6 de 28 de mayo de 1996 del Juzgado Primero Municipal del Distrito de Santiago, Ramo Penal.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR EL LICENCIADO NESTOR UREÑA BATISTA, DEFENSOR DE OFICIO CONTRA LA SENTENCIA N° 27 DE 14 DE MARZO DE 1996, DICTADA POR EL JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE VERAGUAS, QUE CONDENA AL SEÑOR EDY MORENO BONILLA. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado **NESTOR EGBERTO UREÑA BATISTA** en su condición de Defensor de Oficio de **EDY MORENO BONILLA** ha interpuesto demanda de Inconstitucionalidad contra la Sentencia N° 27 de 14 de marzo de 1996, dictada por el Juzgado Primero del Circuito de Veraguas, Ramo Penal.

El Pleno de la Corte procede a decidir la admisibilidad de la demanda, en atención a los requisitos formales que establecen los artículos 2551 y 654 del Código Judicial y a las exigencias instituidas por nuestra jurisprudencia.

Se observa que en el libelo se omite uno de los requisitos comunes a toda demanda, que es la exposición de los hechos que sirven de fundamento a la pretensión.

También se advierte que lo que se acusa como inconstitucional es una sentencia que decide un proceso penal, respecto a la cual no se ha acreditado, en la demanda ni en el expediente, que se haya agotado la vía procesal común.

Sobre este punto el Pleno de la Corte ha reiterado que la acción de

inconstitucionalidad "sólo puede interponerse contra actos definitivos, ejecutoriados **y que no pueden impugnarse por otros medios**", de modo que para utilizarla el afectado debe demostrar que previamente "cumplió con todos los medios de impugnación a su alcance en la vía administrativa o judicial". Ello es así, toda vez que la acción de inconstitucionalidad es autónoma y da vida a un proceso independiente y nuevo, por tanto no se puede considerar como un medio de impugnación más dentro de un proceso. (Ver. fallo de 16 de diciembre de 1994, R.J. dic. 1994, págs. 120-122).

Es importante tener en cuenta que el utilizar este remedio de orden constitucional para impugnar resoluciones judiciales por la omisión de requisitos de orden procesal, como se pretende en este caso, trae como consecuencia que se desvirtúe la naturaleza de esta acción. En relación a este tema, cuando la pretensión es que la Corte examine como tribunal constitucional este tipo de actos jurisdiccionales, sin que los mismos evidencien una violación al texto fundamental y sin que contra éstos se hayan utilizado los medios de impugnación correspondientes, esta Superioridad ha dicho:

> `...
> Las señaladas consideraciones, en consecuencia, ponen de manifiesto que el demandante lo que pretende, en el fondo, es que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia por vía del proceso extraordinario de inconstitucionalidad instaurado contra el acto judicial acusado, decida sobre materia que corresponde a la esfera de la jurisdicción común ordinaria; en la cual resulta incuestionable que la ley procesal tiene previsto los medios y trámites para la impugnación de las resoluciones judiciales que se dicten durante el desarrollo de las distintas fases del proceso, como ocurre en el caso sometido al control constitucional del Pleno de la Corte.
>
> Siendo ello así, hay que convenir y concluir que, en el caso que ocupa al Pleno de la Corte, la acción de inconstitucionalidad no procede contra una resolución judicial estando pendiente de decisión uno de los medios de impugnación previstos en la jurisdicción común ordinaria. (Registro Judicial, septiembre 1993, p. 99 y 100) ... (Fs. 52 R. J. julio-1994).

En ese orden de ideas, con anterioridad al fallo citado, mediante resolución de 12 de mayo de 1993, dictada por el Pleno de la Corte, no se admitió la acción de inconstitucionalidad interpuesta por el **Lic. IVÁN A. GANTES C.** contra resolución de 15 de diciembre de 1992 proferida por el Juzgado Segundo de Circuito Civil por las siguientes razones:

> "...
> Advierte la Corte que el demandante en ningún momento ha apelado de la declaratoria de interdicción, lo cual es perfectamente factible a tenor de lo dispuesto en el artículo 1311 del Código Judicial. Esto era lo indicado en este negocio, toda vez que de la exposición del demandante no se precisa que haya una violación al debido proceso, sino una valoración equivocada de las pruebas periciales aportadas.
> ...
>
> Estas razones impiden darle curso legal a la demanda presentada, toda vez que en estos procesos la Corte Suprema no actúa como Tribunal de Justicia, sino como un organismo de Derecho Público, y como garante de la integridad de la Constitución. En este orden de ideas, el libelo no sólo debe presentarse en debida forma y en consonancia con los requisitos formales que la ley prevé, sino también debe la demanda estar dirigida contra un acto o resolución que vulnere de manera directa y flagrante nuestra Carta Magna, y constatarse el agotamiento de los medios de impugnación respectivos, antes de acudir a este máximo Tribunal de Justicia. ...". (Fs. 11 y 12 R. J. mayo-1993) (Subrayado de la Corte).

En atención a lo que se deja expuesto es evidente que en este caso no es procedente acoger la demanda de inconstitucionalidad.

Consecuentemente, LA CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el Lic. NESTOR EGBERTO UREÑA BATISTA contra la Sentencia N° 27 de 14 de marzo de 1996, dictada por el Juzgado Primero del Circuito de Veraguas.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General.

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO LUIS ALBERTO PALACIOS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, CONTRA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 190 DE LA LEY N° 51 DE 11 DE DICIEMBRE DE 1995, "POR EL CUAL SE DICTA EL PRESUPUESTO GENERAL DEL ESTADO PARA LA VIGENCIA FISCAL DE 1996". MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS

El 17 de junio de 1996 el doctor Luis Alberto Palacios Aparicio, en representación del Contralor General de la República, señor **ARISTIDES ROMERO GONZÁLEZ**, presentó acción de inconstitucionalidad contra el segundo párrafo del artículo 190 de la Ley 51 de 11 de diciembre de 1995, por la cual se dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal de 1996.

Cumplidos los trámites previstos por los artículos 2554 y 2555 del Código Judicial, corresponde examinar el fondo de la pretensión, al tenor de la regulación especial prevista por la Ley.

NORMA ACUSADA DE INCONSTITUCIONALIDAD

> "Artículo 190. PLAZOS E INFORMES ... estados financieros. Con base a lo anterior, el Ministerio de Planificación y Política Económica conjuntamente con la Contraloría General de la República y el Ministerio de Hacienda y Tesoro presentará un informe trimestral analítico consolidado sobre la ejecución presupuestaria del Sector Público a la Presidencia de la República y a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea. La ejecución presupuestaria de los egresos o gastos deberá reflejar los compromisos registrados en la contabilidad presupuestaria a la fecha de presentación del informe ajustados los gastos contingentes que se hayan comprometido".

HECHOS EN QUE SE FUNDAMENTA

A través de cuatro hechos, se hace una relación sobre la expedición de la ley de presupuesto por el Órgano Legislativo y la inclusión del artículo 190, en el que se exige la presentación de un informe conjunto del Ministerio de Planificación y Política Económica, el Ministerio de Hacienda y Tesoro y la Contraloría General de la República, referente a la ejecución del presupuesto del sector público.

Se anota también que el segundo párrafo del artículo 190 mediatiza la

independencia de la Contraloría General, pues al rendir un informe conjunto con dos ministerios que forman parte del Ejecutivo, le impide dar cumplimiento a la norma constitucional que atribuye a la Contraloría el deber de informar al Órgano Ejecutivo y a la Asamblea Legislativa sobre el estado financiero de la Administración Pública.

Como disposiciones constitucionales infringidas se invocan los artículos 275 y 276 de nuestra Carta Fundamental.

OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA

En este caso se da la particularidad de que, previamente a esta acción de control de la constitucionalidad, se había hecho una consulta que fue contestada mediante la nota N° C-271 de 15 de diciembre de 1995, mediante la cual la Procuraduría de la Administración amplía una consulta anterior de la Contraloría General de la República sobre la independencia funcional de las denominadas instituciones públicas independientes, en la que anota "que la autonomía de la Contraloría General de la República, no sólo debe hacer relación con el marco constitucional en que se desenvuelve la entidad fiscalizadora, sino que se hace necesario actuar con cierta autonomía administrativa para poder resolver los asuntos inherentes a su propia organización, con el objeto de garantizar una acción eficaz e independiente" y concluye su nota señalando que "es importante destacar que no deben utilizarse las normas de Administración Presupuestaria para limitar la autonomía e independencia" de este ente estatal. (Cfr. Fs. 1-3).

Por su parte, el Procurador General de la Nación, al contestar el traslado de la demanda, en su Vista N° 22 de 29 de julio de 1996 (fs. 19-25) se refiere al desarrollo que hace la Ley 32 de 1984, Orgánica de la Contraloría General de la República, del artículo 275 de la Constitución Nacional, al enfatizar que la Contraloría General de la República es un organismo estatal independiente, de carácter técnico, cuya misión es fiscalizar, regular y controlar los movimientos de los bienes y fondos públicos. Se adhiere al criterio del demandante en cuanto a su pretensión y estima que el párrafo segundo del artículo 190 de la Ley 51 de 11 de diciembre de 1995, por la cual se dicta el presupuesto general del Estado para la vigencia fiscal de 1996, lesiona los preceptos constitucionales contenidos en los artículos 275 y 276 de nuestra ley Fundamental "porque se ha dispuesto en la ley de presupuesto la coparticipación de otros entes que, aunque comprometidos con la eficacia presupuestaria, no deben inmiscuirse con tareas que le corresponde ejercer en forma independiente a la Contraloría General de la República".

CONSIDERACIONES DEL PLENO DE LA CORTE

Tal como lo sostiene el Magistrado Rogelio Fábrega, en el capítulo XVIII de la obra "Estudios de Derecho Constitucional panameño", compilada por Jorge Fábrega Ponce, son notas características de la institución presupuestaria las siguientes: "Es un acto legislativo, es una ley que da eficacia y valor jurídicos a los estados de previsión de ingresos y egresos públicos; es un acto de limitación cuantitativa, temporal y cualitativa de la ejecución del gasto público;es un estimado de los ingresos públicos y es una manifestación jurídico-política del poder legislativo sobre el Ejecutivo (ob. cit. pág 693).

Lo anterior significa que toda la actividad financiera del Estado en un sistema reglado, democrático y de Derecho, está sometida al imperio de la ley y por ello el presupuesto estatal debe aparecer en una ley distinta cada año fiscal, dada la variedad de ingresos y gastos que se registran por razón de las fluctuaciones y necesidades económicas en el devenir de los tiempos.

Ahora bien, además de las dos partes fundamentales que integran una ley de presupuesto, a las que se ha hecho referencia y que cubren el presupuesto de rentas o ingresos y el presupuesto de gastos, se añaden disposiciones generales que versan sobre controles de ejecución presupuestaria, parte esta en la que aparece el artículo 190, cuyo segundo párrafo es censurado como inconstitucional.

Independientemente de los caracteres de la ley presupuestaria y que en principio se aprecian en la ley 51 mencionada, lo que se cuestiona es la

participación de la Contraloría General de la República en la presentación de los informes trimestrales analíticos consolidados al Órgano Ejecutivo y a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea, conjuntamente con los Ministerios de Planificación y Política Económica y el de Hacienda y Tesoro, porque se sostiene que tal presentación conjunta le resta la autonomía e independencia que la Constitución Política le confiere al ente fiscalizador de la administración pública y regulador del manejo de los bienes públicos.

La autonomía, conforme al Diccionario de la Real Academia Española, en una de sus acepciones es "la potestad que dentro del Estado pueden gozar municipios, provincias, regiones u otras entidades de él, para regir intereses particulares de su vida interior, mediante normas y órganos de gobierno propios" y en cuanto al carácter independiente que le asigna a la Contraloría el artículo 275 constitucional, debe entenderse como independencia funcional protegida de toda ingerencia o influencia proveniente de la administración Pública, que es el objeto de su actividad controladora.

Por otra faz, cabe considerar el texto del artículo 276 de la Constitución Política cuando entre las atribuciones específicas que le asigna a la Contraloría General de la República, incluye en el numeral 9, la de "informar a la Asamblea Legislativa y al Órgano Ejecutivo sobre el estado financiero de la Administración Pública". Si ello es así por mandato de la norma superior, nos encontramos que la ley 51 de 1995 le exige por esa vía del control de la ejecución presupuestaria otro informe que no depende del carácter unitario de la función contralora y fiscalizadora sobre el estado financiero de la Administración Pública, sino de una especie de consenso con dos de las instituciones que forman parte del sector público y que por tanto, junto con todos los entes que conforman la Administración Pública en general, debieran ser objeto de esa fiscalización a fin de ofrecer, tanto al Órgano Ejecutivo como al Legislativo, un informe imparcial y objetivo de su estado financiero y consecuentemente del cumplimiento de las normas de ejecución presupuestaria. No se objeta la presentación del informe trimestral analítico sobre la ejecución presupuestaria por los Ministerios de Planificación y Política Económica y el de Hacienda y Tesoro, pues ello no contraría disposición alguna de rango constitucional.

La doctrina de la separación de los poderes, a la que se adhiere el Estado panameño en su organización política, no es absoluta en cuanto permite a su vez, la aplicación de frenos y contrapesos entre los órganos del Poder Público y su interrelación armónica. En cuanto a la regulación, fiscalización y control de los fondos y bienes del sector público, atribuido a la Contraloría General de la República, en su calidad de organismo estatal independiente, prevalece su autonomía cuando se trata del control jurídico político de la ejecución presupuestaria.

Por consiguiente, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES INCONSTITUCIONAL la frase "conjuntamente con la Contraloría General de la República" contenida en el segundo párrafo del artículo 190 de la ley 51 de 11 de diciembre de 1995, publicada en la Gaceta Oficial N° 22.929 de 13 de diciembre de 1995, por cuanto contraría lo dispuesto en los artículos 275 y 276 de la Constitución Política vigente.

Notifíquese y Publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD PRESENTADA POR EL LIC. RAMÓN F. CASTELLANOS DENTRO DEL PROCESO LABORAL SANDRA DE GONZÁLEZ VS EDITORA PANAMÁ AMÉRICA, S. A.

MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Al Pleno de la Corte Suprema de Justicia fue remitida la Advertencia de Inconstitucionalidad interpuesta por el licenciado Ramón F. Castellanos, en nombre y representación de la señora SANDRA DE GONZÁLEZ, para que se declare la inconstitucionalidad del numeral sexto del artículo 14 del Código de Trabajo, en el proceso laboral seguido contra Editora Panamá América, S. A.

Al examinar la presente demanda para determinar si cumple con los requisitos legales, el Pleno de la Corte observa que adolece de serios defectos que impiden su admisión.

En tal sentido, se observa que el actor no cumple con lo preceptuado en los numerales 1 y 2 del artículo 2551 del Código Judicial, debido a que no transcribió literalmente la norma acusada de inconstitucional, ni explicó el concepto de la infracción.

Por otra parte, el Pleno de la Corte debe indicar que en el presente caso tampoco sería posible emitir un pronunciamiento de fondo, toda vez que esta Corporación de Justicia, mediante Sentencia de 21 de junio de 1993 (publicada en la G. O. N° 22,523 de 26 de abril de 1994), se pronunció sobre la constitucionalidad de la norma impugnada. En esta sentencia el Pleno de la Corte declaró que el artículo 5 de la Ley N° 27 de 24 de diciembre de 1990, que adicionó el numeral sexto del artículo 14 del Código de Trabajo "**no viola** los artículos 17, 19, 43, 74, 75, 157 Ordinales 1 y 4, 159, Acápite B, Párrafo Tercero, 160 y 165, **ni otras normas de rango constitucional**".

Como en el presente caso, esta Corporación de Justicia ya se pronunció sobre la constitucionalidad de la norma acusada, la Junta de Conciliación y Decisión N° 17, debió abstenerse de remitir la precitada advertencia, en atención a lo preceptuado en el último párrafo del numeral 1° del artículo 203 de la Constitución Política.

De consiguiente, el Pleno de la Corte Suprema, Pleno, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE, la consulta de inconstitucionalidad presentada dentro del proceso laboral promovido por SANDRA DE GONZÁLEZ contra Editora Panamá América, S. A., para que se declare inconstitucional el numeral sexto del artículo 14 del Código de Trabajo.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CONSULTA DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE EL ARTÍCULO 427 DEL CÓDIGO DE TRABAJO DENTRO DEL EXPEDIENTE QUE CONTIENE EL PLEITO DE PETICIONES DEL SINDICATO INDUSTRIAL DE AGENCIAS DE SEGURIDAD -VS- SEGURIDAD PERMANENTE Y PROTECCIÓN, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado GILBERTO BÓSQUEZ DÍAZ, actuando en nombre y representación de la sociedad **SEGURIDAD PERMANENTE Y PROTECCIÓN, S. A. (SERPROSA)**, ha formulado **Advertencia de Inconstitucionalidad** contra el artículo 427, numeral 5 del Código de Trabajo, dentro del expediente que contiene el Pliego de Peticiones que presentó el **SINDICATO INDUSTRIAL DE AGENCIAS DE SEGURIDAD.**

El Director General de Trabajo elevó al Pleno de esta Corporación la Consulta sobre la inconstitucionalidad manifestada por la empresa a la que se le presentó el pliego de peticiones. Corresponde, entonces, revisar si concurren las exigencias procesales necesarias para la procedencia de esta advertencia, las que consisten en:

1- Que exista un proceso en curso;
2- Que una de las partes advierta que la disposición legal o reglamentaria aplicable al caso es inconstitucional;
3- Que no se haya aplicado aún la disposición; y,
4- Que no haya habido pronunciamiento de la Corte en relación a la constitucionalidad de la disposición respectiva.

Vemos que en el presente caso no concurre el tercer presupuesto antes citado, pues el numeral de la norma advertida se refiere a uno de los requisitos que debe contener el pliego de peticiones al ser presentado por el sindicato ante la autoridad respectiva y, como se observa a fojas 77 de este expediente, dicha autoridad acogió el pliego y el resto de la documentación aportada, ordenando continuar el trámite correspondiente de entregar a la empresa un ejemplar "del pliego de peticiones presentado en debida forma", para su contestación.

Por tanto, resulta obvio que el Director General de Trabajo al dictar la resolución aludida, en la que expresa que el pliego fue presentado en debida forma, ya aplicó y dio cumplimiento al artículo 427, con todos sus numerales y las normas concordantes del Código de Trabajo.

En tal sentido, la Corte ha reiterado el criterio de la no viabilidad de la advertencia cuando la disposición legal o reglamentaria ha sido aplicada al caso concreto, aún en cualquiera de los momentos del desenvolvimiento procesal. Así en fallo de 5 de febrero de 1992, el Pleno puntualizó:

> "La Corte en reiterados pronunciamientos ha señalado que las advertencia y las consultas sobre constitucionalidad deben recaer en las normas legales o reglamentarias susceptibles de ser aplicadas al caso, en otras palabras, de disposiciones aplicables al asunto litigioso o a la decisión del proceso, pero no cabe contra normas ya aplicadas en cualquiera de los momentos del desenvolvimiento procesal del caso." (R. J. febrero-1992, pág. 19)

De lo expuesto se concluye que el mecanismo de control constitucional que nos ocupa ha sido utilizado indebidamente, por lo que se impone su rechazo.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la Consulta de Inconstitucionalidad sobre el artículo 427 del Código de Trabajo.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO ERNESTO E. NAVARRO

BENAVIDES EN CONTRA DE LOS ARTÍCULOS 1391, 1392, 1393, 1395, 1399 DEL CÓDIGO JUDICIAL; 1320 DEL CÓDIGO CIVIL Y LA RESOLUCIÓN DE FECHA 18 DE JULIO DE 1991 DEL JUZGADO SEGUNDO MUNICIPAL DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado ERNESTO NAVARRO BENAVIDES, actuando en nombre y representación del señor **BORIS WOZNESSENSKY LIMANSKY**, ha interpuesto demanda de inconstitucionalidad contra los artículos 1391, 1392, 1393, 1395 y 1399 del Código Judicial, el artículo 1320 del Código Civil y la Resolución de 18 de julio de 1991 dictada por el Juzgado Segundo Municipal de Panamá, Ramo Civil, mediante la cual se rechazó de plano la advertencia de inconstitucionalidad que formulara el recurrente.

El demandante estima que las normas acusadas de inconstitucionalidad vulneran los artículos 4, 32 y 34 de la Constitución Nacional.

Corrido el traslado respectivo al señor Procurador General de la Nación, éste externó su opinión mediante Vista N° 19 de 8 de junio de 1994. En dicho documento, el Jefe del Ministerio Público indicó que la Corte ya se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de las normas acusadas en el presente negocio e indicó la fecha y parte del contenido de los fallos.

En relación con la Resolución de 18 de julio de 1991 dictada por el Juzgado Segundo Municipal de Panamá, Ramo Civil, también acusada de inconstitucional, indicó el Procurador que del estudio objetivo realizado a la misma no se desprende que exista una lesión a las disposiciones constitucionales en comento; que el juzgador que conoció de la advertencia de inconstitucionalidad sostuvo que dichas normas ya habían sido debidamente aplicadas y en vista de que existe jurisprudencia de la Corte en ese sentido, no resultaba posible la advertencia. Por lo explicado, el Procurador solicitó a esta Corporación que se declare la sustracción de materia en esta causa.

Al analizar la situación planteada, observa la Corte que efectivamente, esta Corporación se ha pronunciado con anterioridad en relación con las normas impugnadas en el presente negocio. Veamos. En fallo de 4 de abril de 1990, esta Corte declaró que no eran inconstitucionales los artículos 1391 y 1393 del Código Judicial; similar fallo se produjo el 3 de octubre de 1991 respecto al artículo 1395 del Código Judicial y sentencia de 10 de septiembre de 1993 declaró que no era inconstitucional el artículo 1399 de dicho cuerpo de leyes. Otro tanto sucedió con el artículo 1392 del Código Judicial, mediante sentencia de 27 de julio de 1988; y respecto al artículo 1320 del Código Civil se dijo que no es inconstitucional mediante sentencia de 11 de enero de 1988.

La jurisprudencia de esta Corte ha reiterado que no es posible el examen de la constitucionalidad de materias que ya han sido objeto de pronunciamiento de fondo. En vista de que mediante las Sentencias mencionadas, la Corte Suprema de Justicia ha emitido una decisión sobre la constitucionalidad de los artículos 1391, 1392, 1393, 1395 y 1399 del Código Judicial y el artículo 1320 del Código Civil, considera que debe abstenerse de emitir una decisión en el caso sub júdice, por haberse configurado el fenómeno jurídico conocido como "cosa juzgada", en virtud de lo dispuesto en el artículo 203 de nuestra Carta Magna, que establece que las decisiones sobre el control constitucional que pronuncie la Corte Suprema de Justicia tienen el carácter de finales, definitivas y obligatorias.

En el caso que nos ocupa se ha demandado también la inconstitucionalidad de la Resolución de 18 de julio de 1991 dictada por el Juzgado Segundo Municipal de Panamá, Ramo Civil, mediante la cual se rechazó de plano la advertencia de inconstitucionalidad que formulara el recurrente. La Corte comparte plenamente el criterio del señor Procurador en el sentido que dicha resolución carece de vicios de inconstitucionalidad, puesto que el juzgador la rechazó por haberse aplicado ya los artículos acusados de inconstitucionales. En efecto, abundante

jurisprudencia de esta Corporación ha sostenido que en los casos que mediante advertencia de inconstitucionalidad se pretenda acusar alguna norma, disposición, resolución, etc., resulta indispensable que dicho instrumento legal no haya sido aplicado previamente en el caso de que se trate, pues de lo contrario deviene la no viabilidad de la acción incoada.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE:

PRIMERO: DECLARA que en el presente negocio se ha producido el fenómeno jurídico de COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL en relación con los artículos 1391, 1392, 1393, 1395 y 1399 del Código Judicial y el artículo 1320 del Código Civil;

SEGUNDO: DECLARA que NO ES VIABLE la solicitud para que se declare inconstitucional la Resolución de 18 de julio de 1991 dictada por el Juzgado Segundo Municipal de Panamá, Ramo Civil; y

TERCERO: ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL SEÑOR MARCELINO MONTERREY EN CONTRA DE LA LEY N° 107 DE 8 DE OCTUBRE DE 1973. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Ingresó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la advertencia de inconstitucionalidad presentada en su propio nombre por **MARCELINO MONTERREY**, contra el segundo párrafo del artículo 3° de la Ley N° 107 de 8 de octubre de 1973, dentro del incidente de suspensión de la pensión alimenticia, decretada por el Juzgado Municipal de Antón, mediante auto de 14 de agosto de 1981, por la suma de veinticinco balboas (B/.25.00) quincenales, a favor de ADDIE IVETH MONTERREY, en el proceso especial de alimentos incoado por BETY ENEIDA LAM WONG contra **MARCELINO MONTERREY.**

El señor **MONTERREY** indicó en su escrito, que el párrafo segundo del artículo 3° de la Ley N° 107 de 8 de octubre de 1973 (G. O. N° 17,457 de 23 de octubre de 1973), en la parte que establece que "Los padres están obligados a sufragar los gastos que demande la educación del alimentista ...", infringe el párrafo primero del artículo 91 de la Constitución Nacional, toda vez que a su juicio, dicho artículo "solo (sic) hace de obligatorio cumplimiento, la educación de primer nivel o educacion (sic) basica (sic) general.".

Admitido el presente recurso de inconstitucionalidad, de conformidad con lo establecido en el artículo 2554 del Código Judicial, se le dio traslado de la misma al Procurador General de la Nación, quien mediante Vista N° 61 de 16 de diciembre de 1993 (fs. 8 a 10), señaló que "la advertencia presentada es manifiestamente improcedente, pues este incidente de inconstitucionalidad es formulado directamente por el propio señor **MARCELINO MONTERREY**" y, "dado que la ley que regula nuestros procesos constitucionales, exige que la persona que promueva esta clase de procesos lo haga a través de apoderado judicial, con la

única excepción del habeas corpus, esta Procuraduría considera que debe declararse NO VIABLE la advertencia de inconstitucionalidad presentada ...".

La Corte comparte el criterio del Jefe Máximo del Ministerio Público en cuanto a que la presente advertencia de inconstitucionalidad debió ser rechazada de plano por improcedente y, por lo tanto, no debió ser admitida, puesto que la misma fue presentada por el señor **MARCELINO MONTERREY** en su propio nombre y, a pesar de que el proceso especial de alimentos permitía la comparecencia directa de los interesados, la representación mediante apoderados judiciales es una exigencia necesaria en los procesos constitucionales como es el caso, según se desprende del artículo 2550 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 579 del mismo Código.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE la advertencia de inconstitucionalidad presentada en su propio nombre por MARCELINO MONTERREY, contra el segundo párrafo del artículo 3° de la Ley N° 107 de 8 de octubre de 1973 y, en consecuencia, ORDENA el ARCHIVO del expediente.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA LICENCIADA SHEYLA CASTILLO CHANIS DEL ARTÍCULO 132 DE LA LEY 47 DE 1946. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Dentro de la Demanda Contencioso-Administrativa de Plena Jurisdicción que interpusiera la Licenciada **SHEYLA CASTILLO CHANIS**, en representación de **ANAYANSI GONZÁLEZ** para que se declaren nulas, por ilegales, las Resoluciones N° 8-87 de 21 de mayo de 1987, la N° 13-87 de 17 de diciembre de 1987, la N° 1-88 de 6 de enero de 1988, la N° 35-88 de 26 de mayo de 1988 y la N° 56-88 de 12 de julio de 1988, dictadas por el Consejo Académico de la Universidad de Panamá; la demandante ha formulado advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 132 de la Ley 47 de 1946.

Mediante resolución de 6 de marzo de 1989 la Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, remitió al Pleno la advertencia de inconstitucionalidad formulada para el trámite correspondiente.

El texto completo del citado artículo es del siguiente tenor:

> "ARTÍCULO 132. Si el inferior no pudiera desvirtuar los cargos, el superior procederá a aplicar la sanción que le corresponda de acuerdo con las disposiciones respectivas.".

De acuerdo con la recurrente, la norma impugnada infringe el artículo 22 de la Constitución Nacional, puesto que:

> "dispone todo lo contrario a la norma constitucional transcrita en parte, al establecer que es el inferior, es decir, el acusado, el que tiene que desvirtuar los cargos para no ser sancionado por el superior.

...
Volviendo al concepto de la infracción, insistimos:

> El Consejo Académico de la Universidad de Panamá, al dictar los actos acusados, violó, de manera directa por omisión, la presunción de inocencia establecida en el numeral 2 del artículo 8° de la Ley 15 de 1977, pues sancionó a mi patrocinada sin prueba alguna. En efecto, no existe prueba alguna que acredite la responsabilidad de mi representada por los hechos a ella imputados por el Consejo Académico de la Universidad de Panamá, pues la destitución se fundó sólo en la supuesta declaración de la señora Rosa De la Espada que queda desvirtuada con la declaración ante Notario Público rendida expontáneamente (sic) por la misma señora Rosa De la Espada que ahora aportamos a esta acción.".

En su debida oportunidad, el Procurador General de la Nación, mediante Vista N° 20 de 27 de julio de 1990, para concluir que la advertencia bajo examen no es viable por extemporánea, esbozó el siguiente criterio:

> "1. La presente advertencia de inconstitucionalidad deviene en extemporánea.
>
> El análisis atento y objetivo de las constancias procesales contenidas en la presente advertencia de inconstitucionalidad, permite sostener que la misma no es procedente por cuanto que la disposición legal, objeto de la advertencia, ya fue objeto de aplicación.
>
> En efecto, la lectura del concepto de la infracción planteado en la presente advertencia respecto de la aludida disposición legal (Art. 132, Ley N° 47, de 24 de septiembre de 1946), denota que el Consejo Académico de la Universidad de Panamá, al dictar las Resoluciones N°8-87, de 21 de mayo de 1987; la N° 13-87, de 17 de diciembre de 1987; la N° 1-88 de 6 de enero de 1988; la N° 35-88 de 26 de mayo de 1988; y la N° 56-88 de 12 de julio de 1988, aplicó la disposición legal meritada, aún cuando este hecho no conste, no aparezca consignado en el presente negocio jurídico de carácter constitucional, lo que torna la presente advertencia de inconstitucionalidad extemporánea, inoportuna.".

Ahora bien, el artículo 203 de la Constitución dispone que "Cuando en un proceso el funcionario público encargado de impartir justicia advirtiere o se lo advirtiere alguna de las partes que la disposición legal o reglamentaria aplicable al caso es inconstitucional, someterá la cuestión al conocimiento del Pleno de la Corte, salvo que la disposición haya sido objeto de pronunciamiento por parte de ésta, y continuará el curso del negocio hasta colocarlo en estado de decidir" (la subraya es del Pleno).

Ello significa que para que prospere una advertencia de inconstitucionalidad la norma cuya declaratoria de inconstitucionalidad se aboga ha de ser **aplicable** al caso controvertido. Esta afirmación origina dos presupuestos importantes: 1) que la norma impugnada contenga como supuesto legal el hecho que ante ella deba subsumirse y 2) que dicho precepto no haya sido **aplicado** por parte del juzgador, es decir, que el Juez no haya deducido de él efectos jurídicos.

Al analizar la situación planteada en el presente proceso y confrontarla con los requisitos señalados en el párrafo anterior, deduce la Corte que la advertencia de inconstitucionalidad que nos ocupa carece del segundo presupuesto, pues, tal como indicara el Procurador General de la Nación, el artículo 132 de la Ley N° 47 de 24 de septiembre de 1946, fue aplicado por el Consejo Académico de la Universidad de Panamá al emitir las resoluciones antes mencionadas. Por consiguiente, atendiendo al principio que consagra el numeral 1 del artículo 203 de la Constitución, no procede la advertencia de inconstitucionalidad.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES VIABLE la advertencia de inconstitucionalidad interpuesta por la Licenciada SHEYLA CASTILLO CHANIS, en nombre y representación de la señora ANAYANSI GONZÁLEZ, contra el artículo 132 de la Ley N° 47 de 24 de septiembre de 1946.

Notifíquese, Cúmplase y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE DE OBALDÍA & GARCÍA DE PAREDES, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE ASFALTOS PANAMEÑOS, S. A., CONTRA EL OFICIO N° 140 DEL 30 DE AGOSTO DE 1996, EXPEDIDO EN FORMA CONJUNTA POR LA TESORERA Y EL INGENIERO MUNICIPAL DEL DISTRITO DE BUGABA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense De Obaldía & García de Paredes, actuando en nombre y representación de la sociedad **ASFALTOS PANAMEÑOS, S. A.**, interpuso ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia acción de inconstitucionalidad contra el Oficio N° 140 del 30 de agosto de 1996, expedido por la Tesorera y el Ingeniero Municipal del Distrito de Bugaba.

Mediante el acto impugnado, la Tesorera y el Ingeniero Municipal de este distrito comunicaron a los representantes de la sociedad ASFALTOS PANAMEÑOS, S. A. que, según el pliego de cargos utilizado por el Ministerio de Obras Públicas para celebrar la Licitación Pública Internacional N° 7-95, esta empresa no está exonerada del pago del impuesto de construcción causado con motivo del ensanche y rehabilitación de la Carretera Interamericana en el tramo David-La Concepción. Por esta razón, concluye la nota, "les agradeceríamos pasen por nuestras oficinas en el menor tiempo posible" (Cfr. f.3).

A juicio del Pleno de la Corte Suprema de Justicia la presente demanda no debe admitirse, porque el acto cuya inconstitucionalidad se pide constituye, en su esencia, una simple comunicación que los funcionarios municipales aludidos dirigieron a los representantes de ASFALTOS PANAMEÑOS, S. A., para que se apersonaran a las oficinas del Municipio de Bugaba para atender lo relativo al impuesto de construcción que se estima causado. Se trata, por tanto, de un acto que pone en conocimiento del interesado un hecho, sin que de él se desprenda decisión, resolución o disposición capaz de violentar el ordenamiento jurídico constitucional.

Contrario a lo erróneamente expresado por la firma forense De Obaldía & García De Paredes, el Oficio N° 140 ibídem, no grava a su representada con ningún impuesto, sino que se limita a comunicarle que no está exonerada del impuesto de construcción por razón de las obras antes mencionadas. Una situación distinta es la planteada en la sentencia que la actora cita en apoyo de su demanda (del 8 de febrero de 1994), en la que se declaró inconstitucional la Resolución S/N° del 9 de diciembre de 1992, mediante la cual el Tesorero Municipal de Gualaca, gravó a la compañía Skanska, S. A. con el 1% sobre el valor de la obra hasta B/.15,000.00 y el 25% sobre la cantidad adicional, en concepto de impuesto de edificaciones y reedificaciones, sobre la obra que esta empresa realizaba en la II Etapa de la Hidroeléctrica La Fortuna.

Si bien los artículos 203 (N° 1) de la Constitución Política y 2550 del Código Judicial facultan a cualquier persona para impugnar ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia los actos que considere inconstitucionales, debe entenderse, que se trata actos idóneos o capaces de violar el ordenamiento constitucional y no de meras solicitudes o comunicaciones que, por su propia naturaleza, carecen de toda potencialidad para inferir lesión alguna a las normas supralegales, tal como ocurre en el presente caso.

Por estas razones, el Pleno de la Corte estima que la presente demanda no debe admitirse y así procede a declararlo.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la acción de inconstitucionalidad interpuesta por la firma forense De Obaldía & García De Paredes, en nombre y representación de ASFALTOS PANAMEÑOS, S. A., contra el Oficio N° 140 del 30 de agosto de 1996, expedido por la Tesorera y el Ingeniero Municipal del Distrito de Bugaba.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA POR EL LIC. JERRY WILSON EN REPRESENTACIÓN DE REYNALDO VENTO SANJUR CONTRA EL ARTICULO 1740 DEL CÓDIGO JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado JERRY WILSON NAVARRO, actuando en nombre y representación del señor **REYNALDO VENTO SANJUR**, demandado en el Proceso Ejecutivo Hipotecario promovido por el BANCO INTEROCEÁNICO DE PANAMÁ, S. A., ha interpuesto advertencia de inconstitucionalidad contra el artículo 1740 del Código Judicial.

El demandante estima que la norma acusada de inconstitucionalidad vulnera el artículo 44 de la Constitución Nacional.

Corrido el traslado respectivo a la señora Procuradora Suplente de la Administración, externó su opinión mediante Vista N° 386 de 24 de agosto de 1994. En dicho documento, indicó que la Corte ya se ha pronunciado sobre la constitucionalidad de la norma acusada en el presente negocio, mediante los fallos de 22 de febrero y 23 de septiembre de 1989.

Por lo explicado y tomando en cuenta lo normado en el artículo 203 de la Constitución Nacional, la Procuradora solicitó a esta Corporación que se declare la sustracción de materia en esta causa.

Al analizar la situación planteada, observa la Corte que efectivamente, esta Corporación se ha pronunciado con anterioridad con relación al artículo impugnado en el presente negocio, veamos. En fallo de 22 de febrero de 1989 se declaró que no eran inconstitucionales las frases: "1. Puede hacerse la venta por dos terceras partes del avalúo; 2. será postura hábil la que se haga por la mitad del avalúo; y 3. podrá admitirse postura por cualquier suma.", contenidas en el artículo 1740 del Código Judicial. Mientras que mediante fallo de 23 de septiembre de 1989, esta Corte declaró que no era inconstitucional el artículo 1740 del Código Judicial, ya que "... no encuentra el PLENO pues, en qué forma

el artículo 1740 del Código Judicial pueda vulnerar el artículo 44 de la Carta Fundamental, cuando la norma advertida de inconstitucionalidad se refiere al procedimiento que deben ajustarse los Tribunales, por ser los competentes para resolver las controversias judiciales sometidas a ellos y, específicamente los relativos al embargo y remate de bienes ya ejecutados.".

La jurisprudencia de esta Corte ha reiterado que no es posible el examen de la constitucionalidad de materias que ya han sido objeto de pronunciamiento de fondo. En vista de que mediante las Sentencias mencionadas, la Corte Suprema de Justicia ha emitido una decisión sobre la constitucionalidad del artículo 1740 del Código Judicial, considera que debe abstenerse de emitir una decisión en el caso sub júdice, por haberse configurado el fenómeno jurídico conocido como "cosa juzgada", en virtud de lo dispuesto en el artículo 203 de nuestra Carta Magna, que establece que las decisiones sobre el control constitucional que pronuncie la Corte Suprema de Justicia tienen el carácter de finales, definitivas y obligatorias.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que en el presente negocio se ha producido el fenómeno jurídico de COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL con relación al artículo 1740 del Código Judicial; y en consecuencia, ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS MUÑOZ POPE (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROMOVIDA POR EL LICENCIADO CARLOS A. ERHMAN CONTRA CIERTAS PARTES DEL CONTRATO N° 70-96 CELEBRADO EL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y LA SOCIEDAD ICA PANAMÁ, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El licenciado CARLOS A. EHRMAN, actuando en su propio nombre, ha promovido demanda de inconstitucionalidad sobre fragmentos de un número plural de cláusulas contenidas en el Contrato N° 70-96, celebrado entre el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, en representación del Estado y la sociedad ICA PANAMÁ, S. A. para el estudio, diseño, construcción, mantenimiento, administración y explotación del Corredor Sur, mediante el sistema de concesión administrativa, que regula la Ley 5ª de 15 de abril de 1988.

Corresponde en esta etapa procesal determinar si la demanda cumple con los requisitos que, para este tipo de acciones constitucionales, determina el Código Judicial, fundamentalmente el artículo 2551, así como la doctrina que, sobre el particular, ha señalado el Pleno de esta Corporación.

En cuanto al primer aspecto, cabe destacar que la demandante ha expuesto los fundamentos fácticos de su pretensión. Por otra parte, los actos demandados constituyen partes de cláusulas específicas del contrato público antes indicado, con lo que cumple a satisfacción con el requisito señalado en el numeral 1° del artículo 2551, toda vez que ha transcrito las partes de las cláusulas que estima inconstitucionales, y también ha indicado, como disposiciones constitucionales vulneradas por la entidad pública contratante, los artículos 4 y 255, numeral 1 de la Constitución Política. No obstante, al señalar el concepto de la infracción, el demandante se ha limitado a expresar el concepto de la infracción

de una de las disposiciones constitucionales invocadas, no así todas ellas, siendo así que el análisis del concepto de la infracción se contrae al artículo 255, numeral 1, de la Constitución, guardando silencio sobre la forma y manera en que la entidad contratante ha violado, a su juicio, el artículo 4 de la Constitución Política.

Este Pleno, con respecto a esta materia, se ha ocupado en varias ocasiones. Así, con ocasión de advertencia de inconstitucionalidad promovida contra la cláusula 8ª del contrato número N°35, celebrado entre el Estado, representado por el Ministro de Hacienda y Tesoro y la sociedad REFINERÍA PANAMÁ, S. A., advertencia ésta que no fue admitida, toda vez que la cláusula no constituía una de aquellas normas en las cuales se puede fundamentar esta acción constitucional, por una parte; y, por la otra, en que la materia no era constitucional, sino contencioso administrativa.

En efecto, en aquella ocasión, el Pleno externó las consideraciones que se reproducen:

"...
Con claridad meridiana se aprecia que las cláusulas contractuales no forman parte de la categoría normativa, legal y reglamentaria, a la que el Estatuto Superior le reconoce la virtud de generar este proceso constitucional, toda vez que no integran el elenco de disposiciones susceptibles de ser utilizadas para el perfeccionamiento del acto jurisdiccional que decide la pretensión, que en este caso es de naturaleza contencioso-administrativa".

(Registro Judicial. Mayo de 1993, pág. 126).

Nuevamente tuvo ocasión de pronunciarse el Pleno, en una demanda de inconstitucionalidad, que estimaba el demandante existía, en el contrato celebrado con la sociedad ESBA, S. A. En esta oportunidad, señaló este Pleno:

"...
Se observa que lo que en realidad se impugna en este caso, es la terminación unilateral por parte del Estado de un contrato suscrito entre la sociedad demandante y el Ministerio de Salud, en virtud del cual se canceló también una serie de pagarés que se habían emitido como consecuencia de dicho contrato.

Las diferencias que se producen a raíz del incumplimiento de un contrato administrativo, no constituyen un problema de rango constitucional, por lo cual no debe utilizarse la demanda de inconstitucionalidad como medio para deslindar las mismas".

(Registro Judicial. Diciembre de 1994, pág. 117).

Estima el Pleno que un contrato que celebre el Estado, que siempre tiene una finalidad de interés público, por cuanto se trata de un mecanismo para atender, en forma mediata o inmediata, necesidades públicas, constituye un acuerdo de voluntades, sin perjuicio de que, en su celebración, interpretación, dirección o ejecución se reserve el Estado ciertas prerrogativas dimanantes de la naturaleza del sujeto que contrata, pero cuyo cumplimiento, terminación o resolución, sea en sede administrativa o jurisdiccional, impone la necesidad de que se le permita a la parte contratante que haga valer sus derechos e intereses, pues, de lo contrario, el acuerdo de voluntades podría ser deshecho, por la sola voluntad unilateral del Estado, sin siquiera escuchar a la parte co-contratante, lo que colocaría a la misma en un estado de indefensión. En las actuales circunstancias, esas controversias contractuales quedan sujetas, en sede jurisdiccional, en la jurisdicción contencioso administrativa, de conformidad con el artículo 78 de la Ley 56, de 27 de diciembre de 1995, sin perjuicio de la potestad de resolver dicho contrato unilateralmente, prerrogativa tradicional en los contratos administrativos, que ahora viene prevista en los artículos 104 y 105 de la Ley en mención, no obstante que, incluso para el caso de que el Estado decidiese ejercer la prerrogativa de Derecho Público que ostenta, debe hacerlo a través de un procedimiento administrativo, que le garantice el derecho de audiencia y demás derechos insertos dentro de la garantía del debido proceso, instituida por el artículo 32 de la Constitución, procedimiento administrativo

éste que se encuentra previsto en el artículo 106 de la mencionada Ley 56 de 1995, y contra cuya decisión prospera demanda contencioso-administrativa. Es evidente, por lo tanto, que una demanda de inconstitucionalidad sobre cláusulas contractuales, privaría a una de las partes contratantes el derecho a contradecir las afirmaciones del co-contratante, en un proceso contradictorio con todas las garantías procesales, lo que dejaría en indefensión a la parte afectada.

Este Pleno, al decidir la demanda de inconstitucionalidad del contrato de asociación entre la CORPORACIÓN DE DESARROLLO MINERO DE CERRO COLORADO Y TEXAS GULF, INC. autorizada mediante Ley N° 9, de 5 de febrero de 1976, se pronunció sobre este tema, haciendo suyo el análisis efectuado por el Procurador General de la Nación, que se transcribe a continuación, concluyendo que el contrato que ocupó al Pleno en aquella ocasión "no es un acto de Gobierno; es un acto bilateral por su conformación jurídica". El Procurador General de la Nación, en la porción transcrita por la sentencia de 14 de enero de 1980, expresó lo que se transcribe:

> "El Estado no podría, a través del Consejo Nacional de Legislación, dictar lógica y jurídicamente una nueva Ley que reforme o subrogue el vínculo de derechos originado del concurso de voluntades expresadas en el contrato sin que las partes dentro de la relación contractual, o sea la CORPORACIÓN DE DESARROLLO MINERO CERRO COLORADO y TEXAS GULF, no hayan sido oídas previamente. Cualquiera de las partes contratantes pudiera resultar lesionada en sus derechos, ya que la Ley que reforma o subroga ese Contrato tendría los mismos efectos que una Sentencia Judicial en firme".
>
> (Registro Judicial. Enero de 1980, pág. 25).

Sobre el tema de la indefensión, se ha pronunciado el Tribunal Constitucional de España. Así, en sentencia de 11 de junio de 1984, bajo la ponencia del profesor DIEZ PICAZO, expresó:

> "La indefensión (...) se produce (en sentido jurídico-constitucional) cuando se priva al ciudadano de la posibilidad de impetrar la protección judicial a sus derechos o intereses mediante la apertura del adecuado proceso o de la de realizar dentro de dicho proceso, las adecuadas alegaciones y pruebas, o cuando se le crea un obstáculo que dificulte gravemente las actividades antedichas."
>
> (Citado por José Manuel Bandres Sánchez-Crusat, "Derecho Fundamental al Debido Proceso y el Tribunal Constitucional", Pamplona (España). 1992, pág. 235).

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el licenciado CARLOS A. EHRMAN sobre fragmentos de un número plural de cláusulas contenidas en el Contrato N° 70-96, celebrado entre el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS, en representación de EL ESTADO y la SOCIEDAD ICA PANAMÁ, S. A. para el estudio, diseño, construcción, mantenimiento, administración y explotación del Corredor Sur, mediante el sistema de concesión administrativa, que regula la Ley 5ª de 15 de abril de 1988.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(CON SALVAMENTO DE VOTO)
(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) CARLOS MUÑOZ POPE
(CON SALVAMENTO DE VOTO)
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(CON SALVAMENTO DE VOTO)

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DE LOS MAGISTRADOS

EDGARDO MOLINO MOLA, CARLOS E. MUÑOZ POPE Y RAFAEL A. GONZÁLEZ

No compartimos el criterio de la mayoría.

Se ha demandado la inconstitucionalidad de ciertas partes de algunas cláusulas del Contrato N° 70-96 celebrado entre el Ministerio de Obras Públicas y la sociedad **ICA PANAMÁ, S. A.**, para el estudio, diseño, construcción, mantenimiento, administración y explotación del Corredor Sur, mediante el sistema de concesión administrativa (Gaceta Oficial N° 23,108 del 26 de agosto de 1996).

Sin entrar en detalles, porque no es necesario para los efectos de las observaciones que se formulan, se trata, en general, del cuestionamiento constitucional de disposiciones contractuales que tratan de rellenos sobre el mar y la costa en un área extensa (35 hectáreas) y derechos sobre tales rellenos así como actos de disposición relativos a los mismos.

El demandante considera que de acuerdo con la Constitución Nacional el mar territorial, las playas y riberas son de aprovechamiento libre y común, son de uso público y no pueden ser objeto de apropiación privada.

La decisión de mayoría no admite la demanda de inconstitucionalidad invocando razones procesales; o sea que veda la acción de inconstitucionalidad contra los contratos administrativos.

Para esos efectos se sostiene:

1. Que un contrato que celebra el Estado, de interés público, constituye un acuerdo de voluntades, e impone la necesidad de que se le permita a la parte contratante con el Estado que haga valer sus derechos e intereses; de lo contrario, el acuerdo de voluntades podría "ser deshecho", por la sola voluntad unilateral del Estado, sin escuchar siquiera a la otra parte, lo que la colocaría en un Estado de indefensión.

2. También expresa que actualmente esas controversias contractuales se sujetan a la jurisdicción contencioso administrativa de conformidad con el artículo 78 de la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995, que es del siguiente tenor:

Artículo 78. **Interpretación y ejecución del contrato.**
Los contratos celebrados en la República de Panamá se interpretarán y ejecutarán de conformidad con las leyes panameñas. Las controversias que se susciten con ocasión de la interpretación, ejecución o terminación de los contratos, serán de competencia de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia."

3. Que es evidente que una demanda de inconstitucionalidad sobre cláusulas contractuales privaría a una de las partes contratantes del derecho de contradecir las afirmaciones de la otra en un proceso contradictorio con todas las garantías procesales, lo que dejaría indefensión a la parte afectada.

En virtud de estos planteamientos se decide no admitir la demanda de inconstitucionalidad interpuesta.

Al proceder con ese criterio no se ha planteado si los señalamientos que se hacen en la demanda tienen rango de materia constitucional; es decir, si se refieren a cuestiones reguladas por la Constitución Nacional.

La decisión de mayoría, se repite, afecta en realidad el ejercicio de la acción de la inconstitucionalidad, contra los contratos administrativos, con los argumentos expresados.

No creemos que ello sea correcto, ni que jurídicamente se puedan excluir los contratos administrativos del examen constitucional. La acción de

inconstitucionalidad está establecida en la propia Constitución cuando expresa en su artículo 203 que la Corte Suprema de Justicia tiene la guarda de la integridad de la Constitución, y que el Pleno conocerá y decidirá sobre la inconstitucionalidad de las leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos que por razón de fondo y de forma impugne ante ella cualquier persona.

Se advierte la amplitud con que está concebida la acción de inconstitucionalidad, manifiesta en las expresiones "demás actos", "razones de fondo o de forma" y "cualquiera persona".

A priori y como cuestiones de principio no es concebible que una Ley, para el caso la Ley 56 de 27 de diciembre de 1995, produzca el efecto de anular lo dispuesto en la Constitución.

En cuanto al Estado de indefensión en que se colocaría a la parte contratante por razón del ejercicio de la acción de inconstitucionalidad, cabe señalar que no se trata de la acción unilateral del Estado como parte contratante. En una acción de inconstitucionalidad se ventilan intereses públicos de un orden superior, expresados en la Constitución, que se supone del conocimiento de las partes contratantes. No se trata de la conducta que en función del desarrollo y cumplimiento del contrato observen las partes del mismo. La cuestión que se debate en la demanda de inconstitucionalidad debe referirse al orden constitucional, ponderado y establecido por la Corte Suprema de Justicia, a lo cual le es consubstancial el prestigio y la confianza en el ejercicio normal de sus atribuciones.

La decisión de mayoría cita en su respaldo el pronunciamiento de la Corte Suprema en la advertencia de inconstitucionalidad contra la cláusula del contrato celebrado entre el Estado y la Refinería Panamá, no admitida por el Pleno (Registro Judicial, mayo de 1993, página 126).

Este pronunciamiento no es pertinente, pues, se trata como en la propia decisión de mayoría lo expresa de una consulta de inconstitucionalidad, a diferencia del presente caso que es una demanda de inconstitucionalidad. No fue admitida por consideraciones relativas a la consulta, que consisten en que el texto constitucional establece la consulta en casos de "disposición legal o reglamentaria aplicable" (artículo 203), lo que repiten los artículos 2548 y 2549 del Código Judicial. De manera que de acuerdo con la interpretación de la disposición constitucional y las disposiciones legales, en ese caso de la Refinería Panamá no se admitió la consulta. Pero no se tuvo como razón de hecho y de derecho que se trataba de un contrato administrativo.

Otro precedente que se invoca es el de la sentencia del Pleno en la demanda de inconstitucionalidad interpuesta por la sociedad ESBA, S. A. (Registro Judicial, diciembre de 1994, página 117) contra la Resolución de Gabinete N° 723, del 6 de diciembre de 1993. La Sentencia invocó como fundamento para no admitir la demanda de inconstitucionalidad, que los señalamientos que se formulaban en ese caso no tenían rango constitucional, por la cual no debía utilizarse esa vía como medio de deslindar tales diferencias.

Tampoco en esta ocasión, pues, se trataba del criterio que sustenta la decisión de mayoría, en relación por la cual salvamos el voto.

Cuando la Corte se pronunció en un caso semejante al presente, lo hizo en el sentido de dar cabida a la acción. Este es el único punto que planteamos en este salvamento de voto. En aquella oportunidad, sobre el particular igual a la presente, se trataba del Contrato N° 37-87 celebrado entre la Dirección de Aeronáutica Civil y la Empresa Marriot In-flite Services de Panamá, S. A., de 26 de febrero de 1986. Demanda de inconstitucionalidad propuesta por la firma Forense Galindo, Arias y López actuando en nombre y representación del señor Idelfonso Riande Peña contra el vocablo "exclusivo" inserto en la cláusula Sexta de dicho Contrato (Registro Judicial, febrero de 1988, página 1).

La demanda fue admitida, el juicio de inconstitucionalidad cumplió el desarrollo que le es propio, y se le declaró inconstitucional el vocablo "exclusivo".

En conclusión, por las razones expuestas, no compartimos el criterio de que como cuestión de principio no proceden las demandas de inconstitucionalidad contra las cláusulas de un contrato en que es parte el Estado.

Respetuosamente salvamos el voto.

Fecha ut Supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA POR EL LIC. BORIS E. BARRIOS G. EN CONTRA DEL DECRETO N° 452 DE 10 DE OCTUBRE DE 1990 "POR EL CUAL SE ESTABLECE EL COBRO DE TASAS PARA ALGUNOS SERVICIOS QUE PRESTA EL MINISTERIO DE SALUD". MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licenciado **BORIS E. BARRIOS G.**, actuando en su propio nombre y representación, ha interpuesto demanda de inconstitucionalidad en contra del Decreto Ejecutivo N° 452 de 10 de octubre de 1990, publicado en la Gaceta Oficial N° 21,652 de 25 de octubre de 1990, "Por el cual se establece el cobro de tasas para algunos servicios que presta el Ministerio de Salud".

El demandante estima que las normas acusadas de inconstitucionalidad vulneran los artículos 48, 53 numeral 10 y 179 de la Constitución Nacional.

Corrido el traslado respectivo al señor Procurador General de la Nación, éste externó su opinión mediante Vista N° 364 de 21 de julio de 1992. En dicho documento, el Jefe del Ministerio Público indicó que la Corte ya se ha pronunciado sobre el decreto acusado en el presente negocio mediante fallo de 2 de julio de 1992, en el cual se declaró inconstitucional.

Por lo explicado, el Procurador aportó copia del fallo y solicitó a esta Corporación que se declare la sustracción de materia en esta causa.

Al analizar la situación planteada, observa la Corte que efectivamente, esta Corporación se ha pronunciado anteriormente con relación al decreto impugnado en el presente negocio. Veamos. En fallo de 2 de julio de 1992, bajo la ponencia del Magistrado RAÚL TRUJILLO MIRANDA, el Pleno de esta Corporación declaró inconstitucional el Decreto Ejecutivo N° 452 de 10 de octubre de 1990, manteniendo el criterio externado en el fallo que resolvió acción de amparo presentada por RICARDO MARTINELLI y CARMEN PERURENA. En dicho fallo estimó la Corte que el aludido decreto violenta los artículos 48, 274 y 153 numeral 10 de la Carta Magna, que consagran el principio de que no existe obligación de pagar contribución alguna o impuesto que no haya sido establecido por ley; además de que la competencia para fijar impuestos le corresponde a la Asamblea Legislativa.

La jurisprudencia de esta Corte ha reiterado que no es posible el examen de la constitucionalidad de materias que ya han sido objeto de pronunciamiento de fondo. En vista de que mediante las Sentencias mencionadas, la Corte Suprema de Justicia ha emitido una decisión sobre la constitucionalidad del Decreto Ejecutivo N° 452 de 10 de octubre de 1990, considera que debe abstenerse de emitir una decisión en el caso sub júdice, por haberse configurado el fenómeno jurídico conocido como "cosa juzgada", en virtud de lo dispuesto en el artículo 203 de nuestra Carta Magna, que establece que las decisiones sobre el control constitucional que pronuncie la Corte Suprema de Justicia tienen el carácter de finales, definitivas y obligatorias.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que en el presente negocio se ha producido el fenómeno jurídico de COSA JUZGADA CONSTITUCIONAL con relación al Decreto Ejecutivo N° 452 de 10 de octubre de 1990, publicado en la Gaceta Oficial N° 21,652 de 25 de octubre de 1990, "Por el cual se establece el cobro de tasas para algunos servicios que presta el Ministerio de Salud"; y en consecuencia ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD FORMULADA POR EL LICENCIADO JUAN ANTONIO LEDEZMA V. CONTRA LA SENTENCIA PJ-5 DE 5 DE JULIO DE 1989 EXPEDIDA POR LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y DECISIÓN N° 5 Y CONTRA EL EDICTO N° 139 JCD DE 16 DE AGOSTO DE 1989. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Licdo. JUAN ANTONIO LEDEZMA V., actuando en representación de la sociedad **REFRESQUERÍA LAS ABEJAS, S. A.**, ha presentado demanda de inconstitucionalidad contra la Sentencia PJ-5 fechada 5 de julio de 1989 expedida por la Junta de Conciliación y Decisión N° 5 contra el edicto de notificación N° 139-JCD de 16 de agosto de 1989.

El demandante acusa de inconstitucional la orden de hacer contenida en la Sentencia prenombrada, que dispuso en su parte resolutiva lo siguiente:

"En mérito de lo expuesto, la Junta de Conciliación y Decisión N°5, administrando justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, Declara Injustificado el Despido y condena a la empresa REFRESQUERÍA LAS ABEJAS, S. A., a pagar a favor de LUCINDA DELGADO, la suma de B/.1,093.23 (MIL NOVENTA Y TRES BALBOAS CON VEINTITRÉS CENTÉSIMOS), en calidad de prestaciones laborales desglosadas así: B/.85.09, (OCHENTA Y CINCO BALBOAS CON NUEVE CENTÉSIMOS), en concepto de Vacaciones Proporcionales; B/.14.89 (CATORCE BALBOAS CON OCHENTA Y NUEVE CENTÉSIMOS), en concepto de Décimo Tercer Mes Proporcional; B/.993.25 (NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES BALBOAS CON VEINTICINCO CENTÉSIMOS), en concepto de 25 semanas de Indemnización, más salarios caídos dejados de pagar desde la fecha del despido hasta la ejecutoria de la sentencia.

Las costa (sic) se fijan en un 10% del total de la condena."

El Licenciado **LEDEZMA** también acusa de inconstitucional el acto de notificación de la referida sentencia, practicado mediante el Edicto N° 139-JCD fijado por la Secretaría de las Juntas de Conciliación y Decisión el día 16 de agosto de 1989 y desfijado el día 18 de agosto de 1989.

Estima el apoderado judicial de la sociedad demandante que las resoluciones judiciales por él impugnadas han infringido el artículo 32 de la Constitución Política en forma directa. En cuanto a la Sentencia, indica que la misma no siguió las normas del debido proceso y pretermitió el trámite especial de fallar en un plazo no mayor de tres (3) meses, a partir de la presentación de la demanda, tal como lo exige el artículo 218 del Código de Trabajo; además, de haber omitido la valoración y debida ponderación de las probanzas aportadas.

Respecto al edicto N° 139-JCD de 16 de agosto de 1989, manifiesta que viola el artículo 32 de la Constitución, pues a través del mismo se notificó indebidamente a la empresa demandada de la sentencia que se dictó el cinco (5) de julio de 1989, un (1) mes y once (11) días después de estar paralizado el proceso. Con esto se dejó en indefensión a la demandada, y se le imposibilitó además para apelar ante los Tribunales Superiores. Llama la atención el demandante sobre que dicha notificación debió hacerse personalmente y no por edicto.

Mediante Vista N° 27 PLENO de cinco (5) de abril de 1991, el Procurador General de la Nación Encargado, se refirió a las pretensiones de la demanda que nos ocupa. Luego de un análisis sobre los antecedentes del proceso y los problemas económico procesales del despido laboral, el Jefe del Ministerio Público sostuvo que, si bien es cierto, le asiste la razón al demandante al tachar de inconstitucional la Sentencia impugnada en razón de la demora de más de tres (3) meses en su expedición, no es posible reconocer esta circunstancia, pues no existen constancias en el expediente de la fecha en que la demandante, señora **LUCINDA DELGADO**, presentó la demanda laboral. Lo anterior, sigue diciendo el Procurador, impide a la Corte aceptar el vicio alegado, pues la falta de prueba sobre ese acto procesal no permite aseverar que la Sentencia se dictó después del plazo legalmente establecido.

Con relación al edicto de notificación de la Sentencia, el Procurador opina que si bien es cierto, el artículo 11 de la Ley N° 7 de 1975 (conforme al texto anterior a la reforma de la Ley 44 de 1995) establece que "Sólo se notificará personalmente el traslado de la reclamación, que contendrá la fecha de la audiencia"; esta norma no es terminante en cuanto a que lo único que se notifica personalmente es el traslado de la demanda, pues el inciso 2° del artículo 10 de esa misma Ley tiene otra norma de notificación personal que trata de la decisión que se toma al finalizar la audiencia y que debe ser notificada a las partes en el acto. No es verdad entonces, que la notificación de la sentencia pueda hacerse por edicto, en opinión del Procurador; además, la regla general en materia laboral lo es el artículo 877 del Código de Trabajo que establece la obligación de notificar personalmente "la sentencia o auto que ponga fin al proceso en primera instancia". El demandante ha probado que la Sentencia de 5 de julio de 1989 fue notificada el 16 de agosto del mismo año, es decir, más de un mes después de estar paralizado el proceso; esta práctica está vedada por el literal a) del artículo 877 del Código de Trabajo, ya que la notificación de las sentencias de primera instancia debe hacerse personalmente, porque se trata de una garantía procesal que evita sorpresas a las partes. Por ello, el Procurador comparte el criterio del demandante en cuanto a que la notificación por edicto de la sentencia, infringió las normas legales mencionadas y violó las garantías constitucionales del debido proceso.

En esta etapa, le corresponde al Pleno, confrontar la resolución atacada con las disposiciones constitucionales señaladas por REFRESQUERÍA LAS ABEJAS S. A., por conducto de su apoderado, como infringidas, a lo que procedemos de inmediato.

La Corte estima oportuno, recordar que en innumerables pronunciamientos respecto al contenido del artículo 32 de la Constitución Política de la República, se ha mantenido el criterio de que esta norma contempla a favor de todo ciudadano tres garantías que deben ser observadas permanente e invariablemente en todo proceso. Estas son, a saber: a) el juzgamiento por autoridad competente; b) el cumplimiento de todos los trámites legales establecidos, y; c) la unicidad en el juzgamiento por la misma causa.

En el caso que nos ocupa, la acusación de infracción se dirige hacia el segundo de los supuestos mencionados, es decir, una supuesta inobservancia del cumplimiento de los trámites establecidos para este tipo de proceso.

Veamos primeramente la Sentencia que se acusa de inconstitucional; a la que el demandante básicamente le formula dos cargos: a) haberse ponderado indebidamente las probanzas aportadas; b) no haberse dictado dentro de los tres (3) meses a partir de la presentación de la demanda, término fijado por el artículo 218 del Código de Trabajo.

Respecto al primer cargo, es jurisprudencia de esta Corte, que la evaluación que de las pruebas hace el juzgador, no es susceptible de ser impugnada dentro de un proceso constitucional, sino más bien a través de los recursos que a tal efecto establece la ley (apelación, casación, etc). "La sentencia no se torna inconstitucional por el solo hecho de haberse dejado de apreciar una prueba o por error en la interpretación de la Ley. Tampoco deviene en inconstitucional, si la actividad valorativa del Tribunal, mostrada en la motivación, conduce a un trato incorrecto de los hechos desde el punto de vista de la Ley sustancial." DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR AGUSTÍN SELLHORN Y EL ARTE HISPANO, S. A., MAG. PONENTE: DILIO ARCIA TORRES, MAYO 2 DE 1989.

Veamos ahora el segundo cargo que se le formula a la sentencia bajo examen, esto es, no haberse dictado dentro de los tres (3) meses a partir de la presentación de la demanda.

Sobre este aspecto, debemos manifestar que, al igual que el anterior cargo, existen numerosos fallos de esta Corporación que han fijado el criterio de que la demora en la emisión de la sentencia no dice relación con el cumplimiento de trámites procesales esenciales de todo proceso y que constituyen garantías de defensa de las partes. La demora en dictar una resolución judicial no afecta las garantías del debido proceso; constituye sólo en algunos casos de extrema morosidad, una irregularidad en cuanto a los términos que deben cumplirse para dictar las diferentes resoluciones judiciales, dentro de procesos jurisdiccionales.

Por otro lado, coincidimos con el criterio expresado por el Procurador General de la Nación, en cuanto a que no es posible determinar si efectivamente la Junta de Conciliación incumplió o no con el término de tres meses para dictar la sentencia, puesto que no hay constancias en el expediente bajo examen, de la fecha en que LUCINDA DELGADO presentó la demanda laboral.

Lo anteriormente señalado lleva al Pleno a no aceptar los cargos de inconstitucionalidad que se le imputan a la Sentencia de la Junta N° 5, teniendo como base del concepto de la infracción, la indebida valoración por parte de la Junta, de las pruebas presentadas o aducidas por la recurrente, así como también la demora en su emisión.

Ahora bien, respecto a la inconstitucionalidad del edicto de notificación de la Sentencia PJ-5 de 5 de julio de 1989, consta en el expediente que el mismo fue fijado el día 16 de agosto de 1989 y desfijado el 18 de agosto del mismo año; es decir, un (1) mes y once (11) días después de emitida la sentencia.

A la fecha de presentación de la demanda de inconstitucionalidad que nos ocupa (25 de septiembre de 1989), así como al momento de emitirse la Vista del Procurador (5 de abril de 1991) el artículo 11 de la Ley N° 7 de 1975 era del tenor siguiente: "**Sólo se notificará personalmente** el traslado de la reclamación, que contendrá la fecha de la audiencia. Esta notificación se hará a ambas partes". Este artículo fue subrogado por el artículo 69 de la Ley 44 de 1995, que reza: "A la parte demandada y demandante se les notificará personalmente la resolución que ordena el traslado de la demanda, la cual también contendrá la fecha de audiencia."

Como se observa, el legislador consideró los inconvenientes que produjo la expresión "sólo se notificará personalmente", que al interpretarse restrictivamente, ignoraba otras disposiciones del Código de Trabajo que obligan a la notificación personal de las partes. A esas disposiciones hace alusión el Procurador cuando menciona el artículo 10 de la Ley N° 7 de 1975 y el 877 del Código de Trabajo.

Con la modificación del artículo 11 de la Ley N° 7 de 1975 se amplía el compás para las decisiones laborales que deban ser notificadas personalmente y se corrige la deficiencia de la norma; sin embargo, ya ésta Corte con anterioridad había sentado jurisprudencia en ese sentido, supliendo la carencia de la norma, y reconociendo que, en efecto, no solo se debía notificar personalmente la resolución que ordena el traslado de la demanda, sino también

la sentencia emitida en primera instancia y la que se emitiera después de un (1) mes de estar paralizado el proceso.

La modificación del artículo en cuestión no viene sino a reforzar lo que ya jurisprudencialmente se había establecido, de modo que la situación procesal en el caso sub-júdice es la misma, y debemos coincidir tanto con el demandante como con el Procurador en que, efectivamente, el edicto de notificación N° 139-JCD de 16 de agosto de 1989 es violatorio de las garantías consagradas en el artículo 32 de nuestra Carta Magna, pues fue emitido a un (1) mes y once (11) días de estar paralizado el proceso, privando así al condenado de la oportunidad de recurrir contra la resolución notificada. La notificación de la sentencia debió hacerse personalmente, según lo dispone el artículo 877 del Código de Trabajo, disposición legal que concretiza lo dispuesto en el artículo 32 de la Constitución.

Finalmente, la Corte considera que en el presente caso, con la notificación por edicto de la sentencia, más de un (1) mes luego de proferida, se ha impedido que la parte afectada por ella, pueda ser oída en segunda instancia, por vía del recurso de apelación, afectándole su derecho de defensa, ya que la notificación atacada no se hizo de acuerdo con la tramitación legal respectiva y aplicando las normas legales pertinentes.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES INCONSTITUCIONAL la Sentencia PJ-5 de 5 de julio de 1989 expedida por la Junta de Conciliación y Decisión N° 5 dentro del proceso promovido por LUCINDA DELGADO contra REFRESQUERÍA LAS ABEJAS, S. A.; y QUE ES INCONSTITUCIONAL la notificación de dicha sentencia mediante el edicto N° 139-JCD fijado el 16 de agosto de 1989 y desfijado el 18 de agosto del mismo año.

Notifíquese y Publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ CON SALVAMENTO DE VOTO)
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO
RAFAEL A. GONZÁLEZ

Disiento de la decisión de mayoría, en lo atinente a la declaratoria de inconstitucionalidad de la notificación de la sentencia PJ-5 de 5 de julio de 1989, dictada por la Junta de Conciliación y Decisión N° 5, toda vez que el artículo 10 de la Ley N° 7 de 1975 dispone una notificación especial para los fallos de las Juntas de Conciliación y Decisión, que incluyen la notificación por edicto.

La norma reza de la siguiente manera:

"ARTÍCULO 10.
...
Cuando la decisión se adopte fuera de la audiencia o una de las partes no hubiera comparecido, la notificación se hará mediante edicto que permanecerá fijado por 48 horas en el Despacho donde se celebró la audiencia." (Subraya de la Corte).

En este caso, la decisión se adoptó fuera de la audiencia, hecho que facultaba a la Junta de Conciliación y Decisión N° 5 para notificar por edicto, tal como lo hizo.

Por ello no se puede considerar que se dejó en indefensión al impugnante, y por lo tanto, el edicto de notificación N° 139-JCD del 16 de agosto de 1989,

no es inconstitucional.

Así de esta manera, salvo respetuosamente el voto.

Fecha Ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE EL DECRETO EJECUTIVO N° 476 DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 1995 (SOBRE INDULTOS) (VER EXPEDIENTES CON NÚMEROS 174-96; 334-96; 427-96; 646-96; 656-96; 659-96; 784-95; 800-95; 841-95; 801-95; 881-95; 900-95; 575-96; 812-96; 932-95; 939-95; 958-95; 991-95; 1001-95; 1002-95; 1003-95; 1007-95; 1023-95; 1024-95; 44-96; 48-96; 53-96; 78-96; 88-96; 89-96; 137-96 Y 173-96). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Los FISCALES SEXTO, SÉPTIMO, SEGUNDO, PRIMERO, CUARTO, QUINTO, PRIMERO, OCTAVO DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ; la firma forense MORGAN & MORGAN; el FISCAL PRIMERO DEL CIRCUITO DE CHIRIQUÍ; la FISCALÍA SEGUNDA DELEGADA DE LA PROCURADURÍA GENERAL; la FISCALÍA TERCERA DEL CIRCUITO DE VERAGUAS; la PERSONERÍA QUINTA MUNICIPAL DEL DISTRITO DE PANAMÁ y la FISCALÍA TERCERA DEL CIRCUITO DE CHIRIQUÍ, presentaron escrito de Advertencia de Inconstitucionalidad, contra los numerales 1°, 2° y 3° del Artículo 1 del Decreto Ejecutivo N° 476 de 7 de septiembre de 1995, por medio del cual el ENCARGADO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, señor TOMÁS GABRIEL ALTAMIRANO DUQUE decretó INDULTO a favor de los ciudadanos "que resulten investigados, sindicados, procesados o condenados, conforme a supuestas conductas transgresoras de la Ley, por la Comisión de Delitos contra el Honor, contra la Libertad, contra la Personalidad Jurídica del Estado, contra el Patrimonio o contra la Administración Pública; ya sea que los procesos se encuentren en su fase sumaria, plenaria o con sentencia condenatoria; con auto de enjuiciamiento, o sin dictarse el auto de enjuiciamiento, sin que se hubiese verificado Audiencia; o bien que se encuentren o no en grado de Apelación, Acusación o en cualquier otro trámite procesal".

Las advertencias en estudio guardan relación con los procesos que se le siguen a las personas que se mencionan a continuación, en donde se indicarán las acciones penales y el status de cada uno de ellos, al momento de que se dictó el acto objeto de la presente advertencia de inconstitucionalidad:

1. VIELKA E. BELLIDO S., el Juzgado Décimo Cuarto del Primer Circuito Judicial, Penal, abrió causa criminal en su contra por el delito contra la Fe Pública, Contra la Seguridad Colectiva y contra el Patrimonio.

2. SANDRA BRUGIATTI, el Juzgado Quinto de Circuito Penal, abrió causa criminal en su contra por el delito de Peculado en perjuicio del Instituto de Seguro Agropecuario.

3. ALEXANDER NEIL FERGUSON VÁSQUEZ, el Juzgado Tercero de Circuito Penal abrió causa criminal en su contra por el delito de Peculado, Concusión y Exacción. Se encontraba pendiente de audiencia oral señalada para el 31 de octubre de 1995.

4. VIRGINIA BARRERA DE VELÁZQUEZ, el Juzgado Quinto de Circuito Penal llamó a juicio por el delito de Peculado en perjuicio del Instituto de Seguro Agropecuario, encontrándose pendiente la notificación de la apelación.

5. JULIO CÉSAR SHAIK MUÑOZ, el Juzgado Segundo de Circuito Penal, abrió causa criminal en su contra por el delito contra la Administración Pública en

perjuicio del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

6. IGNACIO PLATA RIVERA, el Juzgado Segundo de Circuito Penal abre causa criminal en su contra por el delito contra la Administración Pública en perjuicio del Banco Nacional, (expediente N° 900-95) En este caso se acumularon los procesos penales N° 575-95 y 812-96, por el mismo delito. El primer caso tiene fecha señalada para audiencia oral: 15 de noviembre de 1995. El segundo negocio se encuentra pendiente de notificación del auto de proceder, contra el cual varias de las partes apelaron. El tercer proceso penal se encuentra pendiente de resolver la apelación.

7. JUSTINO CORRALES, el Juzgado Segundo de Circuito Penal le sigue proceso por el supuesto delito de calumnia e injuria.

8. ABELARDO CRUZ ÁBREGO, el Juzgado Tercero de Circuito Penal mediante Auto N° 50 de 25 de agosto de 1992, abre causa criminal, siendo confirmada en apelación por el Segundo Tribunal Superior.

9. JESÚS MARÍA GEORGE PALMA, fue procesado y condenado por el delito contra la libertad individual en perjuicio de CARLOS SMITH. El expediente se encontraba en la Sala Segunda Penal de la Corte Suprema de Justicia.

10. JUAN MAGDALENO VALERÍN, el Juzgado Cuarto de Circuito Penal, le instruye proceso penal por el delito contra la Administración Pública (Peculado), en perjuicio de los moradores del Distrito de Remedios.

11. ANELDO AROSEMENA BENAVIDES, se le siguen varios procesos por el supuesto delito Contra el Honor (Calumnia e Injuria), en perjuicio de CELSO LUIS FERNÁNDEZ ESPINA (Juzgado Décimo de Circuito Penal); MOISÉS MIZRACHI (Juzgado Décimo); MARCELO AURELIO DE LEÓN PEÑALBA (Juzgado Décimo Cuarto); CELSO LUIS FERNÁNDEZ ESPINA (Juzgado Décimo Segundo); CARLOS H. CUESTAS (Juzgado Décimo Tercero; y, MOISÉS DAVID MIZRACHI (Juzgado Séptimo de Circuito Penal).

12. JAIME PADILLA BELIZ, se le siguen varios procesos penales por el supuesto delito Contra el Honor (Calumnia e Injuria) en perjuicio de RUBÉN BLADES, en el Juzgado Décimo de Circuito Penal pendiente de calificar el mérito legal; CARLOS H. CUESTAS, en el Juzgado Décimo Tercero, sumarias en investigación en el Ministerio Público.

13. IRMA ESPINOSA DE ZAMBRANO Y DAVID RODRÍGUEZ, el Juzgado Quinto de Circuito Penal le instruye sumarias por le delito contra la Administración Pública en perjuicio del Instituto de Seguro Agropecuario.

14. LUIS A. RODRÍGUEZ, se le sigue proceso penal por el supuesto delito contra la Administración Pública en perjuicio del Banco de Desarrollo Agropecuario.

15. BLAS JULIO, el Juzgado Décimo de Circuito Penal le sigue proceso penal por el supuesto delito Contra el Honor en perjuicio de FRANCISCO SÁNCHEZ CÁRDENAS; y, en el Juzgado Séptimo de Circuito se le sigue el mismo delito en perjuicio de MOISÉS DAVID MIZRACHI.

16. PEDRO MARCOS JUSTINES, el Juzgado Noveno de Circuito Penal abrió causa criminal en su contra mediante Auto N° AE-18 de 11 de marzo de 1994, por el delito de Peculado, Corrupción de funcionarios públicos y Asociación Ilícita para Delinquir.

17. BENJAMÍN SOLÍS BRAVO, el Juzgado Segundo de Circuito Penal de Veraguas, condenó al referido señor a la pena de dos años de prisión y otra accesoria, mediante Resolución de 25 de agosto de 1995, por el delito Contra la Libertad Individual en perjuicio de FERNANDO QUEZADA.

18. URCILA VEGA DE CONSTABLE, se encuentra pendiente de audiencia en el Juzgado Segundo de Circuito Penal, ya que la misma fue suspendida el 2 de mayo de 1996. Delito perseguido: Contra la Administración Pública en perjuicio del MIPE.

19. MODESTO LÓPEZ, el Juzgado Décimo Segundo de Circuito Penal abrió causa criminal en su contra mediante Auto de 13 de enero de 1994, por el Delito Contra la Administración Pública, en perjuicio del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

20. LUIS GASPAR SUÁREZ, se encuentra pendiente de la calificación del mérito legal del sumario, conforme la Vista Fiscal N° 287 de 28 de abril de 1995.

21. DAVID DANIEL VICTORIA Y ANELDO AROSEMENA, el Juzgado Décimo Segundo abre causa criminal mediante Auto N° 77 de 12 de octubre de 1994, por el delito Contra el Honor (Calumnia e Injuria) en perjuicio de LUIS FERNÁNDEZ ESPINA.

El Magistrado Sustanciador de las acciones antes indicadas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESOLVIÓ ACUMULAR las Advertencias de Inconstitucionalidad propuestas contra el Decreto Ejecutivo N° 476 de 7 de septiembre de 1995, por medio de Resolución de 17 de octubre de 1996, tomando en consideración que todas las advertencias fueron interpuestas contra el Decreto Ejecutivo antes mencionado.

Sostienen los advertidores que el artículo primero, en sus numerales primero, segundo y tercero del Decreto Ejecutivo N° 476 del 7 de septiembre de 1995, infringe el artículo 179, numeral 12 de la Constitución Política de la República de Panamá, en virtud de que esta disposición constitucional sólo autoriza al Presidente de la República a otorgar perdón presidencial (INDULTO) por delitos políticos, que no es el caso de ninguno de los encausados en los procesos señalados con anterioridad.

En fallo dictado por esta Corporación de Justicia, el 27 de septiembre de 1996, y en el cual se advertía la Inconstitucionalidad del Decreto Ejecutivo N° 476, la Procuradora de la Administración al emitir su Vista de 3 de mayo de 1996, lo hizo en los siguientes términos:

> "... en la mencionada advertencia de inconstitucionalidad el funcionario que administra justicia, no se encuentra ante una disposición legal o Reglamentaria por aplicar a un caso concreto, por la sencilla razón que el Decreto N° 476 ya mencionado, no encaja en esa categoría ...".

La representante de la Procuraduría de la Administración, concluyó que la referida advertencia no es viable, por no cumplir con lo preceptuado en las normas constitucionales que regulan dicha materia.

Por su parte, el Pleno de la Corte Suprema al proferir el fallo antes comentado, mantuvo que "La advertencia de inconstitucionalidad a través de la consulta, como una de las vías de provocar el control o guarda constitucional, persigue depurar el sistema jurídico eliminando los preceptos legales o reglamentarios que infrinjan el Texto Fundamental, previniendo que tales disposiciones lleguen a cimentar resoluciones jurídicamente".

Asimismo, reitera lo mantenido en diferentes fallos, en el sentido de que la advertencia de inconstitucionalidad "al tenor de lo que disponen los artículos 2545 numeral 2 y 2549 del Código Judicial, debe referirse a una norma "aplicable" al proceso que se ventila ante el Tribunal correspondiente, o sea, de una disposición que va a ser aplicada al caso, no así a una norma que ya fue objeto de aplicación". (Sentencia de 27 de enero de 1995, Registro Judicial Enero 1995, p. 140 y sentencia de 27 de septiembre de 1996).

Además de lo antes señalado, la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que "la advertencia de inconstitucionalidad se limita única y exclusivamente a impugnar las disposiciones legales o reglamentarias aplicables al caso bajo estudio y que las consultas sobre la supuesta inconstitucionalidad de la norma legal o reglamentaria deben formularse antes de que tal disposición sea aplicable, siendo extemporánea la advertencia en el evento de que la referida norma haya sido objeto de aplicación por parte del juzgador". Ello es comprobable en los fallos de 27 de octubre de 1981; fallo de 14 de enero de 1991, inserto en el Registro Judicial de Enero 1991, p. 26; fallo de 28 de octubre de 1991 contentivo en el Registro Judicial de Octubre de 1991, p. 134 y el fallo más

reciente de 27 de septiembre de 1996.

Como lo mantuvo esta Superioridad en el fallo de 27 de septiembre de 1996, tantas veces comentado, la consulta o advertencia de inconstitucionalidad debe cumplir los presupuestos que se enumeran a continuación, haciendo la salvedad, que a falta de uno de ellos, resultaría a todas luces improcedente el mismo. Veamos:

1° Que se formule contra una norma que ha de aplicarse por el Juzgador en el proceso de que se trate, norma ésta, de rango legal o reglamentaria. que se refute inconstitucional, por parte del juzgador o del advirtiente, y,

2° Que la norma cuestionada no haya sido aplicada.

Ahora bien, la consulta objeto de estudio, guarda relación con la inconstitucionalidad del artículo primero, numerales primero, segundo y tercero del Decreto Ejecutivo N° 475 de 7 de septiembre de 1995.

En las advertencias de inconstitucionalidad acumuladas se sostiene la infracción del artículo 179, numeral 12 de la Constitución Política de la República de Panamá, que es del tenor siguiente:

> "ARTÍCULO 179. Son atribuciones que ejerce el Presidente de la República con la participación del Ministro respectivo. ...
>
> 12. Decretar indultos por delitos políticos, rebajar penas y conceder libertad condicional a los reos en delitos comunes. ...".

De la norma transcrita salta a la vista la potestad constitucional que tiene el Presidente de la República al dictar el Decreto Ejecutivo, como lo es el caso en estudio, el Decreto Ejecutivo N° 476 de 7 de septiembre de 1995, el cual no tiene carácter legal ni reglamentario. De manera más ilustrativa, nos permitimos citar en el fallo dictado por esta Corporación de Justicia el 15 de febrero de 1996, Registro Judicial Febrero de 1996, fojas 106-107, a los profesores GARCÍA DE ENTERRÍA y RAMÓN FERNÁNDEZ, quienes al realizar una distinción entre actos y reglamentos, señalan lo siguiente:

> "La distinción más obvia entre el Reglamento y el acto es que aquél forma parte del ordenamiento jurídico, en tanto que el acto es algo "ordenado", producido en el seno del ordenamiento y por éste previsto como simple aplicación del mismo".

Más adelante, los citados autores señalan sobre el mismo concepto, lo siguiente:

> "El acto administrativo, sea singular o general su círculo de destinatarios, se agota en su simple cumplimiento; para un nuevo cumplimiento habrá que dictar eventualmente un nuevo acto ... En cambio, la norma ordinamental no se consume con su cumplimiento singular, antes bien se afirma, se consolida, se mantiene y es susceptible de una pluralidad indefinida de cumplimientos; sigue "ordenando" la vida social desde su superioridad.
>
> (GARCÍA DE ENTERRÍA/RAMÓN FERNÁNDEZ , "CURSO DE DERECHO ADMINISTRATIVO", TOMO II, págs. 201 y 203, Tomo II, 1992)."

Como consecuencia de lo anterior, el Pleno reitera que la advertencia de inconstitucionalidad sólo procede contra una disposición legal (leyes formales o materiales) o reglamentaria, por tal motivo no cabe contra resoluciones o actuaciones de funcionarios, como lo es el INDULTO dictado por el señor TOMÁS ALTAMIRANO DUQUE en calidad de Encargado de la Presidencia de la República de Panamá, acto éste que no tiene carácter de una norma o disposición de rango legal o reglamentaria, por tanto, no es susceptible de ser advertida su posible inconstitucionalidad.

Lo expresado en párrafos que anteceden, no obsta para que las partes

interesadas promuevan la acción autónoma de inconstitucionalidad. En los casos aquí acumulados, en los que se sigue proceso penal contra VIELKA E. BELLIDO S., en su contra el Juzgado Décimo Cuarto de Circuito Penal, abrió causa criminal por delito contra la Fe Pública, la Seguridad Colectiva y contra el Patrimonio; SANDRA BRUGIATTI, se le sigue causa criminal en el Juzgado Quinto de Circuito Penal por el delito de Peculado; ALEXANDER NEIL FERGUSON VÁSQUEZ, el Juzgado Tercero de Circuito Penal abrió causa criminal en su contra, siendo confirmada por el Segundo Tribunal Superior y se encuentra pendiente de audiencia oral, se le sigue el delito por Peculado, Concusión y Exacción; VIRGINIA BARRERA DE VELÁZQUEZ, el Juzgado Quinto de Circuito Penal dictó auto de llamamiento a juicio por el delito de Peculado, se encuentra pendiente de notificación; JULIO CÉSAR SHAIK MUÑOZ, el Juzgado Segundo de Circuito Penal, abrió causa criminal por el delito contra la Administración Pública; IGNACIO PLATA RIVERA, en este caso se han acumulado tres procesos penales que se le siguen por delito contra la Administración Pública; JUSTINO GONZÁLEZ, el Juzgado Segundo de Circuito Penal, le sigue proceso penal por el delito de Calumnia e Injuria; ABELARDO CRUZ ÁBREGO, el Juzgado Tercero de Circuito Penal, abrió causa criminal y fue confirmada por el Segundo Tribunal Superior por el delito de Peculado; JESÚS MARÍA GEORGE PALMA, fue procesado y condenado, encontrándose el expediente en la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia por el delito contra la libertad individual en perjuicio de CARLOS SMITH; JUAN MAGDALENO VALERÍN, el Juzgado Primero de Circuito Penal de Chiriquí sigue proceso penal por delito contra la Administración Pública; ANELDO AROSEMENA BENAVIDES, se le siguen cuatro procesos por delito contra el Honor en el Juzgado Décimo, Décimo Cuarto, Décimo Segundo, Décimo Tercero y Séptimo de Circuito Penal; JAIME PADILLA BELIZ, se encuentra pendiente de calificación el mérito legal en el Juzgado Décimo por delito contra el honor; IRMA ESPINOSA DE ZAMBRADO y DAVID RODRÍGUEZ, se les instruye sumarias en el Juzgado Quinto de Circuito Penal por delito contra la Administración Pública; LUIS A. RODRÍGUEZ, el Juzgado Quinto de Circuito Penal le sigue proceso penal por delito contra la Administración Pública; BLAS JULIO, se le sigue proceso penal en los Juzgados Décimo y Séptimo de Circuito Penal por delito contra el honor; PEDRO MARCOS JUSTINES, el Juzgado Quinto y Noveno de Circuito Penal, le siguen proceso penal por los delitos de Peculado, Corrupción de Funcionarios Públicos y Asociación Ilícita para Delinquir; BENJAMÍN SOLÍS BRAVO, el Juzgado Segundo de Circuito Penal de Veraguas lo condenó a la pena de dos años de prisión y otra accesoria, mediante resolución de 25 de agosto de 1995 por delito contra la libertad individual en perjuicio de Fernando Quezada; URCILA VEGA DE CONSTABLE, el Juzgado Segundo de Circuito Penal, lo llamó a responder criminalmente mediante auto de 13 de enero de 1994, por delito contra la Administración Pública; MODESTO LÓPEZ, el Juzgado Décimo Segundo de Circuito Penal le sigue proceso penal por delito contra la Administración Pública; LUIS GASPAR SUÁREZ, el Juzgado Cuarto Municipal le sigue proceso penal y se encuentra pendiente de calificación del mérito legal del sumario, por delito contra la Administración Pública; DAVID DANIEL VICTORIA, se le sigue proceso penal en el Juzgado Décimo Segundo abrió causa criminal en su contra por delito contra el honor; ROBERTO EISEMMAN JR., mediante Auto N° 401 de 7 de noviembre de 1991, el Juzgado Quinto de Circuito Penal, ordenó la suspensión del proceso que se le sigue por delito contra el honor; CARLOS SINGARES, se sigue proceso penal en el Juzgado Décimo Tercero por el delito de calumnia e injuria; ABELARDO CRUZ ÁBREGO, el Juzgado Tercero de Circuito Penal abrió causa criminal en su contra por el delito de peculado y se encuentra pendiente de celebrar audiencia; MATILDE VILLARREAL DE BARUCO, el Juzgado Tercero de Circuito Penal de Chiriquí le sigue proceso penal por el delito de peculado, los despachos judiciales se limitan a declarar extinguida la acción penal con base al indulto decretado a favor de las personas antes mencionadas, lo que ubica la actividad jurisdiccional de cada Tribunal, en la etapa procesal de ejecución de la medida.

Desde otra faz y con independencia de la naturaleza del contenido del Decreto impugnado, éste ha sido aplicado por el Juzgador en la instancia correspondiente, por lo que, ante tal circunstancia, resulta notoriamente improcedente la acción constitucional propuesta, dado que en jurisprudencia constante mantenida por esta Corporación de Justicia, se ha señalado la improcedencia de la advertencia cuando el acto que ha de aplicarse en la controversia, ya ha sido aplicado en la instancia correspondiente. Nos permitimos citar al respecto, las sentencias de 9 de febrero de 1995, Registro Judicial Octubre de 1995, f. 148: sentencia de 27 de enero de 1995, Registro Judicial

Enero 1995, f. 140: sentencia de 27 de octubre de 1971; de 14 de enero de 1991, inserto en el Registro Judicial Enero 1991, f. 26; de 28 de octubre de 1991, contentivo en el Registro Judicial de Octubre 1991, f. 134, por citar unos cuantos casos.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NO VIABLE la Advertencia de Inconstitucionalidad del artículo primero, en sus numerales primero, segundo y tercero del Decreto Ejecutivo N° 476 de 7 de septiembre de 1995, formulados por los Fiscales Sexto, Séptimo, Segundo, Primero, Cuarto, Quinto, Octavo del Primer Circuito Judicial de Panamá; la firma forense MORGAN & MORGAN; Fiscal Primero y Tercero del Circuito de Chiriquí; Fiscalía Segunda Delegada de la Procuraduría General de la República; Fiscalía Tercera del Circuito de Veraguas; Personería Quinta Municipal del Distrito de Panamá, dentro de los procesos penales seguidos a los señores: VIELKA E. BELLIDO S., SANDRA BRUGIATTI, ALEXANDER NEIL FERGUSON VÁSQUEZ, VIRGINIA BARRERA VELÁZQUEZ, JULIO CÉSAR SHAIK MUÑOZ, IGNACIO PLATA RIVERA, JUSTINO GONZÁLEZ, ABELARDO CRUZ ÁBREGO, JESÚS MARÍA GEORGE PALMA, JUAN MAGDALENO VALERÍN, ANELDO AROSEMENA BENAVIDES, JAIME PADILLA BELIZ, IRMA ESPINOSA DE ZAMBRANO y DAVID RODRÍGUEZ, LUIS A. RODRÍGUEZ, BLAS JULIO, PEDRO MARCOS JUSTINES, BENJAMÍN SOLÍS BRAVO, URCILA VEGA DE CONSTABLE, MODESTO LÓPEZ, LUIS GASPAR SUÁREZ y DAVID DANIEL VICTORIA.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ
(CON SALVAMENTO DE VOTO) (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ

Anteriormente salvé el voto en situación jurídica idéntica conceptualmente a la presente. Repito lo manifestado entonces.

El punto en que se apoya la negación de la consulta de inconstitucionalidad consiste en que el Decreto Ejecutivo N° 476 de 7 de septiembre de 1995 es un acto administrativo, que se agota con su cumplimiento. De acuerdo con lo que señala la resolución de mayoría, Pág. 9ª, "la advertencia de inconstitucionalidad sólo procede contra una disposición legal (leyes formales o materiales) o reglamentaria, por tanto no cabe contra resoluciones o actuaciones de funcionarios, como lo es el INDULTO dictado por el señor TOMÁS ALTAMIRANO DUQUE en calidad de Encargado de la Presidencia de la República, acto éste que no tiene carácter de una norma o disposición de rango legal o reglamentaria, por tanto, no es susceptible de ser advertida su posible inconstitucionalidad."

No comparto ese criterio. La razón de la frase "disposición legal o reglamentaria" empleada en el artículo 203 de la Constitución, y en los artículos 2548 y 2549 del Código Judicial, es evitar que cualquier actuación in procedendo o in judicando del negocio de que se trate, tenga una sustentación inconstitucional. En el caso de la aplicación del Decreto de Indulto, la decisión se apoyará enteramente en ese elemento de orden jurídico, cuya constitucionalidad debe obviamente ser examinada, inspirándose al hacerlo, más en el contenido substancial del orden jurídico, que en consideraciones formales. Este es el principio que envuelve el artículo 212, ordinal 2° de la Constitución: "El objeto del proceso es el reconocimiento de los derechos consignados en la Ley substancial".

Por otra parte, el control constitucional está concebido muy ampliamente. Son objeto de él "Leyes, decretos, acuerdos, resoluciones y demás actos ... por razones de fondo y de forma".

Hago referencia a otro salvamento de voto en el fallo del Pleno del 27 de

septiembre de 1996, que resolvió consulta de inconstitucionalidad.

Por las razones expuestas respetuosamente salvo el voto.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR SHIRLEY & DÍAZ EN REPRESENTACIÓN DEL SEÑOR JORGE E. ULLOA EN CONTRA DE LA FRASE "SIEMPRE QUE SU SEPARACIÓN DEL CARGO NO OBEDEZCA A LA COMISIÓN DE ALGUNA FALTA GRAVE EN EL EJERCICIO DE SU EMPLEO", CONTENIDA EN EL TERCER INCISO DEL ARTÍCULO 796 DEL CÓDIGO ADMINISTRATIVO, MODIFICADO POR LA LEY 5ª DE 1936 Y REFORMADA POR LA LEY 121 DE 6 DE ABRIL DE 1943. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La firma forense SHIRLEY & DÍAZ, a través del Licenciado TEÓFANES LÓPEZ A., actuando en nombre y representación del señor **JORGE E. ULLOA**, ha interpuesto demanda de inconstitucionalidad contra la frase "siempre que su separación del cargo no obedezca a la comisión de alguna falta grave en el ejercicio de su empleo", contenida en el inciso segundo del Artículo 796 del Código Administrativo, tal como fue modificado por la Ley 5 de 1936 y como quedó reformado por la Ley 121 de 6 de abril de 1943.

El demandante estima que la norma acusada de inconstitucional vulnera el artículo 66 de la Constitución Nacional, al establecer como condición para el ejercicio del derecho de vacaciones remuneradas de los empleados públicos, que su separación del cargo no obedezca a la comisión de alguna falta grave en el ejercicio de su empleo. Dicha condición, a juicio del demandante, no la establece la Constitución Nacional actual, ni ninguna de las que han regido en la República. El constituyente reconoce sin condición alguna ni limitación, el derecho de todo trabajador a vacaciones remuneradas, por tanto la frase acusada contradice al artículo 66 de la Constitución que hace obligatorio el reconocimiento de las vacaciones por parte del empleador para todos los empleados o trabajadores.

Corrido el traslado respectivo al señor Procurador General de la Nación, éste externó su opinión mediante Vista N° 60 de 18 de julio de 1991. En dicho documento, el Jefe del Ministerio Público indicó que al consagrar el legislador administrativo la frase "siempre que su separación del cargo no obedezca a la comisión de alguna falta grave en el ejercicio de su empleo", limitó el derecho a vacaciones remuneradas que le asiste al servidor público, y está atentando contra el espíritu filosófico del que se nutre el Artículo 66 de la Constitución Nacional. Agregó el Jefe del Ministerio Público que el derecho en cuestión aparece consagrado en nuestra Carta Magna con un criterio amplio y no restrictivo, como ha sido enfocado por el artículo 796 del Código Administrativo, de modo que la frase tachada de inconstitucional contiene efectivamente el vicio que le endilga el demandante. Finalmente, solicita que se declare la inconstitucionalidad de la frase impugnada.

Publicados los edictos que establece la ley en este tipo de negocios constitucionales, se abrió el compás para que quienes así lo desearan presentaran alegatos en la presente demanda.

SHIRLEY & DÍAZ sustentó en tiempo oportuno alegato de conclusión en el cual ratificó su interés en que se declare la inconstitucionalidad de la frase impugnada. Manifiesta que la frase contenida en el inciso segundo del artículo 796 del Código Administrativo señala una distinción, condición, requisito que la

Constitución Nacional no establece a los servidores públicos para que puedan gozar del derecho a vacaciones remuneradas. Este artículo, a juicio de los demandantes, ha sido a través de los años un instrumento de injusticias mediante el cual se ha privado a muchos trabajadores de su derecho a vacaciones, con base en la libre interpretación que se da respecto a lo que se entiende como "falta grave" o "falta leve".

También concurrió al proceso el Licenciado **WINSTON CHURCHILL JAMES**, apoderado judicial de los señores SERGIO MARÍN, TOMAS MORALES, CARLOS ARCHIBOLL, ENRIQUE JIMÉNEZ, GABINO YOUNG, MARICELA RODRÍGUEZ, ISMAEL CAMPBELL, JAIME LEGAL, CARLOS HENRY, DANIEL HEATH, MIGUEL MARTÍNEZ y LUIS MARTÍNEZ. El Licenciado JAMES indica en su escrito que la norma impugnada no explica qué se entiende por "falta grave"; que dicha frase colisiona de manera evidente con el artículo 22 de la Constitución Nacional, "por tanto que se presume que la falta grave puede desprenderse que se trata de un presunto delito cuando lo establecido como un requisito medular en el artículo 22 de la constitución (sic) es que se presuma la inocencia de las personas.". Opina que también riñe la frase impugnada con el artículo 32 de la Constitución Nacional, pues "se desprende entonce (sic) que se debe dar cumplimiento al debido proceso antesde (sic) que se emita una sanción considerada como supuesta falta grave y que no esta (sic) debidamente tipificado en el Código Administrativo en que consiste la falta grave.".

Al analizar la situación planteada, observa la Corte que, en efecto, entre el inciso tercero del artículo 796 del Código Administrativo y el artículo 66 de la Constitución Nacional existe una abierta contradicción que debe ser subsanada. No obstante, la frase impugnada no riñe con los principios consagrados en los artículos 22 y 32 de la Constitución Nacional, como ha querido hacer ver el Licenciado JAMES. Veamos, el párrafo tercero del artículo 66 infringido es del tenor siguiente:

> "Artículo 66. Además del descanso semanal, **todo trabajador** tendrá derecho a vacaciones remuneradas. (lo resaltado es nuestro)

Como se advierte, la norma supracitada no hace distinción alguna en cuanto a la calidad del trabajador que tendrá derecho a vacaciones remuneradas, sino más bien consagra dicho derecho a favor de TODOS los trabajadores sin limitación alguna.

De modo, pues, que el inciso tercero del artículo 796 del Código Administrativo deviene inconstitucional, por señalar una condición especial para que los empleados públicos puedan gozar de vacaciones remuneradas; esto es, que su destitución no obedezca a la comisión de una falta grave en el ejercicio de su empleo.

Lo anterior, se convierte en un impedimento para que los servidores públicos puedan gozar del derecho que a su favor consagra la Constitución y que debe estar por encima de las demás leyes que rigen en el país.

El derecho a vacaciones remuneradas ha sido defendido ya en otras ocasiones por esta Corte; veamos este fallo de 11 de agosto de 1970:

> "El derecho de vacaciones es universal; comprende tanto a empleados públicos como particulares, de tal manera que todas las leyes que regulen el ejercicio de ese derecho deben ser armoniosas con el principio contenido en el artículo 69 de la Constitución, y cuando el artículo 148 transcrito condiciona el derecho al pago de vacaciones a la circunstancia de que el miembro del personal docente o director de la escuela haya prestado servicios satisfactorios, está cercenando el derecho a disfrute de vacaciones pagadas que consagra el artículo 69 constitucional, como igualmente los derechos que concede el artículo 71 para la empleada grávida.". (la subraya es nuestra)

Además, en Sentencia de 11 de agosto de 1975 indicó respecto al derecho a vacaciones consagrado en ese entonces, por el artículo 65 de la Constitución:

> "Esta pauta constitucional recoge la concepción que la doctrina le otorga a este derecho eminentemente social, la cual nos indica que este instituto tiene como objeto básico la preservación de la salud del sector activo de la sociedad, puesto que por experiencia es sabido que no basta el descanso semanal para restablecer la capacidad de trabajo de una persona, sino que además necesita de las vacaciones anuales para poder restaurar su organismo física y mentalmente de la fatiga o desgaste producido por el trabajo.
>
> Por otra parte, este instituto consagrado en la Constitución Nacional, como uno de los derechos y garantías considerados mínimos a favor de los trabajadores, según lo establece en su artículo 74, impone el deber al legislador de establecer normas en su desarrollo, preservándolo como uno de los derechos cuyo ejercicio pleno o efectivo debe garantizarse. Por consiguiente, el **derecho a vacaciones remuneradas debe aparecer consignado en la norma ordinaria de modo que esté en armonía con los otros derechos sociales a fin de mantener su llena eficacia**. En otras palabras, las normas subalternas deben proporcionar fórmulas que en la reglamentación al derecho de vacaciones y en la relación de este instituto con los otros derechos sociales del empleado público, tales como licencia por enfermedad, licencia de gravidez, etc., no afecten el ejercicio de uno al otro, o se instituyan en forma que resulten incompatibles.". (la negrita es nuestra)

La frase impugnada, contenida en el inciso segundo del artículo 796 del Código Administrativo, infringe clara y directamente el artículo 66 de la Constitución Nacional, por tanto procede declararlo inconstitucional.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES INCONSTITUCIONAL la frase "siempre que su separación del cargo no obedezca a la comisión de alguna falta grave en el ejercicio de su empleo", contenida en el inciso tercero del Artículo 796 del Código Administrativo, modificado por la Ley 5 de 1936 y reformado por la Ley 121 de 6 de abril de 1943.

Notifíquese y Publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA DE INCONSTITUCIONALIDAD PROPUESTA POR EL LICDO. JUAN ANTONIO LEDEZMA VERGARA EN CONTRA DEL ARTÍCULO 1038 DEL CÓDIGO JUDICIAL Y LA RESOLUCIÓN N° 201-035 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INGRESO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO. MAGISTRADO PONENTE: JOSÉ MANUEL FAÚNDES. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Pendiente de decisión se encuentra demanda de inconstitucionalidad presentada el 18 de mayo de 1990 por el licenciado **JUAN ANTONIO LEDEZMA V.** con el objeto de que se declare que son inconstitucionales el artículo 1038 del Código Judicial y la Resolución 201-035 del 21 de mayo de 1987, de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

Es necesario aclarar que la norma sobre la que se solicitó la declaratoria

de inconstitucionalidad -el artículo 1038 del Código Judicial-, fue modificada por la Ley 15 de 1991. No obstante, resulta conveniente citar el texto de la norma en cuestión, aprobada por la Ley 29 de 1984 y modificada por la Ley 2 de 1986:

> "Artículo 1038. Las copias que se expidan fuera de proceso, las que se compulsen en caso de desglose y las que mande expedir la ley a costa del interesado, causará un derecho a favor del Tesoro Nacional por la suma de cincuenta centésimos (B/.0.50) de balboas por página o fracción de páginas.
>
> Por las certificaciones que se pidan fuera de proceso, se pagará un (B/.1.00) balboa.
>
> Todo secretario o empleado del juzgado debe dar recibo a los interesados de los derechos que cobre de conformidad con este artículo y expresar al pie del recibo la disposición específica que justifique los derechos cobrados.".

La norma constitucional que el recurrente considera violada es el artículo 198 de la Constitución Nacional, que es del tenor siguiente:

> "Artículo 198. La administración de justicia es gratuita, expedita e ininterrumpida.
>
> La gestión y la actuación de todo proceso se surtirá en papel simple y no estarán sujetas a impuesto alguno.
>
> Las vacaciones de los Magistrados, Jueces y empleados judiciales no interrumpirán el funcionamiento continuo de los respectivos tribunales.".

Una vez admitida la demanda de inconstitucionalidad, se corrió traslado del asunto a la Procuradora de la Administración quien, mediante Vista N° 185 del 24 de octubre de 1990, explicó que ya se encontraban pendientes de resolver en esta Corporación dos demandas sobre el mismo artículo 1038 del Código Judicial. Manifestó su interés en que se declare inconstitucional la frase "las que se compulsen en caso de desglose y las que mande expedir la ley a costa del interesado", contenida en el artículo 1038 del Código Judicial; y la frase "o que han de ser utilizados en otros procesos pero de competencia de la jurisdicción del Órgano Judicial", contenida en el párrafo primero de la Resolución 201-035 de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, y la palabra "ordinaria" contenida en el párrafo segundo de dicha Resolución.

Al analizar la situación planteada, observa la Corte que, efectivamente, esta Corporación se ha pronunciado con anterioridad en relación a la norma impugnada en el presente negocio. A este respecto tenemos que el Licenciado SIMÓN A. TEJEIRA Q. interpuso demanda el siete (7) de mayo de 1987, para que se declarase inconstitucional el artículo 1038 del Código Judicial. Sin embargo, mediante Sentencia de quince (15) de noviembre de 1991 el Pleno de la Corte Suprema de Justicia declaró que se había producido el fenómeno jurídico de sustracción de materia, en vista de que la disposición acusada de inconstitucional fue modificada por la Ley 15 de 1991, desapareciendo así la inconstitucionalidad del artículo y por ende el motivo de la demanda.

En el caso que nos ocupa se ha demandado también la inconstitucionalidad de la Resolución 201-035 de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro. Es indispensable aclarar que dicha Resolución desapareció del mundo jurídico al aprobarse la Ley 15 de 1991, que modificó el artículo 1038, eliminando así los presupuestos jurídicos y la justificación para la emisión y puesta en práctica de la Resolución recurrida. De modo pues, que la Resolución recurrida desapareció en virtud del principio jurídico que reza: "lo accesorio sigue la suerte de lo principal".

En vista de que la Sentencia de esta Corte fechada 15 de noviembre de 1991 se inhibió de conocer el fondo del asunto y declaró la sustracción de materia

sobre el artículo 1038 del Código Judicial, es decir el objeto del negocio constitucional que nos ocupa, es necesario resolver en el mismo sentido, ya que la sentencia inhibitoria no constituye cosa juzgada.

En consecuencia, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que en el presente negocio se ha producido el fenómeno jurídico de SUSTRACCIÓN DE MATERIA con relación al artículo 1038 del Código Judicial y la Resolución 201-035 del 21 de mayo de 1987 de la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, y se ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Publíquese en la Gaceta Oficial.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAG. ROGELIO A. FÁBREGA DENTRO DE LA ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ROLANDO E. PALACIOS R. EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL DENTRO DEL PROCESO SUMARIO PROMOVIDO POR LA SOCIEDAD BERASVAS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Magistrado Rogelio A. Fábrega solicita al Pleno de la Corte Suprema se le separe del conocimiento de la advertencia de inconstitucionalidad presentada por el abogado Rolando Palacios, en representación del Banco Hipotecario Nacional, dentro del proceso sumario promovido por Berasvas, S. A. contra los artículos 1465, 1335, numeral 2, y 1447, numeral 7, del Código Judicial.

Manifiesta el peticionario que, con fundamento en el numeral 2 del artículo 2562 del Código Judicial, se encuentra impedido para conocer de esta causa por cuanto asesoró al Ministro de Hacienda y Tesoro "en la expedición de la resolución mediante la cual se confirió personería jurídica a PLUTARCO CASTILLO, relacionada con el proceso sumario promovido por la sociedad BERASVAS, S. A.".

El precepto en cita se refiere a las causales especiales establecidas para los procesos constitucionales, de los cuales las consultas de inconstitucionalidad forman parte. Según esa norma:

> "**ARTÍCULO 2562**. Son causales de impedimentos:
> ...
> 2. Haber dictado el acto acusado o intervenido en su preparación o expedición".

Es necesario señalar que las consultas de inconstitucionalidad no guardan relación con acto alguno, toda vez que el objeto de control lo constituyen disposiciones legales o reglamentarias susceptibles de aplicación al caso concreto. En el presente negocio las normas consultadas son los artículos 1465, 1335, numeral 2, y 1447, numeral 7, del Código Judicial.

De lo anteriormente expuesto se desprende claramente que no se configura la causal alegada.

Por las razones anteriores, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia

en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA no es legal el impedimento invocado por el magistrado Rogelio Fábrega, y DISPONE que siga conociendo de esta causa.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA MAGISTRADA MIRTZA FRANCESCHI DE AGUILERA DENTRO DE LA ADVERTENCIA DE INCONSTITUCIONALIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ROLANDO E. PALACIOS E. EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL DENTRO DEL PROCESO SUMARIO PROMOVIDO POR LA SOCIEDAD BERASVAS, S. A. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

La magistrada Mirtza Angélica Franceschi de Aguilera ha manifestado al resto de los integrantes del Pleno de la Corte Suprema de Justicia su impedimento para conocer de la advertencia de inconstitucionalidad interpuesta por el licenciado Rolando Palacios, quien ejerce la representación de Banco Hipotecario Nacional dentro del proceso sumario promovido por Berasvas, S. A., contra los artículos 1465, 1335, numeral 2, 1447, numeral 7, del Código Judicial.

Señala la magistrada Franceschi de Aguilera que quien actúa como Presidente de la Junta Directiva del Banco Hipotecario Nacional en relación con este asunto es "el Ingeniero Rodrigo Sánchez Delgado, con quien me unen vínculos de parentesco por consanguinidad, ya que somos primos, en segundo (sic) grado".

La petición viene fundamentada en el numeral 3 del artículo 2562, cuyo tenor es el siguiente: "Tener el magistrado, su cónyuge o cualquier pariente cercano dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, interés en la decisión del caso".

La correcta interpretación de esta norma nos lleva a la inevitable conclusión de que el cuarto grado de consanguinidad, en cuanto a primos se refiere, abarcaría sólo hasta los primos hermanos, sin que se extienda a los primos segundos. Esta comprobación indica que la norma en cita no sirve de apoyo legal al impedimento que se solicita, por lo que se procede a resolver de conformidad con la ley.

Por lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES LEGAL el impedimento manifestado por la magistrada Mirtza Angélica Franceschi de Aguilera, y DISPONE que continúe conociendo de esta advertencia de inconstitucionalidad.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SUMARIAS SEGUIDAS A GREGORIO DÍAZ CARABALLO Y AL H. L. JORGE DÍAZ CARABALLO, POR SUPUESTO DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE GREGORIO ALABARCA, MIGUEL BATISTA, ESTHER MONTENEGRO, FRANCISCA CÓRDOBA Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

Mediante auto de 24 de octubre de 1996 el Juzgado Primero Municipal, Ramo Penal, de Colón se inhibió de conocer el sumario iniciado por la Personería Primera Municipal de Colón por razón del accidente de tránsito ocurrido entre los señores **GREGORIO ALABARCA y JORGE DÍAZ**, hecho del cual resultó con lesiones personales de más de treinta días el primero de los nombrados, toda vez que el señor Jorge Díaz ostenta el cargo de Legislador de la República, electo por el Circuito 3-1, tal como se aprecia a fojas 66 y siguientes del expediente y remitió la actuación al Pleno de esta Corporación de conformidad con lo dispuesto en el ordinal 2 del artículo 154 de la Constitución Política vigente.

Un examen de las constancias procesales evidencia que el Personero Municipal inició una investigación sumarial que debe ser promovida exclusivamente por el Procurador General de la Nación, teniendo como fundamento lo dispuesto por el artículo 205 de la Ley 49 de 1984, tal como quedó luego de la reforma introducida por la Ley 7 de 1992 que exige que la Asamblea Legislativa autorice la investigación de un Legislador por parte del Ministerio Público.

A juicio de esta Corporación de Justicia debe remitirse la actuación al Procurador General de la Nación, a fin de que dé cumplimiento a la exigencia prevista en el artículo 205 antes mencionado, de forma que se respete el debido proceso legal antes de resolver el mérito del sumario correspondiente.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA remitir la actuación al Procurador General de la Nación para que proceda en los términos antes expuestos, de forma que pueda procederse validamente a la formación del sumario correspondiente.

Fundamento de Derecho: artículo 154 de la Constitución Política y artículo 87 del Código Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAG. CARLOS H. CUESTAS G. DENTRO DE LA QUERELLA INTERPUESTA EN CONTRA DE LA H. L. GLORIA DEL CARMEN YOUNG CHIZMAR POR EL DELITO CONTRA LA LIBERTAD, EN PERJUICIO DE NEILA ITZEL AYARZA AGUILAR, A FIN QUE SE FIJE LA FIANZA QUE HA DE CONSIGNAR LA DENUNCIANTE. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. PLENO.

VISTOS:

El Magistrado **CARLOS H. CUESTAS G.**, solicitó que se le declarara legalmente

impedido para actuar como juez en este caso, instruido con motivo de querella presentada por NEYLA ITZEL AYARZA AGUILAR contra la señora GLORIA DEL CARMEN YOUNG CHIZMAR, por el delito de violación de domicilio y su manifestación de impedimento es del tenor siguiente:

MANIFESTACIÓN DE IMPEDIMENTO
DEL MAGISTRADO CARLOS H. CUESTAS

> Al recibir el presente proceso debo manifestar que me encuentro impedido legalmente para conocer del mismo al tenor del artículo 749 Numeral 4 del Código Judicial que a la letra preceptúa:
>
> "Artículo 749: Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido, son causales de impedimento:
> ...
> 4: Ser el Juez o Magistrado o su cónyuge o algún pariente de éstos dentro del cuarto grado ... (sic) ... de afinidad socio de algunas (sic) de las partes".
>
> En efecto, mi esposa Carmela L. de Cuestas y una de las partes, la señora Gloria del Carmen Young, fueron socias en la sociedad Docencia Infantil, S. A., propietaria del Centro Infantil Heidi donde mi esposa trabajó durante 10 años y la señora Young la directora.
>
> Más tarde, al constitutuirse el Centro Infantil Heidi, S. A., cuya representación legal la ostentaba mi esposa Carmela L. de Cuestas, esta sociedad celebró un Acuerdo con Docencia Infantil, S. A., representada por la señora Young, para regular las actividades, por lo que la relación entre mi esposa y la señora Young continuaron por un tiempo.
>
> Por esta relación profesional y societaria he tratado personalmente y familiarmente a la señora Young durante muchos años e inclusive he sido profesor de su hija en la Universidad por lo que pido respetuosamente se me declare legalmente impedido para actuar como juez en este caso.
>
> DR. CARLOS H. CUESTAS"

El Pleno después de analizar las razones que se expresan como fundamento para la solicitud de impedimento estima que no existen razones legales para la declaratoria solicitada, conforme a lo que seguidamente se expresa.

Si bien el numeral 4 del artículo 749 del Código Judicial, invocado por el solicitante, preceptúa como causal de impedimento "Ser el Juez o Magistrado, su cónyuge o algún pariente de éstos dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo grado de afinidad, socio de alguna de las partes", a juicio del Pleno, estima el Pleno que la causal antes transcrita, no se ajusta a la situación fáctica descrita por el solicitante, ya que para la configuración de dicha causal, la norma exige que el vínculo de sociedad entre el funcionario o sus parientes dentro de los grados mencionados, y una de las partes sea actual.

La norma citada, como se aprecia consagra el impedimento cuando se tiene, la condición de socio, no que con anterioridad se haya sido socio, y además, el documento que se acompañó con la petición se refiere a un acuerdo celebrado entre las dos sociedades, Centro Infantil Heidi, S. A., representado por la señora CARMELA L. DE CUESTAS, y Docencia Infantil, S. A., representada por GLORIA DEL CARMEN YOUNG CHIZMAR, acuerdo cuya fecha de protocolización es de 18 de julio de 1989 y de cuya lectura se concluye que en la actualidad no existe ninguna vinculación entre dichas sociedades y en donde los signantes consignaron que "no tienen reclamos individuales o mutuos que efectuarse con motivo del presente acuerdo".

Tampoco considera el Pleno que lo expresado en el último párrafo del escrito de manifestación de impedimento constituya razón legal para acceder a la

declaratoria solicitada, toda vez que tales circunstancias no son motivos suficientes para que el solicitante carezca de la imparcialidad necesaria en todo proceso, y no podría tampoco esta situación encuadrarse en la causal de impedimento contenida en el numeral 3 del artículo 2562 del Código Judicial, que dice: "Tener el magistrado, su cónyuge o cualquier pariente cercano dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, interés en la decisión del caso."

En razón de lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrado justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que el Magistrado CARLOS H. CUESTAS G., no se encuentra impedido para conocer de la presente causa.

Notifíquese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) YANIXSA YUEN DE DÍAZ
Secretaria General Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA PRIMERA DE LO CIVIL

NOVIEMBRE 1996

ACLARACIÓN DE SENTENCIA

CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE ROBERTO ANTONIO BERASTEGUI. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado JOSÉ DOMINGO FAJARDO GÓMEZ en representación de **ROBERTO ANTONIO BERASTEGUI ACOSTA**, parte demandada en el proceso ordinario de nulidad y reivindicación de bien inmueble instaurado contra **CONSTRUCTORA DOS MARES, S. A.**, ha solicitado ACLARACIÓN de la SENTENCIA dictada por esta Sala de lo Civil, el 16 de octubre de 1996, que resolvió lo siguiente:

> "En atención a lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley. CASA la sentencia de 23 de mayo de 1995, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia; REVOCA la sentencia dictada por el Juzgado Primero del Circuito de lo Civil, del Primer Circuito Judicial de Colón el 22 de diciembre de 1992; DECLARA PROBADA la excepción de prescripción extintiva de la acción reivindicatoria empleada por la parte demandada; DENIEGA la solicitud para que se declaren nulos los linderos con que aparece inscrita en el Registro Público la finca 6836 de propiedad de CONSTRUCTORA DOS MARES; Y, deniega la solicitud de que se reconozcan daños y perjuicios."

El procurador judicial del demandante, expresa que el punto que pretende que sea aclarado por la Sala, es el siguiente:

> "PRIMERO: En la parte resolutiva se deniega la solicitud de que se reconozcan daños y perjuicios pero a foja 39 y siguiente consta la existencia de edificaciones comerciales en etapas avanzadas de construcción de propiedad de ROBERTO ANTONIO BERASTEGUI, que fueron suspendidas a través de medida cautelar ejercida por el reconvencionista, lo cual causó real y efectivamente daño y perjuicio e impidió su entrega en el tiempo proyectado; solicitamos en consecuencia a la Honorable Sala, nos aclare si la denegación de daños y perjuicios abarca los causados a través de la medida cautelar aludida. ..." (Fs. 618)

De lo transcrito se infiere que, a pesar de que la aclaración solicitada se refiere al punto de daños y perjuicios como lo permite el artículo 986 del Código Judicial, para ello el solicitante pretende que la Corte entre a revisar piezas procesales del expediente que, a su juicio, prueban el daño y perjuicio que sufrió.

Esta Sala ha reiterado en su jurisprudencia que: "La aclaración de sentencia no es otra instancia en que puedan debatirse las motivaciones de la Resolución, o las razones por las cuales se negaron las pretensiones del demandante, puesto que no está la naturaleza jurídica de la institución" (Ver. fallo de 22 de junio de 1992, R.J., pág. 187).

Sin embargo, la Sala se permite reiterar lo que dijo en el fallo, para contestar a la parte lo que abarca la denegación de daños y perjuicios; en tal sentido, a fojas 615 se sostuvo "Como ninguna prueba han aportado las partes que demuestren que hayan sufrido algún género de daños y perjuicios, las peticiones que se han hecho en tal sentido deberán ser denegadas".

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ACCEDE a la Aclaración de Sentencia formulada por el Licenciado Domingo Fajardo Gómez, en representación de ROBERTO ANTONIO BERASTEGUI ACOSTA.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

APELACIONES

APELACIÓN INTERPUESTA POR OSCAR ANTONIO NAVARRO ACEVEDO CONTRA EL AUTO DE FECHA TRES (3) DE FEBRERO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO (1995) DICTADO POR EL REGISTRO PÚBLICO RELACIONADA SOBRE EL DOCUMENTO INGRESADO BAJO EL ASIENTO 1480 DEL TOMO 234 DEL DIARIO. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado Miguel Batista Guerra, actuando en nombre y representación del señor **OSCAR ANTONIO NAVARRO ACEVEDO**, presentó recurso de apelación contra el auto proferido por el Director General del Registro Público el 3 de febrero de 1995, por medio del cual se suspende la inscripción de la Escritura Pública N° 2497 de 15 de noviembre de 1994, de la Notaría Octava del Circuito de Panamá, en la cual se protocoliza certificado expedido por el señor MANUEL ÁNGEL ROJAS DÍAZ, Notario Público de San José, Costa Rica, la cual fue ingresada al Registro Público bajo el Asiento 1480 del Tomo 234 del Diario.

La resolución apelada es del tenor siguiente:

"REGISTRO PÚBLICO: Panamá, tres de febrero de mil novecientos noventa y cinco. Asiento: 1480 del Tomo 234 del Diario.

Ha ingresado a este Registro para su inscripción bajo el asiento 1480 del tomo 234 del Diario, la Escritura Pública Número 2497 de 15 de noviembre de 1994 de la Notaría Octava del Circuito de Panamá, por medio de la cual se protocoliza certificado expedido por el señor MANUEL ÁNGEL ROJAS DÍAZ, Notario de San José, Costa Rica.

Mediante dicha certificación el citado Notario Público hace constar que ante él compareció el señor RENATO PETER ENRICO, mayor de edad, hombre de negocios, con domicilio en los Estados Unidos de Norteamérica y de tránsito por Costa Rica, quien dijo ser Apoderado General del Señor JERRY LEE HARVEY, vecino de los Estados Unidos de Norteamérica, con pasaporte Numero 040751264, de acuerdo a documento que fuera otorgado en la Ciudad de San José Costa Rica el 2 de mayo de 1986 ante el Notario MAX THOMPSON; y que en esta condición sustituye dicho Poder en el señor OSCAR ANTONIO NAVARRO ACEVEDO, panameño, mayor de edad, con cédula de identidad personal Número 6-532-695, para que éste actúe en la República de Panamá o en cualquier otro país, con las mismas facultades conferidas por el citado JERRY LEE HARVEY.

Previo a la valorización de índole formal referente al contenido del documento arriba descrito, esta Dirección observa que según las constancias Registrales y desde el 22 de febrero de 1992, se encuentra inscrita la Escritura Pública número 5453 de 11 de junio de 1992, por medio de la cual el señor JERRY LEE HARVEY, de Generales ya descritas, confiere Poder General a favor del Licenciado OMAR ELÍAS SOLANO APARICIO, documento éste donde también se hace constar (foja 3, cláusula séptima) que el citado JERRY LEE HARVEY no ha otorgado a RENATO PETER ENRICO, JULIÁN HERENDON HOOD, CARLOS EDUARDO RUBIO, UBALDINO RODRÍGUEZ BOTELLO, ni a OSCAR NAVARRO ACEVEDO Poder General concedido a OMAR ELÍAS SOLANO APARICIO.

En adición, también demuestran las constancias registrales la inscripción, desde el 9 de julio de 1992, de la Escritura Pública Número 6448 de 9 de julio de 1992, de la Notaría Décima del Circuito de Panamá, por la cual OMAR ELÍAS SOLANO APARICIO revoca poderes inscritos a favor de RENATO PETER ENRICO, JULIÁN HERENDON HOOD, CARLOS EDUARDO RUBIO, UBALDINO RODRÍGUEZ BOTELLO Y OSCAR NAVARRO ACEVEDO.

La situación registral arriba anotada, en la que no sólo resulta la inscripción previa de un Poder General a favor de OMAR ELÍAS SOLANO APARICIO, sino también el hecho de no haberse otorgado Poder alguno a favor de, entre otros, RENATO PETER ENRICO Y OSCAR NAVARRO ACEVEDO; así como la situación que resulta de la constancia inscrita sobre la revocatoria de tales poderes mediante la citada escritura 6448, introducen en este caso serias dudas e inexactitudes que pueden inducir a error a terceros de procederse con la inscripción del documento que nos ocupa, esto es la Escritura Pública Número 2497 del 15 de noviembre de 1994. Lo anterior, a nuestro juicio, se contrapone a los principales objetos del Registro Público, como son el de establecer de modo fehaciente lo relativo a los Mandatos Generales y el dar mayor garantía de autenticidad y seguridad a los documentos o actos susceptibles de registrarse.

Por los motivos expuestos, se suspende la inscripción de la Escritura Pública Número 2497 de 15 de noviembre de 1994 de la Notaría Octava del Circuito de Panamá, ingresada a este Registro bajo el asiento número 1480 del tomo 234 del Diario. Fundamento Legal: artículos 1753, 1795 y concordantes del Código Civil, Decreto 9 de 13 de enero de 1920 y demás disposiciones complementarias.

NOTIFÍQUESE." (Fojas 5 vuelta y 6).

Por su parte, el apoderado judicial del recurrente alega lo siguiente:

1) Los poderes cumplen con las formalidades que establece la Ley para los poderes otorgados en el extranjero, razón por la cual deben ser inscritos, ya que la facultad calificadora del Registrador a la que se refiere el artículo 1795 del Código Civil se fundamenta, únicamente, en la legalidad de los documentos.

2) No corresponde al Registrador ni al funcionario ante quien se otorga (Notario), determinar sobre el fondo o validez del poder, ya que "en ambos casos se da fe de un acto celebrado entre las partes, Poderdante y Apoderado". (Foja 15)

3) El Registrador "coteja el poder cuya inscripción se solicita, con un poder inscrito y concluye que el poder inscrito con anterioridad es un poder mejor", tarea que es ajena a sus funciones.

4) Como consecuencia de lo anteriormente expresado, el Registro Público le ha negado al señor OSCAR ANTONIO NAVARRO ACEVEDO, "la oportunidad de demostrar, que **JERRY LEE HARVEY**, otorgó poder a **RENATO PETER ENRICO**, que este poder está vigente, que en su condición de apoderado, tiene la facultad expresa de sustituir el poder, sin embargo la determinación del Registrador, impide que mi representado en función de las garantías procesales pueda accionar, aún cuando tiene pruebas testimoniales, documentales, etc., que demuestran que el poder inscrito a favor de **OMAR ELÍAS SOLANO**, le fue otorgado por quienes por motivos pecuniarios y de manera dolosa ha suplantado al verdadero **JERRY LEE HARVEY**, poderdante de **RENATO PETER ENRICO**." (Foja 16).

Procede la Sala a decidir, entonces, el mérito del presente recurso de apelación.

El punto medular del presente negocio es si el documento en el que el señor RENATO PETER ENRICO sustituye el poder general que otorgó el señor JERRY LEE HARVEY en el señor OSCAR ANTONIO NAVARRO ACEVEDO, cumple con los requisitos

legales que se requieren para su inscripción.

La lectura de ese documento pone de manifiesto, en primer lugar, que no hay certeza de que el señor RENATO PETER ENRICO, fuera apoderado del señor JERRY LEE HARVEY portador del pasaporte estadounidense número cuatrocientos cero siete cinco uno dos seis cuatro (040751264). Mal puede, por tanto, sustituirlo. Al referirse a esta situación el Notario de Costa Rica expresa que RENATO PETER ENRICO "dice" ser apoderado de JERRY LEE HARVEY.

En segundo lugar, se expresa que el poder general que se dice fue otorgado por JERRY LEE HARVEY a RENATO PETER ENRICO lo fue el 2 de mayo de 1986, ante el Notario Max Thompson "y que cuenta con la respectiva razón de fecha cierta para los efectos del artículo setecientos cuarenta y dos del Código Civil, según consta del Folio ochenta y cuatro frente, escritura número ciento cincuenta y cinco del tomo veintinueve del Notario José Rafael Montealegre Aguilar en fecha veintinueve de abril de mil novecientos ochenta y nueve". (Foja 5).

De acuerdo con lo que señala el Director del Registro Público en la resolución apelada, desde el 22 de febrero de 1992 se encuentra inscrita la Escritura Pública N° 5453 de 11 de junio de 1992, por medio de la cual el señor JERRY LEE HARVEY confiere poder general a favor del Licenciado OMAR ELÍAS SOLANO APARICIO.

Son pertinentes los artículos 613, 620, 622 y 634 del Código Judicial, que se refieren a los poderes generales y que a la letra dicen:

> "**ARTÍCULO 613.** Los poderes generales para representar al poderdante en cualquier proceso que promueva, o se interponga en su contra, no pueden otorgarse sino por medio de instrumento público con arreglo a las formalidades exigidas por la ley e inscrito en el Registro Público.
>
> **ARTÍCULO 620.** La sustitución de un poder general para procesos debe hacerse por escritura pública e inscribirse en el Registro Público. Sin embargo, el poder general puede ser sustituido también por medio de memorial, cuando lo fuere especialmente para un proceso determinado.
>
> También puede sustituirse por medio de memorial el poder especial constituido por escritura pública.
>
> **ARTÍCULO 622.** Los poderes que se otorguen en una nación extranjera ante una autoridad de ella, para ser ejercidos en Panamá, deberán extenderse con las formalidades exigidas en el lugar donde se otorguen; pero deben, además, venir autenticados por el funcionario diplomático o consular de Panamá, y, a falta de tal funcionario, por el Cónsul o Jefe de Misión Diplomática de una nación amiga.
>
> Por el hecho de estar autenticados, se presume que los poderes están expedidos conforme a la ley local de su origen, a no ser que parte interesada compruebe lo contrario.
>
> **ARTÍCULO 634.** La revocación de un poder general se deberá hacer por escritura pública e inscribirse en el Registro Público. La de un poder especial o la sustitución de un poder para varios procesos determinados o para un proceso determinado, se podrá hacer por escritura pública o por un memorial presentado en los mismos términos que aquel por el cual constituyó el poder o se hizo la sustitución.
>
> La revocación de un poder general surtirá sus efectos respecto del apoderado desde que tenga conocimiento oportuno de ella en cualquier forma; y con relación a terceros, sólo desde la fecha de su inscripción en el Registro Público." (El subrayado es de la Corte).

El poder que se trata de inscribir de cuya negativa trata la apelación de que conoce la Sala, en su Cláusula 5ª faculta para "representar al señor Jerry Lee Harvey ante cualquiera corporaciones, tribunales, funcionarios del orden judicial o del administrativo o del trabajo en cualquier juicio ...", o sea que se trata también de un poder para juicio, de allí la pertinencia de las disposiciones legales transcritas.

Y el artículo 641 del mismo Código Judicial prescribe que "por la designación y admisión de un nuevo apoderado principal se entenderá revocado el poder anterior".

Por su parte el artículo 1423 del Código Civil expresa que el mandato se acaba por su revocación, y el 1424 ibídem, que el mandante puede revocar el mandato a su voluntad.

El artículo 641 del Código Judicial implica el principio de que un nuevo poder revoca el anterior. La condición relativa de nuevo poder se establece en función del orden temporal. Como advierte el Registrador, con posterioridad al poder que se dice extendido por LEE HARVEY en favor de RENATO PETER ENRICO (2 de mayo de 1986), aparece inscrito en el Registro Público otro poder (11 de junio de 1992), a favor del Licenciado OMAR ELÍAS SOLANO APARICIO (f. 6).

Ha de entenderse, en consecuencia, que el poder que dice ostentar RENATO PETER ENRICO, quien a su vez pretende otorgarle poder a OSCAR ANTONIO NAVARRO ACEVEDO, fue revocado y también por está razón no puede ser inscrito.

Por último, en cuanto a lo que se refiere a las funciones del Registrador conforme al artículo 1795 del Código Civil, no se trata de cuestiones meramente formales cuando se dispone que debe "calificar la legalidad de los títulos" y puede negar la inscripción si adolecen de faltas que "los invalidan absolutamente".

Más allá de lo meramente formal, el título que se inscriba debe ser confrontado con el orden jurídico imperante para determinar su validez, de la cual da fe la institución.

De lo anteriormente señalado se colige que el poder general que se pretende inscribir no cumple con los requisitos que exigen las disposiciones legales transcritas y, por tanto, debe confirmarse el auto dictado por el Registro Público porque se ajusta a derecho.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA y por autoridad de la LEY, CONFIRMA la resolución proferida por el Registro Público el 3 de febrero de 1996, por medio de la cual se suspende la inscripción de la Escritura Pública N° 2497 de 15 de noviembre de 1994, de la Notaría Octava del Circuito de Panamá, ingresada bajo el asiento N° 1480 del tomo 234 del Diario.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) ELIGIO MARÍN C.
Secretario Interino

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN CIVIL

JOSÉ ANTONIO MONCADA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A ROBERTO EISENMAN Y CORPORACIÓN LA PRENSA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Dentro del proceso que JOSÉ ANTONIO MONCADA le sigue a ROBERTO EISENMAN y CORPORACIÓN LA PRENSA, S. A., el licenciado HIPÓLITO MARTÍNEZ M., en representación del demandante, ha interpuesto Recurso de Casación, de forma y de fondo, contra la sentencia de 23 de febrero de 1996 dictada por el Primer Tribunal Superior, en dicho proceso.

Cumplidas las reglas de reparto el negocio se fijó en lista a fin de que las partes alegaran en cuanto a la admisibilidad del recurso, oportunidad que fue aprovechada por las partes, como se aprecia a fojas 790 y 794 (opositores) y a fojas 800 (el recurrente).

La Sala procede a revisar el recurso de casación interpuesto, en atención a los presupuestos contenidos en el artículo 1165, en concordancia con el 1160, ambos del Código Judicial.

La primera causal, de forma, ha sido expresada en los siguientes términos: **"HABERSE OMITIDO ALGÚN TRÁMITE O DILIGENCIA ESENCIAL POR LA LEY".**

Como fundamento de esta causal que consta de fojas 771-773, se expresan tres motivos que a continuación se transcriben:

> **"PRIMERO: Que el Tribunal de primera instancia mediante auto de 7 de diciembre de 1993 no admitió las contrapruebas presentada por la parte demandante, alegando que las mismas tenían el carácter de pruebas, por lo que la mismas son extemporáneas. No obstante lo que el Tribunal de primera instancia califica como pruebas son realmente contrapruebas que son descargos a las pruebas presentadas por la Corporación La Prensa, tal como lo podrán apreciar los Magistrados cuando verifiquen el escrito de fojas 592 a 606 del expediente.**
>
> SEGUNDO: Que el Tribunal de primera instancia mediante auto de fecha 7 de diciembre de 1993 ordenó la práctica de pruebas, incluyendo la declaración de parte de JOSÉ A. MONCADA, no obstante el Tribunal no se señaló fecha para la práctica de dicha diligencia, como en efecto la recepción de dicha declaración de parte nunca se efectuó por ese motivo.
>
> TERCERO: Que mediante auto de fecha 19 de mayo de 1994 el Primer Tribunal Superior de Justicia, también negó la admisión de las contrapruebas presentadas por el demandante."

De los motivos transcritos se observa que el primero y el segundo imputan cargos al juzgador de primera instancia que consisten básicamente en que no admitió contrapruebas y no practicó declaración de parte; y, el tercero se refiere, en forma vaga, a uno de los aludidos vicios de actividad, también atribuido al sentenciador de segunda instancia.

Si bien es cierto, como señalan los opositores al recurso, que los cargos contenidos en los motivos deben dirigirse a la sentencia de segunda instancia, es importante considerar que el recurso de casación objeto de examen es en cuanto a la forma por lo que la Corte no está limitada únicamente al conocimiento de la sentencia de segunda instancia impugnada, sino que se ve en la necesidad de examinar los hechos que consten en el resto del expediente.

Sin embargo, a juicio de la Sala, el casacionista debe ampliar la explicación que hace en los motivos en relación a los errores procesales en que incurrió el Ad-quem.

En otro orden de ideas, al examinar la casación en el fondo, pareciera que el recurrente confunde las dos causales probatorias pues no las invoca por separado de manera completa. Inicialmente expresa lo siguiente:

> "La causal que se invoca es la de **INFRACCIÓN DE NORMAS SUSTANTIVAS DE DERECHO** en los conceptos de **ERROR DE HECHO EN CUANTO A LA EXISTENCIA DE LA PRUEBA, y ERROR DE DERECHO EN CUANTO A LA**

> **APRECIACIÓN DE LA PRUEBA**, lo cual ha influido en lo dispositivo de la Sentencia recurrida."

Así, aunque posteriormente se separan los dos conceptos precedidos de los motivos y las normas de derecho, no se expresan anteponiendo la frase "Infracción de normas sustantivas de derecho ...", que es la forma completa de expresar cada causal, ya que se trata de dos casos de violación de la norma sustantiva, al cometer el juzgador dos infracciones a las leyes de procedimiento en materia de pruebas.

De los motivos que fundamentan esta causal no se desprende claramente el cargo de injuricidad congruente con la misma, especialmente en el tercer motivo, en que se alude a un cargo incompatible con la misma, pues hace referencia a la valoración probatoria que dejó de hacer el sentenciador, señalando además como consecuencia de dicho yerro el aumento en las costas, lo que resulta totalmente improcedente pues esta última circunstancia (sobre costas) no implica la infracción de normas sustantivas.

Las normas procesales que se citan como infringidas no son cónsonas con la causal de Error de Hecho en cuanto a la Existencia de la Prueba, ya que, aunque se refieren al tema de las pruebas, no son de aquellas que enumeran los medios de pruebas, que son las exigidas para esta causal.

En tal sentido, el recurrente cita el artículo 657 del Código Judicial, señalando que ha sido violado directamente por el Tribunal, pues "ha ignorado que esta norma permite proponer con el libelo de demanda cualquier tipo de pruebas, sin que sea necesario reiterarlas posteriormente, ... sin embargo estas pruebas fueron ignoradas y no valoradas, ..."; y esto se refiere, más bien, a un vicio en cuanto a la actividad que debe observar el sentenciador, que es propio de la casación en la forma.

La otra norma sobre pruebas es el artículo 770 del Código Judicial, que es una disposición reguladora de la forma en que el juez debe valorar las pruebas. Por tanto, también resulta improcedentes para efectos de esta causal, dado que es propia de la causal de error de derecho en la apreciación de la prueba.

La última causal no ha sido determinada de manera completa, pues se expresa así: **"ERROR DE DERECHO EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA"**.

Únicamente se establece un motivo como fundamento de la causal, en el cual el obligante cargo de injuricidad resulta confuso e incompleto, pues expresa:

> "PRIMERO: El Tribunal de segunda instancia mediante sentencia de 23 de febrero de 1996 ha confirmado la sentencia de primera instancia, a excepción de lo relativo a las costas. En consecuencia al confirmarse la sentencia y hacer uso el fallo de primera instancia, ha sostenido que el derecho a réplica que contiene la Ley le fue dado a JOSÉ A. MONCADA; sin embargo a fojas 87 del expediente conta(sic) una publicación de La Prensa de fecha 30 de marzo de 1993, en la cual la demandada, La Prensa, en el mismo artículo aclara públicamente que la publicación remitida por JOSÉ MONCADA como derecho de replica no se hace COMO DERECHO DE REPLICA."

Sobre el particular la jurisprudencia de esta Corporación ha reiterado que, cuando se desarrollan los cargos sobre los errores probatorios, es necesario establecer tres puntos: 1- el error y su demostración; 2- la consecuente infracción de la norma sustantiva; 3- la incidencia del cargo sobre la parte dispositiva de la resolución.

Otra omisión que se observa en esta causal es la citación de la norma valorativa, que se supone ha sido desconocida, en la que debe fundamentarse el yerro probatorio, para que a su vez produzca la infracción de la norma material.

De todo lo expuesto se concluye que las deficiencias que presentan las causales, tanto la única de forma, como las dos de fondo, pueden ser subsanadas

por el casacionista, por lo que la Sala concede el término de ley (art.1166 ibídem.) para que se corrijan los defectos señalados.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA LA CORRECCIÓN del recurso de casación en la FORMA y en el FONDO.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

KOLON INTERNATIONAL CORP. RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE MEDICAMENTOS CENTROAMERICANOS, S. A. (MÉDICA, S. A.). MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

La firma forense TAPIA, LINARES Y ALFARO, apoderados especiales de KOLON INTERNACIONAL CORP., recurre en casación contra la sentencia de 14 de junio de 1996, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial dictada en el proceso ordinario promovido por MEDICAMENTOS CENTROAMERICANOS, S. A. (MÉDICA, S. A.), contra KOLON INTERNACIONAL CORP.

Ingresado el expediente a la Secretaría de la Sala Civil, se fijó en lista por el término que señala la ley, para que las partes alegaran en cuanto a la admisibilidad del recurso, término que fue aprovechado por ambas partes.

Cumplidos los trámites procesales inherentes a esta clase de recurso, pasa esta Sala de Casación Civil a pronunciarse sobre la admisibilidad del mismo, tomando en cuenta para ello los requisitos contemplados en el artículo 1165 del Código de Procedimiento Civil, así como también las exigencias formales señaladas en el artículo 1160 de la precitada legislación.

La resolución cuya impugnación aquí se impetra, es susceptible del recurso de casación, puesto que se trata de una resolución de segunda instancia, dictada por el Tribunal Superior, en un proceso de conocimiento.

Consta en autos que el recurso se anunció y formalizó en tiempo.

El recurrente invoca dos causales, la primera de ellas es: "Infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de error de hecho sobre la existencia de la prueba, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia recurrida".

La segunda causal es: "Infracción de normas sustantivas de derecho por concepto de violación directa, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la sentencia recurrida", ambas consagradas en nuestro ordenamiento jurídico.

En cuanto a los motivos y la explicación de cómo han sido infringidas las normas de derecho, la Sala observa, que, en ambas causales, se cumple, en términos generales con los requisitos exigidos por la ley.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE del recurso de casación, en el fondo, propuesto por KOLON INTERNACIONAL CORP., mediante apoderado judicial.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Interino

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

PROYECTOS FUTURAMA, S. A. RECURRE EN CASACIÓN EN EL INCIDENTE DE EXCLUSIÓN DE LA ENTIDAD EXTRANJERA FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION PRESENTADA DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO HIPOTECARIO PROPUESTO POR BANCO GIROD DE PANAMÁ, S. A. (EN LIQUIDACIÓN) CONTRA PROYECTOS FUTURAMA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado Francisco Zaldívar, actuando en nombre y representación de la sociedad **PROYECTOS FUTURAMA, S. A.**, presentó recurso de casación contra la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 7 de mayo de 1996, que decidió en segunda instancia el incidente de exclusión de la entidad extranjera **FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION**, interpuesto por la sociedad recurrente en casación, dentro del proceso ejecutivo hipotecario que le sigue **BANCO GIROD DE PANAMÁ, S. A.** (en liquidación).

El negocio se encuentra pendiente de decidir su admisibilidad en casación, a lo que procede la Sala, tomando en consideración los requisitos que exigen los artículos 1160 y 1165 del Código Judicial.

Se observa que el recurso fue anunciado y presentado en tiempo oportuno, por persona idónea y que la resolución objeto de la impugnación es recurrible en casación, tanto por su naturaleza como por la cuantía del negocio.

En relación con el escrito de formalización del recurso, la Sala advierte que el recurrente en casación invoca como causal única, la siguiente:

> "El presente recurso de casación se funda en la causal contemplada en el artículo 1156 del Código Judicial: haber dejado el Juez Ad-quem (sic) de decidir sobre lo que estaba obligado: resolver sobre la legitimidad de la personería de la parte ejecutante." (Foja 434).

La jurisprudencia de esta Sala ha manifestado reiteradamente que las causales de casación son de numerus clausus y que sólo pueden reconocerse aquéllas que se encuentran previstas expresamente por la Ley.

Así, el artículo 1154 del Código Judicial enumera las causales que dan origen a la casación en el fondo y el artículo 1155 de ese mismo cuerpo de leyes, las que dan origen a casación en la forma. La lectura del texto transcrito pone de manifiesto que el recurrente ha invocado una causal que no corresponde a ninguno de los supuestos que recogen las mencionadas disposiciones legales.

Consecuentemente, el presente recurso no cumple con el requisito contenido en el ordinal 4 del artículo 1165 del Código Judicial, que exige que la causal expresada debe ser de aquellas señaladas en la ley, ni con el ordinal 1 del artículo 1160 de ese mismo Código, lo que hace ininteligible el recurso y causa su inadmisibilidad, de acuerdo con el texto del artículo 1167.

En mérito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la REPÚBLICA y por autoridad de la LEY, DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación interpuesto por el apoderado judicial de PROYECTOS FUTURAMA, S. A.

Las costas se fijan en setenta y cinco balboas (B/.75.00), a cargo de la

parte recurrente.

Notifíquese.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Interino

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JOSÉ GUILLERMO BROCE BRANDAO RECURRE EN CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO DE DIVORCIO QUE LE SIGUE A LA SEÑORA DALFIA MAR ACOSTA SÁENZ. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SIETE (7) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado **TEÓFANES LÓPEZ ÁVILA**, en su condición de apoderado judicial de **JOSÉ GUILLERMO BROCE BRANDAO** parte demandante en el proceso de Divorcio que le sigue a **DALFIA MAR ACOSTA SÁENZ**, ha interpuesto recurso de casación contra la Resolución calendada 21 de marzo de 1995, dictada por el Tribunal Superior de Familia.

Cumplidas las reglas de reparto el negocio se fijó en lista a fin que las partes alegaran en cuanto a la admisibilidad del recurso, término que fue aprovechado por ambas partes. (Fs. 201-203 op) (204-205 rec)

Seguidamente, se corrió traslado del recurso al señor Procurador General de la Nación, quien emitió concepto (fs. (fs. 207-211), recomendando que el mismo fuese admitido.

Así, una vez examinado el recurso de casación, esta Sala de la Corte concluye en igual sentido que el Jefe del Ministerio Público, al considerar que se cumple con los presupuestos determinados por el artículo 1154 del Código de Procedimiento Civil. Es decir:

1.- Que la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley;

2.- El recurso ha sido interpuesto en tiempo;

3.- El escrito de formalización del recurso se ajusta a las exigencias del artículo 1160 ibídem., puesto que se determina en forma correcta una de las causales de fondo, se establecen los motivos que la fundamentan y, las normas de derecho infringidas con la correspondiente explicación.

4.- Finalmente, la causal expresada es de las que señala la ley procesal en su artículo 1154.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación propuesto por JOSÉ GUILLERMO BROCE BRANDAO contra la Resolución calendada 21 de marzo de 1995 dictada por el Tribunal de Familia, en el Proceso de Divorcio que éste le sigue a DALFIA MAR ACOSTA SÁENZ.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EMPRESAS LAGO, S. A. RECURRE EN CASACIÓN DENTRO DE LA EXCEPCIÓN DE PAGO INTERPUESTA COMO TERCERO INTERESADO EN EL PROCESO EJECUTIVO PROMOVIDO POR BANCO DE BOGOTÁ, S. A. CONTRA LUIS ALBERTO GÓMEZ ESTRIBÍ. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, SIETE (7) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

A este Despacho ingresó en virtud de reparto, el recurso de casación que el Licenciado JUAN ANTONIO MORALES GÓMEZ interpusiera en representación de la persona jurídica EMPRESAS LAGO, S. A. y contra la sentencia calendada 20 de mayo de 1996, dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial en la que se confirma la resolución del 29 de noviembre de 1995, emitida por el Juzgado Segundo del Circuito de Chiriquí, y que niega la excepción de pago que interpusiera, EMPRESAS LAGO, S. A., como tercero interesado en el proceso ejecutivo promovido por el BANCO DE BOGOTÁ, S. A. contra LUIS ALBERTO GÓMEZ ESTRIBÍ.

Las partes contaron con seis días para formular sus alegatos, los tres primeros para el opositor al recurso y los tres días siguientes para que el recurrente formulara su escrito de replica, pero ninguno de ellos lo aprovechó. Procede este Tribunal de Casación a determinar, ahora, lo que a admisibilidad respecta con base a lo que disponen los artículos 1165 y 1160 del Código Judicial.

La resolución es de las que admite la ley, al igual que la cuantía y el recurso se interpuso en tiempo.

La casación se presentó en el fondo y el recurrente invocó como causal única "infracción de normas sustantivas de derecho, en el concepto de violación directa, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida."

No obstante, el único motivo no guarda relación con la causal invocada y éstos, a su vez, con las disposiciones legales infringidas y la exposición de la forma en que han resultado infringidas por la sentencia impugnada en virtud de este recurso extraordinario.

Así, en el motivo único se señala que la sentencia, al declarar no probada una excepción, dejó de aplicar una norma sustantiva, aquella que, referida a las obligaciones y contratos, señala que el pago extingue la obligación. Pero, a renglón seguido, señala que la sentencia, por la razón apuntada, no está en consonancia con la excepción decidida mediante la sentencia impugnada por el cauce de este recurso extraordinario, toda vez que la falta de consistencia de la sentencia con lo pedido, lo que trae como consecuencia una causal en la forma, y no en el fondo.

Por otra parte, la norma violada, en apreciación del recurrente, es el artículo 978 del Código Judicial, norma de carácter procesal que, al resultar infringida por el juzgador, ha violado, como su consecuencia, el artículo 1043 del Código Civil, al decir del recurrente. Salta a la vista que el recurrente nuevamente confunde, en la estructuración del recurso, la que se corresponde con el recurso de casación en el fondo, con el que guarda relación con el recurso de casación en la forma.

En efecto, al señalar las normas violadas, señala el artículo 978 del Código Judicial y, como su consecuencia, el artículo 1043 del Código Civil. El requerimiento de señalar, como violadas las normas sustantivas, como consecuencia de la violación de otras normas, ocurre sólo cuando se invoca una causal probatoria de fondo. No basta entonces señalar disposiciones legales que se refieran a la prueba; además, hay que indicar la disposición sustantiva violada como consecuencia del error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, o el de derecho en cuanto a la apreciación.

La formalidad del recurso de casación exige la debida separación entre los motivos y las normas de derecho infringidas, que conjuntamente con la causal, deben constituir un todo armónico. De incumplirse este canon, no tiene la Sala elementos para determinar y precisar los contornos de la censura que el casacionistas le censura al fallo, a consecuencia de una estructuración del recurso que hace que sea ininteligible, caso en el cual prospera la hipótesis prevista en el artículo 1167 del Código Judicial.

Por todo lo expuesto la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación en el fondo propuesto por EMPRESAS LAGOS, S. A. dentro de la excepción de pago presentada como Tercero interesado en el proceso ejecutivo promovido por BANCO DE BOGOTÁ, S. A. contra LUIS ALBERTO GÓMEZ ESTRIBÍ.

Se condena a la recurrente a SETENTA Y CINCO BALBOAS (B/.75.00) en concepto de costas en casación.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Interino

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JUDITH ESTHER MON DE GRIMALDO RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUE A JORGE HASSAN GRIMALDO. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Mediante resolución de fecha 26 de junio de 1996, visible de fojas 195 a 196, esta Sala de lo Civil de la Corte ordenó la corrección del recurso de casación interpuesto por **JUDITH ESTHER MON DE GRIMALDO** contra la resolución de 12 de enero de 1996, dictada dentro del presente proceso ordinario que la parte recurrente le sigue a JORGE HASSAN GRIMALDO.

Según se observa de fojas 198 a 203, el casacionista presentó un nuevo escrito de casación en el cual deben haberse enmendado las deficiencias previamente señaladas por esta Corporación.

Luego del examen de rigor, la Sala debe concluir manifestando que el recurso no fue corregido en forma debida, ya que a pesar de haberse incluido la mención de normas sobre el valor de las pruebas, no se explica el concepto de su infracción, que es lo importante cuando se cita una norma como infringida. Aunado a ello, cada una se encuentra aparejada a una disposición de carácter sustantivo, respecto a las cuales sí se desarrolló explicación sobre su vulneración, pero en algunas se incluye consideraciones probatorias.

Estos defectos persisten, a pesar de que se señaló expresamente, al recurrente, que debía corregir lo concerniente al concepto de la infracción "pues el mismo debe ser desarrollado en forma separada, respecto a cada una de las normas citadas.

En consecuencia, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación interpuesto por JUDITH ESTHER MON DE GRIMALDO contra la resolución de 12 de enero de 1996, dictada por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, dentro del presente proceso ordinario que la recurrente le sigue a JORGE HASSAN GRIMALDO.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

RICHARD ZAFRANI KADOCH RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO INTERPUESTO POR CERVECERÍA NACIONAL, S. A. CONTRA RICHARD ZAFRANI KADOCH, CENTRAL NORMANDIE, S. A. Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

En el proceso ordinario que CERVECERÍA NACIONAL, S. A. mantiene contra el señor RICARDO ZAFRANI KADOCH, CENTRAL NORMANDIE, S. A. Y OTROS, el apoderado judicial del señor RICARDO ZAFRANI KADOCH censura, con el recurso de casación, la sentencia dictada el 13 de junio de 1996 por el Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Recibido el expediente en esta Corporación, el Magistrado Sustanciador lo fijó en lista para que las partes alegaran sobre la admisibilidad, término que no fue aprovechado por ninguna de las partes. Procede la Sala, de acuerdo al mandato del artículo 1165 y 1160, a determinar si el mismo reúne las formalidades exigidas.

En el presente caso, el recurrente, realiza ciertas explicaciones sobre la viabilidad del recurso, y una historia breve del caso, lo cual debe omitir, ya que dichas argumentaciones no son compatibles con la formalidad del recurso, sin que su presencia en la estructuración del recurso, a pesar de alejarse en la técnica que para dicha reestructuración ha venido insistiendo la doctrina de este Sala, constituya motivo para su inadmisión.

En cuanto a la resolución impugnada, la Sala declara que la misma es de aquéllas que pueden ser impugnadas mediante el recurso de casación. El recurso fue interpuesto oportunamente.

En primer lugar, el recurrente debe remitirse al artículo 1160 del Código Judicial, el cual claramente establece los requisitos que debe contener el escrito de formalización de este recurso extraordinario. El citado artículo nos especifica cuáles son los puntos que deben conformar el recurso. El primer requisito se refiere a la causal o causales que se invocan, seguidamente, los motivos en que se fundamenta el recurso y como tercer punto las infracciones de las normas de derecho y su debida explicación.

En primer término, la Sala observa que la causal está invocada incorrectamente así: "infracción de normas sustantivas de derecho al presentarse una violación directa de la ley por omisión, puesto que se realiza una exclusión evidente de la norma aplicable al presente proceso". No obstante, la forma correcta es: "Infracción de normas sustantivas de derecho, en concepto de violación directa, lo cual ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida".

Los motivos aparecen estructurados como un recuento procesal del caso, haciendo alusión, inclusive, a la primera instancia y se formulan en forma de alegatos. Del conjunto de los mismos, se aprecia que la censura la hace consistir el recurrente en una pretendida causal de nulidad, la de falta de personería sustantiva activa, dado que la legitimidad para ejercitar el derecho a la devolución de las casetas le correspondía al Municipio de Panamá, y, por lo tanto, era esta Corporación municipal la que ostentaba la legitimación sustantiva activa. No obstante, la falta de personería sustantiva no constituye una causal de nulidad, la que sería atacable, en casación, por medio de casación en la forma, y no en el fondo; concretamente, por la causal establecida en el artículo 1155, numeral 1°, en relación con el artículo 722, ordinal 3°, ambos del Código

Judicial. No obstante, es evidente que la legitimación en la causa, sea activa o pasiva, constituye un requisito para la sentencia de fondo, y no es, por esa razón, un acto que pueda ser censurable con respecto a errores in procedendo.

Por su parte, las disposiciones infringidas lo son, en apreciación del recurrente, el artículo 722 del Código Judicial, que se corresponde con una norma de incidencia procedimental, encaminada a la nulidad de lo actuado por haber desconocido la ausencia de personería adjetiva, y que son inconsistentes con la causal invocada por el recurrente, que es una causal de fondo.

Las expresadas circunstancias conducen a que la labor de la Sala, que debe ser analizar la conformidad de la sentencia con las normas sustantivas y, en caso negativo, anularla casando la sentencia o, de tratarse de errores in procedendo, declarar la nulidad de los actos de procedimiento realizados al margen del ordenamiento procesal, se torne en la de imposibilidad lógica, al enfrentarse, en primer término, con la censura de violación de una disposición sustancial, señalar el cargo específico a la sentencia, que se ubica dentro de la censura con una causal de fondo, pero, al traer como su consecuencia lógica la naturaleza de la norma procesal vulnerada, en lugar de invocar, como debió hacerlo, una norma de derecho sustancial, ubica el yerro del juzgador en la infracción de una norma que se compadece con la casación por errores in procedendo y no in iudicando, como lo es la norma contenida en el artículo 722 del Código Judicial, como la quedado señalado anteriormente.

Estas circunstancias hacen que el recurso devenga ininteligible y le imponga a la Sala la obligación de aplicar el artículo 1167 del Código Judicial.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República o por autoridad de la ley, DECLARA INADMISIBLE el recurso de casación en el fondo, propuesto por RICHARD ZAFRANI KADOCH, mediante apoderado judicial.

SE CONDENA al recurrente por la suma de SETENTA Y CINCO BALBOAS (B/.75.00), en concepto de costas en casación.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Interino

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MARÍA DE LOS SANTOS FUENTES DE VEGA, FÉLIX AMABLE PONCE Y COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. A. RECURREN EN CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍA QUE AQUELLA LE SIGUE A ESTOS. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Dentro del proceso ordinario de mayor cuantía que **MARÍA DE LOS SANTOS FUENTES DE VEGA le sigue a FÉLIX AMABLE PONCE y COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. A.**, ambas partes han interpuesto recurso de casación contra la resolución de 29 de enero de 1996, dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial.

Cumplidas las reglas de reparto, el negocio se fijó en lista a fin de que las partes hicieran uso del término concedido para la presentación de sus alegatos, oportunidad que fue aprovechada por ambas, tal como se observa a fojas 416 y 417 (demandado) y fs. 418 a 420 (parte actora).

La Sala procede al examen de los recursos de casación en atención a las

exigencias que determina el artículo 1165, en concordancia con el 1160, ambos del Código Judicial.

En primer lugar, de fojas 387 a 392 consta el recurso de casación formalizado por la representación de la parte demandante, que expresa como única causal de fondo la infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en la apreciación de la prueba, el cual según se ha podido observar no cumple con los presupuestos procesales para acceder a su admisión.

Veamos.

En base a la causal probatoria invocada el casacionista alega como cuestión de hecho, entre otros puntos, lo siguiente:

> "SEGUNDO: La sentencia dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, referida en el anterior motivo, sin duda alguna que al no valorar ni apreciar las pruebas periciales de folios 264 a 265 y 266, conforme a derecho corresponde, desde luego que a pesar de haberse demostrado plenamente el daño moral que sufrió mi representada por la pérdida del esposo, no lo hizo extensivo en su totalidad a la compañía demandada, que solidariamente es similar al demandado FÉLIX AMABLE PONCE". (Subraya la Sala).

Lo planteado es incongruente con la causal probatoria invocada, pues no se pueden determinar grados de responsabilidad solidaria de la empresa de seguros mediante pruebas que demuestran el daño sufrido por la señora **FUENTES DE VEGA.** Este tema de la responsabilidad solidaria debió ser atacado a través de otra de las causales de fondo descritas por el artículo 1154 del Código Judicial, pues no son pertinentes, al menos en este caso, las referentes a los medios de prueba.

Aunado a lo expuesto la norma sustantiva que se cita como violada es incompatible con el aludido cargo, por lo que, lógicamente, no se explica en el concepto de su infracción, cómo de tal precepto pudo haber nacido la solidaridad que se alega.

Por tanto, no puede admitirse este recurso.

Igualmente, el recurso de casación interpuesto por la contraparte (fs.398-404) presenta una pluralidad de defectos que lo tornan improcedente. Veamos:

En este caso, el recurrente invoca la causal de fondo correspondiente a la Infracción de normas sustantivas en el concepto de violación directa.

Se expresan nueve (9) motivos como fundamento de la causal, de los cuales sólo del octavo podría inferirse un cargo de injuricidad contra el fallo de segunda instancia; sin embargo, el mismo resulta un tanto incongruente respecto a la causal pues señala la violación directa de normas del Código Judicial, las cuales por lo general son de naturaleza adjetiva. Los otros motivos revelan un recuento de hechos relacionados con el proceso y describen las actuaciones que se han verificado hasta ahora; de modo que están estructuradas en forma de alegatos y se cita en uno (el noveno) una norma de derecho, todo lo cual no es acorde con el contenido y la forma que debe tener este apartado del recurso de casación.

En el siguiente apartado, dedicado a las normas de derecho, también se observan diversos errores que lo hacen ininteligible. Entre estas deficiencias sobresale el haber citado normas del Código Judicial en conjunto, explicando de igual manera el concepto de su infracción, lo que no es compatible con la causal de fondo invocada que debe referirse a normas sustantivas y tampoco con la técnica de casación sobre este punto, que exige que cada norma se cite en forma individual y sea precedida de su respectivo concepto de violación.

Además, en las únicas disposiciones que están seguidas de una explicación independiente, como el artículo 32 del Código Civil, se incurre en el error de citar otra norma (art. 707) del Código Judicial expresando consideraciones sobre ésta última, a pesar de que posteriormente se cita en forma individual, pero

atribuyendo su infracción en atención a otra causal de fondo. (V. pág.42)

Lo que se deja expuesto obliga a esta Sala a rechazar el recurso de casación pues resulta ininteligible.

Debido al análisis expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE los recursos de casación interpuestos por MARÍA DE LOS SANTOS FUENTES DE VEGA y por FÉLIX AMABLE PONCE y COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE SEGUROS, S. A. en el proceso ordinario de mayor cuantía que Aquella le sigue a Estos.

Las costas de casación se fijan en la suma de CIEN BALBOAS CON 00/100 (B/100.00) a cargo de cada uno de los recurrentes.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

BALDOMIR KRISAJ Y EDITH CALVERA DE KRIZAJ RECURREN EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO QUE LE SIGUEN A INVERSIONES BAHÍA KAPA, S. A. Y OTROS. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado DARÍO EUGENIO CARRILLO GOMILA, actuando en nombre y representación de BALDOMIR KRIZAJ y EDITH DE KRIZAJ, recurre en casación contra los autos calendados el 3 y 21 de junio de 1996, proferidos por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso ordinario de mayor cuantía promovido por BALDOMIR KRIZAJ y EDITH DE KRIZAJ contra INVERSIONES VISTA BAHÍA KAPA, S. A., INVERSIONES VISTA BAHÍA EPSILOR, S. A., INVERSIONES VISTA BAHÍA BETA, S. A., INVERSIONES VISTA BAHÍA DELTA, S. A., INVERSIONES VISTA BAHÍA MI -M-, S. A., INVERSIONES VISTA BAHÍA OMICRON, S. A., INVERSIONES VISTA BAHÍA PI -P-, S. A., INVERSIONES VISTA BAHÍA SIGMA, S. A., INVERSIONES VISTA BAHÍA GI -G-, S. A., INVERSIONES VISTA BAHÍA HITA, S. A., INVERSIONES VISTA BAHÍA TAF, S. A., INVERSIONES VISTA BAHÍA XI -X-, S. A., INVERSIONES VISTA BAHÍA ZITA, S. A., INVERSIONES VISTA BAHÍA ALPHA, S. A., INVERSIONES VISTA BAHÍA RO -R-, S. A., INVERSIONES VISTA BAHÍA PSI, S. A., INVERSIONES VISTA BAHÍA NI -N-, S. A., INVERSIONES VISTA BAHÍA LAMDA, S. A., INVERSIONES VISTA BAHÍA ZHETA, S. A., INVERSIONES VISTA BAHÍA GAMA, S. A., INVERSIONES VISTA BAHÍA OMEGA, S. A. INVERSIONES VISTA BAHÍA IOTA, S. A.; JAMES H. RAY JR., AUTUM TRADING CORP., KREPORT INVESTMENTS, INC. y CORPORACIÓN DE INVERSIONES NAVALES, S. A.

Ingresado el expediente a la Secretaría de la Sala Civil, se fijó en lista por el término que señala la ley, para que las partes alegaran sobre la admisibilidad del recurso, término que fue aprovechado por ambas partes.

Cumplidos los trámites procesales inherentes a esta clase de recurso, pasa esta Sala de Casación Civil a pronunciarse sobre la admisibilidad del mismo, tomando en cuenta para ello los requisitos contemplados en el artículo 1165 del Código Judicial, así como también las exigencias formales señaladas en el artículo 1160 de la precitada legislación.

Un estudio minucioso del expediente resalta que el auto decretado por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, se dictó el 3 de junio de 1996 y fue notificado mediante edicto que se desfijó el 7 de junio del año en curso. Contra el auto de 3 de junio de 1996 que se pretende recurrir en casación, el recurrente hizo el anuncio de casación el 26 de junio de 1996,

visible a foja 158 del expediente, resultando extemporáneo dicho anuncio.

En cuanto al auto de fecha 21 de junio de 1996, proferido por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, por medio del cual se RECHAZA DE PLANO por improcedente el recurso de reconsideración propuesto por el Lic. DARÍO EUGENIO CARRILLO GOMILA, la Sala advierte que esta resolución no es recurrible en casación.

Es evidente, por lo expuesto, que la Sala debe decidir a favor de la inadmisibilidad, toda vez que el recurso no ha sido interpuesto en tiempo oportuno, como lo exige, con claridad meridiana, el ordinal 2° del artículo 1165. No considera la Sala ocioso aprovechar la oportunidad para recordarle al Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, y, en general, a los Tribunales Superiores de Justicia en los diversos Distritos Judiciales, el celo que deben desplegar en el estudio de la interposición de los recursos de casación, y desestimar aquellos que no están comprendidos en los presupuestos establecidos por el artículo 1165, en aras de una sana economía procesal.

Por las razones expuestas, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casación, propuesto por BALDOMIR KRIZAJ y EDITH DE KRIZAJ, mediante apoderado judicial.

Las obligantes costas se fijan en la suma de SETENTA Y CINCO BALBOAS (B/.75.00).

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Interino

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

LA FISCALÍA TERCERA SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO DE REPOSICIÓN DE CUPONES EXTRAVIADOS INCOADO POR OMAYRA GARCÍA DE BERBEY CONTRA EL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO Y CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. SALVAMENTO DE VOTO DEL MAG. RAFAEL A. GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

Dentro del Proceso Sumario de Reposición de Cupones Extraviados propuesto por **OMAYRA DE BERBEY** contra el Ministerio de Hacienda y Tesoro y la Contraloría General de la Nación, la Fiscal Tercera Superior del Primer Distrito Judicial ha formalizado recurso de casación, en el fondo, contra la resolución de 18 de marzo de 1996, dictada en referido proceso por el Primer Tribunal Superior.

Cumplidas las reglas de reparto el negocio se fijó en lista para que las partes alegaran en cuanto a la admisibilidad del recurso, respecto a lo cual sólo la parte demandante-opositora presentó escrito.

Asimismo, se corrió traslado del negocio al Procurador General de la Nación, quien opinó que se admitiera el recurso de casación.

Seguidamente, la Sala procede a la confrontación del recurso con los presupuestos que determina el artículo 1165 del Código Judicial.

En este caso la resolución objeto del recurso es de aquellas contra las cuales lo concede la ley, el recurso ha sido interpuesto en tiempo, pero el escrito de formalización no ha sido desarrollado conforme a la técnica especial

que debe prevalecer en este medio de impugnación, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, la doctrina y la jurisprudencia.

Veamos:

La única causal de fondo ha sido determinada en forma correcta, según los términos en que preceptúa el artículo 1154 del Código de Procedimiento Civil, siendo la de "Infracción de la norma sustantiva de derecho, en concepto de aplicación indebida, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida".

Se establecen dos motivos como fundamento de dicha causal, los que textualmente expresan:

II- MOTIVOS QUE SIRVEN DE FUNDAMENTO A LA PRESENTE CAUSAL.

PRIMER MOTIVO:
El Tribunal Superior de Justicia en su Sentencia Impugnada considera que aún cuando los cupones extraviados sean documentos Al Portador, los cuales fueron desprendidos del cuerpo que contiene los Bonos emitidos por el Estado, el sólo hecho de tener en su poder los bonos de donde emanan los cupones extraviados, crea para la demandante, a juicio del Tribunal, una amplia expectativa de poder lograr una reposición en los mismos a fin de procurar el pago de los intereses que de ellos emana.

Discrepamos con este criterio, toda vez que, las normas consagradas en el Título XVIII, Capítulo II del Código de Comercio lo que persigue es salvaguardar la credibilidad de los actos de comercio al proteger al tenedor en debido curso, de un título de crédito al Portador, porque como bien señala el Lcdo. ELOY. E. ALVAREZ DE LA CRUZ, representante legal de la Contraloría en su escrito de sustentación "cabe la posibilidad de quien alega que su cupón o bono ha sido robado, perdido, destruido y demás, en realidad lo tenga formando parte de negociabilidad, procurando garantizar tal o cual compromiso, cosas que los tribunales no deben permitir".

SEGUNDO MOTIVO: El Primer Tribunal Superior de Justicia se refiere al artículo 962 del Código de Comercio en el sentido de que la citada excerta legal al no establecer una distinción entre estos títulos y los transferibles mediante simple entrega o al Portador.

En relación a este punto, el Tribunal concluye diciendo "De allí que surja entonces, la posibilidad de que los títulos de Créditos Mercantil emitidos al Portador, aún cuando sean emitidos por el Estado, puedan ser anulados.

Este razonamiento del Tribunal resulta equivocado, por cuanto la norma a que hace referencia (el artículo 962), resulta ser la norma adjetiva, que establece el trámite judicial para aquellos Títulos de Crédito que en forma restrictiva para aquellos Títulos Mercantiles transferibles por endoso y a petición del titular.

Por lo que sostenemos que en principio los Títulos Al Portador los cuales sólo son transferibles por la simple entrega, sin necesidad de endoso, escapan a la posibilidad de ser anulados judicialmente." (Fs. 124 a 125)

Según se puede apreciar, en ninguno de los dos motivos se concreta el obligante cargo de injuricidad contra el fallo impugnado.

La función de los motivos, en el recurso de casación, es hacer referencia exclusivamente al cargo o los cargos que se atribuyen a la sentencia de segunda instancia y no la de contener opiniones del recurrente ni de los representantes de alguna de las partes, como se observa en el primero; así como tampoco es procedente que en los mismos se citen normas de derecho y se aluda a la manera

en que fueron violadas por el juzgador, como se hace en el segundo, ya que tales consideraciones son propias de la tercera sección del recurso de casación, establecida especialmente para ese fin.

En el último apartado se observa que, como punto cuarto (ver fojas 127 a 128), se alude al hecho de que el "Tribunal no apreció el argumento del representante de la Contraloría ... en su escrito de oposición en primera instancia ...", transcribiéndose lo que éste señaló sobre la Ley de Documentos Negociables.

Esa no es la forma a emplearse cuando se hace alusión a una norma que se considera violada, porque más bien pareciera que se está señalando un cargo probatorio, situación que resulta totalmente incompatible con la estructuración de cada parte del recurso de casación y con la causal invocada en este caso, la cual se produce cuando se entiende correctamente una norma jurídica que se aplica a un hecho probado pero no regulado por ella, sin que medien errores de hecho o de derecho.

Por tanto, a juicio de la Sala, los defectos que presenta el recurso de casación lo hacen ininteligible por lo que no puede accederse a su admisión.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación interpuesto por la Fiscal Tercera Superior del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso sumario instaurado por OMAYRA BERBEY contra el MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO Y LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(Con Salvamento de Voto)

(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ

El proyecto expresa "en ninguno de los motivos se concreta el obligante cargo de injuricidad contra el fallo impugnado".

Creo que sí se concreta cargo; pero no con la precisión que se podría desear. He de entenderse que los motivos expresan:

1) Que la sentencia considera que los cupones de Bonos del Estado desprendidos son documentos al portador.

2) Que el solo hecho de ser tenedor de los Bonos "crea una amplia expectativa" de titularidad de los cupones para los efectos de solicitar judicialmente su reposición.

3) Que al proceder de tal manera se actúa contra el orden jurídico.

4) Que sólo son reemplazables los títulos de valores o instrumentos negociables nominativos, no los al portador; contrariamente de lo que sostiene la Sentencia recurrida.

Estos son cargos (2) contra la Sentencia; pero mal expuestos. No están desglosados, les falta claridad y denotan un carácter argumentativo, con cita de disposiciones legales.

Considero que procedía mandar a corregir el escrito de formalización.

En lo que se refiere a las disposiciones legales, precisamente el concepto en que se dicen violadas, eso de que la Sentencia no tomó en cuenta o "no apreció el argumento de la representante de la Contraloría General de la República", está fuera de lugar.

El escrito de formalización del recurso de casación no es la oportunidad para argumentar; pero no es cierto, como estima el Proyecto, que eso constituye "un cargo probatorio".

También en este extremo pienso que se debe mandar a corregir.

Fecha ut supra.

(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HECHO

EL LICENCIADO ROLANDO A. SANTAMARÍA INTERPONE RECURSO DE HECHO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL 10 DE JULIO DE 1996, DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL PROCESO ORDINARIO DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA DE DOMINIO INSTAURADA POR VICTORIANO GONZÁLEZ ORTEGA CONTRA ANTHONY LIM O ANTHONY PATRICK LIM, DAMARIS CHONG DE LIM, HORACIO CHIAL Y ADRIENNE PEARL LIM DE CHIAL. MAGISTRADO PONENTE: ELIGIO A. SALAS. PANAMÁ, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CIVIL.

VISTOS:

El licenciado ROLANDO A. SANTAMARÍA en su condición de apoderado especial de **ANTONIO LIM o ANTONIO PATRICK LIM, DAMARIS CHONG DE LIM, HORACIO CHIAL y ADRIENNE PEARL LIM DE CHIAL** ha interpuesto Recurso de Hecho contra el Auto de 10 de julio de 1996, mediante el cual el Primer Tribunal Superior de Justicia NIEGA el término para la formalización del recurso de casación que anunciara contra la resolución de 25 de junio de 1996, dictada por dicho Tribunal en segunda instancia dentro del Proceso Ordinario de Prescripción Adquisitiva de Dominio que VICTORIANO GONZÁLEZ le sigue a sus poderdantes.

Según se ha podido observar la resolución impugnada consideró que en este caso no cabía el recurso de casación por no cumplirse el requisito que determina el artículo 1148 del Código de Procedimiento, específicamente el relativo a que la cuantía del proceso no sea menor de B/.5,000.00.

Por su parte el recurrente no comparte el criterio del sentenciador y presenta copia de informes periciales que obran en el proceso, aportados por ambas partes en la etapa probatoria, de los que surge que la cuantía del proceso es superior a los B/.5,000.00.

El Magistrado Sustanciador en este recurso de hecho, solicitó al Tribunal Superior el envío del expediente contentivo del proceso, a fin de decidir lo de lugar.

Del respectivo expediente se infiere que la cuantía del proceso no puede determinarse en base al libelo de demanda, pues el demandante no la fijó. Por tanto, resulta necesario atender a las constancias procesales que obran en autos, las cuales demuestran, claramente, que el valor del terreno, respecto al cual se pretende la declaratoria de prescripción adquisitiva de dominio, supera la suma de B/.5,000.00.

Lo anterior lo demuestran los informes periciales presentados por la parte demandada, visibles a fojas 67 y 80 y, además, los presentados en representación la parte actora, que corren a fojas 88 y 96.

A juicio de la Sala la resolución dictada dentro del presente proceso de prescripción adquisitiva de dominio es recurrible en casación, por lo que procede la admisión del recurso de hecho y la consecuente fijación del término para la formalización del recurso de casación por parte del tribunal de segunda

instancia.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de hecho propuesto por el licenciado ROLANDO A. SANTAMARÍA contra la resolución de 10 de julio de 1996 y, ORDENA al Tribunal Superior que conceda el término respectivo para la formalización del recurso de casación.

Notifíquese.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z. (fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Encargado

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

EL LICENCIADO JORGE JAÉN CASTILLO INTERPONE RECURSO DE HECHO CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL 18 DE JULIO DE 1996, DICTADA POR EL PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL PROCESO ORDINARIO INSTAURADO POR LEONCIO ELÍAS CASTILLO CONTRA RAQUEL VALDÉS DE HERDON. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA CIVIL.

VISTOS:

El Licenciado JORGE JAÉN CASTILLO, actuando en su condición de apoderado judicial del señor LEONCIO ELÍAS CASTILLO, ha recurrido contra la resolución de 18 de julio de 1996, proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia, por medio del cual se NIEGA el recurso de hecho interpuesto contra la resolución de 1° de julio de 1996, dictada por ese Cuerpo Colegiado, en virtud del cual se REVOCA la Sentencia N° 68 de 6 de septiembre de 1994, dictada por el Juez Séptimo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Mediante proveído que corre a foja 29 del expediente, se concedió el término de tres (3) días para que las partes alegaren lo que estimaren conveniente a sus intereses. En dicha oportunidad procesal, compareció el recurrente a presentar el escrito de alegato, quien señala entre otras cosas que, el Tribunal negó el término para la formalización del recurso de casación, a pesar de que, se trataba de una sentencia que se enmarcaba en el numeral 1° del artículo 1149, del Código Judicial, la misma no cumplía con el requisito señalado en el artículo 1148 de la misma excerta legal, en cuanto a la cuantía, que no debe ser menor de CINCO MIL BALBOAS (B/.5.000.00). Admite que se trata de una demanda de prescripción adquisitiva en la cual no se señala cuantía de la misma, pero, de acuerdo al recurrente, existen suficientes elementos para determinarla, citando los siguientes:

"1. El valor real de la Finca.
2. El valor comercial de la Finca.
3. El valor de las mejoras hechas en dicha Finca.
4. Extensión superficial de la Finca (89 hectáreas, 535 metros con 72 decímetros cuadrados".

Precluido el término de alegatos en este negocio y encontrándose en la etapa de admisibilidad, el Magistrado Sustanciador requirió del Tribunal demandado, el envío del expediente contentivo del proceso ordinario de prescripción adquisitiva propuesto por LEONCIO ELÍAS CASTILLO contra RAQUEL VALDÉS DE HERDON, en base a lo preceptuado en el artículo 1139 del Código Judicial. Una vez ingresado, el expediente que consta de 213 fojas, es deber de la Sala pronunciarse, si es recurrible en casación la resolución proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 1° de julio de 1996, habida cuenta que se ha negado expresamente el recurso de casación, tomando en cuenta que el mismo ha sido interpuesto en tiempo oportuno, tal como lo exige el ordenamiento legal en esta materia.

En el presente negocio, no se ha fijado la cuantía en la demanda, siendo éste uno de los elementos señalados en el numeral 2 de artículo 1148 del Código Judicial, para que sea susceptible del recurso de casación, pero, la referida norma también señala que, en el evento de que no se haya fijado la misma, y existieran suficientes elementos para determinarla, se admitirá el recurso si excediere de la suma prevista.

Observa la Sala que en el expediente contentivo del proceso ordinario de prescripción adquisitiva, se acompañó como prueba, certificación expedida por el Registro Público, (f. 4) en el que consta que la propietaria del inmueble lo es la señora RAQUEL VICTORIA VALDÉS DE HERDON, parte demandada en este proceso. Que la Finca N° 44,682, inscrita al Folio 330 del Tomo 1062, de la Sección de Propiedad, Provincia de Panamá, tiene una superficie de 89 hectáreas, 535 metros cuadrados con 72 decímetros cuadrados.

Consta también, de fojas 58 a 61, el dictamen rendido por el perito designado por el Tribunal y por la parte actora, en cuanto a la inspección ocular que efectuaron sobre el inmueble motivo de litigio, los cuales concluyen que las mejoras realizadas sobre la finca ascienden a la cantidad de VEINTIÚN MIL SETECIENTOS CINCUENTA BALBOAS (B/.21.750.00).

La Sala considera que la superficie del inmueble más el dictamen pericial en cuanto a las mejoras existentes, son elementos suficientes para determinar la cuantía, habida cuenta también que en el proceso ordinario de prescripción adquisitiva es un medio para adquirir el dominio, una vez sea demostrada la posesión del inmueble, de conformidad con lo preceptuado en la ley.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el recurso de hecho, y ORDENA al Primer Tribunal Superior de Justicia que conceda el término para la formalización del recurso de casación.

Notifíquese.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) RAFAEL A. GONZÁLEZ (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Interino

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN

EUGENE MCGRATH RENAULD INTERPONE RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DEL 14 DE JULIO DE 1995, DICTADA POR LA SALA PRIMERA DE LO CIVIL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DENTRO DEL PROCESO SUMARIO DE LANZAMIENTO INCOADO POR BANCO NACIONAL DE PANAMÁ CONTRA EUGENE MCGRATH RENAULD. MAGISTRADO PONENTE: ROGELIO A. FÁBREGA Z. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA PRIMERA CIVIL.

VISTOS:

Contra la resolución de 17 de octubre de 1996, en el recurso de revisión interpuesto por EUGENE McGRATH RENAULD contra la sentencia del 14 de julio de 1995, dictada por la SALA PRIMERA DE LO CIVIL, de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso sumario de lanzamiento incoado por el BANCO NACIONAL DE PANAMÁ contra EUGENE McGRATH RENAULD en virtud del cual se declaró inadmisible el recurso de revisión, ha promovido recurso de reconsideración el apoderado del recurrente en revisión, con la finalidad de que la Sala revoque en todas sus partes la aludida resolución y, en su lugar, declara admisible el recurso de revisión.

La censura del recurrente se ubica en una confusión en que incurre, en su apreciación, la Sala relacionada con la cita que, en la sentencia recurrida, se hace de 23 de junio de 1992, y que aparece reproducida en el Registro Judicial

de junio de 1992, que corre desde la página 124 de la expresada publicación. No obstante, es equivocada la tesis del recurrente, toda vez que la sentencia recurrida comparte la tesis del Magistrado Sustanciador en la sentencia citada, y la hace suya en el fallo recurrido en referencia. Ello es así por cuanto que el artículo 1189 del Código Judicial regula el recurso extraordinario de revisión, el que sólo cabe contra supuestos específicamente consagrados en la norma que lo instituye. En la referida norma se admite la procedencia del recurso de revisión en los procesos de única instancia ante la Corte Suprema de Justicia, por un Tribunal Superior o por un Juez del Circuito, o, en tratándose de procesos que admiten apelación, ésta no se haya surtido, es decir, que no se haya concluido, que no es ni remotamente la hipótesis del conocimiento, en que no solamente fue surtida y resuelta la apelación, sino que la sentencia que la resolvía fue objeto de recurso de casación por parte de esta Sala. Por ello, no se ha cumplido el presupuesto para que proceda el recurso de revisión, es decir, que se trate de sentencias de única instancia o, excepcionalmente, en los casos de segunda instancia en que el recurso de apelación no se haya surtido.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA EN TODAS SUS PARTES la resolución de 17 de octubre de 1996, en el recurso de revisión interpuesto por EUGENE McGRATH RENAULD contra la sentencia de 14 de julio de 1995, dictada por la Sala Primera de lo Civil, de la Corte Suprema de Justicia dentro del proceso sumario de lanzamiento incoado por BANCO NACIONAL DE PANAMÁ contra EUGENE McGRATH RENAULD.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.

(fdo.) ELIGIO A. SALAS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO

(fdo.) ELIGIO MARÍN CASTILLO
Secretario Interino

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA SEGUNDA DE LO PENAL

NOVIEMBRE 1996

AUTO APELADO

FIANZA DE EXCARCELACIÓN APELADA, A FAVOR DE MOISÉS ALEJANDRO GARCÍA RAMOS, SINDICADO POR DELITO DE HOMICIDIO, EN PERJUICIO DE ROGELIO ARTURO HARRY ZORRILLA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Procedente del Segundo Tribunal Superior de Justicia se recibió en la Secretaría de la Sala de lo Penal el cuadernillo de fianza que contiene el auto calendado 27 de septiembre de 1996, mediante el cual se deniega el beneficio de excarcelación solicitada a favor de **MOISÉS ALEJANDRO GARCÍA RAMOS**, sindicado por el delito de homicidio en detrimento de Rogelio Harry Zorrilla.

El licenciado Jorge Isaac Macias Cerezo, quien funge como la defensa técnica del sindicado, anunció recurso de apelación contra esa resolución judicial, y al ser concedido en el efecto diferido tal como lo contempla el Código Judicial en el artículo 2179 con relación al 2165, permite a esta instancia superior examinar la misma.

HECHOS

El día 5 de febrero de 1995 en horas de la madrugada al dirigirse caminado a su casa, por la entrada de la barriada el Polvorín, Rogelio Harry Zorrilla y su concubina Daisy Elizabeth Vásquez Cedeño fueron sorprendidos por aproximadamente siete sujetos, algunos de ellos portaban pistolas y otros cuchillos, siendo herido de muerte con arma blanca el joven Harry Zorrilla, hecho ocurrido la entrada de la barriada El Polvorín, en la entrada de Cativá, provincia de Colón.

ANÁLISIS DE LA SALA

De la investigación, que consta de dos tomos y está pendiente de resolver, se advierte que en su declaración la joven Vásquez Cedeño, quien acompañaba al occiso el día de los hechos, describe a los sujetos y mediante diligencia de reconocimiento en rueda de detenidos señala a Moisés García como el sujeto que portaba el cuchillo de cacha de venado con el que hirió a Harry Zorrilla (fs. 324).

Por otra parte, uno de los sujetos también identificado, José Adrián Vera Segundo, afirma que en horas de la tarde del día de los hechos cuando se encontraba en el campo de béisbol de Nuevo Colón, escuchó a Moisés Alejandro García Ramos decir que habían robado a un joven en Cativá, pero que no le había quitado nada bueno (fs. 36-37).

En efecto, sobre este aspecto la joven Vásquez Cedeño en su declaración manifestó que al hoy occiso le robaron un reloj marca Casio y a ella una cadena de oro (f. 21).

En informativo rendido por José Alfredo Markland Cerezo, admite que participó en el ilícito investigado porque Waby, Yai, Tito, Adrián, Moisés y Pepe lo invitaron; y que García Ramos era la persona que portaba un cuchillo (fs. 49-50).

Si bien al rendir declaración indagatoria García Ramos niega haber participado en la muerte de Harry Zorrilla (f. 122), y que Markland Cerezo no se ratifica del informativo rendido en su indagatoria (fs. 125-126), no es menos cierto que hay evidencia de un vínculo entre García Ramos y los otros implicados en el homicidio doloso de Harry Zorrilla, todo lo cual motiva a esta corporación de justicia a confirmar el fallo puesto a nuestra consideración.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el auto apelado.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO DE ENJUICIAMIENTO APELADO

APELACIÓN DE AUTO DE PROCEDER, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A JOSÉ TRUJILLO MONTAÑO, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE CASIMIRO POTES SEGURA Y JORGE BARQUEÑO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante resolución de 15 de abril del año en curso el Segundo Tribunal Superior de Justicia llamó a juicio a **JOSÉ TRUJILLO MONTAÑO** por el delito de homicidio contenido en el Capítulo I, Título I, Libro II del Código Penal, en perjuicio de Casimiro Potes Segura y Jorge Barqueño (fs. 565-577).

Dicha decisión judicial fue apelada por el imputado y su abogado defensor, licenciado Narciso Herrera Grau, quien dentro del término de ley sustentó el recurso anunciado.

FUNDAMENTO DEL APELANTE

El licenciado Herrera Grau, solicita la revocatoria del auto encausatorio y se dicte un sobreseimiento a favor de su defendido, al sostener que los testimonios allegados a la investigación son de mera referencia y ninguno es contundente. Además, que el examen balístico realizado por el detective José Chavarría de la Policía Técnica Judicial, descartó de manera definitiva que el arma de fuego propiedad de Trujillo Montaño fuera la que cercenó la existencia de Potes Segura (fs. 579-580).

OPINIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

El licenciado Dimas E. Guevara G., Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial, en oposición a las pretensiones de la defensa técnica sostiene que de los testimonio de Pilar Baloy Badillo, Rufo Valencia Pedroza, José Victoriano Lozano, Cristina Rodríguez, Dionel Caisano Sergio Caisano, Sofía Muñoz, Norbando Rodríguez Lorenzo y Arturo Muñoz, se crean suficientes elementos para vincular al procesado al ilícito investigado, porque si bien no existen testigos presenciales del mismo, y que el imputado niega su participación, convergen suficientes indicios, los cuales unidos conforman plena prueba en su contra (fs. 582-525).

ANÁLISIS DE LA SALA

Se trata del homicidio de Casimiro Potes Segura y Jorge Barqueño a consecuencias de heridas sufridas con arma de fuego, hecho ocurrido el 19 de agosto de 1994 en el sector de Mostrencoza, corregimiento de Taimatí, provincia de Darién, en momentos en que se encontraban labrando un bote de madera en esa área montañosa.

La lectura del expediente judicial determina que el peritaje balístico realizado por José Chavarría con el objeto de comparar el proyectil encontrado en el cadáver de Potes Segura con proyectiles patrones disparados con el arma de

fuego **-rifle-** propiedad del sindicado, resultó negativo (fs. 502-503); y que igual resultado arrojó el examen pericial de los ocho rifles decomisados en la comunidad de Taimatí (fs. 592-594).

El señor Trujillo Montaño en todo momento ha afirmado que si bien salió a caballo como a las siete de la mañana al monte a cargar madera, no estuvo cerca del lugar donde se perpetraron los homicidios, situación que se desvirtúa con lo declarado por Rufo Valencia Pedroza (fs. 81-82), quien se percató de unas huellas cerca del área de los acontecimientos, similares a las de las botas del imputado, las cuales se diferencian de las demás, porque su dueño les hace unas marcas en la suelas, tal como se aprecia a foja 439; mismas que fueron fotografiadas, según la diligencia de inspección ocular (f. 91).

La presencia del imputado por el área también es reafirmada por José Victorino Lozano Ibalguen (fs. 97-101) Cristina Rodríguez (fs. 160-161), Dionel Caizamo Berrugate (fs. 170-172) y Sergio Caisamo Berrugate (fs. 173-175).

Por otro lado, se tiene lo declarado por el menor de edad Arturo Muñoz, quien afirma que estando detenido junto con Trujillo Montaño, éste le contó como había dado muerte a Potes Segura y Jorge Barquero, explicándole que a este último incluso lo golpeó en la cabeza con un palo (fs. 484-vt).

El punto anterior es importante para vincularlo al ilícito, toda vez que en la diligencia de exhumación se consigna que los restos de Jorge Carreño presentaban el hueso Atlas fracturado, además de dos perforaciones (fs. 479-480).

Según las otras declaraciones allegadas a la investigación, al parecer el imputado se había disgustado con el hoy occiso, Potes Segura, porque éste no le había prestado una motosierra, la que desde la muerte violenta de su dueño desapareció.

Como quiera que existen graves indicios que incriminan al imputado Trujillo Montaño con los dos homicidios perpetrados, esta Sala acoge la decisión de primera instancia.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA el auto apelado.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

AUTO CONSULTADO

PROCESO QUE SE SIGUE A FRANCISCO SABA ACOSTA, SINDICADO POR LA COMISIÓN DEL DELITO DE HOMICIDIO, COMETIDO EN PERJUICIO DE MANUEL FRANCISCO ASPRILLA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

En cumplimiento del imperativo procesal de la consulta, el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial ha remitido a esta Superioridad la resolución calendada 12 de septiembre de 1996, que sobresee definitivamente a Francisco Saba Acosta, sindicado por el delito de homicidio cometido en perjuicio de Manuel Francisco Asprilla.

El Tribunal de la causa, fundado en el numeral 3 del artículo 2210 del Código Judicial, tomó esa decisión por considerar que las pruebas allegadas al cuaderno penal coinciden en que "el finado golpeó ... a la señora MENA ... , se resistió al arresto e incluso trató de despojar al sindicado de su arma y se dio a la fuga lo que motivó los disparos de advertencia y luego los generadores del fatal desenlace" (f. 267).

Las sumarias dan cuenta de que en la madrugada del 3 de agosto de 1994, en la comunidad de Cuango, Distrito de Santa Isabel, Provincia de Colón, Elena Mena Severino se dirigió a la residencia de Francisco Saba Acosta, cabo primero de la Fuerza Pública, para denunciar que Francisco Asprilla la había agredido físicamente. Advertido del incidente, el cabo Saba se dirigió hasta la casa donde se hospedaba Asprilla para arrestarlo. Llegado allí, se suscitó una riña entre ambos, durante la cual la víctima trató de despojar al sindicado de su arma de reglamento, lo que ocasionó que el cabo Saba utilizara su arma de fuego para realizar varios disparos hacia el aire y otros hacia la anatomía de Asprilla. El protocolo de necropsia revela que el finado presentó tres heridas de ingreso de proyectil de arma de fuego, uno en el tórax y dos en el glúteo izquierdo (f. 46). Concluye el dictamen médico-legal afirmando que Francisco Asprilla murió por "A. SHOCK HIPOVOLÉMICO B. HERIDAS DE MIOCARDIO Y PULMÓN C. HERIDA POR ARMA DE FUEGO (f. 54).

Para decidir sobre la consulta que se plantea, resulta imprescindible adentrarse en el examen de la encuesta penal, a fin de comprobar si concurre en este caso la causa de justificación denominada legítima defensa o defensa necesaria. Con tal objeto, es importante resaltar que el sindicado Francisco Saba actuó frente a una agresión injusta y actual, tal como se desprende de su declaración indagatoria, en la que relata que "cuando le agarré la mano derecha para ponerle las esposas ... él jaló fuerte y me pegó en la cara ... me agarre con el y el quería agarrarme el revólver ... me tiro una patada con la pierna ..." (f. 186). Este relato es corroborado por el testigo Pedro Molinar Valencia, quien destaca que cuando el cabo Saba le comunicó a Asprilla su arresto éste "no quiso que lo esposaran, ahí empezó la lucha ... el muerto ... se avalanzó hacía el guardia, tratando de quitarle el arma ... al ver que no pudo ... lo único que hizo fue propinarle un puñetazo en el oído izquierdo, otro en la nuca y el otro en el costado izquierdo ..." (f. 24).

De otra parte, por lo que hace a la posible utilización de un medio racional para repeler o impedir la agresión, resulta importante señalar que el sindicado en su declaración indagatoria expone que antes de disparar contra la víctima realizó "tiros de advertencia ..." (f. 186). Ese relato, que es corroborado con la declaración de Daniel Góndola Martínez (f. 32), comprueba que el imputado utilizó de manera racional su arma de fuego calibre 38, el cual era el único medio que tenía a su disposición para enfrentar la amenaza de que era objeto. Por lo expuesto, no es posible exigirle otra conducta al imputado debido al peligro inmediato en que se encontraba.

En cuanto a la exigencia legal relativa a no poder evitar o eludir la agresión de otra manera, la Corte considera que se evidencia la satisfacción de ese requisito legal con la declaración del testigo Pedro Molinar Valencia. En efecto, este deponente relata que cuando Asprilla recibió un disparo que "le rozó la cara ..." (f. 24), "se dio la vuelta ... e intento agredir nuevamente al cabo primero por lo que el cabo ... tuvo que hacerle otro disparo en el tórax (f. 25). Valga destacar que el disparo que advierte el testigo puede coincidir con la herida que el informe médico-legal describe como "una herida ovalada de bordes irregulares por debajo del labio inferior ..." (f. 46), herida que, el Dr. Carlos De Bernard, médico forense del Instituto de Medicina Legal del Ministerio Público, estima que "dadas las características del terreno -pedregoso- es poco probable que haya sido a consecuencia de la caída" (f. 188-189).

Por otro lado, el sindicado no incurrió en conducta que provocara el hecho punible, pues la declaración de Elena Mena Severino revela que el cabo Saba le pidió "decentemente" al finado que "lo acompañara a la corregiduría, ahí fue donde el se le avalentenó (sic) contra el agente e intentó quitarle el revolver, entrándole a puñetazos ..." (f. 14).

Las pruebas testimoniales citadas, aunadas a la declaración rendida por el Dr. Carlos De Bernard, médico forense del Instituto de Medicina legal, quien durante la reconstrucción de los hechos confirmó el relato del sindicado (f. 188), y con el informe balístico realizado por la Policía Técnica Judicial, el cual revela que "la versión dada por FRANCISCO SABA ACOSTA, es compatible en cuanto a distancia, trayectoria y recorrido de los proyectiles ..." (f. 255), constituyen elementos probatorios concluyentes para comprobar la causa de justificación invocada.

Por las anteriores consideraciones, LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el auto consultado.

Devuélvase y Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IMPEDIMENTO

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAG. HUMBERTO A.COLLADO T., DENTRO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, INTERPUESTO CONTRA EL AUTO EMITIDO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL, MEDIANTE EL CUAL SE CONFIRMA EL RECHAZO DE PLANO DEL INCIDENTE DE RECALIFICACIÓN DEL SUMARIO SEGUIDO A RICARDO ARDITO JUÁREZ, SINDICADO POR DELITO DE HURTO PECUARIO, EN PERJUICIO DE LA SOCIEDAD GANADERA PABSA, S. A. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Magistrado **HUMBERTO A. COLLADO T.**, manifestó impedimento para conocer del recurso extraordinario de casación, interpuesto contra el auto emitido por el Tribunal Superior de Justicia, del Cuarto Distrito Judicial, mediante el cual se confirma el rechazo de plano del incidente de recalificación del sumario seguido a RICARDO ARDITO JUÁREZ, sindicado por delito de hurto pecuario, en perjuicio de la sociedad GANADERA PABSA, S. A., con base al numeral 5° del Artículo 749 y el Artículo 2283 del Código Judicial.

La manifestación de impedimento se da en los siguientes términos:

> "En el Proceso Penal al que se refiere el presente recurso de casación señalo que, a nombre y representación de GANADERA PABSA, S. A., conforme a poder que me fuera otorgado por su representante legal, señor CESAR ALBERTO ARDITO BARLETTA VILLARREAL, formalice acusación particular contra PABLO DOMINGO ARDITO JUÁREZ y RICARDO ARDITO JUÁREZ, razón por la cual me encuentro obligado a solicitar que se me separe del conocimiento del presente caso ..."

Al momento de calificar el impedimento, la Sala considera que el mismo es conducente, por lo que a efectos de alejar cualquier duda sobre la imparcialidad que debe caracterizar cada una de las actuaciones judiciales de esta Corporación y sus integrantes, debe ser declarado legal la manifestación de impedimento del Magistrado **HUMBERTO A. COLLADO T.**

En virtud de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por el Magistrado HUMBERTO A. COLLADO T., y DESIGNA al Magistrado que corresponda en turno en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, para que lo reemplace en esta causa.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL DEFENSOR DE OFICIO DENTRO DEL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ELLIS MURILLO GODOY, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO Y ROBO EN PERJUICIO DE ARCENO AGRAZAL Y LA EMPRESA VIDRIOS PANAMEÑOS. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ante la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el licenciado **GABRIEL ELÍAS FERNÁNDEZ**, Defensor de Oficio, manifiesta impedimento para conocer del recurso de revisión promovido por el señor ELLIS ALFONSO MURILLO GODOY.

El licenciado **FERNÁNDEZ** en su escrito de manifestación de impedimento para actuar como defensor en el presente recurso de revisión, señala lo siguiente:

> "Fundamentamos nuestro impedimento en base a conflicto de Intereses, ya que en esa misma causa fui designado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, para asumir la defensa de CARLOS CARRIÓN, quien brindó declaraciones contrarias en muchos aspectos, a la vertida por MURILLO GODOY, además en nuestros Alegatos en el Acto de Audiencia Oral dejé ver las contradicciones, como elemento de defensa de nuestro patrocinado.".

Sin embargo, la Sala expresa que en materia penal, tal como lo preceptúa el artículo 2283 del Código Judicial, los impedimentos se tomarán en cuenta únicamente en relación con el imputado y como esa no es la situación que se da en el caso presente, es del caso no acceder a la solicitud de impedimento impetrada por el Licdo. GABRIEL E. FERNÁNDEZ, Defensor de Oficio designado para que represente al recurrente ELLIS ALFONSO MURILLO GODOY.

Por lo expuesto, la SALA PENAL de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA que el Licenciado GABRIEL E. FERNÁNDEZ, Defensor de Oficio, NO ESTÁ IMPEDIDO para conocer de la presente causa.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN PENAL

ADMISIBILIDAD DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A RAÚL BURGOS SÁNCHEZ, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante auto de 4 de octubre de 1996 (fs. 174-176), se le concedió un término de cinco días a la parte recurrente con la finalidad de hacer las correcciones indicadas al escrito de casación.

De conformidad al informe secretarial a fojas 182 vuelta, el licenciado Carlos M. Herrera M., presentó el escrito corregido en tiempo oportuno y como quiera que el mismo se ajusta a las observaciones indicadas en el auto de 4 de octubre de 1996, cabe admitir el presente recurso extraordinario de casación en el fondo, dentro del proceso penal seguido a **RAÚL BURGOS SÁNCHEZ.**

Por tanto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, representada por la suscrita Magistrada Sustanciadora, en SALA UNITARIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación y ORDENA el traslado del proceso al señor Procurador general de la Nación, por el término de cinco (5) días, a fin de que emita concepto.

BASE LEGAL: Artículos 2444 y 2445 del Código Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ANTONIO RAMOS COGLEY, POR DELITO CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN PERJUICIO DEL CONSULADO DE PANAMÁ EN NICARAGUA. MAGISTRADO PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Procedente del Segundo Tribunal Superior, ingresó a la Sala Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, el expediente que contiene el recurso de casación presentado por la firma forense Guerra y Guerra, defensora de **ANTONIO RAMOS COGLEY**, en el proceso penal que se le sigue por peculado doloso en perjuicio de la administración pública.

Por cumplidas las reglas de reparto, se fijó en lista por el término de ocho días, al tenor de lo que dispone el artículo 2443 del Código Judicial, con el propósito de llevar al conocimiento de las partes interesadas, el ingreso de este proceso al Tribunal de Casación. En esta fecha ha vencido el término de lista y procede decidir la admisibilidad del recurso extraordinario presentado en este caso.

De conformidad a las constancias procesales el recurso fue anunciado y formalizado dentro de los términos establecidos por la ley, contra sentencia de segunda instancia, por delito que tiene fijada pena de prisión superior a dos años y el mismo fue promovido por la firma forense a la que el procesado le otorgó poder para que asumiera su defensa. Se cumplió así, entonces, con los principios de oportunidad, impugnabilidad objetiva y legitimación subjetiva, según lo preceptuado en el artículo 2441 y el primer párrafo del 2443 del Código Judicial.

Al revisar el texto del escrito mediante el cual se formaliza el recurso de casación en el fondo, se puede constatar lo siguiente:

-En cuanto a la historia concisa del caso, el recurrente hace una relación de los puntos y fases más relevantes de esta investigación penal, poniendo de manifiesto los cargos de injuridicidad de los que adolece la sentencia impugnada.

-Con relación a la causal de fondo que se invoca, por tratarse de una

causal de carácter probatorio y encontrarse la misma dentro del párrafo dos del numeral primero del artículo 2434 del Código Judicial, cabe aceptar la transcripción que se hace de la disposición citada.

-En lo que respecta a los motivos, el casacionista desglosa en 16 puntos algunas consideraciones que no alcanzan, desde el punto de vista técnico, el carácter de motivos, pues se trata de apreciaciones subjetivas y alegatos que no se compaginan con la causal a la cual le sirven de sustento. En ese sentido es impropio el contenido del motivo distinguido como el primero al transcribir un artículo del Código Penal; por su parte, los motivos 2°, 3°, 7°, 8°, 10°, 11°, 12°, 14°, 15° y 16°, en alguna medida guardan relación con otra causal probatoria que es la de error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba, especialmente cuando se anota en forma reiterada que el Tribunal no le prestó atención a las pruebas existentes y a ciertos principios procesales argüidos en los motivos antes enumerados.

En cuanto a las disposiciones legales infringidas y al concepto en que lo han sido, salta a la vista la ausencia de disposiciones de carácter adjetivo, especialmente las que se refieren al valor probatorio y a los principios y directrices de orden procesal que debe tomar en cuenta el juzgador al momento de ponderar el caudal probatorio que fundamenta la parte resolutiva de las resoluciones judiciales. Se trata en este caso de una causal probatoria, esto es, la de error de derecho en la apreciación de la prueba, que implica infracción de la ley sustancial penal y que ha influido en lo dispositivo de la sentencia, por lo tanto, es imperativo en el recurso de casación en el que se invoca esta causal de fondo, especificar qué normas procesales de valoración probatoria han sido violadas por la sentencia impugnada y luego, indicar las disposiciones de la ley sustancial penal que, como consecuencia o, en forma indirecta, de la errada valoración probatoria, también ha sido violada, al punto de incidir directamente en la parte resolutiva o dispositiva de la resolución judicial que se ataca por este medio.

El casacionista se ha limitado a señalar 4 normas sustantivas y ha omitido la referencia a las normas adjetivas, razón por la cual la causal de fondo invocada se ha formalizado de manera incompleta, no sólo porque la mayoría de los motivos esgrimidos no guardan relación directa con ella, sino también por la ausencia de señalamiento de disposiciones procesales infringidas por razón del error de derecho en la valoración de las pruebas existentes en que ha incurrido la sentencia de segunda instancia recurrida en casación.

Los errores anotados no permiten al Tribunal de Casación darle curso al recurso y por tanto, cabe decidir de conformidad a lo previsto por el párrafo final del artículo 2443 del Código Judicial.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación en el fondo presentado en este caso.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A MAGALYS ESTELA CUEVAS REAL DE ZUBIETA Y OTROS POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN PERJUICIO DE LEONARDO LUCAS LA MOTH BETHANCOURT. MAGISTRADO PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

El 27 de septiembre del año en curso, ingresó a la Sala Segunda de esta corporación de justicia el recurso de casación promovido por el licenciado Sidney Sittón Ureta, apoderado judicial de **MAGALYS CUEVAS REAL DE ZUBIETA**, dentro del proceso penal que se le sigue por el delito de hurto agravado en perjuicio del señor Lucas La Month Betancourth.

Luego de dar cumplimiento a las reglas del reparto, se fijó en lista el negocio por el término de ocho días a objeto de comunicar a las partes el ingreso del proceso a esta Sala. Concluido el término de fijación en lista, corresponde determinar sobre su admisibilidad.

Observa este tribunal de casación que la revisión concedida por el Tribunal Superior cumple con los presupuestos del recurso, es decir, se da la impugnabilidad subjetiva y objetiva.

Con respecto a los cuatro requisitos formales tasados en el artículo 2443 numeral 3° se tiene lo siguiente:

La historia concisa del caso se centra en los aspectos procesales más relevantes.

El casacionista ha formulado dos causales -una en el fondo y otra en la forma- pero al citarlas no hace la debida distinción, como exige la técnica en esta materia.

El artículo 2434 ordinal 3° del Código Judicial, lo ha manifestado la Sala en varios fallos, se refiere a dos supuestos que parten de haber incurrido en error de derecho al calificar el delito, a saber: cuando la calificación ha influido en el tipo o en la extensión de la pena aplicable, por tanto, son dos causales que se desglosan así: a) Error de derecho al calificar el delito, si la calificación ha debido influir en el tipo y, b) Error de derecho al calificar el delito, si la calificación ha debido influir en la extensión de la pena aplicable.

Luego entonces, al no quedar claro cuál es la causal que desea invocar el postulante en este caso no puede la Sala Segunda como Tribunal de Casación apreciar si los motivos que le sirven de fundamento y las disposiciones legales que estima infringidas son coherentes con la misma. Por otro lado, el recurrente ha omitido expresar el concepto en que han sido infringidas las normas citadas.

La otra causal invocada es la contemplada en el artículo 2437 numeral 1° que se refiere a la falta de competencia del tribunal. Esta causal procede cuando el vicio formal ha sido reclamado en todas las instancias.

Con relación a los dos motivos, en el primero sólo se limita a señalar que la competencia del caso no corresponde al tribunal de apelaciones por razón de la naturaleza del delito, sin hacer otra censura jurídica. El segundo motivo es una apreciación y alegato del recurrente, distinto de lo que debe contener el fundamento de una causal. En esta causal de forma, al igual que la de fondo al citar las disposiciones legales infringidas no se expresa el concepto de la infracción.

Los defectos anotados, por ser sustanciales dan lugar a proceder conforme al párrafo final del artículo 2443 del Código Judicial.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación presentado en este caso.

Fundamento legal: artículos 2434, 2437 y 2443 del Código Judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.

Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A ÁNGEL SANTIAGO SÁNCHEZ FLORES, SINDICADO POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

La firma forense, Almengor, Caballero & Asociados, en representación de Ángel Sánchez Flores, presentó recurso de casación contra la sentencia de segunda instancia expedida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, el 15 de febrero de 1996, mediante la cual revoca la resolución de primera instancia e impone a Sánchez Flores la pena de cinco años de prisión y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.

Cumplidas las distintas fases de admisión y sustanciación del recurso, corresponde expedir la resolución a que se refieren los artículos 2448 y siguientes del Código Judicial.

LOS HECHOS

Conforme al Oficio 954- AF-94, el Jefe del área F. Chepo-Chimán de la Zona de Policía Metropolitana, puso a órdenes de la Personería de Chepo al ciudadano ÁNGEL SANTIAGO SÁNCHEZ FLORES, quien fue detenido el 16 de noviembre de 1994 cuando se le sorprendió con una toallita atada con un nudo, dentro de la cual se detectaron 72 cuadritos de sustancia ilícita conocida como "crack".

La fase instructoria culminó con la recomendación fiscal de un auto de llamamiento a juicio, recomendación que fue acogida por el Tribunal de la causa y verificada la etapa plenaria, el juzgador de primera instancia dictó sentencia el 1° de Noviembre de 1995, mediante la cual le impuso 30 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.

La sentencia fue apelada por el Ministerio Público, la que al ser revisada por el Superior dio lugar a su revocatoria y a una condena de cinco años de prisión.

FUNDAMENTO DE LA SENTENCIA IMPUGNADA

Al valorar la prueba aportada, se consideró que la misma era idónea para acreditar el tipo de posesión agravada, contenida en el segundo párrafo del artículo 260 del Código Penal y que la autoría de la misma recaía en la persona de Ángel Santiago Sánchez Flores, quien indicó que no era consumidor, lo que permite deducir que el destino de la droga "era la venta o traspaso a cualquier título".

EL RECURSO DE CASACIÓN

La firma recurrente, al censurar la sentencia de segunda instancia, seleccionó dos causales de fondo, a saber: infracción de la sustantiva penal por indebida aplicación de ésta al caso juzgado y error de derecho al calificar el delito, si la calificación ha debido influir en el tipo o la extensión de la pena.

Veamos por separado cada una de las causales invocadas.

1. Por ser la sentencia infractora de la ley sustancial penal por indebida aplicación de ésta al caso juzgado.

Se trata de una causal de fondo, la cual aparece descrita en el numeral primero del artículo 2434 del Código Judicial.

1.1 Motivos: Para fundamentar la causal anterior se anotan dos motivos. El primero de ellos se refiere al fundamento de la revocatoria de la sentencia de primera instancia, al asignarle la propiedad de la droga encontrada anudada en la toallita a Sánchez Flores y por tanto aplicarle una disposición acorde a esa consideración.

Con relación a este motivo y el cuestionamiento que hace sobre supuestos errores de derecho en la apreciación de los hechos, desborda la finalidad de la causal alegada por cuanto no cabe discutir situaciones de hecho o de derecho respecto a los hechos acreditados en autos, pues lo que está en juego es la indebida aplicación de una proposición jurídica de carácter sustancial penal a una situación fáctica que no embona o adecúa a su regulación. Recuérdese que mediante la invocación de esta causal, lo que se pretende es poner de relieve el error en que incurrió el Tribunal de segunda instancia en cuanto a la aplicación de una disposición a un hecho que no está regulado por esa norma.

La firma forense recurrente, a través de ese primer motivo no logra fundamentar adecuadamente la causal invocada.

El segundo motivo señala que el Tribunal al aplicar la pena de cinco años de prisión al señor Ángel Sánchez Flores, lo hizo indebidamente, porque las circunstancias y hechos recogidos en el expediente no se adecúan al texto legal aplicado.

Este motivo guarda relación con la causal invocada y permite examinar las disposiciones legales aducidas como infringidas.

1.2. La ley sustancial penal violada: Se cita en primer término el segundo párrafo del artículo 260 del Código Penal, que subsume la posesión agravada de drogas y se sustenta el concepto de la infracción por indebida aplicación, en el sentido de que la cantidad de droga incautada en este caso ascendió a 9.0 gramos, cantidad esta que no responde al propósito del legislador, cuando en el segundo párrafo del artículo 260 del código Penal se refiere a aquellos casos en que "la posesión de droga resultare en tales cantidades que, a juicio del Tribunal, se demuestre que lo que se pretende es suministrarla en venta o traspaso a cualquier título para consumo ilegal". Seguidamente se anota que como consecuencia de la indebida aplicación del segundo párrafo del artículo 260 del Código Penal, se infringió en forma directa por omisión, el primer párrafo de la misma norma citada, ya que la cantidad de droga que se le atribuye en posesión al procesado era escasa.

El Representante del Ministerio Público tanto en su Vista N° 60 de 10 de septiembre de 1996 (fs. 177-188) como en su intervención en la audiencia, se opuso a la pretensión del casacionista porque es su criterio que el primer párrafo del artículo 260 del código Penal, que regula la posesión de droga en su modalidad simple o básica, solo puede aplicarse en aquellos casos en que además de que se posea una cantidad mínima, su propietario la destine a su consumo personal, de manera tal que cuando el procesado niega ser propietario y niega también su adicción a sustancias ilícitas, tal posesión debe deducirse que es con el propósito de suministrarla en venta o traspaso a cualquier título, para consumo ilegal.

La temática de los delitos contra la salud, específicamente de los relacionados con drogas, han sido objeto de varias reformas legales y de estudios más profundos sobre la correcta interpretación de la ley, de la doctrina dominante y de las tendencias de la jurisprudencia. Ello es así, porque durante la segunda mitad de este siglo, la humanidad ha sido azotada violentamente por este flagelo que ha penetrado todas las capas sociales y todas las edades y hasta el presente, a pesar de toda la legislación que se ha expedido a nivel nacional e internacional, son pocos los avances obtenidos en la disminución de su extensión a través de medidas en el campo represivo.

Entre las distintas figuras delictivas que aparecen en el capítulo V del Título VII, Libro II del Código Penal, relacionadas con drogas, la posesión simple es la figura básica, de menor gravedad y cuya punibilidad lo ubica entre los delitos leves. El tipo penal lo integran siete palabras: "El que con fines

ilícitos posea droga". Una correcta interpretación de la disposición nos permite advertir que el legislador de 1982, a diferencia de las leyes especiales que regían antes de esa fecha, introdujo un elemento subjetivo para calificar la conducta de posesión de drogas y es el propósito o fin de la posesión, que debe ser necesariamente ilícito. En las actas de discusión del proyecto de Código Penal, la introducción de la frase "con fines ilícitos" fue un aporte de los grupos de médicos y farmacéuticos, quienes abrigaban el temor de que si no se añadía el carácter o fines de la posesión de la droga, podía incluir como delictivas la posesión de drogas con fines terapéuticos, investigación científica o medicinales.

¿Cuál es el alcance de la posesión de droga con fines ilícitos? No cabe duda que se trata de una interpretación extensiva y se refiere a todo aquello que no está legalmente permitido o es contrario a la ley, entendiendo por droga la definición que ofrece el artículo 256 del Código Penal. La posesión simple, de acuerdo con la norma en comento, no exige que el poseedor sea adicto o drogodependiente, puede ser cualquier persona, por cuanto el sujeto activo es común o indeterminado. El artículo 263 F del Código penal no tipifica delito alguno, pues se limita a complementar las reglas de aplicación de la pena en los casos de adquisición o posesión de droga por adictos, indicando al juzgador que cuando la cantidad es escasa, o sea, la que se equipara a una dosis posológica, no cabe aplicar penas privativas de libertad o pecuniarias, sino medidas de seguridad.

Lo anterior significa que el primer párrafo del artículo 260 del código punitivo no condiciona su aplicación a los adictos, sino a los poseedores de drogas con fines ilícitos. Por otro lado, el principio de proporcionalidad de la individualización penal, le permite al juzgador reservar el segundo párrafo de la norma para los casos de posesión de sustancias ilícitas en cantidades de tal magnitud, que permita colegir, sin esfuerzo, que se trata de un caso de posesión de droga para su venta o ulterior traspaso.

La Sala Segunda ha podido percatarse del error reiterado en que incurren muchos Tribunales penales de todo el país al dilucidar distintos procesos contra la salud pública, aplicando a poseedores de 5 o 10 gramos de droga la misma pena que a los poseedores de 2.000 o 25.000 gramos, en virtud de que han limitado la aplicación del párrafo primero del artículo 260 del Código Penal a los poseedores que son drogodependientes, a pesar de que la ley es clara al tipificar la posesión simple y la posesión agravada. La pena mixta de privación de libertad y patrimonial (prisión y días multa) debe aplicarse a los casos de posesión simple, mientras que la prisión de cinco a diez años de prisión es la que corresponde a los casos de posesión agravada, en donde la cantidad o volumen es el indicador de la finalidad de tráfico.

El caso que nos ocupa es el de un poseedor de 9 gramos de piedra o crack, dividida en 72 pedacitos, quien no fue sorprendido suministrándola en venta o traspasándola a otro título, pero por tratarse de una sustancia ilícita en la que la sola posesión es incriminable y punible, se adecúa a lo previsto por el primer párrafo que se refiere a la posesión simple. Luego entonces, se dio la indebida aplicación del párrafo segundo de esta norma (artículo 260) cuando debió aplicarse el primer párrafo.

Al comprobarse la causal alegada y la violación de la norma invocada, no es necesario entrar al examen de la segunda causal presentada por el recurrente, la que por el enunciado incluyó dos causales, tal como lo anotó el Representante del Ministerio Público durante la audiencia.

En consecuencia, la SALA SEGUNDA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CASA LA SENTENCIA IMPUGNADA y en su defecto mantiene la proferida por el Tribunal de primera instancia, que aplica la penalidad correspondiente a la posesión de droga en su modalidad básica.

Fundamento de derecho: Arts. 2448, 2449, 2450, 2453, 2455 del Código Judicial y 260 del Código Penal reformado por la Ley 23 de 1986 y 13 de 1994.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JAIME BERMÚDEZ VANEGAS, POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante resolución judicial de 9 de octubre del año que decurre, este despacho sustanciador ordenó que el libelo de formalización del recurso de casación presentado por el licenciado Jorge Gómez permaneciera en la Secretaría de la Sala por el término de cinco días, a fin de que el defensor técnico subsanara el error que le fuera indicado (fs. 210-211). En tiempo oportuno se presentó el libelo de corrección, por lo que se debe resolver sobre la admisibilidad del recurso propuesto.

A tales efectos, se observa que el recurrente fundamenta su recurso de casación en la causal de fondo correspondiente a: "Cuando se cometa error de derecho al calificar los hechos constitutivos de circunstancias atenuantes de responsabilidad criminal" (f. 213). En cuanto a los motivos que le sirven de sustento a esta causal, se comprueba que el libelo de corrección incurre en nuevos defectos de forma. En este aparte del escrito, el casacionista argumenta que "fundamentó su calificación el tribunal de primera instancia en el concepto de flagrancia"; que "el Tribunal de primera instancia desestimó el reconocimiento de la confesión"; que "la explicación de la confesión a que se refiere el Juez de primera instancia no es en realidad otra cosa que una versión de los hechos en modo alguno opuesta al sentido común" (f. 214). Lo anterior indica que los cargos de injuridicidad no se dirigen contra la resolución proferida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, sino contra la decisión emitida por el juzgador de primera instancia, situación que vulnera lo preceptuado en el artículo 2434 del Código Judicial, según el cual el recurso de casación en el fondo se interpone "contra las sentencias definitivas de segunda instancia, dictadas por los Tribunales Superiores de Distrito Judicial".

En cuanto a las disposiciones legales infringidas, la Sala advierte que el casacionista se ha limitado a indicar que los numerales 4 y 5 del artículo 66 del Código han sido conculcados "en concepto de infracción directa por comisión" (f. 215), sin explicar de qué manera la infracción de ese precepto legal ha influido decisivamente en la sentencia que se impugna.

En vista de que el libelo de casación, ya corregido, incurre en nuevos vicios estructurales en la formalización del recurso, la consecuencia procesal es la de declarar su inadmisibilidad, toda vez que nuestro ordenamiento jurídico no permite la corrección de un recurso de casación en más de una ocasión.

En razón de lo antes expuesto, la SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casación interpuesto por el licenciado Jorge Gómez, apoderado judicial de Jaime Bermúdez Vanegas, contra la sentencia de 6 de mayo de 1996, dictada por el Segundo tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA

Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ADMISIBILIDAD DEL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A HUGO HENRÍQUEZ VELÁZQUEZ, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA VIDA E INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE FLORENCIO ANTONIO VÁSQUEZ MARTÍNEZ. MAGISTRADO PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ingresa nuevamente a la Sala Segunda de ésta Corporación el expediente que contiene las correcciones efectuadas al escrito de formalización del recurso de casación promovido por la defensa de **HUGO HENRÍQUEZ VELÁZQUEZ**, en cumplimiento de lo ordenado por esta Sala mediante auto de 23 de octubre de 1996, para efectos de determinar la admisibilidad del referido recurso de casación.

En el auto de 23 de octubre antes mencionado esta Sala apreció que el recurso cumplía con las formalidades de oportunidad, legitimación objetiva y subjetiva y que el fallo dictado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia en segunda instancia era de aquellos que podía ser recurrido por la vía del recurso de casación, pero consideró que habían defectos en lo que se refiere a la historia concisa del caso, las causales invocadas, los motivos, y las disposiciones infringidas y el concepto en que lo han sido, por lo que procedía ordenar la corrección del mismo.

Cumplido lo anterior, por quien ahora ostenta la defensa del señor Henríquez, debe la Sala examinar la admisibilidad del recurso en atención a las correcciones efectuadas por el apoderado judicial del sentenciado.

Se observa que el escrito de formalización contiene la historia concisa del caso, dos casuales que se aducen por separado y los motivos, disposiciones legales infringidas y concepto de la infracción que sirven de fundamento a cada causal, de forma que se subsanan las observaciones contenidas en el auto de 23 de octubre pasado. En efecto, en el escrito se aprecia una correcta enunciación de las causales aducidas, el o los motivos que fundamenta cada causal, las disposiciones que sirven de fundamento a cada causal y que guardan relación con ellas, así como la explicación del concepto en que cada disposición legal ha sido infringida, por lo que están superadas las deficiencias que motivaron la decisión de esta Sala de ordenar la corrección del referido recurso.

Todas las consideraciones antes expuestas ponen en evidencia que estamos en presencia de un recurso de casación que reúne todos los requisitos exigidos por el Código Judicial, por lo que procede admitirlo a trámite en los términos previstos por el ordenamiento procesal penal.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, representada por el suscrito Magistrado Sustanciador, en Sala Unitaria, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación y ordena que se corra en traslado el mismo al Procurador General de la Nación por el término de cinco días, tal como lo dispone el artículo 2445 del Código Judicial.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) CARLOS ENRIQUE MUÑOZ POPE
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A JUAN BAUTISTA HERNÁNDEZ, POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA. MAGISTRADO

PONENTE: CARLOS E. MUÑOZ POPE. PANAMÁ, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ingresa nuevamente a la Sala, para resolver la admisibilidad del recurso de casación interpuesto, el expediente que contiene el proceso seguido contra JUAN BAUTISTA HERNÁNDEZ, luego de que la defensa del mismo haya efectuado las correcciones que la Sala, mediante resolución de 23 de octubre de 1996, estimó imprescindibles para proceder a considerar la admisibilidad del recurso de casación que motiva esta actuación.

Un examen del escrito visible a fojas 247-256 del expediente pone de manifiesto que la defensa del prenombrado HERNÁNDEZ ha reformulado los motivos y explicado el concepto de la infracción de las disposiciones legales supuestamente infringidas, siguiendo las indicaciones de la resolución de esta Sala que ordenó la corrección del recurso correspondiente.

Se observa, por tanto, que el recurso ha superado todas las deficiencias antes enunciadas, por lo que procede declarar su admisibilidad e imprimirle el trámite correspondiente.

Por todo lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación oportunamente corregido por la defensa de JUAN BAUTISTA HERNÁNDEZ y ORDENA correrle traslado por el término de 5 días al Señor Procurador General de la Nación.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) CARLOS E. MUÑOZ POPE
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL JUICIO CONTRA MIGUEL MARTÍN ALVARADO POR DELITOS DE HOMICIDIO CULPOSO Y LESIONES CULPOSAS COMETIDOS EN PERJUICIO DE FÉLIX CÓRDOBA Y EDUARDO CASTILLO, RESPECTIVAMENTE. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Cumplidos los trámites de sustanciación y verificada la audiencia correspondiente, pasa la Sala Penal a pronunciarse sobre el recurso de casación en el fondo presentado por el licenciado Bolívar Dávalos Moncayo, en su calidad de apoderado judicial de Miguel Martín Alvarado, contra sentencia calendada 18 de septiembre de 1995, proferida por el Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, en virtud de la cual se revocó sentencia que emitiera el Juzgado Segundo del tercer Circuito Judicial, Ramo Penal, que condena a Alvarado a la pena de 24 meses de prisión, como responsable de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas, perpetrados en detrimento de Félix Córdoba y Eduardo Castillo, respectivamente.

HISTORIA DEL CASO

De conformidad con la explicación que trae el libelo de formalización del recurso, en horas de la tarde del 20 de junio de 1992, en la barriada Fuentes del Chase, próxima a la vía Panamericana, Distrito de La Chorrera, colisionaron el vehículo Toyota Pick Up conducido por Miguel Martín Alvarado y el auto B.M.W. Coupe en el que viajaban Félix Sixto Córdoba Gómez y Eduardo Francisco Castillo

Gómez. Con motivo de este accidente, Córdoba Gómez "fallece al día siguiente ... y resulta lesionado levemente ... CASTILLO GÓMEZ" (f. 398).

Explica el recurrente que la encuesta sumarial se inició "en la Personería Municipal del Distrito de la Chorrera y continúa en la Fiscalía Duodécima del Circuito de Panamá, (Chorrera), en Investigación de los delitos imputados a MIGUEL MARTÍN ALVARADO de Homicidio y Lesiones Culposos" (f. 398).

Como resultado de la investigación, el Juzgado Segundo de Circuito de lo Penal del Tercer Circuito Judicial de Panamá, mediante auto de 8 de febrero de 1993, decretó la apertura de causa criminal contra Martín Alvarado por la infracción del Capítulo I, Título I, Libro II del Código Penal, decisión que fue confirmada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

Durante la vista oral el sumariado se declaró inocente, lo que no obstó para que el juzgador de primera instancia lo declarara penalmente responsable por la infracción del inciso segundo del artículo 133 del Código Penal y, mediante sentencia calendada 15 de junio de 1994, le impusiera la pena de 16 meses de prisión. La sentencia fue apelada por la defensa técnica y por la acusación particular. La alzada fue decidida por el tribunal ad-quem, que revocó la sentencia apelada y condenó a Martín Alvarado a la pena de 24 meses de prisión, decisión de segunda instancia contra la cual se recurre ahora en casación.

CAUSAL INVOCADA

En el libelo de casación se invocan dos causales de fondo, correspondientes a: "ERROR DE DERECHO EN LA APRECIACIÓN DE LA PRUEBA" (f. 399) y la "SANCIÓN DE UN DELITO, NO OBSTANTE EXISTIR ALGUNA CIRCUNSTANCIA (sic) EXIMENTE DE RESPONSABILIDAD" (f. 403). Sin embargo, esta Sala Penal, mediante auto de 21 de marzo de 1996, decidió admitir el recurso de casación sólo con relación a la primera causal aducida, a lo que habrá de limitarse el examen y decisión del recurso.

MOTIVOS ADUCIDOS

A propósito de los motivos, cabe destacar también que la mencionada resolución judicial determinó que de los cinco motivos expuestos como fundamento de la causal admitida, "sólo el segundo y tercer motivos contienen cargos concretos de injuridicidad" (f. 405).

En el segundo motivo, el recurrente sostiene que la sentencia atacada no valoró correctamente "los testimonios de IVÁN ALEXIS GONZÁLEZ MONTERO ... la declaración que ratifica el Reporte de Tránsito del Inspector WILBERTO ANTONIO PERALTA RODRÍGUEZ ... la propia Indagatoria de mi representado ... la Declaración de EDUARDO FRANCISCO CASTILLO GÓMEZ, en su última versión", piezas de convicción que, en su opinión, confirman el relato de su patrocinado, en el sentido de que "`cuando cogí la curva venía un carro negro en mi vía de frente " (f. 400).

En el tercer motivo, el casacionista argumenta que el Tribunal Superior no "evaluó con un correcto entendimiento" el peritaje de Eduardo Ferrufino, quien "dictamina como causa indirecta ... el desquite del vehículo negro, lo cual no significa atribución de responsabilidad de mi representado y, como causa directa del accidente a la falta de experiencia del occiso" (f. 400).

DISPOSICIONES LEGALES INFRINGIDAS

El recurrente alega que el artículo 1971 del Código Judicial ha sido infringido de manera directa por omisión, toda vez que "la sentencia impugnada ha soslayado la aplicación de disposiciones del Libro II del Código Judicial concernientes a la materia del proceso" (f. 401).

Se cita como conculcado el artículo 884 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión, "porque la indagatoria de mi defendido, fue aceptada, sin considerar lo de la existencia de un vehículo negro, produjo su maniobra evasiva" (f. 401).

El recurrente considera también infringido el artículo 769 del Código Judicial, en forma directa por omisión, "ya que tanto la indagatoria de mi defendido, como los testimonios de IVÁN ALEXIS GONZÁLEZ MONTERO ... WILBERTO ANTONIO PERALTA RODRÍGUEZ ... EDUARDO FRANCISCO CASTILLO GÓMEZ ... EDUARDO FERRUFINO, sufrieron el error manifiesto de descartar la existencia del vehículo negro ... causante del accidente" (f. 401).

Considera igualmente violado el artículo 770 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión, pues "se desconocieron, en evidente error manifiesto las reglas de la sana crítica, en cuanto no se dio un correcto entendimiento humano, de las pruebas testimoniales, periciales y de la indagatoria" (f. 402).

Otra disposición legal que se afirma infringida es el artículo 904 del Código Judicial, de manera directa por omisión, por cuanto que "el análisis del juzgador incurrió en incumplimiento de las reglas de la sana crítica" (f. 402).

Finalmente, el casacionista estima infringido el artículo 133 del Código Penal, en concepto de indebida aplicación, "ya que se da como probado un hecho delictivo no ocurrido y sobre esa base errónea se aplicó la norma legal" (f. 402).

OPINIÓN DEL PROCURADOR

En cuanto al traslado del proceso al Procurador General de la Nación, la Sala advierte que el lapso comprendido entre la fecha de ingreso del cuaderno penal a la Procuraduría, 21 de marzo de 1996 (f. 406 vuelta) y la fecha de salida, 5 de junio de 1996 (f. 0429 vuelta), **sobrepasa considerablemente** el término de cinco días que dispone el artículo 2445 del Código Judicial para tales efectos. Por esa razón procede declarar extemporánea la Vista N° 38, calendada 5 de junio de 1996, mediante la cual el Procurador General de la Nación emite concepto sobre este recurso.

CONSIDERACIONES DE LA CORTE

A. En relación con los motivos

A juicio de la Sala, los dos motivos que sirven de apoyo a la causal invocada deben ser examinados conjuntamente, por encontrarse íntimamente relacionados, ya que en ambos el argumento medular gira en torno a que el accidente de tránsito se produjo por la presencia concomitante de un automóvil color negro.

El recurrente califica de incorrecta la valoración de los testimonios rendidos por Iván Alexis González Montero, Wilberto Antonio Peralta Rodríguez y Eduardo Francisco Castillo Gómez, pues a su parecer estas pruebas testimoniales corroboran la versión de Miguel Martín Alvarado, quien en su indagatoria explicó que "en la altura de la Barriada Fuentes del Chase ... cuando cogí la curva venía un carro negro en mi vía de frente, entonces cuando yo me abrí para esquivarlo ... mi carro patinó hacia la mano contraria ya que estaba lloviendo y fue entonces que sentí un golpe fuerte en mi vehículo en la parte trasera" (f. 25).

No obstante la afirmación anterior, la Sala debe advertir que la versión de los hechos que brinda el procesado sólo encuentra respaldo en la deposición de su acompañante Iván Alexis González Montero, quien sostuvo que "cuando íbamos por la curva de Fuente del Chase ... de repente vimos un carro negro en la misma vía de nosotros pero en sentido contrario. MIGUEL ... se tiró hacia la otra vía ... y cuando entró de nuevo a la vía que le correspondía ... el carro se fue deslizando y giró sobre sus llantas" (f. 63). Por lo que hace a la declaración de Wilberto Antonio Peralta Rodríguez, agente de tránsito, la Corte observa que éste sólo se limita a indicar que el parte policivo se confeccionó con el relato del "conductor del Vehículo N° 1, el señor Miguel Martín Alvarado", pues "en este accidente la otra parte involucrada no se pudo interrogar" (f. 31); en tanto que el testimonio de Eduardo Francisco Castillo Gómez, lejos de confirmar lo manifestado por el imputado, evidencia que "ellos trataron de echarse a un lado para rebasarse un vehículo el cual lo hicieron, pero al tratar de nuevo de

ubicarse en su vía perdieron el control, debido a que la calle estaba mojada, dando vueltas ... golpeándonos en el costado izquierdo delantero ... donde conducía el hoy occiso" (f. 10).

Considera la Sala que sobre el condenado pesa una incriminación grave y directa que compromete su responsabilidad penal en la conducta ilícita que se le atribuye, lo que no se resuelve exclusivamente con su versión y la que suministra el deponente González Montero. Así, según Daisy Adames de Ruiz, testigo presencial de los hechos, "el Pick-Up doble cabina color azul venía ... bajando la loma y cuando de repente vi que ... empezó a dar vueltas en circulo en la calle ... dio tres (3) vueltas ... y se estrelló contra el carro color blanco que iba suave con dirección hacia Chorrera" (f. 74). De igual manera, José Manuel Checa Quintana sostiene que "el Pick-Up azul ... se salió de su carril para pasarse a otro carro que iba adelante y de allí cuando quiso entrar a su carril no pudo controlar el carro e iba de lado como patinando en la calle y fue cuando chocó al carro color blanco" (f. 124).

Por otra parte, la Corte estima infundado el planteamiento de que tampoco se valoró debidamente el informe pericial de Eduardo Ferrufino, pues por una parte en su dictamen hace constar que "FÉLIX CÓRDOBA ... podía evitar el Impacto, si éste transitara a velocidad moderada y no optara de efectuar el giro hacia la derecha", agregando luego que "sí es cierto que el Pick Up operado por MIGUEL MARTÍN A., se proyectó hacia la vía y hombros contrario respectivamente" (f. 243), todo lo cual se encuentra también acreditado en los dictámenes confeccionados por los peritos Juan Manuel Sáez Castillo: "El Pick-Up, al iniciar el adelantamiento ... se mete en el carril contrario ... pasa las doble líneas y al tratar entrar a su carril pierde el control, se desplaza dando giros sobre el carril contrario ... y coliciona (sic) el BMW" (f. 247); Concepción Avila Rosales: "las violaciones al reglamento de tránsito que causaron el accidente, se produjeron por parte del joven Miguel Martín" (fs. 255-256); y Julio Ricord: "el accidente se produjo debido a la imprudencia del conductor MIGUEL MARTÍN ALVARADO, al ocupar el paño contrario y luego perder el control de su vehículo colisionando contra el vehículo conducidos por el Sr. FÉLIX CÓRDOBA" (f. 259).

B. Con relación a las disposiciones legales infringidas

La Sala desestima la alegada infracción del artículo 1971 del Código Judicial, pues carece de consecuencia lógica y jurídica que el casacionista fundamente la causal "error de derecho en la apreciación de la prueba", en un precepto legal que no guarda relación con los medios de prueba, sino que se refiere a la aplicación de normas de procedimiento civil en las materias que no tuvieren regulación expresa en el procedimiento penal.

Por otra parte, el recurrente aduce como violado el artículo 884 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión. Sin embargo, si se toma en cuenta su argumentación en el sentido de que "la indagatoria de mi defendido, fue aceptada, sin considerar lo de la existencia de un vehículo negro, produjo su maniobra evasiva" (f. 401), se puede inferir que el concepto de infracción que debió emplear era el de violación directa por comisión, que sobreviene cuando el juzgador aplica la disposición legal correcta al caso, pero desconoce un derecho claramente reconocido por la ley. Aunado a esto, se advierte que esta norma procedimental no es aplicable a la situación jurídica del procesado, pues versa sobre la confesión del agente y el sindicado, al ser sometido a los rigores de la declaración indagatoria, negó su responsabilidad en el hecho de sangre (f. 27).

Sobre la alegada infracción del artículo 769 del Código Judicial, la Corte resalta que este precepto es simplemente enunciativa de las pruebas que son aceptadas en nuestro ordenamiento jurídico, lo que significa que no ofrece criterios de valoración probatoria, de donde resulta que no es susceptible de violación a través de la causal que el casacionista invoca.

Se desestima el cargo de infracción que se formula en cuanto al artículo 770 del Código Judicial, ya que, de conformidad con lo manifestado por esta Sala Penal, "Cuando se utiliza el artículo 770 del Código Judicial es necesario probar que un medio probatorio no ha sido apreciado en base a lo que dicha norma

establece, situación que es inadmisible pues siempre debe realizarse una valoración o apreciación por el juzgador en base a las consideraciones que sirvan de sustento para la decisión adoptada" (Registro Judicial, julio de 1995, págs. 259-260).

En cuanto a la conculcación del artículo 904 del Código Judicial, en concepto de violación directa por omisión, la Sala la desestima igualmente, pues el casacionista se limita a señalar que fueron incumplidas "las reglas de la sana crítica que se postulan en la doctrina y en nuestra jurisprudencia" (f. 402), sin ofrecer una explicación clara y razonada que demuestre en qué consiste la inadecuada valoración de los medios de convicción que constan en el cuaderno penal.

En vista que el defensor técnico no ha demostrado que el fallo atacado incurre en el vicio de error de derecho en la apreciación de la prueba, toda vez que no prosperan los planteamientos a que se refieren los motivos y los preceptos legales que se dicen conculcados, tampoco surge la infracción del artículo 133 del Código Penal.

Por lo antes expuesto, LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia del 18 de septiembre de 1995, dictada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso seguido a Miguel Martín Alvarado por el delito de homicidio culposo.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL INCIDENTE DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO A FAVOR DE ANTONIO VILLARREAL EN EL PROCESO QUE SE LE SIGUE POR PECULADO EN PERJUICIO DE LOS CASINOS NACIONALES. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El licenciado Rafael Rodríguez A., defensor técnico de Antonio Villarreal, interpuso recurso de casación en el fondo "por haberse incurrido en error de derecho en cuanto a la prescripción de la acción penal" (f. 41).

Vencido el término de lista previsto en el artículo 2443 del Código Judicial, le corresponde a la Sala examinar el escrito de formalización de este recurso extraordinario, a fin de comprobar el cumplimiento de las formalidades que la ley exige para su admisibilidad.

Con tal propósito, se advierte en primer término que el casacionista no identifica con precisión cuál es la resolución judicial que impugna con el presente recurso de casación, sino que se limita a manifestar que "En el presente proceso se ha presentado el fenómeno de la prescripción de la acción penal y ni el juzgador de primera instancia ni el Tribunal de Apelaciones han realizado las gestiones pertinentes para decretar la misma" (f. 41). Esta Corporación de Justicia ha sostenido que tanto las sentencias como los **autos** impugnables en casación deben ser los de segunda instancia, proferidos por los Tribunales Superiores de Justicia y por delitos sancionados con prisión superior a dos años. Al no precisarse entonces el auto censurado, la Corte se ve impedida de comprobar si dicha resolución es de aquellas contra las cuales la ley concede el recurso, de donde resulta que el libelo de casación incumple lo preceptuado en el numeral 1° del artículo 2443 del Código Judicial.

Otra irregularidad que se observa en el escrito de formalización del recurso de casación, es a propósito de los motivos que le sirven de sustento a la causal invocada. Vemos que en el primero, segundo y tercer motivos el recurrente se refiere básicamente al auto de enjuiciamiento emitido por el Juzgado Primero de Circuito de lo Penal, y a la finalidad y naturaleza de la prescripción de la acción penal (f. 43), en tanto que en el cuarto motivo realiza una explicación referente a un tipo penal, que él mismo admite que en el auto de enjuiciamiento "no se menciona" (f. 43). Se trata de argumentos que carecen de soporte fáctico jurídico, que impiden a la Sala conocer cuál es la decisión jurisdiccional atacada y el vicio o cargo de injuridicidad que se le atribuye, lo que acarrea como consecuencia que la exigencia legal concerniente a los motivos se tenga por inadecuadamente formulada.

En vista de que el libelo que se examina no satisface los requisitos relativos a la estructura formal de este recurso extraordinario, establecidos por el artículo 2443 del Código Judicial, resulta por tanto inadmisible la iniciativa procesal que se pretende formalizar.

Por consiguiente, LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casación en el fondo propuesto por el licenciado Rafael Rodríguez A., apoderado judicial de Antonio Villarreal.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO COLLADO (fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A DIOMEDES OROCÚ, POR DELITO CONTRA EL PATRIMONIO Y CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL (LESIONES), EN PERJUICIO DE RUPERTO CENTENO O RUPERTO MORALES. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Cumplido el término de lista, de que trata el artículo 2443 del Código Judicial, a efecto de que las partes interesadas tengan conocimiento del ingreso del recurso de casación promovido por el licenciado Juan Antonio Morales Gómez, en su calidad de abogado defensor de **DIOMEDES OROCÚ**, sentenciado por delito contra el patrimonio (robo) en perjuicio de **RUPERTO CENTENO**, corresponde en este momento procesal decidir la admisibilidad del recurso extraordinario interpuesto.

Tal como lo señala el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, en su auto de 7 de octubre del año que decurre, el anuncio y la formalización fueron hechas oportunamente, por persona hábil, contra sentencia de segunda instancia, en proceso penal por delito cuyo quántum de la pena se ajusta a lo previsto por el enunciado del artículo 2434 del Código Judicial.

Con relación a los requerimientos formales que deben concurrir en el escrito de casación, cabe hacer las siguientes consideraciones:

a. La historia concisa del caso recoge in extenso los puntos más relevantes del proceso y señala los vicios de injuridicidad que se le atribuyen a la sentencia impugnada.

b. Se presentan dos causales. La primera es de carácter probatorio y alude al error de derecho en la apreciación de la prueba que implica violación de la ley sustancial. Los motivos, al igual que las disposiciones legales infringidas,

guardan relación con esta causal.

c. La segunda causal no aparece correctamente enunciada pues una cosa es el concepto de la infracción y otra muy diferente, la denominación de la causal "violación directa de la ley sustancial penal". Por otra parte, los motivos aducidos, lo mismo que las disposiciones legales en conjunto, no son coherentes con la causal invocada.

Como quiera que la primera causal alegada, no presenta objeciones de fondo que den lugar a su inadmisión, mientras que la segunda causal adolece de varios defectos insubsanables, cabe admitir el recurso presentado con relación a la primera causal.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, representada por la suscrita Magistrada Sustanciadora, en SALA UNITARIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el recurso de casación presentado por el licenciado Juan Antonio Morales Gómez en este caso, con relación a la primera causal. Asimismo dispone correr traslado del presente negocio al Señor Procurador General de la Nación, por el término de cinco días, a fin de que emita concepto.

Fundamento legal: artículos 2434, 2441, 2443 y 2445 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A JOSÉ DE LA CRUZ ARAUZ LLERENA Y OTRO, POR DELITO DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Evacuados los trámites correspondientes, compete a la Sala resolver la admisibilidad del recurso de casación promovido por la defensora de oficio del señor **JOSÉ DE LA CRUZ ARAUZ LLERENA**, quien ha sido sancionado por la comisión del delito de tráfico ilícito de drogas.

Antes de resolver la admisibilidad del referido recurso la Sala observa que se trata de una impugnación interpuesta oportunamente, por persona hábil, por delito que tiene pena superior a dos años de prisión y contra resolución de segunda instancia dictada por Tribunal Superior de Distrito Judicial, por lo que se consideran que se han reunido los requisitos o presupuestos formales que se requieren para la interposición del recurso de casación.

Por lo que se refiere a la exposición de los requisitos propios del recurso, es decir, historia concisa del caso, causal o causales invocadas, motivos, disposiciones infringidas y concepto de la infracción, la Sala advierte que la recurrente no enuncia con propiedad la causal invocada, ya que únicamente se limita a subrayar la referencia al error de derecho en la apreciación de ello, lo que no es admisible según la técnica de este recurso.

La Sala observa, por otra parte, que el primero de los motivos expuestos para fundamentar la causal que se pretende utilizar no ha sido redactada con toda propiedad, ya que alude a que la aplicación de un artículo de la ley penal constituye una infracción a la ley sustancial, lo que implica que tal motivo no se compagine con la causal a la que sirve de soporte, pues se hace alusión a cargos de injuridicidad respecto de una causal distinta. A esto se agrega que la recurrente no cita como disposición legal violada la o las normas de la Ley

sustancial penal que fueron infringidas como consecuencia de la causal invocada.

Las razones expuestas constituyen razón suficiente para inadmitir el recurso presentado por la defensa del señor ARAUZ LLERENA por lo que debe procederse en tal sentido.

Por todo lo expuesto la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de casación presentado en este caso.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO EN EL PROCESO SEGUIDO CONTRA MANUEL ANTONIO RELUZ VILLAMIL, MARLON ALBERTO LARA PALACIOS, ITZEL MARITZA RAMÍREZ Y MARITZA ALICIA MEJÍA, POR DELITO CONTRA LA SALUD PÚBLICA (DROGA). MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO COLLADO T. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ordenó la corrección del recurso de casación interpuesto por el licenciado José Ramiro Fonseca Palacios dentro del proceso penal que se le sigue a su representado, **MARLON LARA PALACIOS y OTROS**, por delito de Asociación Ilícita con el propósito de cometer delitos relacionados con drogas y posesión ilícita de Drogas.

Consta en el expediente que el recurrente presentó escrito de corrección oportunamente. Sin embargo, dicho escrito contiene una serie de errores formales que no pueden corregirse y que producen la inadmisibilidad del recurso impetrado.

En efecto, el casacionista presenta un escrito en el que señala que solamente va a referirse única y exclusivamente a los puntos mandados a corregir por el magistrado ponente.

En lo que a la historia concisa del caso, la Sala a través del escrito de 17 de marzo de 1995 dijo que la misma debe ser lacónica, objetiva y precisa, y que además debía especificar los cargos de injuridicidad. Pero, el recurrente sigue siendo subjetivo al estructurar dicha sección, por lo que consideramos que no se ajusta a la forma en que se debe plantear este acápite.

Otra sección que fue mandada a corregir es la que se refiere a la primera causal invocada por el recurrente. Se dijo que "... Además este punto contenido como primera causal, no es tal, más bien contiene dos causales, por lo que debe determinar cual de ellas se refiere y denominarla de la manera en que la jurisprudencia de la Corte de tan reiterada manera se ha pronunciado". En esta ocasión, el casacionista comete el mismo error, es decir, no corrigió lo que se le pidió. No escogió a cual causal se refería.

Como primer punto hay que aclarar que el numeral 1 del citado artículo 2434 del Código Judicial consagra en realidad cinco causales de casación **independientes y excluyentes entre sí**, a saber: a) Por ser la sentencia infractora de la ley sustancial, en concepto de violación directa; b) por interpretación errónea de la ley; c) por indebida aplicación; d) por error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba; y e) por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba.

Por consiguiente, en una misma causal no se puede alegar a la vez interpretación errónea e indebida aplicación de la ley, o error de hecho en cuanto a la existencia de la prueba o el de derecho en cuanto a la apreciación de la misma, puesto que ambos términos se fundamentan en conceptos diametralmente opuestos que, por ende, los hacen ser independientes y excluyentes como se dijo.

Ahora bien, también aclaramos que en el escrito de corrección el casacionista debe limitarse a corregir los errores señalados, pues si no lo hace o si añade causales, motivos, disposiciones legales o cualquier otro adimento que no estuviese consignado en el recurso original y que no hubiese sido señalado como error a corregir, la Corte deberá señalar inadmisible el recurso porque el casacionista rebasó las facultades correctivas que se le habían otorgado.

El recurrente en su segunda oportunidad corrigió la segunda causal, la que en ningún momento fue señalada como error a corregir.

No cabe duda de que lo descrito contradice la técnica casacionista e impide que la Corte pudiera hacer, en su debida oportunidad, un análisis de los cargos de injuridicidad que se formulan contra la sentencia recurrida.

Siendo que no existe posibilidad legal que permita la corrección de un recurso de casación en más de una ocasión, no le queda otra opción a la Sala que declarar inadmisible el recurso interpuesto.

Por ello, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de casación interpuesto por el licenciado José Ramiro Fonseca Palacios, en su condición de apoderado judicial de MARLON LARA PALACIOS, contra la sentencia condenatoria de segunda instancia dictada dentro del proceso penal que se le sigue a su representado por el delito contra la Salud Pública.

Devuélvase y Notifíquese

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CASACIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A MARITZA EUGENIA ORTEGA VILLAVICENZO DE ROBLES, POR DELITO DE POSESIÓN ILÍCITA DE DROGAS. MAGISTRADO PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

La licenciada Beatriz Herrera Peña, Defensora de Oficio, representante legal de **MARITZA ORTEGA**, interpuso recurso de casación contra la sentencia emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia de fecha 26 de julio de 1996, mediante la cual al resolver el recurso de apelación anunciado por el Fiscal Cuarto de Circuito modificó la pena que fue impuesta a su defendida por el Juzgado Octavo de Circuito a cinco años de prisión (fs. 158-165).

En esta oportunidad, corresponde a este tribunal de casación examinar si la admisibilidad llevada a cabo por el Tribunal Superior cumple con los presupuestos del recurso **-impugnabilidad objetiva y subjetiva-**; además verificar si el escrito de formalización cumple con los requisitos consignados en los numerales 3 y 4 del artículo 2443 del Código Judicial.

Se observa que la resolución impugnada es una sentencia de segunda instancia dictada por un tribunal superior y el delito tiene pena superior a los dos años de prisión, lo que se ajusta a lo dispuesto en el primer párrafo del

artículo 2434 del Código Judicial. Se tiene además, que el recurso fue presentado dentro del término legal y por persona con legitimidad para actuar dentro del proceso.

No tenemos reparos en cuanto a la historia concisa, la cual resalta los aspectos más relevantes del proceso.

Sin embargo, la casacionista al anunciar el recurso no señala si el mismo es interpuesto en el fondo o en la forma o de manera mixta. Incluso cuando cita cada una de las tres causales invocadas también descuida ese aspecto requerido por la técnica del recurso presentado.

La primera causal invocada lo es la contenida en el artículo 2434 ordinal primero, párrafo segundo del Código Judicial, la cual transcribe.

El párrafo citado, se refiere a dos causales probatorias: **error de hecho** en cuanto a la existencia de la prueba y **error de derecho** en la apreciación de la prueba.

Es criterio de este Tribunal de Casación no admitir el recurso de casación que aduzca ambas causales respecto a las mismas pruebas, dado que son excluyentes entre sí.

Por tanto, al no quedar bien establecido, cuál es la causal que se invoca, no puede esta Sala apreciar si son correctos los motivos que la fundamentan, así como las disposiciones legales que estima infringidas. Por otra parte, la casacionista ha omitido expresar el concepto en que han sido vulneradas las normas citadas.

De igual manera, la segunda causal invocada **-ordinal 3° del artículo 2434 del Código Judicial-** también contempla dos causales: error de derecho al calificar el delito si la calificación **ha debido influir en el tipo** o **en la extensión de la pena aplicable**.

Cita la postulante como disposición legal infringida el artículo 260 del Código Penal, sin señalar el concepto en que lo ha sido. Además, esta norma jurídica sustantiva abarca dos supuestos de hecho, por tanto, debía la recurrente transcribir sólo aquella parte de la disposición que arguye vulnerada, a objeto de ser específica como lo señala el literal c del numeral 3° del artículo 2443 del Código Judicial.

La tercera y última causal invocada lo es la contemplada en el numeral 10 del artículo 2434, la cual ha sido transcrita, pero como en los casos anteriores, el enunciado normativo comprende dos causales, una referida a las atenuantes y la otra a las agravantes y es indispensable precisar por cuál se opta. El motivo que la sustenta indica "**que se incurre en indebida aplicación porque la norma no se aplicó en la forma en que debió hacerse**", dado que se desconoció la atenuante de la confesión y luego se incluyen conceptos propios de alegatos, lo cual no es congruente con la causal aludida.

Al citar y transcribir como única disposición infringida el artículo 66 numeral 5°, no expresa el concepto en que lo ha sido, luego de lo anterior, comete el error de citar dentro del título que denomina "**conceptos en que lo han sido**" los artículos 770 y 769 del Código Judicial y el artículo 260 del Código Penal, que no se habían aducido como normas legales violadas.

La gravedad de los defectos advertidos en el recurso presentado, no permiten su admisión.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso presentado por la licenciada Beatriz Herrera Peña.

Fundamento Legal: artículos 2434, 2443 del Código Judicial.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

QUEJA

QUERELLA PRESENTADA POR JOAQUÍN JOSÉ VALLARINO COX EN CONTRA DE EDGARDO VILLALOBOS, CARLOS E. DE ICAZA Y MARUQUEL AROSEMENA, MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE TRABAJO, POR LA SUPUESTA COMISIÓN DE DELITO DE CALUMNIA E INJURIA. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Procedente de la Procuraduría General de la Nación, ingresan a la Sala Penal, para su calificación legal, las sumarias instruidas por querella presentada contra Edgardo A. Villalobos, Carlos E. de Icaza y Maruquel Arosemena, Magistrados del Tribunal Superior de Trabajo, por los delitos de calumnia e injuria supuestamente cometidos en perjuicio de Joaquín Vallarino Cox.

Según el querellante, los magistrados del Tribunal Superior de Trabajo incurren en los delitos de calumnia e injuria, por considerar que "las expresiones proferidas ... en su sentencia de 29 de abril de 1996 dictada dentro del proceso de reintegro seguido por JOAQUÍN VALLARINO COX contra la COCA-COLA DE PANAMÁ, COMPAÑÍA EMBOTELLADORA, S.A y VENTAS Y MERCADEO , S.A, ... se le ofende en su dignidad, honor y decoro ...", y se le imputa la comisión de un delito (f. 31). Con el libelo de la querella se aporta copia autenticada de la citada resolución de 29 de abril y se solicita la práctica de pruebas testimoniales (f. 41).

En la Vista remisoria de las sumarias, el representante del Ministerio Público expresa que "los hechos motivo de la querella no generan delito alguno ...", por lo que solicita se decrete un sobreseimiento definitivo e impersonal, de conformidad con el numeral 2 del artículo 2210 del Código Judicial (fs. 36-37).

Como se puede apreciar, en la querella se indica que los delitos atribuidos a los magistrado del Tribunal Superior de Trabajo fueron ejecutados mediante resolución proferida el 29 de abril de 1996. Ahora bien, si se confronta esa afirmación con la fecha de presentación de la querella ante la Procuraduría General de la Nación -22 de agosto de 1996- (f. 41), se concluye que la presentación de esta iniciativa procesal excede el término que a estos efectos establece el artículo 2035 del Código Judicial, ya que la querella debió presentarse dentro "del término de dos (2) meses, contados a partir de la comisión del hecho punible instantáneo ...".

De esta manera, la Corte es del criterio que la querella de que ahora se conoce, presentada **casi cuatro meses después**, resulta extemporánea, lo que refuerza la recomendación de la Procuraduría en el sentido de que se decrete un sobreseimiento definitivo de carácter impersonal.

Por lo antes expuesto, LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SOBRESEE DEFINITIVAMENTE, DE MANERA OBJETIVA E IMPERSONAL, en esta causa y ORDENA el archivo de las sumarias.

Notifíquese.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T. (fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN INTERPUESTO POR EL LICDO. JAVIER QUIROZ CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE INADMITE EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A MUSA SERAT. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DOCE (12)) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Licenciado JAVIER ALEXIS QUIROZ MURILLO ha sustentado recurso de reconsideración contra el Fallo de esta Sala fechado diecinueve (19) de septiembre de 1996, por el cual NO SE ADMITE el recurso de revisión presentado respecto al proceso que se le instruyera a **MUSA SERAT** por el delito contra la salud pública, específicamente el de tráfico internacional de drogas.

El recurrente manifiesta su disconformidad con el fallo aludido, indicando que su firma forense no entró a representar al señor **SERAT**, sino después de vencido el término para el recurso de apelación, por lo cual fue entonces cuando observaron la posible falsedad de la prueba de Laboratorio Especializado en Drogas de la Policía Técnica Judicial. Alega que por ser el opio crudo una sustancia no utilizada en nuestro medio, sino en los países asiáticos, resulta extraño que nuestros laboratorios contaran con los reactivos necesarios para determinar que efectivamente se trataba de esa sustancia. Sostiene que ha investigado y comprobado que la Policía Técnica Judicial no tiene los reactivos; por tanto, solicitó una certificación en ese sentido, cuya copia adjuntó al recurso de revisión, que la Policía Técnica Judicial se negó a contestar, aduciendo que la misma debe ser pedida por una autoridad judicial competente.

Sigue indicando el recurrente que el juzgador tiene amplias facultades en la búsqueda de la verdad material, a diferencia de los abogados litigantes, quienes tienen muchas limitaciones en la investigación, por carecer de facultades para que se les brinden las certificaciones correspondientes. Finalmente solicita que se reconsidere la decisión de esta Sala, se pida la práctica de la prueba aducida y se le brinde así la oportunidad a su cliente de demostrar si se justifica o no su condena.

Al analizar la situación planteada, observa la Corte que la resolución que se pretende recurrir es inimpugnable, pues se trata de una decisión a través de la cual se declara inadmisible un recurso de revisión, y dentro del Capítulo en que se regula la institución de la revisión no existe norma que permita tal impugnación. Existe numerosa jurisprudencia de la Corte en este sentido.

A diferencia del procedimiento civil, en el cual se contempla expresamente el recurso de reconsideración como un medio para impugnar las decisiones judiciales (artículo 1107, numeral 1), en materia penal, el artículo 2427 del Código Judicial, señala taxativamente los medios de impugnación de las resoluciones judiciales, y entre ellos no aparece el recurso de reconsideración.

La única excepción que se da en relación al uso del recurso de reconsideración se encuentra en los artículos comprendidos del 2497 al 2499 del Código Judicial, referentes a los juicios penales ante la Corte Suprema de Justicia, y que más bien tratan de los autos de enjuiciamiento y de sobreseimiento en los juicios ordinarios en única instancia. Solo en esos procesos, cabe el recurso de reconsideración, en materia penal. Por consiguiente, el Auto del diecinueve (19) de septiembre de 1996 no es susceptible de recurso de reconsideración.

Aún cuando la reconsideración pedida fuera viable, en materia de revisión, el recurrente está en la obligación de probar que se configura la causal que invoca del artículo 2458 del Código Judicial. En el presente caso, la causal invocada es la de falsedad de un medio probatorio, de modo que el recurrente deberá probar que, a través de sentencia ejecutoriada, se ha declarado la falsedad de la prueba; ya que no es competencia de esta Sala declararlo así, sino más bien declarar que, si la prueba ha sido reconocida como falsa por un tribunal competente, procede la revisión del caso.

En consecuencia, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RECHAZA, POR IMPROCEDENTE, el recurso de reconsideración interpuesto por el Licenciado JAVIER ALEXIS QUIROZ MURILLO, en su condición de apoderado judicial del señor MUSA SERAT, contra la resolución de esta Sala Penal, fechada 19 de septiembre de 1996.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HECHO

RECURSO DE HECHO, CONTRA PROVIDENCIA DE 10 DE OCTUBRE DE 1996, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, POR MEDIO DE LA CUAL SE DENIEGA EL AUTO DE 7 DE OCTUBRE DE 1996, MEDIANTE EL CUAL SE RECHAZA DE PLANO EL INCIDENTE DE NULIDAD. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El 18 de octubre de 1996 fue presentado un recurso de hecho contra la providencia de 10 de octubre de 1996, emitida por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial que deniega la apelación interpuesta contra el auto de 7 de octubre de 1996, dentro del proceso penal seguido con motivo del homicidio de MARLENE MENDIZABAL y JORGE FALCONETT.

Ese expediente se encuentra en la fase de resolver el recurso.

El 25 de octubre de 1996, la acusación particular ha presentado otro recurso de hecho contra la providencia de 10 de octubre del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial que deniega la apelación anunciada contra el auto de 7 de octubre de este año, que rechaza de plano un incidente de nulidad.

Las resoluciones coinciden en cuanto a las fechas, pero unas se refieren a un incidente de nulidad y las otras al incidente de previo y especial pronunciamiento.

Prima facie, el recurso de hecho ha sido presentado en los términos de Ley y aunque por economía procesal cabe su acumulación, el primero ingresó al Despacho para resolver el fondo, mientras que éste ha ingresado para su impulso inicial, por tanto, cabe señalar un término de tres (3) días para que las partes presenten sus alegatos, conforme lo prevé el tercer párrafo del artículo 1139 del Código Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE HECHO PRESENTADO POR EL LCDO. SILVIO GUERRA, CONTRA LA PROVIDENCIA DE 10 DE OCTUBRE DE 1996, PROFERIDA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL SEGUNDO DISTRITO JUDICIAL, POR MEDIO DE LA CUAL SE DENIEGA LA APELACIÓN INTERPUESTA CONTRA EL AUTO DE 7 DE OCTUBRE DE 1996, MEDIANTE EL CUAL SE RECHAZA DE PLANO EL INCIDENTE DE PREVIO Y ESPECIAL PRONUNCIAMIENTO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El 21 de octubre del año que decurre, fue sometido a las reglas de reparto interno el cuaderno que contiene el recurso de hecho presentado por la representación de la acusación particular en el proceso penal seguido a **ROBERTO PINZÓN y JACINTO MAC DONALD** por el homicidio de **MARLENE MENDIZABAL y JORGE FALCONETT**, contra la providencia de 10 de octubre de 1996, dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, por medio de la cual se deniega el recurso de apelación promovido contra el auto de 7 de octubre del mismo año, en virtud del cual se rechaza de plano el incidente de previo y especial pronunciamiento presentado en esa fecha.

Tal como lo preceptúa la ley procesal en esta materia, la Sala ordenó la suspensión del procedimiento en este caso y fijó un término de tres días para que las partes presentaran por escrito sus alegatos, previa notificación al Ministerio Público.

El recurso de hecho presentado, a través de nueve puntos hace un recuento del incidente de previo y especial pronunciamiento que presentara ante el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, el 7 de octubre, cuya pretensión radicaba en la legitimación de la defensa y la falta de cumplimiento de los trámites propios de un incidente en materia procesal penal. También se alude a la forma como se resolvió el incidente, incluyendo alegaciones en cuanto a los criterios de extemporaneidad que dieron lugar al rechazo del incidente.

Durante el período de alegatos, tanto la parte recurrente como el representante de la defensa presentaron los escritos contentivos de sus puntos de vista y los argumentos que estimaron pertinentes.

El licenciado Silvio Guerra, además de abundar sobre los criterios que había adelantado en el texto del recurso de hecho, añadió otras consideraciones, que denominó como "estrictamente procesales respecto a las nulidades", donde reconoce que la legislación panameña en materia de nulidades sigue el sistema del "numerus Clausus", pero que a su vez hay un principio de carácter general que indica que los procesos que se sigan en contravención a los artículos precedentes serán nulos (art. 1974 C. J.) y tal norma da pábulo, en su opinión, a que se retrotraiga el proceso al estado anterior a la celebración de la audiencia en este caso.

Por su parte, el licenciado Rubén Darío Moncada Luna, al oponerse al recurso de hecho presentado por la acusación Particular, sostiene que las medidas de previo y especial pronunciamiento son medios legales a favor del procesado, no así de la acusación particular, lo que se desprende de la misma naturaleza de las causales, las cuales se armonizan con otras disposiciones del Código de Procedimiento Penal.

No cabe duda alguna que tanto los hechos en que se funda el recurso como los argumentos de los alegatos, incluyen aspectos de fondo que inciden sobre la resolución que rechazó de plano el incidente de previo y especial pronunciamiento y no sobre el recurso de hecho en si. La Sala, al conocer del caso y advertir el cumplimiento de las exigencias formales previstas en los artículo 1137 y 1139 del Código Judicial, se limitó a darle el término a las partes para que procedieran a preparar y presentar sus alegatos y dada, la trascendencia de la fase procesal

en que se encuentra el proceso principal, se ordenó la suspensión del mismo hasta que se decida este recurso.

Corresponde ahora determinar la admisibilidad del recurso presentado y para ello el artículo 1141 indica que lo primero que debe considerar el juzgador es si la resolución impugnada es recurrible por ministerio de la ley. Sobre este punto existen dos normas: el artículo 2280 y el 2429, ambos permiten la apelación de las resoluciones que deciden los incidentes. En el caso que nos ocupa no se decidió un incidente, se optó por rechazarlo de plano por haber sido presentado fuera del término que establece el artículo 2274. No puede perderse de vista que el auto de enjuiciamiento se expidió desde diciembre de 1995 y la providencia que fijó la fecha de audiencia data del 13 de septiembre de 1996.

La pregunta es si una providencia de rechazo por extemporáneo o por improcedente de un escrito, acción o recurso, es susceptible de apelación. Se trata de resoluciones de admisibilidad in limine de la pretensión y que sólo en los casos en que la Ley lo determine de manera expresa, cabe el recurso de apelación. El punto a tratar es eminentemente procesal, por lo que las otras consideraciones que se han añadido carecen de relevancia jurídica.

Es la ley la que convierte en irrecurrible la resolución impugnada a través de este recurso y por tanto no es posible, desde el punto de vista procesal, admitir el recurso de hecho presentado por el licenciado Silvio Guerra Morales en este caso.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA el recurso de hecho presentado y ordena que se deje sin efecto la suspensión del proceso decretada por providencia de 22 de octubre de 1996.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A AGUSTÍN PALMA ESPINOSA, SINDICADO POR DELITO DE ROBO EN PERJUICIO DEL BANCO EXTERIOR. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Mediante resolución calendada 6 de mayo de 1996, esta Sala admitió el recurso de revisión presentado por el licenciado Rubén Ernesto Pecchio Ospino, contra la sentencia dictada por el Juzgado Noveno del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial, el 26 de enero de 1993. En la misma se abrió el proceso a prueba por el término de 30 días como lo dispone el Código Judicial en su artículo 2460.

Vencido el término probatorio se corrió traslado a las partes por 15 días cada uno para que presentaran sus alegatos por escrito. Corresponde en esta oportunidad el análisis del recurso interpuesto a objeto de establece su procedibilidad.

FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA

En horas de la mañana del 30 de agosto de 1990 la sucursal del Banco Exterior ubicada en la vía Bolívar fue objeto de robo por parte de dos sujetos

que portaban armas de fuego y quienes con violencia e intimidación se apoderaron de la suma de trescientos setenta y cinco mil balboas (B/.375.000.00).

Por ese ilícito fueron llevados al plenario Harmodio Barragán Castillo y Agustín Palma Espinoza, quienes mediante sentencia N° SC-6 de 26 de enero de 1993 dictada por el Juzgado Noveno del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial fueron declarados culpables y condenados a la pena principal de seis (6) años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas. Por haber permanecido en rebeldía durante el proceso se ordenó la notificación de Palma Espinoza por edicto emplazatorio (fs. 202-215).

ALEGATO DEL POSTULANTE

El licenciado Rubén Ernesto Pecchio Ospino, miembro del Instituto de Defensoría de Oficio, manifiesta que Palma Espinosa quedó vinculado al hecho ilícito investigado por el reconocimiento que en su contra hiciera el testigo Eugenio Córdoba Tuñón por medio de fichas delincuenciales en la Policía Técnica Judicial; que nunca fue indagado ni compareció personalmente al proceso. Por tanto, ese señalamiento es el único elemento subjetivo que fundamentó su condena.

Explica que Palma Espinosa ingresó a la cárcel Modelo el 14 de diciembre de 1993 donde se le registró a órdenes de diferentes autoridades y por varias causas penales. Fue en ese momento cuando sus familiares se percatan que se le atribuía el delito de robo al banco Exterior cometido durante la época en que Palma Espinosa estuvo en Colombia. Estima que las pruebas aportadas con el presente recurso indican que para el 30 de agosto de 1993 Palma Espinosa estaba detenido en Cali, Colombia, por lo que no pudo haber cometido el hecho.

Solicita así, se acceda a la revisión de la sentencia del 26 de enero de 1993, pues las nuevas pruebas frente a un único señalamiento pueden dar lugar a la absolución de Palma Espinosa del delito de robo en perjuicio del Banco Exterior (fs. 44-46).

ALEGATO DEL PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN

El licenciado José Antonio Sossa R., estima que los nuevos elementos están basados en testimonios subjetivos y aunque se combinaran con las pruebas contenidas en la investigación principal no cambiarían la situación de Palma Espinosa.

Sostiene que tanto el procesado como su madre no han dado una versión lógica en cuanto a explicar por qué si fue condenado a doce (12) años de prisión en Colombia y si su conducta no era la más adecuada en aquella penitenciaría, aparezca detenido desde el 14 de diciembre de 1993 en la Cárcel Modelo. En lo que respecta al recorte de periódico que adjuntó Palma Espinosa a su declaración jurada no se indica en el mismo la denominación de dicho rotativo ni la fecha de su publicación.

Finaliza solicitando que al momento de resolver el recurso presentado se haga negando las pretensiones del recurrente (fs. 35-43).

FUNDAMENTO DE LA SALA

En efecto, al examinar el expediente principal, se advierte que la base de la condena de Palma Espinosa lo fue el reconocimiento que de su persona hiciera Eugenio Córdoba Tuñón en las oficinas de Criminalística de la Policía Técnica Judicial, cuando indicó la foto que contenía el rostro de Palma Espinosa con el número de ficha delincuencia A-54782, afirmando que fue uno de los sujetos que cometió el robo al Banco Exterior e incluso tuvo un forcejeo con él (fs. 10-12).

Ahora bien, el licenciado Pecchio Ospino invoca la causal número 5 del recurso de revisión contemplado en el artículo 2458 del Código judicial referente a la aportación de nuevos hechos que por sí mismos o combinados con las pruebas anteriores pueden dar origen a la absolución del procesado o a la aplicación de una condena menos rigurosa.

Observa la Sala que la situación planteada por el recurrente no fue examinada en el proceso cuya revisión se solicita. No obstante, los nuevos elementos de prueba aportados **-pruebas documentales y testimoniales-** carecen de fuerza suficiente para modificar la situación jurídica de Palma Espinosa. Veamos.

Por un lado, se constata mediante nota de agosto 28 de 1992 que el panameño Carlos Correa Liquitán fue condenado a 12 años de prisión por el Juzgado 5° de Orden Público, por el delito de hurto calificado, y que se encontraba detenido en la cárcel del Distrito Judicial de Cali desde el 16 de abril de 1990 (f. 5); y que el embajador de Panamá en ese país, señor Alonso O. Fernández U., designó a la señora Beatriz de Quijano, Cónsul de Panamá en Colombia, para que investigara si Agustín Palma, panameño con falsa identidad bajo el nombre de Carlos Correa Liquitán se encontraba recluido en la penitenciaría Villa Hermosa en Cali (f. 6).

Sin embargo, la respuesta de la funcionaria, plasmada en nota de marzo 3 de 1993, sólo da fe de su entrevista con Correa Liquitán sin abordar el tema de su doble personalidad (fs. 8-9).

En cuanto a las declaraciones de Argelia Espinoza de Palma (fs. 21-23) y Agustín Palma Espinosa (fs. 28-30) no aportan elementos que de manera irrefutable demuestren que Palma Espinosa es el mismo Correa Liquitán con quien se entrevistó la señora cónsul, Beatriz de Quijano.

Lo que sí se refleja en la declaración de Palma Espinosa es la facilidad con que ingresaba y salía del territorio de la hermana República de Colombia.

El auto que admitió el recurso dejó claro que no existían pruebas dactilares y fotográficas del mencionado Correa Liquitán que permitieran realizar las comparaciones del caso. No obstante ese vacío no se subsanó durante el período probatorio, requiriendo por la vía de cooperación internacional la práctica de la prueba en el vecino país para obtener copia de su tarjeta de identificación y huellas dactilares, por lo tanto, el planteamiento del postulante no prospera en el sentido de revisar una sentencia que constituye cosa juzgada y principio de seguridad jurídica.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO PROCEDE LA REVISIÓN de la sentencia ejecutoriada N° SC-6 de 26 de enero de 1993, dictada por el Juzgado Noveno de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, en lo que respecta a la responsabilidad penal de AGUSTÍN PALMA ESPINOSA.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO EXTRAORDINARIO DE REVISIÓN, INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A JORGE ALBERTO MOSQUERA MURILLO, SINDICADO POR DELITO DE PECULADO, EN DETRIMENTO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PANAMÁ. MAGISTRADO PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El 10 de octubre ante la secretaría de esta Sala el licenciado Abelardo A.

Herrara en representación de **JORGE ALBERTO MOSQUERA MURILLO** interpuso recurso de revisión en donde señala que es contra la sentencia N° S-87 de 19 de mayo de 1994 y su complemento la sentencia de 1 de diciembre de 1994, expedidas por el Juzgado Segundo del Primer Circuito de Panamá y el Segundo Tribunal Superior de Justicia, respectivamente. En la primera sentencia se declaró penalmente responsable a su representado del delito de Peculado en perjuicio de la Universidad Tecnológica y se le condenó a la pena de tres (3) años y seis (6) meses de prisión y cincuenta (50) días multa a razón de diez balboas (B/.10.00) e inhabilitó para el ejercicio de funciones públicas por el mismo período una vez cumplida la pena principal; la segunda confirmó esa decisión.

Corresponde en esta oportunidad decidir sobre la admisibilidad del recurso presentado.

SITUACIÓN PROCESAL

En primer lugar, al examinar las copias autenticadas que acompañan el recurso, advierte la Sala que el procesado Jorge Alberto Mosquera Murillo, estuvo ausente durante todo el proceso seguido en su contra.

Es así, que el auto de proceder le fue notificado por edicto emplazatorio y se ordenó su captura (fs. 89-92, 96). Luego mediante resolución de 25 de marzo de 1993 el Juzgado Segundo del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá declaró a Mosquera Murillo reo rebelde y ordenó la detención preventiva del mismo (fs. 97-100).

La audiencia oral y pública se celebró el 26 de octubre de 1993 en ausencia del sindicado (fs. 104-107). En sentencia de 19 de mayo de 1994 se declaró penalmente responsable a Mosquera Murillo del delito de peculado y se le condenó a la pena de tres años y seis meses de prisión y cincuenta díaz multa a razón de diez balboas (B/.10.00) diarios es decir, a la suma líquida de quinientos balboas (B/.500.00) con un término de tres meses para ser pagada o en su defecto se convertirá en un día de prisión por cada dos días multa (fs. 108-114).

Esa decisión fue notificada al procesado mediante edicto emplazatorio el cual fue publicado tres veces en un reconocido medio de comunicación escrito de cobertura nacional (fs. 116-121).

Al ser impugnado ese fallo condenatorio por la defensa técnica del procesado, licenciada Beatriz Herrara miembro del Instituto de Defensoría de Oficio (123-128), el Segundo Tribunal Superior de Justicia, confirma la decisión del a-quo en resolución de 1 de diciembre de 1994 (fs. 137-142). La misma fue notificada a las partes por medio de edicto de 13 de enero de 1995 (f. 144).

En oficio N° 629 de 23 de marzo de 1995 dirigido a la Sub-Dirección del departamento Nacional de Corrección, el juez de la causa informa que existen varias órdenes de captura contra Mosquera Murillo, quien aún no se encuentra detenido (f. 148).

El artículo 614 del Código Judicial establece los modos en que deben presentarse los poderes especiales para un proceso determinado.

El numeral 2° del mencionado artículo dispone que el poder se puede presentar por medio de un memorial que debe ser entregado en persona por el poderdante ante el secretario del juez que conoce o ha de conocer de la causa. En caso de no ser posible lo anterior, el numeral 3° indica que se hará ante un Juez Municipal o de circuito si se encuentra en una cabecera de circuito o ante el Notario del Circuito.

Por tanto, el poder presentado no puede ser admitido, dado que no cumple con los requisitos legales y menos aún si se trata de un individuo prófugo de la justicia.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando

justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de revisión presentado por el licenciado Abelardo Antonio Herrara en representación de Jorge Alberto Mosquera Murillo.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JUAN JOSÉ FALCÓN DÁVILA, SINDICADO POR EL DELITO DE EXPEDICIÓN DE CHEQUES SIN LA SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS EN PERJUICIO DE LA EMPRESA LOTUS INTERNATIONAL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de revisión interpuesto por la licenciada **María del Pilar Vásquez Yanis**, en representación de **JUAN JOSÉ FALCÓN DÁVILA**, contra la sentencia N° 26 de 24 de abril de 1995 (fs. 106 a 111), dictada por la Juez Décimo Segunda del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, que declaró responsable y condenó a **JUAN JOSÉ FALCÓN DÁVILA** a la pena principal de un año (1) de prisión y cincuenta (50) días multa, a razón de B/.3.52 diarios, que multiplicados por los cincuenta días-multa, corresponden a la suma total de B/.176.00 pagadera al erario público o en su defecto a un día (1) de prisión por cada dos (2) días, y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el término de un año, luego de cumplida la pena principal, por delito de expedición de cheques sin suficiente provisión de fondos, en perjuicio de LOTUS INTERNACIONAL, S. A.

La recurrente fundamenta su solicitud en el hecho de que pasados trece meses desde la emisión de la sentencia condenatoria cuya revisión se pretende, se han aportado nuevas pruebas que, a su juicio, pueden dar cabida a la revisión del presente proceso penal, por lo que, a pesar de que la recurrente no indicó expresamente la norma contentiva de dicha causal, se entiende que la causal de revisión alegada corresponde a la contenida en el numeral 5 del artículo 2458 del Código Judicial, que es del siguiente tenor:

> "ARTÍCULO 2458. Habrá lugar a la revisión contra las sentencias ejecutoriadas, cualesquiera que sean los tribunales que las hubieren dictado, en los casos siguientes:
> ...
> 5. Cuando después de la condenación se descubran nuevos hechos que, por sí mismo o combinados con las pruebas anteriores, puedan dar lugar a la absolución del acusado o a una condena menos rigurosa, por la aplicación de una disposición menos severa; ... .".

En su escrito, la licenciada **María del Pilar Vásquez Yanis** señala que su representado **JUAN JOSÉ FALCÓN DÁVILA**, adquirió una deuda por la compra de mercancía en la compañía LOTUS INTERNACIONAL, S. A., pagadera de acuerdo a lo pactado entre las partes, es decir, que **FALCÓN DÁVILA** efectuó un contrato de compra-venta con la empresa LOTUS INTERNACIONAL, S. A. En este orden, señala la recurrente, que el último pago, es decir, la cancelación de la compra se realizó mediante el cheque N° 45, fechado 3 de julio de 1992, el cual fue girado al portador por la suma de B/.200.00, contra la cuenta corriente N° 10-001-282757 del Banco General, propiedad de **JUAN JOSÉ FALCÓN III** o/ Nubia C. de Falcón (-copia autenticada- f. 19).

Dicho cheque al ser presentado al banco para su cobro carecía de fondos suficientes, razón por la cual Indira Roxana Talavera Rivera, en representación de la empresa beneficiaria del cheque mencionado, LOTUS INTERNACIONAL, S. A., presentó denuncia penal contra el girador del cheque, **JUAN JOSÉ FALCÓN DÁVILA,** por el delito de expedición de cheques sin suficiente provisión de fondos.

Sostiene la recurrente que su representado fue declarado en rebeldía (fs. 90 a 91), juzgado en ausencia, y condenado por la Juez Décimo Segunda de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, en base a su no comparecencia a rendir indagatoria y por considerar la juez de la causa, que el estado de cuenta, que recibe mensualmente todo causahabiente, debió informar a **JUAN JOSÉ FALCÓN DÁVILA** cualquier situación irregular en la que hubiese incurrido.

Advierte la Sala, que las diversas pruebas que acompañan al escrito de revisión tienen la finalidad de comprobar los nuevos hechos que pudiera dar lugar a la absolución o a la aplicación de una pena menos rigurosa a **JUAN JOSÉ FALCÓN DÁVILA,** siendo el principal hecho alegado la cancelación de la deuda con posterioridad a la expedición del cheque sin fondo el día 5 de mayo de 1993-, con el objeto de que se retirara la denuncia o se provocara el desistimiento de la pretensión punitiva, por parte de los representantes de la empresa LOCUS INTERNACIONAL, S. A., según lo establecido en el artículo 1984 del Código Judicial.

No obstante, **JUAN JOSÉ FALCÓN DÁVILA** fue condenado mediante sentencia de 24 de abril de 1995, y no fue hasta el 27 de septiembre de 1996 que el licenciado Moisés Cogen, representante legal de la parte agraviada, presentó una declaración escrita, autenticada por el Notario Público Undécimo del Circuito de Panamá, Licenciado Alfredo Sánchez, donde explicó que el señor **JUAN JOSÉ FALCÓN**, pagó su deuda a la empresa LOTUS INTERNACIONAL por la suma de B/.200.00, el día 5 de mayo de 1993, y que los representantes de dicha empresa intentaron desistir en mayo de 1993, pero como el proceso se seguía de oficio, el funcionario de instrucción les indicó que lo presentaran ante el juez del conocimiento (fs. 14-15).

En este orden de ideas, indica la recurrente que, **JUAN JOSÉ FALCÓN DÁVILA** fue detenido el 24 de septiembre de 1996 por la Policía Técnica Judicial y recluido en la Cárcel Modelo, según consta en nota N° SG-3078-96 de 24 de septiembre de 1996 (f. 128), a fin de dar cumplimiento al oficio N° 2020 de 21 de febrero de 1994 (f. 93), suscrito por la juez de la causa, quien había solicitado la captura de **JUAN JOSÉ FALCÓN III**, toda vez que mediante auto N° 417 de 17 de diciembre de 1993 (fs. 90-91), éste había sido declarado en rebeldía y se ordenó su detención preventiva.

Para resolver la admisibilidad del presente recurso, la Sala estima conveniente manifestar que con la petición de revisión que se ha presentado, se aprecia que la misma viene acompañada de nuevas pruebas que, por desconocerlas el juzgador al momento de pronunciar su fallo, no fueron consideradas en ese momento y que de haberlas conocido, pudieran haber contribuido a que se tomará una decisión distinta a la condena o a que ésta fuera menos rigurosa.

Entre las nuevas pruebas que se aportan con la solicitud de revisión se tienen las siguientes:

1. Recibo en que se hace constar que el señor **JUAN JOSÉ FALCÓN**, pagó la suma de **DOSCIENTOS BALBOAS (B/.200.00)** recibo cuya firma es autenticada el 22 de octubre de 1996, por el Notario Público Cuarto del Circuito de Panamá, Licdo. **ENRIQUE BERNABÉ PÉREZ.**

2. Recibo extendido el 5 de mayo de 1993, firmado por el señor MOISÉS D. COHEN, donde se expresa que JUAN JOSÉ FALCÓN, pagó la suma de DOSCIENTOS BALBOAS (B/.200.00), "con lo cual cancela la obligación con la Empresa LOTUS INTERNACIONAL, S. A. causada por cheque sin fondos", recibo que da fe de su reconocimiento por su firmante MOISÉS COHEN M., el Notario Público Cuarto del Cto. de Panamá, el 22 de octubre de 1996.

3. Declaración jurada de MOISÉS COHEN M., representante de LOTUS INTERNACIONAL, S. A., cuya firma la certifica el 1° de octubre de 1996, el Notario Público Undécimo del Circuito de Panamá, LICDO. ALFREDO SÁNCHEZ.

4. Record Policivo de JOSÉ FALCÓN DÁVILA, extendido por la Dirección General de Policía Técnica Judicial, expedido el 27 de septiembre de 1996.

Al examinar el recurso se observa que el mismo cumple con los requisitos establecidos en el Artículo 2459 del Código Judicial, por lo que procede admitir el mismo y abrir el negocio a pruebas por el término de treinta (30) días.

Por lo expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, representada por el suscrito Magistrado Sustanciador, administrando justicia por autoridad de la Ley, ADMITE, el recurso de revisión propuesto, y abre la causa a pruebas por el término de treinta (30) días.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO A. HERRERA.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JUAN JOSÉ FALCÓN DÁVILA SINDICADO POR EL DELITO DE EXPEDICIÓN DE CHEQUES SIN LA SUFICIENTE PROVISIÓN DE FONDOS EN PERJUICIO DE LA EMPRESA LOTUS INTERNACIONAL, S. A. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

En resolución proferida el 12 de noviembre último, esta Sala admitió el recurso de revisión propuesto por la Licda. MARÍA DEL PILAR VÁSQUEZ YANIS, en representación de JUAN JOSÉ FALCÓN DÁVILA, contra la sentencia N° 26 de 24 de abril de 1995, dictada por la Juez Décimo Segundo del Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá en la que condena al expresado FALCÓN DÁVILA a la pena principal de un año de prisión y cincuenta (50) días multa, como responsable del delito de expedición de cheque sin suficiente provisión de fondo en perjuicio de LOTUS INTERNACIONAL, S. A. De conformidad con lo que se aprecia en el caudal probatorio que se acompañó en la presentación de este recurso, el proceso seguido a JUAN JOSÉ FALCÓN DÁVILA se surtió en su ausencia al igual que se dictó su condena en estado de rebeldía, pues así lo declaró el Tribunal de la causa en resolución de 17 de noviembre de 1993. En la resolución que se profirió admitiendo el recurso, la Sala puntualizó

"que la petición viene acompañada de nuevas pruebas que, por desconocerlas el juzgador al momento de pronunciar su fallo, no fueron consideradas en ese momento y que de haberlas conocido, pudieran haber contribuido a que se tomará una decisión distinta a la condena o a que ésta fuera menos rigurosa.

Entre las nuevas pruebas que se aportan con la solicitud de revisión se tienen las siguientes:

1. Recibo en que se hace constar que el señor **JUAN JOSÉ FALCÓN**, pagó la suma de **DOSCIENTOS BALBOAS (B/.200.00)** recibo cuya firma es autenticada el 22 de octubre de 1996, por el Notario Público Cuarto del Circuito de Panamá, Licdo. **ENRIQUE BERNABÉ PÉREZ.**

2. Recibo extendido el 5 de mayo de 1993, firmado por el señor

MOISÉS D. COHEN, donde se expresa que JUAN JOSÉ FALCÓN, pagó la suma de DOSCIENTOS BALBOAS (B/.200.00), "con lo cual cancela la obligación con la Empresa LOTUS INTERNACIONAL, S. A. causada por cheque sin fondos", recibo que da fe de su reconocimiento por su firmante MOISÉS COHEN M., el Notario Público Cuarto del CTO. de Panamá, el 22 de octubre de 1996.

3. Declaración jurada de MOISÉS COHEN M., representante de LOTUS INTERNACIONAL, S. A., cuya firma la certifica el 1° de octubre de 1996, el Notario Público Undécimo del Circuito de Panamá, LICDO. ALFREDO SÁNCHEZ.

4. Recordé Policivo de JOSÉ FALCÓN DÁVILA, extendido por la Dirección General de Policía Técnica Judicial, expedido el 27 de septiembre de 1996.

En ese orden de ideas y con vista a la documentación aportada con la petición de revisión, distinguimos que la denuncia en este caso se produjo ante el funcionario de instrucción el día 15 de enero de 1993, que nunca se pudo localizar al imputado, que éste había pagado a la sociedad demandante el monto del cheque devuelto por falta de fondo desde el día 5 de mayo de 1993, sin que ello constara en el expediente; que la condena en rebeldía se produjo el día 24 de abril de 1995; que no es hasta el día 24 de septiembre de 1995 que es detenido JUAN JOSÉ FALCÓN DÁVILA, para el cumplimiento de la pena que se le impuso, que con anterioridad a este caso el señor JUAN JOSÉ FALCÓN DÁVILA no registraba antecedentes penales ni policivos. Así mismo, cabe resaltar que precisamente por el hecho de que en el proceso no se pudo localizar al imputado JUAN JOSÉ FALCÓN DÁVILA, el funcionario instructor no pudo dar cumplimiento con lo establecido con el Artículo 281 del Código Judicial, en donde se establece que el girador del cheque sin fondo queda exento de pena si cancela el valor del mismo dentro del término de 48 horas, contados a partir del momento en que al autoridad competente lo notifique de la falta de fondos.

El delito de expedición de cheque sin suficiente provisión de fondos para cubrirlo es sancionado en nuestro régimen penal (Artículo 280 del Código Penal) con una pena de uno (l) a tres (3) años de prisión y de cincuenta (50) a cien (100) días-multa, razón por la cual y de conformidad con el artículo 2148 del Código Judicial, no procede la detención preventiva al infractor de esa norma penal.

En la situación presente, se está ante un proceso de revisión admitido, en donde el recurrente JUAN JOSÉ FALCÓN DÁVILA, se encuentra cumpliendo la pena de prisión que se le impuso. Como se deja expuesto, con la petición de revisión se aportaron nuevas pruebas como fundamento del recurso. La revisión, como señala GILBERTO MARTÍNEZ RAVE, en su obra Procedimiento Penal Colombiano 8ª Edición, Página 501, constituye "un recurso extraordinario que permite examinar nuevamente las decisiones que tienen el valor de cosa juzgada y evitar las injusticias de sentencias obtenidas gracias a pruebas falsas, ocultas, no conocidas u obtenidas ilícitamente". Si bien las sentencias ejecutoriadas son inmodificables por hacer tránsito de cosa juzgada, este principio se encuentra mediatizado en este caso por el recurso de revisión que se ha formalizado y admitido, por cuanto el mismo tiene la virtualidad de que podría afectar o variar lo dispuesto en la sentencia cuya revisión se solicita.

Nuestro orden procesal penal permite que en este tipo de recurso, el condenado por sentencia ejecutoriada, por delito que admite excarcelación con fianza y que oportunamente haya propuesto este recurso extraordinario, pueda seguir gozando del beneficio de libertad condicional hasta tanto se decida éste en forma desfavorable al recurrente. En el presente caso, conforme al recurso de revisión que se tiene admitido y con vista a la documentación aportada en el mismo, tal como ya se dejó expresado, el proceso y la condena de JUAN JOSÉ FALCÓN se dio en su ausencia y el delito por el cual se le juzgó no es de aquellos que ameritan la detención preventiva.

De otro modo, ante las nuevas pruebas acompañadas con la interposición del recurso y ante la posibilidad que dado el trámite de sustanciación de esta acción

extraordinaria la misma se prolongue en un término que al resolverse su propósito resultaría tardío, para los efectos de la pena que se impuso y la recuperación de la libertad del procesado en el caso de un pronunciamiento favorable a su petición, se estima que principios que inspiran nuestro derecho penal, como el de favor libertatis permiten que hasta tanto se resuelva definitivamente el recurso, la Sala disponga la sustitución de la pena de prisión que sufre actualmente JUAN JOSÉ FALCÓN DÁVILA por una de las medidas cautelares personales que se tienen previstas en la sección primera del Capítulo VI del Título II del Libro III del Código Judicial.

En orden a lo que se deja expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SUSTITUYE la pena de prisión impuesta a JUAN JOSÉ FALCÓN DÁVILA en el proceso penal cuya revisión se ha solicitado y en su lugar le impone una medida cautelar consistente en la obligación de presentarse quincenalmente a la secretaría de la Sala Penal de esta Corporación, mientras este recurso se encuentre en trámite en este Tribunal y posteriormente, de ordenarse la revisión, ante el Juzgado del Circuito Penal que le corresponda el conocimiento del recurso del recurso extraordinario interpuesto.

Oficiése a la autoridad del caso acerca de lo dispuesto en la presente resolución y enviése copia de esta decisión a la Dirección Nacional de Corrección del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Copíese y Notifíquese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A JACINTO CINUS DE LEÓN, SINDICADO POR EL DELITO DE ROBO A MANO ARMADA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO COLLADO T. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ha ingresado a la Sala Penal de la Corte Suprema, el recurso de revisión interpuesto por el señor **OMAR JACINTO CINUS DE LEÓN**, quien se encuentra detenido en la Cárcel Modelo purgando una pena de cinco (5) años por el delito de Robo a mano armada.

Cumplido lo normado por el artículo 2050 del Código Judicial, que impone a la Sala Penal de la Corte Suprema la obligación de poner en conocimiento de los Defensores de Oficio Distritales los recursos de apelación, casación y revisión ingresados a dicha Superioridad, para que los mismos interpongan dichos recursos en favor de los reos que no tienen un abogado que los represente, recibe esta Colegiatura el escrito calendado 11 de noviembre de 1996, en el que la Licenciada Rosario Granda de Brandao, Defensora de Oficio asignada por la Defensoría de Oficio para interponer el recurso, manifiesta que después de haber examinado el proceso, que se desarrolló en el Segundo Tribunal Superior, observó lo siguiente:

> "Una vez examinado los elementos jurídico-fáticos que rodean el presente proceso y habida cuenta que las causales que motivan el ejercicio del Recurso de Revisión es de naturaleza numerum clausus, es por lo que consideramos **NO VIABLE** EL RECURSO INTERPUESTO, ...
>
> Habida cuenta de que los hechos expresados y toda vez que los mismos no encuadrasen las causales del artículo 2458 del Código Judicial, es por lo que conceptuamos que al no ajustarse los hechos

incorporados al proceso, a las posibles causales a invocarse es por lo que solicito se sirva declarar **NO VIABLE** el recurso interpuesto."

Observa la Corte que la licenciada Rosario Granda de Brandao al hacer el estudio respectivo del caso, no encontró causal que se adecue a las normadas por el artículo 2458 del Código Judicial, y por esa razón, declina interponer el recurso que nos ocupa.

Ante tal situación, opina esta Colegiatura que no es posible ordenar la revisión del proceso, toda vez que el mismo abogado defensor de OMAR JACINTO CINUS DE LEÓN advierte que no hay causal para interponerlo; por ello, considera esta Corporación de Justicia que en este caso no es posible admitir el recurso de revisión que trató de impetrar el propio detenido, OMAR JACINTO CINUS DE LEÓN.

En virtud de lo anterior, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE el recurso de revisión que interpuesto por OMAR JACINTO CINUS DE LEÓN, y ordena el archivo del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO DENTRO DEL PROCESO SEGUIDO A LUIS ANTONIO KAWANO MURILLO, SINDICADO POR EL DELITO DE HURTO Y ASOCIACIÓN ILÍCITA PARA DELINQUIR. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO COLLADO T. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, el recurso extraordinario de revisión presentado por **LUIS ANTONIO KAWANO MURILLO** en su propio nombre, detenido en la Cárcel Modelo, contra sentencia que lo condena a ciento dos (102) meses de prisión por la comisión de los delitos de Hurto y Asociación Ilícita para Delinquir.

Cumplido lo estipulado por el artículo 2050 del Código Judicial, el que impone a la Sala Penal de la Corte Suprema la obligación de poner en conocimiento de los Defensores de Oficio del Instituto de Defensoría de Oficio los recursos de apelación, casación y revisión ingresados a dicha Superioridad, a fin de que éstos interpongan dichos recursos a favor de los reos que no tienen un abogado que los represente, recibe esta Corporación, a fojas 9 y 10 del cuadernillo, el escrito fechado 30 de octubre de 1996, en el cual la licenciada **TERESA IBÁÑEZ,** Defensora de Oficio asignada por el Instituto de Defensoría de Oficio para interponer el presente recurso, manifiesta lo siguiente:

"CUARTO: En la actualidad el señor **LUIS ANTONIO KAWANO MURILLO** está solicitando la revisión de su proceso, expresando que existieron irregularidades en el mismo, las cuales considera necesario sean sometidas al criterio de la Honorable Corte Suprema.

Pese a lo anterior, y luego de analizado el expediente in comento, apreciamos que no existen elementos que pudieran fundamentar el recurso de revisión, el cual únicamente procede de acuerdo con las causales estrictamente contenidas en el artículo 2458 del Código Judicial, el cual incluso debe cumplir con ciertas formalidades y comprobadas las causales a través de las pruebas conducentes las que deben ser aportadas conjuntamente con el memorial a presentarse.

QUINTO: Aún cuando es el querer de nuestro patrocinado el que se revise su sentencia consideramos que no se ajusta su petición a ninguna de las causales existentes, y, por ende solicitamos se proceda conforme a lo establecido por nuestras leyes de procedimiento."

Toda vez que el defensor de oficio asignado a **LUIS ANTONIO KAWANO MURILLO**, al hacer el estudio respectivo del caso, advierte que no hay causal para interponerlo, estima esta Sala que no es posible acceder a la revisión del proceso que trataron de impetrar los sindicados.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el recurso de revisión interpuesto por LUIS ANTONIO KAWANO MURILLO y, en consecuencia, ORDENA el ARCHIVO del expediente.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA APELADA

APELACIÓN DE SENTENCIA CONDENATORIA, DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A ENRIQUE BARRÍA, POR DELITO DE HOMICIDIO EN GRADO DE TENTATIVA, EN PERJUICIO DE GLADYS RAQUEL BARRIOS DE BARRÍA. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Como consecuencia del veredicto de culpabilidad emitido por un jurado de conciencia contra **ENRIQUE BARRÍA** por el delito de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de su señora esposa Gladys Raquel Barrios de Barría, el Segundo Tribunal Superior de Justicia mediante sentencia de 22 de mayo de este año, le impuso al procesado la pena principal de Cinco (5) Años y Cuatro (4) Meses de Prisión y las accesorias de **INHABILITACIÓN** para el ejercicio de funciones públicas por el mismo tiempo una vez cumplida la sanción anterior; y la de **COMISO** del arma de fuego utilizada en el ilícito. Además, la medida de seguridad preventiva personal la prohibición de portar armas por el término de diez (10) años una vez que obtenga la libertad (fs. 360-371).

Esa decisión jurisdiccional fue impugnada al momento de notificarse el procesado, siendo sustentado el recurso dentro del término legal, por su abogado defensor, licenciado Luis Carlos Arosemena Ramos, miembro del Instituto de Defensoría de Oficio.

FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA

El día 13 de julio de 1993 en horas de la mañana la señora Gladys Raquel Barrios de Barría recibió dos heridas con arma de fuego, mismas que no interesan órganos vitales y que la mantuvieron hospitalizadas seis días sin ninguna complicación; quedándole incrustados en el cuerpo dos proyectiles: uno en el tórax y el otro en la pelvis.

Por esa acción ilícita fue llevado al plenario su esposo el señor Enrique Barría. El día 25 de octubre de 1995 un jurado de conciencia luego de efectuarse la audiencia oral y pública lo declaró culpable del delito de homicidio en grado de tentativa en perjuicio de su esposa.

FUNDAMENTACIÓN DEL APELANTE

El licenciado Arosemena Ramos solicita que se le modifique la dosificación de la pena impuesta y se le reconozcan los derechos que le favorecen.

Explica que la discrepancia de su defendido estriba en la dosificación impuesta; que la pena base intermedia de ocho (8) años es excesiva; y que como no registra antecedentes policivos penales se debió partir de un tercio del mínimo o sea de cuatro (4) años.

Arguye también, el por qué al reconocersele las circunstancias atenuantes no se le disminuyó la pena base en una tercera parte por cada una de estas circunstancias (fs. 373-374).

FUNDAMENTACIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

En respuesta al traslado, el licenciado Sofanor Espinosa, Fiscal Cuarto Superior del Primer Distrito Judicial, Encargado, luego de reseñar los hechos que motivaron el caso sub-júdice, en donde indica que la ofendida acudió en varias ocasiones a la Corregiduría de Juan Díaz a interponer querella acerca de lo que estaba pasando en su hogar y que de nada valieron las constantes promesas del señor Barría en que cambiaría su conducta agresiva y de maltrato para con su esposa a quien finalmente agredió con arma de fuego.

Por lo expresado, la representación fiscal se opone a la solicitud de la defensa técnica y solicita se confirme en todas sus partes la sentencia apelada (fs. 376-380).

FUNDAMENTACIÓN DEL FALLO APELADO

El tribunal de primera instancia calificó el actuar ilícito de Enrique Barría de homicidio agravado en grado de tentativa contemplado en el artículo 132, ordinal 1°, que trata del homicidio doloso causado en la persona de un pariente cercano con conocimiento del parentesco, cuya pena es de doce (12) a veinte (20) años de prisión. En cuanto a la individualización judicial de la pena a imponer el tribunal a-quo determinó lo siguiente:

> "... como quiera que la tentativa es reprimida con pena no menor de un tercio del mínimo ni mayor de dos tercios del máximo de la establecida para el correspondiente hecho punible (Cfr. art. 60 del Cód. id.), la escala aplicable sería entre 48 y 160 meses. De ahí que, tomando en cuenta los factores contemplados en el artículo 56 del mismo Código que se escoja como pena base la intermedia de 96 meses (8 años). Hay que tomar en cuenta que el incautado es una persona que no registra antecedentes policivos ni penales, según información emanada de la Policía Técnica Judicial a fojas 45.
>
> Entre las circunstancias que pudiesen contemplarse para disminuir o aumentar dicha pena, cabe reconocer el hecho de que inmediatamente dado el incidente que el propio encausado hubiese procedido a auxiliar a la víctima, prestando el reconocimiento de su propia acción de una manera responsable, al extremo de que la misma señora BARRÍA haya pedido que se le libere del peso de la acción penal en su contra. En esta situación ello da lugar a que se le reconozcan dos circunstancias atenuantes como son las que figuran en los numerales 4. y 5. del artículo 66 del Código tantas veces citado, y que en función de las proposiciones establecidas en el artículo 69, se escoge una sexta parte por cada una de ellas (16), que en suma serían 32 meses.
>
> Como no existen agravantes que aplicar en este caso, la pena líquida definitiva queda en 64 meses de prisión (5 años y 4 meses) ..." (fs. 368-369).

FUNDAMENTACIÓN DE LA SALA

Procede nuestro análisis sobre los puntos objeto de la disensión (art. 2428 del Código Judicial).

En cuanto al criterio esbozado por el procesado en el sentido que dada su calidad de delincuente primario el tribunal de primera instancia debió partir de un tercio del mínimo, es decir, cuatro (4) años de prisión y no de ocho (8); se tiene lo siguiente:

Luego de efectuar la calificación típica de la conducta desplegada por el sujeto activo, corresponde al juzgador determinar cuál es la pena que debe aplicar a quien realizó o participó en el delito. Es decir, de la pena establecida por el legislador al crear el tipo penal, le corresponde al juzgador determinar la pena concreta, siguiendo las pautas que le indica el legislador.

En primer lugar, nuestro código punitivo en su artículo 56 establece siete factores que debe tomar en consideración el juzgador para fijar la pena base a imponer dentro de los límites señalados para cada delito. Debe así valorar las circunstancias que rodearon el hecho punible y la personalidad del agente.

El tribunal a-quo fijó la pena base en ocho (8) años al ponderar de manera general los factores que contempla la norma ya citada, resaltando que Enrique Barría no registra antecedentes penales ni policivos.

En declaración rendida por la señora Gladys Raquel Barrios de 39 años de edad expone cómo a sido su vida en los 24 años que lleva de casada con el señor Enrique Barría, con quien ha procreado tres hijos. Afirma que ha sido objeto de constantes insultos, vejaciones, golpes. Narra que estando embarazada le dio un puntapié en el estómago y casi pierde la criatura; que para mayo de 1992 su esposo la golpeó con el mango de un cuchillo militar en el ojo izquierdo y ha quedado afectada de la visión, aunado a los golpes que le propinaba con la vara policial delante de los hijos (fs. 11-13 y 102-106).

Lo anterior no sólo consta en los informes de la Corregiduría de Juan Díaz (fs. 72-75) sino en la declaración de la señora Mireya Alicia Sánchez de Alabarca, educadora y vecina del matrimonio por más de 22 años, quien afirma que la señora Gladys es una buena mujer, trabajadora y que el señor Barría siempre se tornaba violento con gritos y golpes e incluso una vez sacó a su esposa de la casa desnuda y ella la auxilió. Situación que según Gladys había repetido varias veces pero otros vecinos la ayudaron; y en la declaración de la Psicóloga Ingrid Maribel Chavarría de Georget (fs. 147-150) quien realizó un examen psicológico a la señora Gladys de Barría por el mes de noviembre de 1992 y cuyo informe consta a fojas 133-134.

Esta superioridad luego de examinar las pruebas allegadas al proceso comparte el criterio del juzgador al fijar la pena base.

Por otra parte, consideramos que no concurre la circunstancia atenuante de la confesión espontánea y oportuna del agente. Esta Sala ha señalado que la confesión es oportuna **"cuando sin que medien otros elementos probatorios que sindiquen o vinculen al sujeto con el delito realizado, dicho sujeto confiesa oportunamente su actuación"** (Fallo de 7 de diciembre de 1993).

Obsérvese que el procesado Barría luego de estar golpeando a su esposa dentro de la casa, ésta logra escapar y llega a la tienda donde pide ayuda y sigue corriendo pero al estar agotada llega a la casa de la señora Digna Martínez y es aquí donde el procesado la alcanza y le dispara.

Esos hechos fueron percibidos por el señor Arturo Arosemena Díaz (fs. 209-211) y la dueña de la tienda señora Chung Sau Har afirma que escuchó a la señora Gladys pidiendo ayuda y luego escuchó los disparos (fs. 212-213), aunado a que se cuenta con la declaración de la ofendida.

Así las cosas, consideramos que la pena impuesta no se ajusta a la realidad, pero, tal como lo advirtió la defensa técnica, el principio de la reformatio in pejus nos impide modificar la sentencia en ese sentido.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia apelada.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SENTENCIA CONDENATORIA APELADA EN EL PROCESO SEGUIDO A RODOLFO RUGAMA GALIANO, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO EN PERJUICIO DE JUAN DE LA CRUZ GRACIA. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

A fin de que sea resuelta la alzada, han ingresado a esta Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, las sumarias instruidas a **RODOLFO RUGAMA GALIANO**, sindicado por el delito de homicidio en perjuicio de JUAN DE LA CRUZ GRACIA.

Un jurado de conciencia, en audiencia celebrada el día catorce de mayo de 1996, encontró culpable a **RODOLFO RUGAMA GALIANO**, del homicidio investigado y mediante Sentencia fechada treinta y uno (31) de mayo de 1996, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial lo condenó a la pena principal de nueve (9) años y cuatro (4) meses de prisión, y a las penas accesorias de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por igual término una vez cumplida la pena principal; y el comiso del arma utilizada para perpetrar el delito.

El tribunal a-quo consideró que se trataba de homicidio genérico y tomó en cuenta la condición de delincuente primario del sindicado para fijar la pena base, discrecionalmente, en ocho años de prisión. Dicha pena base fue incrementada en una sexta parte por la agravante común de abuso de superioridad, por lo que la pena líquida quedó en nueve (9) años y cuatro (4) meses de prisión.

Por su parte, la defensora de oficio del imputado, Licenciada MICAELA MORALES MIRANDA, manifestó su disconformidad con la sentencia en cuanto a la aplicación por parte del Tribunal de la agravante común contenida en el ordinal 1° del artículo 67 del Código Penal, pues su representado no situó al hoy occiso en situación de inferioridad o indefensión, ni utilizó argucias o engaños tendientes a preparar el acto que culminó con la muerte del señor GRACIA; aparte de que ya con anterioridad se había dado la disputa que originó el hecho y la manifestación que, contra el honor del imputado, hiciera la víctima. Igualmente manifestó que debió aplicarse la atenuante consagrada en el ordinal 7° del artículo 66 del Código Penal, puesto que existen múltiples testimonios de que el día de los hechos **RODOLFO RUGAMA** tenía horas de estar libando licor, y si bien es cierto dicha circunstancia no puede exonerarlo de responsabilidad, se debe tomar en cuenta que la ingesta de licor aunada a otros elementos hace que los hechos se magnifiquen y se desequilibren las personas. Por último indicó que la situación que se dio en este proceso está ausente de reflexión por parte de su cliente, quien actuó impulsado por la ira y por el alcohol que le cegó la razón y le hizo actuar sin análisis, con arrebato y sin control.

Corrido el traslado al agente de la Fiscalía Primera Superior del Tercer Distrito Judicial, éste no sustentó por escrito sus objeciones a la apelación de la sentencia, de modo que se le venció el término legal, sin que se pronunciara al respecto.

Las constancias procesales nos indican que en horas de la tarde del día 27 de agosto de 1987 en lugar conocido como Big Creek, distrito y provincia de Bocas del Toro, ocurrió un incidente que trajo como resultado la muerte provocada por herida de arma de fuego del señor JUAN DE LA CRUZ GRACIA. El disparo lo efectuó **RODOLFO RUGAMA GALIANO**, en presencia de testigos que declaran a lo largo del proceso. En vista de que ya el señor **RUGAMA GALIANO** fue encontrado culpable por el jurado de conciencia, nos corresponde evaluar la sentencia en los puntos sobre los cuales versa la apelación de la defensa.

Para resolver el presente recurso, la Sala toma en cuenta lo siguiente.

El Tribunal a-quo al reconocer la agravante común del abuso de superioridad en la sentencia recurrida, manifestó lo siguiente:

> "... aumentamos en una sexta parte por haber abusado el imputado de superioridad utilizando una escopeta, se realiza el disparo a corta distancia a una persona que no consta en autos que tuviese en su poder arma alguna, debilitando la defensa de JUAN DE LA CRUZ GRACIA, ..."

Referente a esta agravante, Gustavo Labatut G., en su obra Derecho Penal, Quinta Edición, a página 369 manifiesta que "Para ser apreciada esta agravante es necesario que el abuso de superioridad haya sido buscado de propósito en la comisión del delito, o sea, que el delincuente se haya prevalido de esta situación para llevar a cabo su designio. En cada caso concreto el Juez deberá tener en cuenta las condiciones del agresor y del agredido, la superioridad de aquel respecto a éste, el sitio y momento en que se perpetró el delito, etcétera".

Con respecto a la utilización de un arma, esta Sala ha sostenido en diversas ocasiones, que ciertamente la agravante de perpetrar con armas el hecho punible (numeral 7, art. 67 del Código Penal), no es aplicable a los casos de homicidio doloso, puesto que la utilización de armas en el delito de homicidio resulta un instrumento idóneo para tal fin, a diferencia de otros delitos en cuyo caso dicho instrumento constituiría una agravante del hecho.

Concretamente esta Sala Penal ha expresado que "en la ejecución del delito de homicidio el arma utilizada es un instrumento esencial, ya que sólo por excepción se podría concebir su comisión sin el auxilio de tal recurso, por lo que procede a desestimar el aumento correspondiente a esta agravante". (Fallo de 28 de octubre de 1991).

Las circunstancias en que se produjo el presente homicidio, estudiados los antecedentes inmediatos a su perpetración y la conducta observada por el imputado, no permiten la aplicación de la agravante de empleo de superioridad por cuanto la misma no se ha dado ni conforme a la doctrina ni a la jurisprudencia mantenida por esta Sala. En consecuencia debe reformarse la sentencia apelada en el sentido de deducir de la pena impuesta el aumento efectuado por el a-quo al aplicar esta agravante en el fallo que se revisa.

Con respecto a la eximente incompleta contenida en el numeral 7 del artículo 66 del Código Penal, que alega la recurrente, es decir, el estado de embriaguez del justiciable; podemos señalar que, el Código Penal en el artículo 29, regula las eximentes de culpabilidad, en los casos en que el estado de perturbación mental del imputado, en el momento del hecho punible, proviene de embriaguez. En este sentido, el numeral 1° se refiere a la embriaguez fortuita como eximente incompleta de culpabilidad y por esto, atenuante común; en tanto que el numeral 2°, consagra la denominada embriaguez preordenada como agravante de responsabilidad. No obstante, nada dice este artículo con relación a la embriaguez voluntaria, es decir, la que proviene de la ingestión voluntaria de bebidas alcohólicas por parte del agente, como es del caso; de donde resulta que ésta no puede ser reconocida como eximente de culpabilidad en nuestro ordenamiento. El estado de embriaguez en que se encontraba el señor **RUGAMA GALIANO** el día de marras, es del tipo voluntaria, que no aparece contemplada en nuestro Código como circunstancia atenuante común, y por tanto, no es posible

reconocer dicha situación a favor del imputado.

Así las cosas, la Sala estima que debe eliminarse el incremento de una sexta parte que el tribunal a quo hiciera sobre la pena base al reconocer la agravante común de abuso de superioridad. De modo que la pena líquida a cumplir por el recurrente será de ocho (8) años de prisión, la cual es cónsona con la gravedad y circunstancias en que se dio el hecho de sangre.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, SALA PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REFORMA la Sentencia de treinta y uno (31) de mayo de 1996, emitida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, en el sentido de CONDENAR a RODOLFO RUGAMA GALIANO a la pena principal de OCHO (8) AÑOS DE PRISIÓN, y a la pena accesoria de INHABILITACIÓN PARA EL EJERCICIO DE FUNCIONES PUBLICAS por término similar, una vez cumplida la pena principal, como responsable del delito de homicidio en perjuicio de JUAN DE LA CRUZ GRACIA, y lo CONFIRMA en todo lo demás.

Notifíquese, Cúmplase y Devuélvase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JUICIO SEGUIDO A LUIS ANTONIO CASTILLO SAMUDIO, SINDICADO POR EL DELITO DE HOMICIDIO COMETIDO EN PERJUICIO DE MARTA ESTELA CASTILLO CERRUD. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

En grado de apelación ingresó a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, la sentencia de 19 de agosto de 1996 (fs. 289 a 299), dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, que condenó a **LUIS ANTONIO CASTILLO COMETA, (A) "CORTADOR" ó "LUCHO"**, a la pena principal de veinte (20) años de prisión y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por todo el tiempo que dure la pena principal, por el delito de homicidio cometido en perjuicio de NORTEÉ ESTHELA CASTILLO CERRUD.

A foja 250, consta el Acta de renuncia a ser juzgado por jurados de conciencia, conforme con lo establecido en el artículo 2321 del Código Judicial, suscrita por el imputado **LUIS ANTONIO CASTILLO SAMUDIO.**

En el presente negocio penal, al culminar la Audiencia Pública **LUIS ANTONIO CASTILLO SAMUDIO** fue declarado culpable en derecho y condenado por el delito homicidio cometido en perjuicio de MARTA ESTELA CASTILLO CERRUD, quien falleció a consecuencia de "... Hemorragia intracerebral (hematoma subdural)... por alteración de centros vitales superiores." (f. 109), tal como consta en el Protocolo de Necropsia N° 95-51, suscrito por la doctora Silvia de Bandel, Directora Médico Forense Encargada del Instituto de Medicina Legal, Dirección Regional de Chiriquí y Bocas del Toro, visible de fojas 105 a 109 del expediente, todo lo cual fue el resultado de un hecho de sangre ocurrido en horas de la tarde del día 5 de marzo de 1995, en la comunidad de Santa Cruz, Ciudad de David, Provincia de Chiriquí.

Tanto el procesado **LUIS ANTONIO CASTILLO SAMUDIO** como su Defensora de Oficio apelaron al notificarse de la sentencia condenatoria.

El procesado en su escrito (fs. 304 a 308), solicita una sentencia menos severa y, en tal virtud, alega que el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, no tomó en cuenta su condición de inimputabilidad al momento de cometer

el hecho punible por causa de trastorno mental, pues el mismo se encontraba en estado de ebriedad, o en su defecto tampoco se tomó en cuenta que el mismo actuó con imputabilidad disminuida ya que al momento de la acción u omisión poseía incompleta la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho en razón de grave perturbación de la conciencia.

El procesado CASTILLO SAMUDIO indica que no está probado en el proceso ni el ensañamiento ni la premeditación; y que el Tribunal Superior agravó el hecho por haber sido cometido en perjuicio de un pariente cercano, sin motivo y con evidente superioridad física. También, CASTILLO SAMUDIO niega que se haya probado la intención de matar en su actuar, es decir, el dolo. También, alega que es normal que existan discrepancias o peleas en las familias y aún más entre los hermanos. Finalmente, sostiene el recurrente que no se le aplicaron las atenuantes del artículo 66 del Código Penal, dada la espontaneidad de la confesión, el arrepentimiento; y, por último, alega ser delincuente primario.

La licenciada Micaela Morales Miranda, Sub-Directora Distrital del Instituto de Defensoría de Oficio del Tercer Distrito Judicial, solicitó en su escrito (fuiste. 310-311), que se rebajara la pena impuesta a **LUIS ANTONIO CASTILLO** por considerarla excesiva y, en tal sentido, indica que los antecedentes de problemas de riñas entre los hermanos PEDRO ELPIDIO CASTILLO y **LUIS ANTONIO CASTILLO** eran constantes (Ver f. 66). En este orden, se refiere a una ocasión en que PEDRO ELPIDIO CASTILLO, hermano del procesado, durante una de las peleas referidas, sacó un "hierro de marcar animales" cuando **LUIS ANTONIO CASTILLO** le iba a tirar una piedra (Ver fs. 77-78 y 95). En base a lo anterior, la recurrente alega que su representado no se percató de que su hermano PEDRO CASTILLO hubiese salido de la casa al momento de darse los hechos, tal cual consta en autos y, por lo tanto, pensaba que este podía salir de la casa en cualquier momento y atacarlo con el machete.

Al referirse al estado anímico de su cliente al momento de los hechos, la recurrente señala que, de las declaraciones rendidas durante la celebración de la Audiencia por BENIGNO CABALLERO ROJAS, DIÓGENES VARGAS y PACIFICO ARAÚZ VEGA, se logra establecer que **CASTILLO SAMUDIO** antes de ocurrir el hecho imputado estuvo ingiriendo licor la noche anterior, luego en horas de la madrugada hasta casi las siete de la mañana (7:00 a. m.) cuidó el local comercial sin dormir, y hasta casi el medio día estuvo bebiendo licor con distintas personas.

Por último, la licenciada **Micaela Morales Miranda**, Defensora de Oficio, hace alusión a la condición de delincuente primario de su representado, según consta a foja 112 del expediente.

Por su parte, el Fiscal Segundo Superior del Tercer Distrito Judicial, Licenciado Fernando Fabián Gutiérrez P., en su escrito de contestación de traslado indicó que la sentencia impuesta es cónsona y correcta con la actuación que se desprende del caudal probatorio contenido en el expediente y que debe ser confirmada para lo cual expresó:

> "Consideramos que los argumentos esbozados por la distinguida Colega de la Defensa no son los pertinentes a la etapa procesal en que nos encontramos, ya que los mismos no son los que señala el Artículo 66 del Código Penal como atenuantes, sino una interpetración de los factores que toma en cuenta el juzgador al momento de dosificar la pena de acuerdo al Artículo 56 del Código Penal. Esta dosificación es un proceso de análisis racional y lógico bajo el prisma de la experiencia del juzgador que a estas alturas del proceso no puede ser cuestionado bajo los razonamientos expuestos, que más bien constituyen alegaciones y no circunstancias atenuantes omitidas. Muy por el contrario a nuestro criterio, la situación expuesta en el escrito de apelación agravan más que benefician el comportamiento del sentenciado." (F. 317).

Primeramente, analizaremos los puntos alegados por el propio procesado en su escrito manuscrito. Así, pues, en cuanto a las agravantes específicas del delito de homicidio, el tribunal a quo aplicó únicamente la relativa al homicidio

ejecutado en la persona de un pariente cercano con conocimiento del parentesco y, contrario a lo aseverado por el recurrente, dicho Tribunal Superior no hizo alusión a la concurrencia de las demás agravantes específicas de dicho delito.

Sobre la presencia del dolo en la conducta llevada a cabo por LUIS ANTONIO CASTILLO y desvirtuando, a nuestro juicio, la tesis de un posible homicidio preterintencional, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial en la sentencia apelada, señaló:

> "... asestar a corta distancia con violencia en el área de la cabeza un golpe de piedra tiene razonable y necesariamente que responder a una orientación volitiva tendiente a causar un gran daño corporal o por lo menos a aceptarlo como posible lo que resulta a juicio de la colegiatura razón suficiente para descartar esta circunstancia." (F. 298).

En cuanto a la circunstancia atenuante común contenida en el ordinal 5° del artículo 66 del Código Penal, sobre la confesión espontánea y oportuna del agente, consideramos oportuno transcribir lo señalado en la sentencia apelada, a saber:

> "Es de notarse que la defensa técnica del procesado argumentó en su momento que la confesión de Luis Antonio Castillo Cometa debía tenerse como oportuna. El tribunal discrepa con la calificación que hace la distinguida letrada de la defensa de la confesión del imputado por dos razones; la primera hace referencia a su contenido ya que debe observarse que Castillo Cometa al rendir su indagatoria inicial más que una mera aceptación de los hechos según las evidencias ya recabadas y obrantes en el expediente, pretendió introducir una versión falsa de lo sucedido que intentó enmarcar su comportamiento como un acto defensivo.
>
> En segundo lugar, el tribunal no estima que la admisión de responsabilidad realizada por el imputado resulte oportuna toda vez que al momento en que este (sic) narra su versión inicial de los hechos ya se contaba en el expediente con las declaraciones de dos testigos presenciales como son María Félix Cerrud y María del Carmen Castillo Cerrud que señalan al procesado como el autor de la conducta que produjo la lesión mortal en la infortunada Marta Estela Castillo Cerrud. Por oportuno debe entenderse un acto cuando sucede en la ocasión propicia. En este contexto debe entenderse como oportuno la confesión que resulta conveniente o favorecedora para los fines de la investigación penal. La confesión oportuna desde un punto de vista procesal será aquella que contribuya a aclarar los hechos y a identificar a los autores o partícipes. En el caso que nos ocupa cuando Luis Antonio Castillo Cometa admite haber asestado la pedrada que ultimó la vida de su hermana ya las pruebas obrantes en el expediente habían establecido estos hechos y lo habían identificado a él como su autor. Por lo anterior, no puede valorarse como circunstancia de atenuación esta admisión tal y como lo pide su defensa técnica." (Fs. 296-297).

Con respecto al arrepentimiento como circunstancia atenuante común (Art. 66, ord. 4°, del C. P.), alegada por el recurrente, la Sala considera que en autos no ha quedado demostrado de manera alguna tal circunstancia modificativa de responsabilidad, la cual se refiere al arrepentimiento, cuando por actos posteriores a la ejecución del hecho, el agente ha disminuido o intentado disminuir sus consecuencias. En este caso, muy por el contrario y, según se desprende de la declaración denuncia rendida por la madre del encausado, MARÍA FÉLIX CERRUD (fs. 2 a 4), éste dejó a la víctima en el piso sin prestarle ninguna ayuda activa como muestra de arrepentimiento y salió corriendo; por lo tanto, en este caso no puede considerarse como aplicable la atenuante común del arrepentimiento contenida en el numeral 4 del artículo 66 del Código Penal citado, puesto que dicha atenuante conlleva necesariamente una actuación positiva por parte del agente. Cabe señalar que la norma exige mucho más que el denominado arrepentimiento pasivo, es decir, el arrepentimiento psíquico o emocional, que

manifiesta el procesado, con posterioridad a los hechos, en su declaraciones o en cualquier otra actividad procesal.

La supuesta condición de inimputabilidad o de imputabilidad disminuida alegada por el recurrente, es desvirtuada por lo señalado en el Oficio N° 102-PSIQ-95 de 11 de julio de 1995 (fs. 186 a 190), suscrito por el Director Médico Forense, Doctor Manuel Elías Núñez, contentivo del examen médico-legal psiquiátrico practicado a la persona de **LUIS ANTONIO CASTILLO SAMUDIO**, del cual se desprende que:

> "... el señor LUIS ANTONIO CASTILLO SAMUDIO presenta una personalidad cuyos rasgos de carácter (sic) y su conducta desviada lo ubican (sic) del grupo de los sociópatas o psicópatas que no son enfermos mentales, son imputables y tienen capacidad para comprender la licitud o ilicitud de sus actos. La psicopatía no es una enfermedad mental. ... ." (F. 190).

Sobre el estado de embriaguez del justiciable al momento del hecho investigado, también alegado por la Defensora de Oficio en su escrito, podemos señalar que el Código Punitivo, en el artículo 29, regula las eximentes de culpabilidad, en los casos en que el estado de perturbación mental del imputado, en el momento del hecho punible, proviene de embriaguez. En este sentido, el numeral 1° se refiere a la embriaguez fortuita como eximente incompleta de culpabilidad y, por esto, atenuante común; en tanto que el numeral 2°, consagra la denominada embriaguez preordenada como agravante de responsabilidad. No obstante, nada dice este artículo con relación a la embriaguez voluntaria, es decir, la que proviene de la ingestión voluntaria de bebidas alcohólicas por parte del agente, como es el caso. De donde resulta que, la embriaguez voluntaria, ya sea completa o incompleta, no está calificada como atenuante o agravante en nuestro ordenamiento.

En segundo lugar, sobre los puntos alegados por la Defensora de Oficio, la Sala estima que la referencia que hace a las diferencias existentes entre el hermano del procesado y éste último, podrían tenerse como circunstancias de tiempo, modo y lugar, y siendo elementos que deben considerarse al momento de evaluar la pena, según el artículo 56 del Código Penal, es fácil advertir del contenido de la resolución impugnada, que las mismas fueron debidamente valoradas por el Tribunal Superior para la cuantificación de la pena, aunado a lo anterior el hecho de que el procesado varió su versión en ese punto al ampliar su indagatoria durante la diligencia de reconstrucción de los hechos.

Finalmente, en cuanto a la circunstancia de delincuente primario del sujeto activo del delito, la Corte ha manifestado en reiteradas ocasiones que este factor se toma en cuenta para la individualización de la pena en abstracto partiendo de los intervalos fijados por la individualización legal, conforme el artículo 56 del Código Penal y, en tal virtud, debe respetarse la discrecionalidad del juez al fijar la pena base dentro del intervalo penal contentivo de la punibilidad aplicable al delito, o sea, la individualización judicial por antonomasia que hace el juez de la causa en uso de sus facultades legales, considerando los elementos de juicio del proceso respecto de la persona del sujeto activo del delito. Y, además, tales circunstancias no son elementos susceptibles de ser apreciados como atenuantes de la responsabilidad penal, puesto que ello significaría una doble valoración.

En la sentencia apelada el Tribunal del conocimiento individualizó la pena en abstracto dentro del intervalo penal de doce (12) a veinte (20) años, por configurar la conducta delictiva el tipo del homicidio calificado del artículo 132, ordinal 1°, del Código Penal, es decir, por tratarse de un homicidio cometido "En la persona de un pariente cercano con conocimiento del parentesco ... .", siendo que **LUIS ANTONIO CASTILLO** era hermano de MARTHA ESTHELA CASTILLO CERRUD, según consta en autos.

Para la dosificación de la pena, como hemos dicho, el a quo tomó en cuenta los parámetros previstos en el artículo 56 del Código Penal y, en tal sentido, señaló en la sentencia apelada lo siguiente:

> "En esta tarea el tribunal ha considerado los aspectos objetivos y subjetivos del hecho punible tal y como expresamente lo solicitó la defensora al alegar y considera, contrario a lo alegado en su momento por esta (sic), que la condición de ebriedad del procesado vistas las circunstancias bajo las cuales se dio el hecho, es decir en casa de su madre rodeado de sus hermanas, hermanos y parientes cercanos y en total ausencia de situación de peligro o amenaza tal, no puede ser tenida en cuenta para moderar la pena aplicable, al contrario estima el tribunal que frente al valor y la importancia de la lesión ocasionada, la pobre calidad de los motivos determinantes y las circunstancias de modo, tiempo y lugar le imponen al tribunal la obligación de fijar la pena base en veinte años de prisión." (F. 295).

Ante tales circunstancias, el Tribunal a quo individualizó la pena base por homicidio agravado en veinte (20) años de prisión y, por no existir circunstancias modificativas de la responsabilidad penal, ni atenuantes ni agravantes que aplicar, fijó la pena líquida a cumplir en veinte (20) años de prisión.

También, fijó la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por el tiempo que dure la pena principal.

Siendo que el Tribunal del conocimiento tomó en cuenta las circunstancias del artículo 56 del Código Penal al fijar la pena base en abstracto y, como hemos dicho, la misma debe ser respetada por el Tribunal de alzada en aras de la independencia judicial y la discrecionalidad que tienen los jueces de instancia al momento de la dosificación de la pena, es por lo que consideramos que una pena base de veinte (20) años de prisión es cónsona con la gravedad y las condiciones en que se dio el delito. Y, por no existir circunstancias modificativas de la responsabilidad penal que deban ser aplicadas al momento de la concretización de la pena, aunado a la falta de elementos de juicio que permitan rebajar la pena, en los hechos antecedentes concomitantes y posteriores al delito, lo procedente es confirmar la pena fijada.

Por otro lado, observa la Sala, que **LUIS ANTONIO CASTILLO SAMUDIO** es una persona alcohol-dependiente y drogo dependiente, puesto que presenta cuadro de adicción y dependencia psíquica a drogas como marihuana, cocaína y piedra, tal como se señala en las experticias suscritas por el Director Médico Forense del Instituto de Medicina Legal, Dirección Regional de Chiriquí-Bocas del Toro, Doctor Manuel Elías Núñez, de fojas 186 a 190 del expediente.

Advertimos que el fin de la pena privativa de la libertad es que el reo aprenda a administrar su libertad sin afectar los derechos de los demás miembros de la sociedad y, en el caso de delincuentes alcohólicos y drogadictos, se requiere la aplicación de medidas curativas, a efectos de lograr un verdadero tratamiento científico, en vías de enmendar la conducta del reo.

Por lo tanto, según el artículo 110 y 112, numeral 1° del Código Penal, la medida curativa vista como una medida de seguridad y no como un castigo, se aplicará a los delincuentes alcohólicos y toxicómanos habituales, quienes serán sometidos a un programa terapéutico de recuperación dentro del Centro Penitenciario, por un término hasta de veinte (20) años, término máximo permitido en nuestra legislación (Art. 115 del C. P.).

En mérito de lo expuesto la Corte Suprema, Sala Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia apelada de 19 de agosto de 1996, dictada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, que condenó a LUIS ANTONIO CASTILLO SAMUDIO, (A) "CORTADOR" ó "LUCHO", a la pena principal de veinte (20) años de prisión y a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por todo el tiempo que dure la pena principal, por el delito de homicidio cometido en perjuicio de MARTHA ESTHELA CASTILLO CERRUD; y ADICIONA la sentencia apelada, en el sentido de aplicar al condenado, la medida de seguridad curativa de tratamiento para alcohólicos dentro del Centro Penitenciario, por el término fijado para la pena principal.

Notifíquese, Devuélvase y Cúmplase.

(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

DENUNCIA CONTRA LOS QUE RESULTEN RESPONSABLES EN LA DIRECCIÓN DE MIGRACIÓN Y NATURALIZACIÓN POR EL SUPUESTO DELITO CONTRA LA LIBERTAD INDIVIDUAL EN PERJUICIO DE LOS CIUDADANOS CHINOS WU PIN XI, FAN GUANG WEI, OU KIN, JIANG LI FANG, ZHONG SAO SENG, ZHONG ZHANG GUI, JIANG XIU RU, LAU KEN, WANG WEN SHI, WU JIN TUAN. MAGISTRADO PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA SEGUNDA DE LO PENAL.

VISTOS:

Procedente de la Procuraduría General de la Nación, ingresa a la Sala Segunda de la Corte Suprema el cuaderno que contiene la denuncia presentada por el licenciado **EULDARIN ASPRILLA C.** contra los que resulten responsables en la **Dirección de Migración y Naturalización** por la comisión de los delitos de violación a los derechos humanos, omisión en el ejercicio de las funciones pública, abuso de autoridad e infracción de los deberes de los funcionarios públicos, abuso contra la libertad individual y todos aquellos otros delitos en que pudieron haber incurrido el o los responsables de la detención que sufren número plural de personas en ese momento detenidos a órdenes de la Dirección Nacional de Migración.

La vista fiscal remitida por el Procurador General pone de manifiesto que la denuncia solamente fue acogida por el despacho instructor en atención a lo relacionado con el delito contra la libertad que, en la denuncia, el licenciado Asprilla dirige contra el Director Nacional de Migración, quien a su juicio tiene privadas de su libertad durante varios meses a un grupo de personas que proceden de la República de China, ya que las restantes imputaciones recaen sobre delitos que requieren prueba sumaria del hecho que se imputa al servidor público, omisión que motivó que el despacho acogiera la misma sólo en lo que respecta al delito contra la libertad como ya quedó expuesto.

En su Vista N° 75, de 29 de octubre de 1996 el Procurador General de la Nación recomienda el sobreseimiento definitivo de carácter objetivo e impersonal del presente sumario, teniendo como fundamento para ello lo establecido en el artículo 2210 del Código Judicial.

Un detenido estudio de la denuncia presentada por razón de la situación que sufren los señores WU PIN XI, FAN GUANG WEI, OU KIN, JIANG LI FANG, ZHONG SAO SENG, ZHONG ZHANG GUI, JIANG XIU RU, LAU KEN, WANG WEN SHI, WU JIN TUAN y del informe del Director Nacional de Migración del Ministerio de Gobierno y Justicia evidencia que las personas antes mencionadas se encuentran detenidas en las instalaciones de la Dirección de Migración en espera de ser deportadas del país, ya que ninguna de ellas tiene documentos que justifique su permanencia válida en el territorio nacional.

No cabe duda que la actuación del Director de Migración se ajusta a derecho, ya que está autorizado por la legislación vigente para decretar la deportación de los extranjeros cuya permanencia en el territorio nacional no se ajuste a las exigencias que en cada caso se exija, siendo inadmisible que se considere que éste servidor público o algún otro bajo su dependencia funcional haya cometido atentado alguno contra la libertad de las personas detenidas en espera de ser deportadas del territorio nacional.

Por otra parte, en la denuncia también se alega la comisión del delito de violación de los derechos humanos, hecho punible que no existe en nuestro ordenamiento jurídico, pues el tipo penal respectivo fue declarado inconstitucional por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia con anterioridad a la presentación de la denuncia.

Que evidenciado, por tanto, que no se ha cometido ninguno de los hechos punibles que sustentan la denuncia, por lo que procede acoger la recomendación del Ministerio Público.

Por todas las razones antes expuestas, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECRETA EL SOBRESEIMIENTO DEFINITIVO de carácter objetivo e impersonal en este sumario.

Derecho: artículo 2210 numeral 2 del Código Judicial.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS (fdo.) HUMBERTO A. COLLADO T.
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ACUSACIÓN PARTICULAR PRESENTADA POR EL LICENCIADO JOSÉ E. GÓMEZ EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE UBALDA RODRÍGUEZ QUINTERO, CONTRA RICAURTER GONZÁLEZ GONZÁLEZ, SINDICADO POR EL DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL EN PERJUICIO DE SERGIO FERNANDO FRANCO RODRÍGUEZ. MAGISTRADO PONENTE: FABIÁN A. ECHEVERS. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

Se encuentra para decidir recurso de apelación interpuesto por el licenciado César Román Tello Solano contra el auto de 26 de julio de 1996 proferido por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, mediante el cual se admite la acusación particular presentada por Ubalda Rodríguez Quintero, a quien representa judicialmente el licenciado José E. Gómez, contra Ricaurte González González, sindicado por delito contra la vida y la integridad personal cometido en detrimento de Sergio Fernando Franco.

En el escrito de sustentación de la alzada, el recurrente plantea que el libelo de acusación particular no satisface los requisitos previstos en el artículo 2013 del Código Judicial. En síntesis, manifiesta que la iniciativa procesal "no dice expresamente quién es la parte acusadora y acusada en forma clara como lo ordena el artículo 2013 del Código Judicial" (f. 23); que "no consta la sección en donde debió estar indicado por su nomen iuris el hecho punible" (f. 24); que "no consta...la sección que se refiere al lugar de la comisión del hecho punible" (f. 24); que "La señora UBALDA RODRÍGUEZ QUINTERO, no se obliga a continuar la acusación particular" (f. 26); y que tampoco cumple con la exigencia legal concerniente a la cita de las disposiciones legales infringidas (f. 27).

Para resolver la alzada, la Corte debe limitarse exclusivamente a los puntos objetados por el recurrente, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 2428 del Código Judicial.

A juicio de la Sala, el libelo de acusación particular se presenta con una redacción distinta a la usualmente utilizada para la formalización de esta iniciativa procesal, pues el representante de la acción privada sólo hace referencia a una "BREVE NARRACIÓN DEL ACCIDENTE DONDE FALLECIÓ EL SEÑOR SERGIO FRANCO" (f. 2), sin atender, con exactitud y precisión, los requisitos formales correspondientes a: 1) la designación de la parte acusadora y acusada, 2) la

conducta ilícita imputada, 3) el lugar y fecha en que se ejecutó, con una relación de las circunstancias esenciales del hecho, y 4) las disposiciones legales infringidas, contemplados en el artículo 2013 del Código Judicial, reformado por el artículo 7 de la Ley N° 3 de 22 de enero de 1991.

De otra parte, esta Superioridad advierte que la manifestación que hace la parte acusadora en el poder otorgado al licenciado Gómez, en el sentido de que se compromete "a probar la veracidad de los hechos en que se funda la Acusación Particular" (f. 1), no se adecúa al compromiso a que se refiere el artículo 2013 del Código Judicial, según el cual el acusador debe obligarse "**a continuar con la acusación** y a probar la verdad de su relato". La Corte ha señalado que el incumplimiento de esta exigencia "constituye un defecto de forma que impide el ejercicio de la acción penal, y consecuentemente, descarta la intervención activa y eficaz del acusador durante la etapa sumarial" (Registro Judicial, marzo de 1996, pág. 242).

Por lo antes expuesto, LA SALA PENAL DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCA el auto de 26 de julio de 1996 dictado por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial y, en su lugar NO ADMITE la acusación particular promovida por Ubalda Rodríguez Quintero contra Ricaurte González González.

Notifíquese y Devuélvase.

(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) HUMBERTO A. COLLADO (fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) MARIANO E. HERRERA
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA TERCERA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

NOVIEMBRE 1996

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO DAVID G. MEJÍA EN REPRESENTACIÓN DE JORGE LUIS JIMÉNEZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 81 DE 23 DE JULIO DE 1996, DICTADO POR CONDUCTO DEL MINISTRO DE HACIENDA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado David G. Mejía, actuando en nombre y representación de Jorge Luis Jiménez, ha interpuesto ante la Sala Tercera (contencioso-administrativo) demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto de Personal N° 81 de 23 julio de 1996, dictado por conducto del Ministro de Hacienda y Tesoro, y para que se hagan otras declaraciones.

El acto impugnado lo constituye el Decreto de Personal N° 81 de 23 de julio de 1996 por medio del cual se declara insubsistente el nombramiento, en el Ministerio de Hacienda y Tesoro, del señor Jorge Luis Jiménez de Inspector de Aduanas III Supervisor en la Dirección General de Aduanas.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda a fin de determinar si se cumplen todos los presupuestos procesales necesarios para que la misma pueda ser admitida.

Observa quien suscribe que el recurrente señala como infringido el artículo 295 de la Constitución Nacional. Al respecto, la Sala ha mantenido el criterio de que la demanda contencioso administrativa tiene como fundamento examinar la legalidad del acto jurídico impugnado, por lo cual lo correcto es señalar como normas infringidas preceptos legales y no preceptos constitucionales, lo cual es propio de una demanda de inconstitucionalidad y no de una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, como la que en este caso nos ocupa.

En vista de lo anteriormente expuesto, lo procedente es no admitir la demanda.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado David G. Mejía, actuando en nombre y representación de Jorge Luis Jiménez, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto de Personal N° 81 de 23 de julio de 1996, dictado por conducto del Ministerio de Hacienda y Tesoro, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA PETRA MARIA SORIANO ARAÚZ, EN REPRESENTACIÓN DE MARTA MILITZA GAMBOA, PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES, LOS ACUERDOS MUNICIPALES N° 16 Y 17 DE 24 DE MARZO DE 1995, EMITIDOS POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE CHANGUINOLA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada **Petra María Soriano Araúz** en representación de **MARTA MILITZA GAMBOA** ha presentado escrito de desistimiento del recurso de apelación interpuesta contra la Resolución de 13 de agosto de 1996 que no admite ciertas pruebas dentro de la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción que interpusiera el día 24 de noviembre de 1995, contra la Resolución N° 87-95 de 31 de julio de 1995, emitida por el Ministerio de Vivienda.

La recurrente mediante escrito que corre a foja 142, manifestó básicamente lo siguiente:

> "Con todo respeto, Yo, PETRA MARÍA SORIANO ARAÚZ, mujer, panameña, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad personal N° 7-70-1979, con oficinas en Ave. Justo Arosemena y Calle 35, edif. Ford, primer piso, N° 12, lugar donde recibo notificaciones personales, respetuosamente concurro ante usted, en nombre de MARTA MILITZA GAMBOA, de generales conocidas en el presente negocio, a fin de presentar, como en efecto lo hago, DESISTIMIENTO DE LA APELACIÓN interpuesta contra la Resolución de fecha 13 de agosto de 1996, proferida por la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema".

Dado que el artículo 1073 del Código Judicial, establece que "toda persona que haya entablado una demanda, promovido un incidente o **interpuesto un recurso**, puede desistir expresa o tácitamente" **(lo resaltado es nuestro)** no queda mas que admitir dicho desistimiento.

En consecuencia, la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE el desistimiento presentado por la licenciada Petra María Soriano Araúz en representación de MARTA MILITZA GAMBOA, del recurso de apelación interpuesta contra la Resolución de 13 de agosto de 1996 que no admite ciertas pruebas dentro de la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción que interpusiera el día 24 de noviembre de 1995, contra la Resolución N° 87-95 de 31 de julio de 1995, emitida por el Ministerio de Vivienda.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA AIDA JURADO ZAMORA, EN REPRESENTACIÓN DE LÁZARO GONZÁLEZ GONZÁLEZ, PARA QUE LA SALA TERCERA DECLARE, QUE EL DEMANDANTE TIENE DERECHO A SER RESTITUIDO AL CARGO DE TENIENTE DE LA FUERZA PÚBLICA, POR HABERLO DISPUESTO ASÍ EL JUZGADO SEXTO PENAL DE CIRCUITO DE CHIRIQUÍ, MEDIANTE AUTO N° 92 DE 1° DE FEBRERO DE 1996, Y QUE ES VIOLATORIA LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO INCURRIDO POR EL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA AL NO EJECUTAR UNA ORDEN JUDICIAL. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada **Aida Jurado Zamora**, actuando en nombre y representación de **LÁZARO GONZÁLEZ GONZÁLEZ**, ha interpuesto recurso de apelación contra la Resolución de 19 de agosto de 1996 que no admite la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que la Sala Tercera declare que el demandante tiene derecho a ser restituido al cargo de Teniente de la Fuerza Pública, por haberlo dispuesto así el Juez Sexto de Circuito, Ramo Penal, de la Provincia de Chiriquí, mediante Auto N° 92 de 1° de febrero de 1996, y que es violatoria la negativa tácita por silencio administrativo incurrido por el

Ministro de Gobierno y Justicia al no ejecutar una orden judicial.

El Magistrado Sustanciador no admitió la demanda y así procedió a declararlo de conformidad con lo preceptuado en el numeral 3 del artículo 42 de la Ley N° 135 de 1943 al constatar que la negativa tácita, en que incurrió el Ministro de Gobierno y Justicia, no es un acto impugnable ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. La solicitud formulada, se refiere al incumplimiento de una resolución judicial, cuya ejecución sólo puede pedirse utilizando los mecanismos legales previstos al efecto y no mediante una acción contenciosa administrativa de plena jurisdicción.

También señala el Magistrado Sustanciador que la apoderada judicial del actor no cumplió con lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, ya que no pidió nulidad de ningún acto en particular, sino que se limitó a solicitar que la Sala Tercera hiciera las siguientes formulaciones:

> "A. Que el señor LÁZARO GONZÁLEZ, tiene derecho a ser restituido al cargo de Teniente de la Fuerza Pública por haberlo dispuesto así el Juzgado Sexto Penal de la Provincia de Chiriquí mediante auto N° 92 del 1° de febrero de 1996, e informado al Ministro de Gobierno y Justicia mediante oficio N° 348 del 29 de febrero de 1996.
>
> B. Que es violatorio de la Ley el Acto del Ministro de Gobierno y Justicia de negar tácitamente por silencio administrativo la restitución del cargo de Teniente de la Fuerza Pública al señor **LÁZARO GONZÁLEZ GONZÁLEZ**, al no cumplir lo dispuesto por el Juez Sexto de Circuito Penal de Chiriquí mediante auto N° 92, del 1° de febrero de 1996, e informado mediante oficio N° 348 del 29 de febrero de 1996.
>
> C. Que como consecuencia de ello, el Ministro de Gobierno y Justicia esto ha obligado a restituir en el cargo de Teniente de las Fuerzas Públicas al señor **LÁZARO GONZÁLEZ GONZÁLEZ**, funciones que tenía y desempeñaba dentro de esta Institución, cuando fue suspendido del cargo por el Procurador General de la Nación, y pagarle todos los salarios dejados de percibir desde que fuera suspendido del cargo, con iguales derechos y prerrogativas hasta que se cumpla con la resolución de restitución, así como reconocer cualquier otro derecho de que hubiere gozado de no habérselo impedido la suspensión".

La parte actora sustenta su recurso de apelación con los siguientes planteamientos:

> "No compartimos el criterio esbozado en la resolución recurrida en su primer argumento, por cuanto que si bien es cierto, existen otras vías judiciales desconocidas por el Ministro de Gobierno y Justicia, esta vía sólo prevé sanción ("incumplimiento"), más no la restauración del derecho particular violado; y no es la ilicitud de la conducta lo que se persigue por el desacato del Ministro de Gobierno y Justicia, sino la ilegalidad de su acto lo cual es jurídicamente diferente, mientras lo ilícito presume un acto típico contrario a derecho y lesivo a bienes jurídicamente protegidos; la ilegalidad presume un acto contrario a Ley que generan vicios de nulidad.
>
> Por otra parte, la resolución judicial que ordena el levantamiento de la suspensión de cargo de **LÁZARO GONZÁLEZ GONZÁLEZ**, tiene contenido administrativo ya que la suspensión de cargo es una medida cautelar que afecta la relación jurídica del administrado con la administración.
>
> La acción contenciosa administrativa que se promueve surge de la declaración de voluntad de la administración, destinada a producir efectos jurídicos y su expedición es el fruto de una función administrativa, elementos estos que caracterizan el acto admi-

nistrativo.

En este sentido el Ministro de Gobierno y Justicia exterioriza su voluntad negando tácitamente un derecho en ejercicio de una función administrativa, independientemente de la responsabilidad que pueda generar el incumplimiento de la orden judicial.

Cabe anotar que el silencio administrativo se produce cuando no ha habido decisión o pronunciamiento sobre algún recurso o solicitud interpuesto; es decir, cuando sobre la solicitud o sobre el recurso formulado no recae decisión o pronunciamiento del funcionario, y para considerarlo operante la doctrina ha señalado que el acto contra el cual se recurre o haya recurrido para pretender el agotamiento de la vía administrativa debe ser susceptible de ese recurso sea por el derecho subjetivo que lesiona o afecte a cualquier particular o por incidir en otras relaciones de carácter subjetivo a que se encuentre vinculado (auto de 21 de septiembre de 1978 publicado en Jurisprudencia Contenciosa administrativa 1971-1985, de ROY AROSEMENA Y JOSÉ FRAYMO, 1987).

En atención a lo expresado siendo que los actos de las entidades públicas violatorias de las leyes son recurribles por esta vía y en el caso que nos ocupa la acción del Ministerio de Gobierno y Justicia lesiona derechos subjetivos consideramos viable la admisibilidad de la demanda.

Finalmente, en cuanto al segundo argumento de la resolución recurrida pareciera intranscendente expresar taxativamente la nulidad de actos administrativos concretos, cuando la nulidad ""**per se**" es tácita ya que la actuación del demandado así se ha evidenciado y al solicitar el restablecimiento del derecho particular violado, cualquier acto que lo haya originado supone nulidad."

El resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera, coinciden con los criterios expuestos por el Magistrado Sustanciador, ya que la negativa en que incurrió el Ministro de Gobierno y Justicia no es un acto impugnable ante la vía contencioso administrativa, de conformidad con el numeral 3 del artículo 22 de la Ley 33 de 1946. Dicha negativa se refiere al incumplimiento de una resolución judicial, cuyo conocimiento corresponde al mismo tribunal que emitió dicha resolución. Igual opinión emitió la Corte en fallo de 25 de septiembre de 1996, al confirmar la resolución de 6 de agosto de 1996, por medio de la cual no se admitió la demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción interpuesta en nombre y representación de FRANCISCO ALEXIS HERRERA para que se le restituyera al cargo de Capitán de la Fuerza Pública.

Debemos agregar que la parte actora se limita a pedir que se reintegre al señor **LÁZARO GONZÁLEZ**, a su cargo de Teniente de la Fuerza Pública, esto contraviene lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 43 a) de la Ley 135 de 1943, ya que el petitum de la demanda no es referente a la nulidad de ningún acto en particular, sino al reintegro del prenombrado dentro de la Fuerza Pública. Lo solicitado no se relaciona con la naturaleza de la acción contenciosa-administrativa de plena jurisdicción propuesta en la que, previo a la petición de reparación del derecho violado, se requiere que se pida la nulidad de actos administrativos concretos.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, actuando en nombre de la república y por autoridad de la ley, CONFIRMAN la Resolución de 6 de agosto de 1996, por medio de la cual NO SE ADMITE la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por la licenciada Ida Jurado Zamora, actuando en nombre y representación de LÁZARO GONZÁLEZ GONZÁLEZ.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICDO. FIDEL PÉREZ EN REPRESENTACIÓN DE JUAN SOLÍS, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 23 DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 1995, DICTADA POR LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE DARIÉN, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La Procuradora de la Administración, mediante Vista fiscal N° 358 de 13 de agosto de 1996, ha promovido recurso de apelación contra la providencia calendada 2 de mayo del año en curso (v. f. 26), la cual admitió la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción propuesta por el licenciado Fidel Pérez en nombre y representación de **JUAN SOLÍS**, para que se declare nula por ilegal, la resolución N° 23 de 20 de septiembre de 1995 dictada por la Dirección Provincial de Educación de Darién, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

El argumento esgrimido por la Procuradora de la Administración, que fundamenta su pretensión de que no se admita la demanda, consiste en que la parte actora no ha cumplido con la formalidad exigida en el numeral 1 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, en el cual se señala que la demanda además de otros requisitos debe contener la designación de las partes y de sus representantes, lo que aquí no se cumplió, indica la Procuradora, ya que el actor designa como parte demandada al Ministerio de Educación, suprimiendo de tal forma a la Dirección Provincial de Educación de Darién.

Menciona además que se no se ha obedecido con lo preceptuado en artículo 102 del Código Judicial, dado que el libelo no fue dirigido al Magistrado Presidente de la Sala Tercera de la Corte.

Encontrándose la alzada en este estado, el resto de los Magistrados que integran este Tribunal entran a resolver si le asiste o no razón a la señora Procuradora.

Al revisar las constancias procesales que reposan en el expediente se observa que efectivamente la parte actora no identifica debidamente a la parte demandada, que en este caso es el Director Provincial de Educación de Darién, funcionario público que emitió el acto. Tampoco hace mención de la intervención de la Procuradora de la Administración, ni el concepto en que interviene, quien, tratándose de una acción de plena jurisdicción, actúa en defensa del acto acusado de ilegal, de conformidad con el artículo 348, ordinal 2 del Código Judicial.

Esta situación contraviene lo dispuesto en el ordinal 1 del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, reformado por la Ley 33 de 1946, que expresa que toda demanda presentada ante la vía Contencioso Administrativa, contendrá necesariamente, la designación de las partes y sus representantes.

Como bien puntualizó la señora Procuradora de la Administración, esta Sala ha sido reiterativa en señalar que los requisitos del artículo 43 de la Ley 135 de 1943, son de imperativo cumplimiento, y por ende, su desconocimiento hace imposible la admisión de la demanda, de acuerdo con lo establecido en el artículo 31 de la Ley 33 de 1946. Al respecto cfr. Autos de 7 de febrero de 1974, 25 de junio de 1992, 16 de noviembre de 1993 y de 6 de enero de 1995.

Es cierto además que la demanda tampoco ha sido dirigida al Magistrado Presidente de la Sala tercera de la Corte Suprema, tal como lo exige el artículo 102 del Código Judicial que establece:

> "Artículo 102. Las demandas, recurso, peticiones e instancias formuladas ante la Corte Suprema de Justicia y los negocios que hayan de ingresar por alguna razón en ella, deberán dirigirse al Presidente de la Corte si competen al Pleno de ésta o a la Sala de Negocios Generales y a los Presidentes de las Salas Primera, Segunda y Tercera, si se tratare, respectivamente, de negocios civiles, penales, contencioso-administrativos y laborales y se hará la presentación ante el Secretario General o de la Sala correspondiente, quien debe dejar constancia de ese acto".

Finalmente, se aprecia la ausencia de otro requisito legal indispensable para que la solicitud pueda ser admitida ante la jurisdicción contencioso administrativa, toda vez que en la misma no se expresa el concepto de la violación de la norma que se estima infringida.

En efecto, el recurrente sólo se limita a expresar que la Resolución N° 23 de 20 de septiembre de 1995, emitida por la Dirección Provincial de Educación de Darién infringe el artículo 129 de la Ley 47 de 1946, Ley Orgánica de Educación, y que dicho acto solamente contiene simples declaraciones "sin fundamento probatorio, subjetivas, encaminadas a expresar por parte de los declarantes su opinión muy particular al hecho sucedido el día 17 de octubre de 1994, en el centro Educativo Nicanor", y tal señalamiento no constituye la relación entre el vicio o vicios de ilegalidad demandados y su justificación jurídica, lo cual no le permite al juzgador precisar certeramente si se produce o no la violación legal demandada y cuya nulidad se pretende.

Pues bien en la presente demanda no se ha determinado el concepto de la violación, ni los motivos de ilegalidad, incumpliendo de esta manera el artículo 28, numeral 4, de la Ley 33 de 1946 que a continuación citamos:

> "ARTÍCULO 28: Toda demanda ante la jurisdicción contencioso administrativa contendrá ...
> 4. La expresión de las disposiciones que se estimen violadas y el concepto de la violación."

Es un requisito formal y fundamental para la admisión de la demanda el cumplimiento de todos los requisitos del artículo 28, en este caso, en su numeral 4; por tanto, al no expresarle claramente al Tribunal el concepto de la violación y los motivos de su ilegalidad, no podrá este emitir pronunciamiento alguno.

En consecuencia el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera, Contencioso Administrativa, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REVOCAN la Providencia de 2 de mayo de 1996, y en consecuencia NO ADMITEN la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el licenciado Fidel Pérez en representación de JUAN SOLÍS, para que se declare nula por ilegal la Resolución N° 23 de 20 de septiembre de 1995, dictada por la Dirección Provincial de Educación de Darién.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAMÓN DE LA O FERNÁNDEZ, EN REPRESENTACIÓN DE ALCIDES D. LINARES RIVERA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO N° 27 DE 27 DE MARZO DE 1996, EXPEDIDO POR EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Ramón De La O Fernández, actuando en nombre y representación de ALCIDES D. LINARES RIVERA, ha promovido demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto Ejecutivo N° 27 de 27 de marzo de 1996, expedido por el Presidente de la República por conducto de la Ministra de Comercio e Industrias, y para que se haga otras declaraciones.

Al examinar la presente demanda para determinar si cumple con los requisitos para ser admitida se observa que adolece de varios defectos.

En primer lugar, el demandante omitió presentar copia autenticada del acto impugnado tal como lo exige el artículo 44 de la Ley 135 de 1943.

En segundo lugar, el actor no ha probado que agotó la vía gubernativa porque no presentó copia del escrito mediante el cual sustentó el recurso de reconsideración, ni tampoco comprobó que el recurso promovido no ha sido resuelto, por medio de certificación emanada de la autoridad que emitió el acto.

En tercer lugar, la acción está prescrita porque fue promovida cuando había transcurrido con exceso el término de dos meses, contado a partir de la fecha en que se interpuso el recurso de reconsideración, que según afirma el demandante no fue resuelto, por lo que alega que la vía gubernativa se agotó por silencio administrativo (Artículo 27 de la Ley 33 de 1946).

Por las razones expuestas, no debe dársele curso a la presente demanda, en cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

De consiguiente, la suscrita Magistrada de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción presentada por el licenciado Ramón De La O Fernández, en representación de ALCIDES D. LINARES RIVERA, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto Ejecutivo N° 27 de 27 de marzo de 1996, y para que se haga otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA LENIS M. ORTEGA EN REPRESENTACIÓN DE ALBERTO BOLÍVAR CONTE, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN DE 7 DE FEBRERO DE 1996 SUSCRITA POR EL GERENTE GENERAL DEL BANCO HIPOTECARIO NACIONAL, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Mediante Vista N° 357, de 13 de agosto de 1996, la señora Procuradora de la Administración interpuso recurso de apelación contra la Resolución de 20 de junio de 1996, por medio de la cual se admitió la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción presentada por la licenciada Lenis M. Ortega, en nombre y representación de ALBERTO BOLÍVAR CONTE, para que se declare nula por ilegal, la Resolución de 7 de febrero de 1996, dictada por el Gerente General del Banco Hipotecario Nacional, la negativa tácita por silencio administrativo, y para que se hagan otras declaraciones.

I. LOS FUNDAMENTOS DEL RECURSO

La representante del Ministerio Público estima que la demanda no debió ser admitida, porque la Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo, mediante Sentencia de 13 de septiembre de 1993, se pronunció en el fondo sobre la devolución de seis cuentas de ahorros que, en calidad de capital semilla mantenía el señor Alberto Bolívar Conte, en la Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos para la Vivienda (en adelante ANAP). En esta sentencia, afirma la señora Procuradora de la Administración, esta Corporación de Justicia ordenó que de las sumas depositadas en las seis cuentas de ahorro mencionadas, le fueran devueltas al señor ALBERTO BOLÍVAR CONTE, la suma total de DIEZ MIL BALBOAS (B/.10,000.00) por ser el monto asegurado por asociado.

La señora Procuradora citó, como fundamento de su recurso, el numeral 2 del artículo 203 de la Constitución Nacional y el artículo 100 del Código Judicial los cuales establecen que las decisiones de la Sala Tercera en ejercicio de sus atribuciones contencioso-administrativas son finales, definitivas y obligatorias y contra ellas no cabe recurso alguno.

II. ARGUMENTOS DE LA PARTE ACTORA

La demandante se opone al recurso de apelación promovido por la señora Procuradora alegando que, en la Sentencia de 13 de septiembre de 1993, "la Sala Tercera, en esa oportunidad, no determinó que el señor Conte perdía el resto de las libretas, sólo aceptó que una de éstas, a criterio muy particular de la Junta Directiva del Banco Hipotecario Nacional, estaba asegurada y así lo ha debido interpretar esta institución bancaria, quien desconoció la Ley que norma al Sistema de Ahorros y Préstamos para la Vivienda. Este sistema de ahorros cobraba primas mensuales, por cada cuenta abierta, con el fin de mantener una póliza de seguro obligatoria en el Instituto de Fomento de Hipotecas Aseguradas, que garantizaba la seguridad de todas y cada una de las cuentas y no por cada asociado, situación que fuera públicamente utilizada por las distintas asociaciones de Ahorros y Préstamos para la Vivienda, para atraer depositantes y que consta en las portadas de las libretas de ahorros. En el caso de nuestro mandante Alberto Conte, él pagaba seguro para proteger los fondos depositados en seis (6) libretas y no solamente en una de éstas (foja 45)".

Adicionalmente, la parte actora considera que no hay identidad en la causa de pedir porque en la Sentencia del 13 de septiembre de 1993, la Sala dijo que una de las seis (6) libretas se encontraba asegurada, y que el resto no lo estaba, y que en esta ocasión está acudiendo a la Sala debido a la negativa del Banco Hipotecario Nacional a devolverle los fondos depositados en las cinco (5) libretas restantes, tema sobre el que la Sala no se pronunció en la sentencia anterior, según criterio de la parte actora.

III. EL INFORME DE CONDUCTA

El funcionario demandado, en calidad de Gerente General del Banco Hipotecario Nacional, en su Informe de Conducta, expuso los antecedentes del caso del depositante señor ALBERTO BOLÍVAR CONTE, expresando que luego de transcurridos más de dos años del Fallo de 13 de septiembre de 1993, de la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Contencioso-Administrativo, mediante carta del 17 de abril de 1995, el señor CONTE vuelve a insistir en sus pretensiones. Por medio del Oficio N° 95-2000-01-2292 de 29 de agosto de 1995, el Banco Hipotecario Nacional dio respuesta a la carta del señor CONTE, manifestando que está obligado a acatar las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y considera que: "... no hay diferencias entre el proceso decidido mediante la citada sentencia de 13 de septiembre de 1993 y el que ahora se ha incoado. El demandante es el señor ALBERTO BOLÍVAR CONTE; su apoderada, la abogada Lenis Mayanín Ortega Candanedo; la pretensión consiste en que el Banco Hipotecario Nacional le devuelva la demandante el monto total de lo depositado y no solamente B/.10,000.00; la parte demandada es el Banco Hipotecario Nacional ..." (foja 33).

IV. OPINIÓN DE LA SALA

Evacuados los trámites legales, el resto de los Magistrados que integran

la Sala procede a resolver la alzada, previas las siguientes consideraciones.

En el presente caso, la parte actora pide la nulidad de la Nota s/n fechada el 7 de febrero de 1996, expedida por el Gerente General del Banco Hipotecario Nacional, y del silencio administrativo en que este incurrió "... al no resolver el recurso de reconsideración, con apelación en subsidio, interpuesto por el señor ALBERTO BOLÍVAR CONTE MAGDALENO en contra de la decisión tomada por este funcionario de negarle la devolución de los fondos depositados en las cuentas de ahorro numeradas como sigue: # 0160-0226-3; 0160-0207-9; 0160-0227-1;0160-1228-9 y 0160-0229-7 (foja 15)". Como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los mencionados actos, el demandante también pidió la devolución de los fondos depositados en dichas cuentas.

Tal como lo afirma la señora Procuradora, mediante Sentencia de 13 de septiembre de 1993, la Sala Tercera resolvió la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción interpuesta el 13 de julio de 1992 por el señor ALBERTO BOLÍVAR CONTE quien, en esa oportunidad pidió la nulidad de la Resolución s/n del 19 de marzo de 1992, dictada por el Mandatario del Banco Hipotecario Nacional para la liquidación de la ANAP, que fue confirmada por la Gerencia General de esa entidad bancaria. Mediante estos actos se negó al señor CONTE la devolución de los dineros de sus seis cuentas de ahorro, por considerar que los mismos fueron depositados en calidad de capital semilla (foja 13 del expediente 289-92).

En la parte resolutiva de la mencionada sentencia, la Sala Tercera resolvió lo siguiente:

> "De consiguiente, la Corte suprema de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **DECLARA QUE SON NULAS POR ILEGALES** la resolución sin número de fecha 19 de marzo de 1992, emitida por el Mandatario del Banco Hipotecario Nacional para la liquidación de la Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos para la Vivienda y la Resolución de Gerencia N° 110-92 de 14 de mayo de 1992 expedida por el Gerente General del Banco Hipotecario Nacional; y **ORDENA** al Mandatario para la Liquidación de la Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos para la Vivienda que del dinero depositado en cuentas de ahorro en esa institución por el demandante Alberto Bolívar Conte, le devuelva la suma total de DIEZ MIL BALBOAS (B/.10,000.00), que es el monto asegurado por asociado." (El subrayado es nuestro). (Registro Judicial, Septiembre 1993, pág. 277).

A juicio de la Sala, independientemente de que en ambas demandas se pida la nulidad de actos administrativos distintos, la pretensión del señor ALBERTO BOLÍVAR CONTE es en la devolución del monto total del dinero depositado en sus seis cuentas de ahorro de la ANAP. En la primera demanda, la Sala declaró la nulidad de los actos impugnados e interpretó el alcance de los artículos 35 literal b) y 44 literal c) de la Ley 39 de 8 de noviembre de 1984 (por la cual se reorganiza el Banco Hipotecario Nacional), señalando que todas las cuentas de ahorro de las Asociaciones y Sociedades de Ahorro y Préstamo para la Vivienda, sin excepción, están aseguradas, sin distinguir entre los depósitos efectuados en calidad de capital semilla, y los que no lo son, los cuales deben ser devueltos hasta el monto asegurado por cada asociado que es de DIEZ MIL BALBOAS (B/.10,000.00). Por tanto, la Sala se pronunció sobre la pretensión del demandante relativa a la devolución de las seis cuentas de ahorro registradas en la ANAP, y no sólo sobre una cuenta, como lo ha querido interpretar el demandante.

Por tanto, la pretensión formulada por el actor en su nueva demanda, de que se le devuelva la totalidad de sus cuentas ya fue objeto de decisión de esta Sala, mediante la citada Sentencia de 13 de septiembre de 1993, la cual tiene autoridad de cosa juzgada. De conformidad con los artículos 203 (numeral 2) de la Constitución Nacional y el 100 del Código Judicial, estas sentencias son finales, definitivas y obligatorias, por lo cual no cabe un nuevo pronunciamiento

de fondo sobre la aludida pretensión.

En cuanto a la negativa tácita por silencio administrativo, debe seguir la suerte de la pretensión principal, porque la sentencia en que se ordenó la devolución de DIEZ MIL BALBOAS (B/.10,000.00) del total de los dineros depositados en las seis cuentas de ahorros, en concepto de seguro por asociado, tiene autoridad de cosa juzgada.

A este respecto, debemos señalar que, tal como lo afirma el procesalista Jorge Fábrega, "La cosa juzgada significa que se ha examinado y decidido sobre la pretensión (el fondo del proceso) que dicha pretensión no puede ser objeto de discusión en un nuevo proceso, ni se puede dictar sentencia en un nuevo proceso que desconozca lo resuelto en el primero" (FÁBREGA P., Jorge, Estudios Procesales, Tomo II, Editora Jurídica Panameña, Panamá, pág. 789).

El artículo 1014 del Código Judicial establece que una sentencia ejecutoriada tiene fuerza de cosa juzgada en otro proceso cuando entre la nueva demanda y la anteriormente fallada hubiere identidad jurídica de las partes, de la cosa u objeto y, de la causa o razón de pedir. En el caso en estudio la sentencia dictada por la Sala el 13 de septiembre de 1993 tiene fuerza de cosa juzgada en el presente proceso porque en ambas demandas la parte actora es ALBERTO BOLÍVAR CONTE, y la parte demandada es el Banco Hipotecario Nacional; la cosa u objeto del proceso en ambas es la devolución del dinero depositado en las seis cuentas de ahorro registradas en la ANAP enumeradas 090160-0204-5; 0160-0226-3; 0160-0207-9; 0160-0227-1; 0160-1228-9 y 0160-0229-7; y por último, la causa de pedir es la negativa del Banco Hipotecario Nacional de autorizar la devolución de los dineros depositados en dichas cuentas de ahorro.

Habiéndose comprobado en autos la existencia de la excepción de cosa juzgada, alegada por la señora Procuradora, mediante el recurso de apelación, procede hacer la correspondiente declaración, porque esta es una de las excepciones que puede hacerse valer en los recursos ordinarios y alegaciones y puede resolverse antes de la sentencia (Cfr. artículos 677 y 683 del Código Judicial).

De consiguiente, el resto de los Magistrados que integran la Sala, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, previa revocatoria de la resolución de 20 de junio de 1996 DECLARAN PROBADA LA EXCEPCIÓN DE COSA JUZGADA y NO ADMITEN la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la licenciada Lenis M. Ortega, en nombre y representación de ALBERTO BOLÍVAR CONTE, para que se declare nula por ilegal, la Resolución de 7 de febrero de 1996, suscrita por el Gerente General del Banco Hipotecario Nacional.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ALEJANDRO PÉREZ, EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS JAVIER BAZÁN, PARA QUE SE DECLAREN NULAS, POR ILEGALES, LA RESOLUCIÓN DE 17 DE OCTUBRE DE 1994, LA RESOLUCIÓN N° 1452 DE 27 DE DICIEMBRE DE 1994 Y EL ACTA DE SALA DE ACUERDOS N° 1 DE 17 DE ENERO DE 1995, EMITIDAS POR LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL ELECTORAL, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Lcdo. Alejandro Pérez, actuando en representación del señor CARLOS

JAVIER BAZÁN, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción con el objeto de que se declare nula por ilegal, la Resolución de 17 de octubre de 1994, la Resolución N° 1452 de 27 de diciembre de 1994 y el Acta de Sala de Acuerdos N° 1 de 17 de enero de 1995, emitidas por los Magistrados del Tribunal Electoral, y para que se hagan otras declaraciones.

En la demanda se solicita a la Sala que se declaren nulos los actos antes mencionados, y, como consecuencia de ello, se restituya a Carlos Javier Bazán, a fin de hacer efectiva la Sala de Acuerdo N° 49 de 13 de junio de 1994, que autoriza e implementa el nombramiento de su representado para el año fiscal 1995. Igualmente se solicita, que al dejar sin efecto los actos y resoluciones impugnados, se le devuelvan todos los derechos inherentes al cargo y se ordene el pago de los salarios dejados de percibir desde el 15 de octubre de 1994 al 31 de diciembre de 1994, incluyendo horas extras de 1993-1994.

El Magistrado Presidente del Tribunal Electoral, envió el respectivo informe explicativo de conducta mediante nota fechada el 18 de abril de 1995. En dicha nota, que reposa de foja 73 a 75 del expediente, se expresa lo siguiente:

"CARLOS JAVIER BAZÁN BERNAL, se desempeñaba como cartógrafo en la Dirección Nacional de Organización Electoral, en la posición eventual N° 515, nombrado por Resolución N° 930-A, con un salario por día laborado de B/.20.00 balboas.

Al señor **CARLOS JAVIER BAZÁN BERNAL** se le comprobó, previa las investigaciones realizadas por la Dirección de Investigaciones Administrativas del Tribunal Electoral,que el día 13 de agosto de 1994 laboró, sin la debida autorización, en una dependencia del Tribunal Electoral distinta a que estaba asignado. Además utilizó sin autorización un vehículo oficial del Tribunal Electoral y ayudó en la mudanza personal de enseres y muebles domésticos del señor OMAR ANTONIO GUILLÉN, de la ciudad de Panamá a la ciudad de La Chorrera.

El señor CARLOS JAVIER BAZÁN BERNAL, fue notificado personalmente del memorando N° 3473/DRHT del 17 de octubre de 1994, que los suspendió temporalmente de sus labores ordinarias en el Tribunal Electoral, a partir del 18 de octubre de 1994. El mismo presentó recurso de reconsideración contra el memorando precitado, el día 15 de noviembre de 1994.

No obstante, mediante Resolución N° 4 de 2 de diciembre de 1994, el Tribunal Electoral resolvió no admitir el Recurso de Reconsideración por extemporáneo.

Al señor CARLOS JAVIER BAZÁN BERNAL se le garantizó desde el inicio de las investigaciones respectivas, su derecho de defensa. En tal virtud se puso en conocimiento de la investigación, rindió declaración ante la Dirección de Investigaciones Administrativas del Tribunal Electoral y pudo atacar mediante los recurso impugnativos ordinarios, las sanciones que se le impusieron como medida disciplinaria.

La conducta del señor CARLOS JAVIER BAZÁN BERNAL, de trasladarse sin autorización a una dependencia del Tribunal Electoral, distinta a la que estaba asignado y de participar en la mudanza doméstica (cambio de residencia) del señor OMAR ANTONIO GUILLÉN, utilizando ilegalmente un vehículo oficial del Estado para transportar los enseres y muebles domésticos de este último, desde la ciudad de Panamá y su nueva residencia en la ciudad de la Chorrera, está taxativamente prohibida en los literales m) y q) del artículo 114 del Decreto 76 de 5 de abril de 1979, que establece el Reglamento Interno del Tribunal Electoral, y que es del siguiente tenor:

"Artículo 114: Queda prohibido a los empleados del Tribunal Electoral

...
m) Usar los vehículos de la institución para fines particulares ...

q) Actuar de manera que se afecte la integridad de la institución y del gobierno en general con la consecuente pérdida de la confianza del público.
...

Además, el artículo 115 del decreto en mención, dispone que el servidor del Tribunal Electoral "que no cumpla con sus obligaciones o deberes, incurrirá en responsabilidades administrativas y será sancionado disciplinariamente ..."

Nuestro Reglamento dispone en el literal d) del artículo 118, que es causal de destitución el hecho de que el servidor lleve una conducta desordenada e incorrecta que ocasione perjuicio al funcionamiento o al prestigio de la institución.

Tenemos entonces que la conducta del señor CARLOS JAVIER BAZÁN BERNAL, de trasladarse y del gobierno en general.

Las transgresiones al Reglamento interno del Tribunal Electoral, antes explicadas, ameritan la imposición de una sanción disciplinaria al señor CARLOS JAVIER BAZÁN BERNAL, equivalente a la gravedad de la falta y del daño causado a la institución y al Estado."

Por su parte, la Procuradora de la Administración contestó la demanda mediante la Vista N° 206 de 19 de mayo de 1996 y en la cual se opone a las pretensiones de la parte demandante por considerar que las mismas carecen de fundamento en vista de que, a su juicio, los actos contenidos en el Memorándum N° 3473/DRHTE de 17 de octubre de 1994, la resolución N° 1452 de 27 de diciembre de 1994 y el Acta de la Sala de Acuerdos N° 1 de 17 de enero de 1995, emitidos por los Magistrados del Tribunal Electoral, se ajustan a derecho.

El apoderado judicial de la parte actora afirma que se han violado los artículos 112 literal a), 116, 117, 118 literal g) y 120 del Decreto N° 76 de 5 de abril de 1979, que establece el reglamento interno del Tribunal Electoral, cuyos textos en su orden respectivo son los siguientes:

"ARTÍCULO 112: Todo servidor del Tribunal Electoral tendrá los siguientes derechos:

a) Estabilidad en el ejercicio del cargo mientras realice su trabajo con eficiencia y no incurra en las causales de despido que se señalan en este reglamento."

"ARTÍCULO 116: Las medidas disciplinarias por orden de gravedad son las siguientes:

a) Amonestación privada que consiste en una reprensión que se hace personalmente al servidor sin dejar constancia en su hoja de servicio. El servidor afectado tendrá la oportunidad de explicar su conducta; pero no apelar la medida impuesta;

b) Censura, por escrito, que consiste en una represión formal que se hace al servidor y de la cual se deja constancia en su hoja de servicio;

c) Multa hasta de diez balboas (B/.10.00);

ch) Suspensión temporal, sin goce de sueldo:

d) Descenso o rebaja de categoría; y,

e) Destitución del cargo."

"ARTÍCULO 117: La amonestación privada y la censura por escrito serán aplicadas por el Jefe inmediatamente superior del servidor. Contra esta última sanción procede el recurso de apelación.

Las multas, la suspensión, el descenso o rebaja de categoría y la destitución serán recomendadas por los directores generales y decretadas por el Tribunal a solicitud escrita del Secretario General, una vez comprueba la culpabilidad del servidor."

ARTÍCULO 118: Son causales de destitución o de descenso de categoría:

g) Por reestructuración de personal;

ARTÍCULO 120: Las sanciones señaladas en este Reglamento se aplicarán garantizando al servidor de la instalación el derecho de defensa."

En cuanto a los artículos 112 literal a) y 116 del Decreto N° 76 de 5 de abril de 1979, estima la parte actora que han sido violados de forma directa por omisión, pues, a su criterio, se dejó de reconocer el principio de estabilidad que constituye un fuero de inamovilidad para los servidores del Tribunal Electoral e igualmente, no se aplicó el principio de gradualidad que consagra el artículo 116. En relación al artículo 117 del Decreto N° 76 de 5 de abril de 1979, a su juicio fue violado de manera directa por comisión, dado que los Magistrados del Tribunal Electoral violentaron las formalidades y procedimientos expresamente consignados en el reglamento interno del Tribunal Electoral, para la suspensión y destitución de su representado. Finalmente, en lo que concierne a los artículos 118 literal g) y 120 del Decreto N° 76 de 1979, estima el apoderado judicial de la parte actora, fueron violentados en el concepto de indebida aplicación y violación directa por omisión respectivamente, dado que los Magistrados del Tribunal Electoral al utilizar el literal g) del artículo 118 del decreto en mención, emplearon una causal distinta y ajena a los hechos y cargos imputados a su representado y, aunado a ello, no se realizó investigación alguna y tampoco se le dio la oportunidad a su representado de hacer descargos y desvirtuar, las acusaciones antes de ser destituido.

Evacuados los trámites de ley, procede la Sala a resolver la presente controversia.

Observa la Sala, que el señor CARLOS JAVIER BAZÁN fue inicialmente suspendido de sus labores como Cartógrafo en la Dirección Nacional de Organización Electoral y, posterior a ello, mediante la Resolución N° 1452 de 27 de diciembre de 1994, fue destituido de dicho cargo. En dicha resolución, figura entre sus considerandos, que el señor Bazán hizo uso de un vehículo oficial de la institución para la mudanza de enseres del Omar Guillén a la ciudad de la Chorrera, hecho este que fue corroborado por el señor Bazán, según copia autenticada visible de foja 82 a 85 del expediente, de la declaración efectuada ante el Magistrado Guillermo Márquez Amado.

Por otro lado, esta Sala reitera que en nuestro país no rige desde la expedición del Decreto de Gabinete N° 137 de 1969 la carrera administrativa, y en virtud de ello, los funcionarios públicos al estar desprovistos de dichas normas protectores, están sujetos al régimen de libre remoción y nombramiento. Esta Sala mantiene el criterio que el acto mediante el cual se nombra a un empleado público es un acto condición que puede ser modificado unilateralmente por el Estado, salvo que la Constitución o Ley disponga otra cosa. A juicio de la Sala Tercera, el nombramiento del señor Bazán es un acto condición sometido a una relación de derecho público, razón por la cual al momento de su destitución no estaba amparado por la estabilidad en el cargo, pues, como lo anotamos con anterioridad, la carrera administrativa fue abolida en 1969, y, la vigencia de la Ley de Carrera Administrativa desde 1994 no incide en este proceso. Finalmente, cabe señalar, que en varias ocasiones se ha sostenido el criterio que no puede un reglamento interno, con jerarquía inferior a una ley, conceder estabilidad a los servidores públicos, como en este caso se pretende; lo anterior tiene claro fundamento en el artículo 297 de la Constitución Nacional.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO SON ILEGALES el Memorando N° 3473/DRHTE de 17 de octubre de 1994, la Resolución N° 1452 de 27 de diciembre de 1994 y el Acta de Sala de Acuerdos N° 1 de 17 de enero de 1995.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EDUARDO RÍOS, EN REPRESENTACIÓN DE RIGOBERTO ANTONIO SOSA, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 96-1592 DE 17 DE ABRIL DE 1996, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SIETE (7) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Eduardo Ríos**, en representación de **RIGOBERTO ANTONIO SOSA**, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nula por ilegal la Resolución N° 96-1592 de 17 de abril de 1996, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda para verificar si la misma cumple con los requisitos mínimos para que pueda ser admitida.

Observa el suscrito que la demanda Contencioso administrativa de Plena Jurisdicción no puede ser admitida en virtud de que adolece de formalidades que están contempladas en la ley.

En primer lugar el demandante no designa en el libelo de la demanda a las partes ni a los apoderados judiciales, como tampoco lo que se demanda, ni expresa las disposiciones que se estiman violadas y el concepto de la violación tal como lo exige el artículo 28 de la ley 33 de 1946, que a la letra dice:

> "Toda demanda ante la jurisdicción de lo contencioso-administrativo contendrá:
>
> 1. La designación de las partes y de sus representantes;
> 2. Lo que se demanda;
> 3. Los hechos u omisiones fundamentales de la acción;
> 4. La expresión de las disposiciones que se estiman violadas y el concepto de la violación."

De igual manera no consta en el expediente copia del recurso de reconsideración con apelación en subsidio, interpuesto contra la resolución N° 96-1592 de 17 de abril de 1996, el acto confirmatorio con el sello de recibido y presentado ante la entidad acusada, a pesar de que el mismo recurrente sostiene en escrito de notificación visible a fojas 7 del expediente, que el mismo le fue negado. Dicha falta, impide verificar si se interpusieron los recursos que agotan la vía gubernativa, y si esto se hizo en tiempo oportuno. Tal requisito según el artículo 42 de la Ley 135 de 1943 modificado por la ley 33 de 1946, es indispensable para ocurrir ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Por todo lo expuesto, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera Contencioso Administrativa, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley NO ADMITEN la demanda contencioso administrativa interpuesta por el Licdo. Eduardo Ríos, en representación de RIGOBERTO ANTONIO

SOSA.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO EMETERIO MILLER EN REPRESENTACIÓN DE ETHNOR DEL ISTMO, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN N° 88-96 DE 14 DE MAYO DE 1996, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE ADUANAS, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Emeterio Miller en representación de **ETHNOR DEL ISTMO, S. A.**, ha presentado demanda contenciosa administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nula por ilegal la Resolución N° 88-96 de 14 de mayo de 1996, dictada por el Director General de Aduanas, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado sustanciador procede a examinar la presente demanda a fin de determinar si se cumplen todos los presupuestos procesales previstos en las leyes aplicables a estos procesos y que deben ser atendidos de manera imperativa para que la misma pueda ser admitida.

Se percata el Sustanciador, que la misma adolece de un defecto formal que no puede pasar inadvertido como es el hecho de que no reposa en el expediente copia debidamente autenticada del acto confirmatorio, es decir de resolución alguna que decida el recurso de apelación contra la Resolución 88-96 de 14 de mayo de 1996 proferida por el Director General de Aduanas, ni certificación o petición de certificación que demuestre haber solicitado la copia, a pesar de que el propio recurrente sostiene que contra la misma se ejerció Recurso de Apelación, el cual fue resuelto por la Comisión Arancelaria del Ministerio de Hacienda y Tesoro, mediante decisión N° 66 de 31 de julio de 1996. Sostiene que en esta última se resolvió mantener en todas sus partes la resolución 88/96 de 14 de mayo de 1996, de la Dirección General de Aduanas, objeto de impugnación en este proceso contencioso de plena jurisdicción.

Tal omisión consta en el escrito de demanda, del cual se desprende que en el renglón concerniente a PRUEBAS, no figura "Copia autenticada de la Resolución N° 66 del 31 de julio de 1996, dictada por la Comisión Arancelaria del Ministerio de Hacienda y Tesoro".

Esta deficiencia, a juicio del sustanciador, impide verificar si realmente se interpusieron los recursos que agotan la vía gubernativa, y si esto se hizo en tiempo oportuno. A su vez, imposibilita verificar si la presente demanda se presentó dentro del término establecido en el artículo 36 de la ley 33 de 1946 a partir de la notificación, en este caso, del acto que confirma el hecho o la operación administrativa que causa la demanda. Significa que el actor no ha acreditado debidamente el agotamiento de la vía gubernativa, y este es, según el artículo 42 de la ley 135 de 1943 modificado por la ley 33 de 1946, un requisito indispensable para ocurrir ante la jurisdicción Contencioso Administrativa.

Por todo lo expuesto, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, interpuesta por el licenciado Emeterio Miller en representación de ETHNOR DEL ISTMO, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA RODRÍGUEZ-RODRÍGUEZ, S. C. P., EN REPRESENTACIÓN DE ARIADNA ESPINOSA BERNAL, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO N° 578 DE 31 DE OCTUBRE DE 1994, PROFERIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, OCHO (8) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Rodríguez-Rodríguez, S. C. P., actuando en nombre y representación de **ARIADNA ESPINOSA BERNAL**, ha promovido demanda contencioso de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto N° 578 de 31 de octubre de 1994, proferido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Educación.

Mediante escrito fechado 18 de septiembre de 1996, que consta a foja 79 del expediente, la parte actora desistió de la pretensión demandada. De este escrito se corrió traslado a la señora Procuradora de la Administración quien no lo contestó en el término que se le dio con ese fin.

Como quiera que con fundamento en el artículo 66 de la Ley 135 de 1943 modificada por la Ley 33 de 1946, en cualquier estado del proceso es admisible el desistimiento de la pretensión contencioso administrativa, y el apoderado tiene facultad para desistir, su petición debe acogerse.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley **ADMITE EL DESISTIMIENTO** de la pretensión demandada en el proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción promovido por la firma Rodríguez-Rodríguez, S. C. P. en representación de **ARIADNA ESPINOSA BERNAL**, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto N° 578 de 31 de octubre de 1994, proferido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Educación.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DOCTOR NORBERTO REY CASTILLO PEREA, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS ARMANDO LESCURE, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO N° 80 DE 3 DE ABRIL DE 1995, EMITIDO POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El doctor Norberto Rey Castillo Perea, actuando en nombre y representación de **LUIS ARMANDO LESCURE**, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena

jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto Ejecutivo N° 80 de 3 de abril de 1995, emitido por conducto del Ministerio de Educación.

La parte actora solicita además que se ordene al Ministro de Educación reintegrar al profesor **LUIS ARMANDO LESCURE**, portador de la cédula de identidad personal N° 4-40-297 y seguro social N° 43-1761, al cargo que ocupaba como Asistente Administrativo en la Biblioteca Pública Santiago Anguizola de la ciudad de David, Provincia de Chiriquí; y que se le pague los salarios dejados de percibir desde el 29 de abril de 1995 hasta la fecha en que se haga efectivo el reintegro. (Fs. 7-8).

Por medio del acto impugnado se dejó sin efecto los Decretos N° 738 de 21 de diciembre de 1994 y N° 16 de 8 de noviembre de 1995, mediante los cuales se nombró al profesor **LUIS ARMANDO LESCURE** como Asistente Administrativo y Administrador I respectivamente, en la Biblioteca Pública Santiago Anguizola, ciudad de David, Chiriquí. (Fs. 17).

Estando el presente negocio para resolver, los Magistrados de la Sala consideran necesario dictar auto para mejor proveer, de conformidad con el artículo 62 de la Ley 135 de 1943, a fin de comprobar que cargos ha desempeñado el profesor **LUIS ARMANDO LESCURE** en el Ministerio de Educación, mediante qué clase de nombramiento (permanente o no permanente) y el tiempo en que ha desempeñado cada uno de esos cargos.

Con este fin, se dispone solicitar a la Directora de Personal del Ministerio de Educación la siguiente información:

1. La Hoja de Servicio del profesor **LUIS ARMANDO LESCURE**, en el Ministerio de Educación, en la cual consten los nombramientos hechos a su favor, la clase de nombramiento de que se trate, los cargos desempeñados y el tiempo en que ejerció cada cargo;

2. Certificación en la que conste si el profesor **LUIS ARMANDO LESCURE**, con cédula de identidad personal número 4-4-297, fue seleccionado por concurso para alguno de los cargos que desempeñó como funcionario del Ramo de Educación, durante su tiempo de servicio en esa entidad; y en caso afirmativo para qué cargos.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA que por Secretaria se requiera a la Directora de Personal del Ministerio de Educación, que en el término de cinco (5) días nos envíe la siguiente documentación:

1. La Hoja de Servicio del profesor LUIS ARMANDO LESCURE, en el Ministerio de Educación, en la cual consten los nombramientos hechos a su favor, la clase de nombramiento de que se trate, los cargos desempeñados y el tiempo en que ejerció cada cargo;

2. Certificación en la que conste si el profesor LUIS ARMANDO LESCURE, con cédula de identidad personal número 4-4-297, fue seleccionado por concurso para alguno de los cargos que desempeñó como funcionario del Ramo de Educación, durante su tiempo de servicio en esa entidad; y en caso afirmativo para qué cargos.

Notifíquese y Comuníquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ E. GÓMEZ EN REPRESENTACIÓN DE IRIS WALKIRIA NIETO HURTADO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 344-95 DE 28 DE JULIO DE 1995,

DICTADA POR LA ALCALDÍA DEL DISTRITO DE CHITRÉ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado José E. Gómez, actuando en nombre y representación de IRIS WALKIRIA NIETO HURTADO, ha promovido demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 344-95 de 28 de julio de 1995, dictada por la Alcaldía del Distrito de Chitré, y para que se hagan otras declaraciones.

Al examinar la demanda, la Magistrada Sustanciadora considera que la misma no cumple con los requisitos legales para ser admitida, ya que el demandante no presentó copia autenticada del acto impugnado, tal como lo exige el artículo 44 de la Ley 135 de 1943.

Además, como el actor no promovió los recursos administrativos pertinentes contra el acto impugnado, no agotó la vía gubernativa, y no puede ocurrir a la Sala de conformidad con lo establecido en el artículo 42 de la Ley 135 de 1943.

Finalmente, la acción está prescrita porque la demanda fue promovida después de transcurrido en exceso el término de prescripción de dos meses, señalado en el artículo 27 de la Ley 33 de 1946.

Por las razones expuestas, no debe dársele curso a la presente demanda, en cumplimiento a lo preceptuado en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

De consiguiente, la suscrita Magistrada Sustanciadora de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, de lo Contencioso Administrativo, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción presentada por el licenciado José E. Gómez, en representación de IRIS WALKIRIA NIETO HURTADO, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 344-95 de 28 de julio de 1995, dictada por la Alcaldía del Distrito de Chitré, y para que se haga otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LCDO. JAIME J. JOVANÉ, EN REPRESENTACIÓN DE MARVIODAL, S. A., LUNILDA, S. A. Y LUJÁN, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 201-589 DE 25 DE MARZO DE 1994, PROFERIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE INGRESOS DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO, ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TRECE (13) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Jaime J. Jované**, en representación de **LUIS ALBERTO NUQUES MACHADO** y las sociedades anónimas **MARVIODAL, S. A., LUNILDA, S. A., y LUJÁN, S. A.**, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa Plena Jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 201-589 de 25 de marzo de 1994, proferida por el Director General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, acto confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

LO QUE SE DEMANDA

El apoderado judicial de las partes demandantes, solicita a esta Sala proceda a declarar la nulidad por ilegal, de la prenunciada resolución, por medio de la cual se rechaza la solicitud formulada por el aludido señor **LUIS ALBERTO NUQUES MACHADO**, para que les fuera concedido un crédito fiscal, conforme lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 16 de 18 de junio de 1993. Que, como consecuencia de dicha declaratoria, la Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro está obligada a conceder a las precitadas personas jurídicas y naturales; **LUIS ALBERTO NUQUES MACHADO**, **MARVIODAL**, **S. A.**, **LUNILDA**, **S. A. y LUJÁN**, **S. A.**, de manera conjunta, y por un período de cinco años, el crédito fiscal al cual tienen derecho en virtud de la precitada disposición legal. Ello, en razón de que iniciaron una actividad de resiembra en un área de 14 hectáreas correspondientes a las Fincas N° 3483 inscrita al tomo 998, folio 138, Finca N° 3484 inscrita al tomo 998, folio 140 y la Finca N° 3485 inscrita al tomo 998, folio 146, todas de la sección de propiedad de la Provincia de Bocas del Toro, las que constituyen el inmueble denominado **FINCA ENILDA**, de la cual dichas personas son propietarias pro-indiviso, habida consideración de que la resiembra, fue consecuencia directa de los daños sufridos por **FINCA ENILDA**, como resultado del terremoto de 22 de abril de 1991, que causó serios daños a las plantaciones de banano del distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

LOS HECHOS U OMISIONES DE LA PRESENTE ACCIÓN

Según los recurrentes las enunciadas pretensiones descansan en los siguientes hechos:

1. Que los recurrentes desarrollan en el precitado inmueble **FINCA ENILDA**, en adelante denominado la Finca, la actividad de siembra de bananos para la exportación, desde hace más de treinta años.

2. Que en el año de 1993, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley N° 16 de 18 de junio de 1993, la cual concede incentivos a la producción de Banano en la República de Panamá.

3. Que como consecuencia directa del terremoto acaecido el día 22 de abril de 1991, se afectó severamente la Finca, al punto que los canales madre primario y secundario, quedaron totalmente saturados de tierra y arena que emanaron del subsuelo. Los canales en mención añade, son elemento vital e indispensable para el normal rendimiento y producción de la referida finca.

4. Que la habilitación de estos canales trajo como consecuencia la inmediata destrucción de 14 hectáreas (adicionales a las afectadas por el terremoto y totalmente distintas), que fueron destruidas por el tránsito de las dragas al recavar los canales, durante un período de siete meses.

5. Que una vez habilitados los canales, se procedió a la resiembra de las catorce hectáreas afectadas en la Finca, razón por la cual, estas áreas de resiembra, perfectamente le permiten ser beneficiados con un crédito fiscal por parte del Estado, durante cinco años conforme lo señalado en el precitado artículo 4 de la Ley 16 de 1993, puesto que las mismas fueron destruidas como consecuencia del terremoto, ya que de no haber movimiento telúrico, no hubiera habido necesidad de dragar y mucho menos destruir 14 hectáreas para permitir dragado.

6. Que a objeto de establecer mejor el área de há. afectadas, los recurrentes procedieron a elaborar un informe documentado gráficamente con sus respectivos planos, que indican que las 14 hectáreas destruidas como consecuencia directa de la habilitación de los canales destruidos, en adición a los infórmenes de inspección y determinación de los daños sufridos por la Finca, como consecuencia del terremoto del 22 de abril de 1991, elaborados por personal idóneo de la Dirección Nacional del Banano.

7. Que posteriormente, el señor **LUIS NUQUES MACHADO**, en su calidad de

propietario de **FINCA ENILDA**, solicitó el día 2 de marzo de 1994, que se le concediera un crédito fiscal por parte del Estado, durante cinco años de conformidad con el artículo 4 de la Ley 16 de 1993, dada la actividad de resiembra que por causa de los daños causados directamente por el terremoto del 22 de abril de 1991, desarrolló en 14 há. comprendidas en las fincas que componen **FINCA ENILDA**, adjuntando copias debidamente autenticadas por la Dirección Nacional del Banano, de los infórmenes de Inspección y Determinación de daños sufridos por la Finca, por razón del terremoto.

8. Que pese a que la Ley 16 de 1993, habla en su artículo 4 del concepto favorable de la Comisión Nacional del Banano y de la Certificación de la Dirección Nacional del Banano, en la práctica, la comisión para el caso de resiembras no emite concepto favorable, sino que se remite al informe de inspección del funcionario del Departamento de Asistencia Técnica Dirección Nacional del Banano. Por consiguiente, el único documento que se entrega al solicitante del crédito, es la copia autenticada del informe de inspección que realiza el funcionario del departamento de asistencia técnica de la Dirección Nacional del Banano.

9. En el considerando equivalente al párrafo siete de la resolución recurrida, la Dirección General de Ingresos, señaló que las 14 hectáreas mencionadas como dañadas productos del terremoto, no eran consecuencia directa del terremoto. Sin embargo, la realidad que demuestran las fotografías integradas al expediente, dan plena prueba de que los canales madres, de la Finca, resultaron dañados como consecuencia única y directa del terremoto ocurrido en Changuinola y Bocas del Toro. En otras palabras, nadie, por voluntad propia procedió a rellenar los canales con lodo, barro y arena, hasta sus respectivas superficies.

10. Los canales madres se vieron repletados por lodo, barro y arena, hasta sus respectivas superficies, por los efectos directos en la tierra del terremoto. Los canales en mención, no se encuentran dispuestos en áreas extrañas o ajenas a la Finca, de suerte tal, que la única manera de accesar a los canales de la Finca, es únicamente atravesando la misma, no existe otro medio para llegar a ellos. Por otra parte, esos canales no se podían dejar en el estado en que quedaron después del terremoto.

11. Como los canales, tienen cientos de metros de largo y como mínimo, más de tres a cuatro metros de profundidad, y, además, el terremoto los dejó repletos de toneladas, de arena, lodo y barro, se imponía su rehabilitación, por tanto, el medio idóneo para ello era a través de dragas para sacar con sus respectivas palas mecánicas el material que llenaba los canales. Como quiera que sea que las mismas no son pequeños vehículos a motor y para hacerlos llegar a los canales, había que hacerlas atravesar por medio de la Finca, a su paso, estas dragas iban derribando y destruyendo hectáreas de banano que aún después del terremoto, habían quedado utilizables, y, como quiera que no se trataba de uno, dos o tres partes de los canales, sino de varios canales dañados que debían rehabilitarse, el uso de las dragas provocó en su conjunto el daño adicional de 14 hectáreas, además de aquellas que destruyó el terremoto.

INFORME DE CONDUCTA DE LA ENTIDAD DEMANDADA

Mediante su informe explicativo de conducta, que reposa a fs. 36. 38 del expediente, el Director General de Ingresos, representante legal del ente administrativo demandado, procedió a indicar que en principio, la destrucción de las 14 hectáreas mencionadas, no fueron consecuencia directa del terremoto, aunado a que no se probó la resiembra en estas hectáreas, ya que nunca se presentó la certificación de la Dirección Nacional del Banano, previo concepto favorable de la Comisión Nacional de Banano.

Por otra parte, el aludido funcionario también enfatizó que al analizar el expediente contentivo de la solicitud del recurrente, se pudo observar que el mismo señalaba que las dragas utilizadas para la habilitación de los canales iban destruyendo hectáreas de banano, que aún después del terremoto habían quedado utilizables, y como quiera que no se trataba de uno, dos o tres partes de los

canales, sino de varios canales dañados que debían rehabilitarse, el uso de las dragas provocó en su conjunto el daño adicional de 14 hectáreas. Por ende, agrega que de tal afirmación se desprende que el solicitante acepta que las 14 hectáreas que sufrieron daños no fueron por causa directa del terremoto ocurrido en Bocas del Toro.

Tal situación, según dicho funcionario, contraría lo dispuesto en la Ley 16 de 18 de junio de 1993, que es clara cuando dispone que sólo en caso de resiembras que se originen como consecuencia de fenómenos naturales se concederá un crédito fiscal.

DISPOSICIONES ACUSADAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

El recurrente aduce como infringido el artículo 4 de la Ley 16 de 18 de junio de 1993, en el concepto de interpretación errónea. El texto del mismo es el siguiente:

> **"Artículo 4**. En caso de resiembras que se originen como consecuencia de vendavales, terremotos, inundaciones o cualquier otro fenómeno natural grave, que destruya total o parcialmente una plantación, según lo certifique la Dirección Nacional del Banano, previo concepto favorable de la Comisión Nacional del Banano, se concederá un crédito fiscal equivalente a la mitad del crédito mencionado en el artículo anterior, siempre que la resiembra se realice dentro de los tres (3) años siguientes de ocurrido y certificado el siniestro.
>
> El plazo máximo por el cual se otorgará este crédito fiscal será de cinco (5) años.
>
> La Dirección General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, expedirá la resolución que concede o rechaza el crédito fiscal dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la fecha de presentación completa de la respectiva solicitud. Pasado dicho término, si no se expide la resolución, se entenderá por aprobada la misma."

Sobre el concepto de la violación de la citada disposición legal, la parte actora manifestó:

> "Un acucioso análisis de la norma en comento, permite colegir, que este texto obscuro de la ley, fue interpretado de manera contraria a su verdadero espíritu, ya que esta norma, señala como requisitos, para que se otorgue un crédito fiscal, por resiembras originadas por terremotos u otros fenómenos naturales que:
>
> a. Certificación de la Dirección Nacional del Banano, previo concepto favorable de la Comisión Nacional del Banano.
> b. Que la resiembra se realize dentro de los tres siguientes a la ocurrencia del vendaval u otro siniestro y,
> c. Que el siniestro ocurrido haya sido debidamente certificado.
>
> Se concluye fácilmente, que por ninguna parte el artículo 4 de la Ley 16 de 18 de junio de 1993, exige como requisito "sine qua non", para conceder un crédito fiscal por resiembras de há. de banano, que debe certificarse por la Dirección Nacional del Banano, el número exacto de há, objeto de resiembra.
>
> La norma lo que busca es tutelar y a la vez ayudar a sobrellevar, si se quiere, es el daño que sufre el productor en su finca, por razón de un desastre natural que ocasiona daños cuantificables, no sólo económicamente, sino también en los volúmenes de producción, en los ciclos de producción y que inclusive, determinan una indispensable actividad de resiembra en las áreas afectadas, tal cual dejamos explicado en el hecho séptimo del presente recurso.
> ...
> Tal funcionario ha incurrido en la violación de la norma en comento

en el concepto que se alega, toda vez que se está exigiendo comprobar que se ha realizado resiembras, cuando la norma lo que pide es la certificación del siniestro. Por otra parte si se aportaron pruebas que demuestran la realización de la actividad de resiembra, ya que se aportó el informe idóneo de la Dirección Nacional del Banano y el informe elaborado por mi mandante, en torno al cual, por ningún lado de la ley 16 de 1993, se señala que no tenga valor. Por otra parte el artículo 4 de la citada ley, es claro en señalar que el siniestro debe estar certificado y que la resiembra debe efectuarse dentro de los tres años siguientes al siniestro, extremos estos con los cuales cumplían la solicitud de mi mandante ante la Dirección General de Ingresos y la mayor prueba de ello lo constituía el informe de la Ingeniera Kenia Guerra."

CRITERIO DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

Frente a las alegaciones de los demandantes, la Procuradora de la Administración mediante Vista Fiscal N° 318 de 27 de julio de 1991, que corre a fojas 39-52, manifestó que la Resolución N° 201-589 de 25 de marzo de 1994, cuya ilegalidad se acusa, no viola el artículo 4 de la Ley N° 16 de 18 de junio de 1993.

En tal sentido, señala que el precitado artículo 4, es claro y preciso al exigir una serie de requisitos, a fin de que se otorgue un crédito fiscal a los productores de banano. Tales requisitos, según señaló la Procuradura, consisten por un lado, en la certificación de la Dirección Nacional del Banano que acredite que las resiembras se hayan efectuado y que éstas se originen como consecuencia de vendavales, terremotos, inundaciones o cualquier otro fenómeno natural grave, y por otro lado, que antes de emitirse la anterior certificación por parte de la Dirección Nacional del Banano, debe darse concepto favorable de la Comisión Nacional del Banano. Estos dos requirimientos, indica la Procuradora, exigen, por la misma naturaleza de los mismos, de documentos y pruebas, que sustenten tanto el certificado expedido por la Dirección Nacional del Banano, como el concepto favorable de la Comisión Nacional del Banano.

Así pues, alega la representante de los intereses del Estado, que las demandantes no aportaron las certificaciones exigidas a tenor de lo establecido en el artículo 4 de la Ley 16 de 1993; de manera que la Dirección General de Ingresos no acogió su solicitud, ya que no cumplía con lo estatuido en la norma mencionada, aparte que no se probó, entre otras cosas, que las 14 hectáreas de la Finca **ENILDA** que sufrieron daños y luego resembradas, fueron afectadas como consecuencia directa del terremoto acaecido el 22 de abril de 1993 (sic), 1991, -que las resiembras efectuadas en las catorce hectáreas que se aducen, sufrieron los estragos del movimiento telúrico,- y, que no presentaron en ninguna instancia del proceso administrativo llevado a cabo en la Dirección de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro, ni consta en el expediente, las certificaciones exigidas indispensablemente, con el objeto de obtener un crédito fiscal.

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites legales instituidos para este tipo de procesos, la Sala procede a resolver el presente negocio.

A juicio de este Tribunal no es procedente entrar a examinar el cargo de violación endilgado al artículo 4 de la Ley N° 16 de 18 de junio de 1993, "Por la cual se conceden incentivos a la producción de banano en la República de Panamá y se dictan otras disposiciones", publicada en la Gaceta Oficial N° 22.312 de martes 22 de junio de 1993, en virtud del principio de irretroactividad de la ley, consagrado tanto en el artículo 43 de la Constitución Nacional, como en el artículo 3 del Código Civil.

Ello obedece a que de las constancias procesales y de los hechos en que se fundamenta el presente proceso, el movimiento telúrico (terremoto), a que hacen referencia los demandantes a fin de obtener por parte del Estado un crédito fiscal a su favor, se suscitó con anterioridad, 22 de abril de 1991), a la fecha de entrada en vigor de dicha ley, que como señaláramos en el párrafo anterior,

se dio el día martes 22 de junio de 1993, de acuerdo con lo dispuesto en su artículo 23, cuyo texto es el siguiente:

> "**Artículo 23.** Esta Ley empezará a regir a partir de su promulgación."

Al establecer dicha ley que la misma entraría a regir a partir de su promulgación, debe entenderse, contrario a la interpretación de los recurrentes, que la misma es de aplicación a los casos de resiembras que se originen a consecuencia de vendavales, terremotos, inundaciones o cualquier otro fenómeno natural grave, que destruya total o parcialmente una plantación de banano, cuya ocurrencia fuera posterior a su entrada en vigencia. Esto equivale a que el otorgamiento del crédito fiscal a los productores de banano a que alude el referido artículo 4 de la mencionada Ley 16 de 1993, es de aplicación a los casos en que ocurran fenómenos naturales imprevistos, verbigracia, terremotos, a partir del día martes 22 de junio de 1993, no para los casos, como el que nos ocupa en que el movimiento telúrico ocurrió el 22 de abril de 1991.

Y es que de acuerdo con el principio de irretroactividad de la ley, solamente en el caso en que la propia ley establezca el carácter de retroactiva, siempre y cuando ello obedezca a razones de orden público, o en materia penal si éstas son favorables al reo, no pueden expedirse normas con vigencia retroactiva a los efectos de ser aplicables a hechos ocurridos antes de su vigencia.

Conforme lo expresado, la Sala estima que al no ser de aplicación el Artículo 4 de la Ley 16 de 1993, en comento, al presente caso, carecen de asidero jurídico las pretensiones de las partes demandantes.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativo), de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, la Resolución N° 201-589 de 25 de marzo de 1994, proferida por el Director General de Ingresos del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA MIRANDA Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE MIRNA DE GRACIA DE LAY, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 107 DE 5 DE OCTUBRE DE 1990, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y TESORO. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Miranda y Asociados, actuando en representación de Mirna De Gracia de Lay, ha promovido proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción para que se declare nulo por ilegal el Decreto Ejecutivo N° 170 de 5 de octubre de 1990 emitido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministro de Hacienda y Tesoro.

En la demanda se solicita a la Sala que declare que es nulo, por ilegal, el Decreto N° 107 de 5 de octubre de 1990 por medio del cual se destituyó a la demandante de la posición de auditor Fiscal II que ocupaba en el Ministerio de Hacienda y Tesoro. Asimismo, se pide a la Sala que ordene el reintegro del demandante a sus labores habituales con el pago de los salarios que ha dejado de

percibir.

Los apoderados judiciales especiales de la parte demandante consideran que el acto administrativo por ellos impugnado ha infringido el artículo 51 del Decreto N° 6 de 1987, el artículo 15 del Código Civil, el artículo 29 de la Ley 135 de 1943, cuyos textos son del tenor siguiente:

> "Artículo 51 del Decreto N° 6 de 1987.Los servidores públicos que hayan prestado servicios continuos durante 2 años con comprobada honestidad, competencia, lealtad y moralidad en el servicio, gozarán de estabilidad y sólo podrán ser destituidos por causa justificada, conforme a lo establecido en el Decreto N° 116 del 10 de octubre de 1984.
>
> Artículo 15 del Código Civil. Las órdenes y demás actos ejecutivos del gobierno, expedidos en ejercicio de la potestad reglamentaria, tienen fuerza obligatoria y serán aplicados mientras no sean contrarios a la constitución o las leyes.
>
> Artículo 29 de la Ley 135 de 1943. Las resoluciones que ponen término a un negocio o actuación administrativa de carácter nacional deben notificarse personalmente al interesado o a su representante o apoderado, dentro de los cinco días siguientes a su expedición,debiendo expresarse los recursos que por vía gubernativa proceden y el término dentro del cual deben interponerse, todo bajo la responsabilidad del funcionario correspondiente.

La Procuradora de la Administración contestó la demanda mediante la Vista N° 139 de 27 de marzo de 1996, en la que discrepa de la opinión del demandante y solicita de denieguen las pretensiones del mismo.

La Sala Tercera de lo contencioso administrativo pasa a resolver la presente controversia previa las siguientes consideraciones.

Observa la Sala que el demandante estima como violado el artículo 51 del Decreto N° 6 de 1987 por medio del cual se aprobó el Reglamento Interno del Ministerio de Hacienda y Tesoro.

En este punto es imperativo puntualizar que el Decreto N° 6 de 1987 fue declarado inconstitucional mediante la sentencia de 13 de marzo de 1991 del Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

En concordancia con lo anterior, la Sala Tercera ha establecido en reiteradas ocasiones que un reglamento inconstitucional no puede ser aplicado para regular efectos jurídicos futuros de hechos ocurridos cuando el reglamento inconstitucional tenía vigencia. En este sentido mediante sentencia de 8 de junio de 1992, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo señaló lo siguiente:

> "... En nuestro sistema jurídico la inconstitucionalidad y la derogación de una ley o de un reglamento tienen en común el producir la cesación de la vigencia de la ley o del reglamento con efectos hacia el futuro. Sin embargo, ambas instituciones hacen cesar la vigencia de la ley mediante mecanismos diferentes y con un alcance distinto, lo cual tiene gran relevancia en este caso.
>
> Esto lo hace inaplicable a la presente controversia a pesar de que se encontraba vigente al momento en que el demandante fue destituido. Si hubiese sido derogado sí podría aplicarse, pero el fenómeno de la inconstitucionalidad de una ley o de un reglamento es distinto al de la derogación. En el primer caso cesa la vigencia de la ley o el reglamento por ser incompatible con una norma de jerarquía constitucional y la declaratoria de inconstitucionalidad produce la nulidad (ex-nunc en Panamá) de la norma legal o reglamentaria ... No ocurre así con una ley o norma reglamentaria que ha sido declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia. La norma inconstitucional es nula y no puede ser aplicada

> por el juez, aunque estuviese vigente al momento en que se produjo el hecho cuyos efectos ahora se determinan: en este caso el despido y la legalidad o ilegalidad del mismo. La norma inconstitucional carece de ultraactividad por ser nula con efectos generales ...".

De lo anteriormente expuesto se colige que el Decreto N° 6 de 1987 no posee ultraactividad, es decir eficacia residual para regular situaciones jurídicas que tuvieron origen bajo su vigencia, como es el caso de la destitución de la recurrente a través del Decreto 107 de 1990. por lo que no procede la infracción invocada contra el mencionado reglamento.

En segundo lugar, estima la Sala que tampoco procede la infracción alegada contra el artículo 15 del Código Civil, toda vez que no se puede examinar la legalidad de un acto administrativo a la luz de un reglamento (Decreto N° 6 de 1987) que fue declarado inconstitucional y por lo tanto, deja de producir efectos jurídicos quedando excluido del mundo del derecho positivo.

Finalmente y en relación con la violación alegada en contra del artículo 29 de la Ley 135 de 1943, la Sala Tercera considera que la parte actora al promover recurso de reconsideración en tiempo oportuno (legible de fojas 2 a 6 del expediente), subsanó cualquier vicio que hubiese podido producirse por la omisión de mencionar los recursos que procedían en la vía gubernativa, tal como lo preceptúa el artículo 32 de la Ley 135 de 1943, cuando señala:

> "Sin los anteriores requisitos no se tendrá por hecha ninguna notificación, ni producirá efectos legales la respectiva resolución, a menos que la parte interesada, dándose por suficientemente enterada, convenga en ella o utilice en tiempo los recursos legales.

En atención a las anteriores consideraciones, no se ha violado el artículo 29 de la Ley 135 de 1943.

En consecuencia, la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, el Decreto de Personal N° 107 de 5 de octubre de 1990.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA GALINDO, ARIAS Y LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE HORACIO ICAZA Y CÍA., S. A. (LA CASA DEL MÉDICO), PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 8542-D. G. DE 4 DE OCTUBRE DE 1995, DICTADA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Galindo, Arias y López, actuando en nombre y representación de **HORACIO ICAZA Y CÍA., S. A. (LA CASA DEL MÉDICO)**, interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 8542-D. G. de 4 de octubre de 1995, dictada por el Director General de la Caja de Seguro Social, los actos confirmatorios y para que se haga otras declaraciones.

En la parte final del libelo de la demanda, la parte demandante solicita

a la Sala suspenda provisionalmente la resolución impugnada, es decir, la adjudicación definitiva de un equipo de "100 OXIGENADORES DE MEMBRANA DE FIBRA HUECA INTERCONECTADO CON SU RESERVORIO DE SANGRE CON FILTRO INCORPORADO Y DE CORAZA DURA PARA ADULTO", a la empresa RESERMA, S. A. ya que se causaría perjuicios irreparables y notorios al Estado, si la Sala Tercera declara la ilegalidad del acto de adjudicación y por ende, dicha empresa interpone demanda por perjuicios ocasionados.

Adicionalmente señala el demandante a foja 29 del expediente que, de no concederse la suspensión provisional del acto impugnado, la Sala estaría permitiendo que actos viciados, por el quebrantamiento de las formalidades exigidas por la ley, sigan adelante hasta perfeccionarse en contratos, que por su origen viciado traen al Estado futuros perjuicios y precedentes nefastos para el sistema de licitaciones públicas del Estado.

De acuerdo al artículo 73 de la Ley 135 de 1943, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia puede suspender los efectos de un acto, resolución o disposición, si a su juicio, ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave.

Como ha expresado esta Sala en oportunidades anteriores, la existencia de un perjuicio notoriamente grave **(periculum in mora)** de difícil o imposible reparación, si bien constituye uno de los requisitos para la suspensión de los efectos del acto que se acusa, no es el único, pues también es indispensable la apariencia de buen derecho **(fumus bonus iuris)** a favor del demandante. Se trata sin duda de requisitos evidentemente vinculados, porque aún cuando del acto o resolución acusada puedan derivarse determinados perjuicios en detrimento del demandante, la suspensión provisional de sus efectos procedería siempre que el mismo sea ostensiblemente ilegal.

En el presente caso la Sala considera, en primer lugar que los perjuicios alegados no son irreparables, y en segundo lugar, del examen preliminar de los cargos de violación que se hace al acto impugnado, no se desprende, prima facie, violaciones manifiestas o evidentes de las normas que se cita como violadas en la demanda. Los problemas jurídicos planteados por la firma Galindo, Arias y López al exponer el concepto en que el acto impugnado viola el artículo 50 del Código Fiscal y el artículo 8 de la Ley 33 de 8 de noviembre de 1984, ameritan ser examinados en el momento procesal en que deba resolverse el fondo la controversia. Por estas razones no es posible acceder a la medida cautelar impetrada.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, de lo Contencioso-Administrativo, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA la suspensión provisional de los efectos de los actos impugnados, solicitada por la firma Galindo, Arias y López, en nombre y representación de HORACIO ICAZA, S. A. (LA CASA DEL MÉDICO).

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO CARLOS D. ESPINOSA EN REPRESENTACIÓN DE JUAN ALBERTO RODRÍGUEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 7 DE 2 DE SEPTIEMBRE DE 1996, DICTADA POR LA FISCAL TERCERA DEL CIRCUITO DE CHIRIQUÍ, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Carlos D. Espinosa, actuando en nombre y representación de Juan Alberto Rodríguez, ha interpuesto ante la Sala Tercera (contencioso-administrativa) de la Corte Suprema, demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declaren nulas, por ilegales, la Resolución N° 7 de 2 de septiembre de 1996 y la Resolución N° 8 de 12 de septiembre de 1996, dictadas por la Fiscal Tercera del Circuito de Chiriquí, y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda a fin de determinar si se cumplen todos los presupuestos procesales necesarios para que la misma pueda ser admitida.

Observa quien suscribe, que la demanda no debe admitirse, ya que no se ha agotado la vía gubernativa, toda vez que el recurrente presentó, el 19 de septiembre de 1996 ante la Fiscal Tercera del Circuito Judicial de Chiriquí, funcionaria administrativa de la primera instancia, escrito de solicitud para que se conceda el recurso de apelación, sin haberlo presentado y sustentado ante el superior jerárquico, tal como lo preceptúa el artículo 33 de la Ley 135 de 1943. El agotamiento de la vía gubernativa es requisito esencial para ocurrir a la vía contencioso administrativa, de acuerdo con lo que señala el artículo 25 de la Ley 33 de 1946.

El Magistrado Sustanciador observa que el apoderado judicial del recurrente no transcribió las disposiciones legales que considera infringidas. Solamente menciona como violado, de manera general, el Capítulo II, Título I, del Libro I del Código Judicial, sin señalar individualmente los artículos que fueron violados por el acto acusado, incumpliendo con lo preceptuado en el numeral 4 del artículo 28 de la Ley 33 de 1946 que requiere que en la demanda se señalen las disposiciones que se estiman como violadas. También el recurrente señala como infringido el artículo 297 de la Constitución Nacional. Al respecto, la Sala ha mantenido el criterio de que la demanda contencioso administrativa tiene como fundamento examinar la legalidad del acto jurídico impugnado, por lo cual lo correcto es señalar como normas infringidas preceptos legales y no preceptos constitucionales, lo cual es propio de una demanda de inconstitucionalidad y no de una demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, como la que en este caso nos ocupa.

Como el demandado omitió los requisitos mencionados, su demanda no debe admitirse, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 135 de 1943.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Carlos D. Espinosa, actuando en nombre y representación de Juan Alberto Rodríguez, para que se declaren nulas, por ilegales, la Resolución N° 7 de 2 de septiembre de 1996 y la Resolución N° 8 de 12 de septiembre de 1996, emitidas por la Fiscal Tercera del Circuito de Chiriquí, y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LCDO. JULIO LU OSORIO EN REPRESENTACIÓN DE FÉLIX GARCÍA HIGUERA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 1 DE 27 DE SEPTIEMBRE DE 1995, DICTADA POR LA DIRECTORA PROVINCIAL DE EDUCACIÓN DE HERRERA, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Julio Lu Osorio**, en representación de **FÉLIX GARCÍA HIGUERA**, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 1 de 27 de septiembre de 1995, dictada por la Directora Provincial de Educación de Herrera, los actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado Sustanciador se percata de que el recurrente, previo a la admisión de la demanda, solicita la suspensión provisional de los efectos del acto impugnado. Sin embargo, por motivos de economía procesal, quien suscribe estima procedente determinar si la misma cumple con los requisitos legales y jurisprudenciales que hagan procedente su admisión.

Al entrar a conocer de los argumentos expuestos por el petente de la medida cautelar en estudio, quien sustancia observa que el acto cuya suspensión provisional se solicita, lejos de ser un acto definitivo, constituye un acto preparatorio, consistente en una solicitud de traslado del profesor **FÉLIX GARCÍA** adonde se estime conveniente, que efectuara la Directora Provincial de Educación de Herrera ante la Dirección Nacional de Profesional y Técnica del Ministerio de Educación, el cual no es susceptible de impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

En tal sentido, el artículo 42 de la Ley 135 de 1943, es claro al establecer que sólo son recurribles ante la Sala Tercera (Contencioso Administrativa), los "actos o resoluciones definitivas", o "providencias de trámite, si estas últimas deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, de modo que le pongan término o hagan imposible su continuación".

Los actos preparatorios conocidos también como actos de mero trámite, según el tratadista **LIBARDO RODRÍGUEZ R.** son "aquellos que se expiden como parte de un procedimiento administrativo que se encamina a adoptar una decisión o que cumplen un requisito posterior a ella ..." (**RODRÍGUEZ LIBARDO**, Derecho Administrativo General y Colombiano; Sexta Edición. Editorial Temis. Bogotá, Colombia, 1990; pág. 204).

En reiterada jurisprudencia, esta Superioridad ha establecido que contra los actos preparatorios no cabe acción alguna, dado que su contenido forma parte de un procedimiento administrativo encaminado a adoptar una decisión final, cuya condición puede variar. La única excepción, que permite a la Sala Tercera entrar a conocer actos preparatorios o de mero trámite es que en estos actos se decida el fondo del asunto, de modo que le pongan término o hagan imposible su continuación, situación que no se presenta en este caso.

En el caso que nos ocupa vemos que la actuación administrativa impugnada (solicitud de traslado), está encaminada a la adopción de una decisión final, cual es la de que se proceda al traslado del profesor **FÉLIX GARCÍA HIGUERA**. Por consiguiente, este Tribunal en Sala Unitaria considera que la interposición de una demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción contra este acto de mero trámite, es prematura, ya que como hemos señalado en líneas anteriores, la misma sólo procede contra actos administrativos definitivos, y no contra actos preparatorios o de mero trámite.

Para mayor ilustración veamos lo que sobre el particular ha señalado este Tribunal en Autos de 10 de junio de 1994 y de 5 de septiembre de 1995). Estas resoluciones en su parte medular, y en el orden citado, establecen lo siguiente:

> "A prima facie, se observa que la demanda instaurada adolece de un defecto formal que impide su admisibilidad, toda vez que un examen exhaustivo del expediente pone de manifiesto el hecho cierto que el acto administrativo acusado de ilegal (Resolución N° 92 de 15 de diciembre de 1993), constituye lo que se conoce en doctrina como "ACTO PREPARATORIO O DE MERO TRÁMITE" el cual no es acusable ante la

Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En efecto, el acto administrativo demandado alude a una solicitud hecha por el Ministerio de Educación al Órgano Ejecutivo para que se deje sin efecto el nombramiento que se le hizo a la educadora ELVIA MIRANDA DE ORTIZ (Cfr. foja 2), por lo que no se decide el fondo del asunto o la situación jurídica planteada; sino que como lo señala el ilustre tratadista José Roberto Dromi en su obra El Acto Administrativo "es un acto preparatorio que posibilita o no encaminarse hacia la cuestión de fondo" (Ob. Cit., Editorial Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1985, pág. 24)".

"En lo que concierne al Informe antes descrito, ya esta Superioridad ha señalado en distintas ocasiones **(ver Auto de 24 de enero de 1994)**, que contra los mismos no cabe acción alguna, dado que su contenido forma parte de un procedimiento administrativo encaminado a adoptar una decisión final. El acto preparatorio, también conocido como actos de mero trámite, no tienen carácter definitivo, ya que dichos actos pueden variar su condición. La única excepción que permite a esta Sala entrar a conocer actos preparatorios o de mero trámite, es que en estos actos se decidan cuestiones de fondo y esta situación no se presenta en este caso."

Por las razones expuestas, y en cumplimiento del artículo 50 de la Ley 135 de 1943, quien sustancia estima procedente negarle curso legal a la presente demanda.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO ADMITE la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el Licenciado Julio Lu Osorio, en representación de FÉLIX GARCÍA HIGUERA, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 1 de 27 de septiembre de 1995, dictada por la Directora Provincial de Educación de Herrera, los actos confirmatorios y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RITO TORRES GUEVARA, EN REPRESENTACIÓN DE RAFAEL TORRES GUEVARA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, TODO LO ACTUADO EN EL SUPUESTO PROCESO DISCIPLINARIO LEVANTADO AL SEÑOR RAFAEL TORRES GUEVARA, POR DEFECTOS DE FONDO Y DE FORMA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA.

VISTOS:

El licenciado Rito Torres Guevara en representación del sargento de la Policía Nacional, **RAFAEL TORRES GUEVARA**, ha presentado demanda contencioso administrativa de Plena Jurisdicción, para que se declare nulo por ilegal, todo lo actuado en el supuesto proceso disciplinario levantado contra el prenombrado por defectos de fondo y de forma, y para que se hagan otras declaraciones.

El Magistrado sustanciador observa, a prima facie, que la demanda no puede ser admitida, ya que aún cuando el actor no individualizó el acto, se infiere que trata de impugnar un asunto de corrección disciplinaria, toda vez que al sargento **RAFAEL TORRES**, se le asignó, mediante Oficio N° O. R. P. 718/PN-95, cumplir

funciones administrativas en la Dirección de Asuntos Comunitarios a partir del lunes 9 de octubre, hasta tanto no concluyeran las investigaciones llevadas a cabo por la Oficina de Responsabilidad Profesional de la Policía Nacional.

Dicho acto no es acusable ante lo contencioso administrativo, como lo indica el ordinal 3 del artículo 28 de la ley 135 de 1946, que a la letra dice:

> "ARTÍCULO 28. No son acusables ante la jurisdicción contencioso administrativa:
> ...
> 3. Las correcciones disciplinarias impuestas al personal de la fuerza pública y del cuerpo de policía a ella asimilado, excepto cuando impliquen suspensión, postergación para el ascenso o separación del cargo de empleados que sean inamóviles, según la ley." (Subrayado nuestro).

Por otra parte, aún cuando se tratara de un asunto recurrible ante esta jurisdicción, la demanda no hubiera podido ser admitida por cuanto no acumple con los requisitos legales que señalamos a continuación.

La parte demandante no individualizó el acto que pretendía impugnar, tal como lo exige el artículo 43 a) de la Ley 135 de 1943, y solicita de manera genérica que se declare nulo por ilegal, todo lo actuado en el supuesto proceso disciplinario levantado al señor **RAFAEL TORRES GUEVARA**. El cumplimiento de este requisito permite a la Sala constatar la existencia de dicho acto, su notificación y el agotamiento de la vía administrativa.

De tal modo, resultaría imposible determinar si ha quedado agotada dicha vía según el artículo 42 de la ley 135 de 1943, modificado por la ley 33 de 1946 y mucho menos precisar si la demanda fue presentada oportunamente ante esta Sala de conformidad con lo que establece el artículo 42 b) de la ley 33 de 1946.

La parte actora no dirigió su demanda al Presidente de la Sala como lo exige el artículo 102 del Código Judicial, y al referirse a las partes, incumplió con lo preceptuado en el ordinal 1 del artículo 28 de la Ley 33 de 1946 al no señalar en qué concepto interviene el señor Procurador de la Administración, quien como representante de la Administración, y conforme lo ordena el artículo 47 de la Ley 33 de 1946 y el ordinal 2 del artículo 348 del Código Judicial, interviene en defensa del acto impugnado.

El demandante ha considerado violado los artículos 32 y 41 de la Constitución Nacional, cargos cuya valoración no compete a esta Sala.

Además el actor señala como violados los artículos 1 y 2 de la Ley 15 de 1957, artículo 834 y 837 del Código Administrativo, párrafo segundo del artículo 10 de la Ley 9 de 18 de abril de 1984 que regula el ejercicio de la abogacía, por violación al debido proceso y negación de la justicia; el artículo 6 de la Ley 33 del 8 de noviembre de 1984; los artículos 29, 30 y 31 de la Ley 135 de 1943, reformado por la Ley 33 de 1946, en el concepto de violación directa, sin indicar la forma en que la norma ha sido violada, ya sea por comisión u omisión.

Por lo anteriormente expuesto, no debe dársele curso a la presente demanda, conforme l ordena el artículo 31 de la Ley 33 de 1946.

De consiguiente, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, decide NO ADMITIR la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, interpuesta por el licenciado Rito Torres Guevara, en representación de RAFAEL TORRES GUEVARA.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ANAIS B. DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DOCTOR NORBERTO CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE ANALIDA ORTEGA RÍOS, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO N° 204 DE 14 DE AGOSTO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El doctor Norberto Castillo, actuando en nombre y representación de **ANALIDA ORTEGA RÍOS**, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto Ejecutivo N° 204 de 14 de agosto de 1995, emitido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Educación.

La parte actora solicita además que se ordene el reintegro de la señora **ANALIDA ORTEGA RÍOS**, con cédula de identidad personal N° 4-141-925 y seguro social N° 48-7865 al puesto que desempeñaba como Auditora I, posición 0054-021, partida 0.07.0.40.02.08.001 en la Dirección de Coordinación del Ministerio de Educación, con funciones en la Dirección Provincial de Educación de Chiriquí; y se le pague los salarios dejados de percibir desde el 1° de septiembre de 1995 hasta el día en que se haga efectivo su reintegro. (Fs. 14-15).

Por medio del acto impugnado se dejó sin efectos el Decreto Ejecutivo N° 510 de 14 de octubre de 1992, en cuanto al nombramiento de la señora **ANALIDA ORTEGA RÍOS** como Auditora I en la Dirección de Coordinación del Ministerio de Educación, con funciones en la Dirección Provincial de Educación de Chiriquí. (Fs. 51).

Al admitirse la presente demanda se corrió en traslado al señor Procurador de la Administración quien, mediante la Vista Fiscal N° 145 de 9 de abril de 1996, solicitó a esta Sala denegar las pretensiones del demandante (fs. 58-61); además, se solicitó al funcionario demandado que rindiera el informe de conducta a que se refiere el artículo 33 de la Ley 33 de 1946, lo que hizo oportunamente (fs. 55-57).

La parte actora estima que el acto administrativo impugnado viola los artículos 127 y 129 de la Ley N° 47 de 24 de septiembre de 1946, cuyo texto transcribimos a continuación:

> **Ley N° 47 de 1946.**
> **"Artículo 127.** Todo miembro del personal docente o administrativo del ramo de educación, inclusive quienes presten servicio de portería como los porteros, aseadores, mensajeros, etc., que haya sido nombrado o que posteriormente se nombre de acuerdo con las disposiciones presentes a esta Ley, continuará prestando servicios durante todo el tiempo que dure su eficiencia y buena conducta y el término de su licencia, cuando se trate de maestro o profesor.
>
> Los empleados del ramo de educación no podrán ser trasladados a otra escuela o a otro lugar sino en concepto de recompensa, para lo cual debe dársele previo aviso para que den a conocer al Ministerio su conformidad o disconformidad con el mismo, o en los casos previstos en el parágrafo de este artículo, o como sanción por falta cometida, de acuerdo con las disposiciones que en esta Ley se establezcan. Tampoco podrán ser removidos sino mediante el proceso establecido en esta Ley.
> ...
> **Artículo 129.** Las quejas que sobre algún miembro del personal docente o administrativo del Ramo de Educación tenga un superior, que le han llegado por algún conducto digno de crédito, serán

inmediatamente investigadas por el superior tan prolijamente como su importancia demande."

Al expresar el concepto en que han sido infringidas las normas transcritas el demandante indicó que las mismas se han violado porque a los funcionarios del Ministerio de Educación se les garantiza la estabilidad en el cargo, y sólo pueden ser movilizados o destituidos, por recompensa o sanción por mala conducta, demostrada a través del procedimiento consagrado en la Ley Orgánica de Educación; que a la señora **ANALIDA ORTEGA RÍOS** no se le ha investigado por falta disciplinaria alguna ni sancionado tampoco; y que para destituir un funcionario del Ministerio de Educación, debe llevarse a cabo un proceso para resolver la queja que hubiese llegado al conocimiento del superior jerárquico.

En cuanto al cargo de violación del artículo 127 de la Ley 47 de 1946, considera la señora Procuradora de la Administración que merece ser desestimado porque la señora **ANALIDA ORTEGA RÍOS** fue nombrada como Auditora I, en la Dirección Provincial de Educación de Chiriquí, de manera discrecional; porque la señora **ORTEGA RÍOS** no obtuvo el cargo de Auditora I mediante concurso de méritos, y siendo esto así dicha posición es de libre nombramiento y remoción por la autoridad nominadora. Y en cuanto al cargo de violación del artículo 129 idem, considera la señora Procuradora de la Administración que no es aplicable al caso, porque hace referencia al procedimiento a seguir en caso de la aplicación de sanciones disciplinarias a un miembro del personal del Ramo de Educación, mientras la señora **ANALIDA ORTEGA RÍOS** no fue destituida por haber cometido falta alguna, sino por tratarse de un cargo de libre nombramiento y remoción de la autoridad nominadora. (Fs. 59-60).

Evacuados los trámites legales, los Magistrados que integran la Sala de lo Contencioso Administrativo proceden a resolver la presente controversia, confrontando el acto impugnado con las normas que se estiman infringidas.

Nuestra Constitución Política en sus artículos 295 y siguientes establece las carreras públicas; y en sus artículos 297 y 300 preceptúa que los deberes y derechos de los servidores públicos, así como los principios para sus nombramientos, ascensos, suspensiones, traslados, destituciones, cesantía y jubilaciones deben ser determinados por la Ley, la que regulará la estructura y organización de dichas carreras de conformidad con las necesidades de la Administración. Por tanto, debemos entender que ninguna norma de categoría inferior a la ley puede otorgar estabilidad a un funcionario público. Preceptúan además estas normas que los nombramientos del personal de carrera se harán con base en el sistema de méritos y que las dependencias oficiales funcionarán a base de un Manual de Procedimiento y otro de Clasificación de Puestos.

El 24 de septiembre de 1946 fue dictada la Ley N° 47 Orgánica de Educación, que desarrolla la carrera docente y que en su artículo 127 otorga el derecho a la estabilidad, tanto a docentes como administrativos del Ramo de Educación, durante todo el tiempo que dure su eficiencia y buena conducta, siempre que hubiesen sido nombrados o que se nombren de acuerdo con las disposiciones de esa Ley. Los artículos 115 y 119 idem preceptúan que los nombramientos y promociones de los miembros del personal docente y administrativo del Ramo de Educación serán decretados por el Órgano Ejecutivo de acuerdo con el Escalafón y demás normas establecidas por la misma Ley, y que todo miembro del personal docente o administrativo del Ramo de Educación en servicio o que aspire a ingresar al mismo debe registrar en el Ministerio de Educación, si no lo ha hecho, los títulos profesionales exigidos por la Ley 47 de 1946, para desempeñar el cargo que ejerce o aspira ejercer.

Esta Sala ha reiterado en diversas ocasiones, que el hecho de que ciertos empleados administrativos gocen de estabilidad en el puesto, situación que limita traslados y despidos, se debe a que los cargos que ocupan han sido ganados por el sistema de méritos o concursos, o por el tiempo de servicio en la Institución.

La señora **ANALIDA ORTEGA RÍOS** fue nombrada mediante el Decreto Ejecutivo N° 510 de 14 de octubre de 1992 (fs. 16 y 55), en el cargo de Auditora I, posición 0054-021, en la Dirección y Coordinación del Ministerio, con funciones

en la Dirección Provincial de Educación de Chiriquí. Por tanto, se trata de una funcionaria pública del Ramo de Educación, que ocupaba un cargo administrativo dentro del Ministerio de Educación.

Esta Sala, al pronunciarse en relación con la estabilidad que preceptúa el artículo 127 de la Ley N° 47 de 1946, expresó en las sentencias de 7 y 21 de diciembre de 1995, que la carrera docente al igual que todas las demás carreras públicas, se basan por disposición constitucional, en el sistema de méritos, por lo que el cumplimiento de los procedimientos y sistemas de selección para poder formar parte de esta carrera pública y gozar de los derechos de estabilidad e inamovilidad, es exigible no sólo a los docentes, sino también a los administrativos del Ramo de Educación, como es el caso de la señora **ANALIDA ORTEGA RÍOS**.

Entre las pruebas aportadas por la señora **ANALIDA ORTEGA RÍOS** no reposa documento alguno en el que conste que el cargo que ocupaba como Auditora I en la Dirección y Coordinación del Ministerio, lo obtuvo por concurso de méritos. Tampoco ha presentado prueba del registro de los títulos profesionales que se exigen para desempeñar el cargo de Auditor I, tal como lo exige el artículo 119 de la Ley 47 de 1946, por lo que a juicio de la Sala, la autoridad nominadora podía destituirla discrecionalmente, siendo una funcionaria de libre nombramiento y remoción.

Como la demandante no goza del derecho a la estabilidad que consagra el artículo 127 de la Ley 47 de 1946, debe desestimarse este cargo.

En cuanto a la alegada violación del artículo 129 de la Ley N° 47 de 1946, la Sala comparte el criterio de la señora Procuradora de la Administración, en el sentido de que esta norma no es aplicable al caso que nos ocupa porque la señora **ANALIDA ORTEGA RÍOS** fue destituida porque ocupaba un cargo de libre nombramiento y remoción en el que no fue nombrada según los sistemas de selección de las carreras públicas y que tampoco ganó por concurso de méritos. El procedimiento establecido en los artículos 129 y siguientes de la Ley Orgánica de Educación es aplicable a quienes gozan de estabilidad conforme el artículo 127 de la Ley 47 de 1946.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, el Decreto Ejecutivo N° 204 de 14 de agosto de 1995, emitido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Educación y NIEGA las otras declaraciones pedidas.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RANDOLPH LAWSON, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA N° 95(1001 01)22 DEL 25 DE JULIO DE 1995, EXPEDIDA POR LA JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Randolph Lawson, en su condición de apoderado judicial de la ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, solicitó a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia la corrección del supuesto error cometido en la

parte resolutiva de la resolución del 31 de octubre de 1996, en la que se declaró la nulidad de todo lo actuado dentro del proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción que dicha asociación promovió para que se declare nula, por ilegal, la Nota N° 95(1001-01)22, del 25 de julio de 1995, expedida por la Junta Directiva del Banco Nacional de Panamá.

Para sustentar su petición el licenciado Lawson expresó que, aun cuando el artículo 90 (N° 2) de la Ley N° 135 de 1943 preceptúa que la ilegitimidad de personería es causal de nulidad en los procesos contencioso-administrativos, la misma ley señala que no hay nulidad por ilegitimidad de personería en los casos contemplados en los ordinales 1, 2, 3 y 4 del artículo 724 del Código Judicial.

Agrega, que la Sala no debió decretar la nulidad de la referida actuación sin antes cumplir con el procedimiento establecido en los artículos 734, 735 y 736 del Código Judicial, los cuales establecen que, antes de fallar, el juez debe poner en conocimiento de las partes las causales de nulidad convalidables que hubiere observado, a fin de que éstas, dentro de los tres días siguientes a su notificación, puedan pedir la anulación de lo actuado. Si la parte que tiene derecho pedir dicha anulación lo hiciere oportunamente, el tribunal de conocimiento la decretará y retrotraerá el proceso al estado que tenía cuando ocurrió el motivo de nulidad y, en caso contrario, dará por convalidada la nulidad y el proceso seguirá su curso.

Estima el licenciado Lawson, que en el presente caso no era procedente declarar la nulidad de todo lo actuado sin antes poner en conocimiento de los interesados la causa de nulidad, a fin de que éstos pudieran pedir la declaratoria de nulidad o convalidar lo actuado, tal como estatuye el artículo 736 ibídem.

A juicio de la Sala, no le asiste razón al apoderado judicial de la ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, en primer lugar, porque las sentencias no pueden revocarse ni reformarse en cuanto a lo principal. Estas decisiones pueden aclararse cuando en su parte resolutiva tengan frases oscuras o de doble sentido y corregirse por errores de escritura o de cita.

En segundo lugar, porque la situación procesal de la ASEMBANAL planteada en la resolución cuya corrección se pide, no se ubica en ninguno de los cuatro supuestos contemplados en el artículo 724 del Código Judicial, tal como parece sostener dicho letrado al citar como fundamento de su pretensión el numeral 3° de esta norma. La causal en virtud de la cual esta Sala decretó la nulidad de toda la actuación surtida dentro del presente negocio es de naturaleza **insubsanable**, por lo cual mal podría seguirse el procedimiento señalado en los artículos 734 y 735 del Código Judicial, como pide el demandante. De conformidad con el citado artículo 734, el juez o tribunal de la causa debe seguir el trámite consagrado en dicha norma siempre que la causal de nulidad que se hubiere observado antes de fallar sea "**convalidable**", situación que no ocurre en el presente caso, en el que la persona jurídica denominada **"ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ"** no es titular de los derechos reclamados y no ha probado estar facultada por la ley o por sus estatutos para solicitar, mediante un proceso, prestaciones laborales que **pertenecen a sus miembros.**

Finalmente, la Sala considera que no es posible citar a los supuestos titulares de los derechos reclamados por la ASEMBANAL, ya que en la demanda no se ha identificado a los demandantes, tal como exige el numeral 1° del artículo 28 de la Ley N° 33 de 1946.

Cabe agregar, que si hubiera sido posible citar a dichos funcionarios para que pudieran pedir la nulidad de lo actuado o su convalidación, ésta habría sido ineficaz, ya que no consta en autos que hayan **agotado previamente la vía gubernativa para acceder a la jurisdicción contencioso-administrativa**, tal como exige el artículo 25 de la mencionada Ley.

Por todas estas razones, la Sala estima que es improcedente la petición de corrección de la Sentencia del 31 de octubre de 1996 formulada por el apoderado judicial de la ASEMBANAL y debe negarla.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA la solicitud de corrección de la Sentencia del 31 de octubre de 1996, formulada por el licenciado Randolph Lawson, en nombre y representación de la ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DEL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DOCTOR ROLANDO MURGAS TORRAZA, EN REPRESENTACIÓN DE DAMARIS LEOTEAU RUIZ, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 187 DE 25 DE JULIO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El doctor Rolando Murgas Torraza, actuando en nombre y representación de **DAMARIS LEOTEAU RUIZ**, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto de Personal N° 187 de 25 de julio de 1995, emitido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Educación.

Por medio del acto impugnado se declaró sin efectos el Decreto de Personal N° 1046 de 6 de diciembre de 1991, mediante el cual se nombró a **DAMARIS LEOTEAU RUIZ** en la posición de Inspector II 0073-022 de la Dirección de Personal.

El apoderado de la parte actora solicita además que se ordene al Órgano Ejecutivo el reintegro de **DAMARIS LEOTEAU RUIZ** al cargo que ocupaba en el Ministerio de Educación, como Inspector II con funciones de Asistente de Abogado en la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica, con un salario de B/.600.00 mensuales; y se le pague los salarios dejados de percibir desde el 25 de julio de 1995 hasta la fecha en que se reintegre a su puesto.

Al admitirse la presente demanda se corrió en traslado a la señora Procuradora de la Administración quien, mediante la Vista Fiscal N° 176 de 22 de abril de 1996, solicitó a esta Sala denegar las pretensiones del demandante (fs. 51-57); además, se solicitó al funcionario demandado que rindiera el informe de conducta a que se refiere el artículo 33 de la Ley 33 de 1946, lo que hizo oportunamente (fs. 22-24).

La parte actora estima que el acto administrativo impugnado viola el artículo 127 de la Ley 47 de 1946, cuyo tenor literal es el siguiente:

> **Ley N° 47 de 1946.**
> "Artículo 127. Todo miembro del personal docente o administrativo del ramo de educación, inclusive quienes presten servicio de portería como los porteros, aseadores, mensajeros, etc., que haya sido nombrado o que posteriormente se nombre de acuerdo con las disposiciones presentes a esta Ley, continuará prestando servicios durante todo el tiempo que dure su eficiencia y buena conducta y el término de su licencia, cuando se trate de maestro o profesor.
>
> Los empleados del ramo de educación no podrán ser trasladados a otra escuela o a otro lugar sino en concepto de recompensa, para lo cual debe dársele previo aviso para que den a conocer al Ministerio su

> conformidad o disconformidad con el mismo, o en los casos previstos en el parágrafo de este artículo, o como sanción por falta cometida, de acuerdo con las disposiciones que en esta Ley se establezcan. Tampoco podrán ser removidos sino mediante el proceso establecido en esta Ley."

Al exponer el concepto de la infracción de la disposición transcrita, el demandante indicó que la misma se ha violado al destituirse a **DAMARIS LEOTEAU RUIZ** del cargo que ocupaba en el Ministerio de Educación, porque todo el personal del Ministerio de Educación sin distinción, es decir, tanto docente como administrativo, goza de estabilidad en el cargo que ocupa; porque el cese del nombramiento se ha dado sin que siquiera se invoque falta de eficiencia o de buena conducta por parte la señora **LEOTEAU**; y porque no existe norma alguna que señale que el puesto de Inspector II en el Ministerio de Educación, es un cargo de libre nombramiento y remoción del Órgano Ejecutivo.

Por su parte, la señora Procuradora de la Administración expresó que el cargo de violación merece ser desestimado, porque **DAMARIS LEOTEAU RUIZ** fue nombrada en el Ministerio de Educación en 1991, de modo discrecional, por quien ocupaba el cargo de Ministro en ese año; y que no consta en el expediente que **DAMARIS LEOTEAU RUIZ** haya participado en concurso alguno para ser nombrada en dicho cargo, por lo que se trata de un cargo de libre nombramiento y remoción de la autoridad nominadora.

A continuación, los Magistrados que integran la Sala proceden a confrontar el acto impugnado con la norma que la demandante estima infringida.

En relación a la estabilidad que otorga el artículo 127 de la Ley 47 de 24 de septiembre de 1946, a todo "miembro del personal docente, o administrativo del Ramo de Educación ...", y que invoca el demandante como fundamento de su derecho, la Sala se ha pronunciado en las Sentencias de 12 de agosto de 1994, 7 y 21 de diciembre de 1995, expresando lo siguiente:

> **Sentencia de 12 de agosto de 1994.**
> "Salta a la vista de que el profesor **MARRUGO**, no tiene estabilidad en el cargo de Subdirector Provincial, por razones, como bien lo señaló el Ministro de Educación en su momento y posteriormente el Director Nacional de Asesoría Jurídica, de que esos cargos son de libre nombramiento y remoción, por tratarse de puestos de confianza y de colaboración para con la autoridad máxima de la institución gubernamental. Lo expuesto en líneas anteriores no niega la estabilidad del profesor **MOISÉS MARRUGO ACOSTA** como docente y funcionario en el Ministerio de Educación; más sin embargo el hecho de que ciertos empleados administrativos gocen de estabilidad en el puesto, situación que limita traslados y despidos, es debido a que los cargos que ocupan han sido conferidos ya sea por medio de concursos, por el tiempo de servicio en la institución, o porque simplemente no son cargos de confianza en relación a la gestión del Ministro de Educación." (Sentencia de 12 de agosto de 1994 en Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el licenciado Cristóbal Arboleda en representación de **MOISÉS MARRUGO ACOSTA**, para que se declare nulo, por ilegal el Decreto N° 348 de 1993, emitido por el Presidente de la República por conducto del Ministerio de Educación.)

> **Sentencia de 7 de diciembre de 1995.**
> "Los artículos 297 y 300 de la Constitución Nacional establecen que, los principios para los nombramientos, ascensos, suspensiones, traslados, destituciones, cesantía y jubilaciones serán determinados por la Ley y que es la Ley la que regulará la estructura y organización de las carreras públicas de conformidad con las necesidades de la Administración, por lo que, ninguna norma de categoría inferior puede otorgar estabilidad a un funcionario público. Además señalan estas normas que, los nombramientos que recaen en el personal de carrera se harán con base en el sistema de mérito y que

las dependencias oficiales funcionaran a base de un Manual de Procedimientos y otro de Clasificación de Puestos.

El 24 de septiembre de 1946 fue dictada la Ley N° 47 Orgánica de Educación que desarrolla la carrera docente y que en su artículo 127 otorga el derecho a la estabilidad durante todo el tiempo que dure su eficiencia y buena conducta, tanto a docentes como a administrativos del Ramo de Educación, que hubiesen sido nombrados o que se nombren de acuerdo con las disposiciones presentes a esta Ley.
...
Observa la Sala que, tal como lo afirma la autoridad demandada en su informe de conducta, el cargo de Directora Técnica de Educación que ocupaba la educadora **ODALILIA RIVERA** no está incluido dentro de la clasificación de cargos por grados de los Educadores que laboran en el Ministerio de Educación, consagrado en el artículo 6 de la Ley N° 47 de 20 de noviembre de 1979 (reglamentada por el Decreto 32 de 6 de marzo de 1980 y modificada por la Ley N° 10 de 5 de julio de 1994), que "Establece la política salarial para todos los educadores que laboran en el Ministerio de Educación"; y por tanto, se trata de un cargo que no forma parte de la carrera docente.

La estabilidad a que se refiere la Ley Orgánica de Educación, está supeditada al hecho de haber sido nombrado conforme a las disposiciones de la presente Ley. Esta norma está en concordancia con los artículos 115 y 119 de la Ley 47 de 1946, los cuales preceptúan que, los nombramientos y promociones de los miembros del personal docente y administrativo del Ramo de Educación serán decretados por el Órgano Ejecutivo de acuerdo con el Escalafón y las normas que esta Ley establece, y que todo miembro del personal docente o administrativo del Ramo de Educación en servicio o que aspire a ingresar a él, debe registrar en el Ministerio de Educación, si no lo ha hecho, los títulos profesionales exigidos por la presente Ley para desempeñar el cargo que ejerce o aspire ejercer." (Sentencia de 7 de diciembre de 1995, en Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el licenciado Raúl E. Molina en representación de la profesora **ODALILIA RIVERA** contra el Decreto de Personal N° 423 de 5 de octubre de 1994 del Ministerio de Educación).

Sentencia de 21 de diciembre de 1995.
"Considera la Sala que, si bien el demandante alega que no existe norma alguna que indique que el cargo de Subdirector Provincial es de libre nombramiento y remoción, la Constitución Política de la República que regula las carreras públicas, en su artículo 300 señala que éstas se instituyen, entre ellas la docente, fundadas en los principios del **sistema de méritos**, y el artículo 302 de la Constitución excluye a ciertos servidores públicos de formar parte de las carreras públicas.
...
A juicio de la Sala el cargo de Subdirector Provincial ocupado por el señor **CARLOS STAFF** es un cargo de libre nombramiento y remoción de la autoridad nominadora, toda vez que el mismo no fue ocupado en razón de un concurso de méritos, sino en virtud de un nombramiento del Ministro de Educación, y se trata de un cargo de confianza.

Cabe observar que, la Ley N° 22 de 28 de febrero de 1973, derogada por la Ley N° 47 de 1979, establecía la escala de sueldos para el personal docente del Ministerio de Educación nombrado con carácter permanente, e incluía entre los cargos docentes, los cargos de Subdirector Provincial de Educación Primaria y de Director Provincial de Educación Primaria; además disponía en su artículo 9 que el Órgano Ejecutivo establecería los requisitos para ejercer los cargos señalados en el artículo 2 de esa Ley, y que se podrían incorporar nuevos cargos docentes con base en los estudios técnicos

> de clasificación y evaluación del Ministerio de Educación. Al promulgarse la Ley 47 de 1979, reglamentada por el Decreto 32 de 6 de marzo de 1980 y modificada por la Ley N° 10 de 5 de julio de 1994, que regula actualmente lo concerniente a la política salarial de todos los educadores que laboran en el Ministerio de Educación, la clasificación por grados de los Educadores del artículo 6 no incluye a quienes ocupan cargos de Dirección y Subdirección dentro del Ministerio de Educación.
>
> La Sala considera importante resaltar que la Ley N° 34 de 6 de julio de 1995, mediante la cual se modificó la Ley 47 de 1946, mantiene el mismo texto del artículo 127 de la Ley, pero incluye entre sus normas el Capítulo V intitulado de la Carrera Docente, que en su artículo 185 adiciona el 276 de la Ley 47 de 1946, y preceptúa que la carrera docente se establecerá mediante Ley y que este ordenamiento se basará en los principios de un sistema de méritos, conforme lo establece la Constitución Política ...
>
> Por tanto, a partir de la implementación de las reformas de la Ley 47 de 1946, serán escogidos por concurso algunas Direcciones y Subdirecciones dentro del Ministerio de Educación, cargos administrativos que gozarán del derecho a la estabilidad que consagra el artículo 127 de la Ley 47 de 1946, por un período de cuatro años. En la actualidad, las únicas posiciones administrativas dentro del Ministerio de Educación, que son escogidas mediante concurso, son precisamente las de Director y Subdirector de Personal -artículo 8 de la Ley 12 de 1956-, quienes tienen como función reclutar los candidatos para llenar las vacantes que ocurran en las posiciones docentes, conforme el artículo 159 de la Ley 47 de 1946."(Sentencia de 21 de diciembre de 1995, en Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción, interpuesta por el doctor Rolando Murgas Torraza en representación del **CARLOS STAFF** contra el Decreto de Personal N° 428 de 6 de octubre de 1994 del Ministerio de Educación.)

De la lectura de las sentencias citadas se infiere que, la carrera docente, al igual que todas las carreras públicas, se basan por disposición constitucional, en el sistema de méritos, por lo que, es necesario el cumplimiento de los procedimientos y sistemas de selección para poder formar parte de las carreras públicas y gozar de los derechos de estabilidad e inamovilidad, es exigible tanto a los administrativos del Ramo de Educación como a los docentes.

La señora **DAMARIS LEOTEAU RUIZ** ejercía el cargo de Inspector II, con funciones de Asistente de Abogado en la Dirección Nacional de Asesoría Jurídica del Ministerio de Educación, cuando se dictó el acto que dejó sin efectos su nombramiento. Observa la Sala que, se trata de un cargo administrativo dentro del Ministerio de Educación, en el que fue nombrada por Decreto de Personal N° 1046 de 6 de diciembre de 1991 (fs. 4), expedido por el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Educación.

Entre las pruebas aportadas por la señora **DAMARIS LEOTEAU RUIZ** no reposa documento alguno en que conste que el cargo que ocupaba como Inspector II, con funciones de Asistente de Abogado, lo obtuvo por concurso de méritos. Tampoco ha presentado prueba del registro de los títulos profesionales que se exigen para desempeñar dicho cargo, tal como lo exige el artículo 119 de la Ley 47 de 1946.

Por tanto, a juicio de la Sala, la demandante no gozaba del derecho a la estabilidad que consagra el artículo 127 de la Ley N° 47 de 1946, en el cargo que ocupaba.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, el Decreto de Personal N° 187 de 25 de julio de 1995, emitido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Educación y NIEGA las otras declaraciones pedidas.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ISAÍAS BARRERA EN REPRESENTACIÓN DE GILBERTO E. CUEVAS C., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 439 DE 20 DE ENERO DE 1988, DICTADA POR LA COMISIÓN DE PRESTACIONES ECONÓMICAS DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, LOS ACTOS CONFIRMATORIOS, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTIUNO (21) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Lcdo. Isaías Barrera, actuando en representación de GILBERTO E. CUEVAS, ha presentado demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción en la cual solicita que la Sala declare que es nula, por ilegal, la Resolución N° 439 de 20 de enero de 1988, dictada por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social y el acto confirmatorio contenido en la Resolución 7193-92-J. D. de 20 de agosto de 1992, emitida por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social y para que se hagan otras declaraciones.

En la demanda se formula pretensión consistente en una petición para que se declaren nulos los actos antes mencionados y, en su lugar, se conceda a su representado la pensión de vejez solicitada, considerando para establecer la misma, el monto de todos los salarios reportados con los patrones Finca Santa Cecilia (Cuevas Beto, S. A.) y Zaidis.

En el acto impugnado, la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social considera como incremento excesivo en los salarios devengados por el señor GILBERTO E. CUEVAS CERRUD, en los años de 1977 a 1986, de sesenta y siete mil quinientos veintidós balboas con 37/100 (B/.67,522.37). Igualmente, se considera como los mejores cinco años de cotizaciones de acuerdo con el artículo 54 de la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social, los años 1982, 1983, 1984, 1985 y 1986, cuyo salario corresponde a la suma de diecinueve mil setecientos noventa y ocho balboas con 23/100 (B/19,798.23). Finalmente, se le reconoce al asegurado, GILBERTO E. CUEVAS CERRUD, una pensión por riesgo de vejez por la suma mensual de doscientos treinta y nueve balboas (B/.239.23) a partir de la presentación del cese de labores, calculado sobre un salario promedio mensual de trescientos veintinueve balboas con 97/100 (B/.329.97).

El Director de la Caja de Seguro Social rindió el informe explicativo de conducta mediante nota fechada el 25 de marzo de 1996 en los siguientes términos:

> "La controversia relacionada con el presente caso, gira en torno a la calificación de los aumentos salariales otorgados por la empresa CUEVAS BETO, S. A. (Finca Santa Cecilia) en octubre de 1977 y en mayo de 1982 a favor del recurrente **GILBERTO CUEVAS.**
>
> Efectivamente, tal como consta en el Informe de Auditoría AE-CH-IE-01-87 de 2 de julio de 1987, preparado por los Auditores Lic. Christian Guerrero y Lic. Eugenio Montero, Auditor de la Caja de Seguro Social y del Sistema Integrado de Chiriquí respectivamente, el **SR. CUEVAS** recibió dos incrementos salariales en violación a la ley, y que fueron los que dieron lugar a la aplicación del Reglamento de Incrementos Excesivos en las Remuneraciones: el primero se dio en octubre de 1977, y representó un aumento del cien por ciento (100%) con respecto al salario anterior, ya que de

Doscientos Cincuenta Balboas (B/.250.00) por mes, el asegurado pasó a devengar un salario de Quinientos Balboas. El segundo aumento excesivo tuvo lugar en mayo de 1982 y representó un veinte por ciento (20%) con respecto al salario anterior, puesto que de Quinientos Balboas (B/.500.00) mensuales, el asegurado pasó a ganar Seiscientos Balboas (B/.600.00) por mes. Ambos incrementos salariales le fueron otorgados al asegurado por la empleadora denominada CUEVAS BETO, S. A. y en un sólo acto; es decir, no se trató de incrementos escalonados como erróneamente señala el recurrente.

Por otra parte, el Informe de Auditoría prenombrado al referirse a los incrementos salariales otorgados a favor del asegurado **GILBERTO CUEVAS** en octubre de 1977 y mayo de 1982, expresa que:

"No pudo constatarse que los incrementos concedidos al Sr. GILBERTO CUEVAS en octubre de 1977 y mayo de 1982 estuviesen basados en que el asegurado asumiera mayores responsabilidades, ya que según se nos informó éstas siempre han sido las mismas."

Como podrán observar, los señores Magistrados, la actuación de la Caja de Seguro Social en la presente controversia, se fundamentó en lo dispuesto por el Artículo 30 de la Ley 15 de 31 de marzo de 1975, y en las disposiciones reglamentarias que desarrollan la norma legal precitada. Para mayor ilustración nos permitimos reproducir seguidamente el contenido de las disposiciones legales de la referencia:

"ARTÍCULO 30: Si se produjera un incremento excesivo de las remuneraciones o de los ingresos asegurables, en los últimos quince (15) años anteriores a la fecha de ocurrida la contingencia, tendiente a aumentar indebidamente el monto de las prestaciones, el cálculo de la misma se efectuará sin considerar dicho incremento.

Un reglamento desarrollará lo referente a esta disposición.

Por su parte, el Artículo 1° del Reglamento por medio del cual se fijan pautas en los casos de los asegurados que reporten incrementos excesivos en las remuneraciones, tal como fue aprobado por la Honorable Junta Directiva de la Caja de Seguro Social el 6 de abril de 1977, dispone:

ARTÍCULO 1°: La Caja de Seguro Social presumirá que ha habido aumento excesivo en las remuneraciones tendientes a aumentar el monto de las prestaciones en los Programas de Vejez, Invalidez y Muerte, cuando el asegurado haya cotizado mensualmente sobre un solo salario y el salario total de un año sea mayor en más de 10% que el salario total del año anterior. (Hemos subrayado).

Se podrá investigar, por lo tanto, cualquier período de dos años consecutivos, comprendidos en los últimos quince años de cotización, siempre que el salario de un año sea mayor en más de 10% que el salario del año anterior."

Y el artículo 2° de la misma excerta reglamentaria establece que:

ARTÍCULO 2°: La Caja de Seguro Social presumirá que no ha habido aumento excesivo en los salarios declarados, cuando el asegurado haya cotizado mensualmente sobre un solo salario, aún cuando se haya establecido una de las situaciones señaladas en el Artículo anterior, si se comprueba que tales aumentos se han producidos por haber cambiado el asegurado a cargos mejor remunerados, o los mismos se deban a funciones de mayor responsabilidad a nuevos empleos, siempre y cuando los nuevos salarios correspondan a lo que se paga en el país por los cargos o funciones que tuviera asignado el

asegurado.

Tampoco se presumirá que ha habido incremento indebido en los salarios, cuando el aumento sea consecuencia de la aplicación de las disposiciones legales, convencionales o políticas empresariales aplicables a grupos de trabajadores. (Hemos subrayado).

En el presente caso, el asegurado **GILBERTO E. CUEVAS** presentó dos (2) aumentos salariales, acertadamente reputados como excesivos por parte de la Caja de Seguro Social: el primero de octubre de 1977, y representó un 100% con respecto al salario total del año anterior; y el segundo en mayo de 1982, representando un 20% con relación al año anterior.

Como quiera que el asegurado ejerció el mismo cargo, es decir, el de Gerente General de la empresa, no puede sostenerse que dichos aumentos se encuentren justificados al tenor de las supuestos consagrados en el Artículo 2° de la norma reglamentaria ya reproducida, puesto que ni cambió el asegurado a cargos mejor remunerados, ni asumió funciones de mayor responsabilidad, ni tampoco ocupó nuevos empleos que pudieren justificar dichos incrementos."

La parte actora estima que se ha violado el artículo 2 del Reglamento de Incrementos excesivos en la remuneración de la Caja de Seguro Social cuyo texto es el siguiente:

"Artículo 2: La Caja de Seguro Social presumirá que no ha habido aumento excesivo en los salarios declarados, cuando el asegurado haya cotizado mensualmente sobre un solo salario, aun cuando se haya establecido una de las situaciones señaladas en el Artículo anterior, si se comprueba que tales aumentos se han producido por haber cambiado el asegurado a cargos mejor remunerados, o los mismos se deban a funciones de mayor responsabilidad o los nuevos salarios correspondan a lo que se paga en el país por los cargos o funciones que tuviera asignado el asegurado.

Tampoco se presumirá que ha habido incremento indebido en los salarios, cuando el aumento sea consecuencia de la aplicación de las disposiciones legales, convencionales o políticas empresariales aplicables a grupos de trabajadores."

A juicio de la parte demandante, el artículo 2 del Reglamento de Incrementos Excesivos, aprobado por la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social el 6 de abril de 1977, ha sido violado en el concepto de violación directa, pues, en su opinión, la Caja de Seguro Social al efectuar el correspondiente cálculo desconoce la excepción que contempla la norma en cuestión, cuando señala que no se considerará como incremento excesivo en las remuneraciones los aumentos de salarios que se concedan en razón de las mayores responsabilidades que tenga un trabajador para el desarrollo económico de una empresa, siempre que se enmarque dentro de los salarios que se pagan en el país a otros trabajadores que desempeñan el mismo trabajo o parecido. Afirma el apoderado judicial de la parte actora que el señor Gilberto Enrique Cuevas Cerrud inició labores en la empresa Finca Santa Cecilia en julio de 1970 con un salario de B/.250.00 mensuales y no fue hasta 1977 que se le concedió un aumento de salario de B/.250.00 dado que el señor Cuevas desempeñaba diversas funciones de mucha responsabilidad en su condición de gerente general. En su opinión, resulta ilógico pensar que el Gerente General de una empresa como Finca Santa Cecilia percibiera un salario de B/.250.00 mensuales como pretende la Caja de Seguro Social. De igual forma estima, que el aumento de sueldo recibido por su representado en 1983, que fue declarado como aumento excesivo, tiene la misma finalidad que el otorgado en 1977, el de hacer justicia salarial a un trabajador que era responsable de toda la actividad desarrollada por la empresa Finca Santa Cecilia. Finalmente, añade que el artículo 2 del Reglamento de Incrementos Excesivos alegado como infringido, contempla claramente como excepción que cuando un aumento mayor de 10% sea producto de las responsabilidades que desempeña el

trabajador, se considerará como un aumento justificado, siempre que dicho aumento sea acorde a los salarios que en la República de Panamá se pague por un cargo de igual jerarquía, y en este caso, el señor Gilberto Enrique Cuevas Cerrud no ha recibido aumento de salario alguno que no se justifique con las labores que desempeña para la empresa Finca Santa Cecilia (Cuevas Beto, S. A.).

Por su parte, la Procuradora de la Administración, mediante la Vista N° 256 de 11 de junio de 1996, se opone a los argumentos expuestos por la parte actora, pues, considera que el acusado contenido en la Resolución N° 439 de 20 de enero de 1988, dictada por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, se ajusta a derecho.

Una vez efectuado el estudio del expediente, la Sala concluye que, efectivamente, no le asiste la razón a la parte demandante por las razones que exponemos a continuación.

Observa la Sala, que el asunto en controversia se centra en determinar si los incrementos salariales otorgados al señor GILBERTO ENRIQUE CUEVAS CERRUD, específicamente durante los años 1977 y 1982, devienen como incrementos excesivos en los ingresos asegurables. El artículo 1° del Reglamento por el cual se fijan pautas a seguir en los casos de los asegurados reporten incrementos excesivos en las remuneraciones, establece que habrá aumentos excesivos "cuando el asegurado haya cotizado mensualmente sobre un solo salario y el salario total de un año sea mayor en más de 10% que el salario total del año anterior ...". En ese sentido, se observa que el Informe de Auditoría N° AE-CH-IE-01-87 de 2 de julio de 1987, el cual es visible de fojas 22 a 25 del expediente, refleja que los aumentos otorgados al señor GILBERTO CUEVAS C. por la Sociedad Beto, S. A. (Finca Santa Cecilia) correspondientes a los meses de octubre de 1977 y mayo de 1982, representan incrementos excesivos en la remuneración por éste recibida, dado que en el mes de octubre de 1977, el aumento se dio en una proporción de un 100% con respecto al mes anterior es decir, de B/.250.00 a B/.500.00 y en mayo de 1982 el incremento representó un 20% con respecto al salario anterior que aumentó de B/.500.00 a B/.600.00. En ese orden de ideas, traemos a colación lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley N°15 de 31 de marzo de 1975, que claramente prevé que el cálculo del monto de las prestaciones se hará sin considerar dicho incremento, de la siguiente manera:

> "ARTÍCULO 30: Si se produjera un incremento excesivo de las remuneraciones o de los ingresos asegurables, en los últimos quince (15) años anteriores a la fecha de ocurrida la contingencia tendiente a aumentar indebidamente el monto de las prestaciones, el cálculo de la misma se efectuará sin considerar dicho incremento.
>
> Un Reglamento desarrollará lo referente a esta disposición".

A juicio de la Sala, yerra el actor al invocar como infringido el artículo 2° del Reglamento de Incrementos Excesivos, dado que al invocarlo, acepta que, efectivamente, hubo un incremento excesivo. No obstante, no se ajusta a los supuestos que en él se contemplan a fin de que lo anterior no se configure, al no probar de manera fehaciente que dichos aumentos se dieron en virtud de un cambio del asegurado a otro cargo mejor remunerado o si obtuvo funciones de mayor responsabilidad o nuevos empleos, simplemente lo alega. Finalmente, cabe señalar que los aumentos recibidos en los meses de octubre de 1977 y mayo de 1982, no son cónsonos con lo dispuesto en el artículo 1° del Reglamento de Incrementos Excesivos de la Caja de Seguro Social, dado que exceden con creces al 10% del salario total del año anterior, razón por la que, al amparo de dicha disposición, la Caja de Seguro Social procedió a efectuar la investigación de rigor cuyo resultado motivó la expedición del acto administrativo acusado.

En razón de lo antes planteado, lo procedente es, pues, declarar que no es ilegal el acto contenido en la Resolución N° 439 de 20 de enero de 1988.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Resolución N° 439 de 20 de enero de 1988, expedida por la Comisión de Prestaciones de la Caja de Seguro Social, como

también lo son sus actos confirmatorios.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO PEDRO MORENO EN REPRESENTACIÓN DE AURA AGUDO Y LIZ CASTRELLÓN, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 23 DE 21 DE MAYO DE 1987, DICTADA POR LA JUNTA DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Pedro Moreno Céspedes**, en representación de **AURA IRIS AGUDO y LIZ MARY CASTRELLÓN**, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 28 de 21 de mayo de 1987, dictada por la Junta de Facultad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, y para que se hagan otras declaraciones.

El expediente original relativo a este caso resultó destruido como consecuencia de los hechos violentos acaecidos el 20 de diciembre de 1989, y luego repuesto de conformidad con lo establecido en el Decreto de Gabinete 17 de 24 de enero de 1990.

LO QUE SE DEMANDA

El apoderado judicial de las partes demandantes pretende que esta Sala declare la nulidad, por ilegal, de la prenunciada Resolución N° 28 de 21 de mayo de 1987, mediante la cual la Junta de Facultad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá resolvió: "separar definitivamente de la Universidad a las estudiantes **LIZ MARY CASTRELLÓN**, **AURA AGUDO Y TERESA ORTIZ"**. Además, se declare nulo, por ilegal, el silencio administrativo del Consejo Académico de la Universidad de Panamá, al no pronunciarse dentro del término de ley sobre el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución N° 28 de 21 de mayo de 1987. Que, consecuentemente, se declare que las estudiantes **AURA IRIS AGUDO SOLÍS y LIZ MARY CASTRELLÓN BIRMINGHAM** deben ser reintegradas inmediatamente a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, con todos los privilegios correspondientes desde su separación decretada por el decano **EDGARDO MOLINO MOLA** de fecha 12 de enero de 1987, mediante las Resoluciones N° 11 y 10 de 12 de enero de 1987.

LOS HECHOS U OMISIONES FUNDAMENTALES DE LA PRESENTE ACCIÓN

Las pretensiones de las recurrentes descansan en los siguientes hechos:

1. Las estudiantes **AURA IRIS AGUDO SOLÍS y LIZ MARY CASTRELLÓN BIRMINGMAN** cursan el cuarto año de la carrera de Derecho y Ciencias Políticas de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en adelante la Facultad, de la Universidad de Panamá, como estudiantes regulares.

2. Por noticias recibidas del señor Decano de la Facultad, las estudiantes mencionadas se enteraron de la existencia de un hecho ilícito, es decir, de la falsificación de notas a varios estudiantes, acto realizado por el señor **JOSÉ ÁNGEL ARAÚZ REYES**, funcionario administrativo de la Facultad.

3. En estas irregularidades administrativas se involucró a un grupo de estudiantes, entre las que figuran **AURA IRIS AGUDO SOLÍS, LIZ MARY CASTRELLÓN BIRMINGHAM y TERESA ORTIZ GUEVARA.**

4. De conformidad con dicha investigación, el funcionario **JOSÉ ÁNGEL ARAÚZ REYES** se dedicaba a alterar las notas de los estudiantes mediante el pago de determinadas sumas de dinero, quien aprovechaba la situación de acceso y custodia de los archivos para obtener provecho personal.

5. El señor Decano nombró una Comisión Examinadora integrada por los profesores **AURA EMÉRITA GUERRA DE VILLALAZ, CARLOS MUÑOZ POPE** y el estudiante **CARLOS CEDEÑO MEREL** para la investigación del asunto que entre otros, recomendó:

> **"1°** Despido inmediato del empleado administrativo JOSÉ ÁNGEL ARAÚZ REYES.
>
> **2°** Expulsión definitiva de los nueve estudiantes detectados hasta el presente, como favorecidos por las alteraciones de sus notas.
> ...
> **6°** Enviar copia de la decisión al Sr. Rector y al organismo disciplinario que regula la carrera administrativa.
>
> **7°** Aplicar la ley universitaria, el estatuto y demás reglamentos en todas las situaciones internas de la Facultad que requieran un encausamiento legal."

6. El señor decano en esa fecha, **EDGARDO MOLINO MOLA,** dictó las Resoluciones N° 10, 11 y 12 de 12 de enero de 1987, en las que resolvió separar de la Facultad a las estudiantes **LIZ MARY CASTRELLÓN y AURA IRIS AGUDO,** hasta tanto la Junta de Facultad decidiera sobre la sanción de expulsión definitiva de la Universidad.

7. Tales resoluciones, fueron objeto de recurso de apelación que fue resuelto por el Señor Rector de la Universidad de Panamá, mediante Resolución N° R.-001-87 de 12 de febrero de 1987, en la cual confirmó las mismas.

8. A las aludidas estudiantes se les suspendió en forma indefinida y de acuerdo con la decisión del Decano, hasta tanto la Junta de Facultad decidiera sobre la sanción de expulsión definitiva de la Universidad. Este acto, añade el demandante, viola el artículo 283 del Estatuto Universitario, porque al remitir el Decano el caso a la Junta de Facultad, ésta nombró otra comisión sin el encargo de que investigara lo sucedido.

9. En vista de lo anterior, alega el recurrente, que se ha producido un doble juzgamiento debido a que ya el Decano había impuesto una sanción, y, luego, la Junta de Facultad inicia otra investigación con la finalidad de esclarecer el o los responsables del referido ilícito en el cual el único responsable lo es el señor **JOSÉ ÁNGEL ARAÚZ REYES,** y proceder posteriormente a sancionar, en atención a que la competencia para la expulsión definitiva de las estudiantes radica en la Junta de la Facultad, según el artículo 284 del Estatuto Universitario.

10. La aludida Junta de Facultad, en su sesión de 5 de febrero de 1987, procedió a emitir la Resolución N° 21 de 5 de febrero de 1987, en la que ordenó que se continuara la investigación en la Facultad de las alteraciones y falsificaciones mencionadas en el informe de la Comisión nombrada por el Decano. Además, que se investigara sobre todas las irregularidades presentadas en los últimos cinco (5) años. Todo esto, a fin de que se pudiera conocer en forma plena del caso y aplicar las sanciones que privativamente le competen conforme el artículo 285 del Estatuto Univerisitario. De igual manera mantener las suspensiones decretadas por el Decano en ese momento, **EDGARDO MOLINO MOLA.**

11. Contra dicha resolución, las recurrentes presentaron recurso de apelación ante el Consejo Académico de la Universidad de Panamá, el cual fuera rechazado de plano. Esta decisión obedeció a que la resolución recurrida sólo establecía una serie de medidas de tipo administrativo y no, algún tipo de sanción, de conformidad con el artículo 284 del Estatuto Universitario, que establece que el

Consejo Académico sólo puede conocer en asuntos disciplinarios de expulsiones por más de un año y de separación definitiva impuestas por la Junta de Facultad, medidas éstas que no estaban contempladas en la resolución recurrida.

12. La nueva Comisión Investigadora designada elaboró un informe y concluyó sosteniendo que habían suficientes elementos de convicción para calificarlas como responsables directas y beneficiarias de las alteraciones de calificaciones hechas por **JOSÉ ÁNGEL ARAÚZ REYES.**

13. Luego de escuchar el informe correspondiente, la Junta de Facultad procedió a dictar la Resolución N° 28 de 21 de mayo de 1987, por la cual resolvió **SEPARAR DEFINITIVAMENTE DE LA UNIVERSIDAD** a las referidas estudiantes.

14. Contra la precitada resolución, las recurrentes interpusieron ante el Consejo Académico de la Universidad de Panamá, recurso de apelación al momento de su notificación.

INFORME DE CONDUCTA DE LA ENTIDAD DEMANDADA

El representante legal de la entidad demandada, rindió su informe de conducta de 23 de noviembre de 1987, legible a fojas 69-72 del expediente contencioso, cuyo texto reproducimos a continuación:

> **"1)** El Despacho del Decano tuvo conocimiento de que se habían producido algunas alteraciones de notas en las confidenciales de estudiantes de la Facultad de Derecho. En consideración a esta situación, se nombró el 6 de noviembre de 1986, una Comisión Examinadora, con el propósito de investigar los casos de alteración de notas. Esa Comisión estuvo compuesta por la Profesora Dra. Aura Emérita Guerra de Villalaz, el Profesor Dr. Carlos Enrique Muñoz Pope, y el Estudiante Graduando Luis Cedeño.
>
> **2)** El día 8 de enero de 1987, la Comisión Examinadora rindió Informe sobre el trabajo que se le encomendó y recomendó la expulsión definitiva de los estudiantes detectados como favorecidos por las alteraciones de notas, entre los que se encontraba **Aura Iris Agudo, Liz Mary Castrellón y Teresa Ortíz.**
>
> En base a este Informe, el Decano de la Facultad de Derecho, como no le correspondía la sanción de expulsión definitiva como recomendaba la Comisión Examinadora, decidió mediante las Resoluciones N° 10, 11 y 12 de 10 de enero de 1987, separar de la Facultad de Derecho a las estudiantes **Liz Mary Castrellón, Aura Iris Agudo y Teresa Ortíz,** hasta tanto la Junta de Facultad decidiera sobre la sanción definitiva que solicitaba la Comisión.
>
> **3)** El 16 de enero de 1987, las estudiantes afectadas **Liz Mary Castrellón, Aura Iris Agudo y Teresa Ortíz,** presentaron escrito de revocatoria ante el Decano de la Facultad de Derecho de las resoluciones antes mencionadas.
>
> **4)** El día 29 de enero de 1987, el Decano Encargado, Dr. Eduardo Lombana, negó la reconsideración solicitada por las afectadas y concedió la apelación en subsidio interpuesta.
>
> **5)** El día 6 de febrero de 1987, las estudiantes afectadas sustentaron la apelación ante el Señor Rector, contra la decisión del Decano de 10 de enero de 1987.
>
> **6)** El día 12 de febrero de 1987, el Rector de la Universidad de Panamá, confirmó en todas sus partes, las Resoluciones N° 10, 11 y 12 del 12 de enero de 1987, proferidas por el Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, en las que se mantenía la separación provisional de las estudiantes hasta tanto la Junta de Facultad decidiera sobre su expulsión definitiva o su absolución.

De esta manera terminó el día 12 de febrero de 1987, el procedimiento en relación con la actuación del Decano.

7) El día 5 de febrero de 1987 se reunió la Junta de Facultad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, con el propósito de decidir sobre la expulsión o absolución de las estudiantes **Liz Mary Castrellón, Aura Iris Agudo y Teresa Ortíz.**

En esa Junta se decidió que se ampliara la investigación que había realizado la Comisión Examinadora y se nombró una nueva Comisión, en vista de la renuncia de los miembros de la Comisión anterior que consideraron que habían cumplido con su papel. Quedó integrada por el Profesor Dr. Juan Saucedo Polo, Profesor Freddy Blanco, Profesor Jorge Lombardo, y los estudiantes Jazmina Rovi y Eduardo Ulloa.

Igualmente, ese mismo día la Junta de Facultad decidió mantener la separación de las estudiantes afectadas, con el fin de no entorpecer las investigaciones.

Se puede apreciar, que la decisión del suscrito Decano fue reemplazada por otra de la mencionada Junta de Facultad.

8) La Comisión nombrada por la Junta de Facultad el día 5 de febrero de 1987, rindió Informe el día 21 de abril de 1987, considerando igual que la Comisión anterior de que hay suficientes elementos de convicción que señalan a las estudiantes **Aura Iris Agudo, Liz Mary Castrellón y Teresa Ortíz** como responsables directas y beneficiarias de las alteraciones de calificaciones hechas por el Sr. **José Ángel Araúz** y que por lo anterior correspondía a la Junta de Facultad aplicar la sanción del artículo 284 de expulsión por más de un año o de separación definitiva de la Universidad.

Los peritos grafotécnicos del Ministerio Público, señores Juan A. Granados y Gustavo González, concluyen a foja 210 del expediente disciplinario, que **Liz Mary Castrellón y Aura Iris Agudo**, fueron las que escribieron en una hoja de papel las materias que debía alterar José Angel Araúz, que aparece en el expediente disciplinario a foja 205.

9) La Junta de Facultad en consideración del Informe de la Comisión decidió, mediante Resolución N° 28 de 21 de mayo de 1987, expulsar definitivamente de la Universidad a las estudiantes **Liz Mary Castrellón, Aura Iris Agudo y Teresa Ortíz.**

Esta decisión sustituye la del 5 de febrero de 1987 terminando el caso a nivel de la Junta de Facultad.

10) Las estudiantes afectadas presentaron ante el Consejo Académico recurso de apelación contra la decisión proferida por la Junta de Facultad de fecha 21 de mayo de 1987. Resolución que está en pleno vigor y efecto y que es la única que actualmente está surtiendo efecto por su naturaleza disciplinaria de aplicación inmediata; y todas las anteriores perdieron vigencia por haber sido reemplazadas por la decisión de 21 de mayo de 1987." ...

DISPOSICIONES INFRINGIDAS Y EL CONCEPTO DE LA VIOLACIÓN

Las demandantes estiman que el acto acusado de ilegal es violatorio de los artículos 281 y 284 del Estatuto Universitario, y los Artículos 1, 2 y 5 del Código Penal.

En lo que al artículo 281 del Estatuto Universitario concierne, señala el demandante que el mismo ha sido infringido en el concepto de violación directa, porque de haberlo aplicado la Junta de Facultad, se habrían percatado de que el mismo no contempla el supuesto de la falta que se le imputa a sus patrocinadas.

Esto significa, a juicio del recurrente, que en ninguno de su acápites se registra una falta que consista en la supuesta falsificación de documentos o participación o colaboración en dicho acto o en alteración de notas. Así como tampoco, el precitado artículo señala cuándo se considera a una persona responsable por la comisión de un ilícito ejecutado por otro con sólo una declaración contradictoria de éste y, sin prueba concluyente en su contra.

En lo que respecta a la infracción del artículo 284 del Estatuto Universitario, expresa el apoderado judicial de las recurrentes, que el mismo sólo faculta a la Junta de Facultad para aplicar sanciones por más de un año y de expulsión definitiva de la Universidad, según sea el caso. Señala también que este artículo fue violado directamente por indebida aplicación, puesto que el mismo consagra sanciones para los casos tipificados en el Estatuto Universitario, situación que no era el caso de sus representadas, ya que la falta que se les imputa no está contemplada en dicho Estatuto.

Sobre la infracción del artículo 1 del Código Penal, indica el demandante que la Junta de Facultad no ha cumplido con el debido trámite, toda vez, que no sólo se procede al doble juzgamiento, sino que se pena a su representadas por un hecho no descrito expresamente por la norma, ni como delito ni como falta.

Sobre el concepto de la infracción del artículo 2 del Código Penal, dice el recurrente que dicha norma no sólo prohíbe que se pueda condenar a una persona por Tribunal no competente, sino que también prohíbe procesar a alguien más de una vez por la misma causa penal. Por tanto, agrega, que al imponer la sanción de separación definitiva a las estudiantes **AURA IRIS AGUDO SOLÍS y LIZ MARY CASTRELLÓN BIRMINGHAM**, la Junta de Facultad está contribuyendo al juzgamiento doble de las estudiantes por la misma causa penal o disciplinaria, con lo cual se viola de manera flagrante la referida excerta legal.

Finalmente en lo que a la transgresión del artículo 5 del Código Penal respecta, manifiesta el representante legal de las recurrentes lo siguiente:

> "En forma antojadiza la JUNTA DE FACULTAD le hace un unilateral señalamiento a nuestras representadas sin que hasta la fecha se haya podido probar esas imputaciones, acusaciones que por lo demás han sido oportunamente descartadas.
>
> Ignorando las pruebas que obran a favor de nuestras representadas y sin que la conducta de éstas en ninguna forma haya quedado encuadrada en alguna norma del Estatuto Universitario o del Código Penal, la Junta de Facultad realiza un razonamiento analógico para concluir que violaron el Estatuto Universitario y que incurrieron en un hecho ilícito de falsificación de notas, cuando las dichas estudiantes no han tenido acceso a los archivos ni se ha practicado prueba o experticia en que pueda sustentarse tal afirmación.
>
> Al final de cuentas, no se ha tomado en consideración que el mismo funcionario destituido, autor de la falsificación espontáneamente declaró ante notario que nuestras, representadas ni siquiera tenían conocimiento del ilícito y no eran autoras ni coautoras de éste. Esta prueba, relacionada con otros elementos de juicio, constituyen indicio a favor de nuestras representadas si es que no se tiene en cuenta y se desea respetar el derecho a que se presuma su inocencia que no se desdibujado a través de todo este desmañado proceso."

CRITERIO DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

Mediante Vista Fiscal N° 165 de 3 de agosto de 1989, el señor Procurador de la Administración solicitó a esta Sala negar las declaraciones pedidas por el demandante. A su juicio, la alteración de calificaciones constituye evidentemente, no solamente un delito penal, sino fraude o engaño en materia de exámenes a que se refiere el literal g) del artículo 281 del Estatuto Universitario, por lo cual podrán ser sancionados los estudiantes. (v. f. 32) Esta fue la situación, según el Procurador, que ocurrió en el presente caso, en

que la Junta de Facultad de Derecho y Ciencias Políticas separó definitivamente a las mencionadas estudiantes, tomando en consideración de que existían suficientes elementos de convicción que las señalan como las responsables directas y beneficiarias de la alteraciones de calificaciones hechas por el funcionario José Angel Araúz. (Cfr. folio 33).

En lo que respecta a las infracciones de los artículos 1, 2 y 5 del Código Penal, el representante de los intereses de la Administración, señala que tales cargos carecen de fundamento, porque las normas en referencia no regulan los procesos disciplinarios seguidos a estudiantes universitarios, sino causas penales. Las contravenciones y faltas de los estudiantes serán sancionados de acuerdo con las normas disciplinarias que establezcan el Estatuto y los reglamentos Universitarios, con arreglo al artículo 61 de la Ley 11 de 1981. (Cfr. f. 33).

En cuanto al doble juzgamiento alegado por el apoderado judicial de las demandantes, sostiene el aludido funcionario que en primer lugar, la separación de las estudiantes ordenada por el Decano mediante Resoluciones N° 10, 11 y 12 de enero de 1987, no constituye una sanción, sino una medida preventiva tendiente a no "entorpecer las investigaciones". (Ver f. 34). Por consiguiente, en el caso de la sanción de separación definitiva de la Universidad de las referidas estudiantes **AURA IRIS AGUDO**, **LIZ MARY CASTRELLÓN y TERESA ORTIZ**, no se ha producido doble juzgamiento. Tal aseveración obedece a que a nivel universitario, es la única sanción que se les ha impuesto, y la misma tiene efectos y connotaciones distintas de la sanción o sanciones que se les pudieran imponer en un proceso penal, por razón de la alteración de calificaciones aludidas. (V. f. 36).

Agrega también, que dichas estudiantes fueron sancionadas por la autoridad competente al efecto, según lo dispuesto en el artículo 33 (numeral 6°), 59 (numeral 5°), 61, 72 y 73 de la Ley 11 de 1981, 281 (literal g) y 284 del Estatuto Universitario. (Cfr. f. 36). De igual forma, indica que no es cierto que en el caso bajo estudio, se haya acudido a la analogía para aplicar la sanción que se impugna, puesto que si bien es cierto que se consideró que la alteración de calificaciones se subsume en la conducta descrita como falta en el literal (g.) del artículo 281 del Estatuto Universitario, ello no constituye aplicación de pena por analogía. (ver f. 38).

CONSIDERACIONES DE LA SALA

Cumplidos los trámites legales instituidos para estos procesos, esta Superioridad procede a resolver la presente controversia.

En primer término se consideran infringidos los artículos 281 (acápite 9) y 284 del Estatuto Universitario, que por la estrecha vinculación que guardan entre sí, la Sala estima procedente analizarlos en su conjunto.

A juicio de este Tribunal, y, contrario a lo manifestado por el recurrente, al proceder la Junta de Facultad a imponer la sanción de expulsión definitiva de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, a las estudiantes **AURA IRIS AGUDO** y **LIZ MARY CASTRELLÓN** lo hizo precisamente, tomando en consideración los parámetros legales establecidos en dichas normas estatutarias.

De las constancias procesales se desprende que las referidas estudiantes estuvieron involucradas en conductas irregulares violatorias de sus deberes como estudiantes universitarias, y que, además, atentaban contra el principio de mantenimiento del orden en la Universidad y la protección de su patrimonio, consagrado en los artículos 72 de la Ley 11 de 1981, y el artículo 59 del Estatuto Universitario.

Ante tales circunstancias, y, dada la gravedad de la falta en que incurrieron las estudiantes **AURA IRIS AGUDO y LIZ MARY CASTRELLÓN**, consistente en la **alteración y falsificación de calificaciones**, es que la Junta de Facultad procedió a imponerles dicha sanción, precisamente, con fundamento legal en los

artículos 281 y 284 del Estatuto Universitario. Y es que estas normas establecen claramente la facultad **exclusiva** que tienen las respectivas Juntas de Facultad de aplicar las sanciones de expulsión por más de un año y de separación definitiva de la Universidad, en caso de que los estudiantes incurran en la comisión de las faltas establecidas en el Estatuto Universitario y de las que puedan fijarse por medio de reglamentos.

Dicha falta, y, como bien lo han señalado en su oportunidad, la entidad demandada y el Procurador de la Administración, se subsume en el supuesto contemplado en el artículo 281 (literal g) del Estatuto Universitario, que establece sanciones para los estudiantes que cometan **"cualquier otra clase de fraude o engaño de exámenes"**, dado que, al darse la alteración de evaluaciones, se está procediendo a alterar de manera fraudulenta el resultado de los exámenes.

Por lo tanto, no prosperan los cargos de violación endilgados a los artículos 281 y 284 del Estatuto Universitario.

En lo que respecta a la transgresión de los artículos 1, 2 y 5 del Código Penal, este Tribunal es del criterio de que tales normas no son de aplicación al caso in examine, toda vez que las mismas son de aplicación a los procesos penales, y no para los procesos de carácter disciplinario como lo es el que nos ocupa.

Cabe recordar que el proceso disciplinario no sólo difiere del proceso penal en su naturaleza, sino que tanto su finalidad como su tramitación son totalmente distintos. De allí entonces, que la doctrina establezca el hecho de que sea posible procesar y sancionar penal y disciplinariamente a un individuo, en atención a que las sanciones de carácter disciplinario son impuestas independientemente, de la responsabilidad civil o penal que la conducta de carácter indisciplinario pueda acarrear.

Sobre la diferencia entre el proceso disciplinario y el proceso penal se ha pronunciado esta Sala en Sentencias de 20 de octubre de 1995, y de 23 de mayo de 1991. En esta última, se estableció el criterio que a continuación se expone:

> "Es preciso aclarar que cuando el artículo 32 de la Constitución dice que nadie será juzgado más de una vez por la misma causa penal policiva o disciplinaria, lo que establece es que una persona no puede se juzgada más de una vez penal, policiva o disciplinariamente. **El precepto no impide, pues, que alguien sea sancionado disciplinariamente y que lo sea también penalmente o viceversa. Así, puede ocurrir que un Ministro o un Director de una institución autónoma destituya a un empleado porque ha cometido un delito; pero esta sanción disciplinaria no impide, ni mucho menos, que la persona sancionada sea luego juzgada y penada por la autoridad jurisdiccional competente.**
>
> De ahí que SAYAGUEZ LASO se exprese a este respecto en los siguientes términos:
>
> `Hemos señalado antes que las responsabilidades penal y disciplinaria no se excluyen una a la otra y que, por lo tanto, un mismo hecho puede motivar la aplicación de sanciones penales y disciplinarias (SAYAGUEZ LASO, Enrique, Tratado de Derecho Administrativo, 5a. ed ..., Montevideo, 1987, p. 337)."... (Lo resaltado es de la Sala).

Cabe anotar que en el presente caso, no se ha producido un doble juzgamiento como pretende interpretar el recurrente. Al proceder el señor Decano de la Facultad a la suspensión de las estudiantes mediante las Resoluciones N° 10, 11 y 12 de 12 de enero de 1987, lo hizo con fundamento legal en los artículos 283 y 284 del Estatuto Universitario que claramente establecen la potestad de los Decanos de suspender o expulsar de manera provisional a los estudiantes, a fin de poder investigar acuciosamente la falta, y, por ende, determinar su gravedad y la sanción definitiva a aplicar, como ocurrió en este proceso.

Por consiguiente, vemos que al imponerse la sanción de expulsión definitiva de la Universidad a las estudiantes **AURA IRIS AGUDO** y **LIZ MARY CASTRELLÓN** por parte de la Junta de Facultad, no se ha producido ningún doble juzgamiento ya que ésta constituye la única sanción que les fuera aplicada de manera definitiva por el órgano universitario competente, según lo dispuesto en el artículo 284, en concordancia con el artículo 281, (literal g) del Estatuto Universitario, así como también con el artículo 61 de la Ley 11 de 1981.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativo), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL la Resolución N° 28 de 21 de mayo de 1987, dictada por la Junta de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá que resuelve: "SEPARAR DEFINITIVAMENTE DE LA UNIVERSIDAD A LAS ESTUDIANTES LIZ MARY CASTRELLÓN y AURA IRIS AGUDO".

Notifíquese.

(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ELIGIO A. SALAS
(fdo.) ANAIS B. DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE PITTÍ Y ASOCIADOS, EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DEL CONSORCIO CAMBRIDGE CONSULTING CORPORATION, SOPHA CONSEIL SANTE Y H. L. M., S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 157 DEL 19 DE AGOSTO DE 1996, EXPEDIDA POR LA MINISTRA DE SALUD Y EL DIRECTOR DEL PROYECTO DE DINAMIZACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES EN LAS INSTITUCIONES PRIORITARIAS DEL SECTOR PÚBLICO (PAN/95/001) MIPPE-SALUD PNUD, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Pittí y Asociados, actuando en nombre y representación del consorcio CAMBRIDGE CONSULTING CORPORATION, SOPHA CONSEIL SANTE y H. L. M., S. A., solicitó ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia la suspensión provisional de los efectos de la Resolución N° 157 del 19 de agosto de 1996, expedida por la señora Ministra de Salud y el Director del Proyecto de Dinamización de la Ejecución del Presupuesto de Inversiones en Instituciones Prioritarias del Sector Público (PAN/95/001) MIPPE-SALUD-PNUD, mediante la cual se resolvió administrativamente el Contrato 001-96, del 28 de junio de 1996, suscrito entre las ambas partes.

Sostiene la apoderada judicial de la demandante que, además de los perjuicios ocasionados a su representada al inhabilitársele para participar en actos públicos por un término de tres meses, el Consorcio va a sufrir perjuicios económicos inminentes debido a que la señora Ministra de Salud pidió al Gerente General de la Aseguradora Mundial, S. A. que honre la ejecución de la fianza de cumplimiento del Contrato N° 15-0288379-4-00000, expedida a favor de la empresa H. L. M., S. A., para garantizar el Contrato N° 001-96, del 28 de junio de 1996, que fue resuelto administrativamente. De ejecutarse la fianza, la Sociedad H. L. M., S. A. tendrá que resarcir a la Aseguradora Mundial, S. A. la suma de B/.120.000.00, más cualquiera suma adicional que sobrevenga por el supuesto incumplimiento de contrato.

Agrega la firma Pittí y Asociados que, de acuerdo con la Nota N° 4072-D. M. S. DIAL, del 29 de octubre de 1996 y como consecuencia de la resolución administrativa del aludido contrato, la señora Ministra de Salud llamará a negociar a los demás participantes en la Licitación Pública que motivó la contratación entre dicho Ministerio y el Consorcio demandante (Cfr. fs. 105-110).

De acuerdo con el artículo 73 de la Ley N° 135 de 1943, la Sala puede suspender los efectos del acto, resolución o disposición acusada si, a su juicio, ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave.

Sin embargo, en el presente caso, la medida cautelar solicitada no procede porque del examen preliminar que se ha hecho de los cargos de ilegalidad, no se desprenden violaciones ostensibles o palmarias a las disposiciones legales que se cita como violadas en la demanda, ni se infiere, por tanto, la apariencia del buen derecho (**fumus bonis iuris**) a favor de la parte actora, lo cual permitiría considerar lo relativo a los graves perjuicios que, según la demandante, le ocasiona el acto acusado.

Por los anteriores motivos, la Sala considera que la medida cautelar pedida debe negarse.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA la suspensión provisional de los efectos de la Resolución N° 157, del 19 de agosto de 1996, expedida, solicitada por la firma forense Pittí y Asociados, en nombre y representación del consorcio CAMBRIDGE CONSULTING CORPORATION, SOPHA CONSEIL SANTE y H. L. M., S. A.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO NORBERTO CASTILLO, EN REPRESENTACIÓN DE LUSVI HIDIS NIETO TROLLA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO N° 204 DE 14 DE AGOSTO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El doctor Norberto Castillo, actuando en nombre y representación de **LUSVI HIDIS NIETO TROLLA**, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto Ejecutivo N° 204 de 14 de agosto de 1995, emitido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Educación.

La parte actora solicita además que se ordene el reintegro de la señora **LUSVI HIDIS NIETO TROLLA**, con cédula de identidad personal N° 4-146-592 y seguro social N° 46- 4311 al puesto que desempeñaba como Secretaria II, posición 04633-021, partida 0.07.0.30.01.04.001 en la Dirección Provincial de Educación de Chiriquí; y se le pague los salarios dejados de percibir desde el 1° de septiembre de 1995 hasta el día en que se haga efectivo su reintegro. (Fs. 5-6).

Por medio del acto impugnado se dejó sin efectos el Decreto Ejecutivo N° 660 de 30 de diciembre de 1992, en cuanto al nombramiento de la señora **LUSVI HIDIS NIETO TROLLA** como Secretaria II en la Dirección Provincial de Educación de Chiriquí. (Fs. 41).

Al admitirse la presente demanda se corrió en traslado a la señora Procuradora de la Administración quien, mediante la Vista Fiscal N° 171 de 18 de abril de 1996, solicitó a esta Sala denegar las pretensiones del demandante (fs. 49-53); además, se solicitó al funcionario demandado que rindiera el informe de conducta a que se refiere el artículo 33 de la Ley 33 de 1946, lo que hizo

oportunamente (fs. 45-48).

La parte actora estima que el acto administrativo impugnado viola los artículos 127 y 129 de la Ley N° 47 de 24 de septiembre de 1946, cuyo texto transcribimos a continuación:

> **Ley N° 47 de 1946.**
> ""**Artículo 127.** Todo miembro del personal docente o administrativo del ramo de educación, inclusive quienes presten servicio de portería como los porteros, aseadores, mensajeros, etc., que haya sido nombrado o que posteriormente se nombre de acuerdo con las disposiciones presentes a esta Ley, continuará prestando servicios durante todo el tiempo que dure su eficiencia y buena conducta y el término de su licencia, cuando se trate de maestro o profesor.
>
> Los empleados del ramo de educación no podrán ser trasladados a otra escuela o a otro lugar sino en concepto de recompensa, para lo cual debe dársele previo aviso para que den a conocer al Ministerio su conformidad o disconformidad con el mismo, o en los casos previstos en el parágrafo de este artículo, o como sanción por falta cometida, de acuerdo con las disposiciones que en esta Ley se establezcan. Tampoco podrán ser removidos sino mediante el proceso establecido en esta Ley.
> ...
> **Artículo 129.** Las quejas que sobre algún miembro del personal docente o administrativo del Ramo de Educación tenga un superior, que le han llegado por algún conducto digno de crédito, serán inmediatamente investigadas por el superior tan prolijamente como su importancia demande."

En el concepto de la infracción de las normas transcritas el demandante indicó que las mismas se han violado porque a los funcionarios del Ministerio de Educación se les garantiza la estabilidad en el cargo, y sólo pueden ser trasladados o destituidos, por las causas de recompensa o sanción por mala conducta; que a la señora **LUSVI HIDIS NIETO TROLLA** no se le ha investigado por falta disciplinaria alguna ni sancionado tampoco; y que para destituirla tenía que cumplirse con el procedimiento disciplinario que consagra la Ley Orgánica de Educación, a fin de resolver la queja que hubiese llegado al conocimiento del superior jerárquico.

En cuanto al cargo de violación del artículo 127 de la Ley 47 de 1946, considera la señora Procuradora de la Administración, que éste no se ha dado, porque el derecho a la estabilidad que consagra esta norma es otorgado al personal docente o administrativo que haya ingresado al Ramo de Educación por concurso de méritos; que la señora **LUSVI HIDIS NIETO TROYA** fue nombrada como Secretaria II, en la Dirección Provincial de Educación de Chiriquí, de modo discrecional por lo que no obtuvo el cargo de Secretaria II mediante concurso de méritos, y dicha posición es de libre nombramiento y remoción de la autoridad nominadora.

En cuanto al cargo de violación del artículo 129 idem, considera la señora Procuradora de la Administración que éste no es aplicable al caso, porque hace referencia al procedimiento que debe seguirse cuando se aplican sanciones por faltas disciplinarias a los miembros del personal del Ramo de Educación con estabilidad, mientras la señora **LUSVI HIDIS NIETO TROYA** no fue destituida por haber cometido falta alguna, sino por tratarse de un cargo de libre nombramiento y remoción de la autoridad nominadora. (Fs. 51 y 53).

Evacuados los trámites legales, los Magistrados que integran la Sala de lo Contencioso Administrativo proceden a resolver la presente controversia, confrontando el acto impugnado con las normas que se estiman infringidas.

Nuestra Constitución Política establece en sus artículos 295 y siguientes el régimen de los servidores públicos; y en sus artículos 297 y 300 preceptúa que los deberes y derechos de los servidores públicos, así como los principios para

sus nombramientos, ascensos, suspensiones, traslados, destituciones, cesantía y jubilaciones deben ser determinados por la Ley, la que regulará la estructura y organización de dichas carreras de conformidad con las necesidades de la Administración. Por tanto, debemos entender que ninguna norma de categoría inferior a la ley puede otorgar estabilidad a un funcionario público. Preceptúan además estas normas que los nombramientos del personal de carrera se harán con base en el sistema de méritos y que las dependencias oficiales funcionarán a base de un Manual de Procedimiento y otro de Clasificación de Puestos.

El 24 de septiembre de 1946 fue dictada la Ley N° 47 Orgánica de Educación, que desarrolla la carrera docente y que en su artículo 127 otorga el derecho a la estabilidad, tanto a docentes como administrativos del Ramo de Educación, durante todo el tiempo que dure su eficiencia y buena conducta, siempre que hubiesen sido nombrados o que se nombren de acuerdo con las disposiciones de esa Ley. Los artículos 115 y 119 idem preceptúan que los nombramientos y promociones de los miembros del personal docente y administrativo del Ramo de Educación serán decretados por el Órgano Ejecutivo de acuerdo con el Escalafón y demás normas establecidas por la misma Ley, y que todo miembro del personal docente o administrativo del Ramo de Educación en servicio o que aspire a ingresar al mismo debe registrar en el Ministerio de Educación, si no lo ha hecho, los títulos profesionales exigidos por la Ley 47 de 1946, para desempeñar el cargo que ejerce o aspira ejercer.

Esta Sala ha reiterado en diversas ocasiones, que el hecho de que ciertos empleados administrativos gocen de estabilidad en el puesto, situación que limita traslados y despidos, se debe a que los cargos que ocupan han sido ganados por el sistema de méritos o concursos, o por el tiempo de servicio en la Institución.

La señora **LUSVI HIDIS NIETO TROYA** fue nombrada mediante el Decreto Ejecutivo N° 660 de 30 de diciembre de 1992 (fs. 45), en el cargo de Secretaria II, posición 04633, en la Dirección Provincial de Educación de Chiriquí. Por tanto, se trata de una funcionaria pública del Ramo de Educación, que ocupaba un cargo administrativo dentro del Ministerio de Educación.

Esta Sala, al pronunciarse en relación con la estabilidad que preceptúa el artículo 127 de la Ley N° 47 de 1946, expresó en las sentencias de 7 y 21 de diciembre de 1995, que la carrera docente al igual que todas las demás carreras públicas, se basan por disposición constitucional, en el sistema de méritos, por lo que el cumplimiento de los procedimientos y sistemas de selección para poder formar parte de esta carrera pública y gozar de los derechos de estabilidad e inamovilidad, es exigible no sólo a los docentes, sino también a los administrativos del Ramo de Educación, como es el caso de la señora **LUSVI HIDIS NIETO TROYA.**

Entre las pruebas aportadas por la señora **LUSVI HIDIS NIETO TROYA** no reposa documento alguno en el que conste que el cargo que ocupaba como Secretaria II en la Dirección Provincial de Educación de Chiriquí, lo obtuvo por concurso de méritos; y tampoco ha presentado prueba del registro de los títulos profesionales que se exigen para desempeñar el cargo de Secretaria II, tal como lo dispone el artículo 119 de la Ley 47 de 1946, por lo que a juicio de la Sala, la autoridad nominadora podía destituirla discrecionalmente, siendo una funcionaria de libre nombramiento y remoción.

Como la demandante no goza del derecho a la estabilidad que consagra el artículo 127 de la Ley 47 de 1946, debe desestimarse este cargo.

En cuanto a la alegada violación del artículo 129 de la Ley N° 47 de 1946, la Sala comparte el criterio de la señora Procuradora de la Administración, en el sentido de que esta norma no es aplicable al caso que nos ocupa porque la señora **LUSVI HIDIS NIETO TROYA** fue destituida discrecionalmente por ocupar un cargo de libre nombramiento y remoción en el que no fue nombrada según los sistemas de selección de las carreras públicas y que tampoco ganó por concurso de méritos. El procedimiento establecido en los artículos 129 y siguientes de la Ley Orgánica de Educación es aplicable a quienes gozan de estabilidad conforme el artículo 127 de la Ley 47 de 1946.

En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO ES ILEGAL, el Decreto Ejecutivo N° 204 de 14 de agosto de 1995, emitido por el Órgano Ejecutivo, por conducto del Ministerio de Educación y NIEGA las otras declaraciones pedidas.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DOCTOR ROLANDO VILLALAZ, EN REPRESENTACIÓN DE ALEXIS ELÍAS MORÓN MALEK, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 9334-94 DE 5 DE DICIEMBRE DE 1994, EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El doctor Rolando Villalaz, actuando en nombre y representación de **ALEXIS ELÍAS MORÓN MALEK**, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 9334-94 de 1 de diciembre de 1994, emitida por el Director General de la Caja de Seguro Social.

Antes de resolver el fondo de la controversia la Sala dictó un auto para mejor proveer, de conformidad con el artículo 62 de la Ley 135 de 1943, a fin de solicitar a la Caja de Seguro Social informara si el doctor **ALEXIS ELÍAS MORÓN MALEK** portador de la cédula de identidad personal N° 8-257-1008 y número de Seguro Social 315-6470, quien fue destituido por medio del acto impugnado, Resolución N° 9334-94 de 1 de diciembre de 1994, había sido reintegrado al cargo que ocupaba en la Caja de Seguro Social como Médico Especialista de III Categoría en el Cuarto de Urgencias de Adultos, o a algún otro cargo en dicha institución; y de ser afirmativa esta respuesta, se remitiera a la Sala copia autenticada de la Acción de Personal por medio de la cual fue reintegrado. Además se solicitó a la Caja de Seguro Social que informara a la Sala si el doctor **MORÓN MALEK** es un funcionario de carrera. (F. 100-102).

A través de la Nota ALP-N-53-96 de 8 de noviembre de 1996 (fs. 108), la Directora Nacional de Personal del Seguro Social y el Secretario General de dicha institución, contestaron el informe solicitado afirmando que el doctor **ALEXIS ELÍAS MORÓN MALEK** no es un funcionario de carrera y que había sido reintegrado a su posición mediante la Resolución N° 5930 de 12 de junio de 1996, mediante la cual se resolvió lo siguiente: "Dejar sin efecto en todas sus partes el contenido de la Resolución N° 9334-94 de 1 de diciembre de 1994, mediante la cual se destituyó de su cargo al Doctor **ALEXIS E. MORÓN** y se reintegra en el mismo cargo, en idénticas condiciones de remuneración y funciones." La Caja de Seguro Social acompañó su respuesta con copia de la citada Resolución N° 5930 (fs. 106-107).

Como quiera que la Resolución N° 9334-94 de 1 de diciembre de 1994, acto impugnado en esta demanda, fue dejado sin efectos, el objeto litigioso ha dejado de existir en el mundo jurídico, y debe declararse que se ha producido el fenómeno jurídico denominado sustracción de materia.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE POR SUSTRACCIÓN DE MATERIA, debe terminar el proceso iniciado con la demanda contencioso administrativa de plena

jurisdicción interpuesta por el doctor Rolando Villalaz, en representación de ALEXIS ELÍAS MORÓN MALEK, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 9334-94 de 1 de diciembre de 1994 emitida por el Director General de la Caja de Seguro Social.

Notifíquese y Archívese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RAÚL ADAMES FRANCESCHI, EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ ÁNGEL PAREDES, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 1659-95 DE 8 DE MARZO DE 1995, EXPEDIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL Y SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Raúl Adames Franceschi, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción en representación de **JOSÉ ÁNGEL PAREDES**, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 1659-95 de 8 de marzo de 1995, expedida por el Director General de la Caja de Seguro Social.

Agotados los trámites procesales, previos a la etapa decisoria, los Magistrados que integran la Sala consideran necesario dictar auto para mejor proveer de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 135 de 1943, para recabar la siguiente información:

1. Si el doctor **JOSÉ ÁNGEL PAREDES** es un funcionario de carrera, entendiéndose por tal la que se fundamenta en métodos científicos de administración de recursos humanos, con instrumentos de selección tales como: el concurso de antecedentes, los exámenes de libre oposición, las evaluaciones de ingreso y cualquier combinación de éstos, en los que se establece normas y procedimientos claros, precisos y objetivos para garantizar la transparencia y objetividad de los nombramientos; y

2. Si el doctor **JOSÉ ÁNGEL PAREDES**, quien fue destituido del cargo que ocupaba en la Caja de Seguro Social como Médico Especialista Institucional de I Categoría, ha sido reintegrado por la autoridad demandada.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA que por Secretaria se requiera al Director de Personal de la Caja de Seguro Social que, en el término de cinco (5) días, rinda un informe en el cual conste:

1. Si el doctor **JOSÉ ÁNGEL PAREDES** es un funcionario de carrera, entendiéndose por tal la que se fundamenta en métodos científicos de administración de recursos humanos, con instrumentos de selección tales como: el concurso de antecedentes, los exámenes de libre oposición, las evaluaciones de ingreso y cualquier combinación de éstos, en los que se establece normas y procedimientos claros, precisos y objetivos para garantizar la transparencia y objetividad de los nombramientos; y

2. Si el doctor **JOSÉ ÁNGEL PAREDES**, con cédula de identidad personal N° 8-98-594 y número de Seguro Social 49-8254, quien fue destituido por medio del acto impugnado, Resolución N° 1659-95 de 8 de marzo de 1995, ha sido reintegrado al cargo que ocupaba en la Caja de Seguro Social como Médico Especialista

Institucional de I Categoría, o a algún otro cargo en dicha institución; y

3. De ser afirmativa la respuesta anterior, nos remita copia autenticada de la acción de personal por medio de la cual fue reintegrado como funcionario de la Caja de Seguro Social.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ALEXIS HERRERA EN REPRESENTACIÓN DE ICAZA, GONZÁLEZ-RUIZ Y ALEMÁN PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL SILENCIO ADMINISTRATIVO INCURRIDO POR LA COMISIÓN BANCARIA AL NO CONTESTAR LA SOLICITUD DE LICENCIA FIDUCIARIA PRESENTADA EL 22 DE MAYO DE 1996, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Alexis Herrera, actuando en nombre y representación de la firma Icaza, González-Ruiz y Alemán, ha interpuesto ante la Sala Tercera (contencioso-administrativa) de la Corte Suprema de Justicia demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el silencio administrativo incurrido por la Comisión Bancaria al no contestar la licencia fiduciaria presentada el 22 de mayo de 1996, y para que se hagan otras declaraciones.

Encontrándose el presente negocio en la etapa de admisión, la Sala observa que se ha presentado desistimiento de la acción contencioso administrativa interpuesta contra el mencionado acto administrativo, por lo que procede a determinar su admisibilidad.

En virtud de que el artículo 66 de la Ley 135 de 1943 señala que la parte demandante puede desistir en cualquier momento del proceso, procede la Sala a admitir el desistimiento y dar por terminado el proceso.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el desistimiento interpuesto por el licenciado Alexis Herrera, actuando en nombre y representación de la firma Icaza, González-Ruiz y Alemán, DECLARA que ha terminado el proceso contencioso administrativo y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL DOCTOR ROLANDO VILLALAZ, EN REPRESENTACIÓN DE ARELIS REMOND DE MARTINELLI, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 3040 DE 27 DE ABRIL DE 1995, EMITIDA POR EL DIRECTOR GENERAL DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El doctor Rolando Villalaz, actuando en nombre y representación de **ARELIS REMOND DE MARTINELLI**, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 3040-95 de 27 de abril de 1995, emitida por el Director General de la Caja de Seguro Social.

Agotados los trámites procesales, previos a la etapa decisoria, los Magistrados que integran la Sala consideran necesario dictar auto para mejor proveer de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de la Ley 135 de 1943, con el fin de recabar la siguiente información:

1. Si la doctora **ARELIS REMOND DE MARTINELLI** es una funcionaria de carrera, entendiéndose por tal la que se fundamenta en métodos científicos de administración de recursos humanos, con instrumentos de selección tales como: el concurso de antecedentes, los exámenes de libre oposición, las evaluaciones de ingreso y cualquier combinación de éstos, en los que se establece normas y procedimientos claros, precisos y objetivos para garantizar la transparencia y objetividad de los nombramientos;

2. Si la doctora **ARELIS REMOND DE MARTINELLI** quien fue destituida del cargo que ocupaba como funcionaria de la Caja de Seguro Social, mediante el acto impugnado, ha sido reintegrada por la autoridad demandada.

3. Si consta en la Dirección de Personal de la Caja de Seguro Social o en el Servicio de Psiquiatría del Complejo Hospitalario Metropolitano de la Caja de Seguro Social, autorización expedida por sus superiores jerárquicos, a favor de la doctora **ARELIS REMOND DE MARTINELLI** para asistir a clases como estudiante diurna de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, durante el período transcurrido del año 1986 al año 1990; o si sus superiores jerárquicos autorizaron la modificación de su horario de labores en la Caja de Seguro Social con el fin de que pudiera asistir a sus clases como estudiante diurna de derecho durante el período señalado;

4. Si durante el período legislativo 1990-1994, la Caja de Seguro Social comisionó a la doctora **ARELIS REMOND DE MARTINELLI** para asistir a las sesiones de las Comisiones Permanentes de la Asamblea Legislativa, en su calidad de Directora de Planificación, y en caso afirmativo con que fin; y

5. Solicitar se envíe a la Sala la documentación correspondiente si es afirmativa alguna de las respuestas.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA que por Secretaria se requiera al Director de Personal de la Caja de Seguro Social, que en el término de cinco (5) días rinda un informe en el cual conste:

1. Si la doctora ARELIS REMOND DE MARTINELLI es una funcionaria de carrera, entendiéndose por tal la que se fundamenta en métodos científicos de administración de recursos humanos, con instrumentos de selección tales como: el concurso de antecedentes, los exámenes de libre oposición, las evaluaciones de ingreso y cualquier combinación de éstos, en los que se establece normas y procedimientos claros, precisos y objetivos para garantizar la transparencia y objetividad de los nombramientos;

2. Si la doctora ARELIS REMOND DE MARTINELLI, con cédula de identidad personal N° N-01-260 y seguro social N° 111-3284, quien fue destituida por medio del acto impugnado, Resolución N° 3040-95 de 27 de abril de 1995, ha sido reintegrada al cargo que ocupaba en la Caja de Seguro Social. En caso afirmativo con el informe deberá enviarse copia autenticada del acto administrativo mediante el cual fue reintegrada.

3. Si el Servicio de Psiquiatría del Complejo Hospitalario Metropolitano de la Caja de Seguro Social autorizó a la doctora ARELIS REMOND DE MARTINELLI para asistir a clases como estudiante diurna de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, durante el período comprendido entre los años 1986 y 1990; o si su horario de labores fue modificado en ese período para que pudiera asistir a las clases diurnas de la Facultad de Derecho.

4. Si la Caja de Seguro Social comisionó a la doctora ARELIS REMOND DE MARTINELLI, en su calidad de Directora de Planificación, para asistir a las sesiones de las Comisiones Permanentes de la Asamblea Legislativa, durante el período legislativo 1990-1994, y en caso afirmativo con que fin.

Si alguna de las respuestas es afirmativa deberá acompañarse el informe con copia autentica de los documentos correspondientes.

Notifíquese y Comuníquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JAIME ANTONIO RUIZ, EN REPRESENTACIÓN DE ERIC MARCEL NIETO HURTADO, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN DE 20 DE AGOSTO DE 1996, EXPEDIDA POR EL JUZGADO PRIMERO DEL CIRCUITO DE HERRERA, RAMO CIVIL, EL ACTO CONFIRMATORIO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Jaime Antonio Ruiz, actuando en nombre y representación de ERIC MARCEL NIETO HURTADO, ha promovido ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución de 20 de agosto de 1996, dictada por el Juzgado Primero del Circuito de Herrera, Ramo Civil, el acto confirmatorio y para que se hagan otras declaraciones.

En la parte final de su libelo, la parte demandante solicita a la Sala suspenda provisionalmente los efectos del acto impugnado, mediante el cual se destituyó al señor ERIC MARCEL NIETO HURTADO del cargo de Portero Citador del Juzgado Primero del Circuito de Herrera.

De acuerdo con lo preceptuado en el numeral 1°, artículo 74 de la ley 135 de 1943, no hay lugar a suspensión provisional en las acciones referentes a cambios, remociones, suspensión o retiro en el personal administrativo, salvo los casos de funcionarios nombrados por períodos fijos.

Como del examen de los hechos de la demanda se desprende claramente que el señor ERIC MARCEL NIETO HURTADO no fue nombrado por período fijo, la medida cautelar es improcedente por expresa prohibición legal.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NIEGA la suspensión provisional de los efectos de la Resolución de 20 de agosto de 1996, dictada por el Juzgado Primero del Circuito de Herrera, Ramo Civil, del Cuarto Distrito Judicial.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JAIME A. JÁCOME DE LA GUARDIA EN REPRESENTACIÓN DE VÍCTOR PERÉA, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 166 DE 14 DE AGOSTO DE 1996, DICTADA POR EL TRIBUNAL DE APELACIONES Y CONSULTAS DEL MUNICIPIO DE COLÓN, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Jaime A. Jácome De La Guardia, actuando en nombre y representación del señor VÍCTOR PEREA, interpuso, ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 166 de 14 de agosto de 1996, expedida por la Alcaldía de Colón, en grado de apelación.

A juicio de la Magistrada Sustanciadora la Sala Tercera no tiene competencia para conocer de esta resolución dictada por la Alcaldía de Colón, en segunda instancia, dentro de un proceso de policía (accidente de tránsito) en el que figuran como partes VÍCTOR PEREA y Ricardo Ortega, porque el numeral 2° del artículo 28 de la Ley 135 de 1943, preceptúa que las resoluciones que se dicten en los juicios de policía de naturaleza penal o civil no son acusables ante la jurisdicción contencioso-administrativa.

De conformidad con el artículo 1742 del Código Administrativo cuando en virtud de un fallo de policía de segunda instancia se condena a pagar por "resarcimiento de perjuicios o por cualquier otra causa semejante sumas mayores de B/.15.00" la resolución no se cumplirá en esa parte si dentro de los seis días de notificado el interesado ocurre ante el Órgano Judicial (la jurisdicción ordinaria) para su confirmación. Si las partes no utilizan este remedio, la decisión adquiere el carácter de definitiva y permanente y debe ser ejecutada, tal como lo preceptúa el artículo 1368 del Código Judicial, mediante el trámite señalado en ese Código para la liquidación de la condena en abstracto.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, representada por la Magistrada Sustanciadora, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Jaime A. Jácome De La Guardia, en nombre y representación de VÍCTOR PEREA, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 166 de 14 de agosto de 1996, dictada por la Junta de Apelaciones y Consultas de la Alcaldía de Colón.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA SHIRLEY Y DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DE ALBERTO SOTOMAYOR, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA NOTA N° 1330-95 DE 2 DE AGOSTO DE 1995, EMITIDA POR EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ Y LA NOTA N° 95-2126 DE 7 DE SEPTIEMBRE DE 1995, EMITIDA POR EL VICERECTOR ACADÉMICO A. I. DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISIETE (27) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Shirley y Díaz, actuando en nombre y representación de ALBERTO SOTOMAYOR, ha promovido demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción, para que se declare nula, por ilegal, la Nota N° 1330-95 de 2 de agosto de 1995, emitida por el Rector de la Universidad de Panamá y la Nota N° 95-2126 de 7 de septiembre de 1995, emitida por el Vicerrector Académico a. i. de la Universidad de Panamá, y para que se haga otras declaraciones.

La parte actora solicita además que se declare "que como consecuencia de la nulidad, por ilegal, de los actos anteriores, la Universidad de Panamá, a través del Rector Magnífico, está obligada a pagarle los salarios descontados con motivo de los Acuerdos 4-88 y 5-88 de 9 de junio y 15 de julio de 1988. (Foja 15)".

En el primer acto impugnado, Nota N° 1330-95 de 2 de agosto de 1995, el señor Rector de la Universidad de Panamá niega la solicitud hecha por el profesor ALBERTO SOTOMAYOR sobre el pago de los salarios devengados durante una docencia de tiempo completo que le fuera suspendida por el Acuerdo 4-88 de 9 de junio de 1988. Mediante el segundo acto impugnado, Nota N° 95-2126 de 7 de septiembre de 1995, el Vicerrector Académico, a. i. de la Universidad de Panamá, señala al recurrente que la sentencia que declaró ilegal el Acuerdo 4-88 no le favorece porque "en su caso es únicamente aplicable el aspecto general de lo fallado por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia; es decir, la posibilidad de ser contratado a tiempo completo, que se hizo efectivo mediante Resolución N° 93-01-11-01-43-11 (foja 5)."

Al admitirse la presente demanda se solicitó al funcionario demandado que rindiera el informe de conducta a que se refiere el artículo 33 de la Ley 33 de 1946, lo que hizo oportunamente (fs. 28-30); además, se le corrió traslado de la demanda a la señora Procuradora de la Administración quien, mediante Vista Fiscal N° 41 de 19 de enero de 1996, solicitó a esta Sala denegar las pretensiones del demandante (fs. 31-41).

La parte actora estima que los actos administrativos impugnados son violatorios de los artículos 44, 48 numeral 4 de la Ley 11 de 1981, por la cual se reorganiza la Universidad de Panamá, 109 y 115 literal b) del Estatuto Universitario, cuyo texto transcribimos a continuación:

> LEY N° 11 DE 8 DE JUNIO DE 1981.
> "Artículo 44. Los profesores e investigadores nombrados mediante concurso formal u oposición estarán sujetos a un escalafón que regirá los ascensos de categoría y los incrementos en los sueldos, y no podrán ser removidos sino mediante la instrucción de un expediente con las garantías procesales necesarias y por las causas previstas en el Estatuto universitario."
>
> "Artículo 48. Son derechos de los profesores y de los investigadores universitarios, además de los que les confieran el Estatuto y los reglamentos, los siguientes:
> ...
> 4° Estabilidad en su cargo, en tanto cumpla los requisitos y condiciones que la Ley, el Estatuto y los reglamentos señalen para el mismo."
>
> ESTATUTO UNIVERSITARIO (Sancionado por el Consejo Directivo el 16 de junio de 1970).
> "Artículo 109. Cuando se conceda condición de Profesor de Tiempo Completo a un Profesor Regular, ésta tendrá vigencia permanente, en tanto el Profesor cumpla adecuadamente con las obligaciones establecidas en el Artículo 110."
>
> "Artículo 115. En complemento de los derechos fundamentales que la Ley Orgánica de la Universidad señala al profesor universitario, el

presente Estatuto le reconoce los siguientes:
...
b) Disfrutar de la estabilidad consagrada para las correspondientes categorías académicas, de adecuada remuneración de acuerdo a su responsabilidad y dedicación y de apropiadas medidas de bienestar y seguridad sociales; ..."

En el concepto de la infracción de las normas transcritas, el demandante señaló que éstas han sido infringidas en forma directa por omisión, porque el profesor ALBERTO SOTOMAYOR goza de estabilidad en su cargo, como profesor de la Universidad de Panamá, ya que el Consejo Académico mediante reunión celebrada el 20 de abril de 1983 acordó adjudicar una cátedra en el área de Contabilidad intermedia o de aplicación, en la categoría de auxiliar, a tiempo completo, correspondiente al concurso realizado por la Facultad de Administración de Empresas y Contabilidad para seleccionar profesores regulares; a raíz del Acuerdo 4-88 dictado el 9 de junio de 1988 por el Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá, al profesor ALBERTO SOTOMAYOR se le cambió arbitrariamente su clasificación de profesor de tiempo completo y titularidad en la cátedra de Contabilidad a profesor de tiempo parcial; por lo que se le desconoció la estabilidad en su cargo y consiguiente inamovilidad en la cátedra sin antes haber mediado instrucción de expediente, irrespetando sus garantías procesales y sin causa prevista en la Ley 11 de 1981 ni en el Estatuto Universitario, como claramente fue señalado por la Sala Tercera en el Fallo de 11 de octubre de 1991.

Adicionalmente, han sido infringidas las citadas normas en la adecuada remuneración de que goza el profesor ALBERTO SOTOMAYOR quien ha cumplido con la Ley Universitaria, el Estatuto y los reglamentos, ajustado en todo tiempo a la cátedra y a las exigencias de enseñanza del país.

A estos cargos se opuso la señora Procuradora de la Administración, analizando conjuntamente los artículos 44 y 48 de la Ley 11 de 1981, y expresando que "el demandante se ha equivocado en sus apreciaciones toda vez que, del contenido del expediente se puede apreciar que al actor se le restituyeron sus derechos subjetivos, de carácter general, al ser nombrado, nuevamente, como profesor de tiempo completo, en el cargo que ocupaba por concurso de mérito, con fundamento en lo que preceptúa el artículo 27 de la Ley 135 de 1943 (foja 34)."

Además, no consta en el expediente que el profesor ALBERTO SOTOMAYOR haya interpuesto algún recurso contra el Acuerdo 4-88 de 9 de junio de 1995 y su acto confirmatorio, el Acuerdo 5-88 de 15 de julio de 1995, dictados por el Consejo Administrativo, cuando dichos acuerdos fueron los que afectaron su nombramiento como profesor de tiempo completo. Cabe indicar que, los efectos de la Sentencia de 11 de octubre de 1991 solamente le son aplicables al demandante en su aspecto general, relacionados con la declaratoria de nulidad de los Acuerdos 4-88 y 5-88 de 9 de junio y 15 de julio de 1988, o sea, la posibilidad de ser contratado a tiempo completo, como estaba contratado antes de los acuerdos anulados, pero sin derecho a recibir los salarios dejados de percibir durante el tiempo que estuvo separado de su cargo, porque la reparación de los derechos subjetivos es una consecuencia de la demanda contra el acto cuya nulidad se pretende, que se resuelve en esa misma demanda y no posteriormente como se pide.

En segundo lugar, la señora Procuradora expresó en el análisis de los artículos 109 y 115 literal b) del Estatuto Universitario, que la aludida estabilidad en el cargo del profesor ALBERTO SOTOMAYOR ha sido respetada porque mediante Resolución N° 93-01-11-01-43-11 fue nombrado profesor a tiempo completo a partir del 1° de enero de 1993.

El recurrente debió interponer en tiempo oportuno el reclamo contra el Acuerdo N° 4-88 de 9 de junio de 1988 y pedir el pago de salarios dejados de percibir. Este acuerdo fue declarado ilegal por la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia fechada 11 de octubre de 1991, lo que demuestra que el recurrente no ejerció sus derechos oportunamente.

Evacuados los trámites legales, los Magistrados de la Sala proceden a resolver la alzada con base en las consideraciones que a continuación expresan.

Según se desprende de la Nota N° 1330-95 de 2 de agosto de 1995 y la Nota N° 95-2126 de 7 de septiembre de 1995, impugnadas en esta demanda, el profesor ALBERTO SOTOMAYOR invocó como fundamento de su solicitud, la sentencia de 11 de octubre de 1991. En esta sentencia se declaran nulos los Acuerdos 4-88 y 5-88 de 1988 en la parte que dice, "Los profesores asistentes e investigadores que estén jubilados, pensionados o sean supernumerarios y que en la actualidad presten servicios en la Universidad solamente podrán ser contratados en atención a la escala salarial horaria que les corresponde, a tiempo parcial, hasta por un máximo de doce horas, de acuerdo con las necesidades de las unidades académicas debidamente comprobadas." Esta sentencia ordena, además, restablecer a los demandantes SUSANA R. DE TORRIJOS, LAURA ARANGO, JOAQUINA P. DE PADILLA, CARLOS GARCÍA, CARNIOLA GARCÉS, LUISA N. DE SANTOS, ELIA DE BIM, ELEUSIPIO HERRERA Y ALEJANDRO HERNÁNDEZ, en sus respectivas categorías académicas de profesores titulares a tiempo completo, obtenidas mediante ascensos autorizados por el Consejo Académico; y ordena que a éstos se les reintegre las sumas deducidas de su sueldo por razón de la ejecución de las medidas aprobadas por el Acuerdo N° 4-88, desde el momento en que éstas se hicieron efectivas hasta la fecha en que fueran restituidos en sus cargos de profesores titulares de tiempo completo, con los incrementos salariales que se les ha reconocido, como compensación por el tiempo que haya sido efectivamente trabajado; a cuyo pago se condena a la Universidad de Panamá (Sentencia de 11 de octubre de 1991, en Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el licenciado Julio Barba, en representación de Susana R. de Torrijos, Laura Arango, Joaquina P. de Padilla, Carniola B. de Garcés, Luisa A. de Santos, Elia V. de Bim, Carlos García, Eleucipio Herrera y Alejandro Hernández contra los Acuerdos 4-88 y 5-88 de 1988, dictados por el Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá).

El profesor ALBERTO SOTOMAYOR solicitó a la Universidad de Panamá el pago o restitución de los salarios dejados de percibir, que fueron suspendidos por el citado Acuerdo 4-88 fechado el 9 de junio de 1988 y confirmado por el 5-88 de 15 de julio del mismo año. Como ya mencionamos, estos acuerdos fueron declarados nulos, y como consecuencia de la precitada sentencia, se ordenó restablecer los derechos subjetivos violados de varios profesores, entre los cuales no está el demandante ALBERTO SOTOMAYOR. Tal como lo afirma la autoridad demandada, es contra dicho Acuerdo que se debió recurrir, y en la misma demanda pedir el restablecimiento de los derechos subjetivos violados, "ya que las notas demandadas se limitan a exponer la situación actual del demandante, que no interpuso recurso alguno ni demanda contra tal acto, y, por tanto, no tiene asidero jurídico para obtener la reparación económica causada por tal acto (foja 28)".

Observa la Sala que el reclamo del profesor ALBERTO SOTOMAYOR fue interpuesto en el año de 1995, cuatro años después de ejecutado el acto, y que mediante la citada Sentencia de 11 de octubre de 1991 no se le establece a él derecho subjetivo alguno.

Al respecto, el artículo 27 de la Ley 135 de 1943 preceptúa lo siguiente:

> "Artículo 27. La revocatoria de un acto, resolución o disposición en vía contencioso-administrativa produce efecto general contra todos; pero el establecimiento del derecho sólo aprovechará a quien hubiere intervenido en el juicio y obtenido esta declaración en su favor". (El subrayado es nuestro).

Finalmente, la Sala desestima el cargo de violación directa por omisión de los artículos 44 y 48 (4) de la Ley 11 de 1981 y 109 y 115 (b) del Estatuto Universitario, supuestamente violados por los actos impugnados. Estos preceptos no son aplicables al caso toda vez que al profesor ALBERTO SOTOMAYOR le fueron aplicadas las medidas aprobadas en el Acuerdo 4-88 de 9 de junio de 1988, expedido por el Consejo Administrativo de la Universidad de Panamá. Cuando este acuerdo fue declarado nulo por ilegal el demandante pasó a ocupar un cargo permanente y de tiempo completo. El demandante no puede ahora, extemporáneamente, pedir la reparación de sus derechos subjetivos violados que debieron ser demandados en un proceso contencioso administrativo de plena jurisdicción como consecuencia de la declaratoria de nulidad de los Acuerdos 4-88 y 5-88 de 1988 antes mencionados.

De consiguiente, la Corte Suprema de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE NO SON ILEGALES, la Nota N° 1330-95 de 2 de agosto de 1995, emitida por el Rector de la Universidad de Panamá y la Nota N° 95-2126 de 7 de septiembre de 1995, emitida por el Vicerrector Académico a. i. de la Universidad de Panamá, y NIEGA las otras declaraciones pedidas.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE COCHEZ-PAGES-ABOGADOS, EN REPRESENTACIÓN DE MIGUEL FILEMÓN PALMA CASTILLO, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 201 DE 4 DE SEPTIEMBRE DE 1996, EMITIDA POR EL MINISTRO DE HACIENDA Y TESORO, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Cochez-Pages-Abogados, actuando en nombre y representación de MIGUEL FILEMÓN PALMA CASTILLO, ha promovido demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 201 de 4 de septiembre de 1996, dictada por el Ministro de Hacienda y Tesoro, y para que se hagan otras declaraciones.

A juicio de la Magistrada Sustanciadora, esta demanda no debe admitirse porque cuando fue presentada había precluido el término de dos meses que la ley establece para su presentación, tal como lo dispone el artículo 27 de la Ley 33 de 1946, que textualmente dice, en lo pertinente:

> "La acción encaminada a obtener una reparación por lesión de derechos subjetivos prescribe, salvo disposición legal en contrario, al cabo de dos meses a partir de la publicación, notificación o ejecución del acto o de realizado el hecho o la operación administrativa que causa la demanda."

Lo anterior es así, porque el demandante se notificó personalmente el 12 de septiembre de 1996, de la Resolución N° 201 de 4 de septiembre de 1996, mediante la cual el Ministro de Hacienda y Tesoro resolvió declarar improcedente la denuncia sobre bien oculto, con la consiguiente advertencia al denunciante de que podía ocurrir ante la jurisdicción contencioso-administrativa e interpuso la demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción ante la Sala el 18 de noviembre de 1996, es decir, después de precluido el término de dos meses que la ley de lo contencioso-administrativa otorga para interponer la acción.

Como la prescripción extingue la acción, la Sala no puede pronunciarse sobre la pretensión.

De consiguiente, la suscrita Magistrada Sustanciadora de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, de lo Contencioso-Administrativo, en Sala Unitaria, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción presentada por la firma Cochez-Pages-Abogados, en representación de MIGUEL FILEMÓN PALMA CASTILLO, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 201 de 4 de septiembre de 1996, dictada por el Ministro de Hacienda y Tesoro y para que se hagan otras declaraciones.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GENARINO ROSAS, EN REPRESENTACIÓN DE ALBERTO JAVIER APONTE BARSALLO, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO DE PERSONAL N° 738 DE 21 DE DICIEMBRE DE 1994, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTINUEVE (29) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Genarino Rosas, actuando en nombre y representación de **ALBERTO JAVIER APONTE BARSALLO**, ha promovido demanda contencioso administrativa de plena jurisdicción para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto de Personal N° 738 de 21 de diciembre de 1994, emitido por el Órgano Ejecutivo por conducto del Ministerio de Educación.

La parte actora también solicita que se ordene al Ministerio de Educación el reintegro del señor **ALBERTO JAVIER APONTE BARSALLO**, y se le pague los salarios caídos desde diciembre de 1994 hasta la fecha de su restitución. (Fs. 35).

Mediante el Decreto de Personal N° 738 de 21 de diciembre de 1994, se declaró sin efectos el Decreto N° 818 de 31 de diciembre de 1990, por el cual se nombró al señor **ALBERTO JAVIER APONTE BARSALLO**, con cédula de identidad personal número 9-90-445, como Administrador II, en la posición 86095 en la Dirección Provincial de Educación de Veraguas. (Fs. 3).

Estando el presente negocio para resolver, los Magistrados de la Sala consideran necesario dictar auto para mejor proveer, de conformidad con el artículo 62 de la Ley 135 de 1943, a fin de comprobar que cargos ha desempeñado el señor ALBERTO JAVIER APONTE BARSALLO en el Ministerio de Educación, mediante qué clase de nombramiento (permanente o no permanente), el tiempo en que ha desempeñado cada uno de esos cargos, y si fue nombrado mediante el Decreto N° 740 de 21 de diciembre de 1994 como docente B-1 en la Escuela José de la C. Mérida.

Con este fin, se dispone solicitar a la Directora de Personal del Ministerio de Educación la siguiente información:

1. La Hoja de Servicio del profesor **ALBERTO JAVIER APONTE BARSALLO**, en el Ministerio de Educación, en la cual deberá constar los nombramientos hechos a su favor, la clase de estos nombramientos, los cargos desempeñados y el tiempo en que ejerció cada cargo;

2. Certificación en la que conste: a) Si el profesor **ALBERTO JAVIER APONTE BARSALLO**, con cédula de identidad personal número 9-90-445, fue seleccionado por concurso para alguno de los cargos que desempeñó como funcionario del Ramo de Educación, durante su tiempo de servicio en esa entidad; y en caso afirmativo para qué cargos;

b) Si el señor **ALBERTO JAVIER APONTE BARSALLO** fue nombrado mediante el Decreto N° 740 de 21 de diciembre de 1994, como Docente B-1 en la Escuela José de la C. Mérida, y que de ser afirmativa la respuesta nos informe si este decreto está vigente y nos envíe copia autenticada del decreto.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA que por Secretaria se requiera a la Directora de Personal del Ministerio

de Educación, que en el término de cinco (5) días nos envíe la siguiente documentación:

1. La Hoja de Servicio del profesor ALBERTO JAVIER APONTE BARSALLO, en el Ministerio de Educación, en la cual deberá constar los nombramientos hechos a su favor, la clase de estos nombramientos, los cargos desempeñados y el tiempo en que ejerció cada cargo; y

2. Certificación en la que conste: a) Si el profesor ALBERTO JAVIER APONTE BARSALLO, con cédula de identidad personal número 9-90-445, fue seleccionado por concurso para alguno de los cargos que desempeñó como funcionario del Ramo de Educación, durante su tiempo de servicio en esa entidad; y en caso afirmativo para qué cargos;

b) Si el señor ALBERTO JAVIER APONTE BARSALLO fue nombrado mediante el Decreto N° 740 de 21 de diciembre de 1994, como Docente B-1 en la Escuela José de la C. Mérida, y de ser afirmativa la respuesta nos informe si el nombramiento hecho mediante el citado Decreto N° 740 de 21 de diciembre de 1994 está vigente;

3. Nos remita copia autenticada del Decreto N° 740 de 21 de diciembre de 1994.

Notifíquese y Comuníquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ERIC ALBERTO YEE PERALTA, EN REPRESENTACIÓN DE LUIS ERNESTO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° D. N. 8-5-0943 DE 18 DE MAYO DE 1993, DICTADA POR LA DIRECCIÓN NACIONAL DE REFORMA AGRARIA DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense **Rosas y Rosas**, apoderados especiales de la señora **BENITA NAVARRO de GUTIÉRREZ**, ha presentado Advertencia de Inconstitucionalidad del artículo 1670 del Código Civil, dado que, en su opinión, viola los ordinales 2 y 3 del artículo 255 de la Constitución Nacional.

Dicha advertencia ha sido formulada dentro de la demanda Contencioso Administrativa de Nulidad promovida por el Licenciado **Eric Alberto Yee Peralta**, en representación de **LUIS ERNESTO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ**, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° D. N. 8-5-0943 de 18 de mayo de 1993, dictada por la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, en el cual la señora **BENITA NAVARRO de GUTIÉRREZ** es parte coadyuvante.

Quienes suscriben, una vez analizada la acción propuesta, consideran que la misma cumple con los requisitos formales exigidos por la ley, y por tanto, de conformidad con el artículo 2549 del Código Judicial, disponen que sea remitida al Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

En consecuencia, los Magistrados de la Sala Tercera (Contencioso Administrativo), REMITEN al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la Advertencia de Inconstitucionalidad formulada por la firma forense Rosas y Rosas, en representación de BENITA NAVARRO de GUTIÉRREZ, dentro de la Demanda Contencioso

Administrativa de Nulidad, interpuesta por el Licenciado Eric Alberto Yee Peralta, en representación de LUIS ERNESTO DOMÍNGUEZ GONZÁLEZ, para que se declare nula por ilegal, la Resolución N° D. N. 8-5-0943 de 18 de mayo de 1993, dictada por la Dirección Nacional de Reforma Agraria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GILBERTO RYALL EN REPRESENTACIÓN DE JOSÉ ANTONIO MARÍN ORTEGA, PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL EL ACUERDO N° 4 DE 23 DE ENERO DE 1975, DICTADO POR EL CONSEJO MUNICIPAL DE CHORRERA. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Gilberto Ryall**, actuando en representación de **JOSÉ ANTONIO MARÍN ORTEGA**, ha interpuesto Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad para que se declare nulo por ilegal el Acuerdo N° 4 de 23 de enero de 1975, dictado por el Consejo Municipal de Chorrera.

La señora Procuradora de la Administración mediante su Vista Fiscal N° 276 de 25 de julio de 1996, que reposa a folios 18-22 del expediente, al notificarse de la Providencia calendada 27 de mayo de 1996 por medio de la cual el Magistrado Sustanciador decidió **ADMITIR** la presente demanda, presentó y sustentó formal recurso de apelación contra la misma, argumentando básicamente que era improcedente toda vez que el señor **JOSÉ ANTONIO MARÍN** ocupa unas hectáreas del terreno que fue declarado, por el Acuerdo Municipal N° 4 de 25 de enero de 1975, objeto de utilidad pública, y que por tanto lo que se persigue es el resarcimiento de un derecho subjetivo lesionado y no la restauración del ordenamiento jurídico objetivo, que es la finalidad de las acciones de nulidad.

La Procuradora de la Administración enfatizó:

> "En consecuencia, consideramos que no debe ser admitida esta demanda, ya que en su oportunidad el señor José Antonio Marín debió emplear los recursos legales que en la vía gubernativa eran posibles, toda vez que el Acuerdo Municipal en mención afecta directamente al señor Marín en relación con la porción de tierra que este ocupaba; de manera tal que en todo caso se podría lesionar un interés jurídico particular, personal o subjetivo, cuya restauración únicamente era viable mediante un proceso Contencioso Administrativo de Plena Jurisdicción."

Por otro lado el opositor hizo valer sus objeciones al Recurso de Apelación, promovido y sustentado por la Procuradora de la Administración, en los siguientes términos:

> "Al respecto queremos señalar que con el presente proceso no estamos reclamando resarcimiento para nuestro representado, en el libelo de la demanda hemos citado las normas violadas buscando así restauración del ordenamiento jurídico objetivo. Mediante Fallo del 20 de septiembre de 1995 la Sala Tercera con la ponencia del Magistrado Edgardo Molino Mola en la demanda de indemnización por daños y perjuicios interpuesta por JOSÉ ANTONIO MARÍN contra el Municipio de la Chorrera, señala que antes de reclamar un derecho

subjetivo mi representado tenía que demandar previamente la ilegalidad del Acuerdo Municipal, debido a esa indicación se procedió a formular la acción que nos ocupa".

Encontrándose el proceso en estado de resolver, el resto de los Magistrados que integran este Tribunal proceden a externar las siguientes consideraciones:

Efectivamente el día 20 de septiembre de 1995, esta misma Sala dictó una resolución con relación a la demanda de indemnización por daños y perjuicios, interpuesta por el Lcdo. Gilberto Ryall Z., en representación de **JOSÉ ANTONIO MARÍN ORTEGA**, contra el MUNICIPIO DE LA CHORRERA, por la expedición del ACUERDO N° 4 de 23 de enero de 1975. Mediante dicho acto el Honorable Consejo Municipal de la Chorrera declaró como objeto de utilidad pública un lote de terreno municipal con una superficie de ocho (8) hectáreas, como obra de asistencia social de las cuales **JOSÉ ANTONIO MARÍN** era arrendatario desde 1969, por razón del Contrato de Arrendamiento N° 123 de noviembre de 1969, que celebrara con dicho Municipio.

En dicha ocasión se le indicó que era necesario, previo a solicitar dicha indemnización, haber obtenido un pronunciamiento de este Tribunal acerca de la ilegalidad de dicho acuerdo, a través de una acción contencioso administrativa de nulidad.

En tales circunstancias, estimó el Magistrado Sustanciador que el recurrente no había utilizado la vía idónea a los efectos de obtener un resarcimiento por razón de los daños y perjuicios que argumentó le fueron ocasionados con la expedición del Acuerdo Municipal N° 4 de 23 de enero de 1973, por lo que lo pertinente fue negarle curso legal a dicha demanda.

Ahora el demandante procede nuevamente, pero, por la vía contenciosa de nulidad, dado que así se lo indicó este Tribunal en aquella oportunidad.

El artículo 98 del Código Judicial, señala en qué casos es viable la reclamación de una indemnización ante esta Sala, y son los siguientes: **numeral 8**, de las indemnizaciones de que deban responder personalmente los funcionarios del Estado, y de las restantes entidades públicas, por razón de daños o perjuicios causados por actos que esta misma Sala reforme o anule; **numeral 9** de las indemnizaciones por razón de la responsabilidad del Estado y de las restantes entidades públicas en virtud de daños o perjuicios que originen las infracciones en que incurran en el ejercicio de sus funciones o con pretexto de ejercerla cualquier funcionario o entidad que ha proferido el acto administrativo impugnado; y **numeral 10**, de las indemnizaciones de que sean responsables directos el Estado y las restantes entidades públicas, por el mal funcionamiento de los servicios públicos a ellos adscritos.

Pues bien, para que esta Superioridad pudiera proceder a condenar al Municipio de la Chorrera a la **indemnización por los daños y perjuicios** que supuestamente le fueron ocasionados, al señor **JOSÉ ANTONIO MARÍN ORTEGA**, dado que dicha pretensión se enmarca dentro de lo preceptuado en el ordinal 9 del referido precepto, que dice que esta Sala resolverá las reclamaciones que guarden relación con las indemnizaciones por razón de la **responsabilidad del Estado**, **en virtud de daños o perjuicios originados al proferir el acto administrativo impugnado**, es necesario, reiteramos un pronunciamiento de la Sala con respecto a la ilegalidad de dicho acuerdo, mediante una acción contencioso administrativa de nulidad.

Cabe anotar en este punto, que a partir de la emisión de la Sentencia de 19 de enero de 1995, la responsabilidad del Estado en el supuesto contemplado en el **numeral 9** del artículo 98 del Código Judicial, es directa y no subsidiaria. (Confróntese Sentencia de 19 de enero de 1995, emitida por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, al pronunciarse sobre la consulta de inconstitucionalidad de los artículos 52, 98 numeral 8, y la palabra "subsidiaria" del numeral 9, y 200 del Código Judicial, elevada ante esa Corporación por la Sala Tercera, dentro de la demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el Licenciado Ángel Padilla Béliz, en representación de Cecilia López de Martín).

Por otro lado, con relación a la denominación de la demanda, como único defecto encontrado para valorar su admisión o inadmisión, es preciso indicar que en atención a lo preceptuado en el texto de los artículos 469 y 471 del Código Judicial, que estatuyen que los Tribunales le imprimirán a los negocios el trámite correspondiente y adecuado para cada caso, cuando la identificación o denominación del recurso o escrito, o lo hechos, lo señalado o la intención sea clara (ver sentencia de 24 de marzo de 1995, Sala de lo Contencioso Administrativo), hay que tener presente que esto puede darse en los procesos contenciosos siempre y cuando en el fondo se tratara de una demanda contenciosa de nulidad y hubiera sido denominada de plena jurisdicción, pero no así si en realidad la acción estuviese encaminada a obtener una reparación por lesión de derechos subjetivos, es decir que se tratara de una demanda contenciosa administrativa de plena jurisdicción, y hubiera sido mal denominada, ya que aquí sí es indispensable, para poder admitirla, tomar en cuenta lo establecido en el artículo 42a de la Ley 135 de 1943 y el artículo 26 de la Ley 33 de 1946 con relación al término de prescripción, que es al cabo de dos meses a partir de la publicación, notificación o ejecución del acto o de realizado el hecho o la operación administrativa que causa la demanda. Es por ello, que de no haber sido correcta la denominación de la presente vía utilizada por **JOSÉ ANTONIO MARÍN ORTEGA**, es decir la contenciosa administrativa de nulidad, mal podría esta Superioridad proceder a la admisión de la demanda, por lo que hubiera tenido cabida la solicitud de la Procuradora de la Administración, en cuanto a su inadmisión.

Pues bien, contrario hubiera sido que el demandante la denominara por error Acción de Plena Jurisdicción tratándose de una Acción Popular de Nulidad, por cuanto dicho defecto no hubiera sido motivo suficiente para denegar la admisión de la demanda, en virtud que el texto de los artículos 469 y 471 del Código Judicial. Sin embargo, en el presente caso, la acción no ha sido mal denominada, y lo que se alega es la violación del artículo 338 del Código Civil, que a la letra dice "que nadie podrá ser privado de su propiedad sino por autoridad competente por graves motivos de utilidad pública, previa siempre la correspondiente indemnización". Por tanto, la demanda está bien enmarcada y ha sido correctamente denominada, pues corresponde a una acción contenciosa de nulidad, con cuya sentencia, de ser favorable, se podrá después solicitar la correspondiente indemnización por daños y perjuicios.

En consecuencia, el resto de los Magistrados que integran la Sala Tercera, Contencioso Administrativa, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMAN la providencia de 27 de mayo de 1996, mediante la cual se ADMITIÓ la Demanda Contencioso Administrativa de Nulidad interpuesta por el Licdo. Gilberto Ryall en representación de JOSÉ ANTONIO MARÍN ORTEGA, para que se declare nulo por ilegal el Acuerdo N° 4 de 23 de enero de 1975, dictado por el Consejo Municipal de la Chorrera.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE GUERRA Y GUERRA, EN REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD UTRACOLPA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 31 Y N° 31-1, AMBAS DEL 20 D SE ABRIL DE 1995, EXPEDIDAS POR EL DIRECTOR NACIONAL DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE TERRESTRE DEL MINISTERIO DE GOBIERNO Y JUSTICIA. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Guerra y Guerra, actuando en nombre y representación de la sociedad UTRACOLPA, S. A., interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, demanda contencioso-administrativa de nulidad contra las Resoluciones N° 31 y 31-1, ambas del 20 de abril de 1995, expedidas por la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre del Ministerio de Gobierno y Justicia.

En la parte final de su libelo, la apoderada judicial de la demandante pidió a la Sala la suspensión provisional de los efectos de los actos acusados, por considerar que las infracciones a las disposiciones que se citan como violadas son claras, manifiestas y notorias. Agregó, además, que "En días pasados los medios de comunicación social, máxime las televisoras, divulgaron en amplia cobertura, situaciones de confrontación verbal y hasta físicas generadas y de parte de EXPRESO PANAMÁ COLON CENTROAMÉRICA, S. A. hacia nuestra poderhabiente. Se afectaron, como consecuencia de dichas acciones, marginadas por la ley y la razón, los usuarios del transporte Panamá-Colón y viceversa. Las situaciones de constante tensión, provocaciones y la tirantez se siguen produciendo. Por estas razones, nuestra patrocinada acude a la vía jurisdiccional, a fin de que, creyendo en la fuerza y la razón del derecho, mediante la suspensión del acto, se genere certidumbre jurídica para el desenvolvimiento de la actividad transportista que presta." (Fs. 30-31).

De acuerdo con el artículo 73 de la Ley N° 135 de 1943, la Sala puede suspender los efectos del acto, resolución o disposición acusada si, a su juicio, ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave.

Según los cargos de ilegalidad formulados en la demanda, la parte actora considera que los actos impugnados violaron varios preceptos de la Ley N° 14 del 26 de mayo de 1993 y del Decreto Ejecutivo N° 186 del 28 de junio de 1993 porque, a través de ellos, la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre otorgó a la sociedad EXPRESO PANAMÁ-COLÓN CENTROAMÉRICA, S. A. la concesión de la ruta Panamá-Colón y viceversa, sin cumplir con el trámite señalado en tales excertas legales y, desconociendo además, los derechos adquiridos por UTRACOLPA, S. A., sociedad en la que estaban integrados y representados los peticionarios que generaron las resoluciones impugnadas.

A juicio de los Magistrados que integran la Sala Tercera, la medida cautelar solicitada no procede porque, **en esta incipiente etapa procesal**, no existe en el expediente prueba de los hechos en los cuales se sustenta los cargos de ilegalidad que la apoderada judicial de la actora alega. Es decir, que en autos no se ha probado que la sociedad UTRACOLPA, S. A. era la única persona jurídica que prestaba el servicio de transporte en la ruta Panamá-Colón y viceversa, para la fecha en que fueron expedidas las resoluciones impugnadas y, por tanto, la única persona con derecho a la concesión de esta ruta, según lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley N° 14 de 1993. Sobretodo, cuando en el punto primero de la parte resolutiva de ambas resoluciones se indica que esta peticionaria "**han (sic) venido prestando el servicio hasta la fecha**" en dicha ruta y, en el punto cuarto, el Ente Regulador "fija el mismo itinerario, horario y frecuencias de salidas **que hasta la fecha se han utilizado en la prestación del servicio en la ruta Concesionada ...**"

Por las razones indicadas, no es posible determinar claramente si el Ente Regulador cumplió o no con el procedimiento establecido en la Ley N° 14 de 1993 y disposiciones reglamentarias, para el otorgamiento de la referida concesión a la sociedad EXPRESO PANAMÁ-COLÓN CENTROAMÉRICA, S. A.

Cabe agregar, asimismo, que la supuesta extemporaneidad de la solicitud presentada por esta sociedad para la concesión de la ruta de transporte Panamá-Colón y viceversa, alegada por la demandante, tampoco aparece probada en autos.

Por los motivos expuestos, la Sala estima que la medida cautelar solicitada debe negarse y así procede a declararlo.

De consiguiente, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA la

suspensión provisional de los efectos de las Resoluciones N° 31 y N° 31-1, ambas del 20 de abril de 1995, expedidas por la Dirección Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre del Ministerio de Gobierno y Justicia.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL DOCTOR LUIS DE LEÓN ARIAS, EN REPRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN DE MUJERES CONTADORES DE PANAMÁ, ASOCIACIÓN DE CONTADORES PÚBLICOS DE PANAMÁ Y EL COLEGIO DE CONTADORES PÚBLICOS AUTORIZADOS DE PANAMÁ, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 11 DE 28 DE MARZO DE 1994, EMITIDA POR EL MINISTRO DE COMERCIO E INDUSTRIAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SIETE (7) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El doctor Luis De León Arias, actuando en representación de la Asociación de Mujeres Contadores de Panamá, Asociación de Contadores Públicos Autorizados de Panamá y el Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Panamá, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de nulidad contra la Resolución N° 11 de 28 de marzo de 1994, emitida por el Ministro de Comercio e Industrias.

Al encontrarse el negocio en estado de resolver, la Sala con fundamento en el artículo 62 de la Ley N° 135 de 1943, estima necesario a fin de que sea incorporado al expediente, que la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Panamá, expida un informe que indique si a la fecha se ha expedido el resuelto donde se aprueban los planes y programas de las carreras que oferta la Universidad Latinoamericana de Ciencias y Tecnología, como también de los títulos que ésta otorga, específicamente en el grado de Licenciatura en Contaduría Pública.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, SOLICITA a la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Panamá, que le remita a esta Sala a la mayor brevedad posible la información requerida en el párrafo anterior.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JOSÉ E. EHRMAN, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL LA RESOLUCIÓN DE GABINETE N° 140 DE 11 DE JULIO DE 1996, DICTADA POR EL CONSEJO DE GABINETE. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, SIETE (7) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **José E. Ehrman**, en representación propia, ha presentado

demanda Contencioso Administrativa de Nulidad, para que se declare nula por ilegal, la Resolución de Gabinete N° 140 de 11 de julio de 1996, dictada por el Consejo de Gabinete.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda a fin de determinar si reúne los requisitos mínimos para su admisión.

Si bien es cierto del estudio del expediente se colige la verdadera pretensión del demandante, debe señalar este Tribunal, que también se infiere una vez más, ciertas deficiencias en el libelo, el cual fue corregido, parcialmente, en virtud de la orden dada mediante auto de 4 de octubre de 1996.

Dado que el presente negocio trata una acción de nulidad que, según la Ley, puede ejercitarse en cualquier tiempo, es decir es imprescriptible, procede el Magistrado sustanciador a indicarle al demandante, ciertas faltas, con la finalidad de que las mismas sean corregidas y pueda presentar el libelo nuevamente.

Así las cosas el actor ha incumplido el último numeral del artículo 43 de la ley 135 de 1943 referente a la **expresión de las disposiciones que se estimen violadas y el concepto de la violación.**

Esta omisión impediría a este Tribunal conocer del cargo impetrado, puesto que, por una parte la Ley 33 de 1946 en su artículo 28 numeral 4° es definitivo al señalar que toda demanda debe contener, no sólo la transcripción literal de la disposición supuestamente infringida, sino también el concepto de la violación, y sobre este punto, la Sala Tercera ha sido categórica y reiterativa, señalando que la ausencia de tal descripción produce la desestimación del cargo de ilegalidad formulado, al verse imposibilitada para apreciar los motivos que ocasionan la infracción al ordenamiento legal.

En efecto, ha sido doctrina constante de la Corte dictaminar que para poder apreciar el fondo de la violación alegada, el demandante **debe explícitamente describir la infracción**, y explicar de qué manera el ente administrativo ha violado la norma legal. Al respecto son consultables las sentencias de 17 de julio de 1992, 23 de marzo de 1995, 24 de enero de 1995 y 2 de mayo de 1990.

Así, el recurrente debe formular su cargo señalando a cuál de los motivos de ilegalidad se ajusta, de conformidad con el artículo 16 de la ley 33 de 1946. En este negocio **el recurrente indica que se ha cometido una infracción literal**, sin embargo no especifica en cuál de sus modalidades, es decir, no señala si se trata de **violación directa por comisión omisión, o falta de aplicación; interpretación errónea o indebida aplicación.**

La violación directa por comisión se produce cuando el acto impugnado dispone alguna cosa contraria a lo establecido en el ordenamiento legal; al aplicarse la ley se desconoce un derecho, consagrado en la norma aplicada. Hay violación directa por omisión o falta de aplicación, cuando se deja de aplicar una norma legal que decidía o resolvía una situación jurídica planteada. Por otro lado, la interpretación errónea, se suscita cuando el funcionario al aplicar la norma, le da un sentido distinto o diferente al establecido por la disposición, y la indebida aplicación de la ley se presenta cuando un texto claro se aplica a un caso no regulado por él, es decir, se aplica una norma que no es pertinente al caso.

Pues bien en caso de no precisar uno de estos conceptos, la demanda no prospera puesto que no podrá estudiarse el fondo del negocio, debido a que el libelo está incompleto.

Los requisitos que señala el artículo 28 de la ley 33 de 1946, son de obligatorio cumplimiento y de gran relevancia para decidir la admisión de toda demanda contenciosa administrativa, por lo que el desconocimiento de uno sólo de ellos, en este caso el concepto de la violación, impide darle curso a este tipo de demanda.

Creemos oportuno enumerarle al demandante los renglones que debe contener el escrito de demanda con las denominaciones y orden correcto en que debe formularse:

1. Dirigida al Magistrado Presidente de la Sala Tercera,de la Corte Suprema de Justicia.

2. Designación de las Partes y su Representantes:

A) Parte Demandante y
B) Parte Demandada.

3. Lo que se Demanda (aquí se enuncian todas las peticiones de lo que se desee la Sala declare nulo por ilegal).

4. Hechos u Omisiones Fundamentales de la Acción.

5. Expresión de las Disposiciones que se estiman violadas y el concepto de la violación. En el caso que nos ocupa, se estima conculcado el artículo 100 del Código Fiscal, entoncesdebe transcribirlo y explicar con relación a éste, el concepto en que el mismo fue violado. De igual forma, se siguen transcribiendo todas aquellas otras disposiciones que también se consideren quebrantadas.

6. Pruebas
7. Derecho.

Por tanto, el actor debe presentar la demanda en el orden indicado y con la denominación correcta, tal como se lo hemos señalado de conformidad con lo preceptuado del artículo 43 de la ley 135 de 1943, modificado por la Ley 33 de 1946.

Dado que la demanda no ha sido debidamente interpuesta, lo precedente es no admitirla de conformidad con los preceptos mencionados.

Por todo lo anteriormente expuesto, el Magistrado Sustanciador, en representación de la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la demanda Contencioso Administrativa de Nulidad interpuesta por el licenciado JOSÉ E. EHRMAN en su propio nombre y ORDENA devolverla al interesado para que la CORRIJA en base a los defectos señalados.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE NULIDAD INTERPUESTA POR LA FIRMA FORENSE BARRANCOS, CLARAMUNT, HENRIQUEZ Y OLIVARES, C. P. C., EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE RESIDENTES DE URBANIZACIÓN LA LOMA, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULOS POR ILEGALES, LA RESOLUCIÓN N° 718/92 DEL 2 DE MARZO DE 1993 Y EL PERMISO DE CONSTRUCCIÓN N° 273 DEL 6 DE ABRIL DE 1994, Y PARA QUE SE HAGA OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, SIETE (7) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma forense Barrancos, Claramunt, Henriquez y Olivares, S. P. C., actuando en nombre y representación de la sociedad RESIDENTES DE URBANIZACIÓN LA LOMA, S. A., interpuso ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia acción contenciosa-administrativa de nulidad para que se declare nulos, por

ilegales, la Resolución N° 718/92, del 2 de marzo de 1993 y el Permiso de Construcción N° 273 del 6 de abril de 1994, ambos expedidos por la Dirección de Obras y Construcciones Municipales del Distrito de Panamá y para que se haga otras declaraciones.

I. LOS ACTOS ACUSADOS

En la demanda se acusa de ilegal la Resolución N° 718/92, del 2 de marzo de 1993, mediante la cual la Dirección de Obras y Construcciones Municipales del Distrito de Panamá aprobó, con condiciones, el Anteproyecto para la construcción de un edificio de 22 apartamentos, ubicado en el Distrito de Panamá, Corregimiento de Pueblo Nuevo, Urbanización La Loma, Calle 1ª, Lote N° 26, a nombre de Corporación Therado, S. A.

También se acusa de ilegal el Permiso de Construcción N° 273 del 6 de abril de 1994, a través de cual dicha entidad municipal concedió permiso a Ingeniería, Consultores y Promociones, S. A. para la construcción del referido edificio, en terreno de propiedad de Inversiones Royme, S. A., según los Planos P. O. N° 226-93, Anteproyecto 718/92.

II. LAS NORMAS VIOLADAS Y EL CONCEPTO DE LA INFRACCIÓN

En la demanda se cita como violados los artículos 4, 5 (aparte 3), 12 y 13 del Acuerdo Municipal N° 21 del 22 de febrero de 1994; el artículo 2° de la Resolución N° 9-86 del 28 de julio de 1986, expedida por el Ministerio de Vivienda; el artículo 4° de la Resolución N° 41-92 del 18 de mayo de 1992, así como el Anexo 2 de dicha Resolución, también dictada por el Ministerio de Vivienda y los artículo 5 y 15 del Código Civil.

A continuación, se expondrá, en el orden en que fueron mencionados, el contenido de cada una de estas normas y el concepto en que se alega han sido violadas.

Artículo 4 del Acuerdo Municipal N° 21 del 22 de febrero de 1994:

"Artículo 4: Requisitos para la revisión de Anteproyectos:
...

3. INFORMACIÓN BÁSICA: Información básica que es obligatoria incluir en el Anteproyecto:

3.01. Finca, Tomo, Folio, o su equivalente, y número de lote.

3.02. ...

3.03. Dirección completa (Corregimiento, Urbanización, Avenida o Calle).

3.04. Cualquier documento relativo a la existencia y propiedad del inmueble ...

En caso de que el propietario sea una Sociedad, debe señalarse el Representante Legal.

...

3.08. Firma del propietario y número de cédula de identidad personal. En caso de persona jurídica, deberá firmar el Representante Legal."

La apoderada judicial de la demandante expresa que el acto acusado violó el precepto transcrito ya que la finca sobre la cual se pretendía construir el inmueble está inscrita en el Registro Público con un número de folio y tomo distinto al señalado por el solicitante, además, la ubicación que se da de dicha finca en el anteproyecto no se compadece con la ubicación física-geográfica indicada por Corporación Therado, S. A. Agrega, que para el 2 de marzo de 1993,

la propietaria de la finca 37.851 era Bienes Raíces Suizas, S. A. y no Corporación Therado, S. A.

El artículo 5 del Acuerdo Municipal N° 21 de 1994, expresa:

"Artículo 5: ...
3.INFORMACIÓN GENERAL BÁSICA:
...

3.11. Incluir cuadro membretado o pie descriptivo, con la siguiente información en tinta negra:
3.11.06. Espacio para la firma del propietario o Representante Legal de la sociedad propietaria y número de cédula.
...
3.11.13. Firma del propietario y número de cédula."

La demandante considera que la norma anterior se violó en el concepto de infracción directa por comisión, ya que la persona que aparece como propietaria de la finca 37.851 en los planos del edificio Peach Tree no es Womac Trading Corporation, S. A., que figura en el Registro Público como tal, sino Inversiones Royme, S. A., cuyo representante legal tampoco firmó estos documentos.

El artículo 12 del Acuerdo Municipal N° 21 de 1994 preceptúa:

"Artículo 12: Los Permisos de Construcción se expedirán previo el cumplimiento de los procedimientos y requisitos establecidos en los artículos anteriores referentes a los planos. El Permiso de Construcción autoriza al propietario de un predio y al constructor responsable para realizar obras de construcción."

En opinión de la actora, el Permiso de Construcción N° 273 de 1992 violó el artículo 12 del Acuerdo Municipal N° 21 de 1994 por las siguientes razones: a) Se expide a nombre de Ingeniería, Consultoría y Promociones, S. A., a pesar de que esta sociedad no figura como responsable de la obra, ni en el expediente relativo a dicho permiso se tiene información que faculte a esta empresa para obtener el Permiso de Construcción; b) Se da por sentado que Inversiones Royme, S. A. es la propietaria de la obra cuando la realidad nos demuestra que esta sociedad jamás ha sido propietario de dicha finca; c) El Permiso N° 273 se afirma es derivación del Anteproyecto 718/92, a pesar de que en el mismo se hace referencia a la Finca N° 37.851 y en el Anteproyecto se alude a la Finca N° 57.851, las cuales pertenecen a distintos propietarios.

El artículo 13 del Acuerdo Municipal mencionado es del tenor siguiente:

"Artículo 13: Para obtener el Permiso de Construcción ... el profesional idóneo o empresa constructora deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Presentar solicitud en papel sellado dirigida al Director de Obras y Construcciones Municipales, en donde conste: descripción de la obras, la ubicación del lote, registro de la propiedad (finca, tomo, folio o su equivalente), nombre del dueño de la construcción y del propietario del terreno en que se ha de edificar y valor aproximado de la obra. Esta solicitud deberá estar refrendada y sellada por el responsable técnico de la obra ..."

A juicio de la apoderada judicial de la demandante, la norma transcrita se violó porque el Permiso de Construcción N° 273 se expidió a pesar de que la petición no la hizo el propietario de la obra, sino Inversiones Royme, S. A., quien no tenía autorización del propietario. Además, no se aportó el certificado del Registro Público para acreditar quién era la propietaria de la Finca 37.851 y se confunde en un solo concepto al propietario de la construcción con el propietario del terreno, cuando en realidad Womac Trading Corporation, S. A. es la propietaria de la finca.

El artículo 2° de la Resolución N° 9-86, expedida por el Ministerio de

Vivienda dice textualmente:

> "PRIMERO: Modificar las dimensiones de estacionamientos vigentes de acuerdo a la siguiente clasificación:
>
> Automóviles pequeños: 2.20 mt. x 4.00 mt
> Automóviles grandes: 2.50 mt. x 5.00 mt
>
> SEGUNDO: Para efectos de la aprobación de proyectos por parte de las instituciones pertinentes, se permitirá hasta un 50% de estacionamientos para automóviles pequeños, de acuerdo a las dimensiones indicadas en los anexos A y B.
>
> PARÁGRAFO: La utilización de estacionamientos para automóviles grandes y pequeños, tendrá aplicación únicamente en estacionamientos ubicados dentro de una propiedad y cuyo uso pueda ser controlado por sus propietarios o administradores. Para los casos de propiedad horizontal, los estacionamientos no podrán ser asignados en forma individual: por tanto, serán comunes a todos los copropietarios. Para calles marginales, sólo se aplicará la norma para automóviles grandes. Las dimensiones establecidas en esta Resolución han sido estudiadas como normas mínimas para automóviles que estacionan en retroceso."

Según expresa la apoderada judicial de la demandante, la norma citada se violó directamente por comisión, toda vez que el edificio Peach Tree no cumplió con el porcentaje del 50% de estacionamientos para autos grandes y pequeños y además, porque los mismos no son funcionales.

Por su parte, el artículo 4° de la Resolución N° 41-92 del Ministerio de Vivienda establece:

> "Artículo Cuarto:
> De los Retiros de las Líneas de Propiedad:
> Cuando los "retiros propuestos", frontales, laterales o posteriores en las siguientes y respectivas plantas sean mayores a los exigidos por la reglamentación vigente, de la siguiente manera:
>
> R.M.1 Cuatro Primeras plantas altas
> R.M.2 Cinco " " "
> R.M.3 Seis " " "
>
> 1- Bonificación: a) En caso de no habilitarse, se bonificará tres (3) veces la densidad que podría obtenerse de la superficie que se produzca entre los "retiros exigidos" por la norma de zonificación y el "retiro propuesto" en el proyecto de edificación."

La actora manifiesta que el artículo 4° de la Resolución N° 41-92, del 18 de mayo de 1992, fue violado con la expedición, por parte de la Dirección de Obras y Construcciones Municipales del Distrito de Panamá, del sello de bonificación colocado en el Plano N° PO226-93, ya que ni en dicho plano ni en la práctica, el constructor o promotor ha dejado espacio libre o retiros para dedicarlos al recreo comunal. Por el contrario, toda el área que se había sugerido como recreativa fue diseñada posteriormente como estacionamientos y en ese sentido se ha llevado a la praxis.

La parte pertinente del Anexo N° 2 de la Resolución 41-92 del Ministerio de Vivienda es del contenido siguiente:

> "ANEXO N° 2
> "Procedimiento para la aprobación de proyectos residenciales que se acojan al Sistema de Bonificación, en el Distrito de Panamá.
>
> A- De la presentación de la Solicitud:
>
> 1. El profesional presentará una solicitud por escrito en papel

> Sellado y con copia en papel simple, dirigida al Ingeniero Municipal, donde explicará el proyecto que desea se acoja al Sistema de Bonificación.
>
> B- De la Revisión y Respuesta a la Solicitud:
> ...
> 2. De ajustarse el ante-proyecto a las condiciones establecidas por la norma de Bonificación, la Dirección de Obras y Construcciones Municipales, emitirá una Resolución aceptando o negando la solicitud, donde se describirán los aumentos de densidad concedidos, las condiciones a que deberá sujetarse el proyecto y cualesquiera otras observaciones necesarias de haber sido aprobada o negada la solicitud. Copia de estas resoluciones serán enviadas periódicamente por la Dirección de Obras y Construcciones Municipales a la Dirección General de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda."

La apoderada judicial de los RESIDENTES DE URBANIZACIÓN LA LOMA, S. A. expresa que esta norma fue violada porque ni Inversiones Royme, S. A., como presunto propietario, ni ninguna otra persona solicitó a la Dirección de Obras y Construcciones Municipales del Distrito de Panamá, ni mucho menos en papel sellado, el beneficio de la bonificación. Además, la referida entidad municipal nunca emitió una resolución para conceder la bonificación, sino que se limitó a improntar (sic) el plano presentado con el sello de bonificación y no remitió a la Dirección General de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, copia autenticada de la resolución en la que concedió la bonificación al edificio Peach Tree.

El artículo 5 del Código Civil preceptúa lo siguiente:

> "Art. 5. Los actos que prohíbe la ley son nulos y de ningún valor, salvo en cuanto ella misma disponga otra cosa o designe expresamente otro efecto que el de la nulidad para el caso de contravención."

La demandante señala que esta norma fue violada porque el Permiso de Construcción N° 273 de 1994 se expidió infringiendo normas de desarrollo urbano, las que también fueron violadas por los Planos N° PO226-93 aportados para la concesión del referido Permiso. Los planos y la ejecución práctica de los mismos violaron normas vigentes en materia del sistema de bonificación, por lo que, ésta jamás debió otorgarse, pero, una vez conferida, debió revocarse y anularse.

Con relación al artículo 15 del mismo Código, éste expresa lo que sigue:

> "Art. 15. Las órdenes y demás actos ejecutivos del Gobierno, expedidos en ejercicio de la potestad reglamentaria, tienen fuerza obligatoria, y serán aplicados mientras no sean contrarios a la Constitución o las leyes."

La demandante sostiene que los actos acusados de ilegales han incurrido en violación directa del precepto transcrito, porque han soslayado el carácter riguroso y la voluntad conminatoria de las normas o resoluciones ejecutivas que están compelidos a cumplir, por una parte, los particulares en el ejercicio de su iniciativa privada y, por otra, los servidores públicos al hacerlas cumplir.

III. LOS ALEGATOS

Durante la etapa de alegatos, la parte actora reiteró las pretensiones formuladas en su demanda, argumentado que la ilegalidad de los actos impugnados quedó probada en autos porque la expedición del permiso de construcción a favor de Inversiones Royme, S. A. se hizo sin ser ésta la propietaria del terreno donde se construyó el edificio Peach Tree; además, no se cumplieron las normas relativas a la proporción de estacionamientos para autos grandes y autos pequeños, consagradas en la Resolución N° 9-86 del 28 de julio de 1986.

Tampoco se cumplió con la condición que establece la Resolución N° 41-92 ibídem en cuanto al espacio libre dedicado al uso recreativo comunal, para tener derecho al beneficio de la bonificación. Adicionalmente, la Dirección de Obras

y Construcciones Municipales otorgó dicho benefició sin emitir una resolución, tal como lo ordena la resolución citada.

En esta etapa, el Doctor Winston Spadafora Franco, actuando en nombre propio y en representación de los copropietarios del Condominio Peach Tree, presentó su alegato, aduciendo fundamentalmente que la Resolución N° 718/92 aquí impugnada dejó de surtir sus efectos desde el momento en que se expidió el Permiso de Construcción N° 273, el cual, a su vez, fue anulado por la Dirección de Obras y Construcciones Municipales al expedir el Permiso N° 273-T del 29 de mayo de 1995. Además, las normas del Acuerdo Municipal N° 21 de 1994 que la actora cita como violadas no existían en el momento en que se hizo la solicitud del anteproyecto del edificio Peach Tree, por lo cual, no pudieron ser violadas.

El Doctor Spadafora concluye su alegato pidiendo a la Sala que niegue las pretensiones de la demandante (fs. 224-235).

IV. OPINIÓN DE LA PROCURADURÍA DE LA ADMINISTRACIÓN

La señora Procuradora de la Administración contestó la demanda mediante Vista N° 347 del 16 de agosto de 1995, en la cual pidió a la Sala Tercera que declare la nulidad de los dos actos impugnados, por ser éstos contrarios a las normas que el demandante cita como violadas, con excepción de los artículo 5 y 15 del Código Civil (fs. 116-145).

V. EL INFORME DE CONDUCTA DEL FUNCIONARIO DEMANDADO

El Director de Obras y Construcciones Municipales del Distrito de Panamá rindió su informe de conducta a través de la Nota N° 269. A. P. YP, del 1° de agosto de 1995 en cuya parte pertinente se expone lo siguiente:

> "El día 11 de noviembre de 1992, se recibió en nuestra Dirección, el proyecto: Edificio para apartamento con el nombre PEACH TREE, propiedad de INVERSIONES ROYME, S. A., ubicado en Urbanización La Loma, Calle Primera, Corregimiento de Pueblo Nuevo, refrenando (sic) por la Arquitecta Emilia Diez.
>
> El proyecto presentaba en planta baja dos apartamentos y estacionamientos y 8 pisos para apartamentos (2 apartamentos por piso). Haciendo un total de 18 apartamentos, el mismo fue aprobado con condición el 23 de noviembre de 1992.
>
> Es importante indicar que luego de la aprobación del Anteproyecto, el mismo no fue sometido a las aprobaciones finales, ni a los permisos de construcción.
>
> El día 1 de marzo de 1993, el Anteproyecto 718-92 fue sometido a reconsideración ya que proponía reformas en planta baja: Vestíbulo, cuarto eléctrico, cuarto de bomba, planta de emergencia, estacionamientos y 11 pisos de apartamentos (2 por piso), para totalizar 22 apartamentos. Este Anteproyecto fue aprobado con condición, con Resolución N° 718-92 y luego mediante plano original P. O. 226-93 aprobada el 6 de marzo de 1993, para luego obtener el permiso de construcción N° 556 del 5 de junio de 1995." (Fs. 114-115).

VI. DECISIÓN DE LA SALA TERCERA

Antes de proceder al examen de fondo de las normas que se citan como violadas, la Sala debe considerar el aspecto relativo a la vigencia de los actos acusados. El Dr. Spadafora Franco sostuvo en su alegato, que la Resolución N° 718/92, del 2 de marzo de 1993, dejó de surtir sus efectos desde el momento en que se expidió el Permiso de Construcción N° 273 del 6 de abril de 1994, el cual, a su vez, fue sustituido por el Permiso de Construcción N° 273-T, del 29 de mayo de 1995 (f. 228).

La Sala, aunque por otras razones, coincide con lo expresado por el Dr. Spadafora Franco respecto del agotamiento de los efectos de la Resolución N°

718/92, porque que en la fecha en que se expidió el referido acto, esto es, el 2 de marzo de 1993, estaba vigente el Acuerdo Municipal N° 29 del 9 de diciembre de 1986 (G. O. N° 20.706, del 22 de diciembre de 1986) y el artículo 4° (Punto N° A. 3) de este cuerpo normativo establece que **"La aprobación de Ante-Proyectos sometidos a través de las solicitudes de Desarrollo Urbano, tienen vigencia por un año"**. En otras palabras, al haberse dictado dicha resolución el día 2 de marzo de 1993, se entiende expirada el **2 de marzo de 1994**, por lo que, con respecto a la misma se ha producido el fenómeno jurídico conocido como sustracción de materia.

A este respecto, cabe agregar, que en el mismo contenido de la Resolución N° 718/92, se indica expresamente que: **"El propietario del lote, parcela o urbanización está obligado a construir las acera y el espacio destinado a grama, según lo dispuesto por el Artículo N° 1816 del Código Administrativo y Acuerdo N° 29-86"** (Cfr. f. 1).

En lo que concierne al Permiso de Construcción N° 273, del 6 de abril de 1994, la Sala considera que no le asiste razón al Dr. Spadafora Franco, pues, la supuesta anulación del Permiso 273 a la cual dicho letrado alude, es, en realidad, una simple transferencia o traspaso del mismo que la sociedad Inversiones Royme, S. A., hizo a favor de Womac Trading Corp., S. A., y para dejar constancia de este traspaso se extendió el Permiso de Construcción N° 273-T, del 29 de mayo de 1995. Cabe agregar, que esta transferencia del permiso de construcción tiene simplemente el efecto de sustituir al beneficiario de la obra o dueño de la misma por otro, que no implica la constitución de un nuevo acto, pero sí subsana el defecto que se imputa al mismo, consistente en haber sido extendido a favor de quien no figuraba en el Registro Público como propietario de la finca número 37851, inscrita al tomo 941, folio 2, de la Sección de Propiedad de la Provincia de Panamá, sobre la cual se construyó el edificio Peach Tree.

Por los anteriores motivos, la Sala pasará a examinar los cargos de ilegalidad formulados en la demanda, pero sólo en cuanto se refieren al Permiso de Construcción N° 273, del 6 de abril de 1994.

A juicio de la apoderada judicial de los RESIDENTES DE URBANIZACIÓN LA LOMA, S. A., el mencionado Permiso de Construcción N° 273 violó los artículos 4, 5 (aparte 3), 12 y 13 del Acuerdo Municipal N° 21 del 22 de febrero de 1994 (G. O. N° 22.501, del 24 de marzo de 1994, págs. 1-28).

Según las constancias de autos, este Acuerdo Municipal entró a regir el 24 de marzo de 1994, es decir, antes de que se expidiera el Permiso de Construcción N° 273, por lo que, a primera vista, sus disposiciones parecen serle aplicables, sin embargo, la realidad demuestra lo contrario.

Para comprender este punto es necesario considerar algunos aspectos relativos a la naturaleza jurídica del permiso de construcción. Según se desprende del artículo 5° del Acuerdo Municipal N° 29 de 1986, este acto sólo puede expedirse una vez que se hayan cumplido con los procedimientos consignados en dicho Acuerdo, entre los cuales están, fundamentalmente, la aprobación del anteproyecto y de los planos. Asimismo, el punto A del referido artículo 5° establece que "El permiso de construcción autoriza al propietario de un predio y al constructor responsable para adelantar obras de construcción". De lo anterior se desprende, que esta autorización dada por el Municipio supone el cumplimiento de una serie de fases o etapas dentro en cada una de las cuales deben cumplirse diversos requisitos, consignados en las reglamentaciones expedidas por el Municipio y por otras entidades públicas, como el Ministerio de Vivienda, el IRHE, el INTEL y el IDAAN.

En el caso que nos ocupa, las reglamentaciones municipales a las que hicimos referencia están contenidas en el supracitado Acuerdo Municipal N° 29 del 9 de diciembre de 1986, por el cual se dictan disposiciones sobre construcción en el Municipio de Panamá. En este Acuerdo se distinguen dos fases previas a la expedición del permiso de construcción, como lo son la presentación del anteproyecto y la aprobación de los planos. Con relación al primero, el punto A.

2. del citado Acuerdo menciona toda la información básica o requisitos que el interesado debe incluir en el Ante-proyecto, como por ejemplo: la indicación del tomo, folio, asiento de la finca; la certificación del Registro Público; el número, área y linderos del lote; el área de construcción y retiros exigidos; los estacionamientos, localización regional, etc.

En cuanto a los planos, el punto B del mismo artículo 4 exige que los mismos cumplan ciertos requisitos, como la forma de presentación (B. 1); la inclusión de la información básica general (ubicación regional, plantas arquitectónicas, detalles constructivos en general, elevaciones, áreas de construcción, entre otros) (B. 3); condiciones generales (B. 4); información básica respecto de la estructura (B. 5); información sobre el diseño eléctrico (B. 6).

Una vez que el interesado ha cumplido con cada uno de los requisitos mencionados y ha obtenido la aprobación de los planos, puede solicitar que se le autorice a dar inicio a la construcción, mediante la expedición del correspondiente permiso de construcción. Como puede observarse, este permiso es simplemente un acto de autorización para construir un inmueble con base en el diseño previamente descrito y aprobado en los planos, los cuales a su vez, deben someterse a las normas que rigen en el momento de su presentación.

En el presente caso, el Permiso de Construcción N° 273 se expidió previa presentación del Anteproyecto 718/92 y aprobación de los Planos N° P. O. 226-93, actos dictados bajo la vigencia del Acuerdo Municipal N° 29 de 1986. En otras palabras, dicho Permiso tuvo como fundamento un plano debidamente aprobado en atención a los requisitos indicados en el Acuerdo 29 de 1986, tal como se desprende del punto A. 4. del artículo 5° del aludido Acuerdo que, al enumerar los requisitos que deben cumplirse para obtener el Permiso de Construcción, menciona entre ellos, la presentación de "dos (2) copias heliográficas del plano debidamente aprobado". Este hecho se colige también de la expresa referencia que dicho permiso hace al Anteproyecto N° 718/92 y a los Planos P. O. N° 226-93 (Cfr. f. 3).

Todas estas razones llevan a la Sala a concluir que, en el presente caso, no es posible exigir que dichos planos cumplan con los requerimientos del Acuerdo N° 21 de 1994, como pretende la demandante, al citar sus normas como fundamento de su pretensión. Por este motivo, tampoco es jurídicamente posible alegar la supuesta nulidad del Permiso de Construcción N° 273 en base a las normas del nuevo Acuerdo Municipal N° 21 del 22 de febrero de 1994, que empezó a regir en fecha muy posterior a la aprobación del Anteproyecto y de los planos del edificio Peach Tree.

En consecuencia, la Sala considera que deben desestimarse los cargos de ilegalidad formulados por violación de los citados artículos del Acuerdo Municipal N° 21 de 1994.

En la demanda también se cita como violados el artículo 2° de la Resolución N° 9-86, del 28 de julio de 1986; el artículo 4° de la Resolución N° 41-92, del 18 de mayo de 1992 y el Anexo N° 2 de esta última resolución. La primera de estas normas se refiere tanto a las dimensiones que deben guardar los estacionamientos, como al porcentaje de estacionamientos grandes y pequeños que debe existir en las edificaciones; la segunda, alude a los presupuestos que deben cumplirse para que proceda la bonificación por retiros y la última, al procedimiento que debe seguirse para la aprobación de proyectos residenciales que se acojan al sistema de bonificación en el Distrito de Panamá.

Con respecto al cargo de infracción del artículo 2° de la Resolución N° 9-86 del 28 de julio de 1986, la Sala estima que en autos se ha probado que, en efecto, el edificio Peach Tree no cumple con la proporción que debe existir entre estacionamientos para autos grandes y autos pequeños (Cfr. fs. 5, 103, 190). También se ha probado que algunos de estos estacionamientos no son funcionales, tal como afirma el propio perito designado por el tercero impugnante de la demanda quien, a fojas 198 y 212, reconoció expresamente la necesidad de reubicar algunos de estos estacionamientos, cuya localización hace imposible su uso (Cfr. fs. 198 y 212).

En cuanto a la infracción del artículo 4° de la Resolución N° 41-92, del 18 de mayo de 1992, la Sala considera que los hechos afirmados por el demandante para demostrar la supuesta violación de esta norma no se han probado en autos. Ello es así, en primer lugar, porque de la copia autenticada de los Planos P. 0. N° 226-93 aportada por la demandante para probar la infracción del artículo 4° en mención, no se desprenden elementos de juicio suficientes para dar por sentado que la compañía encargada de construir el edificio Peach Tree, no cumplió con dejar los espacios libres o retiros para dedicarlos al recreo comunal, como afirma la demandante a fojas 56 y 57.

En segundo lugar, porque la práctica de la prueba pericial que tenía entre sus objetivos determinar el cumplimiento o no de las normas de desarrollo urbano "en cuanto área libre social o de esparcimiento para otorgar a favor del propietario del inmueble el Sistema de Bonificación" no aportó los resultados esperados. Sobre el particular, basta apreciar que el propio perito de la parte demandante, el arquitecto Ángel González (Idoneidad N° 70-1-77), expresa a fojas 178, que no puede emitir un dictamen conclusivo **"sobre la viabilidad o no de la Bonificación otorgada"**, por no constar en el expediente administrativo el procedimiento a través del cual Inversiones Royme, S. A. solicitó el beneficio de la bonificación.

Por otra parte, el arquitecto Boris Javier Aguilar Randino, perito del tercero interesado, al contestar en su informe la pregunta sobre si el edificio Peach Tree cumplió o no con las normas de desarrollo urbano referentes al área libre social o de esparcimiento para el otorgamiento de la bonificación, se limita a señalar a foja 198, que "Para responder a esta pregunta, nos remitimos a los cálculos y diagrama de área que fueron bonificadas y que adjuntamos como Anexo 1, con los cuales concluimos que en el otorgamiento de la bonificación que nos ocupa, se observaron todas las formalidades establecidas en las normas que regulan la materia". En otras palabras, el arquitecto Aguilar Randino contesta la interrogante planteada remitiendo a la Sala a **"los cálculos y diagramas de área que fueron Bonificadas"**, más no sustenta en forma razonada y clara los hechos y circunstancias que le permitieron llegar a tal conclusión.

Aunado a ello, el propio Ingeniero Municipal del Municipio de Panamá, al ser preguntado sobre si la bonificación concedida en el edificio Peach Tree se hizo en razón del espacio disponible o área verde que tenía proyectada dejar libre y si se constató si esa área libre o verde existe, contestó que "no podría indicar los porcentajes de áreas verdes y de uso público que se utilizaron como indicadores en el ejercicio para determinar la bonificación". Cabe agregar, que según lo declarado por dicho funcionario, el beneficio de la bonificación no sólo se otorga en razón de las áreas verdes que se propongan dentro del proyecto, sino también por la existencia de otras áreas destinadas al uso público, tales como son: las aceras, los espacios de circulación vial y las áreas de acceso al edificio. (Cfr. f. 192). En el caso del edificio Peach Tree estas bonificaciones fueron acogidas no sólo por área social, sino también por línea de construcción (Cfr. f. 202, 204, 196).

Por todas estas razones, la Sala considera que la demandante no ha probado el cargo de infracción del artículo 4° de la Resolución N° 9-86 del 28 de julio de 1986 y por ello, debe desestimarlo.

En lo que respecta a la violación del Anexo N° 2 de la Resolución N° 41-92 del 18 de mayo de 1992, la demandante estima que el mismo se infringió porque ni el presunto propietario, Inversiones Royme, S. A., ni ninguna otra persona solicitó a la Dirección de Obras y Construcciones Municipales que el edificio Peach Tree se acogiera al beneficio de la bonificación. Además, porque la referida Dirección nunca emitió una resolución aprobando alguna solicitud de bonificación del edificio Peach Tree, sino que estampó en el plano presentado el sello de bonificación.

Con relación al primer aspecto, la Sala estima que tampoco le asiste razón a la demandante, pues, de acuerdo con la declaración rendida por el Director de Obras y Construcciones Municipales, la bonificación para el edificio Peach Tree fue solicitada el **10 de febrero de 1993** por la arquitecta Emilia Diez, en

representación de Corporación Therado, S. A., persona jurídica que, según la certificación del Registro Público que consta a foja 7, vendió la citada finca a Bienes Raíces Suizas, S. A. **desde el 12 de marzo de 1993** (Cfr. 191).

La Sala estima, por otra parte, que la Dirección de Obras y Construcciones Municipales cumplió con lo dispuesto en el punto B.2. del aludido Anexo N° 2, ya que el sello estampado en el Plano N° P. O. 226-93 para otorgar la bonificación, constituye precisamente la Resolución a la que alude la referida norma y que, a juicio de la demandante no se ha emitido. Dicha resolución cumple cabalmente con los tres requisitos exigidos por la norma que la actora cita como violada, pues, en ella no sólo consta la aprobación del beneficio de bonificación otorgado al Proyecto N° 718/92 del edificio Peach Tree, sino que también se indican las condiciones a las cuales debe ajustarse el aludido proyecto, a saber, que "el mismo no podrá sufrir Modificaciones durante o después del proceso de construcción que afecten las condiciones que motivaron la BONIFICACIÓN". Además, establece un aumento de densidad poblacional en 2012.06 personas por hectárea.

Cabe agregar, que la supuesta omisión en que incurrió el funcionario demandado al no remitir copia de la resolución que otorgó la bonificación a la Dirección de Desarrollo Urbano del Ministerio de Vivienda, no guarda relación alguna con el problema de la legalidad o no del Permiso de Construcción N° 273 del 6 de abril de 1994, puesto que la remisión de la copia autenticada de dicha resolución a la Dirección pertinente del Ministerio de Vivienda constituye un aspecto que se ubica dentro del marco de los deberes del funcionario demandado y no constituye siquiera un requisito para la expedición del Permiso de Construcción demandado de ilegal.

Por estas razones, la Sala estima que no se infringió el Anexo N° 2 de la Resolución N° 41-92 del 18 de mayo de 1992.

Ante las anotadas infracciones al ordenamiento legal en que incurrió la Dirección de Obras y Construcciones Municipales al expedir el Permiso de Construcción N° 273, del 6 de abril de 1994, debemos preguntarnos, si las mismas motivan la nulidad del acto administrativo impugnado.

Por regla general, los actos administrativos dictados en violación de la reglamentación legal conllevan su nulidad. En nuestro ordenamiento jurídico, el artículo 26 de la Ley N° 135 de 1943 se pronuncia en este sentido al señalar como motivos de ilegalidad de los actos administrativos: a) la infracción literal de los preceptos legales, b) la falta de competencia o de jurisdicción del funcionario o de la entidad que haya dictado el acto administrativo, c) el quebrantamiento de las formalidades legales que debe cumplirse y, d) la desviación de poder.

A primera vista, parece evidente, que si en la expedición de un acto administrativo se incurre en uno de los anotados motivos de ilegalidad, se produce la nulidad absoluta del mismo, debiendo declararla la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, la realidad nos demuestra que, así como el ordenamiento jurídico prevé la nulidad de los actos administrativos afectados por algún motivo o causa de ilegalidad, también puede, este mismo ordenamiento, señalar un efecto o sanción distinto a la nulidad para el caso de que estén viciados por razón de alguno de los referidos motivos de ilegalidad.

Tal afirmación tiene claro fundamento en el artículo 5 del Código Civil, que la misma actora cita como violado en su demanda, y que establece que "**Los actos que la ley prohíbe son nulos y de ningún valor, salvo en cuanto ella misma disponga otra cosa o designe expresamente otro efecto que el de la nulidad para el caso de contravención**". Cabe señalar, como afirma el Dr. Olmedo Sanjur, que esta norma tiene aplicación supletoria en el ámbito del Derecho Administrativo, "por contener una norma general de derecho" (Cfr. SANJUR, Feliciano. Apuntes de Derecho Administrativo. Volumen II. Panamá. 1974. Pág. 243). Corrobora esta afirmación, el hecho de que esta norma esté ubicada dentro del Título Preliminar del Código Civil, el cual consagra una serie de principios generales relativos a la ley, sus efectos, interpretación, aplicación, derogación, etc.

Esta opinión ha sido sostenida por distintos autores, entre ellos el jurista colombiano Dionisio Gómez Rodado, quien al respecto expresó lo siguiente:

> "... según el art. 6, párrafo 3 del C. C. los actos contrarios a las normas imperativas y las prohibitivas son nulos de pleno derecho, salvo que en ella se establezca un efecto distinto para el caso de contravención. En un primer momento, por ello, habida cuenta de la minuciosa regulación que en el Derecho positivo se contiene de los distintos elementos del acto, cabría pensar que cualquier vicio de alguno de dichos elementos del acto, en cuanto implica una infracción legal, acarrearía la nulidad del Acto administrativo en que se contiene. La realidad, sin embargo, es muy distinta. La doctrina ha cuidado de señalar y la Jurisprudencia del Tribunal Supremo ha declarado en reiteradas ocasiones que, en atención al interés público que persigue los Actos administrativos, constituye un principio jurídico el de que únicamente deben tomarse en consideración gravísimas infracciones legales para que proceda la nulidad de dichos actos (S. 22 febrero 1963). Por ello, la teoría jurídica de las nulidades, no obstante el rigor con que se expresa el art. 4, -hoy, art. 6, párrafo 3-del Código Civil, debe ser aplicada con moderación en las esferas administrativas. Aún más, en ocasiones, el ordenamiento lo califica como una simple irregularidad, sin otra consecuencia que la eventual responsabilidad administrativa del funcionario que lo causare."
> (GÓMEZ RODADO, Dionisio. Citado por SÁNCHEZ TORRES, Carlos Ariel. **Teoría General del Acto Administrativo.** Biblioteca Jurídica. 1995. Medellín. Págs. 280-281).

La relatividad de la regla contenida en la parte inicial del artículo 5 del Código Civil es puesta de manifiesto también por la jurista española Margarita Beladiez Rojo, quien al respecto señala lo que sigue:

> "Es sabido que la sanción que establece el ordenamiento para los casos en que se infrinjan normas imperativas es, con carácter general, la invalidez del acto o negocio. Así, además, lo establece con absoluta claridad el artículo 6 del Código Civil. Pero, como se recordará, este precepto, además de afirmar que los actos contrarios a las normas imperativas y prohibitivas son nulos de pleno derecho, establece una excepción: <<salvo que en ellas se establezca un efecto distinto para el caso de contravención>>; excepción que va a resultar de gran aplicación en los actos que incurren en defectos formales. Si se quiere ser coherente con el planteamiento expuesto, la sanción que corresponda a las ilegalidades formales sólo se podrá determinar teniendo en cuenta la función que, en ese caso concreto, desempeñe la formalidad. Únicamente de este modo se podrá imponer la sanción jurídica que se considere más efectiva para evitar los perjuicios que la falta de garantía formal puede ocasionar. Por esta razón, este tipo de vicios no determina sin más la invalidez del acto o negocio jurídico, ya que existen supuestos en los que el ordenamiento prevé otras consecuencias más adecuada para sancionar estas infracciones. Así ocurre en todos aquellos supuestos en los que la forma no se configura como un requisito esencial para la existencia del negocio, sino para su efectividad." (BELADIEZ ROJO, Margarita. **Validez y eficacia de los actos administrativos.** Marcial Pons, Ediciones jurídicas, S. A. Madrid. 1994. Pág. 86.)

Es importante aclarar, que cuando el citado artículo 5 del Código Civil se refiere a la ley, en términos generales, alude a la ley en su sentido material, entendiéndose por tal, "toda norma jurídica instituida cuyo contenido se refiere y regula una multiplicidad de casos" y no a la ley en su sentido formal, que es la expedida por la Asamblea Legislativa con arreglo al procedimiento consagrado en la Constitución Política de la República y en su Reglamento Interno (Cfr. Enciclopedia Jurídica Omeba. Tomo XVIII. Driskill, S. A. Buenos Aires. 1979. Pág. 319).

En atención a lo expuesto y, a juicio de esta Sala, no es procedente declarar la nulidad del Permiso de Construcción N° 273 del 6 de abril de 1993 cuando, el propio texto del Acuerdo Municipal N° 29 del 22 de diciembre de 1986, al que hicimos referencia anteriormente, establece una sanción distinta a la nulidad para el caso de que una construcción se haya ejecutado o se esté ejecutando en contravención de los planos aprobados o en violación de las reglamentaciones vigentes. El artículo 21 de este Acuerdo expresa lo siguiente:

> "ARTÍCULO VIGÉSIMO PRIMERO: Cuando una construcción o parte de ella **se hubiere ejecutado** o se esté ejecutando en contravención a los planos aprobados por las autoridades competentes o **en abierta violación de las disposiciones del presente Acuerdo**, el Ingeniero Municipal, previo informe técnico informará al Alcalde, solicitando la suspensión de la obra hasta tanto se corrijan las deficiencias o anomalías existentes. Cuando tales anomalías o deficiencias no se subsanen en el término estipulado o **cuando las mismas no sean susceptibles de corrección, se ordenará la demolición de la parte o la totalidad de la obra, que no cumpla con las reglamentaciones vigentes**." (Los subrayados son nuestros).

Como puede extraerse del contenido de la norma transcrita, las obras que se han ejecutado o que se estén ejecutando, durante la vigencia de este acuerdo, en contravención de los planos aprobados o, en violación de las disposiciones del referido Acuerdo N° 29, o de las reglamentaciones legales vigentes, en principio, pueden ser corregidas o rectificadas. En tal caso, el Ingeniero Municipal, previa elaboración de un informe, debió poner esta situación en conocimiento del Alcalde, solicitándole además, la suspensión de la obra hasta tanto se corrigieran las deficiencias o anomalías existentes. Ordenada la corrección de tales anomalías, podría ocurrir que las mismas no se subsanaran dentro del término que a tal efecto le fuera concedido al propietario o constructor, o que, sencillamente, no sean susceptibles de ser corregidas. En ambos casos, "se ordenará la demolición de la parte o la totalidad de la obra, que no cumpla con las reglamentaciones vigentes".

Como puede advertirse, el propio Acuerdo Municipal N° 29, admitía la posibilidad de que algunas de las obras que el mismo regulaba, no se realizaran con apego a los planos aprobados o a las reglamentaciones vigentes y la sanción que imponía en esos casos no era la nulidad de los actos administrativos ni la demolición inmediata total o parcial del inmueble, como parece pretender la demandante, sino que se planteaba la posibilidad de que las deficiencias o anomalías que presentaba la obra fueran corregidas dentro de un plazo prudencial y, sólo en cuanto no pudieran corregirse, se ordenara su demolición.

El artículo 22 del Acuerdo N° 29 de 1986 que venimos comentando, contemplaba inclusive una sanción pecuniaria de cincuenta (50) a cinco mil balboas (B/.5,000.00), aplicable a quienes construyeran sin el respectivo permiso o suministraran información falsa. En ambos casos, procedía la suspensión de la obra **"hasta que la multa sea pagada y la rectificación ejecutada"**. Según el artículo 24, esta sanción también era aplicable a "Las infracciones de este Acuerdo, cuyas penas no estén expresamente determinadas en otros artículos", según la gravedad de la falta, quedando además el interesado obligado a subsanar la infracción en que hubiere incurrido, en el término que el Alcalde exija.

En el presente caso, la Sala ha determinado a través del estudio de los cargos formulados por la demandante que, en la construcción del condominio Peach Tree no se cumplieron con algunas de las normas que la parte actora cita como violadas en su demanda, específicamente, el artículo 2° de la Resolución N° 9-86, del 28 de julio de 1986, expedida por el Ministerio de Vivienda. Sin embargo, la Sala no puede, sobre la base de esta violación, declarar la nulidad del acto que sirvió de soporte jurídico a la construcción del mencionado inmueble, porque de acuerdo con las disposiciones supracitadas del mencionado Acuerdo N° 29 de 1986 y con el artículo 5 del Código Civil, lo procedente es que la Dirección de Obras y Construcciones Municipales determine si las anomalías o irregularidades que se cometieron antes y durante la construcción del edificio Peach Tree son o no subsanables y que, en uno u otro caso, el Alcalde del Distrito de Panamá ordene

lo que resulte procedente.

La declaratoria de nulidad del Permiso de Construcción N° 273 llevaría virtualmente a la demolición del citado inmueble, lo cual contrastaría abiertamente con el texto de las comentadas normas del Acuerdo N° 29 de 1986, que permitían al propietario de una obra construida, corregir los defectos o anomalías que su estructura presentara, ya sea que éstas se originaran en la inobservancia de los planos o por violación de los preceptos de dicho Acuerdo o de las disposiciones reglamentarias vigentes. De hecho, en autos se ha comprobado **anticipadamente**, a través de las declaraciones del señor Ingeniero Municipal y del informe pericial aportado por el tercero interesado, que las anomalías o irregularidades alegadas y probadas por la demandante son subsanables.

La Sala debe indicar además, que si bien el cumplimiento de las normas que reglamentan las construcciones de inmuebles en el Distrito de Panamá, constituye un asunto de interés público, también lo son las consecuencias jurídico-sociales inmediatas que se desencadenarían al declararse la nulidad del Permiso de Construcción N° 273 ibídem, particularmente, para los hoy residentes del Condominio Peach Tree. De allí, que en atención al contenido del artículo 5 del Código Civil y a todas las consideraciones expuestas, resulte indispensable seguir el procedimiento, antes contemplado en el Acuerdo Municipal N° 29 de 1986, vigente en el momento en que se presentó el Anteproyecto N° 718/92 y se aprobaron los Planos N° P. O. 226-93, y ahora en el artículo 74 del Acuerdo Municipal N° 21, de 22 de febrero de 1994, "Por el cual se dictan disposiciones sobre la construcción, adiciones de estructuras, mejoras, demoliciones y movimientos de tierra en el Distrito de Panamá".

Por las razones expuestas, esta Sala estima que debe negar, por improcedente, la solicitud de que se declare la nulidad del Permiso de Construcción N° 273 del 6 de abril de 1994.

Con relación a la violación del artículo 5 del Código Civil, la Sala considera que esta norma no ha sido violada, pues, como se indicó anteriormente, la misma se limita a establecer una regla general de derecho relativa a la nulidad de todos los actos prohibidos por la ley, salvo en cuanto ésta señale una sanción o efecto distinto a la nulidad.

En cuanto a la violación del artículo 15 del Código Civil, esta norma ciertamente consagra el principio de la obligatoriedad de los actos y órdenes dictados por el Ejecutivo en ejercicio de la potestad reglamentaria, siempre que éstos no sean contrarios a la Constitución o a las leyes. Sin embargo, en el presente caso, no procede decretar la nulidad del Permiso de Construcción N° 273 sobre la base de la infracción de este precepto general, dado que, ni las resoluciones del Ministerio de Vivienda que se dicen violadas ni mucho menos el mencionado Acuerdo N° 29 de 1986, que son las normas especiales aplicables al Permiso en mención, consagran la nulidad como sanción para el caso de que se haya inobservado alguna de las disposiciones reglamentarias de las citadas por la parte actora como violadas. Como se expuso anteriormente, en los supuestos de "**abierta violación**" de las disposiciones del Acuerdo N° 29 de 1986 ó de las reglamentaciones vigentes, el artículo 21 de este Acuerdo (ahora artículo 74 del Acuerdo N° 21 de 1994), facultaba al propietario de la obra para corregir las deficiencias que la misma tuviese dentro del plazo fijado por el Alcalde del Distrito de Panamá y, sólo en cuanto tales anomalías no pudieran corregirse o no se corrigieran en el plazo señalado para este efecto, podría ordenarse la demolición de la parte de la obra que no cumplía con las reglamentaciones vigentes. Por estas razones, la Sala estima que debe desestimarse el último cargo.

Por otra parte, la Sala estima que lo pedido por la demandante en el punto 3° del petitum de su demanda, esto es, la nulidad de "cualesquiera disposición, decisión, facultad, discreción, permisión o autorización que se haya dictado o expedido en relación y con ocasión con las normas y actos arriba señalados", es improcedente, pues, de acuerdo con diversos preceptos de la Ley N° 135 de 1943 (entre ellas, los artículos 42A, 43 (N° 2), 43A, 44), en toda demanda contencioso-administrativa, ya sea de nulidad o de plena jurisdicción, se debe pedir

la nulidad de actos administrativos específicos o concretos, los cuales deben estar debidamente descritos en la demanda y no la nulidad de "cualesquiera" actos, como pide la demandante.

Finalmente, la Sala debe indicar que aun cuando la demandante señala a foja 76 del expediente que la construcción del edificio Peach Tree implica un perjuicio "de orden general y social" y en particular, para los moradores de la Urbanización La Loma, no aportó ninguna prueba sustentatoria de estas afirmaciones, a pesar de que estos supuestos perjuicios se alegaron como argumento para la admisión de la demanda.

En consecuencia, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA que, en relación a la Resolución N° 718/92 del 2 de marzo de 1993, expedida por la Dirección de Obras y Construcciones Municipales del Municipio de Panamá, se ha producido el fenómeno jurídico conocido como SUSTRACCIÓN DE MATERIA y NIEGA el resto de las declaraciones pedidas.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO RIGOBERTO VERGARA, EN REPRESENTACIÓN DE ALMACENES COSCO, S. A., PARA QUE SE DECLAREN NULOS POR ILEGALES, LOS RESUELTOS N° 781 DE 9 DE FEBRERO DE 1973, EL RESUELTO S/N DE 31 DE OCTUBRE DE 1995, AL RESUELTO S/N DE 19 DE JUNIO DE 1996, AMBOS EXPEDIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE COMERCIO INTERIOR DEL MINISTERIO DE COMERCIO E INDUSTRIAS. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TRECE (13) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **Rigoberto Vergara**, en nombre y representación de **ALMACENES COSCO, S. A.**, ha interpuesto demanda contencioso administrativa de nulidad para que se declaren nulos por ilegales, los Resueltos N° 781 de 9 de febrero de 1973, el Resuelto S/N de 31 de octubre de 1995, el Resuelto S/N de 19 de junio de 1996, expedidos por la Dirección General de Comercio Interior del Ministerio de Comercio e Industria.

El Magistrado Sustanciador al proceder al análisis del libelo incoado, se percata que el actor ha incluido en su demanda, una solicitud especial de suspensión de los efectos del acto acusado, para que sea atendida previo el trámite de admisión de la misma.

ARGUMENTO DE LA PARTE ACTORA

En efecto, la parte actora, al plantear al Tribunal las razones en que funda la solicitud de suspensión provisional de los efectos del acto impugnado ha señalado básicamente, que la sociedad **W. D. DE PANAMÁ, S. A.** se encuentra inscrita al Tomo 898, Folio 241, Asiento 102416 de la Sección de Personas Mercantil del Registro Público desde 1972. Que tal y como consta en la certificación del Registro Público, dos de los primeros Directores eran ciudadanos de los Estados Unidos de América. Que a pesar de la prohibición legal establecida en el artículo 7 del Decreto de Gabinete N° 90 de 25 de marzo de 1971, la Dirección General de Comercio Interior del Ministerio de Comercio e Industria, se le otorgó licencia comercial Tipo B para el ejercicio del comercio al por menor, por medio del Resuelto N° 781 de 9 de febrero de 1973, cuando dicho ejercicio comercial se encuentra reservado única y exclusivamente a los

ciudadanos panameños.

Continúa exponiendo el petente, que mediante Escritura Pública N° 9039 de 6 de agosto de 1995, la sociedad W. D. DE PANAMÁ, S. A. cambió su razón social por la de **PRICE COSTCO DE PANAMÁ, S. A.**, debidamente inscrita en el Registro Público, desde el 23 de octubre de 1995. Que cuatro de los Dignatarios y Directores de la sociedad W. D. DE PANAMÁ, S. A. son ciudadanos norteamericanos. Que el contrato de licencia de uso cuya copia debidamente autenticada se adjunta como prueba, y celebrado en la ciudad de Panamá el 24 de octubre de 1995 entre las sociedades PRICE GLOBAL TRADING, INC. Y **PRICE COSTCO DE PANAMÁ, S. A.**, se deja claramente establecido que el señor Theodore Wallace, quien es presidente y representante legal de **PRICE COSTCO DE PANAMÁ, S. A.** es nacional de los Estados Unidos de América.

Finalmente señala el actor, que el numeral 1 de la Ley N° 25 de 26 de agosto de 1994, establece que para los efectos de esta Ley, se entenderá por comercio al por menor la venta de bienes destinados al consumidor, y que la licencia comercial Tipo B N° 3763 de 9 de febrero de 1973, expedida a favor de la sociedad **W. D. DE PANAMÁ, S. A.** ahora, establece que la misma se dedicará a la venta de bienes destinados al consumidor. Que igualmente, mediante Resuelto S/N de 31 de octubre de 1995, se inscribió en el Registro Comercial un aumento en las actividades de la sociedad **PRICE COSTCO DE PANAMÁ**, antes **W. D. DE PANAMÁ, S. A.**, el cual establece que la misma se dedicará a la venta al por menor de mercancía seca en general tales como: artículos domésticos, eléctricos, ferretería, plomería, de vestir, de oficina, deportivos, exceptuando aquellos que requieran requisitos especiales. Que a pesar de la prohibición, legal establecida en los artículo 3 y 7 de la Ley N° 25 de 26 de agosto de 1996, mediante Resuelto S/N de 31 de octubre de 1995, la Dirección General de Comercio Interior del Ministerio de Comercio e Industrias habilitó la Licencia Comercial Tipo B N° 3763 de 9 de febrero de 1973, concedida a la sociedad **W. D. DE PANAMÁ, S. A.**, hoy día **PRICE COSTCO DE PANAMÁ, S. A.** lo que riñe abiertamente con los artículos antes citados, que interpretado armónicamente con el artículo 288 de la Constitución Nacional.

Analizados los argumentos anteriormente planteados, la Sala Tercera procede a externar su concepto sobre la solicitud planteada.

CRITERIO DE LA SALA

Como ha reiterado la Sala en numerosas ocasiones, la principal condición exigible para la procedencia de una suspensión provisional, es la existencia de inminentes perjuicios de naturaleza grave, irreparables o de muy difícil reparación, que causen severos daños, y que además a **prima facie** el acto acusado pueda causar una lesión potencial al ordenamiento jurídico, por lo que como medida de extrema urgencia, se requiere suspender provisionalmente los efectos de dicho acto, hasta que se decidan las pretensiones de fondo del proceso **(Cfr. Autos de 2 de enero de 1991, 15 de enero de 1992 y de 25 de febrero de 1994 y de 12 de octubre de 1995).**

Basados en estos presupuestos indispensables para acceder a una medida cautelar de esta naturaleza, observamos que los argumentos esgrimidos por el demandante para justificar y respaldar su petición, no muestran de manera clara y directa un perjuicio irreparable, de no suspenderse el acto. Cabe destacar en este mismo orden de ideas, que inclusive el actor pretende se suspenda un acto de 1973, lo que demuestra palmariamente que la supuesta urgencia no es tal, como lo quiere hacer ver el petente.

El artículo 73 de la Ley 135 de 1943 prevé los parámetros específicos en los que debe descansar los criterios del Tribunal Contencioso para que proceda la suspensión:

> "ARTÍCULO 73. El Tribunal Contencioso-administrativo en pleno puede suspender los efectos de un acto, resolución o disposición, sí, a su juicio, ello es necesario para evitar un perjuicio notoriamente grave."

Por las anteriores consideraciones los Magistrados que integran la Sala Tercera de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley NO ACCEDEN A LA SUSPENSIÓN solicitada por el licenciado Rigoberto Vergara, en nombre y representación de ALMACENES COSCO, S. A.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS B. DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR LA FIRMA MORGAN Y MORGAN, EN REPRESENTACIÓN DE CRUCERO EXPRESS, S. A., PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO EJECUTIVO N° 54 DE 2 DE JUNIO DE 1995, EMITIDO POR EL ÓRGANO EJECUTIVO, POR CONDUCTO DEL MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRECE (13) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La firma Morgan y Morgan, en nombre y representación de CRUCERO EXPRESS, S. A., ha promovido y sustentado recurso de apelación contra la Resolución de 9 de septiembre de 1996, por la cual se admite algunas de las pruebas aducidas por la parte actora y **se niega otras**, en el proceso contencioso administrativo de nulidad, promovido para que se declare nulo, por ilegal, el artículo segundo del DECRETO EJECUTIVO N° 54 de 2 de junio de 1995, emitido por el ÓRGANO EJECUTIVO, por conducto del MINISTERIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO.

Las pruebas no admitidas son las siguientes:

"1. Los documentos procedentes del extranjero, por carecer éstos de la autenticación contemplada en el artículo 864 del Código Judicial.

2. El reconocimiento de firma solicitado en el documento a foja 74, debido a que en dicho documento no consta firma alguna.

3. El contenido y existencia del documento "PROYECTO DE REGLAMENTO DE CUARENTENA AGROPECUARIA FERRY-CRUCERO COLOMBIA PANAMÁ" (Artículo 775 del Código Judicial).

4. El documento simple que aparece a foja 83 del expediente (Artículo 820 del Código Judicial)."

5. Informe de la Dirección de la Autoridad Portuaria Nacional sobre "cuántos permisos y a nombre de quiénes existe actualmente concedidas para obtener servicios de ferry u otras motonaves como trasbordadores entre puertos colombianos y Panamá con especial referencia a los puertos de Cartagena y Cristóbal en Panamá. Deberá anotarse aquí fechas de la expedición de tales concesiones y /o permisos, así como los cuadros estadísticos que existan en los archivos de la dependencia requerida respecto al número de arribos realizados durante los últimos seis meses para esos concesionarios, con identificación también de la carga que ellos transbordasen".

6. Informe de la Dirección de Cuarentena Agropecuaria que exprese: la descripción detallada de las tareas de aspersión, fumigación, desinfección o similares, que realicen personal adscrito a sus servicios sobre la motonave que transiten como trasbordadores entre los puertos de Cartagena, en Colombia, y Cristóbal, en Colón, Panamá. Deberá así mismo explicarse los tipos de desinfectantes, y cantidades, utilizadas en esas labores; además de la descripción y

relación pormenorizada de los gastos reales en que se incurra con motivo de las tareas de desinfección a que se hace referencia en el literal anterior, referidos a una sola faena.

7. Testimonios de ROGELIO MOGORUSA y RODRIGO GARCÍA MORA."

El apelante solicita que las pruebas negadas sean admitidas por las siguientes razones:

1. El Informe de la Dirección de la Autoridad Portuaria Nacional, porque su propósito es demostrar que la única empresa que prestaba el servicio de ferry entre Cartagena Colón y viceversa es CRUCERO EXPRESS, S. A., así como también, que sean incluidos los cuadros estadísticos que reposan en los archivos de la Dirección de la Autoridad Portuaria Nacional porque ayudaría a fijar tarifas por servicios.

2. El Informe de la Dirección de Cuarentena Agropecuaria porque es la prueba sustancial para la correcta evaluación jurídica del acto administrativo cuya nulidad se impetra, debido a que los precios fijados son desproporcionados en relación al costo real del servicio en cuestión.

3. Los testimonios de ejecutivos del organismo internacional OIRSA, ROGELIO MOGORUSA y RODRIGO GARCÍA MORA, quienes colaboraron con técnicos del MIDA y ejecutivos de CRUCERO EXPRESS, S. A., porque conocen los métodos o mecanismos de control de sustancias tóxicas que pudieran ingresar al territorio nacional, vía transporte marítimo de puertos ubicados en países con enfermedades infecto contagiosas.

4. El documento denominado "Proyecto de Reglamento de Cuarentena Agropecuario Ferry-Crucero Colombiano Panameño", porque al ser un proyecto de reglamento, es un documento eficaz para evaluarse, en la medida en que su contenido ayude a resolver la controversia.

5. El reconocimiento de firma del Director de Sanidad Agropecuaria, señor Humberto Patiño, para que en el interrogatorio reconozca el contenido del documento visible a fojas 74.

6. En cuanto al documento visible a foja 83, es un cuadro estadístico sobre los viajes Cartagena-Cristóbal-Cartagena (CACRCA) del Crucero Express, dato que guarda relación con las pretensiones del actor, por cuanto lo impugnado en el fondo, es el excesivo costo derivado para la actora de la aplicación tarifaria.

7. Los documentos procedentes del extranjero porque serán de ayuda en la búsqueda de la verdad de los vicios de ilegalidad endilgados en la actuación de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Cabe señalar que la señora Procuradora de la Administración no aprovechó el término de 3 días, que la ley le brinda, para presentar sus objeciones a la sustentación del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la citada Resolución, de 9 de septiembre de 1996, que admitió ciertas pruebas y negó otras.

Evacuados los trámites legales, el resto de los Magistrados de la Sala procede a resolver la alzada interpuesta.

En primer lugar, debe confirmarse la no admisión de las siguientes pruebas por las razones que en cada caso se expresa:

1. El informe de la Autoridad Portuaria Nacional es una prueba inconducente porque a foja 84 del expediente se lee una certificación del Ministro de Comercio e Industrias, de 6 de septiembre de 1995, en la cual consta que, de acuerdo con los archivos del Departamento de Licencias, no existe constancia de que haya otra persona natural o jurídica, además de la demandante, que opere servicios de trasbordador. En cuanto a la información sobre los cuadros estadísticos existentes en los archivos de la Autoridad Portuaria Nacional, desde el mes de julio de 1995 hasta el mes de diciembre de 1995, del número de arribos naves

provenientes de puertos colombianos de Cartagena, Colombia, al puerto de Cristóbal en Colón, Panamá, con la identificación de la carga transbordada, también es inconducente porque en este proceso no se pretende fijar tarifas por servicios.

2. El "Proyecto de Reglamento de Cuarentena Agropecuaria Ferry-Crucero Colombia-Panamá", es una prueba ineficaz porque siendo un proyecto de reglamento no forma parte del ordenamiento jurídico de La Nación (Artículo 773 del Código Judicial).

3. Los documentos o correspondencia extranjera deben ser autenticados en la forma indicada en el artículo 864 del Código Judicial, y como este precepto no se cumplió, no tienen valor probatorio y no deben admitirse como pruebas.

4. El documento a foja 83, no puede ser admitido como prueba por no estar debidamente firmado, ni reconocido por quien lo expidió.

El resto de los Magistrados de la Sala, mediante un examen de la demanda y de las otras pruebas aducidas por la parte actora que no fueron admitidas, ha llegado a la conclusión de que son conducentes, porque tienen por objeto probar los hechos en los cuales CRUCERO EXPRESS, S. A. fundamenta su demanda. Estas pruebas son las siguientes:

1. Informe de la Dirección de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario:

a) Sobre las tareas de aspersión, fumigación, desinfección, o similares, que realiza personal adscrito a su servicio en las motonaves de CRUCERO EXPRESS, S. A. que transitan como trasbordadores entre los puertos de Cartagena, en Colombia, y Cristóbal, en Colón, Panamá, detallando los tipos de desinfectantes y cantidades utilizadas en esas labores; y b) Sobre los gastos reales en que se ha incurrido con motivo de las tareas de desinfección a que se hace referencia en el literal anterior, todo referido a una sola faena.

2. Reconocimiento del documento que consta a foja 74, en el interrogatorio verbal del señor Humberto Patiño, Director de Sanidad Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

3. Testimonios de ROGELIO MOGORUSA y RODRIGO GARCÍA MORA, funcionarios de la OIRSA, para que sean interrogados conforme a aspectos relacionados con los hechos de la demanda.

De consiguiente, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de La República y por autoridad de la Ley, **MODIFICAN** la resolución de 9 de septiembre de 1996 en el sentido de admitir las siguientes pruebas: 1. Informe de la Dirección de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, que contendrá lo siguiente: a) Descripción detallada de las tareas de aspersión, fumigación, desinfección, o similares, que realicen personal adscrito a su servicio sobre las motonaves que transiten como trasbordadores entre los puertos de Cartagena, en Colombia, y Cristóbal, en Colón, Panamá. Así mismo, explicar los tipos de desinfectantes y cantidades utilizadas en esas labores. b) Descripción y relación pormenorizada de los gastos reales que se incurra con motivo de las tareas de desinfección a que se hace referencia en el literal anterior, referidos a una sola faena; 2. Reconocimiento del documento que consta a foja 74, en el interrogatorio verbal del señor Humberto Patiño, Director de Sanidad Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario; y 3. Testimonios de ROGELIO MOGORUSA y RODRIGO GARCÍA MORA, funcionarios de la OIRSA, para que sean interrogados acerca de los hechos de la demanda. Se CONFIRMA la resolución de 9 de septiembre de 1996 en todo lo demás.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO

Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO SERVANDO VERGARA QUIROZ, EN SU PROPIO NOMBRE Y REPRESENTACIÓN, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL ACUERDO N° C. E. 008-94 DE 14 DE OCTUBRE DE 1994, EMITIDO POR EL COMITE EJECUTIVO DE LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, TRECE (13) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **SERVANDO VERGARA QUIROZ**, actuando en su propio nombre, ha promovido demanda contencioso administrativa de nulidad, para que se declare nulo, por ilegal, el Acuerdo N° C. E. 008-94 de 14 de octubre de 1994, emitido por el Comité Ejecutivo de la Autoridad Portuaria Nacional.

La parte actora solicita que se declare además, que como consecuencia de la nulidad del acto impugnado, está vigente el Acuerdo N° 004-94 de 27 de abril de 1994.

Mediante el acto impugnado, se acordó dejar sin efecto el Acuerdo N° 004-94 de 27 de abril de 1994, a través del cual se reglamentan los costos portuarios para la explotación del servicio público de transporte marítimo de pasajeros y cargas por medio de transbordador o ferry en la Provincia de Bocas del Toro, emitido por el Comité Ejecutivo de la Autoridad Portuaria Nacional; se ordenó a los barcos tipo transbordador o ferry pagar las sumas originalmente facturadas antes de los ajustes ordenados por los Acuerdos N° 002-93 y 004-94 de 29 de julio de 1993 y 27 de abril de 1994 respectivamente; se ordenó la facturación de las cuentas generadas por estas naves de acuerdo con las tarifas vigentes; y se autorizó al Director General de la Autoridad Portuaria Nacional para negociar un nuevo acuerdo de canon fijo con las empresas que se dedican a operar estas naves, sujeto al pago de la deuda pendiente. (Fs. 2).

El demandante sustenta su pretensión en los siguientes hechos:

"**PRIMERO**: Mediante Acuerdo del Comité Ejecutivo de la Autoridad Portuaria N° 64-83 de 12 de enero de 1983, se aprobó el **sistema tarifario** que rige el cobro de los servicios marítimos y portuarios que se prestan a las naves que ingresan a los puertos de la República de Panamá, con excepción de aquellas dedicadas a las actividades pesqueras, a las cuales se les aplica la tarifa vigente para el Puerto de Vacamonte.

SEGUNDO: Mediante el Acuerdo C. E. N° 3-86 de 28 de julio de 1986 del Comité Ejecutivo de la Autoridad Portuaria Nacional se fijaron las **tasas por el derecho de muellaje a los vehículos**, como medida más cónsona con el costo del servicio.

TERCERO: Esta medida, si bien cumplía su objetivo en las terminales portuarias de Balboa y Cristóbal, era demasiado onerosa para los puertos menores, por lo que mediante Acuerdo N° C. E. 2-88 de 23 de mayo de 1988 del Comité Ejecutivo de la Autoridad Portuaria Nacional, se estableció una nueva tasa por el derecho de muellaje a los vehículos automotores, camiones, grúas, montacargas y similares, aplicable únicamente al servicio de cabotaje y de aplicación a los **Puertos Menores** de Puerto Armuelles, Pedregal, Bocas del Toro, Almirante, Chiriquí Grande, Puerto Mutis, Puerto de Aguadulce, Puerto Panamá, La Palma y Coco Solo Norte.

CUARTO: Por considerarse que esta última tarifa no era cónsona con el costo del servicio en aquellas regiones del país que tienen la

vía marítima como única vía de comunicación para recibir los bienes y servicios necesarios para subsistir, se modificaron dichas tasas mediante el Acuerdo C. E. N° 10-90 de 6 de noviembre de 1990.

QUINTO: Con base en las anteriores consideraciones, y tomando en cuenta que en la Provincia de Bocas del Toro hay dificultades de acceso y una de las formas más usuales de comunicación entre los poblados son las embarcaciones tipo **"Ferry"**, el Comité Ejecutivo de la Autoridad Portuaria Nacional dictó el Acuerdo N° 02-93 de 29 de julio de 1993, por el cual se reglamentaron los costos portuarios para la explotación del servicio público de transporte marítimo de pasajeros y cargas por el denominado método **"Ferry"**.

SEXTO: El sistema de facturación que debe aplicarse con base en el anterior Acuerdo era muy complejo, por lo que se estableció un sistema de pago fijo para el referido tipo de embarcaciones, mediante el Acuerdo N° 004-94 de 27 de abril de 1994.

SÉPTIMO: El Comité Ejecutivo de la Autoridad Portuaria Nacional consideró que el Acuerdo N° 004-94 constituía una exención en todo o en parte de las tasas por los servicios portuarios que presta la Autoridad Portuaria Nacional, y que por tanto se estaba violando el Artículo 19 de la Ley 42 de 2 de mayo de 1974.

OCTAVO: Para evitar lo anterior, el Comité Ejecutivo dictó el Acuerdo N° 008-94 de 14 de octubre de 1994, objeto de la presente demanda, ignorando que de conformidad con el Ordinal 7 del Artículo 7 de la Ley 42 de 2 de mayo de 1994, dicho Comité podría estructurar, reglamentar, determinar, fijar, alterar e imponer tasas y derechos por los servicios que preste o suministre la Autoridad Portuaria Nacional."

Al admitirse la presente demanda se corrió en traslado a la señora Procuradora de la Administración quien, mediante la Vista Fiscal N° 221 de 29 de mayo de 1995, solicitó a esta Sala acceder a las pretensiones del demandante (fs. 135-144); además, se solicitó al funcionario demandado que rindiera el informe de conducta a que se refiere el artículo 33 de la Ley 33 de 1946, lo que hizo oportunamente (Fs. 116-133).

La parte actora estima que el acto administrativo impugnado viola los artículos 7 numeral 7 y 19 de la Ley 42 de 2 de mayo de 1974, cuyo texto transcribimos a continuación:

Ley N° 42 de 2 de mayo de 1974.
"ARTÍCULO 7. Las funciones del Comité Ejecutivo serán las siguientes:
...
7ª. Estructurar, reglamentar, determinar, fijar, alterar e imponer tasas y derechos por los servicios que preste o suministre; ..."

"ARTÍCULO 19. Todos los servicios que preste la Autoridad Portuaria Nacional aún cuando sean a favor del estado, los municipios, organismos autónomos o semiautónomos del Estado o particulares, deberán ser remunerados según las tarifas vigentes. La AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL no estará facultada para eximir en todo o en parte estos pagos."

Al exponer el concepto en que el acto impugnado (Acuerdo N° C. E. 008-94 que dejó sin efectos el Acuerdo N° 004-94) infringió el artículo 19 de la Ley N° 42 de 2 de mayo de 1974, el demandante indicó que la violación se produjo por errónea interpretación, toda vez que las tarifas establecidas en dicho acuerdo no eximen del pago de tasa alguna a las embarcaciones que prestan el servicio público de transporte marítimo de pasajeros y cargas por el denominado método de trasbordo o ferry en la provincia de Bocas del Toro; que el Acuerdo N° 004-94 de 27 de abril de 1994, fue dictado en ejercicio de la facultad que le concede al

Comité Ejecutivo de la Autoridad Portuaria Nacional, el artículo 7 numeral 7 de la Ley N° 42 de 1974; que el Acuerdo N° 004-94 adicionó y actualizó la tarifa vigente de los servicios marítimos y portuarios establecidos en el Acuerdo N° 64-83 de 12 de enero de 1983; que dicha medida se adoptó para solucionar el problema de la complicada y onerosa facturación que debía aplicarse por la concesión del servicio, y el embarque y desembarque de las naves dedicadas a la actividad del ferry; y que en materia impositiva una exención implica la liberación de una carga, y en este caso no se está liberando de pago ninguna de las naves que se dedican al transporte marítimo por el método de ferry.

En cuanto al cargo de violación del artículo 7 numeral 7 de la Ley N° 42 de 1974, considera el demandante que se ha violado por omisión, ya que no se tomó en cuenta que el Comité Ejecutivo de la Autoridad Portuaria Nacional, tiene facultad para estructurar, reglamentar, determinar, fijar, alterar, e imponer tasas y derechos por los servicios que presta esta institución; que si bien el Acuerdo N° 64-83 de 12 de enero de 1983 aprobó el sistema tarifario que rige el cobro por los servicios marítimos y portuarios que se prestan a las naves que ingresan a los puertos de la República de Panamá, al dictarse el Acuerdo N° 004-94 de 27 de abril de 1994, se adicionó y actualizó la tarifa vigente, en base a consideraciones sociales y económicas de la región, estableciendo una tarifa fija a todas las embarcaciones que prestan el servicio público de transporte marítimo de pasajeros y de carga por el denominado método de ferry en la Provincia de Bocas del Toro; y que no se ha exonerado a ninguna de las embarcaciones ferry, sino que el Comité Ejecutivo de la Autoridad Portuaria Nacional facultado para ello, estableció una tarifa especial distinta de las naves de cabotaje, tal como lo hacen la mayoría de las legislaciones comparadas que consideran este servicio como una continuación de la carretera en aquellas áreas de difícil acceso.

Considera la señora Procuradora de la Administración que le asiste razón a la parte actora en cuanto a la violación de los artículos 7 y 19 de la Ley N° 42 de 2 de mayo de 1974, toda vez que la tarifa establecida por el Acuerdo N° 004-94 de 27 de abril de 1994, aplicable a las embarcaciones que proporcionan el servicio público de transporte marítimo de pasajeros y cargas denominado ferry en la Provincia de Bocas del Toro, no constituye exención alguna, porque el artículo 7 numeral 7 de la Ley 42 faculta expresamente al Comité Ejecutivo de la Autoridad Portuaria Nacional para "estructurar, reglamentar, determinar, fijar, alterar, e imponer tasas y derechos por los servicios que preste o suministre"; que el Comité Ejecutivo de la Autoridad Portuaria Nacional se abrogó funciones otorgadas por el artículo 203 numeral 2 de la Constitución Nacional, a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, al pronunciarse en cuanto a la legalidad de los Acuerdos N° 002-93 de 29 de julio de 1993 y N° 004-94 de 27 de abril de 1994; que se ha revocado un acto administrativo emitido por autoridad competente, afectando a terceros que han suscrito contratos con la Autoridad Portuaria Nacional, contraviniendo el principio de la irrevocabilidad de los actos administrativos a cuyo cumplimiento obligan los contratos que reposan en el expediente.

A continuación los Magistrados que integran la Sala, proceden a resover la presente controversia.

Observa la Sala, que la autoridad demandada defendió el acto impugnado, Acuerdo N° 008-94 de 14 de octubre de 1994, alegando las siguientes razones:

1. Que el Acuerdo N° 64-83 de 12 de enero de 1983, estableció las tarifas para el cobro de los servicios marítimos y portuarios que se prestan a las naves que ingresan a los puertos administrados por esa entidad;

2. Que el Acuerdo N° 004-94 de 27 de abril de 1994 dispuso ordenar la refacturación de las cuentas que se habían generado de las actividades realizadas por las naves DINA O, FERRY PALANGA (ATLANTIC TOURIST INVESTMENT, S. A.) y/o cualquier embarcación que estuviera prestando el servicio público de transporte marítimo de pasajeros y carga por el método de ferry, a la tabla establecida en dicho acuerdo;

3. Que con el Acuerdo N° 004-94 de 27 de abril de 1994 se hizo una reducción de las tarifas vigentes;

4. Que con fundamento en el artículo 19 de la Ley N° 42 de 2 de mayo de 1974, todos los servicios que presta la Autoridad Portuaria Nacional deben ser remunerados según las tarifas vigentes y esta entidad no está facultada para eximir en todo o en parte estos pagos; y

5. Que como los Acuerdos N° 002-93 de 29 de julio de 1993 y N° 004-94 de 27 de abril de 1994 están viciados de ilegalidad por violar el artículo 19 de la Ley N° 42, los mismos deben dejarse sin efecto.

Advierte la Sala, que el fundamento invocado para dejar sin efecto el Acuerdo N° 004-94 de 27 de abril de 1994, fue el artículo 19 de la Ley N° 42 de 2 de mayo de 1994, **que obliga a que los servicios que presta la Autoridad Portuaria Nacional sean remunerados según las tarifas vigentes y prohíbe que esta entidad exima en todo o en parte estos pagos.**

La Autoridad Portuaria Nacional dictó el acto impugnado con el fin, en primer lugar, de dejar sin efecto las refacturaciones ordenadas por los Acuerdos N° 002-93 de 29 de julio de 1993 y N° 004-94 de 27 de abril de 1994; y, en segundo lugar, de exigir que las embarcaciones tipo ferry pagaran los servicios recibidos conforme las tarifas vigentes cuando los recibieron. Sin embargo, sin motivación alguna, dejó sin efectos la totalidad del Acuerdo N° 004-94 que establecía el canon fijo señalado a las naves tipo transbordador o ferry por los servicios que no causen erogación directa a la Autoridad Portuaria Nacional.

Tal como lo explicó en su informe de conducta la autoridad demandada, el Acuerdo N° 004-94 de 27 de abril de 1994, que señaló el canon fijo para las embarcaciones tipo ferry, es el resultado de un proceso de adecuación de las tarifas para esta clase de embarcaciones.

La cláusula primera del acto impugnado, que es el Acuerdo N° 008-94 de 14 de octubre de 1994, resuelve dejar sin efecto el canon establecido en el Acuerdo N° 004-94 de 27 de abril de 1994. Esta decisión no está fundamentada en los considerandos del acto impugnado, hecho que fue aceptado por la autoridad demandada, quien a foja 130 y 132 del expediente afirma que la "intención de **LA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL**, mediante el **ACUERDO C. E. N° 08-94**, es establecer claramente que se debió pagar los cargos por servicios portuarios prestados en el momento de la promulgación de los **ACUERDOS C. E. N° 02-93 y 04-94** para entonces poder establecer un canon fijo de concesión y determinar el monto a pagar, y si el servicio de **FERRY** debe pagar o no, las tarifas de muellaje, faros y boyas, y estadía o incluir esos cargos tarifarios como una suma fija en el referido canon de concesión".

Por tanto, a juicio de la Sala la cláusula primera del acuerdo impugnado, viola directamente, por falta de aplicación, el artículo 7 numeral 7 de la Ley N° 42 de 2 de mayo de 1974, que faculta al Comité Ejecutivo de la Autoridad Portuaria Nacional, para estructurar, reglamentar, determinar, fijar, alterar e imponer tasas y derechos por los servicios que preste o suministre, por lo que no es ilegal el canon fijo establecido mediante el Acuerdo N° 004-94 de 27 de abril de 1994, que reglamenta los costos portuarios para la explotación del servicio público de transporte marítimo de pasajeros y cargas por el denominado método de ferry en la Provincia de Bocas del Toro.

En relación a las cláusulas segunda y tercera del acto impugnado, las cuales ordenan a los barcos tipo transbordador o ferry pagar las sumas originalmente facturadas antes de los ajustes ordenados por los Acuerdos N° 002-93 de 29 de julio de 1993 y 004-94 de 27 de abril de 1994; y pagar las cuentas generadas de acuerdo a las tarifas vigentes; considera la Sala que las mismas no violan las normas invocadas, ya que no hacen más que aplicar el artículo 19 de la Ley N° 42 de 2 de mayo de 1974, que obliga a los usuarios de los servicios que presta la Autoridad Portuaria Nacional a remunerar los mismos, según las tarifas vigentes en el momento en que los servicios fueron prestados.

En los contratos de concesión N° 2-003-94 (fs. 36-41) y N° 2-004-94 (fs. 51-56), otorgados para el uso de las instalaciones portuarias para la prestación, explotación y desarrollo del servicio de transporte marítimo de pasajeros y carga

en general en la provincia de Bocas del Toro a través de las naves tipo ferry, a las empresas **Atlantic Tourist Investment, S. A. y Transporte y Turismo Bocatoreño, S. A.**, se establece un canon mensual que deberán pagar los concesionarios, el cual incluye todos los servicios portuarios, "en base al Acuerdo N° 004-94". Estos contratos fueron refrendados el 16 de septiembre de 1994, y rigen a partir de esta fecha. Ahora bien, de acuerdo con el artículo 19 de la Ley 42 de 1974, los servicios prestados por la Autoridad Portuaria Nacional deberán serle remunerados según las tarifas vigentes en el momento en que los servicios fueron prestados. También preceptúa esta norma que dicha entidad no está facultada "para eximir en todo o parte estos pagos". Ante esta realidad debe concluirse que el artículo 19 de la Ley N° 42 de 2 de mayo de 1974 ha sido aplicado correctamente al dictarse las comentadas cláusulas segunda y tercera del Acuerdo N° 008-94 de 14 de octubre de 1994.

Finalmente, mediante la última cláusula del acuerdo impugnado el Comité Ejecutivo de la Autoridad Portuaria Nacional autoriza al Director General para negociar un nuevo acuerdo de canon fijo, con las empresas que se dedican a operar las naves de transbordo o ferry. A juicio de la Sala, si bien dicho ente está facultado para reglamentar, fijar y alterar las tasas o derechos por los servicios que presta o suministra la Autoridad Portuaria Nacional, conforme el artículo 7 numeral 7 de la Ley N° 42 de 1974, ninguna de estas normas lo faculta expresamente para **delegar** la función de negociar las tasas o derechos a pagar por los servicios que presta o suministra dicha institución, por lo que es ilegal dicha delegación. Además, dicho Comité Ejecutivo debe cumplir los contratos celebrados con las empresas dedicadas a operar las naves tipo transbordador o ferry, por el tiempo que dure su vigencia, en los cuales se convino que los servicios portuarios serían pagados por las concesionarias "en base a lo que establece el Acuerdo C. E. N° 004-94 de 27 de abril de 1994" (fs. 35-64). Por tanto, considera la Sala que prospera este cargo de violación.

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA NULOS, POR ILEGALES, los puntos Primero y Cuarto del Acuerdo N° C. E. 008-94 de 14 de octubre de 1994, emitido por el Comité Ejecutivo de la Autoridad Portuaria Nacional; DECLARA QUE NO SON ILEGALES los puntos Segundo y Tercero del Acuerdo N° C. E. 008-94 de 14 de octubre de 1994; QUE ESTÁN VIGENTES los puntos PRIMERO, SEGUNDO, CUARTA (sic) y QUINTA (sic) del Acuerdo N° 004-94 de 27 de abril de 1994; y NIEGA las otras declaraciones pedidas.

Queda sin efectos la resolución dictada el 15 de marzo de 1995, por medio de la cual se suspendió provisionalmente los efectos del Acuerdo N° C. E. 008-94 de 14 de octubre de 1994, dictado por el Comité Ejecutivo de la Autoridad Portuaria Nacional.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LCDO. FRANCISCO FANOL FLORES EN REPRESENTACIÓN DE FELICIA RIVERA DE ARAOLAZA PARA QUE SE DECLARE NULO POR ILEGAL, EL REGLAMENTO EMITIDO PARA ORGANIZAR LAS ELECCIONES DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA POR EL GRAN JURADO DE ELECCIONES. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, QUINCE (15) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Lcdo. Francisco Fanol Flores, actuando en representación de Felicia

Rivera de Araolaza, ha interpuesta demanda contencioso administrativa de nulidad, para que se declare nulo por ilegal el Reglamento de elecciones de los Órganos de Gobierno de la Universidad Tecnológica.

En la demanda se solicita a la Sala que suspenda provisionalmente el acto administrativo impugnado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la Ley 135 de 1943.

El Magistrado Sustanciador procede a examinar la demanda para determinar si la misma cumple con los requisitos necesarios para su admisión.

En primer lugar, observa quien suscribe que el apoderado judicial de la parte actora obvia mencionar dentro del libelo, las partes y sus representantes tal como lo establece el artículo 43 de la Ley 135 de 1943. Aunado a lo anterior, tampoco se menciona que la Procuradora de la Administración es parte en el presente recurso e interviene en interés de la Ley como lo dispone el numeral 1 del artículo 348 del Código Judicial.

Seguidamente, encontramos que el procurador judicial de la señora Rivera, no transcribió las disposiciones legales que se consideran infringidas y menciona como violadas de manera general las leyes 135 de 1943 y 33 de 1946, sin determinar individualmente cuáles artículos de dichas leyes fueron violados por el reglamente impugnado, e incumplió así con lo establecido en el artículo 43 de la Ley 135 de 1943.

Finalmente, el Licdo. Flores estima como violado el artículo 32 de la Constitución Nacional. Tal como se ha establecido en reiterados fallos de la Sala Tercera, en las acciones de nulidad y de plena jurisdicción no se puede examinar la constitucionalidad de los actos administrativos impugnados, toda vez que dicha facultad es de competencia privativa del Pleno de la Corte Suprema de Justicia. A la Sala sólo le compete determinar la legalidad de los actos administrativos.

En relación a la solicitud de suspensión provisional del acto impugnado, el suscrito Magistrado Sustanciador considera que la misma carece de sustento autónomo, pues esta solicitud sólo es procedente, por razones de economía procesal, cuando la demanda cumple con los presupuestos necesarios para su admisibilidad. De lo contrario, se estaría efectuando un trámite preliminar sin objeto. Dado que en el presente caso, la demanda no cumple con los presupuestos procesales a los que se ha aludido anteriormente. Procede, pues, no admitir la demanda de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 135 de 1943.

En consecuencia, el Magistrado Sustanciador, actuando en representación de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE, la demanda contencioso administrativa de nulidad interpuesta por el Lcdo. Francisco Fanol Flores.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE NULIDAD, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO JUAN AGUILERA FRANCESCHI, EN REPRESENTACIÓN PROPIA, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO N° 13 DE 1° DE FEBRERO DE 1995, PROFERIDO POR LOS FISCALES DEL CIRCUITO DE CHIRIQUÍ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Juan Aguilera Franceschi, en representación propia, ha

interpuesto ante la Sala Tercera (contencioso-administrativa) de la Corte Suprema, demanda contencioso administrativa de nulidad para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto N° 13 de 1° de febrero de 1995, proferido por los Fiscales del Circuito de Chiriquí.

Encontrándose el presente negocio en estado de notificar la Resolución de 3 de agosto de 1995 al licenciado Aguilera, la Sala observa que se ha presentado desistimiento de la acción contencioso administrativa interpuesta contra el mencionado acto administrativo, por lo que procede a determinar su admisibilidad.

En virtud de que el artículo 66 de la Ley 135 de 1943 señala que la parte demandante puede desistir en cualquier momento del proceso, procede la Sala a admitir el desistimiento y dar por terminado el proceso.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE el desistimiento interpuesto por el licenciado Juan Aguilera Franceschi, DECLARA que ha terminado el proceso contencioso administrativo y ORDENA el archivo del expediente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) ROGELIO A. FÁBREGA Z.
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

IMPEDIMENTO

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DEL MAG. ARTURO HOYOS, DENTRO DE LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO PEDRO MORENO CÉSPEDES, EN REPRESENTACIÓN DE AURA IRIS AGUDO Y LIZ MARY CASTRELLÓN, PARA QUE SE DECLARE NULA, POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 28 DE 21 DE MARZO DE 1987, DICTADA POR LA JUNTA DE FACULTAD DE LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS DE LA UNIVERSIDAD DE PANAMÁ, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADO PONENTE: JUAN A. TEJADA MORA. PANAMÁ, CINCO (5) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El Magistrado **Arturo Hoyos** ha presentado solicitud para que se le declare impedido, y en consecuencia, se le separe del conocimiento de la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el Licenciado **Pedro Moreno Céspedes**, en representación de **AURA IRIS AGUDO Y LIZ MARY CASTRELLÓN**, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 28 de 21 de marzo de 1987, dictada por la Junta de Facultad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, y para que se hagan otras declaraciones.

Dicha manifestación de impedimento es del tenor siguiente:

> "Manifiesto a ustedes que me encuentro impedido para conocer de la Demanda Contencioso Administrativa de Plena Jurisdicción interpuesta por el Licenciado Pedro Moreno Céspedes, en representación de Aura Iris Agudo y Liz Mary Castrellón B., para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 28 de 21 de marzo de 1987, dictada por la Junta de Facultad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, y para que se hagan otras declaraciones, ya que en la época en que fue expedido el acto yo era miembro de la Junta de Facultad de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá.

> En vista de lo expresado y, con fundamento en el numeral 2 del artículo 78 de la Ley 135 de 1943 en concordancia con el numeral 12 del artículo 749 del Código Judicial, solicito respetuosamente a los Honorables Magistrados de la Sala Tercera que declaren legal el impedimento que manifiesto y me separen del conocimiento del negocio."

A juicio de quienes suscriben, la situación planteada efectivamente, encuentra asidero jurídico dentro de los supuestos legales contemplados en los artículos 78 (ordinal 2), y 749 (ordinal 12), de la Ley 135 de 1943, y del Código Judicial respectivamente, toda vez que tal como lo manifestara el Magistrado **HOYOS**, participó en la emisión del acto administrativo cuya ilegalidad se demanda.

El texto de las precitadas disposiciones legales, en el orden establecido, es el siguiente:

> **"ARTÍCULO 78.** Son causas de impedimento y recusación en los miembros del Tribunal de lo Contencioso administrativo las siguientes:
> ...
> 2. Haber dictado el acto o providencia de cuya revisión se trate, o haber contribuido a dictarlo, o haber ejecutado o contribuido a ejecutar el hecho u operación administrativa sobre que versa la actuación;" ...
>
> **"ARTÍCULO 749.** Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual esté impedido. Son causales de impedimento:
> ...
> 12. Haber intervenido el Juez o Magistrado en la formación del acto o del negocio objeto del proceso;"

En consecuencia, el resto de los Magistrados de la Sala Tercera (Contencioso Administrativo), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARAN LEGAL, el impedimento manifestado por el Magistrado ARTURO HOYOS, y, de conformidad con el artículo 78 del Código Judicial, DISPONEN designar al Magistrado de la Sala Civil ELIGIO A. SALAS, para que conozca del presente negocio.

Notifíquese.

(fdo.) JUAN A. TEJADA MORA
(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENNTO DEL MAG. HUMBERTO A. COLLADO T. DENTRO DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN, INTERPUESTO CONTRA EL AUTO DICTADO POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, DEL CUARTO DISTRITO JUDICIAL, MEDIANTE EL CUAL SE CONFIRMA EL RECHAZO DE LA ACUSACIÓN PARTICULAR INTERPUESTA POR RICARDO ARDITO JUÁREZ Y PABLO DOMINGO ARDITO JUÁREZ, CONTRA CESAR ARDITO BARLETTA VILLARREAL, SINDICADO POR EL SUPUESTO DELITO DE SIMULACIÓN DE HECHO PUNIBLE. MAGISTRADO PONENTE: HUMBERTO A. COLLADO T. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE LO PENAL.

VISTOS:

El Magistrado **HUMBERTO A. COLLADO T.**, manifestó impedimento para conocer del recurso extraordinario de casación, interpuesto contra el auto dictado por el Tribunal Superior de Justicia, del Cuarto Distrito Judicial, mediante el cual se confirma el rechazo de la acusación particular interpuesta por RICARDO ARDITO JUÁREZ y PABLO DOMINGO ARDITO JUÁREZ, contra CESAR ARDITO BARLETTA VILLARREAL,

sindicado por el supuesto delito de simulación de hecho punible, con base al numeral 5° del Artículo 749 y el Artículo 2283 del Código Judicial.

La manifestación de impedimento mencionada se expone en los siguientes términos:

> "A nombre de GANADERA PABSA, S. A., conforme a poder que me otorgo el señor CESAR ALBERTO ARDITO BARLETTA VILLARREAL, en su condición de representante legal de la misma, presenté en la Fiscalía del Circuito de Los Santos, en el Juzgado Segundo del Circuito de Los Santos y en el Juzgado Municipal del Distrito de Tonosí sendas acusaciones particulares contra los señores PABLO DOMINGO ARDITO JUÁREZ Y RICARDO ARDITO JUÁREZ y además, a nombre de CESAR ALBERTO ARDITO BARLETTA VILLARREAL y por poder que éste me confiriera, solicité la apertura de la sucesión testada de su difunto padre en el Juzgado Primero del Circuito de Los Santos. Así mismo expreso que actué como defensor del prenombrado CESAR ARDITO BARLETTA VILLARREAL en la acusación particular que en su contra y ante el Juzgado Segundo del Circuito de Los Santos le interpusieron los señores PABLO DOMINGO ARDITO JUÁREZ Y RICARDO ARDITO JUÁREZ".

La Sala estima que procede la manifestación de impedimento formula por el Honorable Magistrado **HUMBERTO A. COLLADO T.**, pues la misma se enmarca dentro del numeral 5° del artículo 749 y el artículo 2283 del Código Judicial, con lo que justifica su solicitud y que da lugar para separarlo del conocimiento de este negocio.

En virtud de lo expuesto, la CORTE SUPREMA, SALA SEGUNDA DE LO PENAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL el impedimento manifestado por el Magistrado HUMBERTO A. COLLADO T., y DESIGNA al Magistrado que corresponda en turno en la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, para que lo reemplace en esta causa.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) FABIÁN A. ECHEVERS
(fdo.) MARIANO E. HERRERA E.
Secretario

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN LICDA. DE FLTECHER, DENTRO DE LA DEMANDA CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN, INTERPUESTA POR LA FIRMA DE ABOGADOS VELARDE Y ASOCIADOS, EN REPRESENTACIÓN DE JORGE ISAAC GONZÁLEZ, PARA QUE SE DECLARE NULA POR ILEGAL, LA RESOLUCIÓN N° 407 DE 19 DE MARZO DE 1996, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE FONDOS COMPLEMENTARIOS DE PRESTACIONES SOCIALES, LA NEGATIVA TÁCITA POR SILENCIO ADMINISTRATIVO Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Mediante Vista N° 496 de 12 de noviembre de 1996, la señora Procuradora de la Administración, licenciada ALMA MONTENEGRO DE FLETCHER, solicitó a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que la declare impedida para conocer del proceso relativo a la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción interpuesta por la firma Velarde y Asociados, en nombre y representación de JORGE ISAAC GONZÁLEZ, para que se declare nula, por ilegal, la Resolución N° 407 de 19 de marzo de 1996, emitida por la Comisión de Fondo Complementario de la Caja de Seguro Social.

La Procuradora de la Administración fundamenta su petición en el hecho de

que su Despacho, mediante Consulta N° 166 de 21 de agosto de 1995, emitió opinión con respecto a la interpretación que merece el artículo 312 del Código Judicial, que contempla el derecho de jubilación especial que poseen los miembros del Ministerio Público y el Órgano Judicial (fs. 18-31).

La Sala considera que la solicitud hecha por la representante del Ministerio Público es procedente, pues la misma tiene fundamento en lo dispuesto en la parte final del numeral 5° del artículo 749 del Código Judicial que, en concordancia con el artículo 388 del mismo Código, establece lo siguiente:

> "Artículo 749: Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual está impedido. Son causales de impedimento:
> ...
> 5° Haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados, en el proceso, como Juez, agente del Ministerio Público, testigo, apoderado o asesor, o **haber dictaminado por escrito respecto de los hechos que dieron origen al mismo; ..."** (El subrayado es de la Sala).

Por lo antes expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia de lo Contencioso Administrativo, administrando Justicia en nombre de La República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES LEGAL el impedimento manifestado por la licenciada ALMA MONTENEGRO DE FLETCHER, Procuradora de la Administración y, en consecuencia, la separa del conocimiento del presente negocio y DISPONE llamar a su suplente para que la reemplace en el mismo.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CALIFICACIÓN DE IMPEDIMENTO DE LA PROCURADORA DE LA ADMINISTRACIÓN LICDA. DE FLETCHER, DENTRO DE LA DEMANDA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA DE PLENA JURISDICCIÓN INTERPUESTA POR EL LICENCIADO GENARINO ROSAS EN REPRESENTACIÓN DE GUILLERMO SERRANO FLORES, PARA QUE SE DECLARE NULO, POR ILEGAL, EL DECRETO EJECUTIVO N° 175 DE 24 DE JUNIO DE 1996, DICTADO POR CONDUCTO DEL MINISTRO DE GOBIERNO Y JUSTICIA, Y PARA QUE SE HAGAN OTRAS DECLARACIONES. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTIDÓS (22) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

Mediante Vista N° 497 de 14 de noviembre de 1996, la señora Procuradora de la Administración, licenciada ALMA MONTENEGRO DE FLETCHER, solicitó a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia que la declare impedida para conocer del proceso relativo a la demanda contencioso-administrativa de plena jurisdicción interpuesta por el licenciado Genarino Rosas, en nombre y representación de GUILLERMO SERRANO, para que se declare nulo, por ilegal, el Decreto Ejecutivo N° 175 de 24 de junio de 1996, por el cual se hace el nombramiento del Notario Público Segundo del Circuito Notarial de Chiriquí en reemplazo del licenciado GUILLERMO SERRANO, dictado por conducto del Ministro de Gobierno y Justicia, y para que se haga otras declaraciones.

La Procuradora de la Administración fundamenta su petición en el hecho de que su Despacho, mediante Consulta N° 58 de 17 de abril de 1995 (fs. 54-63), emitió opinión respecto a los siguientes aspectos:

1. Si el cargo de Notario Público está amparado por el régimen de carrera administrativa, o está sujeto a algún tipo de concurso o exigencia académica de

especialización.

2. Y, si de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales vigentes puede considerarse que los Notarios Públicos nombrados gozan de inamovilidad en sus puestos por el término para el cual fueron designados, o si, por el contrario, en el transcurso de ese término el Órgano Ejecutivo está facultado para removerlos cuando lo estime conveniente.

La Sala considera que la solicitud hecha por la representante del Ministerio Público es procedente, pues la misma tiene fundamento en lo dispuesto en el artículo 388 del Código Judicial que ordena aplicar a los agentes del Ministerio Público las normas sobre impedimentos de los Magistrados y Jueces, y en el artículo 749 ordinal 5° del mismo código que establece lo siguiente:

> "Artículo 749. Ningún Magistrado o Juez podrá conocer de un asunto en el cual está impedido. Son causales de impedimento:
> ...
> 5° Haber intervenido el Juez o Magistrado, su cónyuge o alguno de sus parientes dentro de los grados indicados, en el proceso, como Juez, agente del Ministerio Público, testigo, apoderado o asesor, o haber dictaminado por escrito respecto de los hechos que dieron origen al mismo; ...". (El subrayado es de la Sala).

Por lo antes expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, de lo Contencioso Administrativo, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA QUE ES LEGAL el impedimento manifestado por la licenciada ALMA MONTENEGRO DE FLETCHER, Procuradora de la Administración y, en consecuencia, la separa del conocimiento del presente negocio y DISPONE llamar a su suplente para que la reemplace en el mismo.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

JURISDICCIÓN COACTIVA

EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN, INTERPUESTA POR EL LICENCIADO ERNESTO SANTIAGO SELLES, EN REPRESENTACIÓN DE HÉCTOR RAMIRO QUINTERO GIRÓN, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, SUCURSAL DE CHITRÉ. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, PRIMERO (1°) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Ernesto Santiago Selles, actuando en nombre y representación de Ramiro Quintero Girón, ha interpuesto ante la Sala Tercera (contencioso-administrativa) de la Corte Suprema excepción de prescripción dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Banco Nacional de Panamá, Sucursal de Chitré.

El apoderado judicial de la parte actora, solicita a la Sala que se declare prescrita la acción ejercida por el Banco Nacional, Sucursal de Chitré, a través del Juzgado Ejecutor del Banco Nacional, Área Central, y por el cual pretende el cobro por la vía de la jurisdicción coactiva de la suma de treinta y cuatro mil novecientos noventa y seis balboas (B/.34,996.00) por razón de siete letras de cambio pagaderas en un término de un (1) año aceptadas por su poderdante a favor de PESCADERÍA QUINSA.

El licenciado Selles fundamenta su solicitud en los siguientes términos:

"PRIMERO: **HÉCTOR RAMIRO QUINTERO GIRÓN** aceptó a **PESCADERÍA QUINSA** letra con vencimiento al año de emitida, el 16 de abril de 1987 por la suma de Tres mil Balboas (B/.3,000.00).

SEGUNDO: **HÉCTOR RAMIRO QUINTERO GIRÓN** aceptó a **PESCADERÍA QUINSA** letra con vencimiento al año de emitida, el 28 de julio de 1987 por la suma de Seis Mil Quinientos Diez balboas (B/.6,510.00).

TERCERO: **HÉCTOR RAMIRO QUINTERO GIRÓN** aceptó a **PESCADERÍA QUINSA** letra con vencimiento al año de emitida, el 20 de octubre de 1987 por la suma de Tres mil Balboas (B/.3,000.00).

CUARTO: **HÉCTOR RAMIRO QUINTERO GIRÓN** aceptó a **PESCADERÍA QUINSA** letra con vencimiento al año de emitida, el 25 de noviembre de 1987 por la suma Dos Mil Quinientos Noventa y Seis Balboas (B/.2,596.00).

QUINTO: **HÉCTOR RAMIRO QUINTERO GIRÓN** aceptó a **PESCADERÍA QUINSA** letra con vencimiento al año de emitida, el 12 de enero de 1988 por la suma de Ocho Mil Balboas (B/.8,000.00).

SEXTO: **HÉCTOR RAMIRO QUINTERO GIRÓN** aceptó a **PESCADERÍA QUINSA** letra con vencimiento al año de emitida, el 2 de febrero de 1988 por la suma de Tres Mil Ochocientos Setenta y Siete Balboas (B/.3,877.00).

SÉPTIMO: **HÉCTOR RAMIRO QUINTERO GIRÓN** aceptó a **PESCADERÍA QUINSA** letra con vencimiento al año de emitida, el 9 de febrero de 1988 por la suma de Siete Mil Novecientos Ochenta y Tres Balboas (B/.7,983.00).

OCTAVO: Todas las letras descritas en los hechos primero al séptimo tienen más de cinco (5) años de vencidas.

NOVENO: Por lo expuesto en el hecho anterior la acción para demandar derivada de todas las letras descritas en el hecho anterior está prescrita con creces." (Fs. 10-11).

La Procuradora de la Administración contestó la excepción de prescripción propuesta por el licenciado Selles mediante la Vista N° 553 de 28 de diciembre de 1995, en la que solicita a la Sala se declare probada la excepción de prescripción interpuesta. A juicio de la Procuradora de la Administración el compromiso de pago existente entre el demandante y el Banco Nacional de Panamá, Sucursal Chitré, prescribió, dado que transcurrieron más de tres años sin que mediara cobro, contados a partir del momento que se hizo exigible lo adeudado, tal como lo preceptúa el artículo 908 del Código de Comercio.

Del estudio del expediente se observa a foja 19, que mediante Auto N° 99 de 4 de julio de 1995, se libró mandamiento de pago ejecutivo en contra de Héctor Ramiro Quintero Girón hasta la concurrencia de treinta y cuatro mil novecientos noventa y seis balboas (B/.34,996.00) en concepto de capital, más los intereses generados y los gastos de cobranza que se fijan en la suma de cuatrocientos balboas (B/.400.00).

Observa la Sala, a fojas 1 y 2 del expediente, copia autenticada de las letras de cambio giradas a favor de PESCADERÍA QUINSA, fechadas el 16 de abril de 1987 por B/.3,000.00; 28 de julio de 1987 por B/.6,510.00; el 20 de octubre de 1987 por B/.3,000.00; 25 de noviembre de 1987 por B/.2,596.00; 12 de enero de 1988 por B/.8,000.00; el 2 de febrero de 1988 por B/.3,877.00; 9 de febrero de 1988, por B/.7,983.00, que no fueron canceladas al banco en el término en ellas establecido.

De lo anterior concluye la Sala que, efectivamente, la acción interpuesta por el Banco Nacional en este caso a fin de hacer efectivo su crédito, ha prescrito toda vez que el artículo 908 del Código de Comercio es claro al disponer que el término de prescripción de las acciones que resultan de una letra de cambio contra el aceptante es de tres años. En ese sentido, observa la Sala

que de las copias de los documentos negociables en litigio, se deduce claramente que desde el tiempo en que se hicieron exigibles las obligaciones, es decir, 16 de abril de 1988, 22 de julio de 1988, 20 de octubre de 1987, 25 de noviembre de 1988, 12 de julio de 1988, 2 de febrero de 1989 y 9 de enero de 1989 respectivamente, aunado a que el último abono efectuado a los intereses, según documentación allegada, fue el 28 de enero de 1992, y la fecha de notificación del auto de mandamiento de pago, el 7 de julio de 1995, han transcurrido más de 3 años, excediéndose el derecho del Banco Nacional de hacer exigible la obligación. Por otro lado, tampoco consta en el expediente documento alguno que acredite la interrupción de la prescripción de la acción en los términos previstos en el artículo 1649-A del Código de Comercio en concordancia con el artículo 658 del Código Judicial.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA PROBADA la excepción de prescripción interpuesta por el licenciado Ernesto Santiago Selles, en representación de Héctor R. Quintero dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el Banco Nacional, Sucursal de Chitré.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE RECONSIDERACIÓN, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO BORIS E. BARRIOS, EN REPRESENTACIÓN DE CARLOS ALBERTO ECHEVERRÍA, CONTRA EL AUTO DE 20 DE SEPTIEMBRE DE 1996, DICTADO POR EL JUEZ EJECUTOR DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, EN EL CUAL SE DECRETA FORMAL SECUESTRO SOBRE BIENES DE TALLER REVASA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Boris E. Barrios, actuando en nombre y representación de Carlos Alberto Echeverría, ha interpuesto ante la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia recurso de reconsideración contra el auto de 20 de septiembre de 1996, dictado por el Juez Ejecutor de la Caja de Seguro Social, en el cual se decreta formal secuestro sobre bienes del Taller Revasa.

Se trata de un proceso ejecutivo por cobro coactivo en el cual la Caja de Seguro Social persigue cobrar a Juan Carlos Echeverría, representante legal del Taller Revasa, un monto de cinco mil doscientos siete balboas con un centésimo (B/.5,207.01) por encontrarse moroso en el pago de las cuotas obrero patronales. Igualmente observa la Sala que mediante Auto de 20 de septiembre de 1996, el Juez Ejecutor de la Caja del Seguro Social, decretó formal secuestro sobre todos los bienes muebles e inmuebles, dineros, créditos, valores, cuentas por cobrar, registros contables, cuentas de ahorro, cuentas corrientes, y la administración de la empresa incluyendo los bienes que se adquieran durante ésta, propiedad de Juan Carlos Echeverría (Taller Revasa), hasta la concurrencia de la suma provisional de cinco mil doscientos siete balboas con un centésimo (B/.5,207.01), más los intereses legales que resulten a la fecha de la cancelación.

El licenciado Boris E. Barrios G. sustenta el recurso de reconsideración en los siguientes términos:

> **"PRIMERO:** Ciertamente existió el Taller Revasa, cuyo representante era el señor **JUAN CARLOS ECHEVERRÍA**, y no **CARLOS ALBERTO ECHEVERRÍA**.

SEGUNDO: El taller Revasa cerró sus instalaciones hace más de cuatro meses, y se desconoce la ubicación de la actual administración.

TERCERO: El señor **CARLOS ALBERTO ECHEVERRÍA**, tiene un Taller denominado Car Servis, ubicado en la Interamericana, al lado de la Estación Los Guayacanes, en el sector del Puente Caimito en la entrada de La Chorrera.

CUARTO: El señor **CARLOS ALBERTO ECHEVERRÍA**, recibió en el día de ayer la notificación de la decisión de 20 de septiembre de 1996, del Juzgado Ejecutor de la Caja de Seguro Social, situación que no se explica a razón de que el Taller Car Servis cuyo representante es el señor **CARLOS ALBERTO ECHEVERRÍA**, a éste último a quien está dirigida la resolución."

Observa la Sala que el Juez Ejecutor de la Caja de Seguro Social remitió el presente recurso de reconsideración a la Secretaría de la Sala Tercera (Contencioso- Administrativa) mediante Nota N° JE-N 2642-96 de 30 de septiembre de 1996.

La Sala observa que de acuerdo a lo que establece el artículo 1804 del Código Judicial esta Sala conocerá de las apelaciones, incidentes, excepciones, tercerías y nulidades que fuesen presentadas en las ejecuciones por cobro coactivo. Por lo tanto, la Sala no puede resolver el recurso de reconsideración interpuesto, ya que el mismo debió haber sido interpuesto ante la misma autoridad que dictó dicho auto que decretó el formal secuestro, en este caso el Juez Ejecutor de la Caja del Seguro Social, para que lo revoque, reforme, adicione o aclare, tal como lo preceptúa el artículo 1114 del Código Judicial.

En virtud de lo anterior, lo procedente es rechazar de plano el recurso de reconsideración por improcedente.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso administrativa) de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO el recurso de reconsideración interpuesto por el licenciado Boris E. Barrios, actuando en nombre y representación de Carlos Alberto Echeverría.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE SECUESTRO, INTERPUESTO POR LA LICENCIADA ALMA LORENA CORTÉS, EN REPRESENTACIÓN DE OMICRÓN PANAMÁ CORPORATION, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LA DIRECCIÓN GENERAL DE AERONÁUTICA CIVIL LE SIGUE A LA EMPRESA AEROVÍAS LAS AMÉRICAS. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Alma Lorena Cortés, actuando en nombre y representación de OMICRóN PANAMÁ CORPORATION, ha interpuesto ante la Sala Tercera (contencioso-administrativa) de la Corte Suprema incidente de levantamiento de secuestro dentro del juicio ejecutivo por cobro coactivo que la Dirección General de Aeronáutica Civil le sigue a la Empresa Aerovías las Américas.

La licenciada Cortés sustenta el incidente de levantamiento de secuestro en los siguientes términos:

"**PRIMERO:** La empresa OMICRóN PANAMÁ CORPORATION y la empresa AEROVÍAS LAS AMÉRICAS, firmaron un Contrato de Venta N° 2193 el 31 de agosto de 1995.

SEGUNDO: Que en virtud de este Contrato se le dio (sic) a la empresa AEROVÍAS LAS AMÉRICAS una Copiadora MITA DC-1435, serie N° 46112560 con un valor de (B/.1,710.00).

TERCERO: Que mediante una Acción de Secuestro interpuesta por el Juzgado Ejecutor de Aeronáutica Civil se incorporó la Copiadora MITA DC-1435, serie N° 46112560 con un valor de (B/.1,710.00) propiedad de la empresa **OMICRÓN PANAMÁ CORPORATION**, ya que en atención a lo que establece la Cláusula Octava de dicho Contrato se establece la Retención del Dominio hasta cuando quede satisfecha la obligación.

CUARTO: En virtud del hecho anterior y que se trata de un hecho real, Retención de Dominio, nuestra legislación establece claramente que dichos objetos muebles o inmuebles que se encuentren en este estado no son sujetos de ninguna acción promovida por terceros (en este caso Aeronáutica (sic) Civil), lo cual corroboramos con el Decreto Ley N° 2 del 24 de mayo de 1995, mediante el cual se adiciona el artículo 1567 del Código Civil sobre lo relativo a este tipo de Contrato de Compra-Venta con Retención de Dominio, como lo establecen respectivamente los artículos 12,15 y siguientes de la citada excerta legal.

QUINTO: De lo indicado en el hecho anterior y analizando la cláusula octava del Contrato de Venta N° 2193 de 31 de agosto de 1995, se observa claramente en parte pertinente lo pactado por las partes en lo siguiente ... "EL VENDEDOR conserva sus derechos de dominio sobre dicho artículo (sic), no haya sido totalmente pagado el precio aquí estipulado y el valor de los accesorios y servicios que EL COMPRADOR adeude AL VENDEDOR".

SEXTO: Así también tenemos en el artículo 12 del citado Decreto Ley N° 2 de 1955 en sus numerales 13, 14, 15 y 16 se establece claramente la protección que por Ley le da al VENDEDOR de conservar la cosa objeto del Contrato de Compra Venta, hasta la cancelación total de la obligación para que el VENDEDOR tenga la obligación de transferir su título de dominio al COMPRADOR. De lo indicado, se establece claramente en la cláusula novena del referido Contrato de Venta que "fuera de los casos especificados en la Ley, el VENDEDOR podrá recuperar la tenencia del artículo, si este fuere secuestrado o embargado o en otra forma perseguido por un tercero".

SÉPTIMO: De lo indicado, se establece igualmente que para hacer efectiva una Acción de Secuestro el bien inmueble objeto de está (sic) debe encontrarse en disposición, o libre de gravámenes u otras limitaciones legales, en este caso se observa claramente que a la luz de lo que estipula el artículo 527 del Código Judicial no se puede secuestrar o embragar un bien inmueble pignorado, y esta acción no debe practicarse o debe suspenderse si se ha practicado a la presentación inmediata del acreedor prendario al presentar documentos constitutivo de la prenda o fecha cierta anterior, al respectivo auto de secuestro.

OCTAVO: Como consta en el Contrato en referencia, además de existir una obligación entre el COMPRADOR y el VENDEDOR en virtud de la entrega de una cosa por el pago del valor de la misma, en este caso la Acción de Aeronáutica Civil se puede ubicar claramente como la acción de un tercero en esta relación comercial de Contrato de Prenda, ya que OMICRÓN PANAMÁ CORPORATION por ley mantiene el dominio o propiedad del bien mueble secuestrado por este ente estatal; lo cual obviamente lo esta ocasionando un grave perjuicio y violación sobre el derecho de propiedad que tiene nuestra empresa

representada."

La Sala debe examinar si procede la interposición del incidente de levantamiento de secuestro.

Observa la Sala que ante la Secretaría de la Sala Tercera fue interpuesta, por la licenciada Alma Lorena Cortes, actuando en representación de Omicrón Panamá Corporation, una tercería excluyente, el 29 de marzo de 1996, dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que Aeronáutica Civil le sigue a Aerovías las Américas en la que se solicita reivindicar el dominio del bien mueble reclamado a su legítimo propietario, la empresa OMICRÓN PANAMÁ CORPORATION. También se observa que el incidente de levantamiento de secuestro fue presentado ante la Sala Tercera el 16 de agosto de 1996, estando en trámite la tercería excluyente por la misma causa. En este sentido el artículo 690 del Código Judicial prevé claramente esta situación y señala:

> "Artículo 690. Todo incidente que se origine de un hecho que acontezca durante el proceso, deberá promoverse tan pronto como el hecho llegue al conocimiento de la parte respectiva.
>
> Si en el proceso constare que el hecho a llegado a conocimiento de la parte y ésta hubiere practicado con posterioridad una gestión, el incidente promovido después será rechazado de plano, salvo que se tratare de alguno de alguno de los vicios o circunstancias a que se refiere el párrafo segundo del artículo anterior, caso en el cual se ordenará que se practiquen las diligencias necesarias para que el proceso siga su curso legal.
>
> También rechazará el Juez de plano el incidente que se refiere a puntos ya resueltos en otro o cuando se está tramitando otro por la misma causa o cuando, a pesar de fundamentarse con una distinta, éste haya podido alegarse en el anterior." (El subrayado es nuestro).

En virtud de lo anterior, por ser el incidente manifiestamente improcedente, debe ser rechazado de plano.

En consecuencia, la Sala Tercera (Contencioso Administrativa) de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RECHAZA DE PLANO el incidente de levantamiento de secuestro, interpuesto por la licenciada Alma Lorena Cortes, en representación de OMICRÓN PANAMÁ CORPORATION, dentro del juicio ejecutivo por cobro coactivo que la Dirección General de Aeronáutica Civil le sigue a la EMPRESA AEROVÍAS LAS AMÉRICAS.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA (fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TERCERÍA COADYUVANTE, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA IVIS BOTELLO, EN REPRESENTACIÓN DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, CASA MATRIZ, CONTRA FRANCO E HIJOS, S. A. Y OTROS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Ivis Botello, actuando en nombre y representación de la Caja de Seguro Social, ha interpuesto tercería coadyuvante dentro del proceso

ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el BANCO NACIONAL DE PANAMÁ a FRANCO HIJOS, S. A. y OTROS, S. A., para que con el producto del remate de los bienes perseguidos en dicha ejecución, se pague a su representada la suma de B/.141,002.49 en concepto de cuotas obrero patronales y otros descuentos de Ley, más gastos, costas e intereses legales hasta la fecha de la cancelación, que la ejecutada le adeuda a la Caja de Seguro Social.

El apoderado judicial de la tercerista fundamenta la pretensión de su representada en los hechos siguientes:

> "**PRIMERO:** FRANCO HIJOS, S. A., está inscrita en la Caja de Seguro Social como patrono número 87-280-0013, según consta en los registros de esta Institución.
>
> **SEGUNDO:** Desde su inscripción FRANCO HIJOS, S. A., se obligó a pagar las cuotas obrero patronales tal como lo señala el Artículo 66A del Decreto Ley número 14 del 27 de agosto de 1954, que constituye la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social.
>
> **TERCERO:** FRANCO HIJOS, S. A., ha incumplido la obligación contraída al omitir el pago de las cotizaciones ordenadas por la Ley.
>
> **CUARTO:** FRANCO HIJO, S. A., adeuda a la Caja de Seguro Social la suma de B/.141,002.49, en concepto de cuotas obrero patronales y otros descuentos de Ley, más las costas, gastos e intereses legales.
>
> **QUINTO:** El Juzgado Ejecutor del Banco Nacional, ha señalado el día 16 de Enero de 1996, como fecha para el Remate de los bienes embargados en este proceso.
>
> **SEXTO:** La Caja de Seguro Social goza de preferencia respecto de cualesquiera otros acreedores, en relación con los créditos por aportes obrero patronales y otros recargos legales, tal como lo señala el Artículo 77 del Decreto Ley número 14 del 27 de agosto de 1954, Orgánica de esta Institución." (Fs. 4 y 5).

La tercerista aporta como prueba certificación de deuda a cargo de la ejecutada expedida por la Dirección de Ingresos de la Caja de Seguro Social, por el monto de B/.141,002.49 correspondiente a 84 meses morosos desde octubre de 1987 hasta noviembre de 1995 y copia autenticada por el jefe del departamento de Administración de Relaciones Obrero-Empleador de la ficha de inscripción patronal de la sociedad Franco Hijos, S. A. (Fs. 1 y 2).

Admitida la tercería, se corrió en traslado al Juez Ejecutor del BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, a la señora Procuradora de la Administración y a los ejecutados por el término de Ley y se ordenó suspender el pago.

El licenciado Carlos Bieberach, apoderado judicial del Banco Nacional de Panamá, contestó la tercería negando la mayoría de los hechos y el derecho invocado, y solicitó a esta Sala que niegue las pretensiones de la tercerista, porque las pruebas presentadas no prestan mérito ejecutivo y no pueden sustentar una tercería coadyuvante.

Alegó que mediante Escritura Pública N° 12,656 de 30 de agosto de 1983, de la Notaría Cuarta del Circuito de Panamá, inscrita en el Registro Público, Sección de Micropelículas (Hipotecas y Anticrésis) a la Ficha 17740, Rollo 4436, Imagen 0113, el Banco Nacional de Panamá prestó a Franco Hijos, S. A. la suma de B/.61,000.00, con garantía hipotecaria de bienes de inmuebles y fianza personal.

Señaló que mediante Auto de 25 de noviembre de 1987, el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, Casa Matriz, declaró la obligación de plazo vencido y libró mandamiento de pago ejecutivo a favor del Banco Nacional de Panamá, contra Franco Hijos, S. A., Colombia Franco Sandoval de Ponce, Iván Rodrigo Ponce Franco y Joaquín Pablo Franco Sandoval, como fiadores solidarios, y decretó embargo sobre bienes inmuebles y muebles.

La señora Procuradora de la Administración, en su Vista Fiscal N° 158 de 11 de abril de 1996, expresó que la presente tercería cumple sólo parcialmente con los requisitos legales que exige el ordinal 5 del artículo 1794 del Código Judicial, porque la certificación de deuda de cuotas obrero patronales aportada por la Caja de Seguro Social, de octubre de 1987 a noviembre de 1995, con excepción de las cuotas de octubre y noviembre de 1987, es de fecha posterior al auto ejecutivo dictado por el Banco Nacional de Panamá el 25 de noviembre de 1987.

Finalmente, la señora Procuradora indicó que aunque la Caja de Seguro Social posee un crédito exigible, el mismo no tiene la categoría de privilegiado, según el artículo 1661 del Código Civil.

De acuerdo con las constancias procesales, mediante Auto de 25 de noviembre de 1987, el Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá-DECREDEL, libró mandamiento de pago por la vía ejecutiva en contra de FRANCO HIJOS, S. A. y COLOMBIA FRANCO SANDOVAL DE PONCE, IVÁN RODRIGO PONCE FRANCO, JOAQUÍN FRANCO SANDOVAL, en calidad de fiadores solidarios por la suma de B/.58,225.67 en concepto de capital, intereses y gastos de cobranza, sin perjuicio de los intereses que se sigan causando hasta el completo pago de la obligación, y decretó embargo sobre al finca N° 13659, inscrita al Folio 350, del Tomo 375, de la Sección de la Propiedad, Provincia de Panamá, propiedad de COLOMBIA FRANCO SANDOVAL o COLOMBIA FRANCO SANDOVAL VIUDA DE PONCE y sobre los siguientes bienes muebles: Una guillotina propia marca NEBIOLD modelo TNE 90 de 34" serie 56560, valorada en B/.8,000.00 y una máquina propia Minerva Automática Herdelberg modelo T, serie #194270 valorada en B/.17,535.00 (fs. 29 a 31 del expediente del proceso ejecutivo).

Sirvió como título ejecutivo la Escritura Pública N° 12,656 de 30 de agosto de 1983, por la cual el BANCO NACIONAL DE PANAMÁ y la sociedad FRANCO HIJOS, S. A. celebran contrato de préstamo con garantía hipotecaria de bienes inmueble y muebles, adicionada y reformada por la Escritura Pública N° 5813 de 28 de abril de 1996. (Fs. 19 a 27).

El segundo párrafo del artículo 1766 del Código Judicial dispone que las tercerías en los procesos ejecutivos hipotecarios sólo son admisibles, entre otros supuestos, cuando el tercerista posea algún "crédito que reúna las condiciones del artículo 1639".

En este sentido, y conforme el numeral 2 del artículo 1803 en concordancia con el numeral 14 del precitado artículo 1639, la certificación de deuda expedida por la Dirección de Ingresos de la Caja de Seguro Social presta mérito ejecutivo con respecto a las cuotas obrero patronales adeudadas antes de que el Banco Nacional de Panamá dictara el auto ejecutivo de 25 de noviembre de 1987, o sea aquellas del mes de octubre de 1987 al 24 de noviembre de 1987, ya que el numeral 5 del artículo 1794 del Código Judicial establece que la tercería coadyuvante debe apoyarse en alguno de los documentos que presten mérito ejecutivo y de **fecha cierta anterior al auto ejecutivo**.

Por tanto, esta Sala debe declarar no probada la tercería coadyuvante propuesta por la Caja de Seguro Social, en relación a la deuda de las cuotas obrero patronales originada con posterioridad al 24 de noviembre de 1987.

Finalmente, la Sala observa que el proceso ejecutivo en que se ha promovido la presente tercería es hipotecario de bienes inmuebles y muebles, por tanto, el crédito que aquí se cobra tiene preferencia sobre el crédito derivado del no pago de las cuotas obrero patronales, de conformidad con el artículo 1661 del Código Civil, reformado por la Ley 52 de 7 de diciembre de 1962, que es posterior al Decreto Ley 14 de 1954, Orgánico de la Caja de Seguro Social, tal como se manifestó en la Resolución de 18 de julio de 1984, en la cual la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia expresó que "No parece de más recalcar que la reforma introducida al artículo 1661 del Código Civil por la Ley 52 de 1962 fue precisamente en su ordinal 3°, y por esto obviamente esclarece el propósito legislativo de concederle mérito preferencial al crédito hipotecario y anticrético." (Registro Judicial de Julio de 1984, págs. 37 a 44).

En virtud de que se ha probado la presente tercería con respecto a la deuda contraída por la ejecutada con la Caja de Seguro Social por el no pago de las cuotas obrero patronales de los meses de octubre y noviembre de 1987, debe ordenarse que con la venta de los referidos bienes muebles perseguidos en la ejecución hipotecaria promovida por el Banco Nacional de Panamá, se pague a la Caja de Seguro Social el crédito reconocido a su favor, anterior al 24 de noviembre de 1987, con la preferencia que se determine en el auto de prelación correspondiente, conforme lo ordena el artículo 1770 del Código Judicial.

En consecuencia, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA PARCIALMENTE PROBADA la tercería coadyuvante propuesta por la licenciada Ivis Botello, en nombre y representación de la CAJA DE SEGURO SOCIAL dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el BANCO NACIONAL DE PANAMÁ a la sociedad FRANCO HIJOS, S. A., en relación con la deuda de las cuotas obrero patronales del mes de octubre de 1987 al 24 de noviembre de 1987 y ORDENA que el crédito reconocido a su favor se le pague con la preferencia que la ley determina.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE NULIDAD DE REMATE, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO JOSÉ ANTONIO ARAÚZ CUEVAS, EN REPRESENTACIÓN DE CUPERTINO CASTRO, DENTRO DEL JUICIO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LA ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS DE LA PROVINCIA DE COLÓN LE SIGUE A EMILY SINMKINS G. MAGISTRADO PONENTE: EDGARDO MOLINO MOLA. PANAMÁ, TRECE (13) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado **José Antonio Araúz Cuevas**, en representación de **CUPERTINO CASTRO**, dentro del juicio ejecutivo por cobro coactivo que la Administración Regional de Ingresos de la Provincia de Colón le sigue a EMILY SINMKINS G., ha presentado desistimiento de la nulidad de remate.

En efecto, a foja 39 del expediente se aprecia el escrito de desistimiento presentado por el actor ante esta Superioridad, en los siguientes términos:

> "El suscrito, JOSÉ ARAÚZ CUEVAS, abogado en ejercicio, de generales anteriormente señaladas, las cuales constan en autos, ante Ud. concurro con todo respeto, en mi calidad de apoderado especial del señor **CUPERTINO CASTRO**, en la NULIDAD DE REMATE, interpuesta en contra de la ADMINISTRACIÓN REGIONAL DE INGRESOS DE COLÓN, con el objeto de DESISTIR de la nulidad de remate impetrada, habida vez que el remate recurrido se ha viciado por falta de pago, por parte del adjudicatario provisional, lo que hace innecesario que los señores magistrados se pronuncien sobre el tema".

Vencido el término de traslado del desistimiento presentado por el apoderado de **CUPERTINO CASTRO**, entra este Tribunal a resolverlo.

El presente desistimiento es perfectamente viable en virtud del artículo 1073 del Código Judicial que expresa:

> "ARTÍCULO 1073: Toda persona que haya entablado una demanda, promovido un incidente o interpuesto un recurso, puede desistir expresa o tácitamente.

> El desistimiento, una vez presentado al Juez, es irrevocable.
> El demandado puede también desistir de la oposición a la demanda, caso en el cual se hace responsable a tenor de la misma, conforme a derecho.
> Todo desistimiento se entiende hecho simplemente y sin condición. Si el desistimiento es condicional, han de aceptarlo todas las partes expresamente por medio de memorial." (Subrayado nuestro).

En consecuencia, la Sala Tercera, Contencioso Administrativo, de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, ADMITE EL DESISTIMIENTO del incidente de nulidad de remate, interpuesto por el licenciado José Antonio Araúz Cuevas, en representación de CUPERTINO CASTRO.

Notifíquese.

(fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) ANAIS BOYD DE GERNADO
Secretaria Encargada

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TERCERÍA COADYUVANTE, INTERPUESTA POR LA LICENCIADA IVIS BOTELLO, EN REPRESENTACIÓN DE LA CAJA DE SEGURO SOCIAL, DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE EL BANCO NACIONAL DE PANAMÁ-ÁREA METROPOLITANA-CASA MATRIZ, A PUBLICACIONES PANAMEÑAS, S. A. Y OTROS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

La licenciada Ivis Botello, en representación de la CAJA DE SEGURO SOCIAL, ha interpuesto tercería coadyuvante dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, Casa Matriz, a PUBLICACIONES PANAMEÑAS, S. A. y OTROS.

La tercerista fundamenta la pretensión de su representada en los hechos siguientes:

> **"PRIMERO: PUBLICACIONES PANAMEÑAS, S. A.,** está inscrita en la Caja de Seguro Social como patrono número **87-839-0409**, según consta en los registros de esta Institución.
>
> **SEGUNDO:** Desde su inscripción PUBLICACIONES PANAMEÑAS, S. A., se obligó a pagar las cuotas obrero patronales tal como lo señala el Artículo 66A del Decreto Ley número 14 del 27 de agosto de 1954, que constituye la Ley Orgánica de la Caja de Seguro Social.
>
> **TERCERO:** PUBLICACIONES PANAMEÑAS, S. A., ha incumplido la obligación contraída al omitir el pago de las cotizaciones ordenadas por la Ley.
>
> **CUARTO:** PUBLICACIONES PANAMEÑAS, S. A., adeuda a la Caja de Seguro Social la suma de B/.58,519.59, en concepto de cuotas obrero patronales y otros descuentos de Ley, más las costas, gastos e intereses legales.
>
> **QUINTO:** El Juzgado Ejecutor del Banco Nacional, ha señalado el día 20 de diciembre de 1995, como fecha para el Remate de los bienes embargados en este Proceso.
>
> **SEXTO:** La Caja de Seguro Social goza de preferencia respecto de

cualesquiera otros acreedores, en relación con los créditos por aportes obrero patronales y otros recargos legales, tal como lo señala el Artículo 77 del Decreto Ley número 14 del 27 de agosto de 1954, Orgánico de esta Institución." (Fs. 7 y 8).

La tercerista aporta como prueba certificación de deuda a cargo de la ejecutada expedida por la Dirección de Ingresos de la Caja de Seguro Social, por el monto de B/.58,519.59 correspondiente a 23 meses morosos desde junio de 1984 hasta abril de 1990 y copia autenticada de la ficha de inscripción patronal de la sociedad Publicaciones Panameñas, S. A. (Fs. 2 y 3).

Admitida la tercería, se corrió en traslado al Juez Ejecutor del BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, a la señora Procuradora de la Administración y a los ejecutados por el término de Ley y se ordenó suspender el pago.

La señora Procuradora de la Administración consideró probada la presente tercería, porque a su juicio es oportuna y se fundamenta en título ejecutivo, conforme lo establecen los artículos 1746, 1794 y 1803 del Código Judicial.

Mediante Auto de 29 de mayo de 1990, el Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, Casa Matriz, libró mandamiento de pago en contra de Publicaciones Panameñas, S. A. y otros, y decretó embargo sobre la finca 104,524 inscrita al rollo 5567, documento 3 de propiedad de Publicaciones Panameñas, S. A. y sobre la finca 29,215 inscrita al folio 328, del tomo 713 de propiedad de Gilma Raquel Noriega de Jurado, hasta la concurrencia de B/.294,080.22 en concepto de capital, intereses y gastos de cobranza, sin perjuicio de los intereses que se causen hasta el completo pago de la obligación, y ordenó la venta de los inmuebles embargados con citación de su dueño. Posteriormente, mediante los autos de 10 de julio de 1990 y 22 de octubre de 1990, el Juez Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, corrigió y adicionó el auto de mandamiento de pago en el sentido de excluir de la ejecución la finca N° 29215 inscrita al folio 328 del tomo 713 del Registro Público, Sección de la Propiedad Provincia de Panamá y señaló que dicha finca no pertenece a Gilma Raquel Noriega de Jurado (fs. 54 a 58 del expediente del proceso ejecutivo).

Sirvió como título ejecutivo la Escritura Pública N° 4052 de 18 de abril de 1983, por la cual el Banco Nacional de Panamá y la sociedad Publicaciones Panameñas, S. A. celebran contrato de préstamo con garantía hipotecaria de bienes inmuebles y fianzas personales, adicionada y reformada por la Escritura Pública N° 398 de 11 de enero de 1988 (fs. 24 a 40 del expediente del proceso ejecutivo).

Como fueron declarados desiertos el primer y segundo remate de la finca N° 104,524, inscrita al folio 5567, documento 3 de la Sección de Propiedad, Provincia de Panamá, de propiedad de Publicaciones Panameñas, S. A., correspondientes a los días 29 de noviembre de 1995 y 20 de diciembre de 1995 respectivamente, el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá adjudicó el día 21 de diciembre de 1995, al Banco Nacional de Panamá el referido bien inmueble por la suma de B/.2,625.00, en virtud de que fue la única postura presentada (fs. 360 y 371 del expediente del proceso ejecutivo).

El segundo párrafo del artículo 1766 del Código Judicial dispone que las tercerías en los procesos ejecutivos hipotecarios sólo son admisibles, entre otros supuestos, cuando el tercerista posea algún "crédito que reúna las condiciones del artículo 1639".

Conforme el numeral 2 del artículo 1803 en concordancia con el numeral 14 del precitado artículo 1639, la certificación de deuda expedida por la Dirección de Ingresos de la Caja de Seguro Social presta mérito ejecutivo, porque corresponde al período comprendido entre el mes de junio de 1984 y el mes de abril de 1990, o sea que es anterior al auto ejecutivo dictado por el Juzgado Ejecutor del Banco Nacional de Panamá, Casa Matriz el 29 de mayo de 1990.

Por tanto, esta Sala debe declarar probada la presente tercería coadyuvante propuesta por la Caja de Seguro Social y ordenar que con el producto de la venta del bien inmueble objeto del remate, se le pague el crédito reconocido a su favor, con la preferencia que se determine en el auto de prelación

correspondiente, conforme lo ordena el artículo 1770 del Código Judicial. En este auto deberá tomarse en consideración la preferencia de que gozan los créditos hipotecarios sobre los créditos de la Caja de Seguro Social, de conformidad con el artículo 1661 del Código Civil modificado por la Ley 52 de 7 de diciembre de 1962, tal como lo ha interpretado la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia (Sentencia de 18 de julio de 1984, Registro Judicial de julio de 1984, pág. 37 a 44).

De consiguiente, la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA PROBADA la tercería coadyuvante propuesta por la licenciada Ivis Botello, en nombre y representación de la CAJA DE SEGURO SOCIAL dentro del proceso ejecutivo por cobro coactivo que le sigue el BANCO NACIONAL DE PANAMÁ, CASA MATRIZ, a PUBLICACIONES PANAMEÑAS, S. A. y OTROS, y ordena que con el crédito reconocido a su favor se le pague con la preferencia que la ley determina.

Notifíquese.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DE REMATE, INTERPUESTO POR EL LICENCIADO GABRIEL ARIEL LAWSON, EN REPRESENTACIÓN DE INVERSIONES E INDUSTRIAS CHANOC, S. A., DENTRO DEL PROCESO EJECUTIVO POR COBRO COACTIVO QUE LE SIGUE LA CAJA DE AHORROS. MAGISTRADA PONENTE: MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA. PANAMÁ, VEINTISÉIS (26) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA TERCERA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

VISTOS:

El licenciado Edgardo Arias, Juez Ejecutor de la Caja de Ahorros, mediante oficio N° 2709 de 13 de noviembre de 1996, remitió a la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, el poder que le otorgó la ejecutada Inversiones e Industrias Chanoc, S. A. al licenciado Gabriel A. Lawson y el recurso de suspensión de remate presentado por el licenciado Lawson dentro del proceso ejecutivo hipotecario por cobro coactivo que le sigue la Caja de Ahorros a Inversiones e Industrias Chanoc, S. A.

El licenciado Lawson considera que su solicitud de suspensión de los remates de las fincas 20321, 20322 y 7919, procede en virtud de que existen causales de nulidad del proceso, señalando que no se notificó al señor Gabriel Cedeño, representante legal de la sociedad ejecutada, ni consta dirección en la que pueda ser localizado. Asimismo manifestó que a la fecha no se le ha notificado de la resolución que ordena el emplazamiento de la demandada, que el Auto N° 1088, por el cual se ordena el remate, fue notificado por edicto a pesar de que es la primera resolución dictada luego de estar paralizado el proceso por más de un mes, violándose el numeral 4 del artículo 989 del Código Judicial, y finalmente, afirma que los avisos de remate no se confeccionaron y publicaron de la manera establecida por los artículos 1733 y 1745 del Código Judicial.

La Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia observa que mediante el escrito presentado por el apoderado de la parte ejecutada, se hace una simple solicitud de suspensión del remate que no debe ser resuelta por esta Superioridad, porque el artículo 1804 del Código Judicial no le otorga competencia para ello. Esta petición debe resolverla el Juez Ejecutor de la Caja de Ahorros, de conformidad con el artículo 1801 del Código Judicial.

En mérito de lo expuesto, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SE INHIBE de conocer de la solicitud de suspensión de remate de las fincas 20321,

20322 y 7919, presentada por el licenciado Gabriel Ariel Lawson, dentro del proceso ejecutivo hipotecario por cobro coactivo que la Caja de Ahorros le sigue a la Sociedad INVERSIONES E INDUSTRIAS CHANOC, S. A., y DECLINA su conocimiento en el Juzgado Ejecutor de la CAJA DE AHORROS.

Notifíquese y Remítase.

(fdo.) MIRTZA ANGÉLICA FRANCESCHI DE AGUILERA
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) EDGARDO MOLINO MOLA
(fdo.) JANINA SMALL
Secretaria

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

ÓRGANO JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES

NOVIEMBRE 1996

CARTA ROGATORIA

CARTA ROGATORIA N° 2 DE 21 DE FEBRERO DE 1996, LIBRADA POR EL JUZGADO REGIONAL DE SANTAFÉ DE BOGOTÁ, D. C., COLOMBIA, EN EL PROCESO RDO. N° 3.327B DENTRO DE LA CAUSA QUE ADELANTA CONTRA MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ OREJUELA POR LA INFRACCIÓN A LOS ARTÍCULOS 33 Y 34 DEL ESTATUTO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES, LEY 30 DE 1986. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

La Directora General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores, ha remitido a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, mediante Nota N° DGPE/DCL/ N° 1873/96, calendada 20 de septiembre de 1996, carta rogatoria número 02,librada por el Juzgado Regional de Santafé de Bogotá, D. C., República de Colombia, relativo al proceso RDO. N° 3.327B que se adelanta contra MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ OREJUELA por infracción a los artículos 33 y 44 del Estatuto Nacional de Estupefacientes Colombiano.

La colaboración solicitada en el suplicatorio bajo análisis versa en lo siguiente:

> "a) Obtener a través de la entidad Pública o Privada correspondiente, certificación de las cuentas Bancarias o de Ahorros de las cuales sea o hubiese sido titular MIGUEL ÁNGEL OREJUELA, particularmente, durante el período comprendido de 1989 a 1990.
>
> b) Obtener a través de la entidad Pública o Privada correspondiente, la certificación de haber sido MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ OREJUELA titular de una cuenta bancaria en el FIRST AMERICAN BANK de Ciudad de Panamá.
>
> c) Obtener de la Entidad Pública o Privada correspondiente, certificación del suscriptor o usuario de las líneas telefónicas que seguidamente se relacionan de la Ciudad de Panamá, para el primer semestre de 1990, así como las direcciones en las que estaban instaladas:
>
> 429435 237005 696945 695627 640892
> d) Obtener copia o fotocopia auténtica de las declaraciones que bajo juramento o sin él, pero que con las formalidades vigentes en esa Nación hubiesen rendido ANTONIO ANILO CARMONA OCAMPO, JUAN BAUTISTA GÓMEZ (alias JUAN DE DIOS GÓMEZ) en la investigación adelantada por el decomiso de 2.500 kilos de cocaína en el interior del camión Toyota de placa N° 767799" cerca a Divisa, Distrito de Coclé", así como los medios de prueba que obren en ese mismo procesamiento (testimonios, informes policivos u otros similares), que vinculen a la comisión de dicho ilícito a LEONIDAS RHADAMES TRUJILLO y a PLINIO TRUJILLO, así como a éstos dos últimos mencionados con Efraín Villarreal y Edilberto Vallencilla. Se reporta para facilitar la evacuación de esta prueba que el proceso es adelantado por la "Secretaría de Drogas de la Provincia de Coclé".
>
> e) Obtener copia o fotocopia auténtica de los registros de las llamadas de larga distancia efectuadas u originadas del teléfono N° 237005 de Ciudad de Panamá en el mes de diciembre de 1989 y de enero a julio de 1990."

De conformidad con el Código Judicial en su artículo 101 numeral 3, es competencia de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, "recibir los exhortos y Comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que debe cumplirlo".

La Convención de las Naciones Unidas aprobada el 20 de diciembre de 1988 (Convención de Viena de 1988), ratificada por Panamá, mediante la Ley 20 de 7 de diciembre de 1993, de igual forma por la República de Colombia, constituye el instrumento legal internacional de carácter multilateral, que regula lo concerniente al Tráfico ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas, aplicable al caso bajo estudio. A nivel regional Panamá es signataria de la Convención Interamericana sobre Recepción de Pruebas en el Extranjero, referente a procedimientos jurisdiccionales en materia civil o comercial y no en materia penal, razón por la cual no es aplicable en el presente suplicatorio.

Ante estas consideraciones, procede la Sala al análisis de la carta rogatoria a la luz de lo preceptuado en la Convención de Viena de 1988, y del Código Judicial, como fuente supletoria, en lo pertinente.

Observa la Sala que lo solicitado en el literal a de la presente petición, relativo a la certificación de las cuentas bancarias a nombre de MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ OREJUELA, durante el período comprendido de 1989 a 1990, se ubica dentro de un contexto demasiado amplio o comprensivo, toda vez que no se señalan números de cuentas de forma específica, ni la entidad bancaria del supuesto titular, por lo que no es dable a esta Superioridad acceder a su práctica, además, en el literal b se cita al FIRST AMERICAN BANK de Ciudad de Panamá como la entidad bancaria depositaria de la supuesta cuenta del señor Rodríguez Orejuela, no obstante, ese banco no opera en nuestro territorio, dado que no se encuentra registrado en la Comisión Bancaria de nuestro país, de forma tal que resulta palmaria la imposibilidad de acceder a dicha petición ante este hecho.

Al analizar lo pedido en el literal a, la Corte Suprema de Justicia ha determinado en jurisprudencia reiterada que los documentos privados son inviolables y que para ser examinados debe mediar orden de autoridad competente, para fines específicos y mediante formalidades legales, de lo contrario lesionarían lo estatuido en nuestra Carta Magna, según se desprende de su artículo 29 (Sentencia de 12 de agosto de 1996, Sala Cuarta).

El suplicatorio en los literales c y e, centra su solicitud en que se investigue los números teléfonos detallados a foja 2 y 3. Frente a esta petición, la Sala determina que es pertinente acceder a su práctica toda vez que se trata de una asistencia judicial, dentro de investigaciones relacionadas con el tráfico internacional de drogas ilícitas, toda vez que las conductas relacionadas con el tráfico de drogas ilícitas, sustancias psicotrópicas, o delitos conexos se encuentran clasificadas como típicas en nuestro ordenamiento penal, y como tal sancionables.

La autoridad suplicante, establece que la prueba solicitada en el literal d tiene como objeto "discernir la veracidad de los vínculos que se informa existían entre MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ OREJUELA y LEONIDAS RHADAMES TRUJILLO, así como entre éste y los demás mencionados, partiendo del hecho de que el segundo de los mentados al parecer fue la persona contactada para vigilar el éxito de la exportación del estupefaciente "(cfr. foja 5), por lo que la Sala determina que deben concederse, toda vez que pueden coadyuvar al esclarecimiento de la investigación que se adelanta en la República de Colombia, sobre la base de lo que expresa el artículo 2071 del Código Judicial, y ponderando el alcance de la Convención de Viena cuando establece en su artículo 2, que "el propósito de la presente Convención es promover la cooperación entre las Partes a fin de que puedan hacer frente con mayor eficacia a los diversos aspectos del tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas que tengan una dimensión internacional".

El Estado Requiriente ha elevado su petición conforme lo estatuido en el artículo 7, numeral 10, incisos a, b, c, d, e, y f de la Convención de Viena de 1988, dado que especifica la identidad de la autoridad exhortante, establecen el objeto y la índole de la investigación, aportan un resumen de los hechos, y además, describen las pruebas a practicar y la finalidad de éstas.

Adicional a lo antes mencionado, se aprecia que la documentación librada por la autoridad colombiana cumple con el requisito de la legalización.

La Sala precisa establecer que, de conformidad con el artículo 7, numeral 12, de la Convención de Viena y con fundamento en nuestro ordenamiento interno, en cuanto a la tramitación de la presente solicitud, ésta se tramitará de acuerdo a la lex fori, como Estado Requerido.

Los señalamientos que preceden conducen a esta Superioridad a acceder de forma parcial a lo impetrado en la presente oportunidad.

En consecuencia, la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA VIABLE PARCIALMENTE el diligenciamiento en el territorio nacional, de la Carta Rogatoria Número 02, librada por el Juzgado Regional de Santafé de Bogotá, D. C., República de Colombia, relativo al proceso RDO. N° 3.327B que se adelanta contra MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ OREJUELA por infracción a los artículos 33 y 44 del Estatuto Nacional de Estupefacientes de Colombiano, en los siguientes términos:

-Solicitar al Instituto Nacional de Telecomunicaciones la correspondiente certificación del suscriptores o usuarios de las líneas telefónicas que seguidamente se relacionan de la Ciudad de Panamá, para el primer semestre de 1990, así como las direcciones en las que estaban instaladas:

429435 237005 696945 695627 640892

Así como copia o fotocopia auténtica de los registros de las llamadas de larga distancia efectuadas u originadas del teléfono N° 237005 de la Ciudad de Panamá en el mes de diciembre de 1989 y de enero a julio de 1990 (literal c y e, fojas 2 y 3).

-Obtener copia o fotocopia auténtica de las declaraciones que bajo juramento o sin él, pero con las formalidades vigentes en esta Nación hubiesen rendido ANTONIO DANILO CARMONA OCAMPO, JUAN BAUTISTA GÓMEZ (alias JUAN DE DIOS GÓMEZ) en la investigación adelantada por el decomiso de 2.500 kilos de cocaína en el interior del camión Toyota de placa N° 767799 "cerca de Divisa, distrito de Coclé" así como los medios de prueba que obren en ese mismo procesamiento (testimonios, informes policivos u otros similares), que vinculen a la comisión de dicho ilícito a LEONIDAS RHADAMES TRUJILLO y a PLINIO TRUJILLO, así como a éstos dos últimos mencionados con Efraín Villarreal y Edilberto Vallencilla. Se reporta para facilitar la evacuación de esta prueba que el proceso es adelantado por la "Secretaría de Drogas de la Provincia de Coclé" (literal d, foja 3).

Igualmente, **DECLARA NO VIABLE** el diligenciamiento de la presente comisión rogatoria en lo referente a:

-Obtener a través de la Entidad Pública o Privada correspondiente, certificación de las cuentas Bancarias o de Ahorros de las cuales sea o hubiese sido titular MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ OREJUELA, particularmente, durante el período comprendido de 1989 a 1990 (literal a, foja 2).

-Obtener a través de la Entidad Pública o Privada correspondiente, la certificación de haber sido MIGUEL ÁNGEL RODRÍGUEZ OREJUELA titular de una cuenta bancaria en el FIRST AMERICAN BANK de Ciudad de Panamá (literal b, foja 2).

Como resultado de lo anterior, ORDENA que las mismas sea remitida al PROCURADOR GENERAL DE LA NACIÓN, con el propósito de que designe al funcionario de instrucción encargado del diligenciamiento de la presente solicitud de asistencia legal, en cumplimiento de lo preceptuado en el artículo 7, numeral 8 de la Convención de Viena.

Una vez realizada la gestión, REMÍTASE a la Cancillería panameña para los ulteriores trámites diplomáticos necesarios.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.

Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

CARTA ROGATORIA LIBRADA POR EL JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN EL DISTRITO FEDERAL, MÉXICO, DENTRO DEL PROCESO ORDINARIO MERCANTIL PROMOVIDO POR NEW NOSE INTERNATIONAL, S. A. EN CONTRA DE NEW NOSE, S. A. Y OTRA. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Procedente de la Dirección de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores ingresa a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Carta Rogatoria librada por el Juez Segundo de Distrito en materia Civil del Distrito Federal de México, Estados Unidos Mexicanos, dentro del proceso ordinario mercantil promovido por **NEW NOSE INTERNATIONAL, S. A.** en contra de **NEW NOSE, S. A. y otra.**

Al respecto debe indicarse en primer lugar, que la Sala Cuarta de los Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia es la entidad competente para "Recibir los exhortos y comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en la República de Panamá y el Funcionario o tribunal que debe cumplirlo", conforme lo consagra el artículo 101 numeral 3 del Código Judicial.

Seguidamente se percata esta Corporación Judicial que el objeto del presente exhorto se circunscribe concretamente a que se ordene la práctica y recepción de las siguientes pruebas:

1. Testimonial: Interrogatorio a Rubén Arosemena Guardia quien se localiza en el Edificio del Banco de Iberoamérica. Para tal efecto se incorpora al suplicatorio tanto el pliego de preguntas como el de repreguntas, calificadas y aceptadas como legales en el Estado Requiriente.

2. Documental: Consiste en que el Ministerio de Educación o el Colegio de Abogados panameño rinda informe en lo atinente a los puntos que a renglón seguido se describen:

a) "Que si en los archivos de esas dependencias se encuentra registrado el nombre de los señores JOSÉ ENRIQUE CALVO LATORRACA y RAFAEL YOUNG VIRZI, como titulares de alguna cédula profesional o autorizados para el ejercicio de alguna determinada profesión." (Cfr. foja 2 y reverso y 3 de la comisión rogatoria)

b) "La fecha y el lugar en que se otorgó a las personas antes mencionadas, la cédula profesional o autorización para el ejercicio de la profesión de abogados." (Cfr. foja 3 de la comisión rogatoria). El interrogatorio que se requiere que sea diligenciado, se encuentra incorporado a foja 4 del presente negocio y las repreguntas reposan a fojas 5 y 6 del mismo.

A estos efectos se observa que la documentación aportada se encuentra debidamente autenticada por el Presidente del Consejo de la Judicatura Federal y el Secretario Ejecutivo del Pleno y Carrera Judicial del ente precitado, así como por la acotación adicional de la apostilla que suprime la legalización consular regular, y que a su vez presupone la autenticidad de la firma plasmada, el carácter con el cual el signatario haya actuado y, la identidad del sello o timbre que lleve el documento, tal como se pone de relieve a foja 7 (anverso y reverso) del expediente que se surte.

Cabe destacar que tanto el Estado Mexicano como la República de Panamá han ratificado la Convención Interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero, la cual se aplica exclusivamente a tópicos civiles y mercantiles.

En este orden de ideas se puntualiza que la materia sobre la cual se solicita la presente diligencia es eminentemente comercial, al originarse en un proceso ordinario promovido por la sociedad **NEW NOSE INTERNATIONAL, S. A.** en contra de **NEW NOSE, S. A.** y otra, como sucintamente se desprende de la resolución de 31 de mayo de 1996, contentiva además de la Carta Rogatoria N° 7771 emitida dentro del cuaderno de pruebas de la parte demandada.

Ante estas circunstancias, opina esta Sala de la Corte que es dable acceder a practicar las diligencias probatorias solicitadas por el suplicante, en virtud de que no se conculcan los preceptos establecidos en la Convención Interamericana sobre recepción de pruebas en el extranjero, ni el derecho positivo panameño.

Por consiguiente, la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA VIABLE el exhorto librado por el Juez Segundo de Distrito en materia Civil del Distrito Federal de México, Estados Unidos Mexicanos, dentro del proceso ordinario mercantil promovido por NEW NOSE INTERNATIONAL, S. A. contra NEW NOSE, S. A. y otra, y en consecuencia se ORDENA que se efectúen las siguientes diligencias:

1. En lo concerniente a la prueba testimonial se ORDENA a la Secretaría de la Sala Cuarta de la Corte practicar el interrogatorio solicitado por el petente a RUBÉN AROSEMENA GUARDIA, con base en los escritos de preguntas y repreguntas legibles a fojas 4, 5 y 6 de la comisión rogatoria en comento, dentro del parámetro enmarcado en los artículos 923 y siguientes del Código Judicial.

2. Dado que con fundamento en el numeral 4 del artículo 101 del Código Judicial, la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte es el ente que debe declarar "quienes reúnen las condiciones necesarias para ejercer la abogacía ..." se ORDENA a la Secretaría adscrita a esta Sala, proceder a certificar si los señores JOSÉ ENRIQUE CALVO LATORRACA y RAFAEL YOUNG VIRZI son idóneos para ejercer la profesión de abogados y desde que fecha.

Una vez evacuadas las diligencias solicitadas, remítanse al Ministerio de Relaciones Exteriores debidamente legalizadas, para su posterior envío a la Autoridad requiriente en los Estados Unidos Mexicanos a través de los canales diplomáticos competentes.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL N° 12 DE 9 DE AGOSTO DE 1995, PROCEDENTE DE LA FISCALÍA 78 ADSCRITA A LA UNIDAD DE DELITOS FINANCIEROS DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA, RELATIVA A LA INVESTIGACIÓN 224393, SE ADELANTA EN CONTRA DE LOS SEÑORES MARÍA CONSTANZA BENAVIDES RUEDA Y EDUARDO CAMARGO CERÓN POR LA SUPUESTA COMISIÓN DEL DELITO DE EXPORTACIÓN FICTICIA. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, VEINTICINCO (25) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Procedente de la dirección de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores ingresa a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, Carta Rogatoria N° 12 de 9 de agosto de 1995 librada por la Fiscal Seccional Setenta y ocho adscrita a la Unidad de delitos financieros de la Fiscalía General de la República de Colombia, dentro del proceso penal N° 224393 que se adelanta contra **MARÍA CONSTANZA BENAVIDES RUEDA Y EDUARDO CAMARGO**

CERÓN, como probables responsables de la comisión del delito de exportaciones ficticias.

La finalidad de la presente comisión rogatoria se circunscribe a las siguientes peticiones:

1. "Los movimientos de la cuenta corriente No.120294000-1 del Banco Cafetero Panamá S. A., indicando si pertenece a Comercializadora Horizontes Overseas, S. A.

2. Asímismo se informe si **EDUARDO CAMARGO CERÓN con C.C.** 17.091.093 de Bogotá, posee cuentas en esa entidad bancaria, en caso cierto se indique la fecha de apertura de dichas cuentas, y se envíe extractos de las mismas, desde su apertura hasta el momento actual".

Sobre el particular es pertinente indicar en primer lugar, que conforme lo establecido en el artículo 101 numeral 3 del Código Judicial, es competencia de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, "Recibir los exhortos y comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y el funcionario o tribunal que debe cumplirlo".

En este sentido, no de soslayarse tal como se señaló en la reciente Sentencia de 12 de agosto de 1996 emitida por esta Corporación de justicia, que por tratarse de otro Estado que solicite el auxilio internacional de carácter jurídico penal, para cada caso en particular, la República de Panamá se reserva el derecho a prestar o no la colaboración solicitada, en virtud de la limitaciones y requisitos que para cada diligencia contemple la legislación vigente, sin por ello menoscabar el principio de reciprocidad internacional.

La petición de asistencia internacional efectuada por el funcionario instructor del Estado colombiano, tiene su origen en las investigaciones que se adelantan por la supuesta comisión del delito de Exportación Ficticia, sancionado con prisión de 1 a 8 años, y multa de cincuenta mil a cuatro millones de pesos colombianos.

Seguidamente se pone de relieve que la República de panamá y la República de Colombia no han suscrito convenios referentes al tópico de la asistencia internacional de carácter judicial en material de la asistencia internacional de carácter judicial en materia de recepción de pruebas dentro de procesos penal, por lo que procede revisión de la petición incoada mediante la reciprocidad ofrecida para casos similares por el Estado requiriente, tomando como parámetro el respecto del ordenamiento positivo interno, la costumbre internacional y al principio de la reciprocidad, tal como simultáneamente ofrece la República de Colombia en la presente comisión rogatoria.

Se debe precisar que la inexistencia de tratados o convenios bilaterales en materia penal entre la República de Panamá y el Estado Requiriente no es motivo para rehusar la práctica de auxilio internacional, dado que la asistencia judicial tal como ha mencionado esta Sala de la corte en oportunidades anteriores, tiene su sustento en la buena fe de los Estados miembros de la Comunidad Internacional.

En este sentido se observa que la solicitud efectuada por la República colombiana tiene como finalidad la obtención de ciertos medios probatorios que coadyuven a esclarecer y perfeccionar la investigación sobre la existencia del delito de exportación ficticia imputado a **MARÍA CONSTANZA BENAVIDES RUEDA Y EDUARDO CAMARGO CERÓN**, estableciéndose si fue cancelado o no la suma de $20.000.00 dólares americanos a la sociedad Comercializadora Horizontes Overseas S. A., y si el señor **EDUARDO CAMARGO CERÓN** posee cuentas en el Banco Cafetero Panamá, S. A.

Explican las autoridades del Estado requiriente en la carta rogatoria bajo análisis, que lo que se investiga deriva de que se importó a Colombia pescado congelado procedente de Ecuador vía terrestre en estado de descomposición, y la

sociedad **OCEAN CLUB LTDA.** presumiblemente no devolvió el pescado descompuesto, sino que lo exportó a Venezuela como colombiano, para obtener los beneficios cambiarios o incentivos tributarios que reconoce el Estado Colombiano por concepto de exportaciones. (Cfr. foja 2 y 3)

A estos efectos se observa que el exhorto en comento contiene los sellos que indican que el móvil procesal internacional ha sido sometido a las rigurosidades de la legalización consular. Sin embargo, se percata esta Corporación judicial, que no se acompañan o adjuntan a la comisión rogatoria en cuestión, las constancias indispensables que fundamenten la petición impetrada, ya que únicamente reposa en el expediente bajo análisis la solicitud de asistencia signada por la Fiscal Seccional setenta y ocho adscrita ala Unidad de delitos financieros de la fiscalía General de la República de Colombia; siendo éste suficientemente motivo para denegar el requerimiento de auxilio judicial, ya que no se aprecia prima facie la preexistencia del vínculo entre la investigación adelantada y las diligencias que se solicitan.

En este contexto se pone de relieve que es indispensable la observancia del principio de la doble incriminación, que básicamente presupone, que la conducta instruida sea sancionable penalmente en el Estado requiriente de la asistencia judicial, como en el Estado requerido, ya que de lo contrario, no contaríamos con un funcionario competente en Panamá para realizar la diligencia peticionada, puesto que ello acarearía que dicho funcionario incurriera en extralimitación de sus funciones.

Debe tenerse presente que, de acuerdo al principio de la legalidad, todo funcionario público es responsable por omitir y no realizar sus obligaciones y por llevar a cabo aquellas no autorizadas por la ley, por lo que no procede acceder a la petición de asistencia judicial jurídico penal realizada por el la República de Colombia. Similar decisión adoptó esta Corporación judicial en Sentencia de 4 de septiembre de 1996 dentro del exhorto librado por el Fiscal Quince Delegado de la Unidad Seccional de la Fiscalía Especializada de Patrimonio Económico de Barranquilla, República de Colombia, dentro del proceso penal que se adelanta contra **JORGE ENRIQUE ESCAFF CUSSE, JORGE LUIS CUELLO OSORIOS Y LUIS FERNANDO NIETO ROYERO**, como probables responsables de la comisión, igualmente, del delito de exportaciones ficticias.

En consecuencia, la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA NO VIABLE la carta rogatoria librada por la Fiscal Seccional Setenta y Ocho adscrita a la Unidad de delitos financieros de la Fiscalía General de la República de Colombia, dentro del proceso penal N° 224393 que se adelanta contra MARÍA CONSTANZA BENAVIDES RUEDA Y EDUARDO CAMARGO CERÓN, como probables responsables de la comisión del delito de exportaciones ficticia, sancionados en Colombia con prisión de 1 a 8 años y multa de cincuenta mil a cuatro millones de pesos colombianos.

REMÍTASE el presente negocio a la Cancillería panameña para su posterior devolución a las autoridades de la República de Colombia.

Notifíquese.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EJECUCIÓN DE SENTENCIA EXTRANJERA

ROSSAVEL RÍOS O MARÍA CHAMBERS, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA DE DIVORCIO DECRETADO POR LA CORTE DE COMMON PLEAS DE PORTAGE COUNTY, OHIO, ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA Y QUE DISUELVE EL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE LA UNÍA AL SEÑOR PLEAS CHAMBERS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E.

GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SEIS (6) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El licenciado Ernesto Ventura V., en representación de la señora María Ríos ha presentado ante esta Sala Cuarta de la Corte Suprema, solicitud para que sea reconocida en la República de Panamá, la sentencia de divorcio extranjera dictada el 21 de mayo de 1996 por la Corte de Common Pleas en la División de Asuntos Domésticos de la Comunidad de Portage County en Ohio, bajo la autoridad del Juez Jerry L. Hayes, por medio de la cual se disuelve el vínculo matrimonial existente entre María Ríos Cuellar o María Chambers y el señor Pleas R. Chambers, celebrado en la Provincia de Panamá, República de Panamá el día 27 de noviembre de 1995.

Observa la Sala, que la solicitud, reúne las formalidades de ley, pues en ellos se aprecia la copia autenticada de la sentencia de divorcio y la autenticación procedente del Cónsul General de Panamá en la Ciudad de Washingtong D. C., que legaliza los documentos surtidos en el Estado de Ohio, Estados Unidos, lugar donde se emitió la sentencia de divorcio, además de la correspondiente certificación de dicha firma expedida por el Departamento de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá.

El Procurador General de la Nación, en opinión vertida mediante Vista N° 47 de 14 de octubre de 1996, consideró que se debe acceder a la ejecutabilidad de la sentencia extranjera toda vez que cumple con los requisitos de ley. El análisis de los documentos aportados, permite señalar que la sentencia que nos ocupa, es conforme a lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial, ya que dicha sentencia fue dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal, no fue proferida en rebeldía, toda vez que es la propia demandada quien interpone la solicitud de ejecución de sentencia extranjera.

En cuanto a la licitud de la obligación, la misma no viola nuestro ordenamiento jurídico, por lo que esta Sala coincide con la opinión vertida por el señor Procurador General de la Nación, en cuanto a que la sentencia objeto de estudio, cumple con lo establecido en los artículos 1409 y 1410 del Código Judicial.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la sentencia de divorcio dictada el 21 de mayo de 1996 por la Corte de Common Pleas en la División de Asuntos Domésticos de la Comunidad e Portage County en Ohio, bajo la autoridad del Juez Jerry L. Hayes, por medio de la cual se disuelve el vínculo matrimonial existente entre María Ríos Cuellar o María Chambers y el señor Pleas R. Chambers, celebrado en la Provincia de Panamá, República de Panamá el día 27 de noviembre de 1995.

SE AUTORIZA a la Dirección del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcio en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

MIRIAM ALICIA URRUTIA MEDINA, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA DICTADA POR LA CORTE DEL CIRCUITO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO JUDICIAL EN EL CONDADO DE DADE, ESTADO DE FLORIDA, FECHA EL 15 DE MAYO DE 1995, POR MEDIO DE LA CUAL DISUELVE EL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE LA UNÍA AL SEÑOR ANTONIO ESPINO SCLOPIS. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, SEIS (6)

DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El licenciado José María Barsallo, actuando en nombre y representación de **MIRIAM ALICIA URRUTIA**, ha solicitado el reconocimiento y la ejecución de la Sentencia de 15 de mayo de 1995, mediante la cual se disuelve el vínculo matrimonial que unía a la demandante con Antonio Espino Sclopis.

CONSIDERACIONES

La solicitud de exequátur se fundamenta en el hecho cierto de que el matrimonio entre la peticionista y Antonio Espino Sclopis, celebrado el 16 de marzo de 1977 en el Juzgado Primero Municipal ubicado en el corregimiento del Chorrillo del Distrito de Panamá, fue declarado disuelto en la Corte del Undécimo Circuito Judicial en el Condado de Dade, Estado de Florida, Estados Unidos de América; y en consecuencia, la solicitante tiene el interés de que dicha Resolución se reconozca e inscriba en la República de Panamá para que surta sus efectos legales.

Ante estas circunstancias, la demandante suministra como elementos probatorios dentro del presente negocio:

1. Certificado N° 0308340 expedido por la Dirección General de Registro Civil del Tribunal Electoral, en el cual consta su matrimonio con el señor Antonio Espino Sclopis.

2. Sentencia de Divorcio de 15 de mayo de 1995, proferida por la Corte del Undécimo Circuito Judicial en el Condado de Dade, Estado de Florida, Estados Unidos de América, debidamente autenticada por el Cónsul General de Panamá en Miami (cfr. foja 6).

3. Traducción de la Sentencia en referencia al idioma castellano, por intérprete público autorizado.

Seguidamente se destaca que la Procuraduría General de la Nación estima que se ha cumplido con los requisitos que al respecto exige la ley para su reconocimiento y ejecución, por lo que puntualiza que debe accederse a la petición incoada. (Cfr, foja 9-10).

Así las cosas es importante destacar, que la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, conforme lo estatuido en el artículo 101 numeral 2 del Código Judicial, es el ente competente para "Examinar las resoluciones pronunciadas por país extranjero, incluso las arbitrales, para el efecto de decidir si pueden ser o no ejecutadas en la República de Panamá, sin perjuicio de lo estipulado en los tratados públicos."

DECISIÓN

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados que integran la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema, entran a resolver la solicitud de reconocimiento y ejecución de Sentencia extrajera.

Sobre el particular coincide esta Corporación de Justicia con el criterio vertido por la Procuraduría de la Nación, en atención a que efectivamente la petente cumple con los requisitos que para el presente procedimiento preceptúa el artículo 1409 del Código Judicial, dado que, evidentemente, la pretensión lícita y de carácter personal que se ejercita en esta oportunidad, se ventiló ante Tribunal competente en el extranjero sin que se haya producido el fenómeno de rebeldía, (que implicaría en esta oportunidad, la omisión en la notificación del señor Antonio Espino por lo que se concluye que no se vulnera el derecho positivo panameño.

Se afirma lo anterior, puesto que de la misma sentencia de divorcio se

infiere la aquiescencia de ambas partes en disolver el vínculo matrimonial realizado en la República de Panamá, al comprometerse a cumplir con el acuerdo marital de 27 de marzo de 1995.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la sentencia de divorcio emitida por la Corte del Undécimo Circuito Judicial en el Condado de Dade, Estado de Florida, Estados Unidos de América el 15 de mayo de 1995, caso N° 95-03305 FC 39, mediante la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial que unía a MIRIAM ALICIA URRUTIA y ANTONIO ESPINO SCLOPIS y se AUTORIZA a la Dirección del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcios, en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

LESBIA ESTHER ALVARADO GOVEA, ACTUANDO EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE SU HIJA MENOR SHARLENE SUSSETT ESPINALES ALVARADO, SOLICITA LA AUTORIZACIÓN Y LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO CIVIL DEL CAMBIO DE NOMBRE DE LA NIÑA SHARLENE SUSSETT ESPINALES ALVARADO A ROSE SHARLENE ESPINALES ALVARADO. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

El licenciado Laurentino Arjona Ocaña, en representación de la señora Lesbia Esther Alvarado Govea ha presentado ante esta Sala Cuarta de la Corte Suprema, solicitud para que sea reconocida en la República de Panamá, la sentencia N° 1996 CN 0361 del 27 de febrero de 1996, dictada por el Director del Estado Civil de Quebec, Canadá, mediante la cual se realiza el cambio de nombre de la menor SHARLENE SUSSETT ESPINALES ALVARADO a ROSE SHARLENE ESPINALES ALVARADO.

Observa la Sala que la solicitud reúne las formalidades de ley, pues en ella se aprecia copia autenticada de la decisión de cambio de nombre y la autenticación procedente del Cónsul General de Panamá en la Ciudad de Montreal, que legaliza los documentos surtidos en la ciudad de Quebec, Canadá, lugar donde se emitió la sentencia de cambio de nombre. Se aprecia además, la certificación por parte del Departamento de Legalizaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, que acredita la firma de nuestro funcionario consular en la ciudad de Montreal, Canadá.

OPINIÓN DEL PROCURADOR

El Procurador General de la Nación, en opinión vertida mediante Vista N° 49 de 23 de octubre de 1996, manifiesta que la resolución N° 1996 CN0361 de fecha 27 de febrero de 1996 aparece debidamente traducida y autenticada y que la misma es proveniente del ejercicio de una pretensión personal.

De igual forma el Procurador Genera opina que la decisión canadiense no vulnera el orden público nacional, por cuanto la materia sobre la cual versa la decisión adoptada por el Director del Estado Civil del Distrito de Quebec resulta lícita en nuestro país, toda vez que existe en nuestra legislación el Decreto N° 13 de 6 de junio de 1995, dictado por el Tribunal Electoral, por medio del cual se reglamenta los cambios de nombres en el Registro Civil.

No obstante la consideraciones anteriores, el señor Procurador General de

la Nación, consideró requerir de la parte solicitante el poder que faculta a la firma forense para el trámite del exequátur, antes de acceder a la solicitud incoada, tal como se aprecia a foja 18 del cuadernillo. Dicha solicitud se fundamenta en el artículo 631 y 608 del Código Judicial.

DECISIÓN DE LA SALA

El análisis de los documentos aportados, permite señalar que la sentencia que nos ocupa, es conforme a lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial, ya que dicha sentencia fue dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal, no fue proferida en rebeldía, toda vez que el padre de la menor, señor Bruce Antonio Espinales Price, manifestó su consentimiento y apoyo a la demanda de la madre, a propósito del cambio de nombre de la menor Espinales Alvarado, tal como se aprecia a foja 8 del expediente, en la traducción de la decisión adoptada por el Director del Estado Civil.

En cuanto a la licitud de la obligación, la misma no violenta el orden público panameño, en virtud que dicha materia se encuentra claramente reglamentada a través del Decreto N° 13 de 6 de junio de 1995, dictado por el Tribunal Electoral.

La Sala disiente de la opinión vertida por el señor Procurador General de la Nación, en cuanto a que la sentencia objeto de estudio, no cumple con la formalidad legal de la aportación del poder que faculta a la firma forense, para el trámite aludido.

Es preciso destacar que, a foja primera del cuadernillo aparece el poder otorgado por la señora Lesbia Esther Alvarado Govea, en su calidad de poderdante, a la firma Moreno, Arjona & Brid, en la ciudad de Montreal, tal cual se acredita mediante la certificación del Cónsul General de Panamá en Montreal, el día 8 de agosto de 1996. La señora Lesbia Esther Alvarado Govea otorgó poder especial a la firma forense antes indicada, para tramitar ante esta Sala, el reconocimiento y ejecución de la decisión mediante la cual se realiza el cambio de nombre a su menor hija Sharlene Sussett Espinales Alvarado, por lo que esta Colegiatura considera que requisito de orden formal que constituye la presentación del poder, fue plenamente cumplido por la firma Moreno, Arjona & Brid.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la sentencia N° 1996 CN 0361 de 27 de febrero de 1996 del Director del Estado Civil de Ministerio de Justicia del Gobierno de Quebec, Canadá, mediante la cual se realiza el cambio de nombre de la menor SHARLENE SUSSETT ESPINALES ALVARADO A ROSE SHARLENE ESPINALES ALVARADO.

SE AUTORIZA a la Dirección del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en el libro correspondiente en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

GUILLERMO ISAAC ZAPATA, SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA EXTRANJERA DICTADA POR EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL ESTADO DE WASHINGTON, PARA EL CONDADO DE KING, DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, FECHADA EL 24 DE MARZO DE 1981, MEDIANTE LA CUAL SE DECLARÓ DISUELTO EL VÍNCULO MATRIMONIAL QUE LO UNÍA A LA SEÑORA ARLINE LIEN EHR GARCÍA ARONNE. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

GUILLERMO ISAAC ZAPATA CARRASCO mediante su apoderado legal, a la firma forense Alvarado, Ledezma & De Sanctis, solicita a la Sala de Negocios Generales de la Corte Suprema el reconocimiento y ejecución de la sentencia extranjera, dictada dentro del proceso de divorcio instaurado ante el Tribunal Superior del Estado de Washington para el Condado de King de los Estados Unidos de América entre GUILLERMO ISAAC ZAPATA CARRASCO contra ARLINE LIEN EHR GARCÍA ARONNE, el cual fue decidido mediante sentencia en firme, decretándose la disolución del vínculo matrimonial que los unía.

El peticionario fundamenta su solicitud en base a los siguientes hechos:

> **"PRIMERO:** Que al Tomo 103 de matrimonios de la Provincia de Panamá, Asiento 794 se encuentra inscrito el matrimonio de GUILLERMO ISAAC ZAPATA CARRASCO y ARLINE LIEN EHR GARCÍA ARONNE.
>
> **SEGUNDO:** Que mediante sentencia de 24 de marzo de 1981, dictada por el Tribunal Superior del Estado de Washington para el Condado de King (Estados Unidos de Norteamérica) se declaró disuelto el vínculo matrimonial de los señores GUILLERMO ISAAC ZAPATA CARRASCO y ARLINE LIEN EHR GARCÍA ARONNE.
>
> **TERCERO:** La Resolución de divorcio cuyo reconocimiento solicitamos, se encuentra debidamente autenticada por los funcionarios consulares y administrativos correspondientes, tal como consta en documento adjunto".

Además a la solicitud de ejecución de sentencia de divorcio se adjuntaron los siguientes documentos: Copia de la Sentencia de 24 de marzo de 1981, expedida por el Tribunal Superior del Estado de Washington, Condado de King, de los Estados Unidos de América debidamente autenticada y traducida al idioma español y el certificado de matrimonio emitido por la Dirección del General del Registro Civil de Panamá.

Admitida la solicitud presentada ante esta Corporación, se corrió traslado al señor Procurador General de la Nación, quien en su Vista N° 50 de 23 de octubre de 1996 señala lo siguiente:

> "Finalmente, en cuanto a la eficacia probatoria y autenticidad de las resoluciones judiciales extranjeras observamos que la copia de la sentencia es auténtica, según sello y firma de M. Janice Michels, Oficial de la Corte Superior en el Condado King, Estado de Washington, E. U. A. en la cual se atestigua que la firma de la funcionaria judicial extranjera es auténtica. Por tanto, el presente proceso de exequátur cumple con el último requerimiento que exige la norma procesal en cuestión".
>
> "En consecuencia de todo lo expuesto, consideramos que es procedente declarar ejecutable en la República de Panamá, la Sentencia de Divorcio; emitida el 24 de marzo de 1981 por la Corte Superior del Estado de Washington para el Condado de King, Estados Unidos de América; que decretó disuelto el matrimonio que unía al señor GUILLERMO ISSAC ZAPATA y a la señora ARLINE LIEN EHR GARCÍA ARONNE".

Observa la Sala, en cuanto a la licitud de la sentencia que nos ocupa que efectivamente, la misma es conforme a lo establecido en el artículo 1409 del Código Judicial, ya que, dicha sentencia fue dictada a consecuencia del ejercicio de una acción personal, no fue proferida en rebeldía puesto que la parte demandada dio su aprobación para el proceso. Se aprecia, además, que toda la documentación proveniente del extranjero se encuentra debidamente autenticada por las autoridades consulares correspondientes, como también se encuentra traducida a nuestro idioma oficial, requisitos éstos necesarios para que se declare su ejecutabilidad en la República.

Por lo antes expuesto, y en cumplimiento con lo establecido en los artículos 1409 y 1410 del Código Judicial, procede la Sala a declarar ejecutable la sentencia.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE NEGOCIOS GENERALES, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la Sentencia de Divorcio de 24 de marzo de 1981, expedida por el Tribunal Superior del Estado de Washington para el Condado de King, Estados Unidos de América, mediante la cual se declara disuelto el vínculo matrimonial celebrado el 19 de febrero de 1975 en la República de Panamá entre el señor GUILLERMO ISAAC ZAPATA CARRASCO y la señora ARLINE LIEN EHR GARCÍA ARONNE.

Se autoriza a la Dirección General del Registro Civil para que realice las anotaciones respectivas en su libro de divorcios en los términos de la presente resolución.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SHIRLEY & DÍAZ, EN REPRESENTACIÓN DE LAS SOCIEDADES MARICULTURE CORPORATION Y PAN AMERICAN SEAFOOD, INC., SOLICITA EL RECONOCIMIENTO Y LA EJECUCIÓN DE LA SENTENCIA DICTADA POR EL TRIBUNAL DE DISTRITO DE LOS ESTADOS UNIDOS, DISTRITO DEL SUR DE NUEVA YORK, DONDE DECLARA Y CONDENA A LA SOCIEDAD CANLA INTERNACIONAL, CORP., A PAGAR A LAS DEMANDANTES LA SUMA UN MILLÓN TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO DÓLARES (B/.1,000,348.00). MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DIECIOCHO (18) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

La firma forense Shirley y Díaz, actuando en nombre y representación de **MARICULTURE CORPORATION y PAN AMERICAN SEAFOOD, INC.**, ha solicitado el reconocimiento y la ejecución de la Sentencia de 17 de noviembre de 1995, mediante la cual la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos de América, condena a la sociedad **CANLA INTERNATIONAL, CORP.**, al pago de la suma de $1,000,348.00 a favor de las sociedades demandantes de la ejecución de la presente sentencia.

CONSIDERACIONES

La solicitud de exequátur se fundamenta en el hecho cierto de que la demanda antes descrita fue notificada por la Corte Suprema panameña en cumplimiento de la Convención Interamericana de Cartas Rogatorias; y en consecuencia, la solicitante tiene el interés de que dicha Resolución se reconozca y ejecute en la República de Panamá, para que surta sus efectos legales.

Ante estas circunstancias, la demandante suministra como elementos probatorios dentro del presente negocio:

1. Poder a favor de Shirley y Díaz debidamente traducido al idioma español y legalizado por el Notario Público de la ciudad de Connecticut y a su vez por el Cónsul panameño en Nueva York, Estados Unidos de América. (Cfr. foja 4-9).

2. Copia autenticada de la Sentencia proferida por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos de América, autenticada igualmente por el Cónsul de Panamá en dicha ciudad (cfr. foja 11).

3. Traducción de la Sentencia en referencia al idioma castellano por intérprete público autorizado.

Seguidamente se destaca que la Procuraduría General de la Nación estima que se han cumplido con los requisitos que al respecto exige la ley para su reconocimiento y ejecución, por lo que puntualiza que debe accederse a la petición incoada. (Cfr, foja 26-28).

Así las cosas es importante destacar, que la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, conforme lo estatuido en el artículo 101 numeral 2 del Código Judicial, es el ente competente para "Examinar las resoluciones pronunciadas por país extranjero, incluso las arbitrales, para el efecto de decidir si pueden ser o no ejecutadas en la República de Panamá, sin perjuicio de lo estipulado en los tratados públicos."

DECISIÓN

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados que integran la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema, entran a resolver la solicitud de reconocimiento y ejecución de Sentencia extrajera.

Sobre el particular coincide esta Corporación de Justicia con el criterio vertido por la Procuraduría de la Nación, en atención a que efectivamente la petente cumple con los requisitos que para el presente procedimiento preceptúa el artículo 1409 del Código Judicial, dado que, evidentemente, la pretensión es lícita y de carácter personal que se ejercita en esta oportunidad, se ventiló ante Tribunal competente en el extranjero sin que se haya producido el fenómeno de rebeldía, (que implicaría en esta oportunidad, la omisión en la notificación de la sociedad **Canla International, Corp.**) por lo que se concluye que no se vulnera el derecho positivo panameño.

Se afirma lo anterior, puesto que, tal como anota la sentencia que se desea ejecutar, esta Sala de la Corte efectuó la notificación de la demandada siguiendo el procedimiento que para estos casos exige la Convención Interamericana de Cartas Rogatoria. En este punto es importante destacar que, el artículo 1409 del Código Judicial en su numeral 2 solamente requiere la notificación de la demandada para evitar que la sentencia que se emita carece de vicios tales que hagan imposible su ejecución en la República de Panamá. El hecho de que el demandado una vez notificado y consciente de que se le procesa civilmente en otro país, decida no intervenir en dicho negocio judicial, no es óbice para que se estime que se encuentra en rebeldía, ya que se le brindaron todas las garantías para accionar y defenderse en dicho juicio.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA EJECUTABLE en la República de Panamá la sentencia civil emitida por la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos de América el 17 de noviembre de 1995, mediante la cual se condena a la sociedad Canla International, Corp., al pago de la suma de $1,000,348.00 a favor de las sociedades demandantes, Mariculture Corporation y Pan American Seafood Inc., de la ejecución de la presente sentencia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

EXHORTOS

EXHORTO LIBRADO POR EL JUZGADO NACIONAL DE PRIMERA INSTANCIA EN LO COMERCIAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES, REPÚBLICA DE ARGENTINA, EN LOS AUTOS CARATULADOS "PIRILLO JOSÉ S/QUIEBRA C/COMPAÑÍA INMOBILIARIA INTERFINANZAS, S. A. Y ALBROOK,

CON EL OBJETO DE RECABAR LAS DILIGENCIAS NECESARIAS PARA OBTENER INFORMACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO. CORRECCIÓN DE LA PARTE RESOLUTIVA MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, DIECINUEVE (19) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

En la resolución de fecha 27 de septiembre de 1996 dictada por la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, que Declara Viable el Exhorto librado por el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial de la Ciudad de Buenos Aires, República de Argentina, dentro de los autos caratulados "PIRILLO JOSÉ S/QUIEBRA C/COMPAÑÍA INMOBILIARIA INTERFINANZAS, S. A. y ALBROOK INTERNATIONAL CORPORATION S/ORDINARIO, la parte resolutiva en su párrafo segundo incurre en un error el cual consiste en remitir el presente negocio a la Cancillería panameña.

Por lo tanto y en atención a lo dispuesto en el artículo 986, párrafo tercero, la resolución de fecha 27 de septiembre en su parte resolutiva, párrafo segundo; se modifica en el sentido de devolver el presente exhorto al licenciado Jorge Alberto Rosas y queda de la siguiente manera:

Una vez realizadas la diligencias, DEVUÉLVASE el presente negocio al Licenciado Jorge Alberto Rosas para que posteriormente se REMITA a las autoridades de la República de Argentina.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

SOLICITUD DE ASISTENCIA JUDICIAL INTERNACIONAL LIBRADA POR EL JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA STUTTGART-BAD CANNSTATT, REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA, DENTRO DEL PROCESO DE ALIMENTOS PROMOVIDO POR MICHAELE LEWIS CONTRA JAMES MICHAEL LEWIS, EN BENEFICIO DE SUS MENORES HIJOS SHANNA MAE KRISTINA Y JAMES STEWART SEBASTIAN, A FIN DE QUE SE REALICEN LOS TRÁMITES PERTINENTES PARA LA NOTIFICACIÓN DEL DEMANDADO. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, VEINTE (20) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Por conducto de la Directora General de Política Exterior del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá, ha ingresado a la Sala Cuarta de Negocios Generales, de la Corte Suprema de Justicia, mediante Nota N° DGPE/DCL/ N° 1985/96, calendada 4 de octubre de 1996, exhorto de solicitud de asistencia judicial en asuntos familiares librado por el Juzgado de Primera Instancia Stuttgart-Bad Cannstatt, Badstr.23 70372 Stuttgart, República Federal de Alemania, dentro de un proceso de alimentos promovido por Michaele Lewis contra James Micheal Lewis.

Según lo establece el numeral 3 del artículo 101 del Código Judicial, le corresponde a la Sala Cuarta recibir exhortos y comisiones rogatorias librados por tribunales extranjeros y determinar su cumplimiento en el territorio nacional y considerar si vulnera o no el orden público y, en el evento de que no lo vulnere, determinar el funcionario o tribunal que debe cumplirlo.

Corresponde en primer lugar, determinar si existe entre la República de Panamá y Alemania convención suscrita relativa a exhortos o cartas rogatorias. En cuanto a esta materia, observa la Sala que no existe convención alguna entre ambos países, de manera que el procedimiento a seguir en cuanto al

diligenciamiento del suplicatorio en estudio, será conforme a lo estipulado en nuestro Código Judicial como fuente supletoria en este caso.

Conforme al derecho internacional el exhorto o comisión rogatoria es parte de los medios típicos del auxilio judicial, que consiste en que los jueces del proceso o de la causa soliciten al juez extranjero que lo auxilien en una tramitación dentro de un negocio jurídico, ventilándose en el extranjero.

La Sala observa que la documentación procedente de las autoridades alemanas se encuentra debidamente legalizada, pues consta la incorporación de la apostilla, lo cual encierra la presunción de que han sido expedidos conforme a la ley local del país requiriente; además, toda la documentación aportada se encuentran traducida al idioma español, requisitos éstos indispensables en el negocio en estudio.

El objeto del suplicatorio en análisis consiste sustancialmente en lo siguiente:

> "Con motivo de alimentos para hijos les remitimos en dos ejemplares idénticos con traducción:
> 1. Copia legalizada de la demanda del 29.4.1996.
> 2. Copia legalizada de la providencia judicial del 1.6.1996
> 3. Notificación del juzgado del 1.6.1996 con el ruego de notificar estos documentos a **James Michael Lewis, APO AA 34004, HHC 536 Engl. atl., Unit 1800 Fort Kobbe** y devolvernos el segundo ejemplar provisto de la aseveración de notificación."

La Sala precisa establecer que, de acuerdo a la costumbre internacional, y con fundamento en nuestro ordenamiento interno, en cuanto a la tramitación de los exhortos o cartas rogatorias, éstos se tramitarán de acuerdo a la lex fori como Estado requerido, no obstante, queda de forma discrecional y por principios de reciprocidad internacional que se le otorgue a la carta rogatoria una tramitación especial, o que en la práctica de las diligencias solicitadas se acepte la observancia de formalidades adicionales, siempre que no vulnere la legislación panameña.

En el presente caso en estudio, observamos que la notificación solicitada está dirigida a una persona que reside en un fuerte militar de los Estados Unidos de América acantonado en nuestro territorio en la Provincia de Panamá.

En virtud de la naturaleza del derecho alimentario, el carácter urgente e impostergable de las necesidades que debe satisfacer, exigen la vía de un trámite judicial ágil y eficaz para darles respuesta, fundamentado en los principios de auxilio judicial, reciprocidad y cooperación internacional que rigen las relaciones de los Estados que integran la comunidad internacional, este Tribunal arriba a la decisión de acceder a la práctica de la diligencia requerida por la autoridad alemana, para la cual será necesario realizarla a través de una solicitud de cooperación formulada al Procurador Militar de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, ubicado en Fuerte Clayton de la República de Panamá.

En consecuencia, la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA VIABLE el diligenciamiento del exhorto de solicitud de asistencia judicial en asuntos familiares librado por el Juzgado de Primera Instancia Stuttgart-Bad Cannstatt, Badstr.23 70372 Stuttgart, República Federal de Alemania, dentro de un proceso de alimentos promovido por Michaele Lewis contra James Micheal Lewis y ESTABLECE que el mismo sea diligenciado a través del Procurador Militar de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América, con ubicación en el Fuerte Clayton, República de Panamá, en los términos que señala la presente resolución.

Una vez realiza la diligencia, REMÍTASE el expediente a la Cancillería para su posterior devolución a las autoridades jurisdiccionales alemanas.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

TRIBUNAL DE INSTANCIA

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR MARÍA TERESA GARCÍA CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 02-96 DE FECHA VEINTITRÉS (23) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996), EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, RAMO FAMILIA. MAGISTRADO: PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, SIETE (7) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Ingresó a esta Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, el cuaderno que contiene el recurso de apelación propuesto por el licenciado Carlos Alberto Vásquez Reyes, quien representa a la licenciada MARÍA TERESA GARCÍA S. en este proceso administrativo para que sustente recurso de apelación en contra de la decisión contenida en la Resolución N° 02-96 calendada 23 de julio de 1996, expedida por la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial de Panamá, Ramo Familia, mediante la cual se determinó la lista de seleccionables y no seleccionables del Concurso N° 126-96 (Interno) Posición 1579 de Juez Tercero Seccional de Familia.

En la resolución impugnada, dentro de la lista de seleccionables aparece la licenciada MARÍA TERESA GARCÍA SANTIAGO con puntaje de 96.91, representando el más alto dentro del mencionado concurso.

El apoderado judicial estima que "parte de la documentación sometida a evaluación por la licenciada MARÍA TERESA GARCÍA SANTIAGO ante la referida Comisión no fue examinada, ... perjudicándola, toda vez que no revela su realidad como aspirante a dicha posición" (a foja 219).

En su parte medular el recurrente centra sus argumentos en los siguientes puntos:

> "...
> 1. CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN EN SEMINARIOS.
> El certificado distinguido con el ordinal 12 y que se nomina como CERTIFICADO DE PARTICIPACIÓN EN LA CAPACITACIÓN DE CAPACITADORES: INTEGRACIÓN AL SISTEMA DE CONTROL DE EXPEDIENTES Y ESTADÍSTICAS JUDICIALES, no fue evaluado.
> ...
>
> 2. CONFERENCIAS DICTADAS.
> La documentación que aparece presentada bajo el título de "CONFERENCIAS DICTADAS" no mereció ninguna puntuación para la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial, Familia y no existe una explicación para tal situación.
>
> Son un total de (15) conferencias dictadas por mi representada a distintas dependencias del Estado y a un Colegio Secundario en la tarea de divulgar el Código de la Familia" (fojas 221 y 222)."

El recurso de reconsideración fue resuelto por la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial de Panamá, Ramo Familia, mediante la Resolución N° 20-96 de 3 de octubre de 1996, por lo que le corresponde a esta Sala Cuarta de la Corte Suprema, el conocimiento de la apelación en subsidio interpuesta, a fin de determinar si existen o no elementos que justifiquen una modificación en la

resolución recurrida.

Los argumentos vertidos por el recurrente en lo relativo al cargo atinente al certificado identificado con el ordinal 12, conceptuamos que no tienen sustento, toda vez que el artículo 24 del Reglamento de Carrera Judicial preceptúa lo siguiente:

> **"ARTÍCULO 24:** Las ejecutorias y publicaciones se evaluarán según la profundidad, extensión y base científica de las mismas. El cuadro adjunto determina la puntuación asignada a cada requisito.
> ...
> III. Ejecutorias y publicaciones
> Debe acreditarse mediante la copia de la publicación o síntesis de la conferencia y tipo de auditorio al que se dictó el curso o seminario."

Se infiere de la norma transcrita, que resulta imperativo hacer constar la ponencia en la documentación que se aporta a los concursos, de lo contrario es palmario que no serán evaluadas, situación ésta en que se enmarca el aludido cargo respecto al certificado identificado con el ordinal 12.

En lo relativo a las conferencias dictadas, sostiene el apelante, que dicha documentación no mereció puntuación alguna, no obstante, el propio recurrente expresa que 4 de éstas no fueron acompañadas de los respectivos textos o ponencias, constituyendo el fundamento que genera la no valoración de las mismas.

La Sala observa que de las 10 ponencias que obran en el expediente, seis de éstas se encontraban incluidas en el libro denominado "En Torno al Derecho de Familia 6 Asedios" y por lo tanto les fue otorgado el respectivo puntaje, no obstante, así las cosas, no es posible otorgarle puntuación a ejecutorias ya valoradas, pues constituiría doble ponderación.

Este Tribunal arriba a la conclusión que 4 de las restantes ponencias, evidentemente, no fueron evaluadas, lo cual es preciso subsanar a través de esta instancia.

Tomando como fundamento el artículo 24 del Reglamento de Carrera Judicial antes transcrito, procede esta Superioridad a la valoración de las ponencias, coincidiendo con la puntuación conferida por la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial, Ramo Familia a cada ponencia, de la siguiente forma:

PONENCIA

-0.50 puntos Estadística Judicial-La Experiencia Panameña.
-0.30 puntos El nuevo Código de la Familia- La Conciliación.
-0.30 puntos El Código de la Familia- Innovaciones en materia de Educación.
-0.30 puntos El Nuevo Código de la Familia. 1.40 puntos en Total.

Ante estas consideraciones, y en virtud de que no existen otros elementos, pruebas o argumentos incorporados al presente recurso que impliquen otra enmienda, de acuerdo con los reglamentos vigentes en la materia, este Tribunal avala lo esgrimido por la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial, Ramo Familia, determinando agregar al puntaje alcanzado por la licenciada García Santiago (96.91) la suma de (1.40) puntos para un total de (98.31) puntos.

En consecuencia, la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA EN TODAS SUS PARTES la Resolución N° 20-96 de 3 de octubre de 1996, proferida por la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial, Ramo Familia, mediante la cual modifica la Resolución N° 02-96 del 23 de julio de 1996 en el sentido de otorgarle a la licenciada MAGIA GARCÍA SANTIAGO un total de (98.31) PUNTOS manteniéndola dentro de la lista de seleccionables y ORDENA, una vez notificadas las partes involucradas en el presente negocio, se devuelva el expediente a la Secretaría de la Comisión de Personal para que se cumplan los ulteriores trámites procesales aplicables a esta materia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ
(fdo.) ARTURO HOYOS (fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR JOSÉ ÁNGEL CARRERA CARILLO CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 52-96 DE FECHA NUEVE (9) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996), EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL PRIMERO DISTRITO JUDICIAL, RAMO PENAL. MAGISTRADO PONENTE: RAFAEL GONZÁLEZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Ingresó a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de apelación, propuesto por el licenciado Jaime Choy García en representación del señor José A. Carrera C., contra la Resolución N° 52-96 de fecha nueve (9) de julio de mil novecientos noventa y seis (1996), emitida por la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial de Panamá, Ramo Penal.

El recurrente se muestra inconforme en cuanto a la valoración de la Carta de Trabajo expedida por el Centro de Investigación Jurídica de Panamá; la cual tiene consignada la fecha de la presentación de servicio del licenciado José Carrera, de acuerdo a sus registros actuales, la misma afirma el recurrente fue expedida por el Director actual, por cuanto el Proyecto en el cual laboró el señor José Carrera no estaba vinculado al Departamento de Personal de la Universidad de Panamá.

El recurrente se muestra igualmente inconforme en cuanto a la valoración de los seminarios.

Una vez transcritos los puntos más importantes en los cuales se fundamenta el recurso de apelación propuesto por el licenciado Carrera, esta Sala pasa a conocer el presente recurso de apelación, a fin de determinar si existen o no elementos que justifiquen una modificación en la resolución recurrida.

En cuanto a la afirmación del recurrente la cual consiste en que no fue correctamente evaluada la certificación de trabajo aportada, la Sala observa que en el Aviso de Convocatoria se indica claramente cuáles son los requisitos exigidos para la presentación y posterior valoración de las certificaciones de trabajo, los cuales son los siguientes:

1. Debe ser expedida por el Departamento de Personal o por el gerente de la empresa en la cual se labora (anterior y/o actual).

2. Las certificaciones deben establecer los períodos laborados (fecha de inicio y fecha de terminación).

3. El cargo desempeñado en cada período.

De igual forma establece que no serán valorados las certificaciones o cartas de trabajo que no sean presentadas con los requisitos anteriores.

Si bien la certificación de trabajo presentada por el señor José Carrera (f. 12) establece que laboró en el período comprendido entre 1995 y 1996, no establece los meses y los días laborados.

Del análisis de la valoración de los seminarios aportados por el licenciado Carrera, se observa que los mismos fueron correctamente evaluados de acuerdo a los criterios establecidos en el Acta N° 1 de 28 de enero de 1992, emitida por la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial, Ramo Penal.

Visto lo anterior, la Sala avala la decisión tomada por la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial, Ramo Penal, cuando decide mantener la resolución impugnada.

En consecuencia, la SALA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA EN TODAS SUS PARTES la Resolución 52-96 de fecha 9 de julio de 1996, dictada por la comisión de Personal del Primer Distrito Judicial de Panamá, Ramo Penal, para la posición N° 147-96, POS. 985 de Juez Primero Municipal, Ramo Penal, Colón.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR MARÍA TERESA GARCÍA CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 01-96 DE FECHA 23 DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996), EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL RAMO FAMILIA DE PANAMÁ. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

En grado de apelación conoce la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, de la alzada interpuesta por el licenciado Carlos Alberto Vásquez actuando en nombre y representación de la Juez **María Teresa García Santiago de Vásquez**, contra la Resolución N° 01-96 de 23 de julio de 1996, a través de la cual se da publicidad a la lista de seleccionables y no seleccionables del concurso N° 127-96 (mixto) de la posición (1567) de Juez Segundo Seccional de Familia de Panamá.

El recurso de apelación en referencia plantea la disconformidad de la Licenciada García de Vásquez, básicamente sobre los puntos que se detallan a continuación para mayor ilustración:

1. La omisión en la evaluación del certificado denominado "Participación en la Capacitación de Capacitadores: Integración al sistema de control de expedientes y estadísticas Judiciales".

2. Que inexplicablemente no se le otorgó puntuación a las 15 ponencias dictadas por María Teresa García Santiago en la divulgación del nuevo Código de la Familia; admitiendo a renglón seguido que, las charlas registradas bajo los numerales 22, 25 y 26 no fueron presentadas con la debida documentación que la acredita, acotando sin embargo, que las restantes once (11) debieron haber sido correctamente calificadas por la comisión evaluadora incluyendo la número uno que se realizó en el marco de un evento de carácter internacional.

A estos efectos se observa que la recurrente sostiene que toda la documentación se presentó en regla y de acuerdo con las formalidades que el Reglamento de concursos señala para la organización de la carrera judicial.

Ante estas circunstancias, la petente solicita que el puntaje final que se le otorgó mediante la resolución apelada, publicada mediante edicto 01-96 de 24 de julio de 1996, refleje objetivamente los méritos que en su criterio posee.

Sobre el particular se pone de relieve que la resolución N° 19-96 de 3 de octubre de 1996, que resuelve el recurso de reconsideración interpuesto inicialmente, modifica la resolución originalmente emitida por la comisión de

personal del Primer Distrito Judicial de Panamá, Ramo de Familia, externando lo siguiente:

> "...
> El artículo 24 de Reglamento de Carrera Judicial es claro al señalar que, en lo atinente a ejecutoria y publicaciones, debe acreditarse mediante la copia de la publicación o síntesis de la conferencia y tipo de auditorio al que se dictó el curso o seminario; y, como, no consta la misma (ponencia) en en (sic) el expediente bajo examen, no puede ser objeto de evaluación.
> ...
>
> Colígese entonces que, es labor de esta Comisión evaluar las restantes ponencias y asignarle la puntuación correspondiente.
>
> 1. ESTADÍSTICA JUDICIAL-LA EXPERIENCIA PANAMEÑA ... 0.50 puntos
>
> 2. EL NUEVO CÓDIGO DE LA FAMILIA-LA CONCILIACIÓN ... 0.30 puntos
>
> 3. EL CÓDIGO DE LA FAMILIA: INNOVACIONES EN MATERIA DE EDUCACIÓN ... 0.30 puntos
>
> 4. EL NUEVO CÓDIGO DE LA FAMILIA ... 0.30 puntos
>
> TOTAL: 1.40 puntos
>
> Al puntaje obtenido por la licenciada García S. (65.08) se le debe agregar la suma de 1.40 puntos, lo cual arroja como resultado un total de 66.48 puntos."

Encontrándose el proceso en este estado, los Magistrados que integran la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, entran a resolver la controversia instaurada.

Al respecto es preciso señalar que esta instancia comparte el criterio vertido por la autoridad calificadora del presente concurso de méritos y oposición, puesto que, efectivamente, la petente no adjuntó las ponencias de las conferencias correspondientes a su participación en la capacitación de capacitadores: Integración al sistema de control de expedientes y estadísticas judiciales, así como las distinguidas en los puntos 22, 25 y 26 tal como expresamente lo acepta la recurrente en su escrito de reconsideración con apelación en subsidio; siendo éstas indispensables para que se ponderara sus contenidos y se les asignara puntuación a cada una, aunado a que, como pone de relieve la autoridad evaluadora al resolver el recurso de reconsideración en mención, el texto del artículo 24 del Reglamento de Carrera Judicial preceptúa que toda ejecutoria "Debe acreditarse mediante la copia de la publicación o síntesis de la conferencia y tipo de auditorio al que se dictó el curso o seminario." (La Corte subraya).

En lo referente a la conferencia N° 1 denominada "Estadística Judicial: La Experiencia Panameña" se observa que el Tribunal Primario rectificó se decisión al asignarle los puntos que estimó pertinentes así como a tres ponencias adicionales intituladas **EL Nuevo Código de la Familia-La Conciliación**, **El Código de la Familia: Innovaciones en Materia de Educación y El Nuevo Código de la Familia**, tal como se observa en párrafos superiores en la transcripción efectuada.

En este punto debe indicarse que en el expediente constan únicamente 10 conferencias suministradas por la recurrente legibles a fojas 77-189, entre las cuales 6 ponencias estaban repetidas en el folleto publicado bajo el título "En torno al Derecho de Familia. 6 Asedios". Por lo que evidentemente, sólo se podían calificar 4 de dichas 10 ponencias, cuales son las 4 restantes no repetidas que incluyen a su vez la conferencia "Estadística Judicial: La Experiencia Panameña", para efectos de evitar la doble ponderación de un mismo documento.

En mérito de lo expuesto, la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE

SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la Resolución N° 19-56 de 3 de octubre de 1996 que resuelve otorgarle a la Licenciada MARÍA TERESA GARCÍA SANTIAGO DE VÁSQUEZ un total de 66.48 puntos y mantenerla dentro de la lista de NO SELECCIONABLES.

Notifíquese.

(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ
(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS
(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR ALEXIS BOANERGES CHÁVEZ BRENES CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 54-96 DE FECHA NUEVE (9) DE JULIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, RAMO PENAL. MAGISTRADA PONENTE: AURA E. GUERRA DE VILLALAZ. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES.

VISTOS:

Ingresó a esta Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, el cuaderno que contiene el recurso de apelación propuesto por el licenciado Leonardo Pineda Palma, en representación de ALEXIS B. CHÁVEZ B. en este proceso administrativo para que sustente formalmente recurso de reconsideración con apelación en subsidio contra la decisión contenida en la Resolución N° 54-96 calendada 9 de julio de 1996, proferida por la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial de Panamá, Ramo Penal, mediante la cual se determinó la lista de seleccionables y no seleccionables del Concurso N° 166-96 (Interno) Posición 888 de OFICIAL MAYOR II DEL JUZGADO SEXTO DE CIRCUITO, RAMO PENAL, PANAMÁ.

En la resolución impugnada, dentro de la lista de no seleccionables se encuentra el señor ALEXIS B. CHÁVEZ B. con la calificación de que NO ES ESTUDIANTE DE PROGRESO NORMAL.

El recurrente centra sus argumentos en los siguientes puntos:
"...
SÉPTIMO: El desconocimiento de la prueba consistente en la Certificación Expedida por el Secretario General de la UNIVERSIDAD LATINOAMERICANA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (ULACIT), acarrea para mi poderdante las siguientes consecuencias:

A- Se desconoce su calidad de estudiante de los dos últimos años de la carrera en atención al plan de estudios de la ULACIT que se explica en la certificación.

B- Se desconoce su condición de estudiante (para la fecha en que fue expedida la certificación) de décimo cuatrimestre, lo que implica que el estudiante ALEXIS B. CHÁVEZ B. con ced. 4-139 2430 había cursado y completado nueve cuatrimestres, sin notas pendientes.

C- Sabido es, que estudiante regular o de progreso normal es aquel estudiante que cursa todas las materias correspondientes al pensum del plan de estudios del cuatrimestre (en nuestro caso) correspondiente y las aprueba con la nota mínima de "C" que le permite continuar al año o cuatrimestre siguiente sin materias pendientes. Situación que se patentiza con la prueba supletoria que ha sido desconocida en esta oportunidad.

OCTAVO: Es evidente que le asiste el derecho a nuestro mandante a ser evaluado objetivamente y conforme al caudal probatorio aportado en tiempo oportuno y que sin lugar a dudas acreditará que el señor

ALEXIS BOANERGES CHÁVEZ BRENES dista mucho de encontrarse en la calificación de "NO ES ESTUDIANTE DE PROGRESO NORMAL" que se ha consignado por resolución N° 54-96 del 9 de julio de 1996 (Cfr. foja 28)."

La Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial de Panamá, Ramo Penal, resolvió el recurso de reconsideración, mediante la Resolución N° 80-96 de 9 de octubre de 1996, por lo que le corresponde a esta Sala Cuarta de la Corte Suprema, el conocimiento de la apelación en subsidio interpuesta, a fin de determinar si existen o no elementos que justifiquen una modificación en la resolución recurrida.

Con relación a los argumentos vertidos por el recurrente en lo relativo al cargo atinente a la certificación expedida por el Secretario General de la ULACIT, este Tribunal conceptúa que no dilucidan la controversia en estudio, toda vez que dicha certificación únicamente hace referencia a que el estudiante ALEXIS BOANERGES CHÁVEZ BRENES cursa el décimo cuatrimestre, y no se adjunta la constancia debida que acredite que ha cursado las asignaturas denominadas Derecho Procesal II, Derecho Comercial I, Hacienda Pública y Filosofía del Derecho I, materias éstas que no aparecen como aprobadas dentro de la documentación aportada relativas a los créditos universitarios.

En este orden de ideas, resulta palmario que la certificación aportada como prueba, antes mencionada, no cumple con el requisito de la Carrera Judicial para la posición que opta el aspirante, para la cual se exige que debe ser estudiante que cumpla con el requisito de tener aprobadas todas las asignaturas de los cuatrimestres que dice haber cursado, para que sea considerado como estudiante regular de los dos últimos años.

Los créditos universitarios conforman el mecanismo a través del cual permite determinar en los concursos para Oficial Mayor si es o no el estudiante de progreso normal, tal como lo afirma la Directora de Recursos Humanos de esta institución, al emitir concepto sobre el caso bajo estudio.

Lo pertinente para evitar la presente controversia debió darse de forma tal que el estudiante Chávez Brenes hubiera presentado las constancias de que las asignaturas en mención habían sido aprobadas, dejando sentado que los profesores presentaron las calificaciones con posterioridad a la certificación dada. No obstante, como la situación no se dio en esos términos, resulta que no acreditó, en el proceso bajo análisis, su condición de estudiante de Derecho en los dos últimos años, por tanto, la Sala determina que no puede ser considerado como un estudiante de progreso normal.

Ante estas consideraciones, y en virtud de que no existen otros elementos, pruebas o argumentos incorporados al presente recurso que impliquen otra enmienda, de acuerdo con los reglamentos vigentes en la materia, este Tribunal avala lo esgrimido por la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial de Panamá, Ramo Penal.

En consecuencia, la SALA CUARTA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA EN TODAS SUS PARTES la Resolución N° 80-96 de 9 de octubre de 1996, proferida por la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial de Panamá, Ramo Penal, mediante la cual confirma la Resolución N° 54-96 de 9 de julio de 1996, la cual mantiene al estudiante ALEXIS B. CHÁVEZ B. en la lista de No Seleccionables, como estudiante que no tiene el progreso normal, y ORDENA, una vez notificadas las partes involucradas en el presente negocio, se devuelva el expediente a la Secretaría de la Comisión de Personal para que se cumplan los ulteriores trámites procesales aplicables a esta materia.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) AURA GUERRA DE VILLALAZ

(fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ (fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General

==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤==¤¤=

RECURSO DE APELACIÓN INTERPUESTO POR DENIA DEL CARMEN PÉREZ DE LEÓN CONTRA LA RESOLUCIÓN N° 89-96 DE FECHA VEINTITRÉS (23) DE MAYO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996), EMITIDA POR LA COMISIÓN DE PERSONAL DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMÁ, RAMO CIVIL. MAGISTRADO PONENTE: ARTURO HOYOS. PANAMÁ, DOCE (12) DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS (1996).

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. SALA DE NEGOCIOS GENERALES

VISTOS:

Ingresó a la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de apelación, propuesto por la licenciada Maribel Vega Vega, en representación de la señora Denia del Carmen De León, en contra de la Resolución N° 89-96 de fecha veintitrés (23) de mayo de mil novecientos noventa y seis (1996), emitida por la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial de Panamá, Ramo Civil.

En la resolución impugnada, se le concede a la recurrente un puntaje de 39.68 con el cual se incluye en la lista de los seleccionables para el concurso N° 095-96 (mixto) de la posición (Pos# 60602) de Psicólogo del Juzgado Seccional de Menores de San Miguelito.

Sin embargo, la licenciada Denia Pérez de León se manifiesta insatisfecha con el resultado de la evaluación efectuada por la Comisión de Personal, Ramo Civil, sobre la materia de "experiencia laboral", específicamente sobre la carta de trabajo suscrita por la Directora de Personal del Ministerio de Educación (F.14) en la cual certifica que la licenciada Pérez laboró como Instructor II, en la Dirección de Educación en Población, con funciones Técnicas por un período de 8 (ocho) años, 4 (cuatro) meses y 2 (dos) días.

De igual forma se manifiesta inconforme con la valoración de los seminarios, "ya que la suma no se realizó correctamente" (f. 74).

Esta Sala pasa a conocer el presente recurso de apelación, a fin de determinar si existen o no elementos que justifiquen una modificación en la resolución recurrida.

Observa la Sala que la licenciada Pérez ha recurrido la decisión tomada por la Comisión evaluadora, aún cuando ha obtenido el puntaje más que suficiente para quedar dentro de la lista de los seleccionables, por tanto no existe un perjuicio aparente. Sin embargo, se muestra inconforme con la apreciación que realizó la Comisión de Personal sobre los puntos antes mencionados.

En relación a la inconformidad manifestada por la recurrente en cuanto a la experiencia laboral la Sala manifiesta que, si bien es cierto que la licenciada Denia Pérez obtiene su idoneidad para ejercer la profesión de Psicólogo General el día 14 de mayo de 1987 (f.11), no le asiste la razón a la licenciada Pérez, en virtud que no se observa de la apreciación de las pruebas presentadas, que para ejercer el cargo de Instructor Vocacional II del Ministerio de Educación sea requisito obtener la idoneidad para ejercer la Psicología, tanto es así que dicha idoneidad se obtiene durante el período laborado para el Ministerio de Educación.

Tanto es así, que de la descripción de los cargos (f.92) no se colige como un requisito ser licenciado en Psicología, título que obtiene la licenciada Denia Palacios el día 14 de mayo de 1987.

En cuanto a la valoración efectuada por la Comisión de Personal sobre los seminarios presentados por la parte recurrente, los cuales afirma, no han sido correctamente "sumados" por dicha Comisión. La Sala observa que efectivamente le asiste la razón a la licenciada Vega, sólo en cuanto a la evaluación del seminario visible a foja 29 del expediente, toda vez que el mismo por tratarse del tema "Capacitación Teórico Práctico en Maltrato Infantil y la Atención de Menores y su Familia", es materia aplicable al cargo en concurso (Psicólogo del

Juzgado Seccional de Menores), de igual forma se observa que el mismo es mayor de cuarenta horas; por lo tanto se adiciona al puntaje obtenido en éste seminario un total de 0.50 puntos.

Visto lo anterior, la Sala avala la decisión tomada por la Comisión de Personal del Primer Distrito Judicial, Ramo Penal, cuando decide modificar parcialmente la Resolución N° 30-96 de 16 de abril de 1996, aumentando la puntuación de DENIA DEL CARMEN PÉREZ DE LEÓN a 0.50 puntos y mantiene a la recurrente dentro de la lista de los seleccionables del Concurso 82-96 (Mixto), Posición 095 de Psicólogo del Juzgado Seccional de Menores de San Miguelito.

En consecuencia, la SALA DE NEGOCIOS GENERALES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, MODIFICA PARCIALMENTE la Resolución N° 89-96 de fecha 23 de mayo de 1996 en cuanto a reconocerle a la licenciada Denia del Carmen Pérez de León 0.50 adicional (cero punto cincuenta) en el seminario Teórico-Práctico en Maltrato Infantil y la Atención a Menores y su Familia y CONFIRMA la Resolución N° 89-96 en cuanto al resto del puntaje obtenido por la recurrente.

Notifíquese y Cúmplase.

(fdo.) ARTURO HOYOS

(fdo.) AURA E. GUERRA DE VILLALAZ (fdo.) RAFAEL GONZÁLEZ

(fdo.) CARLOS H. CUESTAS G.
Secretario General